

INSTITUTA
DE LA
JURISPRUDENCIA

ESTABLECIDA POR LAS

Exmas. CÁMARAS DE APELACIONES

DE LA

CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN SUS SENTENCIAS, POR ORDEN NUMÉRICO Y ALFABÉTICO

POR EL

DR. J. J. HALL

(ABOGADO)

Comprende los tomos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 3ª Serie de la Jurisprudencia Civil
y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la 4ª Serie de la misma

TOMO V—SEGUNDA PARTE

BUENOS AIRES

IMPRENTA EUROPEA, MORENO Y DEFENSA

1895







1^a. **Identidad**—Justificada la identidad de la persona, por instrumento público, procede la aprobación de la información que justifica la existencia de error en el apellidado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 111, Ser. 3^a.

2^a. **Identidad**—La afirmación del escribano autorizando de una escritura pública, sobre la existencia é identidad del compareciente, no puede ser enervada por una partida de defunción que pueda corresponder á un homónimo.

—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

Identificación—Véase: *Causante*, núm. 1.

Idoneidad—Véase: *Tutela*, núms. 1 y 2.

Ignorancia de derecho—Véase: *Acto lícito*, núm. 1—*Costas*, núm. 49.

1^b. **Ilegitimidad**—Ni la confesión ni aun el reconocimiento espreso, hecho por la esposa, de la verdad de los hechos alegados por el marido, forman prueba para la declaración de ilegitimidad del menor—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 3^a.

2^b. **Ilegitimidad**—Del hijo no desconocido por el esposo.

1^a—Véase: *Apellido*, núm. 1.

2^a—Véase: *Escribano*, núm. 2.

1^b—Art. 255 del Cód. Civ.

2^b—Véase: verb. *De oficio*, núm. 2.



no puede ser discutida ni invocada por terceros, y los jueces deben de oficio evitar los litigios que á ese objeto se produzcan.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 133, Ser. 4^a.

1^a. **Impedimentos**—La prueba de los impedimentos existentes á la época de la concepción, que convertirían al hijo natural en adulterino, incestuoso ó sacrilego, como es-cepción, corresponde al que afirme su existencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 358, Ser. 3^a.

1^b. **Impedimentos dirimientes**—La prueba plena de los im-pedimentos dirimientes, no dispensables, que cambiarían el carácter de la filiación y obligarian á los jueces á re-chazar la demanda, corresponde al que invoque su exis-tencia.— Jur. Civ., tom. 4, pág. 323, Ser. 4^a.

Imposibilidad física—Véase: *Paternidad legítima*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 9.

Imprescriptible—Véase: *Petición de herencia*, núm. 3.

1^a—Véase: *Hijo natural*, núm. 1.

1^b—Entablada demanda de filiación natural contra el padre, éste dijo, que la mujer era casada cuando tuvo el hijo y que por consiguiente éste era adulterino y no natural. La Cámara resolvió de acuerdo con el caso registrado en el verb. *Filiación natural*, núm. 4; que la prueba de un hecho incumbía al demandado en virtud de los conocidos principios de procedimientos que establecen que la prueba incumbe al que afirma un hecho nuevo en juicio. Por otra parte, la madre se encontraría im-posibilitada de comprobar el hecho negativo de no haberse casado nunca. El Dr. Cortés en una de sus Vistas publicada en el tom. 3^o, pág. 28, decía: Es pues constante, por las consideraciones espuestas que en la demanda para el reconocimiento de la filiación natural contra uno solo de los padres no es esencial designar el otro; y que si bien es cierto que apareciendo haber existido entre ambos un impedimento di-rimiente no dispensable, tal demanda caducaría, *esa prueba, en todo caso, sería á cargo del demandado, el cual alegaría un hecho excepcional; r o del de-mandante que en esta parte negando simplemente tendría además en su favor la presunción que en duda, induce á admitir lo que sucede las más de las veces, y sobre todo, á rechazar la existencia de un delito no justificado.*



Imprudencia— Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 10 y 16.

1. **Impuesto**— Solo puede calificarse de tal, aquel cuyo producido ingresa en el tesoro público ó municipal, por estar incluido en el cálculo de recursos. Jur. Civ., tomo 4, pág. 76, Ser. 4^a.

2. **Impuesto**— Las cartas privadas, aun cuando importen el reconocimiento de una obligación, no están sujetas al impuesto de papel sellado.— Jur. Civ., tom. 5, pág. 353, Ser. 4^a.

3. **Impuesto**— De sellos, debe pagarse por el total de los bienes aun cuando estén situados fuera de la República.— Jur. Civ., tom. 9, pág. 37, Ser. 4^a.

4. **Impuesto**— La manifestación de conformidad con el saldo que arroja trimestralmente la cuenta corriente no está sujeta al impuesto de papel sellado.— Jur. Civ., tomo 9, pág. 38, Ser. 4^a.

5. **Impuesto**— La resolución que declara haber ó no lugar al pago del impuesto sobre legados ó herencias transversales, debe recaer después de amplia discusión, pues tiene fuerza de sentencia definitiva.— Jur. Civ., tom. 9, pág. 409, Ser. 4^a.

Impuesto Véase: *Acción*, núm. 3—*Papel sellado*, números 1, 5 y 6—*Cuenta corriente*, núms. 1, 2 y 3—*Ado-*

1— Véase: verb. *Adoquinado*, núms. 1 y 2.

2— Véase: *Cartas privadas*, núm. 1.

3— De acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley de Papel sellado de 1891. Se trata de un impuesto de sellos por actos de justicia sin consideración á bienes determinados sino á un todo igual como es una sucesión. Si los actos de trasmisión de dominio celebrados en el país para cumplirse en el extranjero, en los que hay individualización de las cosas sobre que recaen, están sujetos a la ley de sellos según el art. 5º, no habria razón atendible para exonerar de dicho impuesto á los que están comprendidos en una sucesión.

4— Véase: *Cuenta corriente*, núm. 2.

5— Véase: *Herencias transversales*, núm. 4.



quinado, núms. 1 y 2—*Depósito gratuito*, núm. 1—*Tesoro público*, núm. 1—*Empedrados*, núm. 3—*Posesión judicial*, núm. 7.

1^a. **Impuestos nacionales**—Las gestiones para su cobro, deben ser deducidas ante los Jueces Federales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 65, Ser. 4^a.

Inacción—Véase: *Herencia*, núm. 3—*Derechos hereditarios*, núm. 4—*Derecho de petición*, núm. 2—*Cuenta partionaria*, núm. 5—*Prescripción liberatoria*, núm. 1.

Inadmisibilidad—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 15—*Excepción de falta de personería*, núm. 13—*Excepción de litispendencia*, núm. 6.

1^b. **Inapelable**—La Cámara no puede conocer sobre un auto inapelable, aun cuando el Inferior haya concedido el recurso.—Jur. Civ., tom. 1 pág. 28, Ser. 3^a.

2. **Inapelable**—El auto que ordena el levantamiento de la inhibición por haberse presentado bienes á embargo, es inapelable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 83, Ser. 4^a.

3. **Inapelable**—La condenación en costas contenida en una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 124, Ser. 4^a.

4. **Inapelable**—Las regulaciones contenidas en la sen-

1^a—De acuerdo con lo establecido espresamente en el art. 111, inc. 5^o de la Ley Org. de los Trib. de la Cap.

1^b—La Cámara en estos casos debe declarar mal concedido el recurso. Pero la práctica observada por ella es no resolver espresamente si el recurso está ó no bien concedido, solo dice «devuélvase al Juzgado de su procedencia para que lleve adelante sus procedimientos.» De este modo evita fundar la resolución, lo que para ella implica ahorro de trabajo. Esto es bastante aunque no pueda aducir un solo fundamento para cohonestarla. Ella acepta todo lo que sea evitarse trabajo y estudio.

2—Véase: *Auto inapelable*, núm. 2.

3—Véase: *Costas*, núm. 60.

4—Véase: verb. *Excepciones*, núm. 10.



tencia de remate, son inapelables si no se hubiesen opuesto excepciones.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 124, Ser. 4^a.

5. **Inapelable**—El auto que ordena medidas para mejor proveer, es inapelable—Jur. Civ., tom. 9, págs. 81 y 143, Ser. 4^a.

6. **Inapelable**—Es la resolución del Juzgado en el juicio de disenso.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 145, Ser. 4^a.

7. **Inapelable**—La resolución del Juez de primera instancia en los casos de disenso, es inapelable. — Jur. Civ., tom. 4, pág. 248, Ser. 4^a.

8. **Inapelable**—El auto que confiere al demandante tras-

5—Véase: verb. *Auto inapelable*, núm. 1.

6—La ley y la jurisprudencia así lo establecen. Véase el núm. 7.

7—Véase: *Disenso*, núm. 1.

8.—Porque según la Cámara ese auto no causa gravamen irreparable, ¿Qué entiende ese Tribunal por gravamen irreparable? La apelación procede siempre, de toda sentencia definitiva, pero no de todas las interlocutorias. Estas pueden ser de tres clases: 1^a Las que resuelvan un incidente; 2^a las que consentidas, causan un gravamen que no podrá ser reparado por la sentencia definitiva, es decir, que causan estado; 3^a las que como dicen Manresa y Reus—tom. 1^o, pág. 92—no tienen más objeto ni efecto que imprimir la marcha progresiva al juicio. Los autos que resuelven un incidente son definitivos respecto de él, y siempre son apelables. Las providencias interlocutorias que causan gravamen, son aquellas que por el punto sobre que versan sostienen una importancia vital en el juicio, como la recepción de una medida de prueba ó la denegación de ellas. Las de 3^a clase por sí mismas no pueden nunca agravar la condición de una de las partes en provecho de la otra; y nunca son apelables. El gravamen es el perjuicio que una sentencia interlocutoria trae para una de las partes en provecho de la otra; cuando la sentencia definitiva no puede neutralizar ó hacer desaparecer ese perjuicio, se dice que el gravamen es irreparable. Este puede surgir desde la resolución misma, como su consecuencia inmediata, ó puede estar contenida por ella en potencia para aparecer después. El gravamen tiene lugar siempre que se viole la ley, cuando la sentencia se funda en hechos falsos, ó no tiene en cuenta todos los hechos; y en materia de procedimientos, en aquella en que por ser la ley de orden público, cuando la sentencia dispone lo que la ley no manda ni



lado de la demanda, es inapelable.— Jur. Civ., tom. 4, página 228, Ser. 4^a.

ha previsto, y cuando vá aunque no contra el texto de ella, al menos contra su espíritu, porque esa ley es la garantía de la imparcialidad del Juez, el que no puede apartarse de ella. Por otra parte, no es posible fijar de antemano las providencias que hayan de causar gravamen irreparable: todo dependerá, en muchos casos de las circunstancias. Pero volviendo á nuestro caso: la Cámara declara que no causa gravamen irreparable el auto que confiere traslado al demandante de la contestación á la demanda. Una providencia así, es la violación del espíritu de la ley, y aún si se quiere, de su letra, porque como ya se ha dicho antes, las leyes de procedimientos son de orden público; cuanto en el juicio se haga por el Juez, debe ajustarse á ella estrictamente sin poderse apartar de sus preceptos. Si esta garantía no existiera, el litigante preferiría abandonar sus derechos antes que esponerse á consecuencias desastrosas traídas al juicio por el procedimiento arbitrario del magistrado. Respecto de las interlocutorias que deciden algún artículo no se suscita jamás duda alguna en la práctica respecto de su apelabilidad. Es en lo referente á las interlocutorias que causan estado y que forman una de las tres clases á que antes se ha hecho referencia, donde reina la más completa confusión. ¿Cuáles son las providencias que causan estado? Son las que, como se ha dicho ya, recaen sobre puntos que ocasionan un perjuicio irreparable á las partes que las consienten, ó como decía la Ley de Partida, «que no se pueden después ligera-mente enmendar, á menos de gran daño ó de gran vergüenza de aquel que se tuviese por agraviado de ella.» La ley no dice cuáles son esas providencias que causan estado; el derecho antiguo y los autores prácticos solo fijan algunos ejemplos de ellas. En la imposibilidad de presentarlas todas, bastará citar entre otras, las que de plano deniegan la admisión de una demanda, las que desechan algunas pruebas que se presenten, las que declaran por desierta una apelación, las que la admiten ó deniegan, las que desechan cualquier escepción perentoria, las que imponen una multa ó corrección disciplinaria á cualquiera de los que intervienen en el juicio, las que deniegan un término prorrogable y otras semejantes. Todas estas providencias causan estado, todas causan perjuicios irreparables, porque no se puede salvar en la sentencia definitiva y de todas ellas debe también concederse apelación. No son apelables todas las demás providencias no espresadas anteriormente, que no son otras que las de mera tramitación, las cuales solo sirven en el expediente para dirigir el orden del enjuiciamiento y preparar las series de

Inapelable—Véase: *Costas*, núm. 50—*Regulación de honorarios*, núm. 3—*Recurso de reposición*, núm. 3—*Autos inapelables*, núm. 1—*Caución*, núm. 1—*Alegato*, núm. 2.

Inasistencia—Véase: *Posiciones*, núms. 24, 25, 27, 31 y 32—*Testigos*, núm. 7.

1. **Incapacidad**—La capacidad ó incapacidad para adquirir derecho se rige única y exclusivamente por las leyes argentinas, siempre que las extranjeras que le dieron origen contengan disposiciones contrarias. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 5, Ser. 3^a.

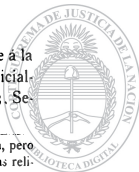
2. **Incapacidad**—La nulidad de una donación por escritura pública fundada en la incapacidad del donante,

actuaciones que se requieren para fallar en definitiva: estas providencias tal vez por no tener la importancia que las anteriores, no causan estado. Cuando el Juez confiere traslado de la contestación á la demanda, ordena un trámite que no está permitido por el Cód. de Procedimientos, y como estas leyes son de orden público, los jueces no pueden manejarlas á su antojo, y por consiguiente el traslado conferido viola esa ley, y confiere á la parte contraria un derecho en perjuicio de la otra parte, lo que constituye el gravamen de que nos habla la ley; y como ese perjuicio no puede subsanarse en la sentencia, resulta que es irreparable y por consiguiente apelable.

1—De este principio surge la consecuencia establecida en el verbo *Divorcio*, núm. 3; donde puede verse asimismo el fundamento del sumario.

2—El principio general que establece el art. 52 del Cód. Civ., es de rigurosa aplicación, mientras no exista una prueba concluyente que modifique la regla determinada por la ley. La presunción de capacidad en los agentes respecto de un acto jurídico, es, pues, siempre á favor del acto y es á la persona que lo impugna á quien le corresponde la prueba de los hechos que pueden dejarlo sin efecto. En el caso que nos ocupa se sostuvo que la donante por su edad, sus costumbres é ideas religiosas no se encontraba en la plenitud de sus facultades mentales, y que la escritura de donación fué otorgada por lo tanto por una persona absolutamente incapaz para ello. Solo dos testigos afirmaron la incapacidad de la donante, es decir, aseveraron en sus decla-





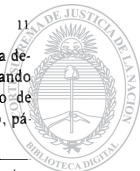
no puede ser declarada en tanto no se justifique que a la fecha de su otorgamiento había sido declarada judicialmente la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403. Serie 3ª.

raciones que aquella persona era incapaz de tener voluntad propia, pero estas afirmaciones reposaban única y exclusivamente en las ideas religiosas que les manifestó la donante. Estos testigos afirman en sus declaraciones que ignoran que la donante padeciera de manía y la creencia de la incapacidad tenía por origen lo que puede llamarse un sentimiento religioso exagerado por parte de ella. No es posible aceptar estas declaraciones como medio probatorio, con las cuales se pretende justificar la incapacidad de una persona por manifestaciones religiosas juzgadas por terceros que han podido ó no tener el mismo culto religioso y para cuyo análisis hay que tener en cuenta la edad y el medio social en que ha existido la persona que tales creencias profesa. Una persona puede vivir en un exagerado misticismo, pero esto no será jamás causa suficiente para declararla incapaz á los efectos de la ley si en los demás actos de su vida ha procedido con la sensatez ordinaria. Se presentaron por el actor varios testigos que estaban en aptitud de tener un conocimiento exacto de estos hechos, pero ninguno de ellos había afirmado la incapacidad como se pretendía justificar haciendo aparecer á la donante como una persona afectada de una manía tenaz, que la inhabilitara para los actos de la vida civil; ninguno de ellos declaró ser ciertos los hechos aseverados; por el contrario, todos los testigos presentados desconocieron que la donante hubiera padecido de manía ni tuviera la incapacidad que se le atribuía. La ley—art. 141 del Código Civil—declara dementes únicamente á los que se encuentran en estado habitual de manía, demencia ó imbecilidad y nada de esto se justificó, admitiendo hipotéticamente que la prueba de la incapacidad pudiera hacerse en otra forma que la determinada en el art. 142. La donante había fallecido cuando se dijo de nulidad de la escritura de donación. Después que una persona haya fallecido, dice el art. 474, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos por causa de incapacidad á no ser que ésta resulte de los mismos actos, ó que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad. La ley pues, al establecer esta doctrina, ha querido prohibir las investigaciones que pudieran hacerse respecto de la incapacidad de la persona al celebrar sus actos jurídicos, puesto que si la demencia ha existido en realidad los parientes han debido hacer uso de las facultades que la misma ley les acuerda en los arts. 144 y 470 del Cód. Civ. Si es cierto que la ca-

3. **Incapacidad**—El reconocimiento médico para la declaración de la incapacidad debe practicarse aun cuando carezca de personería el denunciante, si el Ministerio de Menores hace propia la denuncia.—Jur. Civ., tom. 6, página 387, Ser. 3ª.

pacidad del donante, según lo preceptuado en el art. 1809, debe ser juzgada respecto al momento en que la donación se prometió ó se entregó la cosa, esta disposición no modifica el principio general establecido en el art. 414, que no tiene más escepción que la que se indica en el artículo 3615, como puede verse por la nota del codificador puesta al pié del mismo.

3—El art. 144 en su inc. 3ª faculta al Ministerio de Menores para pedir la declaración de demencia. Puede asimismo pedir el nombramiento de un curador cuando el presunto insano no se encuentre asistido de un representante necesario, como cuando se trata de la mujer ó del marido, en cuyo caso, con arreglo al art. 476, el marido ó la mujer respectivamente serán los curadores legítimos y necesarios, siendo ésta sin duda la razón fundamental que se tuvo en vista por la Cámara en el caso que se registra en el tom. 3ª, pág. 219, Ser. 1ª de la Jur. Civil, para considerar improcedente la declaratoria de demencia—Inst., tomo 2º, verb. *Insania*, núms. 1 y 2.—En este caso la Cámara atendió especialmente á esta circunstancia, es decir, á que la insana tenía su representación legal y que era por ello innecesario gestionarla para quien la tenía por el ministerio de la ley. Pero en el caso del sumario concurren circunstancias muy diversas. Desde luego el hermano es el que pide la declaratoria, y éste no es como el esposo ó la esposa, un representante necesario del hermano, puesto que para ejercer la representación legal de su persona y bienes, necesita que el cargo respectivo de tutor ó curador en su caso, le sea discernido por la autoridad judicial competente y es sabido por otra parte, que está librado al arbitrio del Juez preferir á los parientes más idóneos para el ejercicio de la curatela, prescindiendo del orden que para el llamamiento á su desempeño establece la ley. Necesario es tener presente además, que según lo dispone el art. 58 del Cód. Civ., el que protege á los incapaces al efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándoles la representación que oportunamente determina, y que entonces el Ministerio de Menores puede solicitar el reconocimiento de la presunta insana para poder cumplir el deber que le impone el art. 491 del Cód. de Proc., de pedir el nombramiento de tutores ó curadores de los menores ó incapaces.





4. **Incapacidad**—La ratificación del capaz revalida y da fuerza legal á todos los actos ejecutados personalmente ó por apoderado durante la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 61, Ser. 4^a.

Incapacidad—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 17—*Mandatario*, núm. 15.

1^a. **Incapaz**—Si el incapaz demandado subsana su incapacidad, el Juez debe continuar entendiendo en el juicio, sin que el actor deba ocurrir ante otro á deducir nueva demanda.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 77, Ser. 4^a.

Incapaz—Véase: *Nulidad de la ejecución*, núm. 6.

Incestuoso—Véase: *Hijo natural*, núm. 1.

1. **Incidente**—Cualquier incidente de sustanciación obligatoria, suscitado por una de las partes, suspende los términos para las demás.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 67, Serie 4^a.

2. **Incidente**—Para resolver la petición de sacar á remate el derecho del concurso á retrotraer la finca ena-
ces que no los tengan. No puede desconocerse que el ejercicio de tal facultad puede en algunos casos ser contrario á las consideraciones debidas á la familia, pero no se oculta tampoco que en muchos, tal facultad espresamente consagrada en la ley, evitará eficazmente que se cometan abusos con respecto á la persona y bienes de los incapaces.

4—Véase: *Apoderado*, núm. 5.

1^a—La incapaz era una mujer casada, la que según disposición del art. 54 de la ley de matrimonio civil, no puede estar en juicio sin la venia correspondiente. Dicha acción fué dirigida contra una mujer casada, y no pudiendo seguirse el juicio por ser ella incapaz, la demanda no podía prosperar, ni podía tampoco continuar. Si esa persona no puede contestar la demanda que se le promueve, está implícitamente comprendida en la disposición del art. 75 del Cód. de Proc., como que se demanda con violación de la ley, cuya trasgresión importa la nulidad de todos los actos. Pero como después se le concedió la venia para estar en juicio, vino á resultar que esa nulidad quedó subsanada por la confirmación tácita, puesto que la nulidad era relativa, y por consiguiente la causa debía continuar en su tramitación.



jenada con pacto de retroventa en que es parte el comprador condicional, debe formarse incidente por separado.

--Jur. Civ., tom. 10, pág. 110, Ser. 4^a.

3. **Incidente** No puede conceptuarse incidente testamenario la acción personal dirigida contra el que en representación del causante firmó el contrato. --Jur. Civ., tom. 10, pág. 323, Ser. 4^a.

Incidente--Véase: *Recusación*, núm. 3--*Prejuzgamiento*, núm. 1--*Sentencia*, núm. 1--*Honorarios*, núms. 2 y 17--*Notificación*, núm. 2--*Embargo preventivo*, núms. 10 y 41--*Rendición de cuentas*, núm. 20--*Término de prueba*, núm. 4.

1^a. **Incidentes** --Los incidentes suspenden el término de prueba sin petición de parte. --Jur. Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 4^a.

2. **Incidentes** --Consentida la competencia en lo principal, no puede declinarse en los incidentes --Jur. Civ., tom. 10, pág. 306, Ser. 4^a.

Incompatibilidad --Véase: *Padrastro*, núm. 1.

1^b. **Incompetencia** --La declaración de que el Juzgado carece de ella, hace procedente el levantamiento del embargo preventivo.--Jur. Civ., tom. 1, pág. 370, Ser. 3^a.

3--Véase: *Acción personal*, núm. 4.

1^a--Esto no lo resolvió espresamente la Cámara, pero resultaba de una manera esplicita de la forma en que trató otra cuestión que le estaba intimamente ligada.

2--Véase: verb. *Competencia*, núm. 6.

1^b--El art. 463 del Cód. de Proc. establece que el embargo preventivo dictado por Juez incompetente, es válido siempre que haya sido dictado con arreglo a las disposiciones del Cód. de Proc. En el caso que nos ocupa se decretó un embargo preventivo y el embargado pidió que se dedujera la acción dentro del término del art. 460: la acción se inició, pero ante Juez incompetente, en cuyo caso debe considerarse como no cumplida la disposición del art. 460 citado.



2^a. **Incompetencia**—Si resulta que el causante falleció en jurisdicción de la Provincia antes de la federalización, debe declararse la incompetencia del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 145, Ser. 3^a.

3. **Incompetencia**—Cualquier que sea el estado del juicio, si las partes consienten el auto que declara la incompetencia del Juzgado, debe archivar el expediente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 8, Ser. 4^a.

4. **Incompetencia**—Cuando la jurisdicción es potestativa del demandado, no procede la condenación en costas al actor.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 8, Ser. 4^a.

Incompetencia—Véase: *Honorarios*, núm. 5 —*Acciones personales*, núm. 1 —*Cosa juzgada*, núm. 5 —*Excepción de incompetencia*, núms. 1 y siguientes —*Excepción de litispendencia*, núm. 7.

1. **Inconstitucionalidad**—La inconstitucionalidad de la ley que afecta á las herencias transversales en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia, si no lo ha sido por el Inferior.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 273, Ser. 3^a.

2^b. **Inconstitucionalidad**—De la ley que grava á los legados y herencias transversales en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia si no ha sido propuesta y resuelta por el Inferior.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 285, Ser. 3^a.

3^b. **Inconstitucionalidad**—De la ley que grava á los legados y herencias transversales con un impuesto en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda ins-

2^a—Véase: *Causante*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Costas*, núm. 18, y tom. 4^a, mismo verbo, núm. 12.

1—Véase: *Herencias transversales*, núm. 1.

2^b—Véase: *Herencias transversales*, núm. 2.

3^b—Véase: *Herencias transversales*, núm. 3.

tancia si no fué propuesta y resuelta ante el Inferior.—
Jur. Civ., tom. 5, pág. 315, Ser. 3ª.

Inculpabilidad—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 30 y 61.

1. **Indemnización**—Los jornales abonados á los oficiales durante la paralización de una obra, no pueden conceptuarse consecuencia inmediata de aquel hecho, y por lo tanto no pueden ser incluidos en la indemnización.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 81, Ser. 4ª.

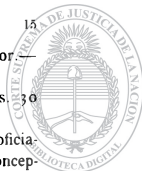
2. **Indemnización**—La exajeración de la suma demandada como indemnización, justifica la resistencia del demandado y en consecuencia la exoneración del pago de las costas.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 309, Ser. 3ª.

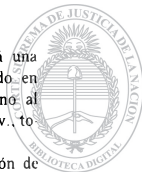
3. **Indemnización**—Justificada la propiedad particular de los terrenos ocupados por una empresa de utilidad pública, debe ser obligada á indemnizar su valor —Jur. Civ., tom. 4, pág. 393, Ser. 3ª.

1—El art. 1069 establece que el daño comprende no solo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fué privado el damnificado por el acto ilícito. Entre estos no puede conceptuarse comprendido el pago de jornales, por cuanto los peones pueden perfectamente trabajar y ocuparse en quehaceres análogos durante la suspensión de la obra. Ese perjuicio aunque existiera, no podría conceptuarse como una consecuencia inmediata y necesaria de la suspensión de la obra, según lo establece el art. 520 del Cód. Civ.

2—Véase: verb. *Costas*, núm. 19.

3—El art. 17 de la Const. Nac. establece que la propiedad es inviolable, y ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En presencia de este precepto claro y terminante de la Constitución, resulta que la propiedad no puede ser atropellada, despojándose á un dueño so pretexto de utilidad pública, y si la adquisición es necesaria é indispensable debe abonarse previamente su importe en la forma que determinen las leyes especiales que legislan para el caso.





4. **Indemnización**—Por la falta de cumplimiento á una obligación de hacer escritura, debe fijarse teniendo en cuenta el precio de venta y el que tenga el terreno al tiempo en que se ordena el otorgamiento.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 220, Ser. 3^a.

5. **Indemnización**—El damnificado por la violación de domicilio tiene personería para gestionar la indemnización, aun cuando él no sea el propietario ni su representante legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

6. **Indemnización**—La calificación de jugador de garito á una persona que además de comprobar su honorabilidad justifique la falsedad del hecho imputado, importa estralimitación de facultades en el empleo y una ofensa ilícita al ciudadano, que debe ser indemnizada según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 378, Ser. 4^a.

7. **Indemnización**—Para que proceda la que la ley acuerda al que es víctima de un delito, debe justificar previamente la existencia del mismo.—Jur. Civ., tom. 7, página 396, Ser. 3^a.

8. **Indemnización**—Pecuniaria, los padres, cualquiera que sea la edad de la víctima, tienen derecho á una indemnización pecuniaria en relación á los sacrificios que les haya costado el hijo, ó á la ayuda y sostén que de él pudieran esperar.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 253, Ser. 4^a.

4—Se determinó en la sentencia que la diferencia entre el precio de compra del inmueble y el que tiene el *día de la demanda* es lo que debía abonarse como indemnización. Por consiguiente el sumario está equivocado. Y se funda esta resolución en que á haber escriturado el vendedor en la época exigida, tendría el comprador una propiedad que valdría la suma que en ese tiempo se estimaba.

5—Véase: verb. *Damnificado*, núm. 1.

6—Véase: verb. *Empleado*, núm. 1.

7—Véase: *Delito*, núm. 2.

8—Véase: *Agravio moral*, núm. 1.



9. **Indemnización**—La culpa del coautor de un delito, solo permite la división proporcional de la indemnización, pero no basta para declarar la irresponsabilidad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

10. **Indemnización**—El monto exajerado de la indemnización demandada, no basta para exonerar al demandado de las costas que forman parte del daño causado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

11. **Indemnización**—Los padres tienen derecho á exigir una indemnización por la muerte del hijo, al que resulte responsable del daño, aun cuando el hecho que motivó el incidente no pueda ser calificado como delito.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

12. **Indemnización**—Debe ser confirmada la suma fijada como indemnización por el agravio moral, si el Tribunal la juzga equitativa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 149, Serie 4^a.

13. **Indemnización**—La fijación del monto de la indemnización que el autor de un acto ilícito adeuda al damnificado, debe ser hecha por los Tribunales con arreglo á los antecedentes que suministre el litigio.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 337, Ser. 4^a.

9—Los daños y perjuicios eran procedentes de la muerte, de una persona, ocasionada en un choque habido entre la empresa de un ferrocarril y la de un tramway. Hubo concurrencia de culpa de parte de ambas empresas y se determinó el monto de la indemnización, por la parte de responsabilidad que correspondía á la empresa demandada. Estando comprobada plenamente la responsabilidad de ambas compañías, quedaba siempre á salvo el derecho al actor para gestionar la indemnización correspondiente de la otra empresa.

10—Véase: *Costas*, núm. 35.

11—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 105.

12—Véase: verb. *Agravio moral*, núm. 2.

13—Véase: *Acto ilícito*, núm. 11.



Indemnización—Véase: *Condición*, núm. 3—*Juramento estimatorio*, núm. 6—*Funcionarios públicos*, núm. 4—*Prescripción de la indemnización*, núm. 1—*Calumnia*, número 1—*Daños y perjuicios*, núms. 43, 49, 54, 73, 74, 91, 92 y 101—*Jurisdicción*, núm. 3.

Indivisible—Véase: *Confesión*, núm. 3—*Documento privado*, núm. 7.

Individualización—Véase: *Documentos*, núm. 10.

1. **Indivisión**—No importa posesión en comunidad de

1—Los que vendieron ó cedieron sus derechos al poseedor actual en la época de la demanda, habían sido declarados únicos y universales herederos del causante que fué el propietario del inmueble materia de la acción reivindicatoria, de manera que la sucesión de este comprador entendió poseer y poseyó efectivamente *animo domini*, como sucesora de los únicos herederos de los causantes declarados tales. Ese adquirente fué concursado: de manera que la posesión la tuvo antes del concurso el albacea que había sido instituido en el testamento y el Síndico del concurso después que fué concursada la testamentaria. De donde resulta que tanto la posesión del albacea como la del síndico era á nombre del adquirente y sus herederos, porque ellos no poseen nunca á nombre propio sino en el de aquellos que representan. Ahora bien, como los herederos cedieron sus derechos ó los vendieron en su carácter de únicos y universales herederos, es fuera de duda que la posesión tenida por el albacea y después por el síndico aprov. cha á su dueño y después á su sucesión, en virtud de sus derechos legítimamente adquiridos. De donde resulta que si para la adquisición del dominio por posesión de más de 30 años no se requiere ni justo título ni buena fe—arts. 4015 y 4016 del Cód. Civ., y Ley 21, tit. 29, Part. 3ª—justificándose que se ha poseído la cosa durante ese término, debe declararse adquirido el dominio por prescripción. Si la posesión de la cosa la tiene una sola persona sin dividir el inmueble, esa posesión del todo no implica comunidad con otros que no eran tenidos como coherederos, porque la posesión del total de la cosa no es tenida á nombre de todos los herederos declarados y no declarados y por consiguiente los no declarados no tienen derecho á la cosa una vez que el cesionario de los declarados ha poseído á su nombre el inmueble durante el tiempo requerido por la ley para la prescripción. Esa posesión del cesionario no implica comunidad con los demás coherederos de los declarados tales, pero cuya existencia no constaba en el acto de la cesión.



los bienes testamentarios, siempre que los albaceas ó representantes de la testamentaria reconozcan poseer y obren á nombre del adquirente ó cesionarios de los herederos y no de los herederos.—Jur. Civ., tom. 4, página 342, Ser. 4^a.

2. **Indivisión**—Reconocida y declarada por sentencias ejecutoriadas la partición estrajudicial y consiguiente entrega de los bienes á los herederos, la parte dispositiva que ordena la formación de la cuenta particionaria colacionando los bienes entregados, equivale á una declaración expresa de haber cesado el estado de indivisión ó posesión en común de los bienes hereditarios.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

Indivisión—Véase: *Bienes de la sucesión*, núm. 3.

Inejecución—Véase: *Contrato rescindido*, núm. 2.

Inferior—Véase: *Cámara*, núm. 1—*Herencias transversales*, núms. 1, 2 y 3.

1. **Información**—Cualquiera que sea la prueba producida para justificar la ausencia con presunción de fallecimiento, la información no puede aprobarse sin la publicación de edictos por el término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 256, Ser. 3^a.

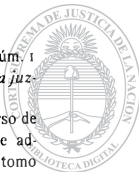
2^a. **Información**—Es improcedente para justificar la existencia de bienes dotales no reconocidos por contratos nupciales.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 237, Ser. 4^a.

3. **Información**—Existiendo en autos suficientes datos para identificar al causante de la testamentaria, no debe producirse información para subsanar un error de la partida de matrimonio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 190, Ser. 3^a.

1—Véase: *Edictos*, núm. 1.

2—Véase: *Bienes dotales*, núm. 1.

3—Véase: *Causante*, núm. 1.



Información—Véase: *Testigos*, núm. 3—*Hijuela*, núm. 1—*Información supletoria*, núm. 1 y siguientes—*Cosa juzgada*, núm. 4—*Fallecimiento*, núm. 4.

1^a. Información *ad perpetuam*—No procede el recurso de fuerza de la resolución de la Curia Eclesiástica que admite una información *ad perpetuam*.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 177, Ser. 4^a.

1^b. Información de pobreza—La producida con el objeto de hacer inútil el arraigo, debe producirse ante el Juez en turno.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 94, Ser. 4^a.

1^c. Información sumaria—El derecho escluyente de los herederos más próximos de los más lejanos, puede justificarse por información sumaria: no es necesario esperar á la prueba plena en juicio contradictorio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 24, Ser. 4^a.

2. Información sumaria—Si existen derechos contradictorios, no procede para la adquisición del dominio por haber poseído durante el término que la ley requiere para la prescripción.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 100, Ser. 4^a.

1^d. Información supletoria—La Municipalidad es parte legítima en toda información supletoria para la formación de un título de propiedad sobre terrenos situados en la Capital.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 394, Ser. 3^a.

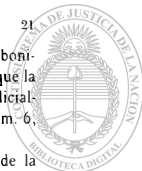
1^a—Porque no causa gravamen irreparable.

1^b—Véase: verb. *Arraigo*, núm. 3.

1^c—Véase: verb. *Heredero*, núm. 5.

2—La Cámara dijo, que dada la oposición de parte legítima, no procedía la aprobación de una información sumaria como la producida, y mucho menos en los términos solicitados y con las deficiencias anotadas.

1^d—La intervención de la Municipalidad procede porque es representante de los derechos que al Fisco corresponden sobre inmuebles situados dentro de su jurisdicción.



2. Información supletoria.—En la información para bonificar títulos, no es parte el comprador del inmueble que la motiva, ni en consecuencia después de aprobada judicialmente, puede desconocer su validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 443, Ser. 3ª.

3. Información supletoria —Justificada la identidad de la persona, por instrumento público, procede la aprobación de la información que justifica la existencia del mismo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 111, Ser. 3ª.

4. Información supletoria—Aun cuando la información supletoria se califique de juicio voluntario, es contencioso para los que en ella intervengan con intereses opuestos, y por tanto la sentencia aprobatoria de la información hace cosa juzgada para ellos.—Jur. Civ., tom. 2, página 234, Ser. 4ª.

5. Información supletoria—Para corregir un error de un

2—No es parte, porque para producir una información solo es parte el Ministerio Fiscal, debiendo el Juez aprobarla ó desecharla, siguiendo ó separándose del dictamen de aquél. Una información no es un juicio contradictorio: no hay demandante ni demandado. En todo caso el comprador puede llevar él mismo adelante la información, si tal es la voluntad de los contratantes, pero no puede jamás exigir una intervención que no se dá ni por el interesado ni por el Juez, porque la ley la prohíbe. En cuanto á que el comprador no pueda objetar la información, tal no fué la resolución de la causa, pues solo se dijo: «que en cuanto á las otras objeciones formuladas contra las demás diligencias de la información, pecan de la misma fragilidad, porque en el curso de este litigio no se ha demostrado por ningún argumento serio y jurídico, que aquéllas carezcan de eficacia.» Luego pues, si las informaciones carecen de eficacia, el comprador puede impugnarlas con perfecto derecho, pues la deficiencia en la información haría defectuoso el título, y el comprador no estaría obligado á escriturar hasta tanto no se subsanaran en forma.

3—Véase: *Apellido*, núm. 1.

4—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 4.

5—Y si la información producida no es bastante, puede ampliarse para colocarla en condiciones legales.



instrumento público, debe formar prueba plena.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 369, Ser. 4^a.

6. Información supletoria.—Procede la aprobación de la información supletoria del título, siempre que hayan llenado las formalidades que la ley exige; la oposición municipal debe ser fundada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 398, Ser. 4^a.

7. Información supletoria.—Adolece de nulidad la sentencia aprobatoria de una información para probar la pro-

6—La Municipalidad fué oída como parte en la información, no dedujo oposición alguna á la información. No podía resultar agravios para ella desde el momento en que la información se produjo en la más perfecta condición legal.

7—La información se mandó recibir con citación fiscal y practicadas las diversas diligencias que fueron solicitadas, el representante de la Municipalidad pidió se declarase cesante su intervención en el asunto y se citase al Presidente del Consejo Nacional de Educación para que asumiera su personería por ser á quien correspondía en razón de haberse declarado vacante la sucesión en cuyos autos existían los títulos de la propiedad, motivo del juicio. El Agente Fiscal por su parte, evacuando el traslado que le fué conferido, manifestó á su vez que no debió intervenir tampoco, por considerar innecesaria en la cuestión la doble representación del Ministerio Fiscal y del Procurador Municipal. En ese caso y sin resolver previamente lo podido por el Procurador Municipal, se pronunció una resolución aprobando la información y mandándola protocolar. En estas informaciones, como lo dice Manresa y Reus en sus comentarios á la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, tom. V, página 371, el Juez debe oír previamente al Ministerio Fiscal, acerca de su procedencia y después de admitida, conforme á lo dictaminado por aquél, debe oírlo nuevamente como parte esencial en el juicio, y si bien pudiera decirse que el Ministerio Público se escusó fundado en la intervención que ya tenía el Procurador Municipal, es de tenerse presente que esta parte también se escusó pidiendo se citase al representante del Consejo Nacional de Educación, á quien correspondía intervenir por haberse declarado vacante la sucesión interesada en el juicio. De aquí se deduce entonces que no se debió pronunciar sentencia sin antes resolver la citación del Presidente del referido Consejo de Educación y oír las observaciones que podría deducir y que en tal caso tendrían que



piedad de un terreno por prescripción, si no ha sido oído el Ministerio Fiscal ó quien lo represente.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 427, Ser. 4ª.

8. Información supletoria — La Municipalidad es parte legítima en las informaciones supletorias por falta de título, si se niega á intervenir, debe sustanciarse con audiencia de quien represente los intereses del Fisco.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 427, Ser. 4ª.

9. Información supletoria — El denunciante de un fallecimiento que asevera datos equivocados en una partida del Registro Civil, carece de personería para producir información con objeto de anotar el error.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 21, Ser. 4ª.

Información supletoria—Véase: *Partidas*, núm. 1—*Poseción cuarentenaria*, núm. 1—*Declaratoria de herederos*, núm. 4.

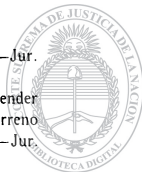
1. Informaciones—La Municipalidad es parte en las in-

sustanciarse por la vía ordinaria, sin poder entre tanto aprobarse la información. De no ser así, tendría que resultar que una información destinada á formar un título supletorio de la propiedad de un bien raíz, se podría recibir sin la citación y audiencia de la parte á quien puede perjudicar y que tiene un derecho perfecto para observarla, como lo habrían tenido el Ministerio Fiscal y la Municipalidad que declinaron su participación en el juicio por las razones manifestadas. Se reconocía así también, al declararse que la intervención acordada á la Municipalidad en juicio de esta naturaleza, tiene por único objeto hacer valer los derechos que pudiera tener á la propiedad del inmueble sobre que versa y que siendo este puramente voluntario, solo pueden ser oídos en él las partes que intervienen. Por consiguiente y no siendo á la Municipalidad á quien correspondía ni á quien podía perjudicar sino al Consejo Nacional de Educación, no se pudo aprobar la información sin resolver previamente lo pedido por el Procurador Fiscal.

8—Véase nota precedente.

9ª—Véase: *Fallecimiento*, núm. 5.

1—Véase: verb. *Información supletoria*, núm. 7.



formaciones sobre subsanación ó carencia de título.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 259, Ser. 4ª

2. **Informaciones**—Es Juez competente para entender en todas las informaciones sobre propiedad de un terreno el que haya conocido en la primera que se inició.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 101, Ser. 4ª.

Informe—Véase: *Testigos*, núm. 17— *Cotejo*, núm. 1.

Informe del Registro—Véase: *Embargo*, núm. 8.

1ª. **Informe in voce**—La Cámara puede dejar sin efecto la resolución interlocutoria dictada en un recurso, si se ha omitido sin culpa de la parte el informe *in voce* solicitado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 207, Ser. 4ª.

Informe pericial—Véase: *Perito*, núm. 2.

1. **Informes**—No estando prohibida la prueba por in-

2—Aplicando al caso el mismo procedimiento que rige cuando se promueven diversos juicios que tienen un mismo objeto, como cuando se inicia una testamentaria ante distintos jueces, con prioridad uno al otro, la gestión debe ventilarse ante el Juez que primero hubiese prevenido en el conocimiento de uno de los juicios informativos promovidos. No cabe otra manera de proceder que la acumulación de los autos, desde que de no hacerlo así, tendríamos que se dividiría la continencia de la causa.

1ª—El interesado había presentado en tiempo un escrito solicitando señalamiento de audiencia para informe *in voce*, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 268 del Cód. de Proc. Ese escrito no fué tomado en consideración por la Cámara, por haberlo retenido en su poder el empleado encargado de la mesa de entradas, resolviéndose sin dicho informe el fondo de la apelación. Se resolvió dejar sin efecto la resolución y señalar nuevo día para el informe, fundándose en que es deber de los Tribunales garantizar ampliamente el derecho de defensa que la ley acuerda, siendo ese derecho indiscutible en todos los casos, lo que se hace más evidente en los recursos concedidos en relación, pues la única oportunidad que el litigante tiene para expresar los agravios que le infiere la resolución recurrida, es el informe *in voce* que le acuerda el art. 268, citado, del Cód. de Procedimientos.

1—Ante el silencio de la ley sobre este punto, debe acordarse el término extraordinario y aceptarse la prueba ofrecida, sin perjuicio de apre-



formes de oficinas extranjeras, debe acordarse el término extraordinario para producirla.—Jur. Civ., tom. 5, página 225, Ser. 3^a.

2. **Informes**.—Los de las oficinas públicas ya sean de la administración ó de los escribanos de Registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial, cuando se trata del precio de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

3. **Informes**.—Presentados por los peritos contadores, no puede pedirse ampliación; solo el Juez puede ordenarla para mejor proveer.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 259, Ser. 4^a.

4. **Informes**.—Médicos, sin las formalidades que la ley exige, siguen las reglas que rigen las declaraciones de testigos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 81, Ser. 4^a.

Infracción.—Véase: *Acción*, núm 3—*Contrato por escritura pública*, núm. 1.

1. **Inhabilidad de título**.—Solo puede resultar del instrumento en que se funda la ejecución, sin que pueda

ciar legalmente su importancia en la debida oportunidad por requerirlo así el principio de la amplitud de la defensa cuando no se contraria ninguna prescripción legal.

2—Véase: *Administración*, núm. 1.

3—Siempre que el término de prueba estuviese vencido, porque de lo contrario, las partes pueden pedir la ampliación de la prueba pericial, como cualquiera otra medida probatoria. La defensa concedida á las partes por la ley es amplia y sin cortapizas.

4—El informe no fué espedido con arreglo á las prescripciones del Cód. de Proc., ni fué ordenado judicialmente, ni controlado por otro perito: circunstancias todas ellas que despojan al informe de toda fuerza probatoria.

1—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núms 3 y 12. La teoría sentada en el sumario tendrá que reformarse porque no consulta los verdaderos principios jurídicos que rigen el caso.



darle origen la falsedad de los hechos que precedieron á su formación.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 241, Ser. 4ª.

2. Inhabilidad de título—No puede ser declarada de oficio por el Juez al dictar sentencia de trance y remate.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 260, Ser. 4ª.

3. Inhabilidad de título —Opuesta á una ejecución fun-

2—Si bien el art. 471 del Cód. de Proc. faculta al Juez para no hacer lugar de oficio á la ejecución, cuando viese que el título no es suficiente: si no hace uso de ese derecho en esta oportunidad, menos puede declarar de oficio inhábil el título al dictar sentencia cuando el mismo ejecutado, citado de remate, no hace observación al respecto. Para que esta cuestión fuese materia de sentencia habría sido necesario que se sustanciara en forma, oyendo á las dos partes, y recibiendo á prueba; es decir, es necesario que se tramite en la forma establecida por la ley.

3—El ejecutado fundó la escepción de inhabilidad de título diciendo que «el título que sirve de base á la ejecución es un supuesto crédito por suma de dinero acreditado con la escritura acompañada, que tal título no habilita para ejecutar porque le falta la base esencial, *sine qua non*, le falta la existencia misma de la obligación, sin la cual el instrumento y el acto jurídico que contiene no son nada ante el derecho; que la obligación no existe, porque le falta la razón de ser en las obligaciones—art. 499 y 18, Cód. Civ.—Que jamás ha debido á los demandantes ni ha existido causa para deberles, y que la obligación cuyo pago se ejecutó es nula por falta de causa. Que la ley no ha circunscripto la escepción de inhabilidad, á solo el caso en que el instrumento sea nulo por defecto de forma, lo que sería una monstruosidad, por que habría dado mayor importancia á la forma que á la sustancia del acto. Que felizmente el Cód. de Proc. ha usado un término más amplio, como el de inhabilidad del título, y el ejecutado puede ejercitar esta escepción siempre que trate de la inhabilidad del título, ya por un vicio de forma, ya por vicio de fondo, sea relativo á la capacidad ó á la obligación en sí misma, está en su apoyo la causa que se registra en el tom. 7º, pág. 341, Ser. 1ª, fallos de la Cámara de lo Civil. Que si ha firmado la escritura ha sido debido al trabajo del mandatario, quien apareciendo siempre como apoderado de los demandantes, ha pretendido que debía entregarles una suma de dinero por una pretendida herencia que nunca ha existido. Que lo ha amenazado con un gran pleito que le haría perder sus bienes de fortuna, que su igaorancia, su enfermedad y el temor de verse envuelto



dada en escritura pública, es improcedente si se basa en

en pleito en los últimos años de su vida, lo hizo ceder hasta firmar la escritura pública, y que acompaña una carta que demuestra lo espuesto», funda la otra excepción diciendo: «Que siendo ésta falsa, la obligación es nula, porque no existe otra causa verdadera, como ya lo he manifestado y lo resuelve el art. 501 del Cód. Civ.», termina pidiendo que no se haga lugar con costas á la ejecución. Evacuando el traslado el ejecutado pide el rechazo de la ejecución, diciendo: «Que la causa de la obligación fué el deber en que se hallaba el ejecutado de entregar al actor la parte de una propiedad, y es debido á esto que por el documento se obliga aquél á entregar la suma demandada, como parte de precio obtenido en la venta. Que el ejecutado confunde la inhabilidad con la nulidad, cuando dice que el instrumento de la obligación revisten las formalidades externas necesarias para su validez, por eso no digo de nulidad de la escritura por sus formas. Pero la ley no ha circunscripto la excepción de inhabilidad á solo el caso de que el instrumento sea nulo por defecto de forma. Que el fallo citado no tiene aplicación en este asunto, porque no existe ninguna disposición de fondo que pueda invocarse en nuestro caso para desnaturalizar el juicio ejecutivo, citan en su apoyo los fallos, tom. 3º, págs. 212 y 257, Ser. 1ª, tom. 4º, pág. 551 y tom. 6º, pág. 525, Ser. 2ª. Que en cuanto á la excepción de falsedad, como ella se funda en que no es cierto que el actor sea coheredero, lo que viene á importar en sustancia una reproducción de la anterior, agregan únicamente que según los arts. 494 y 495 del Cód. Civ., los documentos públicos hacen plena fe de los reconocimientos contenidos en ellos». El Juzgado rechazó las excepciones diciendo, que es incuestionable que la inhabilidad del título no puede referirse á la sustancia del acto. El juicio ejecutivo es un procedimiento sumario, que no tiene por objeto declarar derechos dudosos sino hacer que se cumplan los que se hayan reconocido por títulos que constituyen una fuerte presunción de que el derecho que se persigue es legítimo, la excepción de inhabilidad se refiere á las formas y solemnidades que debe revestir el título para que tenga carácter ejecutivo, pues de lo contrario se daría lugar á las controversias propias de los juicios declarativos, falseando así los propósitos de la ley, que con este procedimiento ha querido evitar las demoras y gastos de la vía ordinaria. Que la disposición contenida en el art. 500 del Cód. de Proc., es una nueva prueba de que las excepciones de inhabilidad se refieren solo á las formas del título, pues si dicha excepción pudiera oponerse también á la sustancia del acto, no tendría aplicación racional dicho artículo.—Véase Caravantes, Proce-



la falta de causa para la existencia de la obligación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 332, Ser. 4ª.

4. **Inhabilidad de título**—No puede ser declarada de oficio por el Juez al dictar sentencia de trance y remate.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 76, Ser. 4ª.

5. **Inhabilidad de título**—Ella solo puede afectar á su forma intrínseca; si ésta llena las disposiciones de la ley que le dió origen, la escepción debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 305, Ser. 4ª.

6. **Inhabilidad de título**—Procede la inhabilidad del título cuando la ejecución por honorarios se dirige contra la parte que no ha solicitado los servicios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 314, Ser. 4ª.

7. **Inhabilidad de título**— La conformidad con los honorarios judiciales, núm. 1200.— Que el fallo de la Exma. Cámara que invoca el ejecutado—Ser. 1ª, tom. 7, pág. 341—es de un carácter especial y no puede tener aplicación al caso que nos ocupa. En el fallo citado, la Exma. Cámara aplicó una ley de fondo y en el caso *sub-judice* no existe la misma razón para desnaturalizar el juicio ejecutivo, siendo por otra parte de tenerse en cuenta, que ese fallo no establece jurisprudencia al respecto, pues posteriormente la Exma. Cámara ha dictado otros resolviendo la cuestión que actualmente se ventila, favorablemente á las pretensiones de los ejecutantes—tom. 3º, pág. 212; tom. 9º, pág. 257, Ser. 1ª; tom. 4º, pág. 551 y tom. 6º, pág. 525, Ser. 2ª.—Que en cuanto á la escepción de falsedad basta solo recordar que en el documento acompañado, el ejecutado reconoce como coherederos á sus hermanos en las sucesiones de sus padres y demás ascendientes, y que este mismo confiesa, contestando á una de las posiciones, que dió poder para iniciar la testamentaria de sus abuelos maternos, lo que demuestra que es falso que el actor no sea coheredero del ejecutado.

4—Véase el núm. 2.

5—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara, la que debe ser reformada porque no consulta la doctrina aceptada por la casi totalidad de los prácticos. Véase el núm. 3.

6—Véase: *Honorarios*, núm. 23.

7—Esa conformidad no puede oponerse á los herederos, es decir, á la testamentaria, porque el albacea no los representa, siendo evidente

rarios, prestada por el albacea, hace procedente la inhabilidad del título, si la ejecución se dirige contra la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 100, Ser. 4ª.

8. Inhabilidad de título—Es procedente contra la eje-

que la testamentaria, no puede ser ejecutada en virtud de una cuenta que sus herederos no han aceptado, ni consentido, ni reconocido de otra manera. El art. 3862 y su nota explicativa consagra estos principios cuando dice el primero, que los albaceas no pueden intervenir en los pleitos que promuevan los acreedores de la sucesión ú otros terceros, en los cuales solo son parte los herederos y legatarios. En el caso del sumario, la manifestación de conformidad la hizo el albacea, y también la ejecución se dirigió contra él como representante de la sucesión, lo que implica un doble error.

8—Condenado en juicio ordinario un litigante á hacer unas obras dentro del término de quince días, bajo apercibimiento de mandarlas hacer á su costa, dejó transcurrir el término sin cumplir con lo ordenado; el vencedor procedió á efectuarlas de acuerdo con lo establecido en el art. 554 del Cód. de Proc., á cuyo efecto se presentó al Juez de la causa haciendo presente que iba á proceder á efectuar las obras por no haberlas verificado el vencido, á lo que el Juez proveyó «ténase presente.» Efectivamente el vencedor procedió, sin otros requisitos, á practicar las obras. Si, en la ejecución de los trabajos se procedió en esta forma, sin una resolución judicial que las hubiese autorizado declarando la legitimidad de sus partidas. Si se procedió por el vencedor á practicar los trabajos en la forma que queda indicada, si no existe una resolución judicial que las haya autorizado declarando la legitimidad de sus partidas ó de su importe, es incuestionable que el título de la ejecución es inhábil. Los términos de la ejecutoria no prestigiarían una conclusión distinta, pues al decir que se harán las obras por el vencedor y por cuenta del vencido, ello no implica que deba prescindirse de la autoridad del Juez, por cuyo intermedio, exclusivamente, podrían mandarse hacer, á menos de dejar librado al arbitrio del acreedor la forma y condiciones del cumplimiento de la ejecutoria, lo que sería contrario á toda regla de justicia y de equidad. El art. 554 ha sido tomado de la ley española, y al decir sus comentadores que el Juez hará que se ejecute el hecho á costa del deudor, empleando los medios necesarios al efecto y debiendo ser éstos los más á propósito, más breves y menos dispendiosos, —Manresa y Caravantes, Ejecución de Sentencia—consideran, según la inteligencia de



cución fundada en el importe de las obras ordenadas por sentencia, si se llevaron á cabo sin intervención judicial.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 378, Ser. 4ª.

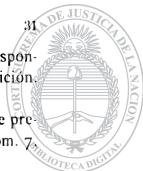
Inhabilidad de título—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 1 y siguientes.

1. **Inhibición**—No basta para privar la venta de un inmueble, puesto que el comprador responde de las obligaciones que sobre él pesaban—Jur. Civ., tom. 2, página 250, Ser. 3ª.

sus exposiciones, includible la intervención del Juez, pues fuera de su autoridad legal, las garantías que comportan el empleo de los medios enunciados correrían grave peligro de hacerse frustráneas. Puede verse el comentario al tít. 27 de la Part. 3ª, edición de Barcelona, 1844, donde se demuestra con razones concluyentes que el cumplimiento de la sentencia que manda hacer ó entregar alguna cosa, debe entenderse que es sin perjuicio de oír á la parte que ha sido condenada.

1—El actor se presentó solicitando se declarase nula la venta de un terreno situado en esta Capital, ordenada á petición de la sociedad de negros africanos «Lubolo». Fundaba su acción en que existiendo á su favor un contrato de locación cuyo término no estaba vencido, no podía la sociedad pedir la venta del inmueble desde que la misma se había inhibido de disponer de él hasta la espiración del término de la locación. La parte demandada sostuvo que tratándose de un contrato condicional, aun en el caso de ser exacto, lo que niega, podía ser cumplido por el sucesor particular de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 3266 y 3267 del Cód. Civ. La venta fué realizada á solicitud de varios miembros de la sociedad, para proceder á la división del condominio que sobre dicho terreno existía. Teniendo cada ex-propietario la facultad de pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común—art. 2692, Cód. Civ.—no puede considerarse limitado este derecho por la existencia de un contrato de locación que puede y debe ser cumplido por el sucesor particular de la sociedad vendedora, según lo disponen los arts. 1498 y 3266 del recordado Código. Aunque en el contrato de locación, el representante de la sociedad «Lubolo» se inhiba de disponer del bien arrendado, esto tampoco puede considerarse como un impedimento para la realización de la venta desde que ésta es forzosa, y desde que cualquiera que sea adquirente del inmueble





2. **Inhibición**—Si los bienes dados á embargo responden al monto de la fianza, debe levantarse la inhibición.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 249, Ser. 3^a.

3. **Inhibición**—Debe levantarse la inhibición si se presentan bienes suficientes á embargo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 155, Ser. 3^a.

4. **Inhibición**—Si es indebida, responsabiliza á los que la solicitaron, por los daños y perjuicios que se causen al inhibido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 280, Ser. 3^a.

5. **Inhibición**—General, procede el levantamiento de la inhibición si se deposita á embargo el importe del crédito líquido que resulte del contrato bilateral; los perjuicios por la falta de cumplimiento no bastan para decretarla ni mantenerla.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 138, Ser. 4^a.

6. **Inhibición**—General, la sentencia que absuelve de la

responde con el mismo del cumplimiento de las obligaciones contraídas por su causante.

2—Véase: *Embargo*, núm. 2.

3—Véase: *Embargo*, núm. 3.

4—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 44.

5—En cuanto á la primera parte, véanse los núms. 2 y 3. En cuanto á los perjuicios que se condena á pagar á un litigante en virtud de sentencia, no puede dar lugar á embargo preventivo, sino cuando contiene suma líquida, puede verse el tom. 3^o de la Inst., verb. *Daños y perjuicios*, núm. 2. Para que el embargo preventivo sea procedente se requiere, según jurisprudencia de la Cámara, que haya cantidad líquida y de plazo vencido. Véase: verb. *Embargo preventivo*, núms. 21, 23 y 31 de este tomo.

6—Al ordenarse el levantamiento del embargo, se procedió por haber sido resuelto el juicio en contra de las pretensiones del actor. El embargo se levantó sin estar consentida la sentencia, lo que no es irregular por cuanto el art. 448 del Cód. de Proc. establece que la parte que obtenga una sentencia favorable, puede pedir las diligencias de embargo, y éstas deben ser despachadas aunque la sentencia no se encuentre consentida—art. 222—cuyas disposiciones deben aplicarse por analogía. Estos fueron los argumentos aducidos por el Juez de 1^a



demanda, permite el levantamiento de la inhibición decretada contra el demandado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 42, Ser. 4ª.

7. **Inhibición**—General, ejecutoriada la inhibición general, es procedente el embargo de los fondos del deudor depositados en poder de terceros.—Jur. Civ., tom. 1, página 125, Ser. 4ª.

8. **Inhibición**—General, siempre que del instrumento público resulte crédito líquido, procede el embargo preventivo ó la inhibición.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 138, Serie 4ª.

9. **Inhibición**—La responsabilidad del comprador por la diferencia de precio, no puede fundar la inhibición de sus bienes, si no existe cantidad líquida.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 368, Ser. 4ª.

10. **Inhibición**—El desconocimiento de bienes de propiedad del deudor hace procedente la inhibición en los casos que la ley concede el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 212, Ser. 4ª.

11. **Inhibición**—General, presentados á embargo bienes de la sociedad bastantes á responder al crédito, debe levan-

Inst. en su resolución, la que fué confirmada por sus fundamentos por la Cámara. Es indudable que el principio sustentado por la Cámara, no tiene fundamento legal alguno. La sentencia de 1ª Instancia que no está consentida, es considerada como inexistente á los efectos legales, y es por esto que la absolución del reo en el juicio criminal, no puede fundar su escarcelación. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Sentencia*, número 4; tom. 3º, verb. *Escarcelación bajo fianza*, núm. 8, y tom. 1º, verb. *Resolución*, núm. 15, cuyos argumentos pueden aducirse por analogía en el caso que nos ocupa.

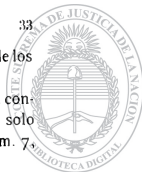
7—Véase: *Embargo*, núm. 4.

8—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 19.

9—Véase el núm. 5.

10—Véase: *Embargo preventivo*, núm 33.

11—Véase: *Bienes de la sociedad*, núm. 1.



tarse la inhibición general de los bienes particulares de los socios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 411, Ser. 4^a.

12. **Inhibición**—General, no procede fundada en la confesión que resulta de las posiciones, pues su mérito solo puede apreciarse al dictarse sentencia.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 25, Ser. 4^a.

13. **Inhibición**—De bienes, no procede mientras no exista sentencia de divorcio ó se justifique la mala administración del mando.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 23, Ser. 4^a.

14. **Inhibición**—General, no procede, con carácter de embargo preventivo por la falta de cumplimiento de una obligación de hacer, aun cuando se haya estipulado una pena para el caso de incumplimiento —Jur. Civ., tom. 7, pág. 37, Ser. 4^a.

15. **Inhibición**—Es facultativo del Juzgado apreciar el

12—De acuerdo con la jurisprudencia sentada en otros casos. Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 35. Cuando el absolvente concurre á la audiencia y confiesa el hecho, esa confesión puede dar lugar al embargo.

13—Así lo tiene resuelto la Cámara en otros casos. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Embargo preventivo*, núm. 4.

14—Es jurisprudencia de la Cámara que las obligaciones de hacer no son eficaces para fundar un embargo preventivo, sino cuando se hubiese declarado en debida forma el importe de los daños y perjuicios que aparea la ejecución de los mismos. Esta situación no se modifica cuando se ha convenido en una cantidad determinada para el caso de incumplimiento, pues tal circunstancia no altera la naturaleza de la acción, ni el carácter de las obligaciones emergentes del contrato; y muy especialmente porque la efectividad del derecho solo resultaría después de discutivo y ventilado en el juicio correspondiente. El art. 443 del Cód. de Proc. no es aplicable, porque la ejecutoria solo condenaría al cumplimiento de la obligación de hacer, siendo evidente que el espíritu de aquella disposición es limitar el derecho al caso en que la sentencia sea condenación de entregar ó pagar. Estos son los fundamentos que la Cámara de lo Civil aduce constantemente, con los que no estamos conformes nosotros, según puede verse en el verb. *Embargo preventivo*, número 3.

15—Véase: verb. *Embargo*, núm. 16.



valor de los bienes presentados á embargo para el levantamiento de la inhibición.—Jur. Civ., tom. 9, página 83, Ser. 4ª

16. Inhibición—El levantamiento de la inhibición no puede ser ordenado sin el consentimiento de los acreedores que la solicitaron.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 268, Ser. 4ª.

17. Inhibición—Preventiva, solo procede cuando no se conocen bienes para trabar embargo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 24, Ser. 4ª.

18. Inhibición—General, aun justificada la locación, no procede la inhibición general para garantir los alquileres.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 299, Ser. 4ª.

19. Inhibición—Preventiva, solo procede si existen los requisitos que la ley exige para el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 68, Ser. 4ª.

Inhibición—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 44 y 45 —*Auto inapelable*, núm. 2.

1. Inhibitoria—No es procedente en tanto que los dos juicios no tengan igual objeto.—Jur. Civ., tom. 5, página 186, Ser. 3ª.

2. Inhibitoria—La escepción de incompetencia debe resolverse por el Juez de cuya jurisdicción se declina, aun cuando se haya deducido inhibitoria.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 256, Ser. 4ª.

Inhibitoria—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2.

17—Art. 461 del Cód. de Proc.

18—Véase: verb. *Alquileres*, núm. 3.

19—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 46.

1—Se declaró que la incompetencia deducida por la vía inhibitoria no era procedente en el caso que se registra bajo el núm. 1, verb. *Escepción de litispendencia*.

2—Véase: *Escepción de incompetencia*, núm. 8.



Iniación de un juicio—Véase: *Acción determinada*, número 1.

Injurias graves—Véase: *Divorcio*, núm. 10.

Inmueble—Véase: *Tradición*, núm. 2—*Contrato de compraventa*, núm. 23—*Contrato por escritura pública*, número 18—*Jurisdicción civil*, núm. 1—*Arrendamiento*, núm. 3—*Contrato*, núm. 6—*Embargo preventivo*, núm. 11—*Poseedor clandestino*, núm. 1—*Hijuela*, núm. 1—*Poseción*, núms. 10 y 11—*Mandatario*, núm. 5—*Condómino*, núms. 2 y 3—*Inscripción*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núms. 1 y 6—*Sociedad sobre inmuebles*, núm. 1—*Simulación*, núm. 6—*Condominio*, núms. 1, 2 y 3—*Poseción judicial*, núm. 3—*Venta*, núms. 4 y 5—*Personería*, núm. 3—*Juez competente*, núm. 2—*Dominio público*, número 1—*Información supletoria*, núm. 2—*Venta en remate*, núm. 1.

Inmueble determinado—Véase: *Escritura de venta*, número 1—*Interdicto*, núm. 10—*Mandatario*, núm. 12.

Inmueble por accesión—Véase: *Sentencia*, núm. 10—*Interdicto de recobrar*, núm. 12.

1^a. Inmuebles—La existencia del mandato para la compra de inmuebles solo puede justificarse presentando la escritura pública en que se constituyó.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 199, Ser. 3^a.

Inmuebles—Véase: *Arrendamiento*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núm. 13—*Escritura pública*, núm. 5.

Inoficiosa—Véase: *Bienes*, núm. 7.

1^b. Insania—Para su declaración, es indispensable el exámen facultativo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 385, Serie 4^a.

1^a—Véase: *Escritura pública*, núm. 5.

1^b—Art. 142 del Cód. Civ.



Insania -- Véase: *Demencia*, núm. 1.

1^a. **Insano**—La tenencia del insano debe ser acordada á los parientes en tanto el curador no justifique plenamente que esa tenencia es perjudicial á la salud é intereses de aquél.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 158, Ser. 4^a.

Insano—Véase: *Curador*, núm. 2.

1^b. **Inscripción**—No es causa de nulidad de una escritura de venta de derechos á un inmueble, el otorgamiento en distinta jurisdicción de aquella en que están ubicados los bienes, ni aun su falta de inscripción en el registro de la propiedad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 121, Ser. 4^a.

Inscripción—Véase: *Matrícula*, núm. 1—*Condominio*, núm. 4—*Contrato de arrendamiento*, núm. 11.

Insolvencia—Véase: *Fianza*, núm. 4.

Instituciones judiciales—Véase: *Depósitos judiciales*, número 1.

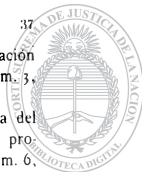
Instrucciones—Véase: *Mandato*, núm. 1.

1^c. **Instrumento privado**—Los actos del mandatario por

1^a—Se trataba tan solo de la tenencia provisoria del insano en tanto se resolvía el juicio de remoción del curador de cuya terminación dependía la tenencia definitiva de aquél. El curador no había demostrado la innecesidad de la traslación del incapaz. El curador había sido acusado de graves irregularidades cometidas por él, que á ser ciertas debían determinar su remoción, en cuyo caso la prudencia aconsejaba no innovar el estado de cosas, en beneficio del demente que siempre se encuentra bajo el amparo de la justicia. Tampoco se demostró la existencia de ningún peligro debido á la permanencia del insano en poder de sus parientes.

1^b—No hay ley que prohíba celebrar en un lugar el contrato para que produzca efecto en otro. Todo lo contrario, los arts. 1209 y 1211 del Cód. Civ. espresamente lo permiten. Debe tenerse asimismo en cuenta que esa causal de nulidad de la escritura, no fué alegado en la oportunidad debida del juicio, y por consiguiente, no podía ser tomada en consideración al dictarse sentencia.

1^c—El actor solo comprobó que el demandado firmó un documento autorizando á su mandatario para proceder á la venta de un inmueble;



instrumento privado practicados después de la cesación del mandato no obligan al mandante.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Ser. 3ª.

2. **Instrumento privado**—Reconocida la existencia del contrato de compraventa en instrumento privado, procede su reducción á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 188, Ser. 3ª.

3. **Instrumento privado**—El vendedor debe otorgar escritura pública del contrato de venta constante en instrumento privado, bajo pena de ser condenado en las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3ª.

4. **Instrumento privado**—El reconocimiento de la firma de un instrumento privado, importa el reconocimiento de todas las obligaciones que él contenga.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 204, Ser. 4ª.

5. **Instrumento privado**—La convención contenida en un boleto de compraventa no puede ser materia de decisión judicial, mientras no se convierta el instrumento en escritura pública—Jur. Civ., tom. 3, pág. 124, Serie 4ª.

6. **Instrumento privado**—La verdadera causa de una que esa autorización fué por un término dado; que la venta se hizo en instrumento privado en un solo ejemplar, pero que la celebración de la venta se la comunicó al mandante después de vencido ese término por el cual era válida la autorización. La Cámara dijo, que «era absolutamente necesario para hacer eficaz la demanda, comprobar que la demandada tuvo conocimiento de la venta antes de vencerse el plazo acordado en la autorización.»

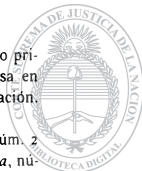
2—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 1.

3—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 12.

4—Art. 1028 del Cód. Civ.

5—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 10.

6—Porque en la demanda y contestación debe quedar trabado el cuasi-contrato de litiscontestación, no siéndoles permitido á los jueces apartarse de ese contrato que liga á los litigantes como la ley misma.



obligación, distinta de la que expresa el instrumento privado, debe ser alegada en la demanda: si se expresa en el curso del litigio no puede ser tomada en consideración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4ª.

Instrumento privado—Véase: *Contrato bilateral*, núm. 2—*Arrendamiento*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, números 13, 23 y 24—*Contrato consensual*, núm. 1—*Escritura pública*, núms. 5 y 8—*Boleto de compraventa*, números 8, 9, 23 y 31—*Condominio*, núm. 6—*Pacto de retroventa*, núm. 1—*Hipoteca*, núm. 1.

1. **Instrumento público**—Su nulidad fundada en la falsedad de los hechos, corresponde al que la alegue, siempre que se hayan llenado las formas que la ley exige.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 272, Ser. 3ª.

2. **Instrumento público**—Justificada la identidad de la persona por instrumentos públicos, procede la aprobación de la información que justifica la existencia de error en el apellido.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 111, Ser. 3ª.

3. **Instrumento público**—La firmeza que la ley concede al instrumento, no puede ser enervada por la omisión de trámites que afectan solamente sus formas externas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 121, Ser. 4ª.

4. **Instrumento público**—La declaración del oficial pú-

El equilibrio de las contiendas judiciales exige que se articulen los hechos al entablar la demanda y al contestarla. El debate debe ser librado en condiciones de la más perfecta igualdad, de manera que todo hecho que sirva de base al proceso pueda ser materia de réplica y de prueba. Es por esto que el art. 216 del Cód. de Proc. establece que la sentencia debe contener decisión expresa y precisa de acuerdo con las acciones deducidas en juicio.

1—Art. 993 del Cód. Civ.

2—Véase: *Apellido*, núm. 1.

4—En escribano fué llamado por una persona que quería otorgar testamento, y después de otorgado falleció. Una hija del causante de-



blico sobre hechos confesados en su presencia por los otorgantes de un instrumento público forman prueba, pues no importa una modificación de lo en él declarado aun cuando sea en sentido contrario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 347, Ser. 4ª.

Instrumento público—Véase: *Acto simulado*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núms. 8, 9, 26 y 31—*Condominio*, núm. 2—*Contrato privado*, núm. 1—*Dependientes*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núms. 18, 19, 20 y 21—*Escritura*, núm. 2—*Escepción de inhabilidad de título*, núms. 5 y 10—*Filiación natural*, núm. 10—*Información supletoria*, núm. 5—*Inhabilidad de título*, núm. 1—*Notificaciones*, núm. 2—*Obligación de hacer*, núm. 6—*Prescripción en segunda instancia*, núm. 1—*Prueba por instrumento público*, núms. 1 y 2—*Prueba preconstituida*, núm. 1—*Simulación*, núm. 9—*Sociedad sobre inmuebles*, núm. 1—*Tradición*, núm. 1.

Intención criminal—Véase: *Calumnia*, núm. 1.

1. **Intendencia municipal**—Las cuentas por afirmados aunque visadas por la Intendencia Municipal, solo tie-

dujo acción de filiación fundada en la posesión de estado de hija natural, y entre los testigos presentados se designaba al escribano que autorizó el testamento, quien declaró que el testador dijo, en momentos en que se encontraba presente, que no quería dejar nada á su hija porque no había ido á verle durante su enfermedad. Esta declaración fué impugnada fundándose en el art. 992 del Cód. Civ., el cual establece que el oficial público que estende un documento no puede variar ni alterar el contenido de él. Es claro que aquí no se trataba de alterar ni de variar el documento que fué escrito y redactado como el testador lo quiso. Ninguna ley inhabilita á ese oficial publico para declarar sobre hechos extraños á ese acto distintos al testamento. Lo que la ley prohíbe es que el oficial público pudiera decir que los hechos no pasaron como él dice en el instrumento público ó que las circunstancias esteriorres ocurrieron de distinta manera.

1—Véase: *Afirmado*, núm. 3.



nen fuerza ejecutiva cuando para su expedición se han llenado las prescripciones de la ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 383, Ser. 4^a.

1. **Interdicto**—Es procedente la condenación en costas contra el actor, cuando el interdicto ha sido rechazado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 117, Ser. 3^a.

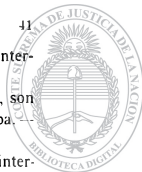
2. **Interdicto**—Debe declararse la nulidad de la sentencia dictada en el interdicto si se omite la prueba ofrecida y pedida por la parte en el acto del juicio verbal.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 318, Ser. 3^a.

3. **Interdicto**—La citación de testigos puede pedirse en

1.—En los interdictos como en el juicio ejecutivo, no es aplicable la disposición de la segunda parte del art. 221 del Cód. de Proc., que autoriza a los jueces para exonerar de las costas al vencido siempre que encuentre mérito para ello. La imposición de las costas en estos juicios es de precepto legal—arts. 578, 583 y 507 del Cód. de Procedimientos.

2.—Convocadas las partes á juicio verbal de acuerdo con lo prevenido en el art. 585 del Cód. de Proc., el demandado contestando la acción deducida, solicitó como medida de prueba la agregación de los títulos de propiedad que estaban en el Banco Hipotecario Nacional, y la de un expediente existente en el Archivo General, donde constaba la mensura del terreno materia del interdicto. El Juez *a quo* recibió en el acto del comparendo la prueba de testigos que fué ofrecida, dictando después de los alegatos, el fallo correspondiente que fué recurrido por apelación y nulidad, fundándose este último en que el Juez había dictado sentencia sin ordenar la producción de la prueba ofrecida. La sentencia no pudo dictarse en la forma que lo fué, sin tener á la vista las probanzas ofrecidas y sin apreciar el mérito de ellas, pues siendo procedente esa prueba en los términos del art. 585, por haber sido solicitada en la oportunidad debida no pudo prescindirse de ella—arts. 72 y 100, inc. 4^o—no pudo prescindirse de ella sin incurrir en nulidad—art. 237 del Cód. de Proc.

3.—La disposición de los arts. 571 y 577 del Cód. de Proc., no importa privar á las partes del derecho de solicitar del Juzgado los medios conducentes á la comparecencia de los testigos cuando éstos se negaren á concurrir voluntariamente.



el acto del juicio verbal decretado para el juicio de interdicto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 213, Ser. 3ª.

4. **Interdicto**—En el juicio sumario de interdicto, son apelables los autos que deniegan diligencias de prueba.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3ª.

5. **Interdicto**—En el acto del juicio verbal del interdicto las partes pueden pedir se agregue testimonio de los documentos públicos que convengan a su derecho.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3ª.

6. **Interdicto**—Los testigos que no comparecen a la citación en el juicio sumario de interdicto, pueden ser nuevamente citados á solicitud de parte.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3ª.

7. **Interdicto**—Procede la citación de los testigos que se hayan negado á concurrir con la parte al juicio de interdicto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 162, Ser. 3ª.

8. **Interdicto**—Las pruebas en el juicio de interdicto deben ser presentadas en la primera audiencia, aun cuando se reciban en las siguientes no pueden producirse nuevas pruebas que no hubieran sido ofrecidas en la primera.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 378, Ser. 4ª.

4— Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 9.

5— Véase: *Documentos públicos*, núm. 2.

6— De acuerdo con la jurisprudencia establecida. — Véase el núm. 3.

7— Véanse los núms. 3 y 6.

8— La audiencia designada para la sustanciación del juicio de interdicto fué suspendida por lo avanzado de la hora, después de haberse producido parte de la prueba ofrecida: debía continuar al día siguiente: en este segundo día se *ofreció* la prueba de testigos, la que no fué admitida por no haber sido ofrecida en el día de la primera convocatoria, que es á la que deben concurrir las partes á rendir todas aquellas probanzas que convengan á sus respectivos derechos—arts. 571 y 576 del Cód. de Proc.—Si bien la prueba puede no *producirse* en el mismo día de la convocatoria, ella debe *ofrecerse*, y si no se cumple con este requisito no es posible admitirla después.

9. **Interdicto**—Si la prueba, en el interdicto, obliga á la división de la audiencia, las partes pueden presentar en

9.—Esta resolución está en abierta oposición con el número precedente: el Juez de 1ª Instancia no hizo lugar á la prueba ofrecida en el comparendo posterior al del día señalado por primera vez, fundándose testualmente en las mismas palabras empleadas al resolver el sumario precedente, pues los hechos y antecedentes eran exactamente iguales. Sin embargo, la Cámara confirmó el sumario contenido en el núm. 8 por los fundamentos aducidos por el señor Juez de 1ª Instancia, revocando la que nos ocupa fundado en las consideraciones siguientes: que decretado el comparendo que previene el art. 575 del Cód. de Procedimientos y oídas en él las partes, se procedió á recibir la prueba ofrecida por el actor, suspendiéndose el acto por la hora avanzada, después de haber absuelto posiciones el demandado y de prestar declaración dos testigos presentados por el primero.—Que señalado un nuevo día para la continuación del comparendo, se empleó todo él en practicar diligencias de prueba solicitadas por el actor, suspendiéndose también el acto por el mismo motivo antes espresado.—Que reabierta la audiencia, el demandado ofreció á su turno la declaración de dos testigos, á lo que se opuso el actor alegando que esos testigos no habían sido presentados el día que empezó el comparendo.—Que es de observarse que el acta que se labró en ese comparendo no se refiere á uno nuevo sino á la continuación del iniciado anteriormente y el que fué dos veces suspendido por el motivo ya enunciado.—Que de consiguiente, tratándose del mismo comparendo, el demandado ha cumplido con el deber que la ley le impone, teniendo lista su prueba para ser recibida una vez concluido el examen de la presentada por el actor. Estas dos resoluciones, tan abiertamente opuestas, fueron dictadas con un mes de intervalo entre una y otra, y por los mismos camaristas señores Bustos, González del Solar y Giménez. Sin embargo, no es de extrañarse esto tratándose de un juicio cuya índole ha sido desnaturalizada por la jurisprudencia de los tribunales, apesar de que el Cód. de Procedimientos ha querido que este juicio termine en una sola audiencia, debiendo en ella ofrecerse, admitirse y producirse la prueba. El procedimiento seguido en los interdictos varía según quien sea el Juez que entiende en su conocimiento, y según el giro que las partes litigantes les imprimen; pero es evidente que el orden de proceder debe ser el mismo que el del juicio ordinario, con escepción de que todo debe hacerse en una audiencia. Así, convocadas las partes á juicio verbal, una vez contestada la demanda, deben ellas *ofrecer* sus pruebas en esa au-





cualquiera de los comparendos testigos no solicitados en los anteriores.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 250, Ser. 4^a.

10. **Interdicto**—La jurisdicción civil es la única competente para entender en un interdicto sobre inmuebles, aunque la acción se dirija contra una sociedad mercantil.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 75, Ser. 4^a.

Interdicto—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 6.

1. **Interdicto de adquirir**—No procede si el que acciona

diciencia, empezando por el actor y después el demandado. Ofrecida la prueba por ambos, se procederá á producirlas. Si para su diligenciamiento se hace necesario suspender la audiencia, señalándose nueva día, esa audiencia es al solo objeto de producir la prueba, pero no se podrá ofrecer ninguna. Por consiguiente, el sumario consagra un principio que no es posible aceptar sin atentar contra el espíritu que ha guiado al legislador al reglamentar este juicio. Si se admitiera el principio sentado en el sumario, el procedimiento no terminaría jamás: se haría eterno con evidente violación de la ley.

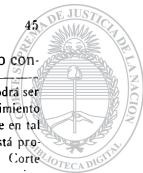
10—Los interdictos, cualquiera que sea su clase y dominación, son acciones civiles, como que tienden á adquirir, retener y recobrar la posesión, ó impedir una obra nueva, hechos todos del dominio del derecho común. Siendo esto así, no puede sostenerse que la jurisdicción comercial, privativa por su naturaleza, haya de ser la competente no obstante de llevarse la demanda contra el representante de una persona jurídica.

1—El actor se presentó al Juzgado de 1^a Instancia pidiendo se le acordara la posesión de una finca comprada al demandado y manifestó que solicitaba esa medida porque el inquilino ocupante de ella se negaba á reconocerlo en su calidad de propietario por no haberle sido acordada la posesión formal del inmueble comprado. El Juez, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 570 del Cód. de Proc., convocó á las partes á juicio verbal; notificado de esta resolución, el vendedor y el inquilino se opusieron á la celebración del comparendo, deduciendo el vendedor la excepción de litispendencia por haber interpuesto demanda de nulidad de la escritura de compraventa acompañada por el demandante y alegando, por otra parte, que, pendiente el juicio petitorio, no podía tramitarse el posesorio, correspondiendo solamente al Juez del petitorio tomar medidas provisionales relativas á la guarda de la cosa litigiosa, según el art. 2483 del Cód. Civ. El inquilino se opuso tam.



no ha tenido jamás la posesión de la cosa—Jur. Civ., tom. 5, pág. 180, Ser. 3ª.

bién al comparendo, alegando: que el objeto de la demanda respecto á él, era obtener el desalojo de la casa que ocupaba en calidad de locatario y en seguida adquirir la posesión, pero como acreedor de las mejoras que había hecho sobre el terreno, había promovido demanda de retener hasta que se le paguen esas mejoras, encontrándose pendiente el juicio de la resolución definitiva de la Cámara, por cuya razón invocaba también la litispendencia. Desechadas las pretensiones del demandante é inquilino y realizado el juicio verbal, el Juez pronunció sentencia rechazando el interdicto sin perjuicio de mejor derecho. Nuestro Código de Proc. exige—art. 564—como requisitos indispensables para la procedencia del interdicto que nos ocupa, los siguientes extremos: 1º que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho; y 2º, que nadie posea á título de dueño ó de usufructuario los bienes cuya posesión se pide. Este precepto concuerda con el artículo 326 de la Ley de Proc. de la Justicia Federal y con el 624 de la Ley de Enjuiciamiento española. Toda la cuestión se reduce, pues, en el presente caso, á averiguar si concurren los requisitos antes espuestos; si bien el actor había presentado un título bastante, el demandado poseía el inmueble á título de dominio y, por consiguiente faltaba el segundo requisito del art. 564 citado. Para demostrar la exactitud de esta conclusión, es bastante establecer la verdadera inteligencia que, resolviendo y ocupándose de casos análogos, han dado los tribunales y los autores á la disposición citada. La Suprema Corte de Justicia Nacional, en el caso que se registra al tomo 21, pág. 169, Serie 2, de sus fallos, adoptando la opinión de Manresa y Reus, tomo 3, pág. 590, y la de Caravantes, tomo 3, pág. 240, ha dicho: «No basta un título cualquiera que acredite el dominio sino que ha de ser suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho». Solo dos casos encontramos en que el Juez informado de la verdad, confiera la posesión al que tenga derecho á ella procediendo sumariamente. Hoy no basta presentar cualquier título traslativo de dominio; ha de ser precisamente el de heredero ó sucesor del finado para que se dé lugar á este interdicto. En las ventas, donaciones entre vivos, permutas, etc. el que trasfiere el dominio, está obligado á entregar la cosa al que lo adquiere, y mientras esa entrega no se verifique, ya sea material, ya sea simbólicamente, no queda consumado el contrato. Hecha la entrega entra el adquirente en posesión de la cosa y de consiguiente es innecesario el interdicto de adquirir: y si el vendedor se resiste á la en-



2. Interdicto de adquirir—Procede este interdicto con-

trega, que es precisamente lo que ocurría en el caso del sumario, podrá ser demandado por el comprador en juicio ordinario, para el cumplimiento de la obligación; pero nunca podrá este utilizar el interdicto que en tal caso se dirige contra el que posee á título de dueño, lo cual está prohibido por la ley. En igual sentido resolvió también la Suprema Corte el caso que se registra en el tomo 13, pág. 19, Ser. 2^a. Llerena en su importante obra «Concordancias y Comentarios del Cód. Civ. Argentino», tomo 4, pág. 133, ocupándose del art. 2468 del Cód. Civ., según el cual el que no tiene sino un derecho á la posesión, no puede, en caso de oposición, tomar la posesión de la cosa y debe demandarla por las vías legales, después de invocar los fallos que antes se han citado, manifiesta su opinión sobre el punto en los siguientes términos: «Tenemos entonces que el que sólo tiene un título á la posesión sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el art. 577 del Cód. Civ., es decir, sin que se haya hecho tradición, no puede entablar acciones posesorias ni contra el mismo vendedor ni contra terceros poseedores». El sumario está equivocado, pues, para que el interdicto de adquirir sea procedente no se requiere que el que lo pida haya tenido la posesión de la cosa; precisamente el art. 564 del Cód. de Proc., ha establecido este interdicto para que el que no tiene la posesión la adquiera.

2—El interdicto versaba sobre un terreno en el cual el demandado había edificado una casita, pero reconociéndose en el actor la propiedad y el derecho de poseer, por medio de una carta de la que resultaba que aquel contra quien se dirigía el interdicto no poseía el inmueble á título de propietario ni de usufructuario, teniendo su posesión el carácter de precaria. En la mencionada carta se reconocía no solo que el terreno materia del litigio era de propiedad del actor, sino que se manifestaba también que estaba dispuesto á entregárselo al actor, pues se había ubicado en él por informes equivocados. La Cámara declaró procedente el interdicto por mayoría de votos. La minoría dijo: Que si bien resultaba de los antecedentes del juicio que el actor había justificado el primer extremo requerido por el art. 564 del Cód. de Proc., no había sin embargo justificado el segundo, es decir, que nadie posea á título de dueño ó usufructuario el bien reclamado. En un interdicto no se discute la propiedad sino la posesión, y por consiguiente la prueba debe versar tan solo sobre este último punto como lo tiene resuelto la Cámara y como lo sostienen los prácticos, entre otros Llerena, tom. 4^o pág. 133; Caravantes, tom. 3^o, pág. 240 y Manresa y Reus, tom. 3^o pág. 590; y la Jurisprudencia de la Suprema Corte, tom. 2^o, pág. 169,



tra el detentador que reconociendo la propiedad en el actor escusa su posesión con un error de hecho.— Jur. Civ., tom. 6, pág. 271, Ser 4^a.

Ser. 2^a y tom. 13, pág. 19, Ser. 2^a. El que solo tiene un título a la posesión sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el art. 577 del Cód. Civ., es decir, sin que se haya hecho tradición, no puede entablar acciones posesorias ni contra el mismo vendedor ni contra terceros poseedores. La mayoría resolvió en el sentido del sumario, fundándose en que la Suprema Corte de Justicia Nacional ha declarado en la causa CII que se registra en la pág. 32, tom. 2^o, Ser. 2^a de sus Fallos, que procede el interdicto de adquirir cuando contra los títulos de dominio no se alega excepción legítima por el detentador. Dice que «se trata de un caso análogo en el presente juicio y es por consecuencia de aplicación el mismo principio sobre que se basó aquel fallo.» El actor fundaba su acción en el dominio que tenía sobre el terreno ocupado por el demandado y una declaración de éste, reconociendo haberlo ocupado por error en vez de otro lindero, ofreciendo restituirlo en el momento que se lo pide. El demandado no había negado estos extremos de la demanda, pues si bien en el escrito que presentó, manifestó que la carta que había dirigido al actor reconociendo el dominio de su terreno y ofreciendo desocuparlo inmediatamente, no tenía ningún valor por pertenecer ese terreno a su señora madre, según las escrituras acompañadas, es de notar que no compareció a la audiencia decretada y que en ella se justificó por el actor la ocupación del terreno por parte del demandado. No se trata, por consiguiente, de un inmueble perteneciente a la madre del demandado, es decir, de una persona extraña en el juicio, ni de actos ejecutados por ésta. Por el contrario, resultaba que la demanda había sido dirigida única y exclusivamente contra el detentador del terreno a que ella se refería, lo que se había justificado cumplidamente. Ahora bien, requiriéndose por la ley que para que proceda el interdicto de adquirir son requisitos indispensables la presentación de un título suficiente para la posesión con arreglo a derecho y que nadie posea como dueño ó usufructuario los bienes cuya posesión se pide, no podía evidentemente ofrecer duda alguna la justicia de la sentencia pronunciada por el Inferior cuyos agravios no se habían demostrado en segunda instancia. Los extremos exigidos por el art. 564 del Código de Proc., se justificaron plenamente, resultando que es el demandado quien ocupaba el terreno cuestionado reconociendo en el actor su dominio y posesión y contra quien procedía el interdicto deducido.



3. Interdicto de adquirir—Para que el interdicto de adquirir los bienes de una sociedad, deducido por los que se dicen sus mandatarios, sea procedente, deben justificar que el mandato ha sido conferido por quien tiene autoridad legal, en la forma y con las solemnidades que los estatutos sociales requieren.—Jur. Civ., tom. 8, página 341, Ser. 4^a.

4. Interdicto de adquirir—Es improcedente el interdicto de adquirir la posesión si el poseedor tiene, por sentencias ejecutoriadas, reconocido el derecho de retención, en virtud de las mejoras hechas en la cosa.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 140, Ser. 4^a.

1. Interdicto de obra nueva — Es procedente siempre, contra el que intenta la obra, aunque alegue obedecer

3—Véase: *Estatutos sociales*, núm. 1.

4—Véase: *Derecho de retención*, núm. 1.

1—El final de la nota ilustrativa del art. 2482, Cód. Civ., dice: «la acción posesoria es intentada válidamente contra el que ha cometido personalmente un acto de turbación, aunque él pretenda no haber obrado sino en el interés y por orden de un tercero.» Estas palabras son tomadas de la nota primera al párrafo 290 de Zachariae, cuyo testo, dice: la acción posesoria debe dirigirse contra el que turba la posesión por sí ó por otro. Enumerando Savigny: «De la posesión», pág. 404: las condiciones requeridas para poder invocar el interdicto de despojo, observa que como tercera condición, es indispensable que se ejerza la violencia por el demandado mismo; regla que sufre varias escepciones; siendo la primera, que aquel por cuya voluntad se ejerció la violencia, como por ejemplo, el que la encarga á otro, tiene la misma responsabilidad que este último. Pothier, tom. 8º, pág. 370, se espresa en estos términos: «Aun cuando el que ordena ó solamente aprueba lo que se hace en su nombre para despojar á alguno por violencia, es considerado como autor del despojo y responde por consiguiente de la acción del reintegro, esto no impide que los que han ejercido la violencia aunque en su nombre y por su orden, no se hallen igualmente obligados por la acción al reintegro solidariamente con él: por que si es responsable á consecuencia de la orden dada, los autores inmediatos son igualmente responsables de haberlo ejecutado.

órdenes de un tercero.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 96, Serie 3ª.

2. Interdicto de obra nueva.—Las modificaciones y transacciones que la Municipalidad lleve á cabo sobre una

2—El interdicto tenía por base la existencia de una calle pública, á la que daba frente la propiedad del actor, y en la cual, el demandado hacia algunas construcciones encerrando aquella propiedad y dejándola sin frente á la vía pública que tenía en una extensión de diez varas próximamente. Alegaba, además, que dicha calle había sido ocupada considerándola el demandado como de su propiedad en virtud del arreglo que éste decía haber hecho con la Municipalidad, abriéndose otra nueva calle á continuación con frente á la propiedad del demandado; que ese arreglo no pudo celebrarse afectando derechos adquiridos por el demandante, como no pudo tampoco la Municipalidad enajenar el terreno ocupado por aquella calle en una forma contraria á las prescripciones de la ley, ni celebrar transacción sobre ella, por tratarse de un bien público. El demandado negando estos hechos dijo, que la calle designada como vieja no había existido, sino únicamente la que aparecía como nueva y que era propietario á título de compra en remate público de los terrenos sobre los cuales edificaba. Correspondía indudablemente al actor la justificación de los extremos alegados como base de su demanda y esta justificación no se produjo en condiciones de acreditar la procedencia del interdicto, conforme á lo dispuesto por el Código Civil en sus arts. 2498 y 2499 que invocaba en su favor el actor. Según resultaba de un informe espedido, la calle mencionada no había existido como vía pública abierta por la Municipalidad y ésta negó con tal motivo la línea pedida para construir un cerco en la misma, procediendo á la traza de la nueva calle previos algunos arreglos consistentes en la exoneración del pago del afirmado en cambio del terreno cedido para ella. El mismo informe decía existir constancias en la Municipalidad de que los terrenos del actor daban frente á la vía pública y que existían constancias de que los terrenos referidos daban frente á una calle contigua á la que se abrió últimamente, pero nó de que el trazado de aquella calle hubiera sido aprobado por la Municipalidad; agregando que cuando se trazó la nueva calle no se tuvo en cuenta la que existía al lado por no ser considerada como calle municipal. Estos antecedentes de autoridad irrecusable en cuanto emanaban de la Municipalidad, contradecían las afirmaciones de la demandada en cuanto á la existencia de una calle pública á la que decía daba frente la propiedad del actor. La mayoría de la Cámara dijo,





calle no reconocida oficialmente, no pueden fundar un interdicto de obra nueva contra el tercero contratante,

que aun admitido que esta calle hubiera existido como vía pública, y que la Municipalidad hubiera cambiado su traza, este hecho no podía servir de base para hacer prosperar el mismo interdicto, porque como lo decía la misma sentencia de 1ª Inst., la Municipalidad podría en uso de sus atribuciones que le son propias, cambiar la traza de esa calle, como puede abrirlas en donde no existan, en razón de un interés público, dando entonces lugar á otras acciones por parte de los que se considerasen damnificados cuando por esos actos se atentara contra su propiedad ó se desconociera derechos legítimamente adquiridos. Otro de los camaristas dijo, que la consideración que principalmente decidía su voto por la afirmativa y sin que ello importara en manera alguna aceptar las graves conclusiones precedentes en cuanto á las facultades de que juzga investida á la Corporación Municipal, es la falta de prueba de parte del actor en lo que se refiere á la posesión del terreno. Las acciones posesorias corresponden solamente al poseedor de inmuebles y tienen por único objeto, según la doctrina del art. 2487 y concordantes del Cód. Civ., obtener la restitución de la posesión ó la manutención de la misma en su plenitud y libertad. Si el demandado obstruyó una vía pública en perjuicio del derecho de otro y consiguientemente de la comunidad, sus gestiones ó reclamos han debido encaminarse por otros rumbos, pero bastaba, á su juicio, establecer el antecedente para hacer manifiesta la improcedencia de la acción interpuesta. Fundada la mayoría en estas consideraciones, declaró improcedente el interdicto. La minoría dijo: «como lo establecen los títulos con que se ha instruido la acción, el demandante es poseedor de un terreno que por uno de sus rumbos linda con el demandado, calle en medio. Tanto esa posesión como la existencia de la calle son incuestionables en presencia de las declaraciones, que dan razón satisfactoria de sus dichos y no dejan lugar á duda sobre la verdad de aquellos extremos. En orden á la existencia de la causa es concluyente también el informe de la Sección Municipal de Delineaciones. Con los mismos testigos se ha probado además que el demandado practicó obras que cerraban el terreno del demandante. Y como por otra parte el demandado no negó la existencia de las obras, defendiéndose con la inexistencia de la calle, y como además es de verdad notoria que privar á un propietario de las ventajas de lindar con una calle, importa inquietarlo en el goce de su posesión, nada obsta, á mi juicio, para que, declarando cumplidos los requisitos del art. 574 del Cód. de Proc., se haga lugar al interdicto deducido. ¿Qué se opone,



mientras la edificación no afecte el cuerpo de la propiedad perjudicada por la desviación de la calle.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 385, Ser. 4^a.

entre tanto, á ese resultado, para decidir la opinión de la mayoría del Tribunal en contra de las peticiones de la demanda? Que la calle que motiva el juicio no era pública; que no había sido autorizada por la Municipalidad. Pero esto no autoriza á un propietario lindero para turbar la posesión de su vecino, principalmente cuando él no ha demostrado ni su propiedad ni su posesión sobre el terreno convertido accidentalmente en calle. ¿Que el querellante no ha obtenido delineación para edificar sobre la calle en que ha levantado sus construcciones? Pero no es la acción de la autoridad administrativa para reprimir la infracción de los reclamantes municipales la que ejercita al presente. ¿Que el cambio de traza de una calle ordenado por la Municipalidad no puede dar lugar á un interdicto? Lo contrario ha resuelto la Cámara varias veces declarando con nuestro codificador en cuanto al art. 44 que «el poseedor de un inmueble desposeído violentamente á nombre de una Municipalidad obtiene contra ella el interdicto *de vi* si ella obtiene el todo ó parte de un inmueble.» Por lo demás, bueno es observar que ni el interdicto se dirige contra la Municipalidad ni consta en manera alguna que las construcciones que causan la turbación de la posesión hayan sido ordenadas por la Municipalidad ni directa ni indirectamente, pues el hecho de abrir una calle nueva, ni implícitamente importa, el de que se hayan cerrado otras, que por lo mismo que se dice no ser públicas, no deben dar lugar á ingerencia municipal y sí al respeto y discusión, ante los jueces comunes, de los derechos privados que la clausura arbitraria puede afectar. Se opone, por último, que no se ha probado la posesión del terreno en que se levantaban las construcciones y que los interdictos son acordados para obtener la restitución de la posesión ó la manutención de la misma. Lo primero se contesta, observando que no se ha invocado ni pretendido que el terreno en que se levantan las construcciones sea poseído por el actor; no se trata de recuperar la posesión sino de hacer cesar los motivos de perturbación en la posesión causados por ese fundo *no poseído por el demandante*. Y precisamente procede el interdicto, porque este se da no solo para recuperar sino también para la manutención de la posesión *en su plenitud y libertad*. Ahora bien, que exista turbación en la posesión y que proceda el interdicto de retener en un caso como el presente, en que se molesta al poseedor desde un fundo vecino, lo *proclama* terminantemente el art. 2499 del Cód. Civ., que dice: «Habrá turbación de la



3. Interdicto de obra nueva.—Para que el interdicto de obra nueva ó despojo pueda prosperar, el despojado debe justificar que ha tenido la posesión por lo menos de un año antes de la obra.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 336, Serie 4^a.

4. Interdicto de obra nueva.—La competencia del Juez posesión cuando por una obra nueva que se comenzara á hacer en inmuebles que no fuesen del poseedor, sean de la clase que fuesen, la posesión de éste sufiere un menoscabo que cediese en beneficio del que ejecuta la obra nueva.» En contestación al argumento de que es otra la acción que debía haberse intentado para impedir la obstrucción de una vía pública, también es muy claro nuestro Codificador en cuanto al art. 2482, cuando dice: «La acción posesoria es intentada válidamente contra el que ha cometido personalmente un acto de turbación... El demandado no puede librarse del juicio escepcionándose con el mandato que hubiese recibido. En todo caso la acción deducida no se ha dirigido á remover un obstáculo de la vía pública perjudicial para la comunidad sino dañoso para el goce tranquilo de la posesión privada, que la ley garante en tanto que no perjudique á nadie.»

3.—Para que la posesión merezca la protección de la justicia, se requiere que sea anual—art. 2473 del Cód. Civ.—que sea adquirida sin violencia—2478 ibid—que sea pública, á título de propietario, continua y no interrumpida—arts. 2479 á 2481 ibid—porque solo reuniendo estas condiciones reviste un carácter que la hacen respetable.

4.—En manera alguna podemos aceptar como correcto el principio sentado en el sumario. La competencia se establece por el precio que el actor fija á la cosa materia de la acción, como lo establece el art. 14 de la Ley Org. de los Trib. de 1886. Cuando la cosa demandada no sea una cantidad de dinero, dice el art. 14 citado, el actor deberá manifestar su valor bajo juramento al entablar la demanda. No puede por consiguiente aceptarse como base el precio de adquisición del inmueble, pues éste puede sufrir variaciones tan sensibles que llevaría los asuntos más valiosos á una jurisdicción abiertamente incompetente. Así un inmueble adquirido en dos mil pesos, puede valer en la época de la demanda veinte mil, lo que haría incompetente á la justicia de Paz que entiende hasta dos mil pesos, para conocer en el juicio. La Cámara dijo, que debía además tenerse presente para establecer la competencia, el art. 14 citado, lo que demuestra por otra parte el error contenido en el principio sentado en el sumario.



en un interdicto de obra nueva, se rige por el precio de la escritura de compraventa del terreno y no por el de la obra á construir.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 17, Ser. 4^a

1. **Interdicto de recobrar**—Es procedente siempre que clandestinamente se pierde la posesión.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 52, Ser. 3^a

2. **Interdicto de recobrar**—Es procedente, siempre que el poseedor actual reconoce la posesión anterior del demandante y que clandestinamente procedió á tomarla.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 58, Ser. 3^a.

3. **Interdicto de recobrar**—Para que éste ó el de retener puedan prosperar, debe justificarse la posesión civil de la cosa.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 93, Ser. 3^a.

4. **Interdicto de recobrar**—Los Tribunales son compe-

1—Art. 581, inc. 2º del Cód. de Proc.

2—Véase nota precedente.

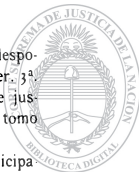
3—Convocadas las partes al juicio verbal de que nos habla el artículo 575 del Cód. de Proc., la parte demandada espuso que el actor nunca tuvo la posesión del inmueble y que solo era un simple agregado á otro señor que á su vez se titulaba inquilino. Si bien es cierto que en los interdictos de retener y recobrar no es necesario justificar el título posesorio en virtud del cual se deducen, no lo es menos que para que ellos procedan, debe acreditarse el hecho y la existencia de esa posesión por parte de quien asegura tenerla—art. 2494 del Cód. Civ.—aplicable á este caso. Si esa posesión no se comprueba, carece de base el Juzgado para apreciar el mérito de ella y por consiguiente tampoco puede apreciar el derecho que puede asistirles para instaurar su acción. Además el demandado lejos de rechazar la aseveración que se hizo de que era un simple agregado ó inquilino, solo se limitó á expresar que aun en el supuesto de que poseyera á nombre de un tercero, siempre tendría derecho á deducir el interdicto. Ese silencio acerca de un hecho capital debe considerarse como un reconocimiento tácito del hecho aseverado. El que es mero tenedor de la cosa carece de derecho para deducir interdictos, porque no tiene la posesión civil de la cosa, como lo tiene resuelto la Cámara. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Interdicto de retener*, núm. 2.

4—El presidente interino de la sociedad «Unión y Benevolencia» se



tentes para entender en un interdicto de recobrar deducido

presentó judicialmente quejándose de que varios individuos miembros y extraños de la referida sociedad, mediante una elección fraudulenta de empleados, en que no se habían guardado las reglas prevenidas en los estatutos se habían posesionado violentamente de la casa en que aquella tenía sus reuniones y que le pertenece en propiedad y posesión, impidiéndole después la entrada, por lo que venia en deducir el interdicto de despojo para que se restablezca a la sociedad que representa en la posesión que le corresponde. El Juez de lo Civil, considerando que que estas cuestiones corresponden a la decisión de la misma sociedad «Unión é Benevolencia» reunida en asamblea general, se declaró incompetente para entender en el asunto, la cual resolución fué apelada. Esta resolución es equivocada porque dados los términos de la demanda resulta que dicha sociedad ha sido efectivamente despojada de una finca de su propiedad y que de consiguiente el interdicto de que se trata sería procedente aun contra los mismos miembros de la asociación, que asumiendo indebidamente su representación se hubiesen apoderado con violencia de aquella. De las diversas diligencias que constaban en autos, resultó debidamente constatado que el demandante se encontraba investido del cargo de presidente de la referida sociedad, correspondiéndole en consecuencia su representación con arreglo a sus estatutos, y que en este cargo había sido sustituido por el demandado. No es el caso, ni de oportunidad, la averiguación de los hechos que han motivado el cambio de esa representación y si ella ha importado ó no el ejercicio de un derecho legítimo y con arreglo a lo que los mismos estatutos confieren a la Asamblea de la sociedad para establecer la competencia de los Tribunales, pues dada la legítima representación que correspondía al demandante para que pueda resolverse si ella ha cesado, es forzoso dejar establecido en el juicio la procedencia ó improcedencia del interdicto y en consecuencia la incompetencia de la autoridad pública a la que se ha recurrido en garantía de los mismos derechos por la falta de aquella representación. Si bien es verdad que los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica, como es la de que se trata, son regidos por el contrato, por su objeto ó por la disposición de sus estatutos, según lo establece espresamente el Cód. Civ., en su art. 40, no lo es menos que tratándose del desconocimiento de esos derechos cuando se dicen usurpados por personas extrañas, puede demandarse el auxilio de la autoridad pública para mediante su acción, obtener su mantenimiento y libre ejercicio, sin que por esto puedan entenderse vulneradas las atribu-



cido por el presidente de una sociedad ilegalmente despojada del local social.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 234, Ser. 3ª.

5. Interdicto de recobrar—Procede siempre que se justifique la posesión y el despojo violento.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 426, Ser. 3ª.

6. Interdicto de recobrar—Procede contra la Municipalidad si toma para vía pública un terreno de propiedad particular sin previo juicio de espropiación.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 320, Ser. 4ª.

7. Interdicto de recobrar—Es procedente, siempre que justificada la posesión lo sean, los actos en que aquel se funda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 328, Ser. 4ª.

8. Interdicto de recobrar—Reconocida la posesión anual

ciones que aquellos reglamentos acuerdan á la Asamblea de la sociedad. De no ser así, además de que de hecho vendría á crearse una soberanía extraña dentro la soberanía misma de la Nación, resultaría también que aun en el caso de una usurpación ó despojo de los derechos ó bienes de una persona jurídica por parte de sus miembros ó de extraños, que hubieran asumido su representación indebidamente, la autoridad pública no podría intervenir para reparar el atentado, hacer respetar el ejercicio de los derechos de sus miembros y mantener á sus legítimos representantes en el ejercicio de sus funciones. Además, sería de todo punto ilusorio é ineficiente, el recurso que indicaba el Juez de 1ª Inst. para repararse el atentado de que se queja el presidente provisorio, porque ni la sociedad podría reunirse quizá, ni mucho menos funcionar con regularidad en asamblea general, mientras impere en ella la violencia, y sus legítimas autoridades no sean repuestas en el ejercicio de sus funciones, lo cual nadie podría hacer, ni la autoridad pública, sino tomando judicialmente conocimiento del asunto y decidiendo quiénes son los legítimos representantes de la sociedad á los cuales en su caso correspondería presidir dicha asamblea general.

5—Véase: *Despojo*, núm. 1.

6—De acuerdo con la ley y con la jurisprudencia sentada por los Tribunales. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Interdicto de despojo*, núm. 1.

7—Art. 581 del Cód. de Proc.

8—De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 2456 y 4038 del Código Civ.



del demandado, el interdicto de despojo es improcedente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 320, Ser. 4^a.

9. Interdicto de recobrar—O de despojo, es improcedente cuando el desposeído lo ha sido en virtud de una sentencia de desalojo dictada en juicio en que ha sido parte.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 102, Ser. 4^a.

9—Según disposición del art. 581 del Cód. de Proc., para que pueda tener lugar el interdicto de recobrar ó de despojo, es indispensable no solo que el que lo intente haya estado en posesión ó tenencia de la cosa que se demanda, sino también que haya sido despojado con violencia ó clandestinamente de esa posesión. En el caso del sumario el interdicto se fundaba en el hecho de haber sido desalojado de la propiedad en cuestión por mandato de un Juez de Paz y á pedido de parte, según el actor manifestaba en su escrito de demanda. Siendo esto así carece de fundamento la acción deducida desde que no concurren para ello los requisitos que la ley exige, ó sea el despojo alegado; pues siendo cierto, como lo reconocía el actor, que el lanzamiento llevado á cabo lo había sido por orden judicial, la violencia á que alude no ha existido entonces de parte de aquel á quien demanda, el que solo se había limitado á pedir el desalojo ejercitando un derecho que ha creído tener, derecho que le fué reconocido en juicio. Siendo evidente que el desalojo decretado en juicio, no puede ser considerado como despojo, pues la violencia ó clandestinidad no existe en las resoluciones judiciales, desde que la misión de la justicia es dar á cada uno lo que le corresponde: el interdicto deducido es improcedente por no ajustarse los hechos que lo fundan á lo prescripto en el artículo citado—art. 581—cualquiera que sea la prueba rendida para acreditar la posesión de que los actores se dicen privados, la que podría servir para fundar otra acción que no sea la deducida. La teoría sustentada por la Cámara en el caso que nos ocupa, de que las medidas judiciales no pueden dar lugar á los interdictos, por cuanto ellas, sean cuales fueren, no pueden constituir despojo por carecer del carácter de violencia ó clandestinidad que la ley exige, no está de acuerdo con los principios sentados hoy por ese Tribunal. Es cierto que se pueden citar resoluciones que consagran aquel principio, pero también hay sentencias que han sentado una teoría contraria. Pueden verse los casos resueltos en pro y en contra del sumario, la nota al verb. *Interdicto de retener*, núm. 1. El presente sumario está en abierta oposición con lo resuelto por la Cámara en este último caso citado.

10. Interdicto de recobrar.—Deducido por un sublocatario contra el propietario, es improcedente si éste no

10.—Es una doctrina perfectamente establecida que las acciones posesorias corresponden tan solo á los poseedores de inmuebles, y que ellas tienen por único objeto la restitución de la posesión ó la manutención de la misma en su plenitud y libertad—art. 2487, Cód. Civ.—Además el art. 2480 establece que una de las condiciones requeridas para que la posesión dé lugar á las acciones posesorias, no debe ser precaria sino á título de propietaria. La Cámara por mayoría resolvió que el interdicto no podía prosperar, no porque el locatario no pudiese deducir acciones posesorias, como lo sostuvo la minoría, sino porque el sublocatario que ha adquirido sus derechos por cesión sin consentimiento del locador principal, carece de vinculaciones directas con el propietario del inmueble. Reus sostiene que el inquilino tiene el derecho de ser amparado en su posesión cuando se le despoja de ella, y por consiguiente le corresponde el interdicto de recobrar.—Tom. 3º, págs. 593 y 594.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Interdicto de retener*, número 2. El Dr. Molina Arrotea, sostuvo en el caso que corre publicado en el tomo 7º, pág. 314, Ser. 4ª, que el interdicto de despojo se acuerda no solo al que tiene la posesión de la cosa sino también al mero tenedor de la misma. El Dr. Rivarola, estudiando el art. 196 del Cód. Pen. dice: «Nuestro art. 196 castiga al que empleando violencia despoje á otro de una casa raiz, ó del uso, usufructo, habitación ó servidumbre que en ella goce, y castiga con pena inferior el despojo que se cometiere por fraude ó astucia. Estas disposiciones del Código contienen, pues, la penalidad que, además de las indemnizaciones civiles, podrá imponerse por la autoridad respectiva en los casos en que procede el interdicto de recobrar ó de *despojo*, de las leyes de procedimientos. Según ellas, la acción se dá mediante estas condiciones: 1ª que el que lo intente ó su causante haya estado en posesión ó tenencia de la cosa demandada; 2ª que haya sido despojado con violencia ó clandestinamente de esa posesión. Si se considera que los términos de la disposición penal guardan la más completa analogía con los de la definición civil y que el interdicto puede darse aun contra el propietario que hubiera tomado violentamente la cosa poseída por otro, parece encontrarse en este delito, antes que un atentado contra la propiedad, un atentado contra el orden público ó la administración de justicia. Por eso, respecto del interdicto, dice con razón Caravantes—Procedimientos judiciales, lib. 3º, núms. 1045 y 1049—que se funda en el principio de eterna razón de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, sino





hubiese intervenido ni consentido la cesión del contrato de locación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 169, Ser. 4^a.

11. **Interdicto de recobrar**.—Este interdicto es improcedente en tanto el actor no justifique haber tenido la posesión, la propiedad aún justificada no forma prueba.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 403, Ser. 4^a.

12. **Interdicto de recobrar**.—Debiendo considerarse una vía de tramway inmueble por accesión, procede el inter-

recurriendo á las autoridades judiciales instituidas para administrarla á cada uno, y que su objeto es evitar las luchas y vías de hecho á que recurriría el despojado para recuperar su posesión. El interdicto de despojo se dá no solamente al que se halla en posesión de la cosa de que se le despojó, sino aún al que se halla en la tenencia ó mera ocupación de la misma, que no constituye la posesión legal, como los depositarios, prendarios, comodatarios, y en consecuencia, aunque no sea señor de la cosa; y asimismo, aun cuando la posesión ó tenencia fuere viciosa ó se hubiere adquirido, *vi, clam, vel precario*, ó por fuerza ó clandestinamente, ó por encargo del dueño, como la de los colonos ó inquilinos del despojado. Pienso que en las mismas condiciones en que se dá el interdicto procede la acción penal de usurpación. Aunque en la disposición legal se hayan enumerado los derechos reales de uso, usufructo, habitación ó servidumbre, no debe entenderse que la ley proteja solo el derecho real que se tenga en la cosa sino también el derecho personal. Si la ley quisiera proteger solamente los derechos reales, no usaría los términos *el que despoje* á otro de un bien raíz, lo que da simplemente la idea de separarle de la tenencia actual, cualquiera que sea el título de la tenencia. Así el Código Español usa en su artículo los términos *el que ocupare una cosa inmueble* ó *usurpare un derecho real de ajena pertenencia*, etc., en cuyos primeros términos la ocupación de la cosa inmueble se refiere simplemente al acto material. Véase Exposición y Crítica del Cód. Penal vigente.

11.—A este respecto la jurisprudencia es constante. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Interdicto de recobrar*, núm. 2.

12.—El actor comprobó y la Municipalidad reconoció la existencia de un contrato celebrado por la empresa con el P. E. de la provincia de Buenos Aires, antecesor, en la jurisdicción que corresponde actualmente en el municipio de la Capital, á aquella corporación, que en virtud del contrato, la empresa estaba facultada á establecer los rieles para la explo-



terdicto de recobrar ó de despojo contra la Municipalidad que haya llevado á cabo el levantamiento de los rieles —Jur. Civ., tom. 7, pág. 314, Ser. 4^a.

13. Interdicto de recobrar—La posesión, no procede si se ha perdido en virtud de auto judicial.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 285, Ser. 4^a.

14. Interdicto de recobrar—Justificada la posesión y su pérdida clandestina, el interdicto de recobrar la posesión debe prosperar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 217, Ser. 4^a.

tación del tramway: que esos rieles habían sido colocados desde muchos años, utilizándolos la empresa para llenar los fines de su contrato, y finalmente que hacia algún tiempo habían sido levantados por orden de la Intendencia y so pretexto de dar cumplimiento á una ordenanza. ¿Ha podido la Municipalidad, mediando el contrato á que se ha hecho referencia, por su sola voluntad, proceder de la manera que reconoce haber procedido? La negativa no es dudosa. La Municipalidad cuando obra como persona jurídica, si bien adquiere derechos, contrae á la vez obligaciones y no puede de ninguna manera cambiar por sí sola la situación legal creada por los contratos ó convenciones que celebra: debe como cualquier particular acudir á los tribunales, á fin de que estos, si consideran justas sus pretensiones, así lo declaren, previa la controversia y comprobaciones necesarias para asegurar un pronunciamiento que sea el resultado de un debate en el cual las partes hayan discutido ampliamente su derecho. Es en el juicio que con tal motivo se siga que será oportuno estudiar el alcance de las cláusulas del contrato celebrado entre las partes, y el de los preceptos legales que rijan el caso, pues son puntos que hacen al fondo del derecho discutido, y ajenos por lo mismo á los procedimientos breves y sumarios que caracterizan los interdictos. Tratándose de un juicio de naturaleza sumaria, no se requiere otra cosa que justificar los extremos exigidos en el art. 581 del Cód. de Proc., pudiendo agregarse que concurriesen las circunstancias exigidas en el art. 2473 del Cód. Civ. y también que aparezca llenado el requisito del art. 2487, pues según lo ha declarado la Cámara en el tom. 1^o, pág. 100, ser. 1^a de sus fallos, la vía de un tramway es inmueble por accesión, por hallarse comprendida en la definición del art. 2315 del mismo Código.

13.—Véase: *Auto judicial*, núm. 1, donde se sostiene esta teoría. Hoy la Cámara ha reformado esta jurisprudencia, estableciendo que el interdicto procede aún contra las resoluciones judiciales. Véase el núm. 7.



Interdicto de recobrar—Véase: *Sentencia*, núm. 10—
Interdicto de retener, núm. 2.

1. **Interdicto de retener**—La posesión, procede aún con-

1—El poseedor de un inmueble se presentó diciendo que hacía muchos años estaba en posesión de la propiedad y que hacía pocos días es presentó un oficial de justicia acompañado de un escribano con el objeto de poner en posesión de dicha finca al representante de una sucesión. Que no hallándose él presente en el acto de darse la posesión, la notificación fué hecha á sus inquilinos, habiéndosele dejado aviso de aquella diligencia por medio de cédula: fundado en los arts. 574 y 578 del Cód. de Proc., pide se le admita el interdicto de retener. Convocadas las partes á juicio verbal, el actor reprodujo su demanda, contestando el demandado, que por su parte negaba el hecho de la posesión invocada por el actor, fundándose para ello en el certificado de la posesión dada anteriormente por el oficial de justicia á que se ha hecho referencia y que esa posesión judicial hacia improcedente la iniciación de cualquier interdicto. El Ministerio de Menores tomó intervención por haber incapaces interesados en el juicio, y dijo que el interdicto de retener no era procedente, porque requería como condición esencial que el que lo intente se halle en actual posesión de la cosa materia de la acción, y que en virtud del acto de posesión se evidenciaba que el actor carecía de dicha posesión. El Juez al resolver dijo, que invocándose por una y otra parte la posesión de la finca, era necesario averiguar cuál de los dos la tiene en realidad, desde que dos posesiones iguales no pueden concurrir sobre la misma cosa—art. 2401, Cód. Civ.—Y si bien la testamentaria tomó posesión judicial de la cosa, el actor continuó ocupándola, por cuya causa aquella demandó á éste como intruso. Desde el momento en que el actor continuó en su posesión, es indudable que él debía ser considerado como poseedor exclusivo, y aún cuando la testamentaria pudiese considerarse también como poseedora, debe aplicarse lo dispuesto por el art. 2471 del Cód. Civ., que favorece al actor, pues el mismo demandado confiesa que aquél poseía la cosa cuando se le puso en posesión judicial de ella. Esta posesión judicial no produce el efecto de escluir al poseedor de la posesión que tenía, pues el ocupante conserva la posesión, porque aun cuando el acto judicial practicado por la testamentaria fuese un acto de posesión, este acto no bastará para dar por perdida la que tenía el actor desde que él á su vez ejerce otro acto de posesión, ocupando *animo domine* la misma finca—arts. 2384 y 2456 del Cód. Civ.—Dijo además el Juez, que la posesión de la testamentaria era ilegal y clandestina. Ilegal, porque no se ob-

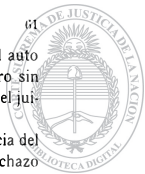


tra un auto judicial siempre que aquel se haya dictado sin audiencia del poseedor.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 3^a.

2. **Interdicto de retener**—Para la procedencia del interdicto, ya sea de retener ó de recobrar, es indispensable justificar que el que deduce la acción tiene ó ha tenido la posesión.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 175, Ser. 3^a.

servó ni una sola de las formalidades determinadas por el Cód. de Proc. en el tit. 17, sección 1^a; y clandestina porque se tomó en ausencia del poseedor—art. 2369—Entonces se desprende, de lo supuesto que la pretendida posesión de la testamentaria, solo queda reducida á patentizar su intención de adquirir la posesión é inquietar en ella á su actual poseedor, y en tal caso este ejercita un perfecto derecho al deducir el interdicto que la ley le acuerda—arts. 2487, 2495 del Cód. Civ., y 574 del Cód. de Proc.—La Cámara confirmó esta bien fundada sentencia, diciendo que el hecho de haber tomado posesión la testamentaria es un acto material con que se ha tratado de inquietar al poseedor en la actual posesión de la cosa. Si esa toma de posesión ha sido por orden judicial, no por eso deja de tener el carácter de acto de perturbación material contra la posesión. Esa orden no ha sido dada en virtud de la ejecución de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino que ha sido un simple mandamiento dictado en un juicio testamentario en el que no se le dió audiencia al poseedor. De acuerdo con esta resolución, puede verse: verb. *Interdicto de retener*, núm. 5, tomo 2, de la Inst., en contra: *Auto judicial*, núm. 1 de este tomo y el mismo verb. del tom. 3; tom. 2, verb. *Interdicto de despojo*, núm. 1 y tomo 1^o, *Interdicto de recobrar*, núm. 1479. Sinembargo este último caso no puede considerarse contrario al sumario por cuanto en él se trató de ejecutar una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, circunstancia que cambia por completo la faz de la cuestión. Cuando en el caso como el del sumario, la posesión se toma en ausencia del poseedor, la posesión se considera clandestina, como lo tiene resuelto también la Cámara en otro caso. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Posesión*, núm. 2. También se ha resuelto que la posesión dada judicialmente, basta para justificar que la cosa se tenía como propia, aun cuando no se haya protestado inmediatamente por el despojo; tom. 2, verb. *Posesión*, núm. 3.

2—Arts. 574 y 581 del Cód. de Proc.



3. Interdicto de retener—Es procedente contra el auto judicial que ordena la posesión á favor de un tercero sin la audiencia del poseedor que no ha sido parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 314, Ser. 4^a.

4. Interdicto de retener—La falta de comparecencia del demandante al juicio verbal, hace procedente el rechazo del interdicto de retener.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 296, Ser. 4^a.

5. Interdicto de retener—Es requisito ineludible para que proceda el interdicto de retener, que el que lo in-

3—Este caso consagró el mismo principio del núm. 1. En un expediente seguido entre dos litigantes se mandó poner en posesión del inmueble á uno de ellos: el poseedor pidió reposición del auto; pero no se le hizo lugar por no ser parte. Entonces el turbado en su posesión se presentó deduciendo interdicto de retener. El juez declaró procedente el interdicto, fundándose en que al decretarse la posesión y al cumplirse esta orden, no puede haber sido la mente del Juzgado el privar de la posesión al actual poseedor sin que sea oído ni vencido en juicio, como lo dispone el art. 565 del Cód. de Proc. Ese hecho no constituye la privación de la posesión, siempre que el interesado no solicite, las medidas tendentes á que el juez, con conocimiento de causa, proceda en la forma prescrita por la ley. En el caso del sumario, no se mandó poner en posesión de la cosa al interesado; sino que se ordenó el desalojo en virtud de documentos exhibidos que comprobaban la posesión. La sentencia de desalojo no puede entenderse con el inquilino del poseedor, sino con éste personalmente. Y si la ejecución se estiende con el inquilino, ese acto no puede perjudicar al poseedor ni para despojarlo.

4—El art. 574 del Cód. de Proc. determina los requisitos que debe comprobar el que deduce el interdicto—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.—Citado para el comparendo, el actor no concurrió; citado nuevamente bajo apercibimiento se obtuvo el mismo resultado. Los demandados pidieron el rechazo de la acción, á lo que se hizo lugar por no haber producido prueba alguna el actor.

5—Es una de las condiciones indispensables requeridas por el artículo 574 del Cód. de Proc. para que el interdicto de retener sea procedente.

tenta tenga la posesión.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 295. Ser. 4ª.

Interdicto de retener—Véase: *Interdicto de recobrar*, número 3.

Interés común—Véase: *Honorarios*, núm. 28.

Interés directo—Véase: *Posiciones*, núm. 29.

Interés estipulado—Véase: *Hipoteca*, núm. 1.

1. **Intereses**—El mandatario solo debe intereses por el saldo desde que las cuentas se exijan judicialmente, mientras no se justifique que invirtió los fondos en provecho propio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 143, Ser. 3ª.

2. **Intereses**—Los intereses sobre el capital invertido

1—Art. 1913 del Cód. Civ.—La Cámara dijo, que no sería posible y si de todo punto injusto, obligar al mandatario á abonar cantidad alguna, no conociéndose como no se conocía el importe de los ingresos y el de los egresos verificados.

2—Celebrado un contrato de compraventa se convino en que el precio á abonarse sería el de costo. Después de firmada la escritura de enajenación y recibido el precio de venta por el vendedor, éste se presentó demandando como parte del precio de venta los intereses corridos desde el día en que al vendedor adquirió del anterior propietario el inmueble hasta el día de la enajenación últimamente consumada; y se fundaba en que siendo el precio convenido el de costo, al estenderse la escritura para determinarlo no se tomó en cuenta, por error, los intereses del capital empleado desde la fecha en que se compró el inmueble y se pagó su precio hasta la de la venta hecha al demandado. Todo se reducía á saber si en el precio de costo deben incluirse los intereses del precio pagado por el primer comprador al vendedor. El que vende una cosa por el precio de costo nada gana y nada pierde. El vendedor decía que si el comprador no le abonase los intereses del dinero empleado en la adquisición, el precio no sería el de costo sino menor, porque el vendedor perdería el monto de los intereses. Pero esto no es exacto porque el monto del interés no ha sido desembolsado por el adquirente en la compra del terreno y por consiguiente no puede incluirse en el precio de costo. Si la parte pierde los intereses de su dinero, no quiere decir, que pierde parte del precio que el pagó, sino que pierde únicamente las ganancias que podría haber adquirido con su dinero, si no lo hu-





en una operación, no pueden conceptuarse precio de costo sino utilidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 281, Ser. 3ª.

3. **Intereses**—Sobre un capital determinado que disminuye periódicamente, deben liquidarse en cada período que sufra disminución.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 235, Serie 4ª.

4. **Intereses**—En los casos de liquidación judicial de una deuda deben cargarse con arreglo á lo que cobra el Banco Nacional.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 132, Ser. 4ª.

5. **Intereses**—Al practicarse la liquidación, deben cargarse desde la fecha de la demanda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 132, Ser. 4ª.

6. **Intereses**—Su capitalización solo procede cuando
biese empleado en esa compra. El vendedor no pierde sino que deja de ganar.

3—El tutor de un menor había recibido en administración una suma de dinero, pero no se le había entregado cantidad alguna para alimento y vestido. Al rendir cuenta de su administración descuenta del capital la suma mensual destinada á alimentos, mes á mes, y carga el interés sobre el saldo que resulta, deducido del capital las entregas parciales hechas. Así resuelve la Cámara que debe hacerse la liquidación.

4—Se quería que la liquidación se practicara teniendo en cuenta el interés que el Banco paga y no el que cobra. El art. 623 del Cód. Civil establece, que el deudor moroso debe el interés legal que las leyes especiales determinen. Esa ley especial á que alude el Cód. Civ. es por hoy el Cód. de Com. el que en su art. 363 dice, que mediando estipulación de intereses sin declaración de su tipo, se presume que las partes se sujetaron al interés que cobran los bancos públicos. Y más adelante agrega: «Siempre que en la convención ó en la ley se habla de intereses de plaza ó á estilo de Banco, se entiende *los que cobra el Banco Nacional*» que es precisamente lo que consagra el sumario.

5—Cuando al iniciar la acción se hubiese pedido así. Los intereses se adeudan desde que el deudor incurre en mora por demanda ó interposición judicial hasta que el acreedor recibe el importe de lo que se le adeuda, porque es entonces cuando se constituye en mora.

6—O cuando practicada una liquidación de intereses el Juez la mandase pagar y el deudor fuese moroso en hacerlo—art. 623 del Cód. Civ.



existe convención expresa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 235, Ser. 4^a.

7. **Intereses**—No procede el pago de intereses si en la sentencia no existe condenación expresa—Jur. Civ., tomo 5, pág. 368, Ser. 4^a.

8. **Intereses**—El pago de intereses por el comprador solo procede si existe mora en la oblación del precio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 148, Ser. 4^a.

9. **Intereses**—No pueden liquidarse intereses por la cantidad adeudada si la sentencia espresamente no lo determina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 242, Ser. 4^a.

Intereses—Véase: *Cesión*, núm. 1—*Emancipación*, número 2—*Tutor especial*, núms. 2 y 3—*Contrato de compraventa*, núm. 8—*Comprador*, núm. 4.

Intereses opuestos—Véase; *Información supletoria*, número 4—*Cosa juzgada*, núm. 4.

Interlocutoria—Véase: *Informe in voce*, núm. 1.

1. **Intermediario**—El abogado patrocinante tiene derecho para exigir el pago de sus honorarios directamente de su patrocinado con prescindencia absoluta de los apoderados ó intermediarios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 151, Ser. 4^a.

Interpelación judicial—Véase: *Obligación de hacer*, números 2 y 3.

Interpretación—Véase: *Posiciones*, núm. 8—*Contrato*, núm. 20.

Intervención—Véase: *Acreeedor privilegiado*, núm. 1—

7—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: Inst., tomo 4º, verb. *Intereses*, núm. 1; tom. 3º, verb. *Sentencia*, núms. 6 y 16. Si al entablar la demanda no se pidieron, tampoco se puede pedir durante la secuela del juicio. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Intereses*, núm. 4.

9—Véase el núm. 7.

1—Véase: verb. *Abogado*, núm. 14.



Bienes testamentarios, núm. 3 — *Nulidad del procedimiento*, núm. 4 — *Notificación*, núm. 9.

Intervención individual—Véase: *Representación*, núm. 1.

Intervención judicial—Véase: *Bienes de menores*, número 1.

1^a. *Interrogatorio*—Los testigos que han comparecido a la audiencia y que no declararon por falta de interrogatorio, no pueden ser presentados nuevamente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 320, Ser. 4^a.

Interrogatorio—Véase: *Testigos*, núm. 17.

Interrupción—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 41.

Intima amistad—Véase: *Tacha*, núm. 1.

Intimación—Véase: *Remate judicial*, núm. 14 — *Obligación de hacer*, núm. 15.

Intruso—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1.

1^b. *Inventario*—La oposición a incluir un bien en el inventario, obliga a los herederos a deducir sus acciones contra el opositor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 37, Ser. 4^a.

Inventario—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 2.

Inversión—Véase: *Tutor*, núm. 12.

Irrespetuosos—Véase: *Apercibimiento*, núm. 2.

Irresponsabilidad—Véase: *Indemnización*, núm. 9.

1^a—La falta de interrogatorio constituye desidia de la parte, y por consiguiente cae bajo la sanción de lo dispuesto en el art. 118 del Cód. de Procedimientos.

1^b—Véase: *Herederos*, núm. 7.



1. **Jactancia**—Hecha la manifestación afirmativa en el juicio de jactancia, la fijación del plazo para deducir acciones es procedente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 361, Serie 3^a.

2. **Jactancia**—Justificada la falta de posesión del demandado por jactancia, procede la fijación del término que la ley establece para que deduzca las acciones que convengan á su derecho, bajo apercibimiento—Jur. Civ., tom. 4, pág. 261, Ser. 3^a.

3. **Jactancia**—La acción de jactancia puede ser dedu-

1—Art. 428 del Cód. de Proc.

2—El actor se presentó diciendo que había alquilado al demandado un terreno y que últimamente tuvo conocimiento que el arrendatario había seguido un juicio con un tercero, lindero del terreno, sobre construcción de una pared, en el que se decía dueño del mismo, habiendo llegado hasta presentar títulos de propiedad. El demandado negó que la actora se encontrase en posesión del terreno, y dijo que el terreno sobre que se atribuía el derecho de propiedad, no era el que tenía en arrendamiento, sino otro, con distinta ubicación. El actor comprobó acabadamente los extremos de su demanda mientras que el demandado no. Se resolvió como lo establece el sumario, de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 427 y 428 del Cód. de Proc.

3—Basta leer el tít. 11 del Cód. de Proc. para adquirir el convencimiento de que en el juicio de jactancia no puede discutirse sobre el dominio que respectivamente se atribuyen el demandante y el demandado



cida por el poseedor, sin que sea condición indispensable que justifique el dominio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 368, Ser. 4^a.

4. **Jactancia**—Deducida demanda de jactancia, la pres- sobre el terreno que se cuestione. El juicio de jactancia á la manera de las acciones posesorias ó de los interdictos, se propone salvaguardar los derechos inherentes á la posesión, no permitiendo que nadie se haga justicia por sí mismo y pueda hacer perder al poseedor las ventajas de su situación de derecho por medio de ardides que lo coloquen en la posición desfavorable de demandante, cuando como poseedor tiene derecho de ampararse en su posesión, y exigir que el que intenta alguna acción contra él haya de asumir forzosamente el carácter de actor. Por eso dispone el art. 428 del Cód. de Proc. que, si aquel contra quien se dirige la jactancia reconociera la verdad de lo espuesto, ó se negase á hacer manifestación, ó la hiciere ambiguamente, el Juez le ordenará que dentro de diez días entable la acción que surge de los hechos espuestos. Bien se comprende que sería obligar al poseedor á asumir el rol de actor si se le exigiera desde luego la prueba de su dominio cuando esa exigencia no tuviera más fundamento que el de atribuirse cualquiera, fuera de juicio, derechos á la misma propiedad de que aquél disfruta. Si el que ha perdido la posesión solo puede recuperarla por medio de la reivindicación; y si el que goza de posesión tiene los interdictos para conservarse ante todo en ella, cualquiera que sea el derecho de dominio del que pretende turbarla, el que por actos estrajudiciales se ve molestado en su derecho, puede obligar al perturbador por medio de una acción de jactancia á retractarse, ó á deducir las acciones que le competan sobre los bienes que pretende ser suyos, para que la justicia se pronuncie sobre esas pretensiones. Y basta poner de manifiesto este propósito de la acción de jactancia para no insistir en la demostración de la verdadera anomalía en que se incurriría si para hacer uso del derecho de no ser molestado en la posesión de que goza, fuera necesario empezar por probar el dominio. Lo contrario nos llevaría al absurdo de que en manos de cualquiera estaría obligar á los poseedores por medio del procedimiento antes invocado á descubrir el origen y el título de su posesión sin estar sometido á una necesidad jurídica de hacerlo, y contra el precepto del art. 2363 del Cód. Civ.

4—La jactancia se dedujo contra un martillero que había anunciado el remate de la cosa sin decir por cuenta de quién. Una vez que supo el actor el nombre de la persona por cuya orden había procedido el martillero, dirigió su acción contra dicha persona. El demandado opuso la esce-



cripción se interrumpe aun cuando ella se haya dirigido contra el que pretendía tener originariamente el derecho.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 368. Ser. 4ª.

5. **Jactancia**—La acción de jactancia solo procede si el reo se atribuye derechos á bienes determinados de propiedad del actor.—Jur. Civ., tom. 10, págs. 114 y 295, Ser. 4ª.

1ª. **Jornales**—Los abonados á los oficiales durante la paralización de una obra, no pueden conceptuarse consecuencia inmediata de aquel hecho, y por lo tanto no pueden ser incluidos en la indemnización.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 81, Ser. 3ª.

Judicialmente—Véase: *Mora*, núm. 3.

Jueces de Paz letrados—Véase: *Espedientes*, núms. 2, 3 y 4.

1ª. **Jueces de turno**—Señalando el turno de los jueces de 1ª Instancia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 334, Ser. 4ª.

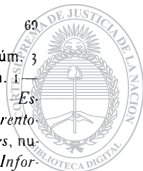
Juez—Véase: *Abogado*, núm. 6—*Acción*, núm. 2—*Acciones personales*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 6—*Amistad*, núm. 1—*Apoderado*, núm. 4—*Arraigo*, núm. 3—*Cotejo*, núm. 1—*Cuestiones*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núme-

ción de prescripción alegando que entre el día del remate y el de la notificación de la demanda habían transcurrido los seis meses de que nos habla el art. 425 del Cód. de Proc. El Juez rechazó la escepción: 1º Porque la demanda, aunque no fué notificada al demandado dentro de los seis meses, fué entablada antes de vencerse ese término; siendo así que la prescripción se interrumpe por demanda y no por la notificación que de ella se hace—art. 3986 del Cód. Civ.—2º Porque la demanda fué entablada inmediatamente de anunciado el remate por el martillero. no siendo imputable al actor si la acción no se entendió en primer término con la persona que ordenó la venta, desde que no sabía ni estaba obligado á saber por cuenta de quién obraba el martillero.

5—Véase: *Bienes determinados*, núm. 1.

1ª—Véase: *Indemnización*, núm. 1.

1ª. Con fecha 28 de Abril de 1892 se estableció el siguiente turno: doctores Centeno, Saavedra, Garay, Pizarro y Posse.



ros 14, 42 y 91—*Denuncia*, núm. 1—*De oficio*, núm. 3—*Desacato*, núms. 1 y 2—*Dictamen pericial*, núm. 1—*Divorcio*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 40—*Escepción de incompetencia*, núm. 8—*Escepciones perentorias*, núm. 1—*Escusación*, núms. 1 y 2—*Espedientes*, número 6—*Evicción*, núm. 4—*Información*, núm. 2—*Informes*, núm. 3—*Juicio reivindicatorio*, núm. 1—*Notificación*, núm. 3—*Nulidad del procedimiento*, núm. 1—*Obligación sin plazo*, núm. 1—*Padrastro*, núm. 1—*Personeoría*, núm. 13—*Posesión judicial*, núm. 1—*Recusación*, núms. 2, 3 y 4—*Sentencia*, núms. 5 y 7—*Simulación*, núm. 13—*Transacción*, núms. 1 y 9—*Venia*, núm. 1—*Venta en remate*, núm. 1.

1. **Juez competente**—Existe violación siempre que careciendo de orden de allanamiento dictada por Juez competente, la autoridad se introduce en el domicilio privado sin permiso del propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

2. **Juez competente**—Lo es para demandar la posesión

1—Véase: *Allanamiento*, núm. 1.

2—Esta resolución fué revocatoria de la de 1^a Inst., donde se resolvió que el Juez competente para esta clase de acciones es el del lugar en que la cosa está situada. Así lo resolvió también la S. C. N. en un caso que aun no se ha publicado y al que más adelante haremos referencia. El Juez de 1^a Inst. resolvió la cuestión en un sentido contrario al del sumario, fundándose en que, según lo dispone el art. 4^o del Cód. de Proc., cuando se ejercitan acciones personales, el Juez competente para conocer de ellas es el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. Cuando se vende un inmueble el anajente se obliga á cumplir las obligaciones que contrae como vendedor en el lugar donde está situada la cosa vendida, sin que sea necesario que así se haga constar espresamente en el contrato desde que es evidente que el vendedor de un inmueble no puede cumplir sus obligaciones de entregarlo al comprador en otro lugar que el en que está situado. Si la ley atribuye el conocimiento de las acciones personales



de un inmueble en el domicilio del demandado, aun cuando

al Juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, con mucha mayor razón debe atribuirlo al Juez del lugar en que la obligación debe cumplirse necesaria y forzosamente por la naturaleza misma de las cosas. Si al vendedor le es absolutamente imposible cumplir fuera del lugar en que la cosa está situada, forzosamente tendría que cumplirla en el lugar donde se encuentra el inmueble vendido, es allí solamente donde se le puede demandar por su cumplimiento. La ley de Enjuiciamiento Civil de España, inc. 3º del art. 5º, con más exactitud que nuestro Cód. de Proc. establece, que es Juez competente para conocer de los pleitos en que se ejerciten acciones personales *el del lugar en que deba cumplirse la obligación*. A esto contestó la Cámara diciendo, que cuando se pide la entrega de la cosa vendida se ejercita una acción personal. El art. 4º del Cód. de Proc. dice: que cuando se ejerciten acciones personales, será Juez competente el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación y á falta de éste, á elección del demandante, el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, con tal que el demandado se halle en él, aunque sea accidentalmente. Pero cuando del contrato no resulta que se haya convenido el lugar para el cumplimiento de la obligación y cuando el demandado está domiciliado fuera del lugar en que la cosa está situada, es claro que los jueces del domicilio son los competentes para conocer en el asunto. Esta fué la opinión del Fiscal de la Cámara, revocándose por los fundamentos de este dictamen el auto del Juez de 1ª Inst. Una cuestión tan debatida y que tiene en pro de la solución contraria, dada por la Cámara, la opinión del más alto Tribunal de la República, debió merecer mayor estudio de parte de los señores Camaristas; pero esto no valía indudablemente la pena para ellos: era demasiado pedirles cuando podían revocar una resolución por *los fundamentos* aducidos por el Fiscal. La Cámara leyó indudablemente los fundamentos de una y otra opinión, y como quien se decide por un traje que más condice con sus gustos aceptó la opinión fiscal sin agregarle un solo fundamento. Hemos dicho, que la S. C. N. había resuelto esta cuestión en un sentido contrario al del sumario en el caso de Guastavino, el Dr. D. José M., con Denegri, D. Bartolomé, sobre incompetencia de jurisdicción. Esa sentencia de la Corte fué dictada en virtud de una cuestión de competencia formulada entre el Juez Federal de esta Capital y el de igual clase de Corrientes, habiendo ambos declarádose competentes para entender en el juicio. El Dr. Tedín que desempeñaba el cargo de Juez en la Capital dijo, que el único Juez competente para entender en el juicio era él. La obligación que

el bien se encuentre en distinta jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 127, Ser. 4^a.

Juez competente— Véase: *Transacción*, núm. 4—*Demanda*, núm. 1—*Locación de servicios*, núm. 2—*Pago por consignación*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 41—*Competencia*, núm. 5.

1. **Juez de feria**—Es competente para entender en los juicios promovidos durante ella, cualquiera que sea la

contrae un individuo cuando firma una escritura de enajenación es la de entregar la cosa después de dicha escrituración, es decir, efectuar la tradición de la cosa vendida. Esa obligación es puramente personal. Así lo tiene resuelto la Cámara en el caso que corre publicado en el tom. 1^o, pág. 316, Ser. 1^a, pues cuando se entabla una demanda de esta naturaleza no es porque se le prive al demandante de su derecho de propiedad en todo ó en parte, ni porque se le turbe en manera alguna en el dominio, posesión, goce, ó tenencia de la cosa; pues esa propiedad, dominio ó tenencia jamás le fué transferida, ni la tuvo, y por el contrario su acción se dirige á obtenerla. Se demanda la entrega del inmueble, de manera que jamás le ha sido entregado ni se le ha hecho tradición, circunstancia que lo inhabilita para adquirir el dominio, según prescripción terminante del art. 2609 del Cód. Civ. Por otra parte, el contrato de compraventa no da sino derecho á acciones personales según resulta de los arts. 577 y 3265 del Cód. Civ. que requieren la tradición para que el adquirente tenga un derecho real sobre la cosa comprada. El art. 100 corrobora la procedencia de lo resuelto en el sumario, cuando dice: que el domicilio de derecho y el domicilio real determinan la competencia de las autoridades públicas para el conocimiento de las obligaciones y el cumplimiento de los derechos. La S. C. N. ha consagrado en otros casos el mismo principio del sumario, de que cuando se ejercitan acciones personales, es Juez competente el del domicilio del demandado —tom. 3^o, pág. 425; tom. 9^o, pág. 415, y tom. 16, pág. 282, Ser. 2^a.

1.—Se trataba de un cobro ejecutivo procedente de pensiones alimenticias, iniciado durante la feria, desempeñando el Juzgado de feria un Juez de Com. Se opuso la escepción de incompetencia, que fué rechazada, porque el feriado había sido previamente habilitado y porque el Juez de feria está siempre investido de la jurisdicción civil aunque solo sea titular de Comercio. La oportunidad de declarar si un asunto es de feria ó nó queda siempre librada al criterio judicial.





jurisdicción á que correspondan.—Jur. Civ., tom. 4, página 152, Ser. 4^a.

Juez de la sucesión—Véase: *Nulidad*, núm. 3—*Acciones personales*, núm. 1.

1^a. Juez de turno—Corresponden á éste las demandas de la testamentaria contra terceros.—Jur. Civ., tom. 5, página 249, Ser. 3^a.

Juez de turno—Véase: *Espediente*, núm. 4.

Juez del crimen—Véase: *Albacea*, núm. 4—*Acto ilícito*, núm. 10—*De oficio*, núm. 4.

Juez del domicilio—Véase: *Domicilio*, núm. 12.

Juez exhortado—Véase: *Exhorto*, núm. 1.

Juez federal—Véase: *Impuestos nacionales*, núm. 1.

Juez incompetente—Véase: *Posiciones*, núm. 41.

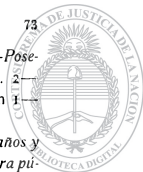
Juez recusado—Véase: *Recusación*, núm. 1.

1^b. Jugador de garito—La calificación de jugador de garito hecha de una persona que, además de comprobar su honorabilidad, justifica la falsedad del hecho imputado, importa estralimitación en las facultades del empleado, y una ofensa ilícita al ciudadano, que debe ser indemnizada según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, página 379, Ser. 3^a.

Juicio—Véase: *Anistad*, núm. 1—*Albacea*, núm. 7—*Alimentos*, núm. 6—*Apoderado*, núm. 4—*Agente Fiscal*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núm. 32—*Costas*, números 21 y 45—*Consignación*, núm. 1—*Contrato de Arrendamiento*, núms. 5 y 6—*Daños y perjuicios*, núm. 42—*Declinatoria de jurisdicción*, núm. 1—*Escritura*, número 3—*Evicción*, núm. 4—*Embargo preventivo*, núm. 27—*Municipalidad*, núm. 11—*Martillero*, núm. 3—*Nuli-*

1^a—Véase: verb. *Demanda*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Empleado*, núm. 1.



dad, núm. 3 — *Nulidad del procedimiento*, núm. 1 — *Poseción judicial*, núms. 3 y 6 — *Patria potestad*, núm. 2 — *Prueba preparatoria*, núm. 1 — *Reivindicante*, núm. 1 — *Tutor*, núm. 9.

Juicio civil—Véase: *Calumnia*, núms. 1 y 2 — *Daños y perjuicios*, núm. 17 — *Acto ilícito*, núm. 10 — *Escritura pública*, núm. 32.

1ª. Juicio contencioso-administrativo — No procede contra resoluciones de la Municipalidad sobre espropiación de terrenos ó demolición de un edificio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 64, Ser. 3ª.

2. Juicio contencioso-administrativo—Los actos y resoluciones de la Municipalidad ejerciendo derechos de persona jurídica, no pueden fundar un juicio contencioso-administrativo; son de competencia exclusiva de los Tribunales ordinarios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 336, Ser. 3ª.

Juicio contencioso-administrativo—Véase: *Contrato*, números 1 y 2.

Juicio contra terceros—Véase: *Personería*, núm. 12.

Juicio contradictorio—Véase: *Heredero*, núm. 5 — *Herederos*, núm. 6 — *Locación de servicios*, núm. 2.

1ª. Juicio criminal—La absolución ó declaración de inculpabilidad hecha en el juicio criminal, no importa enervar el derecho del damnificado por los daños y perjuicios procedentes del cuasi-delito que legisla la acción civil.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 374, Ser. 3ª.

Juicio criminal—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 12, 13 y 17 — *Acusación calumniosa*, núm. 1.

1ª—Véase: *Demolición*, núm. 1.

2—Véase el número precedente, y verb. *Contencioso-administrativo*, número 1; *Contrato*, núm. 19; Inst., tom. 2º; verb. *Contencioso-administrativo*, núm. 2; *Contratos*, núm. 1 y *Obligaciones*, núm. 2.

1ª—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 30.



Juicio de concurso—Véase: *Recusación*, núm. 16.

1°. Juicio de disenso—Las resoluciones del Juzgado en este juicio, son inapelables.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 145, Ser. 4ª.

Juicio de disenso—Véase: *Disenso*, núm. 1.

Juicio de divorcio—Véase: *Divorcio*, núm. 1 y siguientes.

Juicio de interdicto—Véase: *Interdicto*, núms. 3 y 7—*Interdicto de retener*, núm. 3—*Interdicto de despojo*, número 9.

Juicio de rendición de cuentas—Véase: *Libros de comercio*, núm. 4—*Rendición de cuentas*, núm. 1 y siguientes—*Tutor especial*, núm. 5.

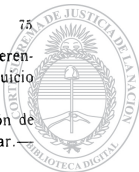
Juicio ejecutivo—Véase: *Acción Ejecutiva*, núm. 3—*Apelables*, núm. 1—*Autos inapelables*, núm. 1—*Término extraordinario*, núms. 2 y 4—*Escepción de falsedad*, número 1—*Escepción de litispendencia*, núms. 2, 3 y 8—*Nulidad*, núm. 5—*Nulidad de la ejecución*, núms. 1 y 3—*Alquileres*, núm. 2—*Costas*, núm. 42—*Nulidad de la ejecución*, núm. 2—*Afirmados*, núm. 2—*Prescripción como escepción*, núm. 2—*Prescripción de inhabilidad de título*, núm. 12.

Juicio nulo—Véase: *Nulidad de juicio testamentario*, núms. 1 y 2—*Nulidad de la ejecución*, núm. 1 siguientes—*Testamentaria*, núm. 6—*Notificación*, núm. 9—*Nulidad del procedimiento*, núm. 4.

1. Juicio ordinario—Si al dejarse sin efecto la venta ju-

1ª—Véase: *Inapelable*, núm. 6.

1—En una venta de bienes testamentarios se dejó sin efecto la compra quedando á salvo los derechos de la sucesión para reclamar del comprador los daños y perjuicios que hubiese ocasionado. Esta acción solo puede sustanciarse por la competente vía ordinaria, porque el art. 519 del Cód. de Proc. es una disposición especial para el juicio ejecutivo, la que suele aplicarse por analogía al juicio sucesorio: pero como los



dicial no se condena al comprador al pago de la diferencia, solo puede hacerse efectivo el pago de ésta en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 387, Ser. 4ª.

2. Juicio ordinario—Es tal el juicio sobre fijación de plazo para el cumplimiento de una obligación de dar.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 180, Ser. 4ª.

3. Juicio ordinario—La tercera de mejor derecho procede aun deducida contra un juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 32, Ser. 4ª.

Juicio ordinario—Véase: *Poseedor clandestino*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 5—*Escepción de litispendencia*, núms. 3 y 8—*Afirmados*, núm. 2—*Alimentos provisorios*, núm. 3—*Contrato*, núm. 20—*Embargo*, núm. 11—*Escritura pública*, núm. 23.

Juicio petitorio—Véase: *Sentencia*, núm. 10.

Juicio previo—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 15.

1. Juicio reivindicatorio—La posesión ordenada en el juicio reivindicatorio, debe darse por el Juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 132, Ser. 3ª.

Juicio reivindicatorio—Véase: *Costas*, núm. 36.

créditos solo revisten aparejada ejecución por disposición expresa de la ley y nunca por razones de semejanza ó analogía, es claro que tampoco procede otra vía, en el caso del sumario, sino la ordinaria.

2—El crédito reclamado no tenía término para el vencimiento de la obligación. Si no tiene término una obligación y si tampoco tiene una tramitación especial marcada por la ley, debe exigirse por la vía ordinaria, de acuerdo con lo establecido en el art. 66 del Cód. de Procedimientos.

3 —Así lo enseñan todos los prácticos.

1—Se trata de la entrega de un inmueble ordenada en virtud de sentencia dictada en un juicio reivindicatorio. La entrega es una consecuencia de la sentencia; es su ejecución y es sabido que es competente para entender es la ejecución de una sentencia el Juez que la dictó. El art. 2794 también resuelve la cuestión en el sentido del sumario.



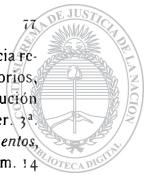
1. Juicio sucesorio.—Los Tribunales de la República carecen de jurisdicción para entender en el juicio sucesorio de una persona fallecida en el extranjero con residencia fija.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 337, Ser. 3ª.

2. Juicio sucesorio.—El auto que no hace lugar á la declaratoria de herederos, es apelable.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 131, Ser. 3ª.

Juicio sucesorio.—Véase: *Derecho á la herencia*, número 1.—*Posesión judicial*, núm. 1—*Declaratoria de herederos*, núm. 5—*Recusación*, núms. 12 y 16—*Jurisdicción testamentaria*, núm. 1—*Bienes de la sucesión*, núm. 4.

1—El caso es el siguiente: un heredero se presentó esponiendo que una persona había fallecido en esta Capital sin dejar descendientes, correspondiendo la herencia al padre del causante, pues la madre había fallecido; que posteriormente falleció el padre en Italia donde tenía su domicilio fijo, instituyendo como herederos á sus hijos. Con estos antecedentes se presentó iniciando las dos testamentarias. Es evidente que en el presente caso se confunden dos juicios sucesorios completamente distintos y que deben proseguirse ante distinta jurisdicción. Estando domiciliado uno de los causantes, al tiempo de su fallecimiento, en esta Capital, correspondía á estos Tribunales el conocimiento del juicio sucesorio—art. 3284 del Cód. Civ.—los que deben declarar como único y universal heredero á su padre—art. 3557.—El conocimiento del juicio sucesorio del fallecido fuera de la República corresponde á los jueces del último domicilio del causante, debiendo deferirse allí la herencia con arreglo á las leyes locales, siendo aquellos jueces los únicos que pueden declarar quiénes son los herederos del causante—art. 3283.—Lo único que puede ser permitido en el caso presente es entregar los bienes aquí existentes, de la sucesión del padre, al representante de los herederos instituidos en el testamento, desde que ese acto se presente como otorgado con todas las formalidades legales y munido de todos los recaudos exigidos.

2—Este sumario ha sido omitido en los fallos. Es apelable porque trae gravamen irreparable, puesto que los mismos recaudos invocados para pedir la declaratoria no pueden solicitarse después; sería necesario



1^a. Juicio sumario—El consentimiento de la sentencia recaída en el juicio sumario sobre alimentos provisorios, no enerva el derecho de pedir su aumento ó disminución en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 289, Ser. 3^a.

Juicio sumario—Véase: *Alimentos*, núm. 10—*Alimentos provisorios*, núm. 3—*Contrato de arrendamiento*, núm. 14—*Diligencias de prueba*, núm. 9—*Interdicto*, núms. 6 y 7—*Cosa juzgada*, núm. 6.

Juicio terminado—Véase: *Abogado*, núm. 1.

1^b. Juicio verbal—El contador, aun después de aprobada la cuenta particionaria, no puede negarse á concurrir al juicio verbal decretado para subsanar las errores que ella contenga.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 191, Ser. 3^a.

2. Juicio verbal—En el acto del juicio verbal del interdicto las partes pueden pedir se agregue testimonio de los documentos públicos que convengan á su derecho.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 160, Ser. 3^a.

ampliarlo, lo que puede no ser necesario y sin embargo el Juez exigirlo sin derecho.

1^a—El juicio ordinario puede fundarse en haber mejorado de fortuna el alimentario; en tener el alimentado mayores necesidades de las que tenía cuando se fijó la cuota alimenticia, ó en la circunstancia de no haber sido posible en el juicio sumario demostrar con precisión el monto del caudal del que debe prestarlos debido á la brevedad del juicio y á la premura de las necesidades á satisfacer. La fijación provisoria de alimentos no hace cosa juzgada ni para el que los presta ni para el que los recibe. Es por esto que el art. 602 del Cód. de Proc. solo exige la justificación de dos extremos para que se decrete la pensión alimenticia, á saber: que se justifique el título para percibirlos y caudal aproximado del alimentario. No es de extrañarse que la persona que debe recibir los alimentos se conforme con la suma que se fija en el juicio sumario, pues en ese momento puede carecer de los medios necesarios para comprobar el monto del caudal, y carecer asimismo del tiempo requerido para establecer esa prueba.

1^b—Véase: verb. *Contador*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Documentos públicos*, núm. 2.



Juicio verbal—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 4—*Interdicto*, núm. 2.

Juicio voluntario—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 4.

1. Juicios—El conocimiento y resolución de los juicios sobre aplicación de leyes dictadas por el Congreso Nacional que se refiera única y exclusivamente al territorio de la Capital Federal, corresponde á la jurisdicción de los Tribunales de la misma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 4^a.

Juicios—Véase: *Paternidad legítima*, núm. 2—*Competencia*, núm. 3—*Inhibitoria*, núm. 1

1^a. Juicios voluntarios—En juicios voluntarios, el consentimiento de un auto no enerva el derecho para cambiar la forma del pedido denegado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 131, Ser. 3^a.

Junta—Véase: *Nombramiento*, núm. 1.

Jurado—Véase: *Consejo de Higiene*, núm. 2.

Juramento—Véase: *Abogados*, núm. 2 — *Documentos*, núm. 5.

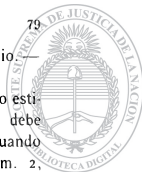
1^b. Juramento estimatorio—Justificada la existencia de daños y perjuicios, pero no el *quantum*, corresponde el juramento estimatorio dentro de la cantidad que fije el juzgado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 39, Ser. 4^a.

2. Juramento estimatorio—Declarada procedente la acción de daños y perjuicios, pero no justificada la suma

1^a—Se solicitó primero la admisión de una información para acreditar la filiación legítima de una heredera, y después sin producirse la información ofrecida se pidió la declaratoria de herederos por considerar el interesado que en autos existían suficientes constancias para hacerse dicha declaratoria. Es evidente que importando esto último un nuevo pedido, el auto recaído en el anterior, no podía enervarlo en manera alguna y el Juez debía pronunciarse sobre el particular.

1^b—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 66.

2—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 69.



perdida, es improcedente el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 116, Ser. 4^a.

3. **Juramento estimatorio**—Para que el juramento estimatorio de los daños y perjuicios sean procedentes, debe justificarse al menos que ellos existieron, aun cuando no pueda comprobarse el monto.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 158, Ser. 4^a.

4. **Juramento estimatorio**—Reconocida la existencia de daños y perjuicios y el derecho á su indemnización, procede el juramento estimatorio, y no la fijación por árbitros, dentro de la cantidad que fije el juzgado, si el damnificado no ha producido prueba de los que se le han causado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 317, Ser. 4^a.

5. **Juramento estimatorio**—Probada la existencia de los daños pero no el monto de los perjuicios, procede el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 396, Ser. 4^a.

6. **Juramento estimatorio**—Reconocido el derecho á una indemnización por daños y perjuicios, como también la existencia de estos, pero no justificado su monto, corresponde el juramento estimatorio dentro de la suma que fije el juez en vista de los antecedentes que constan en autos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 172, Ser. 4^a.

7. **Juramento estimatorio**—La suma dentro de la cual el damnificado por un acto ilícito ó cuasi-delito debe prestar el juramento estimatorio, debe ser fijado según el prudente criterio del juez, teniendo en cuenta las constan-

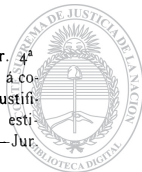
3—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 72.

4—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 74.

5—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 64.

6—Esta cuestión ha sido resuelta contradictoriamente por la Cámara; pero la jurisprudencia tiende á resolver la cuestión en el sentido del sumario. Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 72.

7—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 9.



cias de autos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 103, Ser. 4^a.

8. **Juramento estimatorio**—Reconocido el derecho a cobrar daños y perjuicios, y su existencia, pero no justificado su monto, procede su fijación por juramento estimatorio dentro de la suma que fije el juzgado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 195, Ser. 4^a.

9. **Juramento estimatorio**—Para fijar la suma dentro la cual el damnificado debe prestar el juramento estimatorio, los jueces deben tener presente, además de la pérdida justificada, la ganancia dejada de percibir.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 228, Ser. 4^a.

Juramento estimatorio—Véase: *Daños y perjuicios*, números 3 y 83—*Costas*, núm. 45—*Rendición de cuentas*, núm. 8.

1. **Jurisdicción**—Las cuestiones sobre locación de nichos para el depósito de restos humanos, corresponde á la jurisdicción competente por razón del precio del arrendamiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 52, Ser. 4^a.

2. **Jurisdicción**—El demandante por acción personal, puede renunciar al fuero federal ocurriendo á la jurisdicción del domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 7, página 117, Ser. 3^a.

3. **Jurisdicción**—Carece el juzgado de competencia sobre el demandado, por acción personal, que no reside en su jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 128, Ser. 3^a.

4. **Jurisdicción**—Si resulta que el causante falleció en

8—Véase la nota precedente y verb. *Daños y perjuicios*, núm. 112.

9—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 35.

1—El monto de la demanda determina la jurisdicción que debe intervenir en la prosecución del juicio.

2—Véase: *Acción personal*, núm. 1.

3—Véase: *Acción personal*, núm. 2.

4—Véase: *Causante*, núm. 2.



jurisdicción de la provincia antes de la federalización, debe declararse la incompetencia del juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 145, Ser. 3^a.

5. Jurisdicción—Aun cuando las partes la prorroguen, los Tribunales no pueden entender en la testamentaria de los domiciliados fuera de la Capital.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 4^a.

6. Jurisdicción—Justificada la residencia del demandante fuera de la jurisdicción del juzgado, procede la excepción de arraigo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 89, Ser. 4^a.

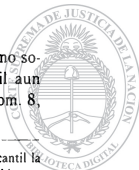
Jurisdicción—Véase: *Arraigo*, núm. 2—*Fiadores*, número 1—*Juicio sucesorio*, núm. 1—*Espediente*, núms. 2 y 6—*Honorarios*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 10—*Excepción de arraigo*, núms. 1, 2 y 6—*Excepción de incompetencia*, núm. 1 y siguientes—*Posesión judicial*, núm. 6—*Sentencia*, núm. 4—*Recusación*, núm. 18—*Sociedad*, núm. 3—*Poderes locales*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 19—*Juez de feria*, núm. 1—*Competencia*, núm. 4—*Testigos*, núm. 25—*Contrato*, núm. 19—*Juicios*, número 1—*Inscripción*, núm. 1—*Juez competente*, núm. 2.

5—El juez competente para conocer en el juicio de testamentaria es el del último domicilio del difunto, según lo dispone el art. 534 del Cód. de Proc. La jurisdicción conferida á los Tribunales ordinarios de la Capital es improrrogable como lo dispone la primera parte del art. 1^o de dicho Código, y si bien la segunda parte establece que la jurisdicción territorial puede ser prorrogada de conformidad de partes, esto debe entenderse para los jueces que ejercen igual jurisdicción, aunque en distinto territorio, como lo son los jueces de la provincia de Buenos Aires en los diferentes departamentos judiciales en que la misma está dividida. Pero los juzgados de la Capital Federal ejercen jurisdicción nacional y los de la Provincia ejercen jurisdicción provincial, de manera que la prórroga de jurisdicción es inadmisibles porque no solo se trata de la territorial, sino también de diferentes jurisdicciones.

6—Véase: *Excepción de arraigo*, núm. 7.

1. Jurisdicción civil—La ejecución de un préstamo sobre un inmueble corresponde á la jurisdicción civil aun cuando sea hecho por un comerciante.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 40, Ser. 4ª.

1—El inc. 1º del art. 8º del Cód. de Com. declara acto mercantil la adquisición de un derecho sobre un mueble y no sobre un inmueble como en el caso del sumario. La obligación que nace de un préstamo hipotecario es puramente civil, pues la operación no se encuentra comprendida en el inc. 4º del artículo citado. Además para que el préstamo esté sujeto á las leyes mercantiles, no basta tan solo que la cosa prestada pueda ser considerada género mercantil ó destinada á uso comercial, sino que se requiere que sea entre comerciantes ó por lo menos el deudor tenga esa calidad—art. 558, Cód. de Com.—y el ejecutado no es comerciante. Estas fueron las consideraciones aducidas por el Juez de 1ª Inst. en su resolución, la que fué confirmada por sus fundamentos. Lo resuelto en el sumario sienta la buena doctrina cuando el deudor no es comerciante; pero cuando está investido de ese carácter, el préstamo debe ser considerado comercial, porque la hipoteca con que se garantiza un préstamo no es sino un accesorio de éste, es decir una garantía de él. Como garantía sigue la naturaleza de lo principal. Así como cuando en un préstamo hecho á un comerciante, de una suma de dinero, se garante el cumplimiento de la obligación con la garantía personal de una persona no comerciante, y esta circunstancia no cambia la naturaleza de préstamo, es decir, no la convierte en civil, del propio modo la garantía hipotecaria no desnaturaliza la obligación principal. Por consiguiente, la circunstancia de que en el caso del sumario haya estado garantido el préstamo con una hipoteca, no implica que la obligación sea civil. Los primeros fundamentos de la resolución son inconsistentes. La razón legal que hace verdadero peso en el caso es la que se refiere al art. 558 del Cód. de Com. Este artículo requiere para establecer la comercialidad del préstamo, la concurrencia de las circunstancias siguientes: 1ª Que la cosa prestada pueda ser considerada género comercial, ó destinada á uso comercial; 2ª que tenga lugar entre comerciantes ó por lo menos que el deudor tenga esa calidad. Esta disposición es una escepción al art. 7º que solo requiere el carácter de comerciante de una sola de las partes para que surta el fuero comercial. Si en el préstamo hipotecario concurren los requisitos del art. 558, la operación será mercantil, no obstante de estar la obligación afianzada con un inmueble.





Jurisdicción civil— Véase: *Interdicto*, núm. 10—*Obligaciones comerciales*, núm. 1.

1^a. **Jurisdicción comercial**—La demanda por una parte de comisión de venta de un inmueble entre corredores y fundada en un contrato de sociedad, debe tramitarse ante la jurisdicción comercial.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 245, Ser. 3^a.

2^a. **Jurisdicción comercial**—El conocimiento del juicio sobre actos comerciales de una sociedad anónima, corresponde á la jurisdicción comercial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 19, Ser. 4^a.

Jurisdicción comercial—Véase: *Daños y perjuicios*, número 59—*Quiebra*, núm. 1.

Jurisdicción oriminal—Véase: *Acto ilícito*, núm. 8.

Jurisdicción disciplinaria—Véase: *Desacato*, núm. 2.

1^b. **Jurisdicción federal**—Demandada una sociedad colectiva, los socios extranjeros no pueden ampararse de la jurisdicción federal si existe un socio argentino.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 226, Ser. 3^a.

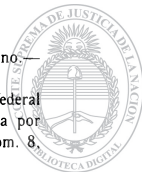
2^b. **Jurisdicción federal**—Corresponde á ésta el conocimiento de un litigio entre vecinos de distintas provincias,

1^a—Véase: verb. *Comisión*, núm. 2.

2^a—Se trataba de una acción de daños y perjuicios procedentes de contratos que versaban sobre actos de comercio, celebrados por una sociedad anónima que era la demandada. Su conocimiento corresponde á la jurisdicción mercantil porque la persona demandada cuyo fuero debe seguir el actor es una sociedad anónima y por lo tanto comercial—artículo 8º, inc. 6º del Cód. de Com.—Además el art. 7º del mismo Código establece que si un acto es comercial para una de las partes, todos los contrayentes quedan sujetos á la jurisdicción mercantil.

1^b—Art. 10 de la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales.

2^b—En el caso presente concurría la doble circunstancia de que los litigantes eran vecinos de distintas provincias, y uno extranjero y otro argentino: el demandado era extranjero. Correspondía el conocimiento de



uno de los cuales es extranjero y el otro argentino.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 347, Ser. 4^a.

3. **Jurisdicción federal**—Siendo la jurisdicción federal potestativa del extranjero, no puede ser invocada por el ciudadano argentino demandado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 28, Ser. 4^a.

1^a. **Jurisdicción incompetente**—No puede fundar la excepción de incompetencia el hecho de residir el demandante fuera de la jurisdicción del Juez competente por ser el domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 369, Ser. 4^a.

1^b. **Jurisdicción ordinaria**—Cualquiera que sea la autoridad que haya ordenado la obra, la jurisdicción ordinaria es siempre competente para entender en el interdicto.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 96, Ser. 3^a.

Jurisdicción ordinaria—Véase: *Contrato*, núm. 2.

1^c. **Jurisdicción por cantidad**—Se fija por la manifestación de la parte y no por las constancias de la escritura de compraventa.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 60, Ser. 3^a.

2. **Jurisdicción por cantidad**—El juicio sobre reducción á escritura pública del contrato de locación, corresponde á la

la causa al fuero federal, de acuerdo con el art. 2º, inc. 2º de la ley de 14 de Set. de 1863.

3.—Véase: verb. *Excepción de incompetencia*, núm. 3.

1^a—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 4º, inc. 3º del Cód. de Procedimientos.

1^b—Sin embargo, cuando la acción deducida trae su origen de actos administrativos del Gobierno, la jurisdicción competente es la federal: no sucede lo propio cuando la causa del pleito tiene un origen particular independiente de sus actos.

1^c—El art. 14 de la Ley Org. de los Trib. dice que el actor debe espresar bajo juramento el valor que asigna á la cosa demandada, á fin de establecer la competencia del Juez.

2—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 6.



jurisdicción competente para entender en la suma que resulte de todas las mensuralidades.—Jur. Civ., tom. 5, páguia 186, Ser. 3^a.

3. Jurisdicción por cantidad—Para que los restos, que fueron materia de una locación de un nicho, formen jurisdicción, es necesario que por su pérdida ó extravío se exija una indemnización.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 52, Ser. 4^a.

4. Jurisdicción por cantidad—Cualquiera que sea el monto de la deuda, la jurisdicción debe fijarse por la suma exigible al entablar la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 62, Ser. 4^a.

3—El propietario de una bóveda alquiló á otra persona el derecho de depositar dos féretros en ella, debiendo la locación durar cinco años á razón de 10 y 13 pesos respectivamente cada año. Este convenio importaba de parte del locador la obligación de tener los féretros durante ese tiempo en su bóveda y para el locatario la de pagar el precio de la locación, y terminada ésta sacarlos del panteón. El locatario sostenía que antes del vencimiento exigió del locador que le hiciera entrega de los cajones á fin de trasladarlos á una bóveda que había adquirido, y que con evasivas, no lo había hecho, con cuyo motivo se cercioró de que los había sacado y arrojados al osario. El locador negaba el hecho y aseguraba que estaban en la bóveda. El locatario no insistió respecto de la existencia de los restos en la bóveda, pero continuó el juicio por divergencias sobre el carácter de la acción instaurada, por discrepancia sobre la naturaleza del acto jurídico y por competencia del Juzgado. Se declaró la incompetencia del Juzgado de 1^a Inst. porque el arrendamiento no alcanzaba á la suma que fija la ley como de su competencia. Los objetos destinados á ocupar el local arrendado no pueden ejercer influencia sobre la naturaleza del juicio desde que no se entabla una acción fundada en su positivo extravío y dirigida á obtener una indemnización de daños y perjuicios. Bien pudo ser éste el objeto oculto de la demanda, pero en ella no se hablaba de indemnización ni se fijaba la suma á que podía ascender. Por consiguiente no podía concluirse sino que se trataba por entonces del cumplimiento de un contrato de locación que se decía incumplido, y cuyo monto no alcanzaba á la competencia del Juzgado.

Jurisdicción potestativa—Véase: *Costas*, núm. 18.

Jurisdicción territorial—Véase: *Excepción de litispendencia*, núm. 5.

1. Jurisdicción testamentaria—Corresponde á los Tribunales de la Provincia el conocimiento en la testamentaria si el causante falleció en aquella jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 75, Ser. 3^a.

Justa causa—Véase: *Posiciones*, núms. 14, 17 y 26.

Justificativos—Véase: *Excepción de defecto legal*, número 7.

Justo título—Véase: *Prescripción de diez años*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 12.

Juzgado—Véase: *Apercibimiento*, núm. 2—*Transacción*, núm. 5—*Acción personal*, núm. 2—*Correcciones disciplinarias*, núm. 1—*Escrito*, núm. 9—*De oficio*, número 5—*Excepción de arraigo*, núm. 7.

1—Por las mismas razones que se esponen en la nota al verb. *Juicio sucesorio*, núm. 1.





1ª. **Laudo arbitral**—La escepción de cosa juzgada fundada en un laudo arbitral consentido y cuya ejecución se sigue judicialmente, procede siempre que la acción tenga por base la misma cosa que dió origen al arbitraje y entre las mismas personas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 318, Ser. 4ª.

2. **Laudo arbitral**—La escritura de compromiso forma parte integrante del laudo arbitral; siempre que se pretenda su ejecución omitiendo la presentación de la primera, la escepción de falsedad de la ejecutoria es procedente, aun cuando no se haya interpuesto recurso ni deducido acción contra el segundo—Jur. Civ., tom. 10, página 160, Ser. 4ª.

Leotura—Véase: *Testamento*, núm. 3.

1ª. **Legados** — La insconstitucionalidad de la ley que grava á los legados y herencias transversales en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia si no ha sido propuesta y resuelta por el Inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 285, Ser. 3ª.

1ª—Véase: *Escepción de cosa juzgada*, núm. 2.

2—Véase: verb. *Escritura de compromiso*, núm. 1.

1ª—Véase: *Herencias transversales*, núm. 2.

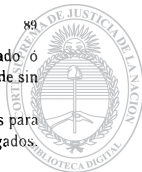


1. **Legado**—La existencia de un legado prohibido por la ley, no anula el testamento.—Jur. Civ., tom. 3, página 218, Ser. 3^a.

2. **Legado**—La inconstitucionalidad de la ley que grava los legados y herencias transversales, con un impuesto en favor de la educación común, no puede ser resuelta en segunda instancia si no fué propuesta y resuelta ante el Inferior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 315, Ser. 3^a.

1.—Otorgado un testamento con todas las formalidades legales, se dijo de nulidad porque contenía en una de sus cláusulas un legado á favor del cuñado del Escribano. Se declaró la nulidad de la cláusula, pero se resolvió por la validez del testamento. La disposición que rige actualmente el caso es la del art. 3664 del Cód. Civ. que dice: «El escribano y testigos en un testamento por acto público, sus esposas y parientes ó afines, dentro del cuarto grado, no podrán aprovecharse de lo que en él se disponga á su favor». Si el precepto no fuera suficientemente explícito en el sentido de que es el legado y no el testamento mismo es el que halla viciado de nulidad, cualquiera duda desaparece en presencia de la nota ilustrativa del artículo. El codificador, después de recordar que en el derecho francés no solo no tienen efecto las disposiciones del testador en provecho del Escribano, de los testigos ni de los parientes dentro del cuarto grado, sino que es nulo todo el testamento, agrega lo siguiente: «Nosotros decimos con Goyena, que un testamento es una cosa muy grave para declararlo absolutamente nulo por solo la sospecha de un interés personal que puede recaer en algunos de las mandas sin afectar en nada, por lo demás, la veracidad ó idoneidad del Escribano ó testigos. Coin Deliste, citado también por el Dr. Velez en el mismo pasaje, se expresa en estos términos: «Si el legado hecho», dice, «al notario es nulo como contrario á las buenas costumbres, y al principio que *nemo potest esse actor in re sua* es á consecuencia de la naturaleza de las cosas; hay pues, vicio de la disposición, vicio de fondo, pero parcial.» No puede haber vicio de forma cuando ninguna ley sobre la forma ha establecido ni el principio ni la nulidad. Es ciertamente el caso de la regla *utile per inutile*. Si nada indica que el notario haya abusado de su influencia para violentar al moribundo en el resto del testamento; si el mismo notario no ha escrito la disposición sino por que está obligado á escribir todas las disposiciones que le son dictadas, ¿por qué ha de destruirse el resto del testamento?

2—Véase: *Herencias transversales*, núms. 1 y siguientes.



3. **Legado**—La prohibición de entregar un legado ó parte de él, subsiste mientras judicialmente no quede sin efecto.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 18, Ser. 4ª.

4. **Legado**—Siempre que existan bienes suficientes para cubrir las deudas, debe hacerse entrega de los legados.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 382, Ser. 4ª.

5. **Legado**—El reparto que el testador haga del remanente del quinto, debe conceptuarse legado y no herencia si entre los favorecidos existen estraños á la sucesión, aun cuando manifieste que debe incorporarse al cuerpo general de bienes.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 157, Ser. 3ª.

Legado—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 3.

1ª. **Legatario**—No puede tener lugar la partición privada entre herederos mayores si afecta derechos de los legatarios—Jur. Civ., tom. 5, pág. 350, Ser. 4ª.

2. **Legatario**—Las alhajas y objetos de poco valor sobre los que el causante no haya determinado espresamente, corresponden al legatario especial de sus muebles y ropas de uso.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 52, Ser. 4ª.

3ª. **Legatario**—El legatario de parte alicuota tiene derecho proporcional á los frutos ó rentas de los bienes de la sucesión mientras dura la indivisión.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 418, Ser. 4ª.

4ª. **Legatario**—El de parte alicuota, puede pedir en cualquier tiempo la rendición de cuentas, sin esperar á que termine el juicio sucesorio con la división definitiva de

5—Véase: verb. *Herencia*, núm. 4.

1ª—El legatario era un menor, y es sabido que las particiones en que hayan menores, deben ser hechas judicialmente—art. 626, inc. 1º del Cód. de Proc.

2—Véase: verb. *Alhajas*, núm. 1.

3ª—Véase: verb. *Bienes de la sucesión*, núm. 3.

4ª—Véase: verb. *Bienes de la sucesión*, núm. 4.



los bienes y completa ejecución del testamento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 4^a.

5. **Legatario**—Carece de valor legal, con respecto a los legatarios, la tasación de los bienes testamentarios verificada sin su intervención, y en consecuencia, el mayor o menor valor fijado no enerva su derecho a exigir el pago íntegro del legado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 390, Ser. 4^a.

Legatarios—Véase: *Colación*, núm. 1—*Cuenta particionaria*, núm. 2.

Legislación anterior—Véase: *Hijo natural*, núm. 2.

1^a. **Legitimación**—Del hijo natural por el subsiguiente matrimonio de los padres, no requiere forma expresa, se opera *ipso facto*.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 142, Ser. 3^a.

2. **Legitimación**—Del hijo natural por el subsiguiente matrimonio de los padres, se produce cualquiera que sea la forma auténtica en que éstos reconozcan su filiación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 382, Ser. 4^a.

1^b. **Legitimidad**—Los jueces no pueden de oficio desconocer la legitimidad de los hijos nacidos después del matrimonio y concebidos con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 115, Ser. 3^a.

1. **Lesión enorme**—O enormísima, no es causa de nulidad de un contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Serie. 3^a.

Letra de cambio—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 12.

Letrado—Véase: *Desacato*, núm. 2.

Ley—Véase: *Pacto comisorio*, núm. 3.

5—Véase: verb. *Bienes testamentarios*, núm. 3.

1^a—Véase: verb. *Hijo natural*, núm. 5.

2—Véase: *Hijo natural*, núm. 9.

1^b—Véase: verb. *De oficio*, núm. 3.



Ley civil—Véase: *Actos ilícitos*, núm. 1.

Ley de monedas—Véase: *Moneda especial*, núm. 2.

Ley especial—Véase: *Acciones civiles*, núm. 1.

Ley empresa—Véase: *Servicios*, núm. 10.

Ley orgánica—Véase: *Municipalidad*, núm. 7.

Leyes argentinas—Véase: *Incapacidad*, núm. 1.

Leyes comerciales—Véase: *Obligaciones comerciales*, número 1.

Leyes del Congreso—Véase: *Juicios*, núm. 1.—*Competencia*, núm. 3.

1^a. *Leyes posteriores*—El estado civil de las personas no puede conceptuarse un derecho en expectativa, y las leyes posteriores al nacimiento no pueden modificar el derecho adquirido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Ser. 4^a.

Libro—Véase: *Notificación*, núm. 6.

1^b. *Libros de comercio*—La prueba que resulta de ellos solo es pertinente entre comerciantes y por acto de su comercio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 155, Ser. 3^a.

2. *Libros de comercio*—Los asientos de los libros de

1^a—Véase: verb. *Derecho en expectativa*, núm. 1.

1^b—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia establecida—art. 76 del Cód. de Com. ant., igual al 63 del vigente.—Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Libros de comercio*, núm. 2.

2—El actor manifestó en su escrito de demanda que había autorizado al demandado para solicitar en compra del Gobierno Nacional unas tierras, y que despachada la petición favorable por los poderes públicos, el demandado abonó su importe con fondos del actor que aquél tenía en su poder. Abonado el precio, el actor otorgó un poder á éste para aceptar y firmar la escritura de adquisición lo que no efectuó, viéndose obligado á servirse de otra persona. Dijo además, que estendida la escritura no pudo obtener su testimonio sin devolver los recibos otorgados por la oficina de crédito público en cambio del precio: que pedidos al demandado, se había resistido á la entrega, y lo demandaba para que verificara esa entrega. El demandado negó los hechos, diciendo que había sido entendido entre ambos, que la compra se hi-



comercio del obligado á probar, no tienen el carácter de principio de prueba escrita para hacer procedente la testimonial.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 180, Ser. 3ª.

3. Libros de comercio—El mandante tiene derecho á exigir del mandatario la exhibición general de sus libros en el juicio sobre rendición de cuentas.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 30, Ser. 4ª.

ciera en sociedad á cuyo efecto había cargado en la cuenta del actor la mitad del precio de adquisición, aunque por un error del tenedor de libros se había cargado todo á la cuenta del actor. No se exhibió en autos la escritura pública que debiera constatar el hecho del condominio, y el hecho de la sociedad. El demandado invocó como prueba sus libros de comercio, pues aunque el pago se había imputado á la cuenta del actor, constaba allí que una parte del precio había sido pagado por el demandado. No podía invocarse el art. 1192 del Cód. Civ. para suplir la falta de instrumento público en que debió hacerse constar la sociedad alegada—art. 1184, inc. 3º, Cód. Civ.—porque no se presentó escritura privada, ni podía estimarse como principio de prueba por escrito, la que resultaba de los libros del demandado, pues, como dice la ley, es principio de prueba por escrito todo documento público ó privado que emane del *adversario* ó de su causante ó de parte interesada en el asunto ó que tendría interés si viviera, y que haga verosímil el hecho litigioso. Los libros no pueden ser principio de prueba por escrito, por que ellos constituyen una prueba escepcional y privilegiada, cuyo alcance probatorio se limita al que estrictamente le asigna la ley mercantil. Ellos sirven para constatar operaciones comerciales, llevadas á cabo entre comerciantes y que se relacionan con su giro comercial, siendo evidente que la operación que nos ocupa no tiene este carácter. Además, los libros que se aducían como principio de prueba por escrito pertenecían al mismo que quería fundar su derecho en ellos.

3.—Se trataba de un juicio de rendición de cuentas. El demandado se opuso á su exhibición, la Cámara ordenó se llevara á cabo fundándose en que el mandante puede siempre exigir que el mandatario exhiba sus libros para comprobar el hecho de la administración del cual resultaría la obligación de rendir cuentas. Que no podía el Juzgado apreciar la prueba sinó al dictar sentencia definitiva—art. 108, Cód. de Procedimientos.—La exhibición debe hacerse en el lugar donde se encuentren los libros.



4^a. Libros de comercio—Procede el embargo preventivo si de los libros de comercio llevados en forma consta la deuda que se reclama.—Jur. Civ., tom. 9, págs. 138 y 235, Ser. 4^a.

Libros de comercio—Véase: *Compulsa de libros*, número 2.

Licitación—Véase: *Bienes municipales*, núm. 1.

Límites determinados—Véase: *Municipalidad*, núm. 2.

Lindero—Véase: *Reivindicación*, núm. 18—*Dimensión*, núm. 1.

Línea de edificación—Véase: *Construcciones*, núm. 1.

Línea imaginaria—Véase: *Pared divisoria*, núm. 1.

1^a. Liquidación—De los intereses, al practicar la liquidación deben cargarse desde la fecha de la demanda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 132, Ser. 4^a.

2. Liquidación—Las observaciones á una liquidación, deben recibirse á prueba siempre que se funden en hechos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 47, Ser. 4^a.

3. Liquidación—La escepción de inhabilidad de título puesta á una liquidación no aprobada es procedente.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 381, Ser. 4^a.

4^b. Liquidación—De honorarios; para que sea ejecutiva debe haberse hecho saber por tres días y encontrarse consentida.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 210, Ser. 4^a.

5. Liquidación—Es nula la sentencia aprobatoria de

4^a—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 43.

1^a—Véase: *Intereses*, núm. 5.

2—Se trataba de la ejecución de una sentencia, en cuyo caso la apertura de la causa ó incidente á prueba está prevista y ordenada por el art. 545 del Cód. de Proc.

3—Véase: *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 9.

4^b—Art. 59 del Apéndice al Cód. de Proc.

5—Art. 545 del Cód. de Proc.



una liquidación si el auto en que se niega la ampliación del término para observarla no se encuentra ejecutoriada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 73, Ser. 4^a.

6. Liquidación—La liquidación como consecuencia de una sentencia, debe ser practicada por contador público.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 115, Ser. 4^a.

Liquidación—Véase: *Sociedad*, núm. 5—*Intereses*, números 3, 4 y 5—*Acreeedores del viudo*, núm. 1.

Liquidación testamentaria—Véase: *Poder especial*, número 1.

1^a. Lista—La prueba testimonial debe pedirse en tiempo habil para la fijación de la lista en secretaría—Jur. Civ., tom. 9, pág. 32, Ser. 4^a.

Lista—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 1.

Litigante—Véase: *Correcciones disciplinarias*, núm. 1.

Litiscontestación—Véase: *Cuestiones*, núm. 1.

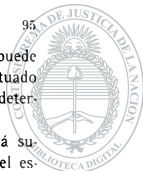
Litigio—Véase: *Acto ilícito*, núm. 11—*Domicilio*, número 1—*Sentencia nula*, núm. 1—*Embargo*, núm. 17—*Excepción de cosa juzgada*, núm. 1—*Honorarios*, número 12—*Mandato especial*, núm. 1—*Jurisdicción federal*, núm. 2—*De oficio*, núms. 1, 2 y 3—*Posiciones*, número 29—*Personería*, núm. 3—*Escrito*, núm. 9—*Poseción*, núm. 17—*Convenio*, núm. 1.

1^b. Litisexpensas—Siendo la suma fijada para litises—

6—Véase: verb. *Contador*, núm. 2.

1^a—La lista de testigos debe estar en secretaría durante tres días, de manera que para poderse recibir las declaraciones de testigos deben éstos ser presentados por lo menos cuatro días antes de vencerse el término probatorio. El art. 118 exige que la prueba se pida, se ordene y se produzca dentro del término. Si la lista se presenta con menor intervalo de cuatro días, no podría producirse dentro del término y por consiguiente estaría fuera de las condiciones establecidas en el art. 118 citado.

1^b—La sentencia condenaba al esposo á abonar la suma de 535 pe-



penas destinada á gastos generales, el esposo no puede resistir su pago, escepcionándose con haber efectuado el de los honorarios y costas de un espediente determinado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 64, Ser. 3ª.

2. **Litisespensas**—Para la fijación de la cantidad á su-
plir por litisespensas, debe justificarse el capital del es-
poso.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3ª.

3. **Litisespensas**—El Ministerio Fiscal solo es parte en
el juicio de divorcio en cuanto se discuta el vínculo, pero
no en los incidentes sobre alimentos y litisespensas.—
Jur. Civ., tom. 7, pág. 152, Ser. 3ª.

1. **Litispendencia**—Entre el espediente seguido contra
un heredero, por haberse apoderado de los bienes que
forman la herencia, invocando su carácter de único y
universal, y la testamentaria de los causantes, no existen

sos, cuya suma se descomponía así: Por vía de alimentos anticipados 120, para litisespensas 300, por honorarios de abogado y procurador 115. En este juicio el ejecutado opuso la escepción de pago, fundándose en que él había abonado los honorarios y las costas causadas en el juicio de divorcio. Se comprobó que el esposo había abonado las costas del juicio de divorcio, pero esta justificación no demuestra la procedencia de la escepción desde que esta sentencia al fijar la suma de 300 pesos para litisespensas, no menciona para nada el juicio de divorcio, por lo que es lógico suponer que el Juez destinó esa suma para los gastos más indispensables de los varios espedientes—pues no fueron solo dos—los que se relacionaban en la demanda. Por otra parte, dada la exigüidad de la suma fijada para espensas, no pudo ser la intención del Juez que con ella se abonaran todos los honorarios y costas causadas en todos los espedientes. Se comprobó además por el ejecutante, que solo en el juicio de divorcio, se habían abonado por costas más de 600 pesos.

2—Véase: verb. *Cantidad*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 6.

1—Porque no concurren los requisitos exigidos por la ley para que haya litispendencia, entre los cuales se requiere que se trate de las mismas acciones y entre las mismas personas. En el caso del sumario, uno de los espedientes versaba sobre la acción deducida contra uno de



los requisitos que la ley exige para que proceda la litispendencia.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 193, Ser. 3^a.

2^a. **Litispendencia** — La excepción de litispendencia opuesta en juicio ejecutivo, es improcedente si se funda en un juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 188, Ser. 4^a.

Litispendencia.—Véase: *Acción*, núm. 2.

1. **Locación**—Los preliminares necesarios para la locación, y aun la entrega de las llaves del predio, no bastan para dar por establecida la existencia del contrato, si no se justifica su terminación de conformidad de partes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 167, Ser. 3^a.

2^b. **Locación**—La estipulación en el contrato de locación de que el locatario no podrá hacer innovaciones en el edificio, importa que tampoco puede hacerle agregaciones que puedan afectar su solidez y seguridad, aun cuando resulte intacto el existente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 168, Ser. 3^a.

3. **Locación**—La fijación de un término para la locación, mayor que el permitido por la ley, cualquiera que sea la forma que se pretenda adoptar, debe juzgarse prohibida.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 92, Ser. 4^a.

4. **Locación**—Justificada la mora en el pago del alqui-

los herederos, mientras que en el otro se trataba de obtener la declaratoria de herederos á favor de todos ellos. No se trata por consiguiente de una acción deducida entre las mismas personas.

2^a—Véase: verb. *Excepción de litispendencia*, núm. 8.

1.—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 4.

2^b—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 13.

4—El contrato decía que si no se efectuaba el pago de dos períodos quedaría rescindido el contrato, lo que por otra parte es de precepto legal—art. 1579 del Cód. Civ.—El actor probó que había interpelado al inquilino requiriéndole el pago en el domicilio de éste—art. 509.—Comprobados estos extremos procede la rescisión del contrato.



ler estipulado, procede la rescisión del contrato de locación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 191, Ser. 4ª.

5. **Locación**—El contrato de locación obliga igualmente por el término estipulado, al locador y locatario, salvo convenio expreso que permita la rescisión antes del vencimiento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 260, Ser. 4ª.

6. **Locación**—Los daños y perjuicios, en caso de faltar al contrato, deben ser fijados por el precio estipulado como alquiler ó por la diferencia, en caso de nuevo alquiler por menor suma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 260, Ser. 4ª.

7. **Locación**—Procede la resolución del contrato de locación si el locatario infringió prohibiciones del locador espresamente estipuladas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 285, Ser. 4ª.

8. **Locación**—La existencia de un contrato de locación obliga á las partes al cumplimiento, sin perjuicio de las acciones que crean necesarias para fundar su rescisión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 11, Ser. 4ª.

9. **Locación**—El propietario causante de la rescisión del contrato de locación no inscripto, es responsable de los daños y perjuicios que tal hecho ocasione al locatario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 104, Ser. 4ª.

10. **Locación**—No es potestativo del locador el aumento

5—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 21.

6—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 89.

7—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 22.

9—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 108.

10—Si ese aumento fuese posible, el locatario quedaría frecuentemente librado al capricho del locador quien no siempre encontraría límites á sus exigencias cuando así viese convenirle. Por otra parte, el aumento del precio de la locación importa una modificación al contrato primitivo, y es sabido que éstos no pueden modificarse sino en virtud de concurrencia de voluntades. Un contrato es el concurso de dos ó más voluntades sobre un objeto de interés jurídico.



del precio de la locación, debe existir la conformidad del locatario.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 107, Ser. 4ª.

11. Locación—Aun justifica la locación, no procede la inhibición general para garantizar los alquileres.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 299, Ser. 4ª.

Locación—Véase: *Arrendamiento*, núm. 2—*Fianza*, número 2—*Contrato de arrendamiento*, núm. 1 y siguientes—*Posesión*, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núm. 95.

Locación de nichos—Véase: *Jurisdicción*, núm. 1—*Jurisdicción por cantidad*, núm. 3.

1. Locación de servicios—Para dar por existente este contrato basta la aceptación tácita de los servicios sin que se requiera prueba plena del acuerdo de voluntades que la ley exige en otros contratos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 408, Ser. 3ª.

2. Locación de servicios—Solo procede la fijación por

11—Véase: ver. *Alquileres*, núm. 3.

1—Según el art. 1623 del Cód. Civ., la prestación de servicios constituye un contrato consensual, lo que vale decir que es de aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento, ó como lo dice el artículo 114 de los que quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento. Si bien el consentimiento debe manifestarse por ofertas ó propuestas de una de las partes y aceptarse por la otra, según el art. 1144 del Cód. Civ., la legislación moderna haciendo á un lado el formulismo de los romanos, ha consagrado la doctrina de que no hay fórmulas sacramentales para encadenar el consentimiento. Así el artículo 1145 de nuestro Código, preceptúa que el consentimiento puede ser expreso ó tácito, siendo expreso cuando se manifiesta verbalmente por escrito ó por signos inequívocos; y resultando el consentimiento tácito, de hechos, ó actos que lo presuman ó que autoricen á presumirlo. Para mayor evidencia de la exactitud de esta conclusión, puede recordarse el texto expreso del art. 1146, el que establece que se presume el consentimiento tácito, siempre que una de las partes hiciere lo que no hubiera hecho si su intención fuese no aceptar la propuesta.

2—El actor cobraba trabajos prestados fuera de juicio y solicitó la



peritos del valor de los servicios prestados, si existe conformidad de partes sobre su importancia si han sido determinados en juicio contradictorio ante juez competente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 277, Ser. 3^a.

3. Locación de servicios—Reconocido y justificado el precio mensual, el locador debe ser condenado al pago del saldo adeudado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 411, Ser. 3^a.

4. Locación de servicios—El reconocimiento condicional de la locación de servicios, no basta para demandar al beneficiado, mientras no se justifiquen que fueron ejecutados por su orden y que se aprovechó de ellos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 430, Ser. 4^a.

5. Locación de servicios—Reconocida la locación de servicios sin precio estipulado, debe abonarse el que determinen los peritos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 163, Ser. 4^a.

constitución de un tribunal arbitral de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1627 del Cód. Civ. El demandado se opuso á la constitución de ese Tribunal fundándose en que se trataba de un asunto de la exclusiva competencia del Juzgado y desconociendo la importancia atribuida por el actor á sus trabajos. Esto importaba una disconformidad sobre una parte capital, que debe ser materia de controversia antes de que la fijación del monto de los honorarios sea hecha. El art. 1627 dice, que cuando ningún precio se hubiese estipulado por los servicios, será determinado por árbitros: de manera que los servicios deben justificarse en primer término, así como su importancia, lo que debe hacerse ante el Juez ordinario, para luego constituir el Tribunal arbitral encargado de fijar el precio. Resulta que el nombramiento de árbitros supone, ó que existe conformidad de partes en cuanto á la naturaleza é importancia de los servicios cuya remuneración deben fijar los árbitros, ó que no habiendo conformidad, haya el Juez determinado en la sentencia cuáles son esos servicios y su importancia.

4—Porque según la opinión de uno de los Camaristas cuyo voto sirvió de fundamento al fallo del Tribunal, no es lícito dividir la confesión de la parte. Este principio que tan antojadisamente se quiere sentar está en contra de la sana doctrina. Véase: verb. *Confesión*, núm. 3.

5—Art. 1627 del Cód. Civ.



6. **Locación de servicios**—Justificado el contrato de locación de servicios sin estipulación de precio determinado, los honorarios deben ser fijados por peritos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 244, Ser. 4^a.

7. **Locación de servicios**—Los prestados á un comerciante en otro carácter que el de dependiente, es un contratocivil.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 65, Ser. 4^a.

8. **Locación de servicios**—Si no se acompaña el detalle de los trabajos, la escepción de defecto legal de la demanda por locación de servicios, es procedente—Jur. Civ., tom. 10, pág. 300, Ser. 4^a.

Locación de servicios—Véase: *Comisión*, núm. 1—*Servicios*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 1 y siguientes—*Honorarios*, núm. 17.

1. **Locador**—Las prestaciones convenidas entre locatario y sublocatario solo pueden ser reclamadas, si se verifica el desalojo, el contrato directo entre locador y sublocador no modifica el primitivo convenio.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 165, Ser. 3^a.

2. **Locador**—Directo, el sublocatario no puede por su voluntad cambiar la forma del contrato convirtiéndose en locador directo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3^a.

Locador—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núms. 4, 12, 16 y 17—*Daños y perjuicios*, núms. 95, 96 y 50—*Escepción de litispendencia*, núm. 1 y siguientes—*Locación*, núm. 10—*Locatario*, núm. 5—*Locación de servicios*, núm. 3—*Precio*, núms. 6 y 13—*Condominio*, núm. 10.

Local social—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 4.

6—Véase: *Honorarios*, núm. 25.

7—Véase: *Contrato de locación de servicios*, núm. 5.

8—Véase: verb. *Detalle*, núm. 1.

1—Véase: *Desalojo*, núm. 4.

2—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 9.



1. **Locatario**— El carácter de locatario, que importa tenencia á nombre de otro, no puede modificarse por la sola voluntad; y por tanto, se conserva aún en el caso de que por hechos sobrevinientes pudiera ser cambiado por el de heredero, mientras judicialmente no fuese reconocido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 245, Ser. 3^a.

2. **Locatario**— La cláusula que permite al locatario transferir el contrato á sus sucesores, no puede entenderse prohibitiva de sublocar el fundo á terceros que llenen las mismas condiciones que el principal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 294, Ser. 3^a.

3. **Locatario**— Justificado el consentimiento del locatario para la construcción de las obras ordenadas por el locador, procede el rechazo de la acción de daños y perjuicios, fundada en ese solo hecho.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 208, Ser. 3^a.

4. **Locatario**—El que no ha hecho inscribir su contrato privado en el Registro de la propiedad, carece de derecho para demandar al tercero comprador de buena fe por ac-

1—Véase: verb. *Heredero*, núm. 2.

2—El contrato establecía que los locatarios podían transferir el contrato á sus sucesores para negocios del mismo ramo, y de aquí deducía el locador que los arrendatarios solo podían transferir el contrato á sus sucesores y no á otros que no lo fueran. Es evidente que esta consecuencia no es acertada, porque no existiendo una prohibición expresa de cederlo á otros, aun cuando la cláusula pudiera considerarse redundante, no es menos cierto que ello no puede importar una prohibición. El art. 1597 establece que la prohibición de ceder el arrendamiento importa la de subarrendar, no puede decirse que la *facultad* de ceder á determinada persona importe la de *prohibir* que esa cesión se haga á otra cualquiera. El locatario, en caso de no existir una prohibición expresa, puede hacer uso del derecho que le acuerda el art. 1583 del Código Civ.

3—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 19.

4—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 11.



ciones emergentes del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, página 122, Ser. 3ª.

5. **Locatario**—El locatario procede por el propietario, y reconocida la existencia de aquél en el predio se reconoce la posesión del locador.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 426, Ser. 3ª.

6. **Locatario**—El culpable de la rescisión del contrato carece de derecho para cobrar mejoras hechas en el predio arrendado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 22, Ser. 3ª.

7. **Locatario**—Abandona la cosa locada aun cuando existan sublocatarios, siempre que no deje persona que lo represente legalmente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 35, Ser. 4ª.

Locatario—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núme-

5—La posesión puede tenerse por medio de otros—arts. 2351 y 2352 del Cód. Civ.

6—Art. 1550, inc. 1º del Cód. Civ. Este artículo establece que resolviéndose la locación sin culpa del locador, no incumbe á éste pagar las mejoras necesarias ó útiles, si se estipuló que esas mejoras cederían á beneficio de la cosa arrendada. En el caso que nos ocupa se convino en que dichas mejoras quedarían á beneficio de la persona propietaria á la época del contrato: fundándose en esta circunstancia, el locatario sostuvo que no le correspondía pagarlas porque la cosa había cambiado de dueño. Se resolvió que siempre quedaban á beneficio del dueño actual de la cosa, porque por la naturaleza de las mejoras ú obras, éstas debían ser consideradas como accesorias del suelo y porque el beneficio era para el dueño anterior en su carácter de propietario del inmueble: ese derecho era inherente á esta calidad y pasaba con la cosa al nuevo propietario.

7—El sumario tiene su fundamento en el art. 1564 del Cód. Civil. Pero en el caso que nos ocupa el arrendatario sublocó la cosa dejándola en poder del subarrendatario: se dijo por la Cámara que esto no impedía el ejercicio del derecho acordado por dicho artículo, por cuanto el sublocador no puede ser considerado como representante del locatario haciendo sus veces ó tomando sobre sí las responsabilidades que pueden resultar del contrato de locación.

ros 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24 y 25—*Daños y perjuicios*,
núms. 18, 19, 95 y 108—*Desalojo*, núm. 3—*Alquileres*,
núms. 1 y 2.

Lotes—Véase: *Herederos mayores*, núm. 3.

Lugar—Véase: *Posiciones*, núm. 28.

Llave—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 4.

Lluvias—Véase: *Caso fortuito*, núm. 1.





1ª. **Madre**—En ejercicio de la patria potestad, no está obligada á tener depositados los fondos pertenecientes á los menores.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 232, Ser. 4ª.

Madre—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 5—*Alimentos*, núm. 2—*Divorcio*, núms. 3 y 5—*Filiación legítima*, núms. 2 y 3—*Filiación natural*, núms. 8 y 12—*Cuadora*, núm. 1.

1ª. **Madre natural**—La presunción de la ley de que la madre natural es soltera, solo cede ante la prueba, la que corresponde al que niegue ese carácter.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 229, Ser. 3ª.

2. **Madre natural**—La madre natural tiene personería para gestionar y percibir la cuota alimenticia, sin que

1ª—Véase: verb. *Fondos*, núm. 1. A este respecto hay jurisprudencia uniforme.

1ª—El Cód. Civ. al permitir á cualquiera de los padres naturales reconocer al hijo, prohíbe al mismo tiempo designar la persona con quien lo tuvo, si ésta no lo hubiese reconocido ya, y no pudiendo en este caso conocerse la calidad de esta persona, quiere decir, que se presume soltera mientras no conste lo contrario; pues de otra suerte no debería tenerse por legal dicho reconocimiento, ni este comprobaría la calidad de natural en el hijo reconocido, ni aún respecto del padre que hubiese verificado el reconocimiento.

2—Véase: *Cuota alimenticia*, núm. 1.



sea necesario el nombramiento de tutor especial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 411, Ser. 4ª.

Madre natural—Véase: *Filiación natural*, núms. 8 y 12—*Personería*, núm. 8.

Madrastra—Véase: *Divorcio*, núm. 3.

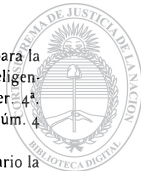
Mala administración—Véase: *Inhibición*, núm. 13.

Mala construcción—Véase: *Contrato de locación*, núm. 4.

Malicia—Véase: *Costas*, núm. 10.

1 **Mandamiento**—Es nula la ejecución en que no se haya librado mandamiento contra el deudor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 153, Ser. 4ª.

1—El requerimiento de pago es una formalidad esencial, en el juicio ejecutivo, que debe hacerse al deudor, pues sin ella no puede verificarse el embargo, desde que este solo procede cuando el demandado no lo verifica oportunamente como lo establece el art. 471 del Cód. de Proc. En el caso del sumario se había librado tan solo mandamiento de embargo preventivo, y considerando la parte que este trámite era suficiente para fundar la ejecución, pidió la citación de remate, y hecho esto, el ejecutado opuso la escepción de nulidad de la ejecución, la que se declaró procedente, teniendo en cuenta que á pesar de ser verdad que las formas apremiantes y los términos breves del juicio han sido establecidos en favor del demandante, para evitar que el deudor presunto dilate el cumplimiento de sus obligaciones, así es igualmente cierto que el ejecutado está interesado en que se llenen todas las formalidades prescriptas por la ley, en tanto cuanto su omisión puede serle perjudicial. Así, no se concibe que el ejecutante sin requerir el pago al deudor lo inhiba y cite de remate, cuando éste bien pudo evitar las molestias y gastos del juicio, haciendo efectivo el pago en el acto de ser requerido. Por otra parte hay créditos que pueden motivar un embargo preventivo y que sin embargo no pueden fundar una acción ejecutiva. Con la omisión del mandamiento de ejecución y solo con un embargo preventivo ó una inhibición, sería lo bastante para seguir un juicio ejecutivo, desnaturalizando su carácter y contrariando su objeto. La nulidad de la ejecución por violación de las formas que para ella establece la ley, que autoriza el art. 489 y que en el caso ocurren hacia valer la parte ejecutada, no es propiamente una escepción del juicio ejecutivo, puesto que esta solo afecta á la ejecución ó al crédito que se cobra, mientras que la nulidad afecta á la validez de todo lo actuado desde que ella se pro-



2°. **Mandamiento**—No es es requisito esencial para la validez de la ejecución que el mandamiento sea diligenciado en persona.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 288, Ser. 4^a.

Mandamiento —Véase: *Obligación condicional*, núm. 4.—*Embargo preventivo*, núm. 26.

1. **Mandante**—Tiene derecho á exigir del mandatario la exhibición general de sus libros en el juicio sobre rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 30, Ser. 4^a.

2^b. **Mandante**—Al apoderado corresponde justificar el fallecimiento de su mandante si no negase el hecho.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 262, Ser. 4^a.

duce; que el requerimiento hecho al deudor para el pago es un trámite esencial en el juicio ejecutivo, no solo resulta de estas consideraciones, sino que así también lo enseñan los tratadistas de procedimientos. Ha lugar á la nulidad por defecto de los trámites esenciales del juicio dice Caravantes, cuando no se requiriese al deudor para el pago ó no se le citase de remate.... ó por omisión de cualquier otro trámite que la ley espresa producir nulidad—tom. 3, parágrafo 1198—Los señores Manresa y Reus en su Ley de enjuiciamiento civil opinan de igual modo comentando los arts. 970 y 971—tom. 4°—No habiéndose librado mandamiento de embargo, aunque se haya decretado una inhibición general como medida preventiva, no hay propiamente juicio ejecutivo, por haberse prescindido de la formalidad esencial espresada.

2^a—De la diligencia practicada por el oficial de justicia constaba que el deudor fué requerido en su domicilio por tres veces sin lograr encontrarlo. Con estas diligencias se da cumplimiento á lo dispuesto en el art. 471 del Cód. de Proc. No es necesario que el deudor sea personalmente requerido para el pago, porque de otro modo el ejecutado podría impedir la prosecución del juicio con solo negarse ó ausentarse de su domicilio. Los términos del art. 471 revelan también que no es necesario el requerimiento personal cuando dice que no verificando el pago en el acto, se procederá á embargar bienes suficientes, y que el embargo se practicará aunque el deudor no se halle presente. Si el rechazo debe practicarse aunque el deudor no esté presente, cuando no verifique el pago en el acto, es porque no es necesario el requerimiento personal.

1—Véase: *Libros de comercio*, núm. 3.

2^b—Véase: *Fallecimiento*, núm. 6.



3ª. **Mandante**—La ratificación del acto por el mandante, con fecha posterior, tiene igual valor que la existencia espresa de autorización para llevarlo á cabo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 337, Ser. 4ª.

Mandante—Véase: *Contrato*, núm. 8—*Mandato*, núm. 9—*Mandatario*, núms. 3 y 9—*Costas*, núm. 21—*Apoderado*, núms. 3 y 4—*Apoderado único*, núm. 3—*Nulidad del procedimiento*, núm. 1—*Asuntos judiciales*, núm. 1—*Posiciones*, núms. 36 y 37—*Obligación de hacer*, núm. 15.

1. **Mandatario**—El administrador es un mandatario cuyos actos obligan á su principal en la misma forma y en la misma extensión de derecho que obligan los del último á su mandante.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 3ª.

2. **Mandatario**—Siendo el rematador mandatario del vendedor, la firma de aquél en el boleto no modifica la regla.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 103, Ser. 3ª.

3. **Mandatario**—La cláusula que impone la ratificación del mandante importa el reconocimiento espreso por el tercero de la carencia de facultades del mandatario para dar por terminado el contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 350, Ser. 3ª.

4. **Mandatario**—La declaración del supuesto mandata-

3ª.—Porque la ratificación equivale al mandato. Véase: *Mandato*, números 12 y 16.

1—Una persona fué nombrada para administrar un establecimiento de campo con facultad de recabar fondos para usarlos en el establecimiento. Siendo administrador y estando autorizado para contraer deudas, es claro que las contraídas en este carácter deben ser abonadas por el mandante, pues éste responde de los actos de su mandatario siempre que obre en los límites del mandato—art. 1946 del Código Civil.

4—El demandado negó la existencia del mandato, y no habiéndose presentado en autos la escritura, se quiso comprobar su existencia por medio de la prueba testimonial, presentándolo á este efecto al pretendido apoderado. Su declaración carece de valor probatorio, porque



rio no forma prueba.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 397, Serie 3ª.

5. **Mandatario**—El rematador que vende un inmueble por cuenta y á nombre del propietario no puede ser calificado como comisionista sino como mandatario.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 103, Ser. 3ª.

6. **Mandatario**—Aun careciendo el mandatario de facultad para el acto, el tercero puede justificar por medio de prueba testimonial la existencia del mandato verbal—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3ª.

7. **Mandatario**—La rendición de cuentas presentada por el mandatario y no observada por el mandante im-

falta necesariamente la imparcialidad de su dicho, desde que sosteniendo que procedía como mandatario y por cuenta y orden del mandante, es evidente que tiene interés en que se declare la existencia del mandato, siendo aplicable lo dispuesto en el art. 207, inc. 3º del Cód. de Procedimientos.

5—Se trata de la venta de un inmueble hecha en remate público por cuenta de su dueño. Esta operación no puede ser considerada como comercial—art. 452, inc. 1º, Cód. de Com. vig.—en cuyo caso no puede aplicarse la disposición del art. 122 del Cód. de Com. ant., igual al 121 del vig. Además, para que haya comisión es necesario que la operación se concluya á nombre del comisionista—art. 335 del Cód. de Comercio ant. y 222 del vigente—lo que no sucedía en el caso que nos ocupa, no pudiendo invocarse por consiguiente, la disposición del artículo 1929 del Cód. Civ. La Cámara ha resuelto en repetidas veces que los martilleros en este caso son verdaderos mandatarios y no comisionistas. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Martilleros*, núm. 1 y *Rematadores*, núm. 1.

6—El art. 1873 del Cód. Civ., autoriza la constitución del mandato verbal. El Codificador en la nota á este artículo dice: «los terceros pueden siempre probar por testigos el mandato, porque siendo un negocio entre otros, les es casi imposible procurarse una prueba escrita.» Esta doctrina está fundada en la opinión de Zachariæ, § 751, nota 4ª y Troplong, núm. 145.

7—El mandante exigió rendición de cuentas de su mandatario: éste contestó diciendo que ya había rendido cuentas, las que se encontraban



porta su aprobación ó conformidad.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 120, Ser. 3^a.

8. **Mandatario**—El mandatario que excede los límites del mandato, carece de derecho para exigir el pago de la compensación estipulada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 3^a.

9. **Mandatario**—Está obligado á presentar á su mandante la rendición de cuentas de administración en tanto no justifique haberla verificado.—Jur. Civ., tom. 5, página 293, Ser. 3^a.

10. **Mandatario**—Si el mandatario estiende el contrato á nombre propio, se hace responsable personalmente de los daños y perjuicios que la falta de cumplimiento irrogue al tercero, aun cuando se justifique que éste conocía su carácter de mandatario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 33, Ser. 3^a.

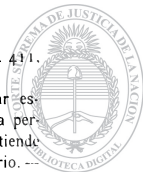
11. **Mandatario**—La facultad conferida al mandatario para vender los bienes que correspondan por herencia al mandante, no importa la de ceder los derechos heredi-

en poder del actor, quien á su vez replicó diciendo, que esas cuentas habían sido objetadas: no comprobó el mandante este último extremo por cuya causa fué absuelto el demandado.

9—Art. 1909 del Cód. Civ.

10—Véase: verb. *Contrato*, núm. 15.

11—El poder en virtud del cual el mandatario procedió á la venta decía: «Se otorga poder para proceder á la división de dicha herencia y á la venta y enajenación de todo lo que correspondiera á los mandantes, por el precio que creyere más conveniente, otorgando las respectivas escrituras, y al efecto confieren al apoderado nombrado todas las facultades y plenos poderes necesarios para el cumplimiento de la división y venta antes espresadas». Del texto de este poder resulta, de estricta aplicación la disposición del art. 1187 del Cód. Civ. Debe tenerse presente por otra parte, que la cesión fué hecha por documento privado siendo su valor mayor de mil pesos, lo que coloca al contrato fuera de las condiciones legales del art. 1184, correlativo del 1154 y 1155 del mismo Código.



tarios antes de recibirla.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 411, Ser. 4^a.

12. **Mandatario**—El poder especial para otorgar escritura de venta, sin determinar especialmente á la persona á la cual debe transferirse el inmueble se entiende conferido para otorgarla á voluntad del mandatario. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 45, Ser. 4^a.

13. **Mandatario**—El mandatario debe al mandante cuenta de lo que haya recibido en virtud del mandato. —Jur. Civ., tomo 6, pág. 179, Ser. 4^a.

14. **Mandatario**—La recepción de un documento de crédito firmado por un tercero, para su descuento obliga al mandatario á la devolución, cualesquiera que hayan

12—En este caso el mandatario obra dentro de los límites de su poder y debe el acto ser respetado por el mandante—arts. 1095 y 1931 del Cód. Civ.

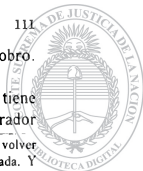
13—Arts. 1904 y 1909 del Cód. Civ.

14—La demanda decía que venía á exigir del demandado un documento que le entregó para ser descontado, si no hubiese éste efectuado el descuento, y si lo hubiese hecho, que entregara la suma importe del documento. El demandado dijo que había recibido un pagaré suscrito por una persona y endosado por otra, el que tuvo que devolver á uno de éstos por haberse rescindido el negocio que le dió origen y por haber sido él otorgado en garantía de dicha negociación; que además los otorgantes habían caído en insolvencia y sus firmas nada valían en plaza. El demandado no probó ninguna de estas defensas, y no habiéndose probado, la demanda debía prosperar de acuerdo con lo preceptuado en la ley 1^a, tit. 14, Part. 3. Y aun dado el caso de que esos extremos se hubiesen comprobado, no habría mejorado en nada la situación del demandado, porque habiendo reconocido él que el pagaré le fué entregado para ser descontado en plaza, y si ese descuento le fué imposible por insolvencia de los firmantes, esa circunstancia no lo autorizaba á entregarlo á un tercero sin intervención y consentimiento del actor, desde que éste era verdadero dueño del pagaré. Aun comprobado el hecho, no sería bastante para exonerar al demandado del cumplimiento de su obligación—art. 628 del Cód. Civ.

sido las circunstancias que hubiesen impedido su cobro. Jur. Civ., tom. 6, pág. 187, Ser. 4^a.

15. **Mandatario**—Consentido el auto en que se tiene por parte á una mujer como mandatario ó procurador

15—Porque una vez consentida la providencia no se puede volver sobre lo resuelto, por haber ella pasado en autoridad de cosa juzgada. Y aun cuando esto no hubiese sucedido, tampoco habría derecho á oponerse á que ejerza la procuración una mujer, porque no siendo la Ley 5^a, tít. 5^o, Part. 3^a, según la cual, la mujer no puede representar á otra persona, ni puede asumir mandato judicial sino por sus ascendientes y descendientes, y esto en casos especialmente determinados, pues no estando en vigencia entre nosotros y habiendo sido derogada por disposiciones espresas de la legislación que nos rige y por ser contraria á su espíritu. El inc. 6^o del art. 1870 del Cód. Civ. establece que las disposiciones del título del mandato son aplicables á las procuraciones judiciales en todo lo que no se opongan á las del Cód. de Proc.; y el art. 1896 dice que pueden ser mandatarias todas las personas capaces de contratar, excepto para aquellos actos para los cuales la ley ha conferido atribuciones especiales á determinada clase de personas. ¿A qué leyes se refiere esta última parte del art. 1896? ¿A las antiguas españolas? No; porque la capacidad civil de las personas es regida por las nuevas leyes, aunque abroguen ó modifiquen las cualidades establecidas por las leyes anteriores—art. 4046.—No, porque lo que no está dicho explícita ó implícitamente en ningún artículo del Cód., no puede tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley general, sea por una ley especial—art. 22.—La última parte del art. 1896, concordante con el inciso 6^o del art. 1870, se vé claramente que ha querido referirse y se ha referido á las atribuciones especiales á determinada clase de personas que haya conferido el Cód. de Proc. en lo relativo á las procuraciones judiciales. El art. 9 de este Cód. establece, que todo litigante tiene el derecho de comparecer personalmente ante cualesquiera jueces ó tribunales, ó hacerse representar por cualquiera persona hábil, mayor de edad, sea ó no procurador. El art. 10 emplea las mismas palabras, toda persona que litigue, etc., dice, y el art. 13 repite la misma locución «la persona que se presente en juicio» etc. Según el Cód. de Proc. puede, pues, ser mandatario judicial toda persona hábil mayor de edad. La capacidad de las personas está exclusivamente regida por el Cód. Civ.—art. 6^o—y ante él la mujer no casada, mayor de edad, es hábil para ejercer todos los derechos y contraer todas las obligaciones que no le





de una de las partes, debe ser desechada la nulidad fundada en la incapacidad civil del apoderado. —Jur. Civ., tomo 9, pág. 18, Ser. 4ª.

16. **Mandatario**—Estipulada como comisión de venta de un inmueble el excedente de un precio determinado, el mandatario carece de derecho para exigirla si reconoce que no se cumplió la condición. —Jur. Civ., tom. 9, página 90, Ser. 4ª.

17. **Mandatario**—Debe rechazarse la rendición de cuentas contra el mandatario, si el actor con anterioridad ha reconocido judicialmente que investía el carácter de socio en el negocio que motivó el mandato. —Jur. Civ., tomo 10, pág. 125, Ser. 4ª.

Mandatario—Véase *Libros de comercio*, núm. 3—*Rendición de cuentas*, núm. 21—*Estatutos sociales*, núm. 1

sean espresamente prohibidas—arts. 52 y 53.—Las mujeres que son personas hábiles cuando no están casadas, pueden ser mandatarias en juicio, según resulta de las disposiciones combinadas de los Códigos Civ. y de Proc. Y la Ley 5ª, tit. 5ª, Part. 3ª ha sido derogada por el art. 814 del Cód. de Proc. cuando establece que quedan derogadas todas las leyes y disposiciones anteriores relativas al enjuiciamiento civil y comercial, en todo lo que sean contrarias; como lo sería la incapacidad de la mujer para ejercer la representación de otra persona en juicio. Si el Cód. de Proc. hubiera querido reproducir la prohibición consignada en la Ley de Part. que importa una verdadera incapacidad relativa de la mujer, la habría consignado espresa y claramente, y no se habría valido de los términos generales y amplios que emplea en el artículo 9º cuando dice cualquiera persona hábil. Esta forma de interpretación de nuestros Cód. vigentes, no sólo armoniza sus disposiciones sobre la materia, sino que también responde á los principios de justicia compatibles con la libertad individual, á no ser que ellos estén enteramente prescriptos por la ley.

16—Véase: *Comisión*, núm. 6.

17—Porque la confesión de la parte hace que el carácter de mandatario invocado después no tenga ningún valor. Como socio tiene el derecho de tal y en ese carácter puede deducir su acción, pero no como mandatario.



—*Intereses*, núm. 1 — *Apoderado*, núm. 1 y siguientes — *Contrato*, núm. 15 — *Daños y perjuicios*, núms. 42 y 85 — *Excepción de defecto legal*, núm. 7 — *Procuraciones judiciales*, núms. 1 y 2 — *Posiciones*, núms. 3, 36 y 37 — *Simulación*, núm. 6 — *Mandato*, núm. 15 — *Contradocumento*, núm. 2.

1. **Mandato**.—El mandato sujeto á instrucciones según el mismo instrumento, no queda perfecto mientras el mandante no las otorgue; y el tercero que no las hubiese exigido al contratar, carece de acción para pedir el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 45. Ser. 3^a.

1.—El mandato se confirió para que se efectuara la compra de ciertos derechos con arreglo á instrucciones que le comunicaría el otorgante, lo que se consignó espresamente en la escritura de mandato. Un mandato sujeto á instrucciones no queda perfecto sin el otorgamiento de éstas, porque lo contrario importaría atribuirse el mandatario facultades amplias que el mandante espresamente ha entendido negarle. Si de acuerdo con el art. 307 del Cód. de Com., concordante con el 1905 y el 1938 del Cód. Civ., las instrucciones forman parte integrante del mandato, se concibe sin esfuerzo que éste no quede perfeccionado cuando del instrumento mismo resulte, no ya que tales instrucciones fueron otorgadas, sino que aún no estaban establecidas. Y para llegar á estas conclusiones, no es necesario ponerse en el caso de abusos del mandatario, que no siendo de presumirse, debe probar el que los imputa. Una cosa es, que conferido un mandato con arreglo á instrucciones reservadas, el tercero contrate con el mandatario, en cuyo caso debe protegerse su buena fe, si él ignoraba que el mandatario se excedía, y otra es que tales instrucciones no hayan sido dadas y conste así del propio instrumento de la procuración, como en el caso que nos ocupa. En la primera hipótesis hay mandato, hay facultades determinadas, y entonces puede decirse que el mandatario obra en los términos de la procuración, aun cuando hubiese en realidad excedido el límite de sus poderes, y el acto se reputa ejecutado en los límites del mandato—Cód. Civ., artículo 1934.—En el segundo supuesto, que constituye el caso presente, el mandatario no puede sostener que obrara en los términos de su procuración, desde que sus facultades quedaban subordinadas al cumplimiento



2. **Mandato**—Reconocido el hecho de la administración por un condómino, debe rendir cuentas á los otros condóminos, aun cuando no haya existido mandato en forma.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 143, Ser. 3^a.

3. **Mandato**—Para exigir el cumplimiento del contrato al que se dice mandante, es indispensable la justificación de la existencia del mandato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 397, Ser. 3^a.

4. **Mandato**—Los actos del mandatario constituido por instrumento privado, practicados después de la cesación del mandato, no obligan al mandante.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Ser. 3^a.

5. **Mandato**—Las declaraciones ó modificaciones al mandato que haga el mandante después de firmado el contrato, no son aplicables ni obligan al tercero.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 335, Ser. 3^a.

6. **Mandato**—La escepción de falta de personería es improcedente si el poder individualiza el objeto del mandato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 229, Ser. 3^a.

7. **Mandato**—La existencia del mandato para la compra de inmuebles, solo puede justificarse presentando la

de una condición, siempre que él no pruebe haberse realizado. Se comprende que el mandante estuviera obligado á la prueba, en el caso de que habiéndose otorgado las instrucciones, él pretendiera que éstas no fueron cumplidas, tal hecho importaría una escepción, ó cuando menos un hecho nuevo en el pleito, que echaría sobre él el *onus probandi*. Pero es que en el caso que nos ocupa no hay ni escepción ni hecho nuevo, ni modo de echar el peso de la prueba sobre el mandante que era el demandado en el caso del sumario.

2—Véase: verb. *Condominio*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Contrato*, núm. 8.

4—Véase: *Instrumento privado*, núm. 1.

5—Véase: *Contrato*, núm. 6.

6—Véase: *Escepción de falta de personería*, núm. 1.

7—Véase: *Escritura pública*, núm. 5.



escritura pública en que se constituyó.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 199, Ser. 3ª.

8. **Mandato**—No procede la rendición de cuentas en tanto no se justifique la existencia del mandato.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 199, Ser. 3ª.

9. **Mandato**—Las disposiciones del Código Civil referentes al mandato, solo son aplicables á las procuraciones judiciales en cuanto no se opongan á las disposiciones del Código de Procedimientos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 171, Ser. 4ª.

10. **Mandato**—La revocación del mandato en asuntos judiciales debe ser expresa, la simple presentación personal del mandante, no basta para dar por caducado el poder.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 171, Ser. 4ª.

11. **Mandato**—Las sentencias ejecutoriadas que declaran la existencia del mandato, bastan para llenar la exigencia del tercero que contrató con el mandatario.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 89, Ser. 4ª.

12. **Mandato**—Justificada la autenticidad del mandato, el mandante está obligado á cumplir los contratos llevados á cabo por el mandatario, aun cuando éste se hubiera estralimitado, siempre que se justifique su ratificación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 141, Ser. 4ª.

8—El mandato hace nacer la obligación de rendir cuentas: si no existe el mandato no nace la obligación de rendir cuentas. Además la demanda debe probar los hechos en que funde su acción: el hecho fundamental en el juicio de rendición de cuentas es el mandato. Si no se comprueba su existencia, la demanda no puede prosperar, de acuerdo con el principio sentado en la Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

9—Véase la última parte de la nota al verbo *Asuntos judiciales*.

10—Véase: verb. *Asuntos judiciales*.

11—Porque las sentencias ejecutoriadas son instrumentos públicos, como lo son las escrituras públicas que constatan el mandato—art. 979, incs. 1 y 4.

12—Arts. 1931 y 1936 del Cód. Civ.



13. **Mandato**—Los actos del mandatario, llevados á efecto después de la revocación tácita ó espresa del mandato, no obligan al mandante si el tercero tenía pleno conocimiento de la cesación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 181, Ser. 4^a.

14. **Mandato**—Procede la caución de *rato et grato* para las gestiones sin poder bastante, debiendo fijarse un término para la prestación de mandato en forma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 398, Ser. 4^a.

15. **Mandato**—El mandatario puede sustituirlo sin autorización del mandante.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 90, Ser. 4^a.

16. **Mandato**—La ratificación equivale al mandato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 193, Ser. 3^a.

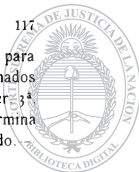
Mandato—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 13—*Posiciones*, núm. 3—*Costas*, núm. 14—*Instrumento privado*, núm. 1—*Contrato*, núm. 6—*Mandatario*, núms. 8, 13 y 17—*Nulidad de un acto jurídico*, núm. 1—*Herederos*, núm. 2—*Rematador*, núm. 2—*Rendición de cuentas*, núms. 16 y 20—*Sindicato*, núm. 1—*Estatutos sociales*, núm. 1—*Poder especial*, núm. 5.

13—El Dr. Llerena comentando el art. 1965 del Cód. Civ. dice: «El conocimiento que los terceros hayan tenido de la cesación del mandato, no es necesario que sea una notificación formal por parte del mandante; basta que de cualquier modo hayan tenido conocimiento, sea directa sea indirectamente de la cesación del mandato, para que el acto no obligue al mandante.» La misma doctrina sostienen: Paul Pont, tom. 8^o, pág. 679; Duranton, tom. 18, pág. 272; Zachariæ, tom. 5^o, pág. 55, nota 7; Dalloz, Mandat, § 449, y finalmente Troplong sobre el art. 2039 del Cód. de Napoleón, quien sostiene que la ley no se preocupa de los medios por los cuales los terceros han podido instruirse del estado de las cosas.

14—Véase: verb. *Caución*, núm. 2.

15—Pero responde de la persona en quien sustituye el mandato—art. 1924 del Cód. Civ.

16—Véase el núm. 12.



1^a. **Mandato especial**—Para ciertos actos, no basta para intervenir en litigios de fecha anterior no determinados en el instrumento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 134, Ser. 3^a.

2^a. **Mandato especial**—El mandato especial termina conjuntamente con el asunto para que fué conferido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 362, Ser. 4^a.

Manifestación afirmativa—Véase: *Jactancia*, núm. 1.

Mandato verbal—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 5.

Marca de fábrica—Véase: *Prescripción de marca de fábrica*, núm. 1.

1. **Marido**—Durante la menor edad de la esposa, debe justificarse plenamente la necesidad ó conveniencia para la estracción de fondo que pretenda el marido.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 349, Ser. 4^a.

2^b. **Marido**—El marido, además de los alimentos debe pagar los muebles que la esposa necesita para su uso, según su condición social.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 87, Ser. 4^a.

Marido—Véase: *Acreeedores del viudo*, núms. 1 y 2—*Albacea*, núm. 7—*Inhibición*, núm. 13—*Nulidad del juicio ejecutivo*, núm. 3—*Ilegitimidad*, núm. 1—*Paternidad legítima*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 1—*Venia*, núm. 1—*Administrador*, núm. 4—*Bienes del esposo*, núm. 1—*Divorcio*, núm. 7—*Bienes de la esposa*, núm. 1—*Revocación*, núm. 1.

1^b. **Martillero**—La comisión del martillero en la venta de bienes raíces es de dos por ciento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 105, Ser. 4^a.

1^a—Art. 1884 del Cód. Civ.

2^a—El juicio había terminado por transacción, celebrada entre el mandante y la parte contraria.

2^b—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 14.

1^b—Véase: *Remate judicial*, núm. 9, y *Comisión*, núm. 4.



2. **Martillero**—El martillero tiene derecho al cobro de media comisión si el remate judicial se suspende á petición de partes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 77, Ser. 4ª.

3. **Martillero**—La venta de la prenda debe hacerse sin juicio, solo procede la notificación del deudor á los efectos del nombramiento del martillero.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 116, Ser. 4ª.

Martillero—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 33.—*Simulación*, núm. 6.

Materia del litigio—Véase: *Sentencia*, núm. 5.

1. **Materiales**—El propietario no es responsable res-

2—La Cámara confirmó por sus fundamentos la resolución del Juez de 1ª Inst. que decía: «teniendo derecho á la mitad de la comisión cuando el remate no se realiza, según la jurisprudencia establecida por la Cámara en casos análogos.» Hemos buscado esta jurisprudencia establecida en casos análogos y no hemos podido encontrarlos. Para demostrar que esos casos no existen, vamos á citar las diversas resoluciones dictadas y que tienen relación con el caso que nos ocupa. En el verb. *Comisión*, número 7 de este tomo se lee: «El Juez debe fijar una comisión equitativa una vez suspendido el remate sin culpa del martillero.» En el tomo 2º de la Inst., verb. *Remate*, núm. 1, se lee que: «Suspendido el remate sin culpa del martillero, éste tiene derecho á una comisión equitativa que el Juez deberá fijar.» En el tom. 1º, verb. *Martilleros*, núm. 1729, se registra una resolución que dice: «Los martilleros que suspenden una venta por voluntad de las partes, tienen derecho á cobrar una retribución por los trabajos practicados.» Estos son los casos resueltos hasta hoy, no hay uno solo que cohoneste la resolución del sumario la que se funda en numerosos casos y en la jurisprudencia establecida por la Cámara. Por consiguiente el fundamento invocado por este Tribunal es falso. Solo la Cámara de lo Com. tiene resuelto un caso en el sentido del sumario. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Martilleros*, número 4. Falta la nota 3, art. 324 del Cód. Civ.

1—Se entabló demanda diciendo el actor que vendieron é hicieron colocar mosaicos en una casa que el demandado hacía construir: éste contestó diciendo, que no había celebrado con el actor contrato alguno, ni comprado material alguno para la obra, pues había contratado con un empresario la construcción de su casa por un tanto, agregando que si éste adeudaba el mosaico, sería éste el deudor del actor y no él.



pecto á los terceros que proveyeron al constructor de materiales para la obra, siempre que ésta hubiese sido contratada por un precio determinado.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 284, Ser. 4^a.

1. **Matrimonio**—Los matrimonios, aún entre protes-

Resulta de aquí que la obligación cuyo vínculo de derecho pesaría sobre el demandado, tiene que emanar del supuesto contrato ajustado entre actor y demandado. El contrato, fuente natural de obligaciones, y no la colocación del mosaico, hecho accidental que no es negado, que ha podido existir sin traer aparejado el *vinculum juris* para el demandado —Cód. Civ., art. 1629—y que como simple hecho no puede enjendrar obligaciones á menos de importar un *cuasi-delito*; es ese el hecho generador del juicio que los demandaantes, debiendo no probaron. No es el caso de que el demandado se haya enriquecido con lo ageno. Si él ajustó toda su obra por un tanto y pagó el importe de los materiales que el empresario de la construcción adquirió por su propia cuenta, no hay provecho alguno para aquél, y podría haber por el contrario perjuicio grande si se le obligara á pagar dos veces los mosaicos colocados en su casa, una al constructor y otra á los actores, que tienen su derecho á salvo contra quien los compró. Es lo mismo que si el demandado hubiera comprado de segunda mano, como se dice en el comercio. ¿Quién sostendría la obligación, del que compra al menudeo, de pagar al mayorista si éste no es pagado por el minorista de la mercadería consumida por el primero? Por eso el art. 1645 del Cód. Civ. preceptúa que los que ponen su trabajo ó materiales en una obra ajustada en un precio determinado, no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que éste adeuda al empresario. Y no fué esa la acción que ha deducido el demandante.

1—Los esposos, ambos de nacionalidad alemana, se casaron en esta ciudad en 1884, ante el pastor y según los ritos de la iglesia metodista episcopal. El marido ocurrió á los tribunales pidiendo el divorcio. Convocadas las partes á juicio verbal se suspendió la audiencia diciendo que encontrarían quizá una solución más conveniente y más satisfactoria para los interesados. Y con efecto, luego presentaron un escrito en el que reconociendo la nulidad del matrimonio por no haberse observado en él las formalidades establecidas por el Cód. Civ., pedían al juez se sirviera declarar dicha nulidad y aprobar al mismo tiempo el arreglo que hacían sobre los intereses, renunciando recíprocamente á todas las acciones que pudieran corresponderles. El vicio de forma que atribuían



tantes, celebrados ante un pastor de distinta secta de

á su casamiento consistía en no haber intervenido en su celebración, según lo prescribían las leyes vigentes, los ministros de las comuniones á que pertenecían los contrayentes; porque siendo el esposo católico y perteneciendo la esposa á la iglesia evangélica, se habían casado bajo el rito y con la intervención del pastor metodista episcopal. Se acreditaba que la esposa pertenecía á la iglesia Evangélica, por las correspondientes partidas de bautismo y de confirmación, que se habían exhibido en autos, autenticadas en debida forma, espedidas en Berlín y firmadas por el pastor de la iglesia de San Marcos de la espresada comunión. El escrito presentado al Juez, de común acuerdo de partes, ¿debía ser considerado como una transacción, un reconocimiento, ó una demanda? Esta cuestión es importante, pero en realidad no ofrece dudas ni dificultades; los esposos reconocen como nulo su matrimonio, y demandan de común acuerdo, la declaración de la nulidad, arreglando al mismo tiempo y transigiendo en las cuestiones civiles que podrían suscitarse en consecuencia de esa declaración. Esto puede hacerse legalmente, pues aunque no sea permitido transigir sobre el estado de las personas, es lícito sinembargo, hacerlo sobre los intereses que de él dependan; y en cuanto al reconocimiento de la existencia de causales de nulidad en el matrimonio, si bien no se justificarían con él, tampoco perjudicaría el derecho de acreditarlas por otros medios legales. Siendo indisoluble el vínculo matrimonial, el casamiento no puede disolverse de común consentimiento, sino por las causas determinadas por la ley, ni éstas podrían acreditarse tampoco por el solo reconocimiento de los cónyuges, aunque si realmente existiesen y se probasen por otros medios la declaración de nulidad sería procedente, de conformidad al deseo y á la petición de las partes. Entonces, pues, en el caso presente, con absoluta prescindencia del reconocimiento de la nulidad de su matrimonio que hacen los demandantes, se debe contraer toda la atención á examinar la suficiencia ó insuficiencia legal de las causales en que la fundan, como también á averiguar la eficacia ó fuerza de los medios probatorios que se deducen. Y hemos visto que esas causales consistían en que los contrayentes no pertenecían al rito de la iglesia en que se casaron, y cuyo pastor, por tanto, no se hallaba habilitado para autorizar esa unión; el esposo, según parece, era católico, la novia de la comunión Evangélica y el sacerdote, en fin, de la metodista Episcopal. Con respecto á la regilión del esposo que no resultaba bien justificada, porque el documento que se aducía al respecto, aunque parecía sincero y no infundía sospecha alguna, era un instrumento privado, que no había sido debidamente



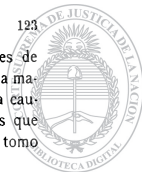
aquella á que pertenecen los contrayentes, son nulos y los

auténtico, y por consiguiente no podía merecer fe en juicio, ni admitirse por prueba legal. El hecho de pertenecer una persona al protestantismo, no implica que pertenezca á determinada secta, porque consistiendo principalmente aquella religión en sustraerse de la obediencia del Pontífice Romano, conservando más ó menos íntegras las doctrinas del cristianismo, declararse protestante equivale sin duda alguna á separarse del catolicismo y desconocer la autoridad de la iglesia universal. Pero estando dividido el protestantismo en innumerables sectas; por el hecho de declararse protestante un católico, como lo había hecho el esposo en el caso que nos ocupa, esto no podía importar en manera alguna adoptar la fe ó ingresar á la iglesia Metodista Episcopal, bajo cuyos principios religiosos contrajeron matrimonios las partes, pues igualmente sería protestante haciéndose Presbiteriano, Anabaptista ó Luterano. Por consiguiente, debiendo para la validez del matrimonio intervenir el pastor de la comunión de los contrayentes, la declaración vaga y genérica de protestante, de ninguna manera habilitaría á un pastor Metodista Episcopal para proceder á autorizar la unión que se trataba de celebrar. No puede admitirse en modo alguno que las personas que se presenten á casarse ante el cura, pastor ó sacerdote de una religión, por el mismo hecho declaran pertenecer á esa comunión, á la cual por lo menos ingresan entonces así, y que eso basta para que el matrimonio sea válido. De admitirse semejante teoría, habría sido completamente inútil que el Código exigiese como condición esencial á la validez del matrimonio, según lo requiere sin embargo, el que sea autorizado por un sacerdote de la comunión á que pertenezcan los esposos; pues esto nunca podría dejar de suceder si por el hecho de intentar casarse y de celebrar matrimonio ante algún sacerdote, de cualquiera religión que fuere, debiera suponerse que los esposos ingresaban y se incorporaban á ésta. Tratándose de religiones positivas, entre las cuales deben enumerarse las diversas sectas del protestantismo, todas ellas se encuentran constituidas en iglesias, tienen un símbolo ó doctrina que las caracteriza, distinguiéndolas de las demás, usan un culto especial, sus miembros se reconocen entre sí, y en fin, emplean ciertas ceremonias para la incorporación á su seno de nuevos neófitos, además de la profesión de fe, y á ninguna se ingresa por solo el matrimonio. Acaso porque un judío ó mahometano, ocultando su religión, se presentara á casarse ante un cura católico; ¿debería desde luego ser tenido por tal y su matrimonio se había de considerar válido aún cuando no fuese bautizado, ni mucho menos aceptare la doctrina del cristianismo y las enseñanzas de la iglesia



tribunales pueden así declararlos á solicitud de parte.—
Jur. Civ., tom. 2, pág. 160, Ser. 3ª.

católica? No, ciertamente; el enunciar esa proposición es incurrir en un error manifiesto. Otro tanto debe decirse con respecto á los miembros de las diversas iglesias protestantes. No es admisible que por casarse dos personas ante un sacerdote de cualquiera de ellas, queden incorporados de hecho á esa iglesia, aún cuando no conozcan sus principios y tengan fe en sus creencias; antes bien, ese acto en tales condiciones importaría una profanación; y si á pesar de esto, se hubiera de considerar válido semejante matrimonio, habiendo querido el Código que este llevase carácter religioso, no habría hecho más que convertir el culto en una gran farsa. Resulta, pues de lo espuesto que en el caso que nos ocupa no basta seguramente que el esposo al casarse se declare protestante, aun cuando su ánimo sea efectivamente el abandonar el catolicismo para incorporarse á determinada iglesia disidente y conferir jurisdicción al pastor de la comunión metodista á la que no parece haber pertenecido jamás, á fin de habilitarlo legalmente á autorizar su matrimonio. Además el matrimonio era nulo por razón de la comunión á que pertenecía la esposa, pues se había justificado legalmente que ella pertenecía á la iglesia Evangélica; y no puede sostenerse, teniendo en cuenta las prescripciones terminantes del Código Civil, que un pastor protestante pueda casar á todos los disidentes, aun cuando sean de diversa comunión. Se dijo por las partes que ellas, ni pertenecían á la iglesia Metodista, ni mucho se preponían ingresar á su comunión, y que si se casaron ante el pastor de este culto fué en la equivocada inteligencia de que esto era indiferente. De este hecho se deducía el argumento, diciendo que la ignorancia de las leyes ó el error del derecho jamás puede servir de excusa para impedir los efectos legales de los actos lícitos, ni evadir la responsabilidad por los ilícitos. La doctrina que se invoca es cierta, pero esta vez se la aplica inconvenientemente, pues cuando se habla de actos lícitos se les supone válidos, porque estos son los únicos que pueden producir efectos legales, como se explica en la nota al artículo aludido, en la cual se dice: «el sentido de la máxima *error juris nocet*, es bien claro: perjudica al que pretende escapar de las consecuencias legales de un acto jurídico, regular y válido. Efectivamente, si por ignorancia ó error de derecho se hubiera omitido la forma esencial de un acto jurídico como el matrimonio entre disidentes por ejemplo, no por eso sus agentes resultarían obligados, antes bien siendo nulo el acto, no podría producir efecto alguno, ni originar obligaciones, según el principio bien conocido: *quo de jure nullum est, nullum sortitum effectum*. Entonces pues



2. **Matrimonio**—Si con arreglo á las disposiciones de la ley argentina el divorcio no disuelve el vínculo, la madre, existiendo la madre, es un extraño para la causante de la sucesión cualquiera que fuesen las leyes que hayan autorizado el doble matrimonio.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 5, Ser. 3^a.

3. **Matrimonio**—La legitimación del hijo natural por el subsiguiente matrimonio de los padres no requiere forma expresa; se opera *ipso facto*.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 142, Ser. 3^a.

4. **Matrimonio**—Solo emancipa á los menores cuando se ha verificado con el consentimiento de los padres.—Jur. Civ. tom. 7, pág. 97, Ser. 3^a.

5. **Matrimonio**—Los jueces no pueden de oficio desconocer la legitimidad de los hijos nacidos despues del matrimonio y concebidos con anterioridad.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 115, Ser. 3^a.

6. **Matrimonio**—Su justificación es esencial para la declaratoria de herederos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 62, Serie 4^a.

nada importa en el caso, ni es capaz de variar de especie, el que el error que indujo á los contrayentes á hacer intervenir en su matrimonio á un pastor de diversa comunión, sea un error de derecho, porque esta circunstancia no sería suficiente á validarlo, afectaría siempre su forma esencial, y debe ser tenido y declarado por nulo. En contra de lo resuelto en 1^a Instancia.

2—Véase: *Divorcio*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Legitimación*, núm. 1.

4—Véase: *Emancipación*, núm. 1.

5—Véase: *De oficio*, núm. 3.

6—La esposa era quien pretendía la herencia y aparecía según la partida de casamiento agregada en autos, que estaba casada con otra persona distinta de aquella de cuya sucesión se trataba. Era indispensable justificar el matrimonio.



7. **Matrimonio**—La legislación anterior al Código Civil reconocía como hijos naturales á los nacidos cuando los padres podían contraer matrimonio, aun cuando por la época de la concepción resultaran adulterinos; y en consecuencia, el subsiguiente matrimonio los convertía en legítimos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Ser. 4^a.

Matrimonio—Véase: *Separación de bienes*, núms. 1, 2 y 3—*Padrastro*, núm. 1—*De oficio*, núm. 1—*Declaratoria de herederos*, núm. 3—*Hijo natural*, núm. 9.

Mayor cuantía—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 8—*Excepción de incompetencia*, núm. 1—*Contrato verbal*, números 4 y 8.

Mayor edad—Véase: *Derechos y acciones*, núm. 1—*Emancipación*, núm. 2.

Mayor término—Véase: *Prescripción de una obligación*, núm. 2.

Mayor valor—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 3.

Media comisión—Véase: *Martillero*, núm. 2.

Medicina—Véase: *Acciones civiles*, núm. 1.

Medición—Véase: *Precio*, núm. 2—*División en especie*, núm. 1.

Medida—Véase: *Venta ad corpus*, núm. 1.

1^a. **Medidas**—Las cartas misivas no están obligadas á espresar las medidas con arreglo al sistema métrico decimal, y en consecuencia no puede aplicárseles multa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 253, Ser. 4^a.

Medidas conservatorias—Véase: *Sentencia*, núm. 4.

1^b. **Medidas precaucionales**—La omisión de ellas, importa la culpa ó negligencia que la ley exige para hacer respon-

7—Véase: *Hijo natural*, núm. 12.

1^a—Véase: *Carta misiva*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 71.



sable daños y perjuicios al autor de un acto ilícito.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 129, Ser. 4^a.

Medidas precaucionales—Véase *Sentencia*, núm. 4.

Mejor derecho—Véase: *Capellanía*, núm. 2—*Poseción*, núm. 5—*Prelación*, núm. 1—*Juicio ordinario*, núm. 3.

1^a. **Mejor proveer**—Es facultativo del Juzgado dictar las medidas que crea necesarias para mejor proveer.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 143, Ser. 4^a.

Mejor proveer—Véase: *Diligencias para mejor proveer*, núm. 1.

1^b. **Mejoras**—El locatario culpable de la rescisión del contrato, carece de derecho para cobrar las mejoras hechas en el predio arrendado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 22, Serie 3^a.

2. **Mejoras**—Es improcedente el interdicto de adquirir la posesión si el poseedor tiene por sentencias ejecutoriadas, reconocido el derecho de retención en virtud de las mejoras hechas en la cosa.—Jur. Civ., tom. 10, página 140, Ser. 4^a.

Mejoras—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 17.

1. **Memoria**—De la Exma. Cámara de lo Civil correspondiente al año 1890.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 72, Serie 4^a. Correspondiente al año 1889.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 374, Ser. 3^a. Correspondiente al año 1891.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 410, Ser. 4^a.

1. **Memoria pía**—El capital destinado á una memoria

1^a—Es la jurisprudencia que la Cámara quiere establecer como uniforme, después de haber vacilado á este respecto en algunas de sus resoluciones. El sumario tiene su fundamento en los arts. 57 y 215 del Cód. de Proc. Nos hemos pronunciado siempre en contra de esta jurisprudencia. Véase: verb. *Diligencias para mejor proveer*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Locatario*, núm. 6.

2—Véase: *Derecho de retención*, núm. 1.

1^c—Al patrono no puede corresponder más derecho que el de per-



pía, aunque sea de simple conciencia no puede ser entregado á los patronos, puesto que los venideros tienen sobre el capital iguales derechos y obligaciones.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 35, Ser. 3ª.

Menor cuantía—Véase: *Excepción de incompetencia*, número 1—*Contrato verbal*, núm. 8.

Menor valor—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 3—*Daños y perjuicios*, núms. 23 y 24—*Cesión de derechos*, núm. 5.

1. **Menores**—Los bienes de menores no pueden ser hipotecados con renuncia de los trámites que la ley fija para su venta.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 185, Ser. 4ª.

2. **Menores**—La testamentaria no está obligada al pago de la asistencia médica de los menores estraños á la familia, aun cuando como agregados viviesen en el mismo domicilio del causante y llevasen su apellido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 426, Ser. 4ª.

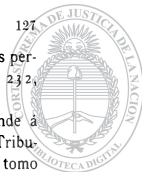
3. **Menores**—La madre en ejercicio de la patria potes-

cibir los réditos ó intereses durante su vida, despues de lo cual ese mismo derecho con el patronato, pasa á la persona designada en el testamento.

1—Se trataba de gravar inmuebles de menores en el Banco Hipotecario Nacional, á lo que el Juez no hizo lugar, porque la venta de inmuebles de menores está sujeta á un procedimiento especial tendente á garantir eficazmente los derechos de aquéllos. Para poder contratar con el Establecimiento mencionado, es necesario la renuncia de ese procedimiento, pues es sabido que el Banco no hace préstamos sin que se le acuerde la facultad de realizar los bienes afectados sin forma de juicio, caso de no cumplirse lo estipulado, siendo así que esa renuncia no puede autorizarse judicialmente porque las leyes que protejen los intereses de menores son de orden público.

2—En este caso los menores son estraños á la testamentaria. Solo habría derecho á cobrar los honorarios si se comprobase que los servicios fueron prestados por orden del causante. Véase: *Asistencia médica*, núm. 1.

3—Véase: *Fondos*, núm. 1.



tad, no está obligada á tener depositados los fondos pertenecientes á los menores.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 232, Ser. 4^a.

4. **Menores**—La tutela de los menores corresponde á la abuela, y solo por causas graves á juicio de los Tribunales, puede ser privada de ese derecho.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 236, Ser. 4^a.

Menores—Véase: *Alimentos*, núms. 2 y 3—*Bienes*, número 6—*Bienes de la sucesión*, núm. 1—*Bienes de menores*, núm. 1 y siguientes—*Bienes propios*, núm. 2—*Derechos y acciones*, núm. 1—*Enemistad*, núm. 1—*Esposa*, núm. 4—*Gastos*, núm. 1—*Herederos mayores*, núm. 2—*Padre*, núm. 1—*Patria potestad*, núm. 2—*Personería*, núms. 8 y 12—*Prejuzgamiento*, núm. 2—*Prescripción contra menores*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 1—*Reivindicación*, núm. 7—*Rendición de cuentas*, núms. 7, 8 y 25—*Testamentaria*, núm. 3—*Tutor*, núm. 1 y siguientes—*Tutor especial*, núm. 1 y siguientes—*Nulidad de una sentencia*, núm. 1.

Mensualidad—Véase: *Contrato de arrendamiento*, números 6 y 25.

1. **Mensura**—No puede ser aprobada la mensura y ubicación si se opone parte legítima que justifica que la operación lesiona derechos adquiridos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 187, Ser. 3^a.

2. **Mensura**—No procede la citación de evicción en el juicio de mensura.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 106, Ser. 3^a.

Mercaderías—Véase: *Retención*, núm. 1.

Miedo—Véase: *Declaraciones*, núm. 1.

Miembros—Véase: *Personería*, núm. 9—*Sociedad anónima*, núm. 2.

4—Véase: *Abuela*, núm. 1.

2—Véase: *Evicción*, núm. 4.



1^a. **Ministerio de menores**—Está obligado á reconocer y sostener como válidos los actos llevados á cabo con su intervención, cualquiera que sea la persona que desempeñe el puesto.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 241, Ser. 3^a.

2. **Ministerio de menores**—El reconocimiento médico para la declaración de incapacidad, debe practicarse aun cuando carezca de personería el denunciante, si el Ministerio de menores hace propia la denuncia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 387, Ser. 3^a.

1^b. **Ministerio fiscal**—Solo es parte en el juicio de divorcio en cuanto se discuta el vínculo, pero no en los incidentes sobre alimentos y litisexpensas.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 152, Ser. 3^a.

Ministerio fiscal—Véase: *Concurso civil*, núm. 3—*Escritura pública*, núm. 32.

Misión—Véase: *Notificación*, núm. 8.

Misiva—Véase: *Costa*, núms. 1 y 2.

Modificaciones—Véase: *Contrato*, núms. 3, 6, 9 y 20—*Diligencias de prueba*, núm. 27—*Prueba de un contrato*, núm. 1—*Instrumento público*, núm. 4—*Interdicto de obra nueva*, núm. 2—*Contrato de compraventa*, núm. 21—*Contrato por escritura pública*, núm. 1—*Forma*, núm. 2—*Obligación*, núm. 1.

Modo de vivir—Véase: *Servicios*, núms. 6 y 8.

Moneda—Véase: *Capellanía*, núm. 3.

1. **Moneda de oro**—La conversión de la moneda de oro

1^a—Véase: *Actos*, núm. 1.

2—Véase: *Incapacidad*, núm. 3.

1^b—Véase: *Alimentos*, núm. 6.

1—El sumario no expresa con fidelidad la mente de la resolución recaída. El caso es el siguiente: una persona se comprometió á remitir una suma de dinero para levantar una inhibición: la remisión se hizo en moneda de oro, y se resolvió «que si se tiene presente que el deudor con arreglo á lo prescripto en el art. 619 del Cód. Civ., cumple la



entregada para el pago de moneda nacional, debe hacerse al tipo de Bolsa del día de la entrega.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 101, Ser. 4^a.

1. Moneda especial—La designación de pesos fuertes en una obligación cuando éstos eran la moneda usual, no

obligación, entregando la especie designada ú otra en moneda nacional al cambio corriente en el día del vencimiento de la obligación, habiendo el demandado hecho la entrega del oro en una fecha dada sin que se haya observado por las partes que tal día no fuera el del vencimiento de la entrega, el Juzgado debe tenerlo por tal y en su virtud resolver que la suma de que se trata sea convertida a moneda nacional con arreglo al tipo en que se haya cotizado el oro en la Bolsa en la indicada fecha, que fué la de la entrega la que coincidía con la fecha implícita del vencimiento de la obligación.» En su consecuencia se ordenó que el cómputo se hiciera de acuerdo con la fecha del vencimiento y de la entrega. Pero resulta por otra parte, que la mente de la resolución es que el cómputo debe hacerse de acuerdo con el tipo corriente el día del vencimiento y no con la de la entrega ó pago. Esta interpretación está de acuerdo con la ley—art. 619 del Cód. Civ. y art. 3º de la ley de 15 de Octubre de 1885.—Sin embargo la Cámara resolvió, en el caso de Mabragaña con O'Connor, lo contrario.

2—El Juez de 1ª Inst. dijo, que estudiando el convenio y en especial el artículo que se relaciona con el pago «se ve que existe estipulación expresa que hace conocer la intención de las partes de establecer el pago en pesos oro, pues aunque se ha empleado la palabra pesos fuertes, era la denominación dada a la moneda antes de regir la ley sobre curso forzoso. Que este pago debía hacerse en dicha moneda, no solo porque así fué convenido sino también porque está resuelto por la Suprema Corte nacional en la interpretación dada a la ley sobre moneda de curso legal de fecha 15 de Octubre de 1885 en su fallo de 6 de Febrero de 1866; causa 12, tom. 20, Ser. 2ª.» Esta resolución fué revocada por la Cámara fundiéndose en que ni la cláusula pertinente del convenio inserto en la escritura, ni los demás antecedentes que la misma escritura suministraba, como también la de cesión, autorizan la conclusión de que deba solventarse la deuda en oro. La cláusula segunda del convenio, que era la relativa a la venta, determinaba el precio lisa y llanamente en pesos fuertes, y los antecedentes de donde se derivaban los derechos del cesionario, demuestran acabadamente que el valor de tales derechos siempre se entendió expresado a papel ó en moneda

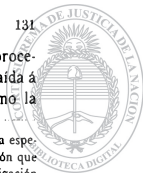


importa que el pago deba ser hecho en moneda especial ú oro sellado, sino en la moneda usual que haya sustituido á aquélla en la circulación.—Jur. Civ., tom. 5, página 50, Ser. 3ª.

2. **Moneda especial**—El pago por consignación de una

de curso legal. Esta resolución de la Cámara está en abierta oposición con otro caso resuelto.—Véase el número siguiente.—A este respecto la jurisprudencia varía al infinito y constituye un verdadero mosaico que abona muy poco en pro de la seriedad de ese Tribunal y mucho contra su competencia jurídica. En algunos casos va hasta el prevaricato, como puede verse en el verb. *Moneda de oro*.

2—La obligación estaba concebida á pesos moneda corriente de los antiguos de la Prov. de B. Aires. Si la obligación hubiese sido contraída á pesos fuertes, otra habría sido la resolución, pues las concebidas en esos términos deben solventarse en oro sellado. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Obligaciones*, núm. 3, en contra véase el número precedente. Estos dos casos no son análogos á los del sumario, porque allí la obligación se contrajo á pesos papel moneda corriente de los antiguos de B. Aires, mientras que estos últimos citados fueron á pesos fuertes. Véase asimismo, verb. *Oro sellado*, núms. 1 y 2, Inst. tom. 2º. Para resolver la cuestión en el sentido del sumario se dijo, que la ley de Noviembre de 1881 que estableció la unidad monetaria, dispuso por su art. 13 que los Bancos de emisión existentes procederían dentro del término allí establecido, á renovar toda su emisión de billetes, sustituyéndolos por moneda nacional. Que tal sustitución se verificó entregando moneda nacional en la equivalencia del valor de esta moneda con relación el peso fuerte, y respecto del papel moneda, en la proporción que establece la ley de la Provincia, de 1864; es decir, computándose la relación de valor á razón de un peso fuerte por cada veinticinco pesos papel moneda; que por consiguiente las obligaciones de entregar cantidades de pesos moneda corriente quedaron necesariamente sustituidas por la de entregar moneda nacional en la equivalencia del peso fuerte atendiendo únicamente á la diferencia entre el peso de ambas unidades monetarias; que como se vé la moneda estipulada no solo no constituye una obligación á moneda especial, no obstante la relación de valor que le fijó la ley con el peso fuerte, sino que además aquella moneda desapareció de la circulación y fué sustituida por moneda nacional, y en tal caso el crédito no podía considerarse amparado por la escepción contenida en la segunda parte del art. 3º de la ley de curso forzoso, que solo



suma en moneda nacional por su equivalencia, es procedente siempre que la obligación hubiese sido contraída á moneda corriente, que no puede ser calificada como la

comprende las obligaciones contraídas con designación de moneda especial, en cuyo caso como se ha dicho, no se encuentra la obligación que se cobra—arts. 759 y 760, Cód. Civ.—Por otra parte, la obligación que resulta de un préstamo de dinero nunca es mayor que la suma numérica anunciada en el contrato, dice el art. 702 del Cód. de Comercio, agregando, que si hay alza ó baja de la moneda antes del pago, el deudor cumple, no mediando estipulación contraria, con entregar la suma numérica prestada en la moneda corriente al tiempo de verificarse el pago. El art. 619 del Cód. Civ., concordante con la anterior disposición, prescribe á su vez, que cuando la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie ó calidad de moneda nacional, cumple la obligación dando la especie designada ú otra especie de moneda nacional al cambio que corre en el lugar el día del vencimiento de la obligación. Ahora bien, retirada de la circulación la moneda nacional existente cuando se contrajo la obligación y retirada asimismo la de pesos fuertes, creadas por la ley de 22 de Setiembre de 1875, en virtud de lo dispuesto por la ley del 5 de Noviembre de 1881, que estableció el peso de oro ó plata como la unidad monetaria de la República, prescribiendo además, que los Bancos de emisión existentes deberían renovarlas en billetes á moneda nacional, es incuestionable al parecer, que los deudores no pudiendo entregar la misma especie de moneda recibida ni en pesos fuertes en que ella fué convertida por estar proscripta de la circulación, tienen el derecho de hacerlo en la moneda nacional establecida por la ley y á la que como se ha dicho, fué convertida aquélla con la diferencia correspondiente al tipo fijado en las relaciones de esas monedas. Pero se observa que el pago hecho en billetes declarados de curso legal sin la diferencia que corresponde al metal ú oro sellado en que debe satisfacerse la obligación contraída á moneda especial y resulta que hay en esto también un error. La ley que declaró la inconvención del actual billete de Banco, considerado de curso legal, si bien es cierto que en su art. 3º exceptúa expresamente las obligaciones contraídas con designación de moneda especial, no puede por esto decirse que esté comprendido en esa excepción una moneda que había desaparecido y mandábase retirar de la circulación. Esa excepción se refiere por el contrario, á las monedas extranjeras de circulación legal en la República, hasta tanto no se haya acuñado la



moneda especial de oro que prevé la ley general de monedas.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 176, Ser. 4^a.

Moneda especial— Véase: *Competencia*, núm. 4.

Moneda nacional—Véase: *Capellanía*, núm. 3—*Moneda especial*, núm. 2.

Monto—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 2, 64, 67, 69, 72 y 74—*Costas*, núm. 35—*Jurisdicción por cantidad*, núm. 4.

1. **Mora**—Siendo el lugar del pago, á falta de convenio expreso, el domicilio del deudor, para que exista mora, el precio de la locación debe exigirse en aquél.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 415, Ser. 3^a.

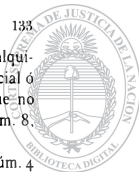
2. **Mora**—Justificada la del comprador en cumplir el contrato de compraventa constante de documento privado, procede se declare su rescisión.—Jur. Civ., tom. 6, página 408, Ser. 3^a.

3. **Mora**—Solo existe desde la fecha en que se demande judicialmente el cumplimiento de la obligación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 402, Ser. 4^a.

cantidad de oro y plata determinada por el art. 7° de la citada ley del 5 de Noviembre de 1881 y dado por el P. E. el decreto á que la misma se refiere. Por consiguiente, no pudiendo decirse comprendida en la escepción mencionada la antigua moneda corriente y el peso fuerte á que ella fué convertida, resulta que no puede tampoco ampararse de esa escepción el acreedor para exigir del deudor el pago de la obligación en oro sellado ó el de la diferencia correspondiente á la moneda en que debe hacerse el pago según el tipo en que se estimaba en aquella época con relación al oro sellado. Favor. cia también esta resolución la circunstancia de no aparecer de autos acreditado que la obligación de que se trataba, hubiera dejado de cumplirse á su vencimiento por parte de los deudores.

1—De acuerdo con la jurisprudencia sentada en otros casos. Véase. verb. *Alquiler*, núm. 1.

2—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 10.



4. **Mora**—Para que exista mora en el pago del alquiler, el acreedor debe justificar el requerimiento judicial o extrajudicial en el domicilio del deudor, siempre que no exista lugar designado para el pago.—Jur. Civ., tom. 8, página 349, Ser. 4^a.

Mora—Véase: *Desistimiento*, núm. 6—*Locación*, núm. 4—*Obligación*, núm. 14—*Escritura pública*, núm. 27—*Daños y perjuicios*, núms. 57 y 98—*Obligación de hacer*, núms. 11 y 14—*Contrato de arrendamiento*, núm. 25—*Intereses*, núm. 8.

1^a. **Moratorias**—Esta ley solo es aplicable á las obligaciones comerciales sin que pueda fundar la excepción de espera opuesta á la ejecución de una hipoteca.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 96, Ser. 4^a.

1^b. **Muebles**—El marido, además de los alimentos, debe pagar los muebles que la esposa necesite para su uso, según su condición social.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 87, Ser. 4^a.

Muebles—Véase: *Alhajas*, núm. 1—*Depósito de muebles*, núm. 1—*Comisión*, núm. 4—*Reivindicación*, núm. 9—*Bienes testamentarios*, núm. 2.

1^c. **Muebles embargados**—Si el tercerista no justifica el dominio de los muebles embargados, su acción debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 402, Ser. 4^a.

Muebles embargados—Véase: *Tercería*, núms. 2 y 6.

4—Véase: verb. *Alquiler*, núm. 1.

1^a—Véase: *Excepción de espera*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Alimentos*, núm. 14.

1^c—Si él no está en posesión de ellos: porque en caso afirmativo la posesión basta para acreditar el dominio, y entonces la prueba incumbiría al que alega que los bienes no son del que los posee. Pero si los bienes no están en poder del tercerista entonces el *onus probandi* gravita sobre él—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.



Muerte— Véase: *Agravio moral*, núm. 1.

1^a. **Mujer**— Consentido el auto en que se tiene por parte a una mujer como mandataria ó procuradora de una de las partes, debe ser desechada la nulidad fundada en la incapacidad civil de la apoderada.—Jur. Civ., tom. 9, página 18, Ser. 4^a.

Mujer casada—Véase: *Posiciones*, núm. 1—*Venia*, número 1.

1^b. **Multa**—Las cartas misivas no están obligadas á expresar las medidas con arreglo al sistema métrico decimal y en consecuencia no puede aplicárseles multa.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 253, Ser. 4^a.

2^a. **Multa**—El Juez competente para aplicar la multa por infracción al impuesto de papel sellado, debe conocer en la acción entre los firmantes obligados solidarios de la pena.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 59, Ser. 4^a.

Multa—Véase: *Departamento Nacional de Higiene*, número 1.

1^c. **Municipalidad**—Aun después de la promulgación del Cód. Civil, para que los terrenos formados por aluvión correspondan en propiedad á la Municipalidad, debe existir perfectamente deslindada la estensión de ribera que aquél fija á los ríos navegables.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 263, Ser. 3^a.

2^b. **Municipalidad**—Justificado por títulos preexistentes que el terreno comprendido entre límites determinados ha salido del dominio público, la Municipalidad que pre-

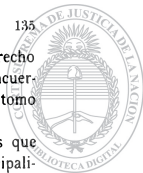
1^a—Véase: *Mandatario*, núm. 15.

1^b—Véase: verb. *Carta misiva*, núm. 1.

2^a—Véase: *Acción*, núm. 3.

1^c—Véase: *Aluvión*, núm. 1.

2^b—Véase la nota al verb. *Aluvión*, núm. 1, donde está estudiado el punto.



tenda reivindicar un sobrante, debe justificar su derecho por otro título que el de soberanía que las leyes le acuerdan, cuando el poseedor carece de ellos.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 263, Ser. 3ª.

3. **Municipalidad**—Las resoluciones municipales que dejan sin efecto un contrato celebrado por la Municipalidad en su carácter de persona jurídica, no pueden dar origen á un juicio contencioso-administrativo.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 432, Ser. 3ª.

4. **Municipalidad**—El conocimiento del juicio sobre falta de cumplimiento, por parte de la Municipalidad, de un contrato celebrado con particulares, corresponde á la jurisdicción de los Tribunales ordinarios.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 432, Ser. 3ª.

5. **Municipalidad**—El juicio contencioso-administrativo, no procede contra resoluciones de la Municipalidad sobre espropiación de terrenos ó demolición de un edificio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 64, Ser. 3ª.

6. **Municipalidad**—Reconocido el hecho de haber salido el bien del dominio público, la Municipalidad carece de acción para oponerse á los derechos que terceros invuquen sobre él en tanto no presenten nuevo título que lo haya revertido al dominio municipal.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 263, Ser. 3ª.

7. **Municipalidad**—La propiedad que la ley orgánica

3—Véase: verb. *Contrato*, núm. 1.

4—Véase: *Contrato*, núm. 2.

5—Véase: *Demolición*, núm. 1.

6—Véase: *Dominio público*, núm. 1.

7—La cuestión se trabó entre la Municipalidad y el Consejo Nacional de Educación respecto á quién correspondían los bienes inmuebles de una herencia declarada vacante. El Fisco fué declarado heredero en el año 1873. Esta sucesión debe estudiarse bajo el punto de vista de las leyes anteriores á ese año, por consiguiente las de 1875 y 1884 no



atribuye á la Municipalidad sobre los terrenos públicos de la Capital solo se refiere á aquellos que no hayan salido del dominio público.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 3^a.

8. **Municipalidad**—Los actos y resoluciones de la Municipalidad ejerciendo derechos de persona jurídica, no pueden fundar un juicio contencioso-administrativo; son de competencia exclusiva de los Tribunales ordinarios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 336, Ser. 3^a.

pueden aplicársele. Esas leyes anteriores son la Ley Org. Mun. de 2 de Noviembre de 1865 y la Ley de Educación del 31 de Agosto de 1858, que creó fondos para la edificación de escuelas. La Ley Org. Municipal de 1865 en su art. 19 establece como de pertenencia de la Municipalidad los terrenos públicos comprendidos en el municipio, pero tal artículo no parece admisible en el caso presente, por cuanto se trata de terrenos públicos, es decir, que no hayan sido de propiedad particular, sino de terrenos que forman una herencia que ha sido declarada vacante, y á los que esa ley no se ha referido ni podido referir; pues si bien es cierto que estos terrenos, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 3588 y 3589 del Cód. Civ, pertenecen al Fisco, no lo es menos que el legislador ha designado la repartición á que deben adjudicarse en la ley de 31 de Agosto de 1858 que creó fondos para la edificación de escuelas y cuyo art. 1º, inc. 5º, establece: «que serán destinados exclusivamente para la creación de escuelas de varones y mujeres, el valor de los bienes que por muerte *ab intestato* fuesen, conforme á las leyes, declarados de propiedad del Fisco. Ante esta disposición legal la duda desaparece y resulta evidenciado el derecho del Consejo Nacional de Educación, tanto más si se considera que las leyes de educación de la Provincia de Buenos Aires de 26 de Setiembre de 1875 y Nacional del 8 de Julio de 1884, en el art. 62, inc. 3º y en el art. 44, inc. 10, respectivamente, dan á las herencias vacantes el mismo destino, y que si bien estas leyes no rijen el caso que nos ocupa, porque la declaratoria á favor del Fisco fue anterior, ellas sin embargo sirven para robustecer los derechos del Consejo, demostrando que la intención del legislador ha permanecido la misma en diferentes épocas en que se ha ocupado de la Educación.

8.—Véase: *Juicio contencioso-administrativo*, núm. 2.



9. **Municipalidad**—En espedientes contenciosos, la Municipalidad debe conceder ó negar el recurso de apelación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 126, Ser. 3ª.

10. **Municipalidad**—Las modificaciones y transacciones que la Municipalidad lleve á cabo respecto de una calle no reconocida oficialmente, no pueden fundar un interdicto de obra nueva contra el tercer contratante, mientras la edificación no afecte al cuerpo de la propiedad perjudicada por la desviación de la calle.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 385, Ser. 4ª.

11. **Municipalidad**—Los Tribunales de la Capital son

9—Véase: *Apelación*, núm. 1.

10—Véase: verb. *Interdicto de obra nueva*, núm. 2.

11—Si bien es cierto que el art. 8 de la ley de 18 de Setiembre de 1872 atribuye á los Tribunales federales el conocimiento de los juicios sobre infracción de esta misma ley para la aplicación de las penas de multa ó de prisión que impone, ello nada obsta á la jurisdicción y competencia de los juzgados de la Capital cuando no se trata de la aplicación de la referida ley nacional. Tampoco puede aplicarse con éxito lo dispuesto por el art. 2º de la Ley de 21 de Julio de 1888 que faculta al P. E. de la Nación para imponer multas administrativamente á los ferrocarriles. Las facultades de los poderes administrativos no son excluyentes de la jurisdicción y competencia de los tribunales de justicia; aquí no se trataba de la interpretación ó aplicación de una resolución administrativa del Gobierno Nacional sobre ferrocarriles para cuya efectividad habría que recurrir á los tribunales federales, sino únicamente, del cobro de una multa impuesta por la Municipalidad cuya jurisdicción compete á los tribunales comunes ú ordinarios. Tanto la ley de 18 de Setiembre como la de 21 de Julio son leyes de carácter general tendentes á reglamentar la administración de ferrocarriles en concepto de garantizar los intereses de la empresa así como los de las personas que con ellas contratan el transporte y seguridad de las mismas; pero esto no impide que la Municipalidad pueda dictar ordenanzas obligatorias también para los ferrocarriles dentro del municipio en cumplimiento de uno de sus primordiales deberes de velar por la seguridad personal y por los intereses públicos, en cuanto pudiera ser afectada por la existencia de los ferrocarriles y el movimiento de sus trenes. No solamente está comprendida im-



competentes para entender en el juicio seguido por la Municipalidad contra las empresas de ferrocarriles por cobro de multas impuestas por transgresión á sus ordenanzas.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 410, Ser. 4ª.

12. **Municipalidad**—La demora de la Intendencia Municipal en dar la línea de edificación, no puede dar origen á una acción por daños y perjuicios, si los planos presentados no llenan los requisitos que prescribe el Reglamento de construcciones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 100, Ser. 4ª.

plícitamente esa facultad en las atribuciones del Poder Municipal por la naturaleza misma de sus funciones, sino que le está conferida explícitamente en la Ley Orgánica de la Municipalidad de 23 de Octubre de 1882, en el art. 47, inc. 4º, cuando dispone que corresponde al C. Deliberante, en lo relativo á la seguridad, dictar ordenanzas sobre la dirección, pendiente y cruzamiento de ferrocarriles y tranvías, y adoptar las medidas necesarias para evitar los peligros que ellos ofrecieran, comprendiéndose entre éstas la colocación de enrejados en las calles al nivel de la vía, y guardas en los pasos á nivel, como también la construcción de alcantarillas y demás obras necesarias para el desagüe. Por consiguiente, la Municipalidad obra dentro de sus facultades legales al dictar las ordenanzas como la de 27 de Diciembre de 1888, la que en su art. 6º impone á todas las empresas de ferrocarriles que corran dentro del municipio la obligación de colocar y mantener en todas las horas del tráfico peones guardianes en toda bocacalle, y á cada costado de los que atraviese la línea férrea á fin de prevenir á los transeúntes la proximidad del tren, bajo pena de multa de 500 pesos por cada infracción. La demanda ejecutiva de la Municipalidad es para hacer efectivas las multas impuestas á la empresa demandada por infracción del art. 6º citado. El art. 64 de la Ley de 23 de Octubre de 1882 dispone que el cobro de las deudas por impuestos y recursos municipales se hará efectivo por vía de apremio judicial sirviendo de título suficiente para la ejecución la boleta respectiva con el visto bueno del Intendente Municipal; y el art. 65, inc. 15 declara, que son impuestos y rentas municipales el producto de los derechos de oficina y el de las multas establecidas por las ordenanzas municipales, circunstancias que se encontraban cumplidas en el título con que se inició la ejecución que motivó este pleito.

12—Véase: verb. *Construcciones*, núm. 1.



13. **Municipalidad**—La Municipalidad de la Capital no puede ser obligada al cumplimiento de contratos violatorios de su ley orgánica.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 372, Serie 4^a.

14. **Municipalidad**—El Concejo Deliberante carece de facultades para enajenar bienes municipales sin llenar la condición esencial de licitación que requiere la ley Orgánica de la Municipalidad—Jur. Civ., tom. 6, pág. 372, Ser. 4^a.

15. **Municipalidad**—Las demandas tendentes al cumplimiento de una ordenanza municipal corresponden á la jurisdicción de 1^a Instancia.—Jur. Civ., tom. 10, página 305, Ser. 4^a.

Municipalidad—Véase: *Adoquinado*, núm. 1—*Apelación de hecho*, núm. 2—*Contrato*, núm. 20—*Contencioso-administrativo*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 97—*Interdicto de recobrar*, núm. 12—*Embargo preventivo*, número 1—*Empedrados*, núms. 1, 3 y 4—*Excepción de pago parcial*, núm. 1—*Información supletoria*, núms. 1, 2 y 6—*Informaciones*, núm. 1.

Municipio—Véase: *Poderes locales*, núm. 1.

Muro—Véase: *Reivindicación*, núm. 18.

13.—Véase: verb. *Contrato*, núm. 4.

14.—Véase: *Bienes Municipales*, núm. 1.

15.—Véase: *Demanda*, núm. 5.



Nacionalidad—Véase: *Excepción de incompetencia*, números 3, 4 y 5.

Nacimiento—Véase: *De oficio*, núm. 1 — *Derecho en expectativa*, núm. 1.

1^a. **Necesidades**— Para fijar el monto de la indemnización de los daños y perjuicios causados por un delito, debe tenerse en cuenta el género de necesidades que la indemnización debe llenar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 249, Ser. 4^a.

Necesidades sociales— Véase: *Pensión alimenticia*, número 1.

Negativa—Véase: *Posiciones*, núm. 2—*Espediente*, número 5—*Firma*, núm. 4.

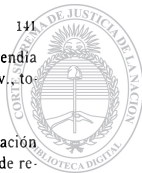
Negligencia—Véase: *Acto ilícito*, núm. 2, 8 y 10—*Daños y perjuicios*, núms. 10, 71, 79, 101, 111 y 113—*Testigos*, núms. 8 y 10—*Diligencias de prueba*, núms. 12 y 24—*Declaraciones*, núm. 6.

Negocio determinado—Véase: *Cesión*, núm. 2—*Contrato de sociedad*, núm. 3.

1^b. **Negocios**—La cancelación de cuenta sin salvedad

1^a—Véase: verb. *Condición*, núm. 3.

1^b—Véase: *Cancelación*, núm. 2.



importa que ella fué total y no parcial y que comprendía todos los negocios anteriores á su fecha.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 358, Ser. 3^a.

Nichos—Véase: *Jurisdicción*, núm. 1.

1^a. Nieta.—Procede el rechazo de la acción de filiación natural ejercida por la nieta en virtud del derecho de representación, en tanto no justifique el reconocimiento hecho en vida por la madre natural—Jur. Civ., tom. 7, pág. 12, Ser. 3^a.

1. Nombramiento.—Para el nombramiento de un encargado del cobro de alquileres, en junta, deben ser citados todos los que tengan interés en la herencia.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 24, Ser. 3^a.

2.—Nombramiento.—Consentido el nombramiento de oficio, las partes no pueden exigir que quede sin efecto, aun cuando el nombrado no llene las condiciones requeridas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 26, Ser. 4^a.

Nombramiento—Véase: *Perito*, núm. 2—*Apoderado único*, núm. 1 y siguientes—*Arbitros*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 8—*Agrimensor*, núm. 1—*Administrador judicial*, núm. 3—*Tutor*, núms. 6 y 11—*Tutor especial*, núms. 2, 3 y 4—*Nulidad de una sentencia*, núm. 1.

Nombre—Véase: *Filiación natural*, núms. 3 y 4—*Remate judicial*, núm. 23.

Nota—Véase: *Traslado*, núm. 1—*Cédula*, núm. 1.

1^b. Notificación.—La citación al mandante para la notificación de la renuncia del mandatario, debe hacerse

1^a.—Véase: *Filiación natural*, núm. 12.

2.—Porque cualquier defecto en que se incurra, queda subsanado una vez ejecutoriado el nombramiento. Es principio sentado y admitido, que no se puede volver sobre los autos pasados en autoridad de cosa juzgada.

1^b.—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 1.



por edictos si no se conoce el domicilio.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 207, Ser. 3ª.

2. Notificación—El Secretario que ha verificado la notificación no puede declarar en el incidente sobre nulidad de la misma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 219, Ser. 3ª.

3. Notificación—El término para contestar la demanda corre desde el día de la notificación; las diligencias en que se hace saber el Juez que va á conocer por la recusación, no suspenden dicho término.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 243, Ser. 3ª.

4. Notificación—La prórroga de un término corre desde la notificación de la concesión y no á continuación del prorrogado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 124, Ser. 3ª.

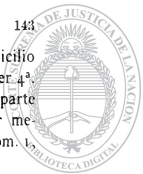
5. Notificación—Las notificaciones hechas en el domi-

2—Porque la notificación como parte integrante de un expediente es un instrumento público y como tal los que en él intervienen no pueden ser admitidos á declarar—art. 992 del Cód. Civ.

3—Las providencias que se dictan con motivo de la recusación solo tienen por objeto aceptarla y hacer cesar la intervención del Juez recusado como asimismo hacer saber el nuevo Juez que va á entrar á conocer para que en este último caso las partes puedan hacer nuevamente uso del derecho de recusación que les acuerda la ley; siendo evidente que todos estos trámites y providencias no impiden al demandado el contestar la demanda dentro del término legal.

4—La Cámara fundó su resolución diciendo, que es jurisprudencia de nuestros Tribunales que toda petición reputada pertinente, hecha en el transcurso de un término judicial, lo deja interrumpido á los efectos para que corre. Desde entonces el nuevo término ó prórroga acordada debe contarse desde la fecha de la notificación del respectivo decreto, de acuerdo con el art. 41 del Cód. de Proc. A no ser así, si el nuevo término hubiera de correr desde la fecha del prorrogado, podría aquél ser ilusorio si el despacho de la prórroga por cualquier motivo fuese demorado por el Juez. Por otra parte, tampoco podría hacerse uso de ese término ó prórroga sin conocerse por el interesado el resultado de la gestión hecha al respecto. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Términos judiciales*, núm. 2.

5—El art. 12 del Cód. de de Proc. establece que el domicilio una



cilio constituido, son válidas aun cuando el domicilio haya sido cambiado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 167, Ser. 4^a.

6. Notificación.—Por nota, es válida en tanto la parte no justifique su asistencia personal á la oficina por medio de la firma en el libro respectivo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 359, Ser. 4^a.

7. Notificación.—El término para contestar directamente después del rechazo de las escepciones, corre desde la notificación personal de la parte.—Jur. Civ., tom. 3, página 67, Ser. 4^a.

8. Notificación.—Personal, revalida cualquiera comisión

vez constituido, se reputa subsistente para todos los efectos legales mientras los interesados no designen otro. Cuando el sumario habla de domicilio cambiado, se refiere al cambio de hecho y llevado á cabo por la parte, pero no denunciado en autos ni constituido nuevamente.

6.—Las notificaciones por nota surten el mismo efecto que si fuesen hechas en persona, pues las partes tienen obligación de concurrir diariamente á secretaría á fin de notificarse. Cuando se afirma por un litigante haber concurrido á secretaría con regularidad, esa afirmación no puede prosperar ante la aseveración del oficial público que afirma lo contrario. Para resguardarse contra olvidos involuntarios ó voluntarios de los empleados subalternos, es conveniente firmar en el libro del que nos habla el art. 31 del Cód. de Proc.

7.—Esta resolución no podrá invocarse como precedente para la resolución de casos análogos, pues la Cámara confirmó *por sus fundamentos* un auto en que el Juez de 1^a Inst. había dicho: «el término del traslado de la demanda una vez consentido el auto que rechaza las escepciones opuestas, ó lo que es lo mismo, notificada personalmente la parte que debe contestarla, de la providencia *de por devueltos cúmplase* que causa ejecutoria al respecto.» La resolución es evidentemente equivocada, pues el artículo 33 del Cód. de Proc. no enumera este caso entre los que deben notificarse personalmente ó por cédula. La Cámara con sus resoluciones arbitrarias introduce el caos en nuestra legislación adjetiva, que á no ser por esta circunstancia sería muy buena, pues sus preceptos son bien claros, y solo la cavilosidad de la justicia la hace oscura é incierta.

8.—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 12.



que por defecto de procedimiento exista en el expediente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 63, Ser. 4ª.

9. **Notificación**—El término para deducir la nulidad del juicio por defecto del procedimiento corre desde la intervención, ya sea por medio de escrito ó de notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 66, Ser. 4ª.

10. **Notificación**—Deben recibirse los testigos aun después de vencido el término si es imputable al actuario las causas que motivaron la falta de notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 99, Ser. 4ª.

11. **Notificación**—La venta de la prenda debe hacerse sin juicio; solo procede la notificación del deudor á los efectos del nombramiento de martillero.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 116, Ser. 4ª.

12. **Notificación**—La nulidad por defecto del procedimiento no importa ni escepción ni recurso, y en consecuencia el término solo se cuenta desde la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 213, Ser. 4ª.

13. **Notificación**—El término para oponerse al auto de de pruebas corre para cada parte desde el día de la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 322, Ser. 4ª.

14. **Notificación**—Debe declararse nula la sentencia recaída si el demandado fué notificado del traslado de la

9—Así resulta de la disposición del art. 240, inc. 2º del Cód. de Procedimientos.

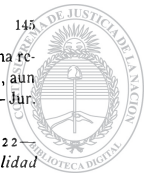
10—De autos no resultaba que los testigos habían sido citados para la audiencia señalada, ni el actuario había puesto nota alguna que aclarara la razón de no haberse hecho esa notificación.

11—Véase: verb. *Martillero*, núm. 3.

12—Véase: verb. *Excepción de nulidad*, núm. 2.

13—Porque este término no es común y por consiguiente empieza á correr separadamente para cada parte, desde el día siguiente al de la notificación.

14—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 11.



demanda en un domicilio que con posterioridad se ha reconocido por el demandante que no era verdadero, aun cuando ese pronunciamiento le fuera favorable.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 383, Ser. 4^a.

Notificación—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 22—*Demanda*, núm. 4—*Nulidad del juicio*, núm. 2—*Nulidad de la citación*, núm. 2—*Domicilio*, núm. 9.

Notificación personal—Véase: *Prescripción interrumpida*, núm. 1—*Traslado*, núm. 1—*Cédula*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, núms. 12 y 17.

Notificación por nota—Véase: *Traslado*, núm. 1—*Cédula*, núm. 1.

1. **Notificaciones**—Practicadas las notificaciones en un domicilio que no es el del demandado, producen la nulidad de lo actuado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 10, Ser. 4^a.

2. **Notificaciones**—Las notificaciones, como instrumentos públicos hacen prueba plena de las aserciones del oficial público mientras no se justifique su falsedad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 383, Ser. 4^a.

3. **Notificaciones**—Las notificaciones de la demanda deben hacerse en el domicilio de la persona demandada, si resulta falso, los procedimientos ulteriores adolecen de nulidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 72, Ser. 4^a.

1—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 7.

2—Las notificaciones fueron hechas de acuerdo con lo establecido por el art. 38 del Cód. de Proc. Las actuaciones practicadas en los expedientes son instrumentos públicos—art. 979, inc. 4º del Cód. Civ.—Es sabido que el instrumento público hace plena fe de las aseveraciones que contenga, mientras no sea argüido de falso, siendo en este caso la prueba á cargo de quien aduce la nulidad—arts. 963, 994 y 995 del Cód. Civ.—Puede verse, de acuerdo con el sumario, el verb. *Notificación*, núm. 2 y su nota.

3—Art. 77 del Cód. de Proc.



4. **Notificaciones**—Son válidas las notificaciones que debiendo hacerse por cédula lo sean personalmente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 213, Ser. 4ª.

5. **Notificaciones**—Las notificaciones practicadas sin las formalidades que la ley prescribe, son nulas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 302, Ser. 4ª.

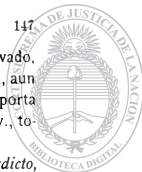
7. **Notificaciones**—Las notificaciones deben hacerse en los términos espresos que la ley fija.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 374, Ser. 4ª.

1. **Novación**—Al deudor que invoca la novación de la obligación, corresponde la prueba.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 83, Ser. 4ª.

4—Si bien es cierto que el art. 33 del Cód. de Proc. establece que las notificaciones de las providencias allí enumeradas deben ser hechas en el domicilio de la parte, esto no quita ni quiere decir que no se pueda notificar en secretaría á las personas que comparezcan con tal objeto, teniendo por lo tanto igual, sino mayor fuerza que la notificación por cédula. Debe tenerse presente que las diversas actuaciones de un expediente son instrumentos públicos—art. 979, incs. 2 y 4 del Cód. Civ.—y por consiguiente hacen plena fe en cuanto á las enunciaciones que contienen—arts. 963 y siguientes.—El que pretenda atacar esas actuaciones de nulidad, debe probar los hechos en que la funda.—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

5—La nulidad fué declarada en virtud de que en la cédula de emplazamiento, al notificarse la demanda, no se hizo constar la hora y el lugar en que se practicó la diligencia, y en que al dejarse no se hubiera dado lectura de ella, como lo prescribe el art. 38 del Cód. de Proc. También fué declarada la nulidad porque habiéndose dado por evacuado el traslado de la demanda en rebeldía del reo, ese auto no le fué notificado á éste en ninguna forma, lo que es bastante para declarar la nulidad por infracción á la disposición del art. 433 del Cód. de Proc., de acuerdo con lo prescripto en el art. 40.

1—La novación alegada importa en este caso una verdadera defensa, una excepción, un hecho nuevo que se aduce en juicio: su prueba incumbe al que la formula, en virtud del conocido aforismo: *Reus in excipiendo fit actor: y onus probandi incumbit actori*.—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.



2ª. **Novación**—La prórroga por instrumento privado, del plazo fijado en la escritura pública de hipoteca, aun cuando se modifique el interés estipulado, no importa una novación de la obligación primitiva.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 139, Ser. 4ª.

Nuevo día—Véase: *Testigos*, núms. 12 y 14—*Interdicto*, núm. 6—*Posiciones*, núms. 17 y 20—*Certificado médico*, núm. 1.

Nula—Véase: *Posesión judicial*, núm. 2.

1. **Nulidad**—Como acción, debe ser interpuesta en el preteritorio término que la ley fija para la interposición del recurso.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 193, Ser. 3ª.

2ª. **Nulidad**—El recurso de nulidad solo es procedente cuando lo es el de apelación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 248, Ser. 3ª.

3. **Nulidad**—Debe conocer de la nulidad de la institución de heredero el Juez de la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 222, Ser. 3ª.

4. **Nulidad**—La mala fe del tercero es indispensable

2ª—Véase: verb. *Hipoteca*, núm. 1.

1—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Nulidad*, núms. 1818 y 1832.

2ª—Art. 238 del Cód. de Proc. Se entiende que esto sucede cuando se dice de nulidad *contra un auto ó sentencia*, pero no cuando se dice de nulidad del procedimiento, puesto que no puede deducirse el recurso de apelación contra el procedimiento seguido.

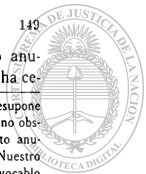
3—Porque es un incidente del juicio sucesorio, y así lo prescribe el art. 634 del Cód. de Proc.

4—Es necesario no dar al art. 1051 del Cód. Civ. un alcance que no tiene. Deben tenerse en cuenta las disposiciones de los arts. 968 y 970, los que con referencia á la acción pauliana, exigen en el tercer adquirente por título oneroso, complicidad en el fraude para que ella pueda prosperar. La estabilidad de los contratos, sin la cual las transacciones se harían imposibles, requiere indefectiblemente el amparo en sus derechos, del tercero que contrata de buena fe. Los antiguos decían:



para que la nulidad declarada por los Jueces vuelva las

«*error communis fecit jus*» y son múltiples los casos consagrados por la ley y la jurisprudencia de nuestros tribunales, con los que se demuestra que antes y ahora la ley y la doctrina han salvaguardado el error invencible y han puesto fuera de todo reproche el derecho del que celebra sus convenciones de buena fe, presumiendo la propiedad en el que se la trasmite por título hábil, siquiera por sus formas externas. Para no estenderse demasiado, y dejando de lado los casos de doctrina y jurisprudencia para citar solo los de la ley, y aun estos con referencia á los contratos, basta recordar estos ejemplos: son válidos y á cubierto de las acciones del verdadero heredero las enajenaciones del pariente en grado sucesible que de buena ó mala fe se apodera de la herencia y la posee pacífica y públicamente—Cód. Civ., art. 3430—Si una persona entrega á otra una cosa mueble en depósito ó con cualquier otro objeto y el depositario la vende, el propietario no tiene acción alguna contra el comprador de buena fe—art. 2767—El contenido de un instrumento público puede ser modificado por un contradocumento, pero este no produce efecto contra los sucesores á título singular, si su contenido no está anotado en la matriz y en la copia por el cual hubiese obrado el tercero—art. 996—Otro ejemplo más elocuente aún nos proporciona el art. 1967, cuando establece que en relación al mandatario y á los terceros con quienes éste ha contratado, es necesario que ellos hayan sabido ó podido saber la cesación del mandato para que aquél quede sin efecto; de modo que, aun cuando el mandante revocase su poder, los terceros que contrataran con el mandatario ignorando aquella circunstancia no se perjudicarían y el contrato sería obligatorio para el mandante. Basta pues esto, para demostrar que de acuerdo con el Código mismo, que no puede suponerse contradictorio en sus disposiciones, es necesario dar al art. 1051 su genuino significado. Anulable es el acto del mandatario que contrate con un poder revocado: anulable también el del depositario que vende lo ajeno, como el del heredero aparente que vende un inmueble que luego resulta no ser suyo, cuando se presenta el heredero verdadero. Y sin embargo ¿cómo es que la ley salvaguarda especialmente los derechos de un tercero de buena fé?—¿Cómo es que para la procedencia de la acción pauliana en relación al tercer adquirente á título oneroso, es necesaria la prueba de la complicidad de de este? ¿no los comprende á todos el art. 1051? No, incuestionablemente, aunque á primera vista parezca lo contrario.—Este artículo no puede establecer lo contrario que aquellos diseminados en todo el Código que concurren de consuno á determinar claramente la voluntad



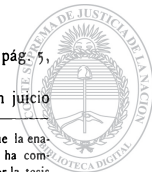
cosas al estado en que se hallaban antes del acto anulado; la ley supone que siendo ella relativa aquel ha ce-
del legislador. El mismo art. 1057 que le sigue tan de cerca, presupone ya el caso de que no sea posible demandar al tercer poseedor, no obstante ese pretendido derecho del propietario en virtud del acto anulado, de poder reclamar del poseedor actual. No hay duda. Nuestro Codificador en su art. 1051 ha usado el término *anulado* por el vocablo *nulo* que debió emplear para espresar su concepto con más precisión, ó ha hecho uso de él en su acepción amplia, acaso para seguir á Goyena en su crítica del tecnicismo de la legislación francesa, cuando exclama: «Como si no fuera necesaria declaración en toda causa de nulidad, habiendo de haber alegación de un hecho y contradicción respecto de él ó del derecho.»—Concordancia sobre el art. 1163—Así queda resuelta la dificultad. Es sabido que hay nulidad absoluta y nulidad relativa—nulidad manifiesta—en que se producen sus efectos propios sin necesidad de declaratoria alguna; y nulidad que no es tal, hasta tanto los jueces la declaren en uso de su ministerio. En el primer caso se encuentra la nulidad declarada por la ley—art. 1018—En el segundo la que requiere sentencia, declarando espresamente la ley que los actos anulables que son aquellos en que el agente obra con incapacidad accidental, se reputan válidos mientras no sean anulados. Si el codificador en su art. 1051 se refiere solo á los actos nulos, nada habría que extrañar. No siendo excusable el error de derecho, no hay dificultad en aceptar que los derechos reales ó personales transmitidos á terceros sobre un inmueble por una persona que haya llegado á ser propietaria en virtud del acto *nulo*, queden sin ningún valor y puedan ser reclamados directamente del poseedor actual. Pero, ¿cómo llegar á esa misma consecuencia para con el acto *anulado* cuando precisamente ya antes el codificador dejaba establecido en el art. 1046 que el acto anulable se reputa válido, y solo se tendrá por nulo desde el día en que la sentencia lo anulase?—¿Cómo puede ser nula la compra del tercerista cuando ha obrado en virtud de un título, que aunque fuera anulable no era nulo y la nulidad no se había declarado?—¿Cómo puede serlo cuando la simulación en principio no es ilícita y la ley solo la repudia cuando por medio de ella se trata de inferir perjuicio?—No se diga que nadie puede dar más derechos que los que tiene, pues queda demostrado con ejemplos tomados del Código mismo que ese principio no llega hasta los terceros que contratan de buena fe. Nuestro comentador Segovia en su nota al art. 2157 reconoce también que los efectos de la nulidad solo se estienden hasta los terceros, cuando éstos son autores ó cómplices de ella; y en otra parte

dido á un error invencible.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 5, Ser. 4^a.

5. Nulidad—La acción de nulidad deducida en juicio

—nota á su art. 2132—nos suministra un nuevo ejemplo, de que la enajenación á título oneroso salvaguarda el derecho del tercero que ha comprado á quien no podía venderle. No está demás robustecer la tesis que se viene sosteniendo, con los arts. 559 y 972 del Cód. Civ. Del primero resulta que, cuando el tercer poseedor es de buena fe, el acreedor solo puede demandar á la parte obligada para el pago del equivalente y la indemnización de pérdidas é intereses. El segundo, tratando de los efectos de la acción pauliana en relación al tercer adquirente de buena fe, prescribe categóricamente dicho artículo que el que hubiera adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de los acreedores, deberá indemnizar á éstos de los daños y perjuicios cuando la cosa hubiese pasado á un adquirente de buena fe, lo que no puede ser más claro en orden á la irresponsabilidad de ese adquirente de buena fe. No sería difícil demostrar con las mismas autoridades de la ciencia, citadas por nuestro codificador en su nota al art. 1651, que también esos jurisconsultos, á lo menos respecto de la acción pauliana y esceptuando á Zachariæ, solo han entendido dar á la nulidad alcance hasta el tercer poseedor de mala fe cuando se trata efectivamente de la adquisición por título nulo y no meramente anulable, como equivocadamente se supone que lo haya establecido nuestro Código.—Véase Marcadé, págs. 368 y 420, tom. 4^o, y Aubry y Rau, tom. 4, pág. 134. Por otra parte, no ejercitándose en el caso presente una acción de nulidad propiamente dicha, como lo observan Segovia en la nota al art. 971 y Aubry y Rau en el lugar citado, tampoco podría aplicarse á este litigio que versa sobre la acción pauliana, el art. 1051 del Código, origen de toda dificultad, sino el 968 y 970, espresos para aquella acción revocatoria y que exigen en el tercer adquirente, á título oneroso, complicidad en el fraude para que le alcancen los efectos aparejados á la misma en protección del acreedor perjudicado en sus derechos. Desde entonces la responsabilidad del adquirente, libre del alcance del art. 1051 del Código, solo puede dimanar de su complicidad en el fraude. ¿Existe pues, esa complicidad? El fraude no se presume, debe probarlo el que lo imputa sobre todo cuando el adquirente funda su derecho en un documento público que es válido y produce sus efectos propios hasta que sea anulado.

5—La suspensión del juicio ejecutivo solo tiene lugar en los casos de tercería—arts. 530 y 531 del Cód. de Proc.—y esto mismo no obsta





ordinario no basta para paralizar el juicio ejecutivo en que se funda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 114, Ser. 4ª.

6. Nulidad—La falta de intervención de un heredero que ha renunciado á la herencia, no es causa de nulidad.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 131, Ser. 4ª.

7. Nulidad—La escepción de inhabilidad de título, cuando el juicio ejecutivo se funda en una ordenanza municipal, solo puede referirse á la existencia de ésta pero no á su nulidad ó validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 215, Ser. 4ª.

8. Nulidad—La escepción de inhabilidad del título fundada en la nulidad de la ordenanza municipal ó en su falta de equidad, es improcedente si el título llena los requisitos que la ley exige para su ejecución.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 200, Ser. 4ª.

á que se prosiga la ejecución ampliando el embargo sobre otros bienes —art. 533—El único derecho que la ley acuerda al deudor vencido en el juicio ejecutivo, es el determinado en los arts. 500 y 525, Cód. de Proc. Por otra parte, el juicio ordinario es una incidencia del ejecutivo, y por consiguiente no puede paralizar lo principal, porque importaría ordinarizar el juicio ejecutivo con perjuicio de los derechos del ejecutante haciendo frustáneo el objeto de la ley que se propone y desea que el acreedor sea pagado brevemente. Puede invocarse por analogía algunos casos resueltos. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Litispendencia*, núm. 1677; tom. 2º, mismo verb. núms. 3, 4, 5 y 6.

6—Solo tienen derecho á intervenir en un juicio los que tienen interés en el pleito, ya le competa este interés por derecho propio ó por representación. El interés es la medida de toda acción. Si no se tiene interés no se tiene derecho á intervenir. Y como el heredero que ha renunciado á la herencia se aparta de todo derecho, es evidente que carece de acción y de derecho para decir de nulidad, pues una vez renunciada la herencia es como si jamás hubiera sido heredero; ha dejado de ser parte interesada.

7—Véase el número siguiente.

8—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 12, en cuya nota se impugna la doctrina sentada en el sumario.



9. **Nulidad**—Consentido el auto en que se tiene por parte á una mujer como mandatario ó procurador de una de las partes, debe ser desechada la nulidad fundada en la incapacidad civil del mandatario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 18, Ser. 4^a.

10. **Nulidad**—Es nula la resolución dictada sin la debida sustanciación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 110, Serie 4^a.

Nulidad—Véase: *Dominio*, núm. 1 —*Transacción*, número 5—*Recurso de nulidad*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 23.

1^a. **Nulidad absoluta**—La nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 359, Serie 4^a.

Nulidad absoluta—Véase: *Nulidad de un título*, núm. 3.

1^b. **Nulidad como acción**—La nulidad como acción debe ser interpuesta en el perentorio término que la ley fija para la interposición del recurso.—Jur. Civ., tom. 4, página 193, Ser 3^a.

Nulidad como acción—Véase: *Nulidad*, núm. 5

1^c. **Nulidad de un acto jurídico**—Al que pretende la nuli-

9—Véase: verb. *Mandatario*, núm. 15.

10—Art. 237 del Cód. de Proc.

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: verb. *Nulidad de una sentencia*, núm. 18 y especialmente el núm. 23.

1^b—De acuerdo con otros casos resueltos. Véase: Inst., tom. 1^o, verb. *Nulidad*, núms. 1818 y 1832.

1^c—Se trataba del caso que se registra en el verb. *Escritura pública*, núm. 1. Se comprobó que el mandato había sido constituido verbalmente—art. 1873 del Cód. Civ.—Se trataba de la prueba que un tercero quería producir para comprobar la existencia de un mandato, en cuyo caso con especialidad la ley autoriza la prueba de testigos. Con efecto, el Código dice en la nota puesta al pié del citado artículo que «los terceros pueden siempre probar por testigos el mandato, porque siendo un negocio entre otros, les es casi imposible procurarse una prueba es-



dad de un acto jurídico, por carencia de facultades en el mandatario, corresponde la presentación del instrumento público del mandato, pues la ley presume que el Juez que lo aprobó tuvo en vista la existencia de la facultad requerida.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3^a.

2. Nulidad de un acto jurídico—La nulidad de un acto jurídico por existir dolo y fraude, puede ser declarada por presunciones siempre que ellas revistan los caracteres de precisos y concordantes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 5, Serie 3^a.

3. Nulidad de un acto jurídico—El término para la prescripción del derecho á solicitar la declaración de nulidad de un acto jurídico por ser falso, solo empieza á correr desde la fecha en que el que pide la nulidad tuvo conocimiento de su existencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 5, Serie 3^a.

4. Nulidad de un acto jurídico—La acción de nulidad de un acto jurídico no exime á las partes de ser compelidas al cumplimiento, bajo la responsabilidad de la que la solicita.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 90, Ser. 3^a.

crita.» Se comprobó en autos la existencia del mandato, pero habiéndose denegado la extensión de sus cláusulas, es evidente que incumbía la prueba al que aducía un hecho nuevo en el juicio—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.—Este principio se hacía doblemente aplicable en el caso del sumario, en el que se trataba de la nulidad de un acto que independientemente del carácter especial que revestía en el pleito por la confianza que supone el mandato y la que infunde á tercero, tiene en su favor la presunción de validez que la ley acuerda á todo acto aun en caso de duda.

2—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 2^o, verbo *Simulación*, núm. 2 y su nota que trata especialmente el caso del sumario, y mismo verbo, tom. 1^o, núms. 2464, 2466, 2469 y 2470.

3—De acuerdo con la ley—art. 4030, Cód. Civ.—y con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Prescripción*, núm. 11.

4 Véase: verb. *Acto jurídico*, núm. 1.



5. Nulidad de un acto jurídico—Es bastante el poder conferido para pedir la nulidad de un acto jurídico, para reclamar en el mismo pleito los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 109, Ser. 3ª.

6. Nulidad de un acto jurídico—Se prescribe á los dos años el derecho de pedir la nulidad de un acto jurídico por error, y el término corre para los firmantes desde la fecha del acto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3ª.

7. Nulidad de un acto jurídico—La acción de nulidad de un acto jurídico por dolo, error ó falsa causa, se prescribe por dos años desde que fué conocido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 97, Ser. 4ª.

8. Nulidad de un acto jurídico—La nulidad de un acto jurídico fundada en el error de hecho ó de derecho, debe ser probada por el que la demanda.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 370, Ser. 4ª.

9. Nulidad de un acto jurídico—El que coadyuva á la nulidad del acto, no puede invocarla á su favor.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 57, Ser. 3ª.

Nulidad de un acto jurídico—Véase: *Acción pauliana*, número 1.

1ª. Nulidad un acto lícito—La ignorancia del derecho, no puede en ningún caso fundar la nulidad de un acto lícito, pero tampoco puede dar validez á un acto nulo.—Jur. Civ. tom. 2, pág. 160, Ser. 3ª.

1^b—Nulidad de una citación—La citación para absolver

5—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 42.

6—Véase: verb. *Acto jurídico*, núm. 2.

7—Véanse los núms. 3 y 6.

8—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Simulación*, núms. 2462 y 2467.

9—Puede verse la nota al verb. *Nulidad de una venta*, núm. 1—art. 1049 Cód. Civ.

1ª—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 1.

1^b—Art. 125 del Cód. de Proc.



posiciones debe ser hecha personalmente, bajo pena de nulidad—Jur. Civ., tom. 4, pág. 237, Ser. 3^a.

2^a. Nulidad de una citación—Es nula la citación por edictos y todas las actuaciones que en ella se funden si el demandante conocía ó tenía medios de conocer el domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 424, Serie 4^a.

3. Nulidad de una citación—Procede la recepción á prueba del incidente sobre nulidad de la citación por ausencia del citado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 69, Ser. 4^a.

1^a. Nulidad de un contrato—La lesión enorme ó enormísima, no es causa de nulidad de un contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Ser. 3^a.

2^b. Nulidad de un contrato—Siempre que se justifique que el contrato tuvo un principio de ejecución, no procede la nulidad del contrato bilateral por haberse omitido el número de ejemplares que la ley exige para su validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3^a.

Nulidad de un contrato—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 3—*Cosa juzgada*, núm. 1.

1^b. Nulidad de una convención—Aun cuando el comprador se haya reservado en el boleto privado de compraventa el derecho de designar la persona á cuyo favor debe otorgarse la escritura, no procede la nulidad de la convención por no existir persona determinada.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3^a.

1^c. Nulidad de declaraciones—Los que aceptan la heren-

2^a—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 13.

3—Véase: verb. *Citación*, núm. 3.

1^a—Véase: verb. *Lesión enorme*, núm. 1.

2^b—Véase: verb. *Contrato*, núm. 13.

1^b—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 7.

1^c—Véase: verb. *Herencia*, núm. 2.



cia, continúan la persona del causante y en consecuencia sus obligaciones, y carece de personería para pedir la nulidad de las declaraciones de aquél por las que reconozca á la esposa derechos á bienes determinados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 363, Ser. 3^a.

1^a. Nulidad de un desistimiento—Para que proceda la nulidad del desistimiento de una acción judicial, debe justificarse previamente que fué el resultado de un convenio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 168, Ser 4^a.

1^b. Nulidad de una donación—La nulidad de una donación por escritura pública fundada en la incapacidad del do-

1^a—Obtenida una sentencia favorable, la parte vencedora se presentó á la Cámara desistiendo de su demanda y pidiendo se devolvieran los autos para ser archivados. Poco después de producido este desistimiento, se presenta nuevamente á la justicia ordinaria demandando la nulidad del escrito y pidiendo el restablecimiento de la causa al estado que tenía á la fecha de su presentación. Explica su actitud diciendo, que el desistimiento le había sido sugerido por promesas que creía verídicas y las cuales consistían, á cambio de su renuncia á todas las ventajas de una sentencia favorable, en darle una finca y pasarle una mensualidad. Como fundamentos legales de su acción la parte recuerda los arts. 1044 y 1045 del Cód. Civ., en cuanto legislan sobre nulidad de los actos jurídicos producidos con fraude ó simulación y ausencia de la forma ordenada, y 835 y 757 del mismo Código en cuanto fulminan la misma nulidad sobre transacción de derechos litigiosos que no se hubiera exhibido al Juez de la causa firmada por los interesados, y cuando median error, dolo, miedo, etc. Desde luego debe observarse que la nulidad del escrito no podía demandarla por defecto de forma, en razón de que las peticiones judiciales no revisten el carácter de actos jurídicos en el sentido y significación que le dá nuestro Código, en la omisión de las formalidades porque el derecho procesal trae aparejada su validez: ni se desprendía finalmente de autos que hubiese sido la mente del desistente atribuirle esta inteligencia. Se hubiese necesario inquirir si los extremos invocados han tenido en juicio la debida comprobación: si no se comprueban, la demanda de nulidad falla por su base, y si se comprueban, la nulidad procede y debe declararse.

1^b—Véase: verb. *Incapacidad*, núm. 2.



nante, no puede ser declarada en tanto no se justifique que á la fecha de su otorgamiento había sido declarada judicialmente la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 403, Ser. 3^a.

1. Nulidad de una escritura pública—Fundada en la falsedad de los hechos, corresponde al que la alega, siempre que se hayan llenado las formas que la ley exige.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 272, Ser. 3^a.

2. Nulidad de una escritura pública—La prueba de las causas de nulidad de una escritura pública que no resulten de su forma, corresponde al que la alega y no al que sostiene su validez.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Ser. 3^a.

3. Nulidad de una escritura pública—La prueba del error, dolo ó fraude, á fin de declarar la nulidad de la escritura, corresponde al que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 296, Ser. 3^a.

4. Nulidad de una escritura pública—Es improcedente la nulidad de la escritura pública fundada en la falta de firma de una de las partes, si el contrato es uniteral y está firmado por el obligado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 17, Serie 4^a.

5. Nulidad de una escritura pública—No es causa de nulidad de una escritura de venta de derechos á un inmueble, su otorgamiento en distinta jurisdicción de aquella en que están ubicados los bienes ni aun su falta de inscripción en el Registro de propiedad.—Jur. Civ., tom. 8, página 121, Ser. 4^a.

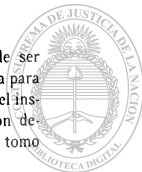
1—Véase: verb. *Instrumento público*, núm. 1, y *Escritura*, núm. 2.

2—De acuerdo con los fundamentos aducidos en el verb. *Escritura*, núm. 2. Véase el número precedente.

3—Véanse los números precedentes.

4—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 22.

5—Véase: verb. *Inscripción*, núm. 1.



6. Nulidad de una escritura pública—El hecho de ser los testigos dependientes de una oficina autorizada para otorgar escritura pública, no es causa de nulidad del instrumento: la ley fulmina esa pena si los firmantes son dependientes autorizados para otorgarlas.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 198, Ser. 4^a.

7. Nulidad de una escritura pública—Los blancos que pueden existir en una escritura pública, en partes no esenciales sobre el acto, no afectan su validez, pues la ley deja al criterio de los jueces resolver si ellos pueden dar lugar á la declaración de nulidad del título, pero no á la del acto que le dió origen y que puede ser probado por otros.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 249, Ser. 4^a.

1^a. Nulidad de una institución—Debe conocer en el juicio sobre la nulidad de la institución de los herederos, el Juez de la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 222, Ser. 3^a.

1^b. Nulidad del juicio—El Albacea carece de personería para representar á los herederos en las ejecuciones seguidas contra la testamentaria; el mandamiento de pago debe librarse contra éstos; la omisión de dicho trámite hace procedente la nulidad del juicio—Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 4^a.

2. Nulidad del juicio—Testamentario, es improcedente la nulidad de este juicio si se funda en la falta de intervención en las diligencias previas.—Jur. Civ., tom. 9, página 6, Ser. 4^a.

1^c. Nulidad del juicio ejecutivo—La nulidad que puede

6—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 29.

7—Véase: *Escritura pública*, núm. 10.

1^a—Véase: verb. *Nulidad*, núm. 3.

1^b—Véase: verb. *Albacea*, núm. 7.

1^c—De acuerdo con los principios sostenidos por la Cámara en el



oponerse en juicio ejecutivo debe fundarse en la falta de las formalidades que la ley fija para el procedimiento, pero no en la de la obligación que se ejecuta.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 408, Ser. 4ª.

2. Nulidad del juicio ejecutivo—La nulidad del juicio ejecutivo deducida después de dictada la sentencia de remate, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 260, Serie 4ª.

3. Nulidad del juicio ejecutivo—Procede la nulidad del juicio ejecutivo si no se hubiese hecho el requirement de pago al deudor ó á quien legalmente lo represente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 4ª.

4. Nulidad del juicio ejecutivo—Es nula la ejecución en que no se haya librado mandamiento contra el deudor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 153, Ser. 4ª.

5. Nulidad del juicio ejecutivo—La falta de intervención de algunos herederos, como asimismo la publicación de los avisos del remate judicial por menos días que los fijados por el Juez, hacen procedente la nulidad de la eje-

verb. *Inhabilidad de título*, núms. 1 y 3. En el caso del sumario la escepción de nulidad se dijo consistía en una simulación fraudulenta, la que no está comprendida, según opinión de la Cámara, entre las escepciones enumeradas en el art. 488 del Cód. de Proc., y se sostuvo que solo es procedente en el juicio ejecutivo la nulidad por vicios del procedimiento, lo que es muy diferente de la nulidad de la obligación cuyo cumplimiento se persigue.

2—La escepción de nulidad se opuso después de dictada la sentencia de trance y remate, pero cuando no se había producido ninguna actuación posterior á la sentencia, y la nulidad se hacía consistir en defectos anteriores á la sentencia. Es evidente que esa nulidad es á la que se refiere el art. 489 del Cód. de Proc., y que como escepción debe interponerse en el perentorio término de tres días—arts. 485 y 486.

3—Véase: verb. *Mandamiento*, núm. 1.

4—Véase: verb. *Mandamiento*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Avisos*, núm. 1.



cución, aun después de aprobada la venta, hecha oblación del precio y dada la posesión al comprador—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310, Ser. 4ª.

6. Nulidad del juicio ejecutivo—La ejecución seguida contra la esposa aun cuando el pago se haya intimado al esposo, es nula por ser ésta incapaz de comparecer al juicio sin la venia marital ó supletoria del Juez.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 116, Ser. 4ª.

7. Nulidad del juicio ejecutivo—La nulidad de la ejecución puede ser declarada á solicitud de la esposa, aun cuando comparezca sin venia marital ni supletoria.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 116, Ser. 4ª.

8. Nulidad del juicio ejecutivo—El albacea carece de personería para representar á los herederos en las ejecuciones seguidas contra la testamentaria; el mandamiento de pago debe librarse contra éstos; la omisión de dicho trámite hace procedente la nulidad del juicio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 4ª.

1. Nulidad de una notificación—El Secretario que ha verificado la notificación, no puede declarar en el incidente sobre nulidad de la misma.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 219, Ser. 3ª.

2. Nulidad de una notificación—Las notificaciones prac-

6—Se libró mandamiento contra el marido y después se citó de remate á la esposa. Se opuso la escepción de falta de personería por ser mujer casada la ejecutada, y que por consiguiente no podía estar en juicio sin la venia del marido. El Juez declaró nulo todo lo obrado, fundándose en los arts. 55, 188, 1041, 1042 del Cód. Civ., y 471 y 489 del Cód. de Proc.

7—Art. 192 del Cód. Civ.

8—Véase: verb. *Albacea*, núm. 7.

1—Véase: verb. *Notificación*, núm. 2.

2—Véase: verb. *Notificaciones*, núm. 5.



ticadas sin las formalidades que la ley prescribe, son nulas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 302, Ser. 4^a.

1^a. Nulidad de una partición—No procede la nulidad de la partición hecha entre todos los herederos mayores y por escritura pública, fundada en la diferencia de las adjudicaciones.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3^a.

1^b. Nulidad del procedimiento—El apoderado, á nombre del mandante, puede pedir la nulidad de lo actuado con su intervención, si carecía de facultad para representarlo en el juicio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 134, Ser. 3^a.

2. Nulidad del procedimiento—La nulidad del procedimiento, solo puede ser deducida por la parte á quien perjudiquen las diligencias nulas.—Jur. Civ., tom. 1, página 137, Ser. 4^a.

3. Nulidad del procedimiento—La nulidad por defectos del procedimiento no importa ni escepción ni recurso, y en consecuencia el término solo se cuenta desde la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 213, Ser. 4^a.

4. Nulidad del procedimiento—La nulidad del procedimiento puede oponerse por el interesado desde que tome intervención en el juicio y cualquiera que sea el estado en que éste se encuentre.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 213, Ser. 4^a.

5. Nulidad del procedimiento—El término para deducir la nulidad del juicio por defectos del procedimiento corre

1^a—Véase: verb. *Herederos mayores*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 4.

2—Porque el interés es la medida de toda acción. El que no tiene interés, no puede deducir recurso ni formular acción alguna que pueda prosperar.

3—Véase: *Escepción de nulidad*, núm. 2.

4—Así resulta de la disposición del art. 240 del Cód. de Proc. Véase: verb. *Notificación*, núm. 9.

5—Véase: nota precedente.



desde la intervención, ya sea por medio de escrito ó de notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 66, Ser. 4^a.

Nulidad del procedimiento—Véase: *Domicilio*, núm. 7.

1^a. **Nulidad de una regulación**—Consentida la providencia de autos, no procede la nulidad de la regulación de honorarios del Agrimensor por incompetencia del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 205, Ser. 3^a.

1^b. **Nulidad del remate judicial**—La falta de publicación de los edictos durante todo el término de ley en el diario designado, no basta para anular el remate judicial, siempre que se justifique que la publicación se ha hecho por un término mayor aunque sea en otros diarios.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 187, Ser. 4^a.

2. **Nulidad de un remate judicial**—La resolución sobre nulidad ó validez de un remate judicial, debe contener los requisitos que la ley exige para el pronunciamiento de la sentencia definitiva.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 47, Serie 4^a.

1^c. **Nulidad de una sentencia**—El padre que no pidió el nombramiento de tutor especial para menor cuya paternidad desconoce, carece de personería para pedir la nu-

1^a—Véase: verb. *Honorarios*, núm. 5.

1^b—Véase: verb. *Edictos*, núm. 5.

2—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: verb. *Nulidad de una sentencia*, núm. 19.

1—Por que aun cuando el juicio fuera nulo por la causal expresada, quedaría siempre purgada esa nulidad si no se reclamase en 1^a Inst.; y porque ese vicio no perjudicaría al menor en el caso presente en que la sentencia le fué favorable, ni favorecería al vencido, ni podría invocarla de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 11, tit. 2^a, Part. 3^a y art. 1049 del Cód. Civ. Y en el caso especial que nos ocupa el recurso de nulidad no se interpuso juntamente ni en el mismo término que el de apelación, como lo exige el art. 239 del Cód. de Procedimientos.



lidad de la sentencia que no hace lugar á sus pretensiones, fundado en esa omisión—Jur. Civ., tom. 1, página 165, Ser. 3ª.

2. Nulidad de una sentencia.—La rebeldía de la parte no permite su condena sin más sustanciación; debe abrirse la causa á prueba; la omisión de ese trámite esencial vicia de nulidad la sentencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 262, Ser. 3ª.

2.—El sumario no espresa con claridad lo resuelto. Se trata de un juicio de rendición de cuentas, en el que una vez presentada la cuenta por un albacea fué objetada por la parte contraria, procediéndose al nombramiento de un Contador sin la concurrencia de la parte disconforme con la cuenta. Presentada por el Contador la operación pericial se dió traslado de ella á la otra parte, la que no lo evacuó, acusándose rebeldía y dándose por evacuado el traslado en ese carácter. El Juez en seguida procedió á dictar sentencia, la que fué anulada por el Superior. Es indudable que la rebeldía de un litigante puede dar mérito á su condenación en los casos en que se determina por el Cód. de Proc. en su art. 434, pero esto no tiene aplicación al caso que nos ocupa, y que por el contrario existiendo en autos una oposición claramente manifestada contra el resultado de aquella operación, como es la que se contenía en el escrito presentado, era el caso de abrirse la causa á prueba. El juicio debía considerarse trabado con la oposición de los herederos del demandante á las cuentas presentadas por el albacea. El nombramiento de contador pudo poner término al pleito cuando se hubiera hecho de común acuerdo de partes, pero habiendo el albacea manifestado su oposición á una y otra cosa, su rebeldía al dejar vencer el término sin evacuar el traslado que le fué corrido de esa operación, no ha podido tener otro efecto que el de declararle decaído de su derecho para usar de aquel traslado. Por otra parte, la simple rebeldía de un litigante no basta para establecer contra él una condenación, sino en el caso de encontrarse la causa en estado y mérito bastante que acredite ser justo lo pedido contra él. En el caso que nos ocupa el juicio no se había seguido en rebeldía y se trataba tan solo de una diligencia del mismo, de un traslado que el albacea había dejado de contestar, y sea cual fuese la causa de esa omisión, declarado decaído su derecho, no ha podido estimarse su rebeldía como una renuncia á los trámites ulteriores del juicio y mucho menos, como un reconocimiento tácito de aquellas cuentas, desde que había ya manifestado su oposición.



3. Nulidad de una sentencia—Debe declararse la nulidad de la sentencia dictada en el interdicto si se omite la prueba, ofrecida y pedida por la parte en el acto del juicio verbal—Jur. Civ., tom. 4, pág. 318, Ser. 3ª.

4. Nulidad de una sentencia—Es nula la sentencia en

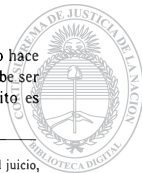
3—Véase: *Interdicto*, núm. 2.

4—El actor se presentó pidiendo el pago de una comisión de venta de un inmueble. El demandado dijo que no tenía el actor derecho á cobrar comisión por haberse efectuado la venta excediendo el mandato que para ello tenía. Como el convenio le confería el 5 % de comisión, demanda el pago de ella, y como fundamento de su demanda, cita el art. 1627 del Cód. Civ., el que determina que el precio debe fijarse por árbitros. Esta cita fué bastante para considerar el Juez de 1ª Inst., que el actor entendió deducir una demanda alternativa amparándose en sus disposiciones. El Inferior rechazó la demanda, pero convocó á las partes á juicio verbal para la constitución del Tribunal arbitral á efecto de la fijación del monto de la remuneración. La Cámara declaró nula la sentencia por mayoría de votos, sosteniendo la minoría que, según la demanda se juzgó con razón que el actor entendía demandar el pago de la comisión estipulada ó la que fijaran los árbitros. En efecto, el actor invocaba en apoyo de la acción que dedujo, los arts. 1623 y 1627 del Cód. Civ., lo que demuestra que se ponía en el caso de que la comisión cuyo pago gestionaba, pueda ser fijada por árbitros. Si su intención hubiera sido únicamente demandar el abono de lo convenido, se habría limitado á invocar el art. 1623, que es el aplicable al caso. La cita del art. 1627 del Cód. Civ. que el actor invocaba al deducir la demanda, no podía considerarse hecho sino con el propósito de ampararse de sus disposiciones, y en tal caso el Juez al resolver el punto en cuestión, se ajustó estrictamente á lo prescripto en los arts. 216 y 217 del Cód. de Procedimientos. La mayoría opinó lo contrario diciendo, que el art. 216 del Código de Proc. impone á los jueces el deber primordial de ajustar sus resoluciones á las acciones deducidas en juicio y el 71 obliga á los litigantes á que expresen en sus escritos respectivos la cosa demandada, designándola con toda exactitud y á que formulen sus peticiones en términos claros y positivos—incs. 3º. y 6º—y la razón de esta exigencia del art. 71 es bien perentoria. Como observa Manresa—tom. 2º, pág. 38—«Si el que demanda no determinase la clase de obligación, su entidad y condiciones, á fin de que se sepa la clase de prestación que se exige al demandado, no solo se encontraría éste embarazado para conocer el origen, objeto y esten-

cuanto resuelve sobre puntos no deducidos en la demanda.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 3ª.

sión de las obligaciones del actor, y por consiguiente imposibilitado de poder preparar sus excepciones y pruebas para combatirlas, sino que el mismo Juez no podría calificar con justicia las solicitudes aducidas por las partes, ni sería posible que la sentencia pudiera ser conforme con la demanda.» Mas en el caso ocurrente el actor significó con precisión la cosa demandada, y con igual precisión ha determinado sus peticiones, sin que entienda, empero, que con el mismo alcance que el Juez y un vocal de la Cámara les atribuían. Se demandó el cobro de la suma de seis mil seiscientos pesos moneda nacional, importe líquido de la comisión reclamada al demandado, y habiendo desconocido éste categóricamente las pretensiones del actor, quedando así formado el cuasi-contrato de la litiscontestación, el pronunciamiento del Inferior debió concretarse á dilucidar y resolver ese punto claramente sometido á su decisión. El hecho de que el actor hubiera citado un precepto legal de todo punto impertinente á la cuestión litigiosa concretada en términos claros y positivos, no puede importar en manera alguna, ni ser considerado como una petición alternativa para que se condene al reo al pago de la comisión espresamente demandada, ó la que determinen los árbitros, conforme á lo preceptuado en el art. 1627 del Cód. Civ., pues si esa hubiese sido la mente del demandado, debió observar las reglas fijadas en el art. 71 del Cód. de Proc, á fin de evitar al demandado y al Juez mismo los inconvenientes que acertadamente apunta el autor antes citado. Resuelta entonces, como lo fué, desfavorablemente para el actor, la única petición deducida en la demanda, y siendo la sentencia congruente con ésta en esa parte, desde que contenía decisión espresa, positiva y precisa, no haciendo lugar al reclamo de seis mil trescientos pesos nacionales que era lo demandado, la sentencia es válida en esa parte. Pero en cuanto á lo demás, debía dejarse sin efecto, pues habiendo versado la defensa del demandado, solamente sobre los hechos espuestos en la demanda, si se condenase á lo que en ella no se había pedido, sería condenarlo sin haber sido oído ni vencido. Es bien conocido el principio espresamente consagrado en derecho, de que la sentencia debe ajustarse en un todo á la acción deducida. Gregorio López, en la glosa 1ª de la ley 16, tit. 22, Part. 3ª, dice: «*Sententia debet esse conformis libello in tribus, in re, causa, et actione. Et si iudex pronuntiat ultra petitum, sententia est ipso jure nulla.*» El Cód. de Proc. aceptando los mismos principios de la ley de Partida á la que se refiere la glosa de Gregorio López, citada, dispone á su vez que la sentencia definitiva debe contener decisión es-





5, Nulidad de una sentencia.—La sentencia que no hace lugar á la aprobación de la cuenta particionaria, debe ser fundada con arreglo á la ley, si no llena ese requisito es nula.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 262, Ser. 4^a.

presa, positiva y precisa con arreglo á las acciones deducidas en el juicio, declarando el derecho de los litigantes y condenando ó absolviendo de la demanda en todo ó en parte. Con arreglo á estos principios, la sentencia pronunciada en esta causa carecía de valor legal en cuanto mandaba proceder al nombramiento de árbitros para determinar el precio que corresponde al demandante como mandatario del demandado después de declarar no haber lugar á la acción instaurada en cuanto se refería al cobro de la comisión del 5 %. Basta para esto tener presente que la demanda se fundaba en el convenio celebrado entre el actor y el demandado respecto á la remuneración ó precio de los servicios que el último encomendaba al primero, cuyo pago era lo único que se demandaba expresamente, según resultaba de los propios términos empleados por el demandante al terminar su escrito con las palabras: «Vengo pues, en uso del derecho que estas prescripciones legales me acuerdan, á deducir demanda por el cobro de la suma de seis mil trescientos pesos moneda nacional que es el importe líquido de la comisión, etc.» Las prescripciones del art. 1627 del Cód. Civ. no pueden favorecer en manera alguna la validez de la sentencia en la parte espresada. Esas prescripciones se invocaron en la demanda del mismo modo que la del art. 1623 para demostrar su legitimidad en cuanto se refiere al cobro del precio ajustado y es por esto sin duda, que se concluye por pedir la suma de seis mil trescientos pesos como importe de la liquidación del cinco por ciento ofrecido en comisión. Por esto la sentencia de 1^a Inst. debió limitarse á declarar si el actor tenía ó no derecho para cobrar al demandado la comisión estipulada que es lo que formaba el objeto de la demanda, desde que esa era la única cuestión sometida á su resolución y por lo mismo debe considerarse *ultra petita* la parte de ese fallo en que después de no hacer lugar á la demanda instaurada, ordenaba el nombramiento de árbitros para que determinasen lo que debía pagarse, lo que está en armonía con la jurisprudencia de la Cámara en casos análogos.

5—Esta sentencia debe ser considerada como definitiva. El Juez por un mero decreto no hizo lugar á la aprobación de la cuenta particionaria, siendo anulada la resolución, porque ella debe contener los fundamentos á mérito de los cuales niega la aprobación.



6. Nulidad de una sentencia —Adolece de nulidad la sentencia que no resuelve todos los puntos sometidos á la

6—Iniciada una acción reivindicatoria por nulidad del acto jurídico de enajenación hecha por el Banco Hipotecario, se dictó sentencia definitiva, la que fué declarada nula. La demanda se funda en: a) que la época en que el Banco mandó vender las propiedades era anormal; b) que la venta se hizo contraviniendo el art. 114 del Cód. de Procedimientos; c) que quien compró fué la esposa de uno de los rematadores é hija política de otro—pues era una sociedad;—d) que la compradora era mujer casada, sin haber obtenido la venia del marido; e) que el verdadero comprador fué el marido. Como fundamento de derecho aducía el actor lo dispuesto en los arts. 1001, 1004, 1043 y 1044 del Código Civ. Ahora bien, según disposiciones del Cód. de Procedimientos, el Juez al sentenciar, debe hacerlo de acuerdo con las acciones deducidas, haciendo mérito de cada una de las acciones pertinentes fijadas en la discusión, y debe espedirse separadamente respecto de los diversos puntos litigiosos, cuando éstos hayan sido varios—arts. 216, 217 y 218 del Código citado.—En el caso que nos ocupa, el Inferior citaba en la sentencia los arts. 1001 y 1004 del Cód. Civ., pero omitió considerar y resolver sobre la causal de nulidad invocada por el actor al fundarse en los otros artículos mencionados. Siendo cierto que esa cuestión fué sometida á la decisión del Inferior y por consiguiente, si hubiera de revocarse la sentencia por la apelación, la Cámara no estaría habilitada para pronunciarse sobre una cuestión que no ha sido resuelta en 1ª Inst., según se ha establecido por este Tribunal en un caso análogo. Véase: Jur. Civ., tom. 9, Ser. 1ª, pág. 63. El Juez *a quo* no se pronunció respecto de uno de los puntos sometidos á su decisión, y es evidente que la sentencia apelada, adolecía de un vicio de forma que la invalidaba. Aun admitido por vía de hipótesis que por el hecho de fundar el actor una de las causales de nulidad en los arts. 1001 y 1004 del Código Civil, sin determinar á cuál de los casos enumerados en esos artículos era su propósito referirse, adoleriera la demanda del defecto apuntado en el art. 72, incs. 4º y 5º del Cód. de Proc., tal circunstancia en manera alguna autorizaba al Inferior para guardar completo silencio sobre ese capítulo de la demanda, que pudo ser considerado del punto de vista de la disposición del Cód. de Proc. citado, en el caso de haberse encontrado que la falta de precisión en los hechos hubiera colocado al demandado en la imposibilidad de defenderse sobre esa causal de nulidad, y al Juez mismo en la de juzgarla con arreglo á derecho por no haber sido debidamente determinada. Esta fué la opinión de la mayora.



decisión del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 233, Serie 4ª.

7. Nulidad de una sentencia.—La sentencia dictada sin recibirse la causa á prueba es nula siempre que se afir-

ria formada de tres votos contra dos. La minoría sostuvo que la sentencia no era nula, aduciendo como fundamento que la referencia á los arts. 1001 y 1004 del Cód. Civ. en el escrito de demanda, era incidental, y se hace bien ó mal al deducirla en apoyo de la conclusión sobre nulidad de la transmisión de la propiedad á que se llega en el capítulo, como lo demuestra el hecho de no hallarse separada ni aún por una coma de la palabra que le precede. El art. 71 del Cód. de Proc. ordena que la demanda debe contener los hechos en que se *funde explicados claramente*, el derecho espuesto *suscintamente* y la petición en términos claros y positivos. En el escrito de demanda no solo no se explicaban los hechos en que se fundaba la nulidad de la escritura ni el derecho que la rije, sino que tampoco se volvió sobre ello al formularse la petición final, limitándose á deducir la acción reivindicatoria. Demandas de este género pueden ser desechadas de oficio y si no lo son, es porque estando claramente explicada y fundada en cuanto á la nulidad de la transmisión de la propiedad, solo pudo considerarse la cita de los arts. 1001 y 1004 del Cód. Civ. en el sentido indicado. Admitiendo que fuera de darse una interpretación tan lata á la cita mencionada, resultaría una desigualdad chocante entre las partes para producir la prueba, desde que enumerando esos artículos, tantos y tan diversos hechos, y el demandado ignorase sobre cuál de ellos había de recaer la suya á la del contrario. Con una apreciación semejante, se dificultaría la contienda y se traerla la confusión á los juicios, haciendo imposible su terminación. La atinencia que tenga con la nulidad de la escritura lo que se expresa en el curso de la demanda después de trabado el juicio por demanda y contestación, no es sino una simple indicación más ó menos acertada, pero no una conclusión precisa para fundar un fallo. La nulidad de la escritura no fué alegada oportunamente en la forma requerida por la ley ni discutida por las partes, ni sometida á prueba y por consiguiente, debía ser desestimada. El hecho de no haberse especificado en la demanda los vicios de nulidad de la escritura sino limitándose á citar los artículos del Código Civil, contra lo dispuesto por el art. 71, inc. 4º de la Ley de Enjuiciamiento, no implica nulidad de la sentencia que no es tomada en consideración por separado.

7.—Véase el núm. 2.



men hechos contradictorios. —Jur. Civ., tom. 6, pág. 279, Ser. 4^a.

8. Nulidad de una sentencia —La conformidad de las partes sobre los hechos alegados hace improcedente la recepción de la prueba; la nulidad de la sentencia fundada en ese hecho debe ser desechada. —Jur. Civ., tomo 5, pág. 17, Ser. 4^a.

9. Nulidad de una sentencia —Debe declararse la nulidad de la sentencia que no llena las prescripciones que exige la ley para su pronunciamiento. —Jur. Civ., tomo 5, pág. 23, Ser. 4^a.

10. Nulidad de una sentencia —Reconocido el derecho de indemnización sobre daños y perjuicios procedentes de un cuasi-delito, corresponde la recepción de prueba sobre el monto, y adolece de nulidad la sentencia que sin más trámite fija la suma. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 301, Ser. 4^a.

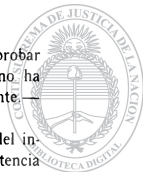
11. Nulidad de una sentencia —Adolece de nulidad la

8—La nulidad se hacía consistir en que la causa no había sido abierta á prueba. Esta causal es improcedente porque el trámite de la prueba solo es procedente cuando hay hechos controvertidos ó cuando no hay conformidad acerca de los hechos alegados—art. 104 del Cód. de Proc.

9—En la sentencia no se cumplió el precepto del art. 217 del Cód. de Proc., pues no se hizo relación de la causa ni mérito de cada uno de los puntos pertinentes de derecho fijados en la discusión; tampoco se dió cumplimiento á lo que dispone el art. 218, pues que siendo varios los puntos litigiosos, no se hizo el pronunciamiento correspondiente á cada uno de ellos. Estas infracciones vician de nulidad la sentencia —art. 217 del Cód. de Proc. No pronunciándose el Inferior sino sobre uno de los puntos en litigio, podría ocurrir que siendo contraria la opinión de la Cámara á la del Juez en ese punto, se resolvería el pleito por lo que resultara de la decisión sobre los demás, tomada por la Cámara en única instancia contra el propósito espreso de la ley que exige que este tribunal dicte sus sentencias en revisión.

10—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 92.

11—Véase: *Información supletoria*, núm. 7.



sentencia aprobatoria de una información para probar la propiedad de un terreno por prescripción, si no ha sido oído el Ministerio Fiscal ó quien lo represente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 427, Ser. 4ª.

12. Nulidad de una sentencia.—La intervención del interesado hace inprocedente la nulidad de la sentencia

12—Se presume que el litigante que se notifica de una providencia posterior á otras, las conoce todas, y en consecuencia es de aplicación el art. 40 del Cód. de Proc. Esta presunción no la establece la ley, y es solo una interpretación equivocada y que acusa escaso conocimiento del procedimiento observado prácticamente en los juzgados inferiores. Si todos los escritos estuviesen agregados al espediente de la referencia, podría argumentarse diciendo que los interesados deben necesariamente tener conocimiento de las providencias anteriores á la que se notifica; pero no sucede así, pues los escritos no se agregan á los espedientes, sino después de notificadas todas las partes personalmente ó por nota, y casi siempre en esta última forma, porque cuando un litigante concurre á Secretaría á preguntar si hay despacho, se le contesta que «no hay nada»; mientras que quizá tiene media docena de notificaciones: no bien se le ha contestado así cuando empiezan los cadetes,—porque si se quiere es el oficial primero, ni el secretario,—á poner nota de no haber comparecido á notificarse. Esas fojas casi siempre andan completamente separadas del espediente. De manera que viene un litigante á notificarse de la última providencia; se notifica, pregunta si hay otras, y se le contesta negativamente. Después aparecen consentidas providencias de las que jamás tuvo conocimiento por habérsele notificado por nota de no haber comparecido. No es posible pues aceptar el temperamento adoptado por la Cámara, cuando dice que la notificación de autos posteriores subsana la falta de notificación ó los defectos de procedimientos anteriores. Se arguye asimismo con el art. 240 del Cód. de Proc. el que establece que la nulidad por defectos de procedimiento quedará subsanada siempre que no se reclame la reparación de aquellos en la misma instancia en que se hayan cometido. La palabra *instancia* la toma la Cámara en un sentido que no es acertado. Hemos espuesto nuestro modo de pensar al respecto en el tom. 3, verb. *Defectos de Procedimientos*, núm. 2. El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia constante. Véase: Inst., tom. 3, mismo verb. núms. 1 y 2, donde se citan los casos resueltos en el mismo sentido.



por defectos de las notificaciones anteriores á su intervención.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 252, Ser. 4ª.

13. Nulidad de una sentencia—Adolece de este defecto la sentencia que no contiene decisión expresa sobre la acción deducida.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 370, Ser. 4ª.

14. Nulidad de una sentencia—Adolece de nulidad la sentencia dictada sin las formalidades que la ley prescribe para la secuela del juicio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Ser. 4ª.

15. Nulidad de una sentencia—La omisión del segundo traslado, antes de resolver las escepciones, no es causa de nulidad de la sentencia.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 28, Ser. 4ª.

16. Nulidad de una sentencia—Es nula la sentencia aprobatoria de una liquidación si el auto en que se niega ampliación del término para observarla no se encuentra ejecutoriado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 73, Ser. 4ª.

17. Nulidad de una sentencia—Es nula la sentencia dic-

13—Arts. 216, 217, 218 y 237 del Cód. de Proc.; Ley 16, tit. 22, Part. 3ª; Leyes 9 y 10; tit. 17, lib. 4, R. C.; y ley 2, tit. 16, lib. 11, Nov. R.

14—En un juicio ejecutivo se dictó sentencia de remate sin abrir la causa á prueba, como lo prescribe el art. 490 en su inc. 3ª, Cód. de Proc. La sentencia es nula porque hay violación de las formas sustanciales marcadas para el procedimiento ejecutivo.

15—Véase: verb. *Escepciones*, núm. 8.

16—Véase: verb. *Liquidación*, núm. 5.

17—Entablada una demanda por daños y perjuicios contra el «El Diario», no se espresó en ella el nombre de la persona á quien se atribuía la representación del demandado, contraviniendo, según decia la Cámara, la disposición del art. 72 del Cód. de Proc., y la Ley 40, tit. 2ª, Part. 3ª. No se cumple con estas prescripciones con solo designar el nombre de la entidad que se demanda, que puede tener según los casos, diversas representaciones. Según esto, la sustanciación dada al juicio fué viciosa desde su origen, pues el emplazamiento que como



tada y debe reponerse la causa al estado de demanda, si ésta no ha sido notificada á persona determinada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 359, Ser. 4^a.

18. Nulidad de una sentencia—Es nula la sentencia dictada sin la debida sustanciación, y el Superior debe declarar la nulidad aun cuando la parte haya omitido el recurso.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 409, Ser. 4^a.

19. Nulidad de una sentencia—Debe declararse la nuli-

dice el proemio del tit. 7^o, Part. 3^a es raíz ó comienzo de todo pleito, no aparece hecho en la forma que prescribe el Cód. de Proc. Y no se diga que la omisión contenida en la demanda ha podido quedar subsanada por la notificación dirigida al demandado, cuando éste no aparece notificado directamente, ni su notificación sería procedente una vez que en la demanda no se le hace figurar como representante de la Empresa demandada. Ahora bien, si el emplazamiento que ha pretendido hacerse por medio de cédula es nulo por vicio de forma, es evidentemente nulo el procedimiento ulterior y consiguientemente es nula también la sentencia—art. 237, Cód. de Proc. y Ley 5^a, tit. 26, Part. 3^a. Por otra parte, en la diligencia de emplazamiento de la demanda se hacía constar por el actuario haberse constituido en el domicilio de la empresa demandada, á efecto de notificar á su director, sin espresar ó designar el nombre de la persona emplazada, como así debió verificarse para la validez de la diligencia. La cédula fué dejada por no hallarse el Director, á un individuo que dijo ser empleado de la casa y que se negó á firmar y á dar su nombre. Además la sentencia de 1^a Inst. fué notificada á una persona que no solo no se designaba en la demanda, sino que á estar á los trámites de la diligencia, no era el director de la empresa demandada, fuera de que según los impresos que se acompañaron por la misma parte demandante, quien figuraba como tal era una persona determinada.

18—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara en casos análogos. Véase el núm. 23. Puede verse verb. *Nulidad absoluta*, núm. 1.

19—Un comprador en remate judicial se presentó alegando la nulidad del acto. No habían hechos controvertidos, y la nulidad tenía como único fundamento, antecedentes que constaban del mismo proceso. Pero estas circunstancias no autorizan á prescindir de las formalidades prescriptas por la ley adjetiva, cuando no existe mérito para la aper-



dad de la sentencia definitiva para cuyo pronunciamiento no se hayan llenado las formalidades que la ley determina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 47, Ser. 4^a.

20. Nulidad de una sentencia—La amistad con el abogado no es causa de recusación, ni en consecuencia de nulidad de la sentencia dictada á favor de la parte por él patrocinada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 313, Ser. 4^a.

21. Nulidad de una sentencia—La falta de pronunciamiento del Juzgado, sobre la escepción de prescripción opuesta en el alegato, no puede fundar la nulidad de la sentencia, alegada por la parte contra quien fué opuesta.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

22. Nulidad de una sentencia—Debe declararse nula la sentencia dictada si el demandado fué notificado del traslado de la demanda en domicilio que con posterioridad se ha reconocido por el demandante que no era verdadero,

tura de la causa á prueba, esto no autoriza á sentenciar la causa en definitiva, porque á ello se opone terminantemente el art. 103 del Cód. de Proc. El Juez de 1^a Inst., en el caso que nos ocupa, una vez evacuado el traslado conferido de la nulidad deducida, procedió á dictar sentencia definitiva sin guardar por otra parte las formas prescritas por los arts. 216 y 217 del Cód. de Proc. La sentencia era en sí evidentemente nula, y era nula también por haber sido dictada sin la sustanciación marcada por la ley. Cuando hay hechos controvertidos debe abrirse la causa á prueba, y cuando no los hay debe correrse nuevo traslado por su orden—última parte del art. 103.—Estas reglas no pueden infringirse porque las que rigen los procedimientos son de riguroso derecho y deben guardarse indistintamente por las partes y por los jueces, pues su observancia es para las primeras, garantía recíproca de igualdad en el debate y para los segundos de mejor acierto para la resolución de las causas. El art. 237 del Cód. de Proc. declara nula una sentencia dictada en las condiciones de la que nos ocupa.

20—Véase: verb. *Abogado*, núm. 13.

21—Véase: *Escepción de prescripción*, núm. 4.

22—Véase: verb. *Notificación*, núm. 14.



aun cuando ese pronunciamiento le fuera favorable.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 383, Ser. 4ª.

23. **Nulidad de una sentencia**—El Tribunal debe declarar de oficio la nulidad de una sentencia que no reúne los requisitos que para su validez exige el Código de Procedimientos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 107, Ser. 4ª.

24. **Nulidad de una sentencia**—El recurso de nulidad de una sentencia porque afecta derechos de terceros, que no han sido parte en el juicio, es improcedente si lo deduce cualquiera de los que han intervenido.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 5, Ser. 4ª.

25. **Nulidad de una sentencia**—Es nula la sentencia que

23—Sustanciada una cuestión como de puro derecho, el Juez procedió á dictar sentencia omitiendo en ella el nombre de las partes sin hacer relación de la causa sometida a su fallo, sin establecer el objeto del pleito y sin consignar separadamente los hechos alegados. La nulidad en este caso procede de acuerdo con lo preceptuado en el art. 217 del Cód. de Proc. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Nulidad*, números 1 y 13; *Sentencia*, núms. 3 y 4. El verb. *Nulidad*, núms. 6 y 17 del tom. 2º, Inst., tratan especialmente el caso del sumario; puede verse asimismo los núms. 8, 9, 10, 13, 20 y 24; F. S. C. P. tom. 1º, págs. 213, 221, 339 y 346, tom. 9º, págs. 208 y 214, Ser. 2ª, y tom. 1º, pág. 408, tom. 6º, pág. 173, Ser. 1ª.

24—El recurso se fundaba en vicios de procedimiento y en que la sentencia afectaba derechos de terceros que no habían intervenido en el pleito. En cuanto al primer fundamento debe decirse que no procede porque es doctrina corrientemente aceptada por la Cámara que esta clase de defectos quedan subsanados si no se reclaman en la misma instancia en que se producen. En cuanto al segundo punto, las personas que han sido parte, si no tienen la representación de las perjudicadas por la sentencia, carecen de personería para formular á nombre de éstas petición alguna que implique la necesidad de un mandato. Carecen de personería al efecto.

25—Esta nulidad fué declarada en el caso que se registra en el verbo *Excepción perentoria*, núm. 3, donde puede verse el fundamento del sumario que nos ocupa.

resuelve sobre el fondo de la demanda sin audiencia del demandado.—Jur. Civ., tom. 5, página 416, Ser. 3ª.

Nulidad de una sentencia—Véase: *Paternidad legítima*, núm. 2.—*Recurso de nulidad*, núm. 1 y siguientes.

1. **Nulidad de un testamento**—Las causas de nulidad de un testamento deben ser probadas por el que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4ª.

2. **Nulidad de un testamento**—La atestación, hecha por el escribano en el cuerpo del testamento, de un hecho que impide al testador firmar el acto, es válida y no puede fundar la nulidad, siempre que el hecho sea cierto, aunque no sea el mismo que cause el impedimento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4ª.

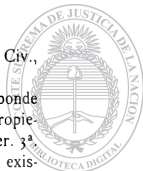
3. **Nulidad de un testamento**—Aun cuando alguno de los testigos no conozca al Escribano autorizante, no es causal para declarar la nulidad del testamento, pues basta

1—De acuerdo con los fundamentos legales aducidos en el ver. *Instrumento público*, núm. 1 y *Escritura*, núm. 2.

2—El escribano dijo en el testamento que la testadora no firmada «por estar físicamente impedida de la vista», pero resultó que la testadora no sabía firmar. Fundándose en esta causal se dijo de nulidad del testamento, á lo que no se hizo lugar, porque la atestación del Escribano fué cierta, no obstante no haber sido esa la única causa por la cual la testadora no firmó. El art. 3663 dice, que el Escribano debe expresar la causa por que no pueda firmar el testamento en caso de saberlo hacer. La causa verdadera fué el hecho de *no saber*. Pero como lo sostienen varios tratadistas, no es necesario por nuestro Código que se enuncie esta causa cuando existe y basta que se llenen las formalidades de ley.

3—El art. 3699 del Cód. Civ. dice que «los testigos deben ser conocidos del Escribano. Si éste no los conociese, puede exigir antes de otorgar el testamento que dos individuos aseguren la identidad de sus personas y la residencia de ellas.» Siendo esto claro, no debe eludirse su tenor literal so pretexto de interpretación. El hecho de no conocer el testigo al Escribano es circunstancia suficiente para determinar la nulidad en atención á que en tal caso la atestación de éste respecto á la





para su validez que el Escribano lo conozca.— Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4^a.

1^a. Nulidad de un título—Al reivindicante corresponde la prueba de la nulidad del título que justifica la propiedad del poseedor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 129, Ser. 3^a.

2. Nulidad de un título—Los blancos que puedan existir en una escritura pública, en partes no esenciales sobre el acto, no afectan en validez, pues la ley deja al criterio de los jueces resolver si ellos pueden dar lugar á la declaración de nulidad del título, pero nó á la del acto que le dió origen y que puede ser probado por otros medios.— Jur. Civ., tom. 2, pág. 249, Ser. 4^a.

3. Nulidad de un título—La acción de reivindicación es procedente, si el título que presenta el demandado adolece de insanable nulidad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 181, Ser. 4^a.

Nulidad de una transacción—Véase: *Transacción*, número 7.

1. Nulidad de una venta—La nulidad de la venta no

capacidad de aquél no puede dar fe? La interpretación legal y auténtica deriva del mismo art. 3699. Siempre que se dé fe por el Escribano de conocer al testigo, esa atestación debe tenerse por verdadera mientras no se pruebe lo contrario.

1^a—Art. 995 del Cód. de Proc.

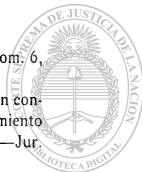
2—Véase: *Escritura pública*, núm. 10.

1—Una mujer casada en segundas nupcias, vendió un inmueble de su propiedad sin la venia de su esposo, y después se presentó diciendo de nulidad de la venta, siendo rechazada la demanda y declarándose la validez de la operación. La vendedora ocultó su estado de casada y el Escribano autorizante dió fe de su estado de viuda. Si bien es cierto que el art. 192 del Cód. Civ. faculta al marido, á la mujer y á los herederos de ambos para pedir la nulidad de los actos y obligaciones de la mujer por falta de licencia del marido, es necesario tener en cuenta que según resultaba de la escritura de venta que en testimonio se agregó á los autos, la vendedora no solo prescindió de la venia de su esposo, sino



puede ser demandada por el causante único del vicio que

que también hizo ocultación de su estado civil, manifestando que era viuda, y entonces, según el precepto terminante del art. 1047 del Código Civil, no puede pedirse la nulidad del acto por haberlo ejecutado el vendedor, sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba, por cuanto sería no solo injusto sino también hasta inmoral permitir que solicite la anulación de un acto contrario á la ley la misma persona que á sabiendas la ha violado, pues importaría ampararla con una nulidad causada por su propio hecho. *Quod quis ex culpa sua damnum sentit non intelligitur damnum sentire*, dice una conocida regla de derecho. Las palabras con que Marcadé, en su conocida obra—tom. 1º, pág. 602, núm. 751—ocupándose de resolver una cuestión que se propone, perfectamente análoga á la que nos ocupa, resuelve el punto, no dejan en el ánimo la más mínima duda. Se pregunta este distinguido autor: «¿Qué decirse si en el acto desprovisto de la autorización del marido se hubiera hecho pasar la mujer por no casada? ¿Deberíase, á pesar de la buena fe del tercero, anular por falta de tal autorización? Cuando se trata de un menor, el solo aspecto de su figura debe darme al menos sospecha de su incapacidad; desde entonces puedo pedir su acta de nacimiento, y si me presenta un acta falsa en apoyo de su mentira, no me encontraré ya en el caso de una simple declaración de mayor edad, habrá un delito de cuyas consecuencias no le garantizará su menor edad. Si me he contentado con su aserción cuando era natural y tan fácil pedir el acta de nacimiento, es á mí á quien debo culpar; se concibe, pues, que en estas circunstancias, cuando se trata, por otra parte, de un individuo cuya misma menor edad, su inesperienza le impidieron calcular las consecuencias de su mentira, el art. 1037 permite la anulación en su provecho. Pero cuando se trata de una mujer de treinta años, no puedo leer en su cara que está casada, y no puedo pedirle el acta que haga constar que no lo es; en fin, ella por su lado comprende la gravedad de la mentira que ha dicho en el acto. Para ella esta mentira es un delito, del cual ella debe responder como aparece del artículo 1310. *La anulación no deberá ser pues pronunciada.*» Por otra parte, no se acreditó en autos la existencia de ninguna circunstancia que pudiera demostrar que el comprador de la finca conociera la incapacidad de la enajenante. Se trata, pues, de un comprador de buena fe, que ha ignorado por completo los antecedentes que después se quisieron invocar para invalidar el contrato, buena fe que resultaba de la misma escritura. El escribano da seguridades sobre el conocimiento de las partes que concurren á su otorgamiento, afirmando en el caso que nos



alega como fundamento de su acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 82, Ser. 3ª.

2. Nulidad de una venta.—La venta hecha por un condómino de una parte determinada, sin el consentimiento de los otros condóminos, es nula é insubsistente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 419, Ser. 3ª.

Número—Véase: *Notificación*, núm. 5.

ocupa que era viuda, y en la parte de esa escritura en que se expresaba como hubieron los vendedores el terreno objeto del contrato, consignó un dato que sin duda contribuyó á robustecer la manifestación de la vendedora con respecto á su estado civil, á saber: que lo hubo de su esposo como su única y universal heredera, declarada así judicialmente según el auto que allí se transcribe, y si á todo esto se agrega que el demandado no compró la finca directamente de la vendedora, se adquiere sin esfuerzos el convencimiento de que aquél no ha tenido motivo alguno para poner en duda la capacidad de la cedente para efectuar la venta cuya nulidad se pretende. El art. 929 del Código Civil, resuelve también la cuestión en favor del demandado. El error de hecho, dice, no perjudica cuando ha habido razón para errar. El codificador para explicar el espíritu de esta disposición, cita á Savigny, quien enseña que el favor concedido al error de hecho se debe á que comunmente es difícil y aun imposible el evitarlo. Por consiguiente, no debe concederse este favor al que es culpable de una gran negligencia. Para hacer la aplicación de esta disposición restrictiva, es necesario tener en consideración las circunstancias particulares de cada caso, y como se ha visto los que concurrían en el que nos ocupa favorecían indiscutiblemente al demandado—Laurent, tom. 3º, núm. 161 y Duranton sobre el art. 225 del Cód. de Nap.—La Suprema Corte de la Nación ha dictado también un fallo estableciendo el principio de que la nulidad de un acto no puede ser invocada sino por las personas que ignoraban el vicio que lo invalidaba y que no fuesen causantes de ella—tom. 12, pág. 159, Ser. 2ª.—Finalmente, no debe olvidarse tampoco que aun cuando el caso fuera de solución dudosa, lo que no sucede aquí, deben los Tribunales decidirse siempre por la subsistencia del acto y no por su nulidad.

2—Véase: verb. *Condominio*, núm. 1.



Objeto.—Véase: *Sociedad*, núm. 1.

1^a. Objeto de poco valor—Las alhajas y objetos de poco valor que el causante no haya determinado espresamente, corresponden al legatario especial de sus muebles y ropas de uso.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 52, Ser. 4^a.

Objetos retenidos.—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 94.

Oblación.—Véase: *Avisos*, núm. 1.—*Comprador judicial*, núm. 1.—*Obligación de hacer*, núm. 6.—*Intereses*, número 8.

1^b. Obligación.—Reconocida la autenticidad de la obligación, al escepcionante corresponde la prueba de las modificaciones ó condiciones á que hubiese sido subordinado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 360, Ser. 4^a.

2. Obligación.—Reconocida su existencia, la prueba de que el pago es á cargo de un tercero, corresponde al que afirma el hecho—Jur. Civ., tom. 7, pág. 383, Ser. 4^a.

3. Obligación.—El reconocimiento de la autenticidad del contrato no importa el del cumplimiento de aquellas

1^a—Véase: verb. *Alhajas*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Condición*, núm. 2.

2—De acuerdo con los principios legales sentados en la nota al verbo *Obras*, núms. 1 y 3.

3—Véase: verb. *Autenticidad*, núm. 3.



estipulaciones que den origen á una obligación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 87, Ser. 4^a.

4. Obligación—Solo puede exigirse al firmante, el reconocimiento de la firma de una obligación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 81, Ser. 4^a.

5. Obligación—El heredero aun cuando no desconozca la validez del documento en que se funda la obligación, puede invocar la falsedad de la causa que él expresa, pero como escepcionante carga con la prueba.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 5, Ser. 4^a.

6. Obligación—Probada la falsedad de la causa que expresa la obligación, procede la absolución del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

7. Obligación—Solo puede iniciar acción ejecutiva el que justifica su derecho á exigir el cumplimiento de la obligación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 114, Ser. 4^a.

Obligación—Véase: *Agravio moral*, núm. 1—*Aluvión*, núm. 3—*Cartas privadas*, núm. 1—*Apoderado único*, núm. 6—*Sindicato*, núm. 1—*Consejo de Higiene*, núm. 1—*Contrato*, núms. 1, 17 y 18—*Cuenta corriente*, núm. 5—*Documento privado*, núm. 4—*Prescripción de la obligación*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 54 y 96—*Escepción de falsedad*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 10—*Mora*, núm. 3—*Novación*, núm. 1—*Nulidad del juicio ejecutivo*, núm. 1—*Inhabilidad de título*, núm. 3—*Término*, núm. 4—*Diligencias de prueba*, núm. 23.

Obligación á oro—Véase: *Competencia*, núm. 4—*Moneda especial*, núms. 1 y 2.

1. Obligación á plazo—La obligación á plazo fijo, no

4—Véase: verb. *Firma*, núm. 3.

5—Véase: verb. *Falsedad*, núm. 6.

6—Véase: verb. *Falsedad*, núm. 7.

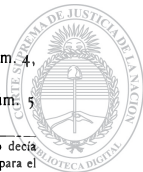
1—De acuerdo con el espíritu de los arts. 571 y 572 del Cód. de Procedimientos.

puede ser exigida ejecutivamente antes del vencimiento del plazo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 409, Ser. 4^a.

2. Obligación á plazo.—El pago al contado de una obligación á plazo no permite la repetición contra el acreedor por la diferencia ó descuento, pues se supone la

2—Una compañía de tramways pagó á un empresario cuentas por afirmados, al contado, y sin el descuento del 8 % que autorizan las Ord. de 1^o y 12 de Oct. de 1888. Dijo que había pagado por error y pedía la devolución de la suma que debió descontar, fundándose en los arts. 784 y 788 del Cód. Civ. La compañía fué vencida, porque no hay ley alguna que la autorice para exigir esa devolución. El artículo 784 del Cód. Civ. en que el actor apoyaba su demanda, se refiere á un caso muy diverso y es inaplicable al presente ni aun por analogía. El art. 784 dispone: que el que por error de hecho ó de derecho se creyere deudor y entregase alguna cosa ó cantidad en pago, tiene derecho á repetirla del que la recibió; y es muy natural y justo que así sea porque el que efectúa un pago se propone cumplir una obligación y extinguirla. Si la obligación no existe en realidad, no puede haber pago en la acepción jurídica y legal de la palabra; la entrega de la cosa ó de la cantidad hecha por el que se creyó deudor no surte el efecto legal de pago y por consiguiente puede ser repetida contra el que la recibió. En el caso presente el actor no se había creído deudor por un error de hecho ó de derecho, puesto que era realmente deudor, si bien la deuda era á plazos, en doce mensualidades iguales. No es entonces el caso previsto por el art. 784. El que debe una cantidad cuyo pago no es exigible sino después de un tiempo determinado, es deudor á plazo, porque su obligación es á plazo. No habrá error esencial dice el art. 791, ni se puede repetir lo que se hubiese pagado en los casos siguientes: primero, cuando la obligación es á plazo y el deudor pagase antes del vencimiento del plazo; y finalmente, el demandante no decía si el error en virtud del cual hizo el pago sin el descuento del ocho por ciento, fué un error de hecho ó un error de derecho. Seguramente que no ha sido un error de derecho, puesto que en su mismo escrito de demanda afirmaba que en otras ocasiones había exigido el descuento y le había sido acordado por los demandados. Se trata también de leyes especiales que afectan directamente los intereses de las compañías de tramways como la demandante y debe suponerse por lo mismo, que ésta las conocía. El error invocado en la demanda, es entonces de hecho. ¿En qué consistía? ¿Qué motivos dieron lugar á él? ¿Qué





renuncia tácita del derecho acordado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 392, Ser. 4ª.

Obligación anterior—Véase: *Excepción de pago*, núm. 5 —*Sociedad comercial*, núm. 1.

causa razonable ó siquiera excusable hubo para errar? No lo decía absolutamente la parte actora á pesar de ser ello indispensable para el buen éxito de la demanda. El error de hecho no perjudica cuando ha habido razón para errar, pero no podrá alegarse, dice el art. 929, cuando la ignorancia del verdadero estado de la cosa proviene de una negligencia culpable. Esa negligencia culpable debe atribuirse al actor, si como lo afirma pagó efectivamente sin exigir el descuento, por error, porque en una operación de esta naturaleza, tan sencilla, que necesariamente debe haberla efectuado el actor varias veces, no se concibe un error semejante, repetido en diferentes fechas como son aquellas en que se verificó el pago, pues se hicieron en varios pagos parciales. Es por demás evidente el principio de equidad sobre que se basa el artículo 784 del Cód. Civ., pero no tiene la interpretación y el alcance que se le quería atribuir por la parte actora. Esta prescripción que tiene por base, como se ha dicho un principio de equidad que no permite enriquecerse con lo ajeno y que un supuesto acreedor se quede con una suma ó con una cosa que no se le debía ó que no se la debía el que la entrega, se encuentra incorporada á todos los Códigos y tiene por origen el derecho romano el primero que acertó á dar forma á las obligaciones nacidas sin convención, como lo dice Gutierrez Fernandez en su tratado de derecho civil español. Las leyes 28 y siguientes del título 14, Part. 5ª citada por el Dr. Velez en la nota de dicho artículo, consagran el mismo derecho estableciendo los diversos casos en que puede tener lugar. Entre estas leyes, una de ellas, la ley 30, establece que cuando alguno paga á sabiendas lo que no debiese, no lo puede demandar, «porque aquel que pagó lo que sabía que no debía, entiéndese que lo hace con intención de lo dar... fueras ende, agrega, si el que fuese tal pago fuese menor de 25 años»—menor de edad entonces. —Reconocido el pago en la forma espresada, no puede suponerse que ha habido un error por parte de los deudores en las condiciones exigidas por la ley para poder repetir lo pagado. Los actores sabían y estaban obligados á saberlo como deudores, el beneficio de que podían usar como un derecho legítimo al verificar el pago y no puede decirse entonces que hubo error, y si más bien omisión ó negligencia culpable al dejar de ejercitar ese derecho en la oportunidad debida. Es por lo tanto el caso de la ley 30, Partida recordada.



1^a. Obligación comercial—Aun cuando por la universalidad del juicio deba ser exigida ante la jurisdicción civil, debe ser juzgada única y exclusivamente por las leyes comerciales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 235, Ser. 4^a.

Obligación comercial—Véase: *Daños y perjuicios*, número 59—*Escepción de espera*, núm. 1.

1^b. Obligación condicional—Para exigir judicialmente el cumplimiento de una obligación condicional, el actor debe justificar que la condición ha sido cumplida.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 255, Ser. 3^a.

2. Obligación condicional—Solo puede pedirse el cumplimiento de una obligación condicional justificando que la condición que la hace exigible se ha llenado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 143, Ser. 4^a.

3. Obligación condicional—Procede la fijación por los

1^a—Se trataba del cobro de una letra de cambio dirigido con una testamentaria. Todas las negociaciones sobre letras de cambio y de plaza se consideran actos de comercio, están regidas por el Código de Comercio y deben ser sometidas á la jurisdicción comercial las cuestiones que con motivo de ellas se susciten. Si la ejecución se promovió en el caso del sumario ante un Juez civil, fué en razón de la universalidad del juicio testamentario, pero no por ello deben dejar de aplicarse en primer término las disposiciones del Cód. de Com. que legislan en todo lo relativo á la letra de cambio.

1^b—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Véase: verb. *Condición*, núm. 2.

2—Véase: nota precedente.

3—Se trataba de un contrato de compraventa en el que se hacía constar que el comprador había adquirido del vendedor una propiedad ubicada frente á la plaza de Monserrat. Se había estipulado que en la escrituración á favor del comprador, aparecería que había sido entregado el precio, lo que no era exacto, ni que tampoco fuese el estipulado, sino la suma de cien pesos moneda nacional la vara cuadrada, quedando en consecuencia obligado á la entrega de este último precio, tan pronto como el comprador enajenase la propiedad á la Municipalidad con la cual estaba en negociación. Quedó igualmente entendido y convenido que si por cualquier evento esa negociación no se realizaba, quedaría sin



tribunales del plazo para el cumplimiento de una obli-

efecto la escritura, anulándose ante el mismo escribano que debería entenderla. Como hubieran pasado diez meses sin que la operación se llevase á término por el comprador, los vendedores lo interpellaron judicialmente á fin de que fijase un breve plazo para ese efecto y bajo el apercibimiento declarado en la forma de la referencia. El demandado reconoció la verdad de estos hechos, que servían de fundamento á la acción, cuya improcedencia sostenía, alegando que el demandante no había cumplido con las obligaciones que el convenio le imponía de justificar con los otros vendedores su carácter de únicos y universales herederos del primitivo dueño del terreno vendido; que no procedía el señalamiento de plazo por tratarse de una venta hecha bajo condición resolutoria debiendo el actor esperar su cumplimiento. El primer extremo de oposición del demandado fué desestimado por el Juez de 1ª Instancia y como solamente se alzó de su pronunciamiento la parte actora, consintiendo el demandado, quedaba como cuestión única á resolver, la comprendida en el segundo medio de defensa. El Juez de 1ª Instancia consideraba arreglada esta defensa por cuanto no tratándose de una obligación pura sino condicional, el señalamiento de plazo por parte del Juzgado sería improcedente, pues no hay disposición alguna de la ley que lo autorice para ello. No son aplicables, decía, las disposiciones de los arts. 618, 725 y 751 del Cód. Civ. invocados por la parte demandante en razón de referirse á obligaciones puras sin plazo para su cumplimiento; ni lo es el 545, pues tampoco autoriza la fijación de un término, dentro del cual debía cumplirse la condición, cuando no hay tiempo fijado. Sin desconocer la exactitud de esa doctrina, en cuanto se refiere á la inaplicabilidad de los artículos primeramente mencionados, en orden á las obligaciones de carácter condicional, se reputa no obstante errónea en cuanto á la interpretación de las demás disposiciones que se citaban por el Juzgado de 1ª Instancia. La solución del punto en debate no se encontraría rastreando en su espíritu la proximidad ó analogía de los preceptos de los arts. 618 y 751, con los que rigen especialmente las obligaciones sugetas á condición, sino que es en el conjunto de estos últimos, en su letra, en su alcance, en el sistema que ha seguido el codificador, donde se halla esa solución, distinta seguramente, de la de la sentencia de 1ª Instancia. Según el art. 533, las condiciones deben cumplirse en la manera en que las partes verosimilmente quisieran y entendieran que habían de cumplirse, espresando á su vez el art. 541, concordante con aquel, que cuando no hubiese tiempo fijado, la condición deberá cumplirse en el tiempo que es verosímil que las partes en-

gación condicional.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 134, Ser. 4^a.

tendieron que debía cumplirse. El codificador argentino ha seguido en este pasaje las opiniones de Pothier, según el cual, si bien las condiciones deben ordinariamente cumplirse *en forma específica*, pueden, no obstante ser cumplidas por *equipollens* cuando *pro subjecto materia*, se desprende que esa ha sido verosimilmente la intención de las partes, principio que según el mismo espositor, ha resuelto la cuestión que al respecto dividía á los autores. El Código de Napoleón ha reproducido este principio en su art. 1175, análogo al 533 del nuestro, Savigny, más radical que el viejo tratadista francés, enseña en los párrafos 118 y 119, tom. 3^o, que las condiciones deben interpretarse amplia y equitativamente y que así cuando se busca el sentido de ellas, esto es, la manera cómo deben cumplirse, es necesario, en general, consultar antes la intención de las partes, que los términos empleados. Podría objetarse que estos razonamientos no son conducentes en cuanto no se ha demostrado la resolución del contrato por el incumplimiento de la obligación impuesta, pero debe observarse que si se hace mérito de ellos, es con el propósito de poner de manifiesto la tendencia de nuestra legislación vigente sobre la materia y consiguientemente el error jurídico en que incurrió el Juez al declarar la improcedencia del señalamiento del plazo por no existir ley que lo autorice á hacerlo. La fijación de un término prudencial, á falta de interpretación expresa, no desnaturaliza las obligaciones condicionales, ni es contraria á su índole jurídica. La opinión de Marcadé no es una opinión aislada, ni seguramente antagónica á la del codificador patrio, quien la hace valer, no á los fines expresados en la sentencia del inferior, sino para fijar la verdadera inteligencia del artículo y doctrina que lo ha inspirado. Debe tenerse desde luego en cuenta que el Dr. Velez ha adoptado, en esta materia el sistema que más se conforma á los principios de equidad—arts. 533 y 541—y que es una manera idéntica de interpretar el cumplimiento de las obligaciones lo que funda la doctrina de Marcadé, como se deduce del comentario que ilustra el pasaje, en el cual, después de establecer que una de las escuelas de los juriscónsultos romanos era de opinión contradictoria, discurre que no cabe sobre el punto duda alguna en virtud de las disposiciones que declaran que la condición debe cumplirse de la manera que las partes entendieron verosimilmente que ella lo fuese.—Véase la nota del art. 541—La obligación debe contraerse bajo la condición de que un acontecimiento sucedería ó no sucedería en un tiempo fijo, caducando si fenese el término sin realizarse ó desde que es indudable que la condición no pueda cumplirse, quedando en ese caso cumplida si pasa el tiempo sin





4. Obligación condicional—La obligación condicional aun reconocida, no es ejecutiva ni basta para librar mandamiento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 63, Ser. 4^a.

1. Obligación de dar—Si la obligación de dar una cosa cierta es para transferir sobre ella derechos reales, y la

verificarse—arts. 539 y 540 del Cód. Civ.—Supone aquí la ley que las partes, ya se trate de condiciones positivas ó negativas, han fijado un plazo dentro del cual deben éstas realizarse ó no, siendo evidente que á falta de cláusula expresa sobre el particular, el principio que debe necesariamente regir sus relaciones comunes, en conformidad al sistema de interpretación seguido por nuestro derecho, es que la condición deberá cumplirse en el tiempo que verosimilmente lo entendieron las partes. Pero pueden producirse diferencias, con relación á este tiempo, diferencias tanto más posibles y más hondas, cuanto que no había otro término de salvación, que la intención presunta de los interesados, y en tal emergencia no se explica, á menos de pasar por principios de universal aplicación, que puede desconocerse la intención legítima de los Jueces, ni menos que para dirimirla pudiera acudirse á otra que no fuera la de ellos. Hablando los anotadores de Zachariæ sobre las condiciones potestativas, estipuladas sin fijación de tiempo, dicen: que es evidente que cuando la condición no anula por su naturaleza la obligación, puede suponerse que la intervención de las partes haya sido someterse indispensablemente á sus efectos naturales. Debe admitirse entonces que el deudor tiene el derecho de interponer judicialmente á la persona á quien se ha obligado, á efecto de hacer fijar un plazo dentro del cual deberá cumplir la condición, quedando exonerado el deudor si no lo verificase—tom. 3^o, pág. 377, nota 22—Llerena, sobre el art. 541, expresa, que el Juez atendiendo la naturaleza de la obligación, determinará el tiempo en que la condición deberá cumplirse, siempre que una de las partes lo solicite, aunque la otra no esté de acuerdo. Como concordantes recuerda oportunamente el mismo comentador el art. 561 que preceptúa, que no habiéndose estipulado plazo para cumplir los cargos impuestos para la adquisición ó resolución de los derechos, deberá cumplirse en el plazo que el Juez señale.

4—No puede librarse mandamiento porque no trae aparejada ejecución.

1—Nuestra ley vigente, apartándose en este pasaje de la ley francesa y demás Códigos, que se han inspirado en sus fuentes, ha consagrado el principio de que antes de la tradición de la cosa, el acreedor no



cosa se pierde sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta por ambas partes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 252, Serie 3ª.

2. Obligación de dar—El juicio sobre fijación de plazo para el cumplimiento de una obligación de dar, es ordinario.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 180, Ser. 4ª.

3. Obligación de dar—El mandamiento de embargo preventivo, tratándose de obligaciones de dar, solo puede librarse por cantidad líquida.—Jur. Civ., tom. 3, página 389, Ser. 4ª.

4. Obligación de dar—Procede el embargo preventivo si existe justificada la obligación de dar.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 310, Ser. 4ª.

Obligación de dar—Véase: *Condición*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 21—*Honorarios*, núm. 17.

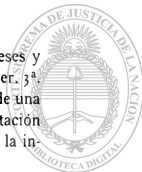
1. Obligación de hacer—Reconocida por el obligado su falta de cumplimiento á una obligación de hacer, aunque se alegue imposibilidad material debe ser condenado á adquirir sobre ella ningún derecho real, derivando como consecuencia del mismo, que los derechos que una persona trasmite por contrato á otra, solo pasan al adquirente por la tradición, y que antes de verificarse ésta, los peligros de la cosa son de cuenta del deudor de la obligación —arts. 577 y 3265, Código citado.—Entre otras aplicaciones positivas de este principio, debe recordarse la contenida en el art. 578, aplicable por analogía, según el cual, si la obligación de dar una cosa cierta es para transferir sobre ella derechos reales, y la cosa se pierde sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta por ambas partes. Nuestro artículo, dice la nota ilustrativa, libra también al deudor de cosa cierta, de la obligación de entregarla si perece sin su culpa, pero lo libra disolviendo la obligación y no dejando obligado al acreedor.

2—Este juicio no tiene una tramitación especial en el Cód. de Procedimientos, por cuya causa y de acuerdo con lo preceptuado en el art. 66 debe tramitarse por la vía ordinaria.

3—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 26.

4—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 49.

1—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 9.



cumplirla, ó en su defecto al pago de daños é intereses y las costas del juicio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 142, Ser. 3^a.

2. **Obligación de hacer**—La prueba de la cesión de una obligación de hacer como asimismo la de su aceptación por el acreedor, es á cargo exclusivo del deudor que la invoca.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 392, Ser. 3^a.

3. **Obligación de hacer**—La indemnización por falta de cumplimiento de una obligación de hacer escritura, debe fijarse teniendo en cuenta el precio de la venta y el que tenga el terreno al tiempo en que se ordena el otorgamiento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

4. **Obligación de hacer**—La acción pidiendo el cumplimiento de una obligación de hacer, no puede ser sustanciada y resuelta conjuntamente con los daños y perjuicios por su falta de cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 83, Ser. 4^a.

5. **Obligación de hacer**—La pena estipulada para el que falte al cumplimiento de una obligación de hacer en plazo determinado, no queda tácitamente sin efecto por la

2—Véase verb. *Cesión*, núm. 3.

3—Véase verb. *Indemnización*, núm. 4.

4—Véase verb. *Daños y perjuicios*, núm. 58.

5—Se trata de un boleto de compraventa de un inmueble, por el cual se obliga el vendedor á pagar por la cosa una suma determinada, que debía abonarse en el acto de otorgarse la escritura de enagenación, estableciéndose que el comprador entregaría en señal la suma de cuarenta mil pesos moneda legal, los que perdería en caso de no otorgarse la escritura por su culpa en todo el mes de Octubre, y que esta suma sería devuelta y la compra quedaría sin efecto si el vendedor no pudiera venir de Europa á firmar la misma escritura por caso fortuito ó de fuerza mayor. Fundado en el boleto privado, pedía se condenara al comprador á oblar el precio convenido y á firmar la escritura bajo apercibimiento de tenerlo por desistido con pérdida de la suma dada en señal. El demandado negó que la escritura hubiese dejado de otorgarse por su culpa dentro del plazo convenido y afirmaba, por el contrario, que fué el demandante quien hizo imposible que aquella pudiera otor-



prórroga del término dentro del cual debió cumplirse; debe resultar de convención expresa.—Jur. Civ., tom. 1, página 214, Ser. 4ª.

6. Obligación de hacer—Al ordenarse el cumplimiento de una obligación de hacer escritura pública de compra-venta, no puede ordenarse la oblación judicial del precio en el Banco, pues solo debe abonarse al firmarse el ins-

garse dentro de ese plazo, por lo cual, decía, no tardaría en proveer la acción correspondiente por la devolución de la suma entregada en calidad de seña y por la indemnización de los perjuicios que se le hubieren ocasionado. Colocada la cuestión en este terreno, la sentencia de 1ª Instancia mandaba reducir á escritura pública el contrato que expresaba el boleto, bajo la pena de resolverse la obligación con pérdida de la seña. El demandado no justificó en manera alguna las escepciones alegadas al imputar al vendedor la falta de escrituración del contrato en el plazo convenido, resultando lo contrario de los antecedentes consignados en autos. Se comprobó en el juicio plenamente, que el vendedor vino de Europa á objeto de otorgar la escritura, como asimismo que instó al comprador para que se realizase ese hecho, y se comprobó que no obstante la deficiencia que se decía tener los títulos, el comprador dió órdenes al Escribano para que procediera á estenderla. De donde resultaba que la obligación no dejó de cumplirse por culpa del vendedor, procediendo la condenación del demandado con arreglo á lo dispuesto por el Cód. Civ. en sus arts. 1185 y 1202. Mas, únicamente á exigir el derecho consagrado en esos artículos han debido limitarse las pretensiones del actor, puesto que dado el objeto del contrato, la escritura pública era ineludible y por lo tanto, á falta de ella, no ha quedado concluido como tal contrato, sino para el solo efecto de exigir la escrituración. Era, por consiguiente, improcedente la petición formulada en la demanda, para que se obligase al comprador á depositar el precio de la compra en el Banco Nacional. El pago del precio es una obligación emergente del contrato concluido y estendido en la escritura pública que bajo pena de nulidad exige el art. 1184, inc. 1º, del Cód. Civ., y por lo tanto, no hay derecho para obligar al comprador á la entrega del precio con anterioridad á la escritura, pues ello importaría ser exigibles las prestaciones de un contrato que no existe á ese efecto, que no se encuentra legalmente concluido y por el que se convino el pago del precio al firmarse la escritura.

6—Véase la última parte de la nota precedente.



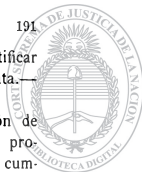
trumento traslativo del dominio.—Jur. Civ., tom. 1, página 214, Ser. 4ª.

7. Obligación de hacer—El cesionario de una obligación de hacer carece de acción contra el obligado, si la cesión ha sido hecha sin su consentimiento.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 281, Ser. 4ª.

8. Obligación de hacer—Para que proceda contra el propietario la exigencia del cumplimiento de la obli-

7—Una persona celebró un contrato de compraventa de un inmueble por medio de un boleto privado. El comprador vendió á su vez el mismo terreno á un tercero. Con este recaudo, el cesionario se presentó demandando judicialmente al primitivo vendedor por la escrituración del inmueble. El demandado sostuvo que el actor carecía de acción para demandarlo, resolviéndose de conformidad por la Cámara. Desde luego, el demandado no ha tenido la mínima intervención en el acuerdo celebrado entre el segundo y tercer poseedor, en cuyo caso y cualquiera que fuera la filiación jurídica del acto, su irresponsabilidad respecto del segundo es incontestable, en cuanto no existe vínculo alguno de derecho creado expresa ni virtualmente por razón de consentimiento, de contrato, ó de disposición alguna de ley. El juez de 1ª Instancia procedió, pues en justicia, desestimando las pretensiones de la demanda. Si en conformidad á nuestro derecho actual el primitivo vendedor no estaba obligado á hacer entrega de la cosa objeto de lo conveni6n, sino solo á reducir á escritura pública el instrumento simple, y si es evidente que esta obligación es esencialmente personal—artículos 1185 y 1187, Cód. Civ.—parece fuera de toda controversia que ni el cedente tenía facultad legal para enagenar la cosa, ni menos para crear derechos á favor de un tercero, por medio de un acto de desposesión respecto de su legítimo propietario para quien los acuerdos pasados entre él y el tercer poseedor son *res inter allos*. Es, por otra parte, regla de derecho que los terceros no pueden invocar la existencia de un contrato sino en casos ó situaciones determinadamente prescritos por la ley—art. 1199, Cód. citado—en ninguno de los cuales se halla comprendido el caso que nos ocupa.

8—Un comprador se presentó demandando la escrituración del boleto privado que acreditaba el contrato de compraventa de un inmueble, el que había sido vendido al actor por un tercero que era, dijo, comisionado al efecto, y sin intervención del propietario. Este negó categó-



gación de hacer, es requisito indispensable justificar que autorizó al comisionista para efectuar la venta.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 333, Ser. 4^a.

9. Obligación de hacer—Demandada la obligación de hacer escritura de un boleto de compraventa, no procede la resolución del punto sobre imposibilidad del cumplimiento del contrato que resultará de la escritura.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 208, Ser. 4^a.

10. Obligación de hacer—Si en las diligencias previas del remate ó en el acto de firmarse el boleto de compraventa el martillero no hace constar que obra á nombre de un tercero, el comprador tiene acción directa contra él para el cumplimiento de la obligación de hacer.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 82, Ser. 4^a.

11. Obligación de hacer—Para que un boleto de compraventa pueda considerarse como obligación de hacer escritura, debe primero ser reducido á escritura pública el contrato privado que de él resulte.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 351, Ser. 4^a.

12. Obligación de hacer—Justificada la autenticidad del

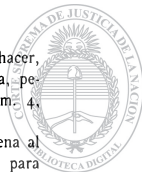
ricamente al contestar la demanda, que hubiese autorizado al intermediario para vender el inmueble. Si el actor no produce la prueba que corresponde á su derecho—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a—dejando establecida la existencia del mandato, la demanda debe ser rechazada.

9—De acuerdo con los fundamentos aducidos en la nota del verbo *Boleto de compraventa*, núm. 32.

10—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 33.

11—De acuerdo con la jurisprudencia constantemente establecida por la mayoría de la Cámara.—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 34.

12—Así lo tiene establecido la opinión de la mayoría de la Cámara contra la minoría, que la forma siempre el doctor González del Solar: éste opina que el boleto privado de compraventa da derecho á la escrituración del inmueble sin que se requiera previamente la escrituración del boleto.—Véase entre los numerosos casos resueltos el verbo *Boleto de compraventa*, núm. 11.



documento privado que contiene la obligación de hacer, debe reducirse á escritura el boleto de compraventa, pero no el contrato que él contiene.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 177, Ser. 4^a.

13. Obligación de hacer—La sentencia que condena al cumplimiento de una obligación de hacer no basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 4, página 218, Ser. 4^a.

14. Obligación de hacer—No procede el pago de pérdidas é intereses mientras no se justifique la mora en el cumplimiento de la obligación de hacer.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 402, Ser. 4^a.

15. Obligación de hacer—La intimación al cumplimiento de la obligación de hacer hecha al apoderado ó representante es legal y válida, aun cuando la sentencia se refiera al mandante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 73, Ser. 4^a.

16. Obligación de hacer—La falta de cumplimiento de una obligación de hacer no basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 363, Serie 4^a.

13—Así lo tiene establecido la jurisprudencia de la Cámara, equivocadamente según nuestro modo de pensar.—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 3.

14—Y la mora solo se produce cuando judicialmente se demanda el cumplimiento de la obligación de hacer. Véase: verb. *Mora*, núm. 3.

15—Dictada una sentencia condenando á la parte á escriturar dentro de un término dado, fué la sentencia notificada al apoderado. Vencido el término acordado sin darse cumplimiento á lo ordenado en la sentencia, el vencedor dedujo la demanda que esa falta de cumplimiento autoriza. El condenado dijo, que el término acordado en la sentencia no solo no había vencido sino que ni siquiera había empezado á correr, pues no le había sido notificado á él, y que la notificación hecha al apoderado no tenía ningún valor. Esto no es exacto atento lo dispuesto en el art. 16 del Cód. de Proc.

16—Véase el núm. 13.



17. Obligación de hacer—En las obligaciones de hacer sin plazo determinado, solo existe mora desde la fecha de la interpelación judicial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 242, Ser. 4^a.

18. Obligación de hacer—En estas obligaciones, el pago de daños y perjuicios solo procede cuando hubiere resistencia de parte de alguno de los obligados.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 72, Ser. 4^a.

Obligación de hacer—Véase: *Boleto de compraventa*, números 1 y 30—*Embargo preventivo*, núms. 3, 7, 16, 17 y 42—*Daños y perjuicios*, núms. 9, 43, 45, 57, 58 y 98—*Inhibición*, núm. 14—*Prueba plena*, núm. 1—*Condominio*, núm. 6—*Contrato verbal*, núm. 7—*Escritura pública*, núm. 15.

Obligación del padre—Véase: *Alimentos*, núms. 2 y 3.

Obligación ejecutiva—Véase: *Escepción de pago*, número 5.

Obligación personal—Véase: *Boleto de compraventa*, número 13—*Sindicato*, núm. 1—*Viudo*, núm. 1—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 16.

1^a. Obligación por carta—La carta reconociendo expresamente la obligación y ordenando el pago por un tercero, no se encuentra comprendida entre aquellas que la ley rechaza por tener solo referencias incidentales.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 419, Ser. 4^a.

1^b. Obligación por instrumento privado—La verdadera causa de una obligación, distinta de la que expresa el instrumento privado, debe ser alegada en la demanda; si

17—Véase: verb. *Mora*, núm. 3.

18—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 65.

1^a—Véase: verb. *Carta*, núm. 2.

1^b—Véase: verb. *Instrumento privado*, núm. 6.



se espresa en el curso del litigio no debe ser tomada en consideración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

2^a. Obligación por instrumento privado—La obligación por instrumento privado atribuido al causante de la sucesión, debe ser autenticada para que tenga fuerza ejecutiva.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 384, Ser. 4^a.

Obligación primitiva—Véase: *Hipoteca*, núm. 1.

1. Obligación sin plazo—El término dentro del cual debe cumplir el deudor una obligación sin plazo, debe fijarlo el Juez con arreglo á los usos y costumbres establecidos para cada clase de obligación.—Jur. Civ., tom. 3, página 174, Ser. 3^a.

2^b. Obligación sin plazo—La fijación del término para el cumplimiento de una obligación sin plazo determinado, debe hacerse con audiencia del obligado.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 406, Ser. 4^a.

3. Obligación sin plazo—No procede el reconocimiento de la firma de una obligación sin plazo por no ser ejecutiva.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 148, Ser. 3^a.

Obligación solidaria—Véase: *Sindicato*, núm. 1.

Obligaciones—Véase: *Condición resolutoria*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núm. 6—*Inhibición*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núm. 23—*Fianza*, núm. 2—*Instrumento privado*, núm. 4—*Sociedad*, núm. 3.

2^a—El instrumento privado para que traiga aparejada ejecución, según precepto del art. 465, inc. 2^o del Cód. de Proc., requiere ser reconocido en juicio. Y el art. 466 prescribe el reconocimiento previo del documento privado para que quede preparada la vía ejecutiva. Según jurisprudencia de la Cámara, ese reconocimiento no puede pedirse á los herederos sino cuando ellos voluntariamente quieran reconocer la firma del causante.

1—Arts. 618 y 751 del Cód. Civ.

2^b—Véase: verb. *Término*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Firma*, núm. 7.

Obligaciones del causante—Véase: *Costas*, núms. 5 y 40 —*Testamento*, núm. 4—*Documento privado*, núm.

Obra—Véase: *Indemnización*, núm. 1—*Interdicto de obra nueva*, núm. 1 y siguientes —*Jornales*, núm. 1—*Jurisdicción ordinaria*, núm. 1 —*Competencia*, núm. 2—*Construcciones*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núm. 101.

1. Obras—El propietario es el obligado por las obras construidas en la propiedad mientras no justifique que la obligación ha sido á cargo de un tercero por contrato anterior á las obras, no modificado con posterioridad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 200, Ser. 4^a.

1—El demandante decía haber ejecutado obras de yesería en cuatro casas de propiedad del demandado; que esas obras fueron ejecutadas con la condición expresa de que una vez terminadas se practicaría su medición con intervención del arquitecto encargado de la construcción, quien en prueba de conformidad suscribiría las cuentas respectivas, con cuyo requisito se obligaba al propietario á efectuar el pago, todo lo que constituía el contrato de locación de servicios á que se refiere el art. 1623 del Cód. Civ., fundamento de la demanda que deducía, invocando para esto también la prescripción de los arts. 1627 y 1636 del mismo Código. Contestando la acción entablada, se negó adeudar la cuenta cuyo importe se demandaba y afirmando haber celebrado un contrato con un empresario, quien se obligó á hacer construir cuatro casas por una cantidad determinada cada una, siendo de la exclusiva cuenta del constructor el pago de los materiales y obreros. Negaba el demandado haber pactado nada absolutamente con el demandante y agregaba que éste carecía de acción para cobrar lo que no le debía, no pudiendo perjudicarle los arreglos que existían entre el demandante y el empresario, con arreglo á lo dispuesto en el art. 1199 del Cód. Civil. Ahora bien, con la prueba de testigos producida se comprobó la verdad de los trabajos que constituían el crédito del actor; para que la defensa del demandado hubiera prevalecido era necesaria la prueba de su escepción. Defenderse del cobro de una suma echando sobre un tercero la obligación de pagarla, importa indudablemente escepcionarse, y el que se escepciona debe probar de acuerdo con la conocida regla de derecho *reus in excipiendo fit actor*.





2. Obras—Las obras ordenadas por una sentencia ejecutoriada, no pueden ser cumplidas por el acreedor, aun despues de vencido el término fijado, sin audiencia del obligado y por orden judicial.—Jur. Civ., tom. 7, página 378, Ser. 4^a.

3. Obras—La afirmación del propietario que reconociendo la verdad de las obras alega haberlas contratado con un tercero, importa una escepción cuya prueba le corresponde.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 356, Ser. 4^a.

Obras— Véase: *Cesionario*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 24—*Perito*, núm. 3—*Inhabilidad de título*, número 8.

Obras públicas—Véase: *Remuneración profesional*, número 1—*Adoquinado*, núms. 1 y 2 —*Empedrados*, número 3.

Observaciones— Véase: *Comprador judicial*, núm. 3—*Rendición de cuentas*, núm. 29.

Ocupantè—Véase: *Acto ilícito*, núm. 3—*Violencia*, número 1.

1^a. Ofensa ilícita—La calificación de jugador de garito, hecha á una persona que además de comprobar su honorabilidad justifica la falsedad del hecho imputado, importa estralimitación de facultades en el empleado, y una ofensa ilícita al ciudadano, quien debe ser indemnizado según el criterio del Tribunal.—Jur. Civ., tom. 7, página 379, Ser. 3^a.

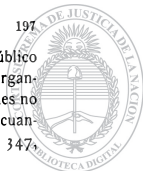
1^b. Oferta—La modificación á una oferta, importa la proposición de un nuevo contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 278, Ser. 3^a.

2—Véase la nota del verb. *Inhabilidad de título*, núm. 8.

3—Véase: verb. *Escepción*, núm. 2.

1^a—Véase: verb. *Empleado*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Contrato*, núm. 9.



1^a. Oficial público—La declaración del oficial público sobre hechos confesados en su presencia por los otorgantes de un instrumento público, forman prueba, pues no importa una modificación de lo en él declarado, aun cuando sea en sentido contrario.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 347, Ser. 4^a.

Oficial público—Véase: *Notificaciones*, núm. 2—*Contradocumento*, núm. 2.

Oficinas extranjeras --Véase: *Informes*, núm. 1.

Oficinas municipales—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 10.

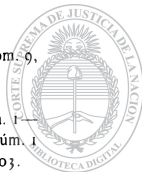
1^b. Oficinas públicas—Los informes de las oficinas públicas, ya sean de la administración ó de los escribanos de registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial, cuando se trata del precio de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 220, Serie 3^a.

2. Oficinas públicas—No procede la fijación de término á la parte para la presentación de pruebas cuyo diligen-

1^a—Véase: verb. *Instrumento público*, núm. 4.

1^b—Véase: verb. *Administración*, núm. 1.

2—El Juez de 1^a Inst. consideró que el temperamento adoptado en el sumario importaba una paralización indefinida del asunto, y fijó diez días para la prueba. La Cámara revocó el auto diciendo, que no dependía de la parte el diligenciamiento de la prueba pendiente, sino de la repartición pública á la que se dirige el oficio, en cuyo caso es clara el derecho de la parte para exigir que se practiquen antes de los alegatos, «sin la fijación de un término que podría hacer ilusorio ese derecho.» Parece que este último fundamento implicara establecer que el término acordado por el Juez—diez días—podría hacer ilusoria la producción de la prueba, por ser muy breve: pero si ésta hubiese sido la mente de la Cámara no habría revocado el auto del Inferior, sino que simplemente lo habría reformado ampliándolo según su criterio. Pero esto no se hizo, sino que se revocó la providencia, dejando establecido que antes de los alegatos debía practicarse la prueba pendiente.



ciamento pende de oficinas públicas—Jur. Civ., tom. 9, pág. 15, Ser. 4^a.

Oficio—Véase: *Declaraciones*, núm. 7.

Omisión—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 1—*Bienes de menores*, núm. 1—*Culpa ó negligencia*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 70, 71, 100, 101 y 103.

Oposición—Véase: *Bienes embargados*, núm. 2—*Poseción*, núm. 5—*Posiciones*, núm. 30—*Curador*, núm. 4—*Apoderado único*, núm. 5—*Tutor especial*, núms. 2, 4 y 8—*Tercería*, núm. 6.

Orden público—Véase: *Sociedad anónima*, núm. 2.

1^a. Orden verbal—La aprobación superior, y aun la orden verbal, no eximen de responsabilidad al funcionario por la estralimitación de sus facultades legales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

Órdenes—Véase: *Comisario*, núm. 2.

1^b. Ordenanza municipal—La excepción de inhabilidad de título, cuando el juicio ejecutivo se funda en una ordenanza municipal, solo puede referirse á la existencia de ésta pero no á su nulidad ó validez.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 215, Ser. 4^a.

2. Ordenanza municipal—Las demandas tendentes al cumplimiento de una ordenanza municipal, corresponden á la jurisdicción de 1^a Instancia.—Jur. Civ., tom. 10 pág. 305, Ser. 4^a.

Creemos que no es justo señalar un término tan breve, especialmente cuando el diligenciamiento no depende de la parte que lo solicita, como tampoco es justo dejar paralizado un pleito indefinidamente. Tanto el fallo de 1^a Inst. como el de la Cámara pecan por extremos. La fijación de un término prudencial colocaría la cuestión en su justo lugar. El espíritu del art. 118 del Cód. de Proc. autoriza este temperamento.

1^a—Véase: verb. *Facultades legales*, núm. 2.

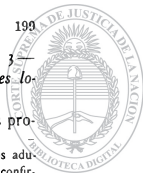
1^b—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 12.

2—Véase: verb. *Demanda*, núm. 5.

Ordenanza municipal— Véase: *Adoquinado*, núm. 3—*Nulidad*, núm. 8—*Municipalidad*, núm. 11—*Poderes locales*, núm. 1.

1. Ordenanzas militares—No son aplicables á los pro-

1.—Por la importancia de la cuestión damos los fundamentos aducidos por el Juez de 1ª Inst. al resolverla, cuyo fallo fué confirmado por la Cámara *por sus fundamentos*. El fallo dice así: «Según el inc. 4º del art. 1870 del Cód. Civ., son aplicables las disposiciones del título del mandato á las representaciones por personas dependientes, como el militar en relación á su superior. Siendo aplicables estas disposiciones y resultando del testo mismo del documento en que se fundaba la demanda que el demandado lo había suscrito á nombre del batallón y como jefe del mismo, forzoso es decidir que no era personalmente responsable de la obligación que resultaba del mismo documento, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1930 y 1947 del Código. Prescindiendo del citado documento, que es en el caso y como lo reconocía la parte actora, la ley de las partes se atenía el Juzgado á los principios generales que dominan esta materia; forzoso le será decidir también que el demandado no es ni puede ser personalmente responsable del pago de la obligación. Se trataba, en efecto, de una deuda por suministros hechos á un cuerpo del Ejército nacional, y basta enunciar la causa de la obligación para convencerse de que el jefe de ese cuerpo no puede ser responsable con el tercero que efectuó tales suministros. Es el cuerpo, el Ejército, es la Nación en definitiva, la que adeuda y quien debe abonar el importe de esos suministros, sin que sea parte para escusarla de sus obligaciones para con el tercero que las afecta, la circunstancia de haber entregado los fondos necesarios para su pago al habilitado de su batallón, de que era jefe el demandado. Así lo reconoció el actor al gestionar primero del Gobierno mismo el pago de su crédito, y aun después de entablada la demanda, al asegurar que es el Gobierno Nacional el obligado al pago del crédito que comprobaba el citado documento, decía en efecto: «El documento de fs. 2, es dado por el jefe del batallón 5º de línea y procede del rancho de los soldados y como el Gobierno no puede pagarse á sí mismo el importe de sellos, mal podría exigirsele ese impuesto en la documentación del alimento de las fuerzas.» No puede pues, dudarse, en presencia de estas frases, que en la opinión misma del demandante era el gobierno el obligado y no el demandado, cuya personalidad desaparece ante su carácter de jefe del batallón 5º de línea. Siendo el Gobierno y no el demandado el responsable para el pago de





veedores los que en sus relaciones comerciales se rigen

la obligación, el Juzgado no podía tomar en cuenta el resultado del expediente administrativo iniciado por el actor. El Poder Ejecutivo incurrió en error, á juicio del Juez, al declarar que el actor debía recabar ante Juez competente y del jefe que lo suscribió, el cobro del mencionado documento, en razón de haber contraído dicho jefe un compromiso meramente privado, y al cual es completamente ajeno el Gobierno. Ya se ha visto en efecto, que el demandante no tenía acción para exigir del demandado el pago de una obligación que éste ha contraído para su mandante. No se trata, por otra parte, como lo asegura el Poder Ejecutivo, de un compromiso meramente privado entre el demandado y demandante: se trata de un compromiso celebrado entre este último y el jefe de un cuerpo del Ejército Nacional, respecto del cual el P. E. no puede considerarse completamente ajeno, porque no es ni puede ser ajeno á los contratos que tienen por objeto la alimentación y subsistencia de los soldados de la Nación. El error del P. E. al hacer tales declaraciones, proviene sin duda alguna de una mala interpretación dada al art. 14, tít. 9º, tratado 1º de las ordenanzas del Ejército, del cual no resulta seguramente ni de su texto ni de su espíritu, que en caso de quiebra del habilitado de un batallón quede exonerado de toda obligación para con el tercero que contrató con el jefe del mismo batallón; ni menos que el tercero solo tenga acción contra el jefe. El artículo establece que si quiebra el habilitado, sufrirá las penas que espresa y se le confiscarán además todos los bienes raíces y castrenses, y agrega: que si unos y otros no alcanzaran á subsanar la quiebra, se satisfará el resto que no cubra, de este modo: *la tercera parte el coronel, teniente coronel y sargento mayor á proporción de sueldos, y los dos tercios restantes á correspondencia de los suyos, los capitanes y oficiales subalternos, comprendido ayudante y abanderado.* Desde luego el P. E. no ha podido fundar sus declaraciones, antes referidas, en el texto de esa disposición de las Ordenanzas, y tampoco ha podido fundarla en su espíritu, porque se comprende bien que es el mismo Gobierno quien debe sufrir inmediatamente los efectos de la quiebra sin perjuicio de resarcirse de lo perdido en la forma indicada. No podría ser de otro modo. La alimentación de los soldados de un batallón del Ejército no puede depender de la buena fe del habilitado que reciba los fondos con tal objeto. Si el habilitado de un batallón quiebra, el Gobierno debe proveer inmediatamente á la subsistencia de los soldados, que no pueden esperar la ejecución del moroso procedimiento—embargo de bienes y de sueldo—que establece la disposición de que se trata; para cubrir

única y exclusivamente por las disposiciones del derecho común.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 214, Ser. 3ª.

el desfalcó ocasionado por la quiebra y si el jefe del batallón, como en el caso, ha contratado con un tercero la provisión del mismo, bajo la base de abonarla con los fondos que recibió y desfalcó el habilitado, es evidente que el Gobierno no podrá escusarse de pagar su importe bajo pretexto de haber ya entregado los fondos al habilitado y de tratarse de un compromiso privado entre el jefe y el proveedor, porque si éste ha contratado con el jefe, lo ha hecho entendiendo obligar á la nación y confiado en su buen crédito. El Gobierno debe, pues, abonar la provisión y repetir luego su importe del habilitado, haciéndole embargar sus bienes, ó del jefe y oficiales del batallón, reteniéndoles ó descontándoles sus sueldos, si los bienes no alcanzasen. No puede interpretarse de otra manera el artículo de que se trata, sin ponerse en contradicción con la ley civil, y sin incurrir en la irritante insistencia de hacer pesar los efectos de la quiebra del habilitado sobre el tercero, sobre el proveedor, que confiado en el crédito de la nación, ha alimentado á sus soldados. De todas maneras y aun cuando el artículo de las Ordenanzas de que se trata, autorizara las declaraciones del Gobierno y la solución que ha dado al asunto, ese artículo no puede ni ha podido ser opuesto al demandante que está amparado por la ley común y no sujeta á dichas Ordenanzas, las cuales reglan solamente las relaciones del Gobierno con sus mandatarios, jefes y oficiales que de él dependan. El Gobierno no ha podido, pues, ni aun en ese caso, escusarse de pagar el crédito del demandante, que no tenía acción contra el demandado, como queda establecido en las consideraciones anteriores. Por último, aun cuando la resolución dictada por el Gobierno en el expediente administrativo, hubiera sido dictada de acuerdo con el citado artículo de las Ordenanzas del Ejército, y aun cuando este artículo fuera el que debiera aplicarse en el caso para resolver la acción deducida por el actor, en ningún caso podría el Juzgado, en virtud de la disposición que comporta en sus términos, condenar al demandado, al pago total de toda la suma reclamada, porque según esa disposición el demandado solo será personalmente responsable de la novena parte de la suma que restare después de haberse hecho escusión en los bienes del habilitado. La obligación de los jefes y oficiales, según dicho artículo, es en efecto, simplemente mancomunada y en manera alguna solidaria como el Gobierno lo afirma en la recordada resolución; obligación simplemente mancomunada porque la prestación que forma su objeto



Oro sellado—Véase: *Competencia*, núm. 4—*Moneda especial*, núm. 1 y siguientes.

es espresamente dividida en partes determinadas, entre todos los jefes y oficiales—art. 621 del Cód. Civ.—y en manera alguna solidaria porque para que revista tal carácter sería necesario que la solidaridad fuera espresada por términos inequívocos ó que espresamente la ley, el artículo de las Ordenanzas en el caso, la hubiera declarado solidaria—art. 701 y siguiente.



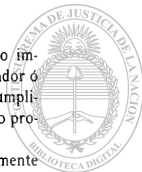


1. **Pacto comisorio**—En los contratos debe estipularse clara y esplicitamente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 117, Serie 3^a.

2. **Pacto comisorio**—La fijación de un término para la

1—De acuerdo con la jurisprudencia sentada en otros casos. Véase: verb. *Contrato con pacto comisorio*, núm. 1.

2—Verificada la venta de un inmueble en remate público pero no judicial se firmó el correspondiente boleto, estableciéndose que la propiedad debía escriturarse dentro de 20 días, y que «si el término no fuese suficiente se convendrán los que sean necesarios entre los interesados.» Vencidos los 20 días se pide la escrituración por el vendedor. El comprador se opone alegando, entre otras razones, que la compra había quedado sin efecto alguno, por no haberse procedido a la escrituración dentro del plazo establecido en el boleto. Es de advertirse que esa cláusula estaba impresa en el boleto espedido por el martillero al firmarse el contrato; se comprende perfectamente que se trataría en todo caso de una condición impuesta por el vendedor, la que el comprador no podría hacer ilusoria sin responsabilidad para él y mucho menos empleando su propia resistencia. El art. 1203 del Cód. Civ. resuelve el caso con toda claridad. Si bien es cierto que en los contratos bilaterales la regla general es que ninguna de las partes puede pedir su cumplimiento, sino cuando compruebe que ella misma lo ha cumplido, cuando se ofrece a cumplirlo, ó cuando su obligación fuese a plazo—art. 1201—debe sin embargo tenerse presente que esta regla general sufre escepción en el contrato de compraventa, pues cuando el vendedor no entrega la cosa en el tiempo fijado en el contrato, el comprador puede pedir la resolución de la venta ó la entrega de la cosa—art. 1412.—Se comprobó en



escrituración de un boleto impreso, de remate, no importa un pacto comisorio y solo confiere al comprador ó al vendedor el derecho de exigir judicialmente el cumplimiento de un contrato, si no fuera de común acuerdo prorrogado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3^a.

3^a. **Pacto comisorio**—Debe encontrarse explícitamente consignado para que proceda la resolución del contrato; la ley obliga á las partes á exigir judicialmente el cumplimiento de éste.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 61, Ser. 3^a.

3^b. **Pacto comisorio**—No existiendo pacto comisorio espreso, no puede dejarse sin efecto el contrato por la sola voluntad de una de las partes.—Jur. Civ., tom. 6, página 188, Ser. 3^a.

4^a. **Pacto comisorio**—Siendo principio fundamental de nuestro derecho civil que los contratos se forman para cumplirse, su resolución solo es procedente si existe pacto comisorio espresamente estipulado.—Jur. Civ., tom. 5, página 350, Ser. 3^a.

4^b. **Pacto comisorio**—Reconocida la existencia de un convenio privado, no puede darse por disuelta la convención mientras no se pruebe también la existencia de un pacto comisorio establecido de común consentimiento de partes.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 416, Ser. 4^a.

el caso presente que el vendedor instó la escrituración dentro de los 20 días, y que el comprador se negó á escriturar fundándose en la deficiencia de los títulos—deficiencias que fueron declaradas infundadas—y no pidió el nuevo plazo que le acordaba el boleto quedando consiguientemente exigible la obligación contraída, de acuerdo con los principios espuestos más arriba.

3^a—Véanse los números precedentes.

3^b—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia establecida en los números precedentes. Véase asimismo, verb. *Contrato*, núm. 14.

4^a—Véase: *Contrato con pacto comisorio*, núm. 1.

4^b—Véase: verb. *Convenio privado*, núm. 1.



5. **Pacto comisorio**—Siendo principio espreso en derecho que los contratos se forman para cumplirse, no procede la demanda de resolución, sino la del cumplimiento de la convención, salvo la existencia de un pacto comisorio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 231, Ser. 4^a.

6. **Pacto comisorio**—El término fijado para la escrituración, en el boleto de compraventa, no importa un pacto comisorio sino un término dentro del cual no puede exigirse judicialmente el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 109, Serie 4^a.

7. **Pacto comisorio**—Establecido en favor de una de las partes, no permite á la otra invocarlo á su favor para la rescisión del contrato de compraventa, solo puede exigir su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 307, Ser. 4^a.

8. **Pacto comisorio**—El pacto comisorio estatuido solo

5—Véanse los números precedentes, y verb. *Contrato*, núm. 3.

6—Véase: verb. *Escritura*, núm. 4.

7—Arts. 1197 y 1204 del Cód. Civ. El pacto comisorio es una escepción al principio general de que los contratos se forman para cumplirse; y como escepción debe interpretarse restrictivamente tan solo en favor de la persona favorecida con ella.

8—En el boleto se espresaba que el comprador habia entregado en garantía del cumplimiento de la compra la cantidad de 1850 pesos nacionales, que perderia si dentro del término estipulado, no se presentase á escriturar, así como también quedaria el vendedor desligado de todo compromiso de venta, sin perjuicio de dejar á salvo sus derechos y acciones para proceder contra el comprador. Leyendo detenidamente esta cláusula del contrato, se comprende fácilmente que la cantidad entregada por el comprador en garantía del cumplimiento de la convención, lo ha sido, no para responder á todas las consecuencias de su inejecución, en absoluto, sino para garantir que haria efectiva su obligación de escriturar dentro del término convenido al efecto, y por eso es que los contratantes convinieron en que el comprador perderia esa cantidad si no se presentase á escriturar dentro de dicho término, sin perjuicio de dejar á salvo los derechos y acciones del vendedor para proceder contra él. Si así no fuere, careceria de objeto esta última



en favor del vendedor, le permite exigir del comprador el cumplimiento del contrato no obstante la pérdida de la

parte del contrato; siendo inaceptable la explicación que de ella hace el demandado cuando dice que esos derechos y esas acciones que se dejan á salvo son para que el vendedor pueda pedir la pérdida de la cantidad entregada en garantía, y resolución del contrato, porque suprimiendo esas palabras siempre podría el vendedor pedir la resolución del contrato y la pérdida de la cantidad entregada en garantía por el comprador. La intención de los contratantes era bien clara entonces, así como que el pacto comisorio fué establecido en favor del vendedor para el caso de que el comprador no se presentase á escriturar en el término convenido, desde que en la misma cláusula del boleto se decía, que el vendedor quedaría desligado de todo compromiso de venta si el comprador no se presentase á escriturar dentro de ese término. Si un comprador quisiera llevar á efecto la escrituración del contrato y el vendedor se conformase, renunciando al pacto comisorio, aquel no podría exigir la devolución de la cantidad entregada en garantía, ni que se le descontase del precio que debería pagar, porque la tiene perdida por el solo hecho de no haberse presentado á escriturar dentro del término convenido. Si esto es así, si el comprador tuviese ya perdida la cantidad que entregó para garantizar que concurriría á escriturar dentro del término señalado, cuando se le demandase el cumplimiento del contrato, en virtud de los derechos y acciones que espresamente, y para hacerlo, se hubiese reservado el vendedor, no podría ampararse en los arts. 1189 y 1202 del Cód. Civ. para eximirse de ejecutar dicho contrato, ofreciendo perder una cantidad que tendría ya perdida. Propiamente, la cantidad que hubiere entregado el comprador, no importaría la constitución de arras sino una cláusula penal para el caso ocurrido de que no se presentase á escriturar dentro de un término fijado. Si el demandado argüía que desde el vencimiento del término convenido para escriturar, el comprador había perdido la cantidad entregada en garantía y que el vendedor había quedado desligado de todo compromiso de venta, de donde deducía que el contrato quedaba rescindido, puede decirse que esto era exacto respecto al vendedor, porque el pacto comisorio fué establecido en su favor, pero ello en nada se oponía á la subsistencia del contrato, respecto al comprador, ni es contrario á la naturaleza de los contratos en los que es muy frecuente el pacto comisorio á favor de uno solo de los contratantes y está autorizado por el art. 1204 del Código. Esto solo demostraba que el comprador, por el boleto firmado quedaba más obligado que el vendedor.



cantidad entregada como seña.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 91, Ser. 4^a.

9. Pacto comisorio—No procede la rescisión del contrato de compraventa de inmuebles constante de instrumento privado si no existe pacto comisorio—Jur. Civ., tom. 9, pág. 276, Ser. 4^a.

Pacto comisorio—Véase: *Boleto de compraventa*, número 22.

1^a. Pacto de retroventa—Al que alega la simulación de la venta con pacto de retroventa, corresponde la prueba de que existía efectivamente un contrato de mutuo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 209, Ser. 3^a.

2. Pacto de retroventa—El pacto de retroventa contenido en la escritura de venta puede ser modificado por instrumento privado, probada su autenticidad ó por los hechos de las partes posteriores al vencimiento, que demuestren de que aquel quede sin efecto.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 55, Ser. 4^a.

Pacto de retroventa—Véase: *Retroventa*, núms. 1 y 2—*Propiedad*, núm. 2—*Contrato de compraventa*, núm. 21.

1^b. Padrastro—No existiendo incompatibilidad en el pa-

9.—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 23.

1^a—Véase: verb. *Contrato de mutuo*, núm. 1.

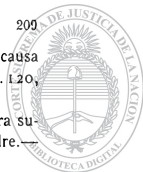
2.—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 21.

1^b—Esta resolución fué revocatoria de la de 1^a Inst.: el Inferior dijo, que el padrastro no podía ser tutor de sus entenados porque siendo facultativo del Juzgado la provisión de la tutela dativa y teniendo también en consideración que, si bien la ley no ha establecido espresamente la incompatibilidad para que el padrastro pueda ser tutor de sus hijos políticos, de hecho existe, desde que el tutor que se nombrase en el caso de que se trata, tenía que principiar el desempeño de su cargo pidiendo á la madre de sus pupilos, representada legalmente por su esposo, la entrega de bienes y cuenta de la administración de los mismos; y finalmente, que si la ley espresamente ha privado á la viuda

drastro para desempeñar la tutela dativa de los hijos de su esposa, habidos en el primer matrimonio, los jueces

que contrae segundas nupcias, de los derechos de la patria potestad, ha sido para sustraer á los menores hijos del anterior matrimonio de la potestad ó dependencia del segundo esposo, lo que demuestra que la ley y su espíritu es contraria al desempeño de la tutela por el segundo ó ulterior esposo. La Cámara revocó esta providencia diciendo: «La sentencia niega á los padrastos el derecho de ser tutores de sus hijos políticos, á virtud de los inconvenientes que para los menores resultarían, quedando bajo la dependencia del segundo esposo de su madre cuando es esta situación la que precisamente ha entendido evitar la ley, haciéndole incurrir en pérdida de la patria potestad á la madre que contrae segundas nupcias. Sin desconocer que en algunos casos la tutela conferida á los padrastos pueda traer inconvenientes que estaría al alcance del arbitrio judicial separándose prudentemente de la propuesta que se le hiciera parece en cambio, que estrictamente, en el terreno del derecho, no pueden crearse por los jueces exclusiones no establecidas por las leyes. Como la sentencia de 1ª Inst. lo reconoció nuestro Código Civil no ha estatuido incompatibilidad para el nombramiento que se solicitaba en esta cuestión. Desde entonces, pues, y habiendo ofrecido en la práctica la tutela conferida á los padrastos resultados perniciosos que pudieran dar la voz de alarma á los jueces que deben discernir las tutelas, y siendo, por el contrario, muchos los casos que se podrían citar, con nombres propios de tutelas conferidas á los padrastos y ejercidas con gran provecho para los menores, es preferible que se siga confiando en la prudencia de los jueces, y que ya que no hay antecedentes de hecho ni de derecho que á ello se opongan, se siga aplicando la jurisprudencia establecida en el año 1873 por los Tribunales de la Prov. de Buenos Aires—Fallos de los Tribunales de Buenos Aires, por Pérez Gomar, pág. 250—que es la primera sentencia que se conoce al respecto, y que fué dictada á poco de ponerse en vigencia el actual Código. Si, pues, el Juez de 1ª Inst. que mandó producir pruebas sobre la idoneidad del tutor propuesto, y que luego por el motivo indicado no hizo el nombramiento, no hubiera tenido razones de otro orden para negar el cargo que se le pedía, parece que mérito de las repetidas manifestaciones hechas por ese Tribunal, en conjunto de la tutela en el sentido de no introducir estraños á la familia en la provisión de tutelas y curatelas, debía acceder al nombramiento pedido en favor del padrasto como tutor de sus menores hijos políticos





pueden discernirle el cargo siempre que no exista causa justificada que lo inhabilite.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 120, Ser. 3^a.

1^a. Padre—El haber de un menor que se encuentra sujeto á la patria potestad, debe ser entregado al padre.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 81, Ser. 3^a.

Padre—Véase: *Agravio moral*, núm. 1—*Alimentos*, número 2—*Alimentos provisorios*, núm. 2—*Bienes de la sucesión*, núm. 1—*Bienes de menores*, núm. 6—*Bienes propios*, núm. 2—*Bienes testamentarios*, núm. 1—*Colación*, núm. 1—*Costas*, núm. 4—*Daños y perjuicios*, núm. 5—*Emancipación*, núms. 1 y 2—*Filiación legítima*, núm. 2—*Filiación natural*, núms. 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 17—*Fondos*, núm. 1—*Gastos*, núm. 1—*Herencia en efectivo*, núm. 1—*Hijo natural*, núms. 5 y 9—*Legitimación*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, núm. 1—*Partida de bautismo*, núm. 2—*Patria potestad*, núms. 2 y 3—*Prejuzgamiento*, núm. 2—*Separación de hecho*, núm. 1—*Tutela*, núm. 2—*Tutor*, núm. 10—*Tutor especial*, núms. 2, 3 y 4.

Padre natural—Véase: *Filiación natural*, núm. 18.

1^b. Padres—Los padres tienen derecho á exigir una indemnización por la muerte del hijo, al que resulte responsable civilmente del daño, aun cuando el hecho que motivó el accidente no pueda ser calificado como delito.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

Padres—Véase: *Fondos*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 105.

Pagador—Véase: *Carta de crédito*, núm. 2.

1^c. Pago—Para que proceda la repetición por el pago

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia constantemente sentada por la Cámara. Véase: verb. *Fondos*, núm. 1.

1—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 105.

1—Arts. 773, 774, 778 y 792 del Cód. Civ.



verificado dos veces indebidamente, es necesario justificar que no existían otras causas que las que motivaron uno de los pagos, si resulta que existían otras á las que pudo ser imputado, la repetición debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 345, Ser. 3ª.

2. Pago.—La conversión de la moneda de oro entregada para el pago de la moneda nacional, debe hacerse al tipo de bolsa en el día de la entrega.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 101, Ser. 4ª.

Pago—Véase: *Abogado*, núm. 6—*Afirmado*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 7—*Alimentos provisorios*, núm. 2—*Alquiler*, núms. 1 y 2—*Alquileres*, núm. 1—*Asistencia médica*, núm. 1—*Bienes*, núms. 1 y 2—*Carta*, núms. 1 y 2—*Cesionario*, núm. 1—*Comprador*, núm. 1—*Condición*, núm. 2—*Condominio*, núm. 3—*Consejo de Higiene*, número 1—*Construcciones*, núm. 2—*Contrato de arrendamiento*, núms. 1 y 29—*Contrato de locación*, núms. 1, 3 y 4—*Contradocumento*, núm. 2—*Costas*, núms. 19, 25, 27, 55 y 58—*Derechos hereditarios*, núm. 1—*Empedrados*, núms. 2 y 3—*Excepción de pago*, núm. 1 y siguientes—*Impuesto*, núm. 3—*Intereses*, núms. 7 y 8—*Juicio ordinario*, núm. 1—*Litisexpensas*, núm. 1—*Locación*, núm. 4—*Mandatario*, núm. 8—*Nulidad del juicio ejecutivo*, núms. 3 y 6—*Obligación*, núm. 2—*Peritos*, número 2—*Posesión judicial*, núm. 7—*Remate judicial*, número 20—*Rendición de cuentas*, núm. 17—*Servicios*, números 1, 2, 6, 7 y 10—*Servicios médicos*, núms. 1 y 2.

1. Pago de alquiler—Para que exista mora en el pago del alquiler, el acreedor debe justificar el requerimiento judicial ó extrajudicial en el domicilio del deudor siem-

2—Véase: verb. *Moueda de oro*, núm. 1.

1—Véase: verb. *Alquiler*, núm. 1.



pre que no exista lugar designado para el pago.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 349, Ser. 4^a.

1^a. Pago de asistencia médica—La testamentaria no está obligada al pago de la asistencia médica de los menores extraños á la familia, aun cuando como agregados viviesen en el mismo domicilio del causante y llevasen su apellido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 426, Ser. 4^a.

1^b. Pago de una carta orden—La carta dirigida á un tercero ordenándole un pago, es carta-orden y no misiva, y en consecuencia autenticada, es prueba de la existencia del contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 419, Ser. 4^a.

Pago al contado—Véase: *Obligación á plazo*, núm. 2.

1^c. Pago por consignación—El depósito particular á la orden del acreedor, no puede en ningún caso, tener los efectos del pago por consignación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 99, Ser. 3^a.

1^d. Pago por consignación—De una suma en moneda nacional por su equivalencia, es procedente siempre que la obligación hubiese sido contraída á moneda corriente que no puede ser calificada como la moneda especial de oro que prevé la ley general de monedas.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 176, Ser. 4^a.

2. Pago por consignación—El Juez competente para en-

1^a—Véase verb. *Menores*, núm. 2.

1^b—Véase verb. *Carta*, núm. 1.

1^c—Véase verb. *Depósito particular*, núm. 1.

1^d—Véase: verb. *Moneda especial*, núm. 2.

2—Se entabló demanda por cobro de pesos y antes de ser notificada al demandado, éste pagó por consignación. Se resolvió en el sentido del sumario fundándose en que el Juez que primero entendió en la demanda de cobro de pesos era el competente para entender en la de consignación porque al Juez originario corresponde entender en todo lo que se relaciona con el asunto.



tender en la procedencia del pago por consignación es el que entiende en la demanda que le da origen.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 350, Ser. 4^a.

3. Pago por consignación—Declarado procedente el pago por consignación, procede la condenación en costas contra el acreedor que lo impugnó.—Jur. Civ., tom. 6 pág. 64, Ser. 4^a.

1^a. Pago por cuotas—Facultando la ley el pago por cuotas, los empresarios de adoquinados no pueden ejecutar por el total de la deuda ni aun por las cuotas mientras no se fije y haga saber la fecha desde que los propietarios deben empezar á pagarlas.—Jur. Civ., tom. 5, página 305, Ser. 4^a.

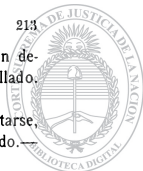
Pago de daños y perjuicios—Véase: *Contratos*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 9, 16, 45, 65, 86, 93 y 95—*Obligación de hacer*, núm. 14—*Rendición de cuentas* núm. 18.

1^b. Papel sellado—Los presupuestos para la construcción de obras no están sujetos al impuesto de papel sellado aun cuando hayan sido aceptados—Jur. Civ., tom. 1, pág. 362, Ser. 3^a.

3—El art. 760 del Cód. Civ. establece que las costas y gastos serán á cargo del vencido en el juicio de consignación, y por consiguiente los jueces no pueden hacer uso de la facultad que les acuerda el art. 22 del Cód. de Proc.

1^a—Véase: verb. *Adoquinados*, núm. 3.

1^b—Porque el contenido del documento no importa un contrato ni obligación alguna, ni tampoco puede ser considerado como un título que hubiera de servir de prueba en un convenio, siendo más bien un simple propuesta, basada en un cálculo ó presupuesto, que podía ó no ser aceptada y que de consiguiente no perfeccionaba obligación alguna convencional, y cuando más vendría á ser un antecedente, bastando por tanto, que al presentarse en juicio se repusiera el papel, pues no se había incurrido en multa de ninguna clase.



2. Papel sellado—El documento en que conste un depósito gratuito, está sujeto al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 385, Ser. 4ª.

3. Papel sellado—El presupuesto de obras á ejecutarse, no está comprendido en el impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 46, Ser. 4ª.

4. Papel sellado—La falta de papel sellado para notificar á los testigos, es imputable á la parte que solicita la diligencia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 241, Ser. 4ª.

5. Papel sellado—Las cartas privadas, aun cuando importen el reconocimiento de una obligación, no están su-

2—Véase: verb. *Depósito gratuito*, núm. 1.

3—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase el núm. 1.

4—La Cámara confirmó por sus fundamentos el auto de 1ª Inst., que decía: «Si bien por la práctica constante de nuestros Tribunales se ha establecido que las cédulas á los testigos, se dejen impresas en papel simple dada su estensión y con el fin de facilitar el diligenciamiento de las notificaciones, ello no faculta á los secretarios para efectuarlas sin que se les entregue el papel sellado correspondiente con el fin de reponer la foja *ipso facto*, por cuanto el art. 41 de la Ley de papel sellado solo autoriza á los jueces y funcionarios públicos de la Nación para actuar en papel sellado común con cargo de reposición. Son argumentos éstos que no merecen los honores de una réplica y sinembargo la Cámara los consideró arreglados á derecho, al decir que la *práctica constante de nuestros Tribunales* ha establecido que se dejen las cédulas impresas, con esto se incurre en un error de concepto; no es la práctica la que ha establecido esta forma de notificación, es la ley—art. 182 del Cód. de Proc.—Este artículo dice espresamente que los testigos «serán citados por cédula en papel común». ¿Puede la Ley de papel sellado derogar esta disposición del Cód. de Proc.? Evidentemente que no. El artículo 41 de la Ley de papel sellado vigente en la época en que se dictó esta resolución—1891—al autorizar solo á los jueces y funcionarios públicos de la nación, para actuar en papel común con cargo de reposición no ha derogado aquella disposición de la ley de forma establecida consultando altos intereses de orden público. El sumario está de acuerdo con la jurisprudencia. Véase: verb. *Diligencias de prueba*, núm. 29.

5—Véase: verb. *Cartas privadas*, núm. 1.



jetas al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 5, página 353, Ser. 4^a.

6. **Papel sellado**—La conformidad con la cuenta presentada por un tercero, que no es el obligado ni su representante legal, no está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 71, Ser. 4^a.

7. **Papel sellado**—La conformidad puesta al pie de una cuenta corriente ó balance entre particulares está sujeta al impuesto de papel sellado siempre que importe una obligación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 12, Ser. 4^a.

8. **Papel sellado**—La manifestación de conformidad con el saldo que arroja trimestralmente la cuenta corriente no está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ. tom. 9, pág. 38, Ser. 4^a.

9. **Papel sellado**—El Juez competente para aplicar la multa por infracción al impuesto de papel sellado, debe conocer en la acción entre los firmantes solidarios de la pena.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 59, Ser. 4^a.

Papel sellado—Véase: *Cédulas*, núm. 2—*Poseción judicial*, núm. 7—*Diligencias de prueba*, núm. 29.

Papeles—Véase: *Depositario judicial*, núm. 1.

Papeles de crédito—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 85

6—Tanto el fiscal y el Juez de 1^a Inst. como el Fiscal de las Cámaras dijeron que el documento estaba sujeto al impuesto de sellos, fundándose en que el conforme puesto al pie de una cuenta, la convierte en un documento de obligación de los designados en el art. 2^o de la Ley de papel sellado de 1891. La Cámara resolvió lo contrario diciendo que el conforme puesto al pie del documento no importa reconocimiento de deuda, sino simplemente la conformidad de las partidas que la cuenta espresa, para ser pagadas como en el caso presente, por un tercero.

7—Véase: verb. *Cuenta corriente*, núms. 1 y 2 que están en abierta contradicción.

8—Véase: nota precedente.

9—Véase: verb. *Acción*, núm. 3.



Para mejor proveer—Véase: *Traslado*, núm. 9.

1^a. Pared divisoria—La línea imaginaria que divide dos propiedades debe fijarse en el centro de la pared; siempre que por convenio expreso no se haya estipulado cuál de los frentes de la pared era divisorio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 303, Ser. 3^a.

1^b. Pared medianera—La demolición regular de una pared medianera, previo aviso al propietario y locatario de la finca contigua, no puede fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 156, Ser. 4^a.

1^c. Parentesco—Entre el Juez y la parte, debe ser justificado por el que afirma su existencia.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 224, Ser. 3^a.

Parentesco—Véase: *Tacha*, núm. 1.

1^d. Parientes—El derecho que la ley concede al pariente de grado sucesible más lejano, para gestionar los derechos hereditarios, por inacción ó renuncia del de grado más próximo, no puede ser usado si el último aceptando la herencia hizo uso de su derecho.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 250, Serie 3^a.

Parientes—Véase: *Esposo*, núm. 1—*Curador*, núm. 2—*Divorcio*, núm. 9—*Herederos*, núm. 6—*Insano*, núm. 1.

Parte activa—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 12.

Parte alicuota—Véase: *Bienes de la sucesión*, números 3 y 4.

1^a—En virtud de lo dispuesto por el art. 2725 del Cód. Civ.

1^b—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 78.

1^c—Se dijo de nulidad de una sentencia fundándose en el parentesco existente entre Juez y demandado. Esa afirmación importa aducir un hecho nuevo en juicio y por consiguiente su prueba incumbe al que la aduce, de acuerdo con los conocidos principios de procedimientos y con lo dispuesto en la ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.

1^d—Véase: verb. *Derechos hereditarios*, núm. 4.



Parte dispositiva—Véase: *Sentencia*, núm. 6.

Parte legítima—Véase: *Mensura*, núm. 1—*Información supletoria*, núm. 2.

Parte proporcional—Véase: *Crédito líquido*, núm. 1.

Partes—Véase: *Contrato*, núm. 14.

Partes cuadyuvantes—Véase: *Rebeldía*, núm. 11.

Partición—Véase: *Bienes*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 9—*Bienes de la sucesión*, núms. 1 y 2—*Cuenta particionaria*, núm. 5.

1. Partición estrajudicial—La mayor ó menor parte de la herencia que los herederos todos mayores se adjudiquen en la partición estrajudicial, no repugna ni es contraria á lo que la ley dispone sobre porción de los herederos forzosos, pues las diferencias importan una renuncia permitida por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, página 188, Ser. 3^a.

2. Partición estrajudicial—No puede tener lugar la partición estrajudicial entre herederos mayores, si afecta derechos de los legatarios.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 350, Ser. 4^a.

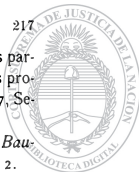
3. Partición estrajudicial—Reconocida y declarada por sentencias ejecutoriadas la partición estrajudicial y consiguiente entrega de bienes á los herederos, la parte dispositiva que ordena la formación de la cuenta particionaria colacionando los bienes entregados equivale á una declaración espresa de haber cesado el estado de indivisión ó posesión en común de los bienes hereditarios.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

Participación—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 3.

1—Véase: verb. *Herederos forzosos*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Legatario*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Indivisión*, núm. 2.



1^a. Partidas.—Siempre que la presentación de las partidas de estado civil sea difícil aunque imposible, es procedente la información.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 367, Serie 4^a.

Partidas.—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 2—*Bautismo*, núm. 1—*Causante*, núm. 1—*Escribano*, núm. 2.

1^b. Partida de bautismo.—La falta de presentación de la partida de bautismo que justifique el carácter del hijo natural, no puede fundar una excepción dilatoria.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 33, Ser. 4^a.

2. Partida de bautismo.—Las aseveraciones de las partidas de bautismo sin la firma del padre, aun cuando afir-

1^a—El Juez Dr. Mendez Paz dijo, que no habiéndose justificado en forma el fallecimiento de los padres del causante, no procedía por entonces la declaratoria de herederos. La Cámara revocó la resolución diciendo que «según manifestación de las partes no les es posible comprobar por medio de las respectivas partidas el fallecimiento de los padres del causante, pues no las habían podido conseguir por hallarse en registros distantes de la jurisdicción de nuestros Tribunales, siendo en este caso de estricta aplicación lo dispuesto en el art. 108 del Código Civil.» Esta es la jurisprudencia constantemente establecida por la Cámara y contra la que el Dr. Mendez Paz se pronuncia con una tenacidad digna de mejor causa, pues su actitud contraría a la ley y causa graves perjuicios a los litigantes.

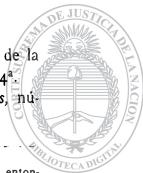
1^b—Véase: verb. *Hijo natural*, núm. 6.

2—Esta resolución fué revocatoria de una bien meditada sentencia del Sr. Juez Dr. Pizarro, quien al sostener el principio contrario al sustentado en el sumario dijo: «que viviendo aun en concubinato el pretendido padre con la madre de los niños, permitió que éstos fueran bautizados y consintió que en la partida se espesara que eran hijos suyos. ¿No importa esto reconocerles tácitamente, que es la clase de reconocimiento, que funda la posesión de estado, a la vez que es el resultado de la misma? Es verdad que esas partidas no están firmadas por el pretendido padre, pero si lo estuvieran, el reconocimiento no sería tácito sino expreso. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que el bautismo de esos niños tuvo lugar en la primera época del concubinato del pretendido padre con la madre de los mismos, de manera que no podría

men el carácter de hijo legítimo, no son prueba de la filiación natural.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 4.^a.

Partidas objetadas—Véase: *Rendición de cuentas*, número 16.

creerse que el acto tuviese lugar ignorándolo aquél. Lo supo, entonces, y consintió en que se asentasen las partidas como hijos suyos.» El Fiscal de las Cámaras manifestó á este respecto que: se decía que esas partidas bautismales deberían contener el reconocimiento hecho por el pretendido padre de esos hijos, para producir efectos legales. Indudablemente que para producir buena prueba, ese requisito era indispensable; á haberlo hecho así no habría existido pleito; pero se puede tomar como un dato, como un antecedente concomitante con los demás hechos de la causa. Sin embargo no ha de perderse de vista que si el pretendido padre haciendo vida marital con la madre de los niños, trataba de hacerse pasar como casado, habría destruido todo el efecto de su ficción si se hubiera presentado en el curato donde recibían el agua bautismal sus hijos, reconociéndolos como naturales. Las partidas de bautismo, sin darles una importancia exagerada y no obstante su falta de ratificación, no habiendo sido tachadas de falsas y teniendo en favor de su autenticidad el sello de los curatos respectivos, en el caso en cuestión tenían una importancia innegable, como elemento concurrente de convicción. El principio sentado en el sumario lo fué por mayoría de un voto: la minoría, de acuerdo con el Juez de 1.^a Ins. dijo: Las partidas de bautismo en las que aparecía que los menores fueron bautizados como hijos legítimos del pretendido padre, si bien podría decirse contra ellas que les faltaba su reconocimiento expreso, su firma ó ratificación, que en el caso en cuestión habría bastado para justificar por sí sola la demanda, era sin embargo de tenerse presente, que su autenticidad no fué puesta en duda y que tenía además á su favor la autoridad que les daban el sello de los curatos y de los ministros de la Iglesia por quienes fueron extendidas cuando se bautizó á esos niños, pudiendo suponerse que el pretendido padre no hizo observación alguna, ya por ser entonces un hombre joven ó porque fuera su intención casarse más tarde con la madre de sus hijos. La mayoría, que rechazó la acción de filiación natural no dijo una palabra sobre el principio sentado en el sumario; fundó su resolución tan solo en la circunstancia de que la prueba de testigos no podía considerarse suficiente para dar por comprobada la posesión de estado.



Pasajeros—Véase: *Culpa ó negligencia*, núm. 1.—*Daños y perjuicios*, núm. 107.

Pastor protestante—Véase: *Matrimonio*, núm. 1.

1^a. **Paternidad**—El padre que no pidió el nombramiento de tutor especial al menor cuya paternidad desconoce, carece de personería para pedir la nulidad de la sentencia que no hace lugar á sus pretensiones fundado en esa omisión.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 3^a.

Paternidad—Véase: *Filiación natural*, núms. 6 y 7.

1^b. **Paternidad legítima**—El desconocimiento de la pa-

1^a—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 1.

1^b—Art. 252 del Cód. Civ.; Ley 39, tit. 2, part. 3^a—El art. 246 al establecer la presunción de legitimidad en favor de los hijos concebidos durante el matrimonio y dentro de los términos que señala, agrega: que «solo regirá si no se probase que había sido imposible al marido tener acceso con su mujer en los ciento veinte días, de los trescientos que han precedido al nacimiento.»—Como esta demostración sería lo que se llama prueba de evidenciaci6n; justificada por el marido la absoluta imposibilidad de ser el padre del hijo habido por su esposa, no necesitaría acreditar directamente y por separado el adulterio de aquélla, ni sería necesario, en fin, comprobar que el parto le había sido ocultado, pues esta circunstancia no influiría en la resoluci6n del caso en cuesti6n.—El previsto por el art. 253 es muy diverso; y así como en él no se requiere la demostraci6n evidente de haber sido imposible la paternidad, bastando las circunstancias que á juicio de los jueces la hagan inverosímil, es indispensable que se acredite por una parte el adulterio de una esposa y por otra la ocultaci6n del parto. El principio tutelar en el orden social, como indispensable para determinar el estado de las personas, de que debe ser considerado padre legítimo aquel á quien indica el nacimiento, se funda á su vez en la presunci6n de la fidelidad de la esposa. No basta sinembargo á desvirtuarlo y destruirlo de todo punto el adulterio de la mujer; porque podía ser muy bien que habiendo continuado sus relaciones con el marido, á pesar de ser esta adúltera, el niño que hubiera concebido, fuese con todo, legítimo. *Cum possit et illa adultera esse, et impubes defunctum patrem habuisse.* Pero si al adulterio se reúne la circunstancia de habersele ocultado al marido, por la mujer, su parto, que denota la persuasi6n de parte de ésta de que el hijo que da á luz no pertenece á su





ternidad legítima, solo es procedente cuando el marido justifica su imposibilidad física ó el adulterio de la es-

marido, la ley ha considerado entonces estos antecedentes, suficientes á neutralizar la presunción de legitimidad que protege á los hijos nacidos durante el matrimonio, y ha creído que haciéndola cesar, debía permitir al marido aducir y á los jueces apreciar libremente los demás datos que pudieran hacer formar el concepto de la verdad. No es necesaria, entonces, una prueba de evidencia; y supuesto el adulterio y la ocultación del parto, creeríamos suficiente cualquiera que demostrase ser lo más probable, que el niño no pertenecía al marido. «El marido—dice el art. 253—no puede desconocer al hijo, dando por causa el adulterio de la mujer, ó su impotencia anterior al matrimonio. Pero si á más del adulterio de la mujer, el parto le fuese ocultado, el marido podrá probar todos los hechos que justifiquen el desconocimiento de su hijo.» Como puede notarse por el texto de este artículo, la justificación en el caso de que se trata, podrá venir á la vez de diversos hechos administrativos, aunque quizás ninguno de ellos fuese concluyente por sí solo, cual lo sería, sin duda, la demostración de la imposibilidad física del acceso con la mujer. Así lo entiende y espone el doctor Segovia explicando el artículo que nos ocupa. «Los hechos, dice, que justifiquen el desconocimiento del hijo por el marido, á más de la impotencia posterior al matrimonio, podrían ser, entre otros, la decrepitud, la salud valetudinaria, la distancia que existía entre las residencias del marido y de la mujer, durante el período de la concepción, la desinteligencia que en esa época reinaba entre los esposos. «Como la suficiencia de las pruebas suministradas por el marido para justificar el desconocimiento del hijo, no sería siempre irrefragable y de aquellas que quiten todo motivo de duda; habrá de quedar, muchas veces, abandonada á la apreciación prudente de los jueces.»—Explicación y crítica del Código Civil, tom. 1º, pág. 67, nota 6ª.—Nada más razonado y fundado, por otra parte, que esta doctrina. Supongamos que se trate de un hombre anciano, decadente y valetudinario, que ha dejado, hace ya mucho tiempo, de tener hijos, á pesar de conservarse su mujer relativamente joven. Supongamos también que á las circunstancias del adulterio y ocultación del parto, se reuna la de haber tenido lugar aquel con un hombre joven y vigoroso. ¿Quién dudaría ser este el que había fecundado á la mujer? Nadie, seguramente; sería por cierto, de todo punto injusto atribuir este hijo al marido y sin embargo, en realidad, no existiría prueba evidente de que no le pertenecía. Marcadé, ocupándose de los artículos 312 y 313 del Código de



posa y la ocultación del parto.—Jur. Civ., tom. 1, página 165, Ser. 3ª.

2. **Paternidad legítima**—Si bien en los juicios sobre desconocimiento de la paternidad legítima el menor debe ser provisto de tutor especial, la falta de este requisito no anula la sentencia de primera instancia si ella era favorable al menor.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 3ª.

Napoleón, del cual han sido tomados los del nuestro de que ahora se trata, y explicando la acción que corresponde al marido para desconocer su paternidad respecto á los hijos habidos por la esposa durante el matrimonio, los cuales por derecho se presumen suyos, dice que la espresada acción tiene tener lugar en tres casos diferentes. Estos son: 1º Demostrando la absoluta imposibilidad para haber tenido acceso con aquélla, por la época en que debió hacerse embarazada; sobre lo que es obligado á producir prueba completa; 2º Cuando han habido adulterio y ocultación del parto; produciendo datos suficientes que hagan presumir que en efecto el niño no le pertenece. 3º En fin, cuando la mujer ha tenido al hijo, estando divorciada de su marido, debiendo producir la misma justificación que en el anterior, cuya apreciación queda librada al prudente criterio del juez; pero sin requerirse una demostración concluyente.—Explicación del Código Civil, lib. 1, tit. 7º—Haciendo ahora aplicación de estos principios al caso del sumario, supuestos el adulterio y la ocultación del parto, es indudable que si el marido residiendo en la campaña á larga distancia, no venía al domicilio de su esposa sino muy rara vez, y ésta, entre tanto, habia establecido otras relaciones permanentes, el hijo que concibió y dió á luz debe suponerse con mayor probabilidad que perteneciera á su amante y no á su marido, aun en el supuesto de que éste no hubiese cortado de todo punto sus relaciones con ella.

2—Según prescripción de los arts. 61 y 397 del Cód. Civ., los menores solo pueden estar en juicio asistidos de tutor. Aun cuando ese juicio fuera nulo por no habérseles nombrado tutor á los menores, esa nulidad no les favorecería sino cuando la sentencia le hubiese sido adversa: la nulidad declarada no le favorecería ni podría invocarla el vencido, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1049 del Cód. Civ. y en la ley 1ª, tit. 2, Part. 3ª. Además en el caso que nos ocupa el recurso de nulidad no se dedujo en 1ª Instancia, y según el art. 239 del Código, este recurso debe interponerse conjuntamente con el de apelación.



1. **Patria potestad**—Para que los hechos inmorales produzcan la pérdida de la patria potestad, no basta probar su existencia, debe justificarse que ellos tenían lugar en presencia de los hijos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 407, Ser. 3ª.

2. **Patria potestad**—Si bien el padre no puede ser privado de la patria potestad sin forma de juicio, los hechos graves que denuncie el menor, permiten su suspensión temporal.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 156, Ser. 4ª.

3. **Patria potestad**—Su ejercicio no admite limitaciones

1—Cuando el art. 309 del Cód. Civ. habla de los casos en que los Jueces pueden privar á los padres del ejercicio de la patria potestad, designa el caso en que den *ejemplos inmorales*, para que este ejemplo exista, es necesario probar que los hechos que los constituyen se producen en presencia de los hijos, ó que lleguen á su conocimiento por otros medios, de tal manera que ellos constituyan un ejemplo que determine á los hijos á proceder en el mismo sentido. Las relaciones ilícitas que los padres mantengan con otras mujeres no bastan para contener en sí mismos un ejemplo inhumano cuando no se han ultrapasado los límites de la vida privada, y cuando el hecho no es público y notorio, y se toman las reservas del caso pero que no lleguen hasta los hijos.

2—Cuando se denuncian hechos que á ser ciertos autorizarían la aplicación del art. 309 del Cód. Civ., la prudencia aconseja siempre á tomar medidas precaucionales de carácter conservatorio y debe nombrarse un tutor especial que represente al menor.

3—Un padre legítimo, invocando su carácter de tal, se presentó demandando á un tercero para que le entregase su hijo retenido indebidamente y contra su voluntad. El demandado resistió la entrega de la menor alegando que no era hija del pretendido padre legítimo, sino el fruto de la irreflexión de un hijo suyo, habido con la mujer que más tarde fué esposa del actor, quien no ignoraba al contraer matrimonio que su mujer se hallaba en cinta y quién era el autor del embarazo. En presencia de estos hechos, la Cámara dijo que no había razón para la prosecución del juicio cuyas actuaciones debían archivar, ordenando la entrega de la menor á su padre legítimo. No puede decirse que en el presente caso no se trata de una demanda de reconocimiento ni de desconocimiento de la filiación, sino únicamente de decidir si constaba que el demandante era el padre legítimo de la incapaz, pues siendo corre-



ni puede ser discutido por terceros, en tanto el padre no sea privado de ella por Juez competente.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 133, Ser. 4ª.

lativas en derecho las ideas de filiación y de paternidad, la ejecución privaria, aunque fuese momentáneamente, á aquélla de su estado civil de hija legítima. Se argumentaba bajo el concepto de que la presunción legal de la paternidad no concurría en el caso en cuestión, porque la criatura había nacido antes de los 180 días posteriores al matrimonio ¿pero las nacidas en esas condiciones no son consideradas legítimas cuando el marido supo antes de casarse el embarazo de su futura esposa ó cuando hubiera reconocido tácita ó espresamente por suyo el hijo de su mujer? ¿Es posible ignorar que el demandante ignorase el embarazo de su prometida? ¿Su silencio durante largos años después del alumbramiento, no equivalía á un reconocimiento implícito de la paternidad á los fines previstos por la ley? ¿No existían de otro lado, actos manifiestos y positivos de voluntad? Según Goyena—art. 104—la presunción que crea el conocimiento del embarazo es *juris et de jure* porque supone en este caso que el padre contrajo matrimonio para reparar la debilidad ó falta anterior, y que no habría consentido en él sin estar persuadido de que la mujer llevaba en su vientre el fruto de sus amores recíprocos. Puede verse á este respecto la jurisprudencia sentada por la Cámara. Nada importa que las presunciones de derecho no tengan la misma firmeza respecto de los hijos nacidos antes de los 180 días después del matrimonio, como para los concebidos después de su celebración, porque en el primer caso le basta á la ley la inacción del padre para determinar ó establecer la legitimidad del hijo. Obsérvese que quien articulaba contra la paternidad legítima del actor, era persona extraña á él y á la incapaz, sin vinculaciones de sangre, de parentesco ó de interés subordinado al estado civil de la misma. ¿Tendría personería para ello á título de secuestrador de la incapaz? ¿La tendrá por la simple afirmación de ser su propio hijo el seductor de la novia del demandante y la hija de ésta el producto ilegítimo de esta seducción? «La ley, decía el Dr. Cortés en un caso análogo, procediendo con mucha prudencia y sabiduría, ha querido resguardar la armonía en los matrimonios, la tranquilidad del hogar, impidiendo que cualquiera pudiese turbarla é introducir en ella la confusión, suscitando temerariamente cuestiones delicadas sobre legitimidad de los miembros que la componen, las que á veces vendrían á manchar también la memoria de personas ya fallecidas.» Y es regla elemental en derecho que sin parte legítima no hay ni puede haber juicio válido. Una falsa apreciación sobre personería no pue-



4. **Patria potestad**—Las cuestiones sobre pérdida ó res-tricción de la patria potestad, no pueden ser deducidas

crear ni extinguir derechos, máxime cuando se ventilan intereses perma-nentes de familia á los cuales la ley dispensa todo su favor, y que la justi-cia social está en el deber de amparar, sin más reserva ó limitación que el derecho de tercero. El ejercicio de la patria potestad no podía limitarse fundándose en la aseveración de un extraño que impugnaba un carácter espresamente atribuido por la ley y que no admite prueba de contrario.

4—Una persona se presentó al Juez diciendo que hacía próxima-mente 5 años tenía á una menor que fué dejada en su poder, habiéndola atendido desde esa fecha en todas sus necesidades; ma-nifestando además ser hija adulterina según se acreditaba por la partida de bautismo que no acompañó por habersele extraviado. Con este mo-tivo se presentaron los padres de la menor diciendo que eran padres naturales de la niña y pidiendo su entrega. Acompañaron la partida de bautismo de la que resultaba que la habían reconocido en el acto de la inscripción como hija legítima aunque en realidad cumplían con declarar que es natural. La Cámara ordenó la entrega de la niña á los padres naturales, fundándose en que el padre y madre natural tienen sobre sus hijos los mismos derechos y autoridad que los padres legítimos, los que únicamente pueden ser restringidos ó suspendidos por los jueces cuando así conviene al interés de los incapaces—artículos 328 y 329, Cód. Civ.—mientras no se produzca esta intervención judi-cial en el gobierno de los menores por alguna de las causas enumera-das en la ley, son sus padres legítimos ó naturales los únicos que tie-nen poder sobre los mismos, con la obligación y el derecho de criar-los, elegir la profesión que han de tener, alimentarlos y educarlos, con-forme á su condición y fortuna—art. 265, Cód. citado. En presen-cia de estas disposiciones legales y siendo el actor persona extraña á la familia de la menor, era manifiesta su falta de personería para instaurar el juicio sobre provisión de tutela y asimismo para intervenir en los proce-dimientos que pudieran provocarse por parte legítima sobre pérdida ó suspensión de la patria potestad. No basta para conferirle esa per-sonalidad, la crianza ó cuidado prestado á la menor, pues ellos no crean ningún derecho sobre la persona de ésta, ni tampoco se lo confería la misma calidad de hija adulterina que le atribuye, cuando se tiene un re-conocimiento espreso hecho por los padres, que es irrevocable á los ojos de la ley y el cual solo puede ser contestado por los propios hijos y por los que tengan interés en hacerlo. Esta situación no la modi-fica la afirmación del mismo actor, posterior á la demanda, de que la



por extraños que reclamen la tutela.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 70, Ser. 4^a.

Patria potestad—Véase: *Costas*, núm. 4—*Cuota alimenticia*, núm. 8—*Padre*, núm. 1—*Fondos*, núm. 1.

Patrimonio—Véase: *Derecho de petición*, núm. 2.

1^a. **Patronato**—La prescripción del derecho al patronato de una capellanía, solo empieza á correr desde la fecha de su fundación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Serie 4^a.

Patronato—Véase: *Capellanía*, núm. 2—*Abogado*, número 10.

1. **Patrono**—Para que tenga derecho al remanente del capital capellánico, debe justificar su derecho á la herencia del fundador.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 422, Ser. 3^a.

2. **Patrono**—Solo éste tiene derecho á intervenir en las diligencias necesarias para fundar la capellanía.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4^a.

3. **Patrono**—Al patrono corresponde la posesión de la finca capellánica, aun cuando no se haya fundado la capellanía.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 74, Ser. 4^a.

Patrono—Véase: *Capellanía*, núm. 1—*Memoria pía*, número 1—*Censo capellánico*, núm. 1.

Peligro—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 38.

1^b. **Pena**—La falta de cumplimiento del contrato, permite á aquel á cuyo favor se estipule la pena, demandar

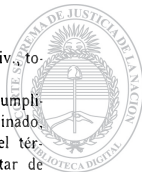
madre de la menor observaba mala conducta, pues producida la denuncia y según fuese la gravedad de los hechos denunciados, correspondería al ministerio pupilar y al juez dictar las medidas oportunas, proveyendo á la menor, de un tutor especial á los efectos previstos en el art. 309 ya recordado.

1^a—Véase: verb. *Capellanía*, núm. 4.

2—Véase: verb. *Capellanía*, núm. 6.

3—Véase: verb. *Capellanía*, núm. 7.

1^b—Véase: verb. *Contrato*, núm. 5.



su entrega sin justificar perjuicio alguno.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 335, Ser. 3ª.

2ª. **Pena**—La estipulada para el que falte al cumplimiento de una obligación de hacer en plazo determinado, no queda tácitamente sin efecto por la prórroga del término dentro del cual debió cumplirse, debe resultar de convención expresa.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Serie 4ª.

3. **Pena**—Estipulada para el caso de mora en el cumplimiento del contrato, solo puede ser exigida por el acreedor después de reducido á escritura pública el boleto simple de compraventa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 153, Ser. 4ª.

Pena — Véase: *Acción*, núm. 3 — *Contrato de compraventa*, núm. 12 y 20 — *Poderes locales*, número 1 — *Contrato por escritura pública*, núm. 1 — *Contrato de arrendamiento*, núm. 30 — *Inhibición*, núm. 14 — *Dependientes*, núm. 1 — *Escritura pública*, núms. 27 y 29.

1. **Pensión alimenticia**—Justificado el cambio de posición social y pecuniaria del alimentario, procede el aumento de la pensión alimenticia.—Jur. Civ., tom. 1, página 289, Ser. 3ª.

2. **Pensión alimenticia**—La facultad discrecional que al Juez confiere la ley para fijar la pensión á los menores,

2ª—Véase: verb. *Obligación de hacer*, núm. 5.

3—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 27.

1—A una esposa se le fijó en el juicio sumario de alimentos la suma de 120 pesos, y habiendo mejorado de fortuna el esposo pidió aumento de la cuota, el que le fué acordado porque el esposo había mejorado notablemente de fortuna, debiendo además tenerse presente que esa suma no es en manera alguna bastante para atender ni aun modestamente el objeto á que es destinada.



no infliere agravio al tutor siempre que tenga en cuenta los vínculos de parentesco que unen á éste con sus pupilos, sus necesidades sociales y el monto de su fortuna, aun cuando sea indiscutible su modicidad.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 305, Ser. 3ª.

3. Pensión alimenticia—La pensión alimenticia de la viuda debe ser proporcionada al caudal testamentario.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 418, Ser. 4ª.

4. Pensión alimenticia—El padre debe proveer de la suma necesaria para los gastos de instalación de los menores, además de la pensión alimenticia fijada por el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 419, Ser. 4ª.

5. Pensión alimenticia—Debe continuar aun después de vencido el término de la separación provisoria entre los esposos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 7, Ser. 4ª.

Pensión alimenticia — Véase: *Alimentos*, núm. 1 y siguientes.

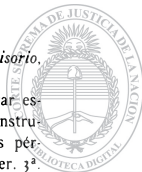
Percibir — Véase: *Poder*, núm. 4—*Cuota alimenticia*, núm. 1.

Pérdida de la cosa — Véase: *Contrato de compraventa*,

3—Se fijó la cuota alimenticia en 400 pesos, incluyéndose en esta suma el importe de lo que debía abonar por alquiler.

4—Véase: verb. *Gastos*, núm. 1.

5—Se decretó la separación, fijándose la suma de 120 pesos mensuales como cuota alimenticia para la esposa y sus hijos, y se ordenó por el mismo decreto que la esposa justificase los estrechos legales necesarios para asignársele la cuota definitiva. Vencido el término no los justificó y el esposo pidió que dejara sin efecto la cuota provisoria á lo que no hizo lugar la Cámara porque de las actuaciones del primer juicio resultaba justificado el derecho de la esposa á los alimentos fijados, sin que en el juicio ordinario se hubiese demostrado que hubiesen cambiado las condiciones de los esposos después de fijarse la cuota provisoria. Además debe tenerse presente que los alimentos no pueden ser materia de transacción—art. 374 del Cód. Civ.



núm. 15—*Seña*, núm. 1 y siguientes—*Pacto comisorio*, núm. 8.

1ª. *Pérdidas é intereses*—El vendedor debe otorgar escritura pública del contrato de venta constante de instrumento privado, bajo pena de ser condenado en las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 157, Ser. 3ª.

2. *Pérdida é intereses*—Al vendedor que alega la rescisión del contrato de compraventa, corresponde la prueba de la escepción; si no la justifica debe ser condenado á su cumplimiento en un término perentorio, bajo pena de resarcir las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 7, página 371, Ser. 3ª.

Pérdida é intereses—Véase: *Contratos*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 11—*Obligación de hacer*, núm. 14—*Condición*, núm. 3.

Perentorio—Véase: *Escepción perentoria*, núm. 2—*Términos perentorios*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núm. 5.

Periodos determinados—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 23.

1^b. *Perito*—Propuesto un perito dentro del término,

1ª—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 12.

2—Véase *Contrato de compraventa*, núm. 14.

1—Cuando solo faltaban cinco días para el vencimiento del término de prueba se presentó una de las partes litigantes proponiendo perito y solicitando que la contraria manifestara si estaba ó no conforme con el supuesto. La parte, sin hacer la manifestación ordenada se opuso á la prueba pericial porque según ella no había tiempo suficiente para su producción, siendo así que la prueba debe ser pedida, ordenada y practicada dentro del término—art. 118 del Cód. de Proc.—La Cámara dijo, que el término de cinco días era bastante para la producción de la prueba, y consiguientemente la admitió sin perjuicio de que esa prueba no pudiese interrumpir la secuela del juicio. Vuelto al Inferior el espediente, la parte propuso nuevo perito porque el primero se había ausentado: faltaban siempre los cinco días por cuanto el término de prueba había quedado suspendido á causa del incidente de oposi-

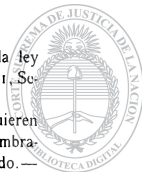


la tardía manifestación de disconformidad de la contraparte no hace perder el derecho á esa prueba, aun despues de vencido aquél.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 12, Ser. 3^a.

2. Perito—Los informes de un perito para cuyo nom-

ción suscitado. El juez mandó nuevamente que la parte contraria hiciese la manifestación ordenada; pero esa manifestación solo se hizo despues de vencido el término de prueba. Hecha la manifestación, el juez no hizo lugar al nombramiento del perito porque el hecho de que no se hubiera podido producir la prueba pericial dentro del término ordinario, era una omisión sola y exclusivamente imputable á la parte: 1º, Porque la solicitó en los últimos días de aquel periodo; 2º, Porque no requirió dentro del plazo á que se refiere el art. 114 el término extraordinario necesario, pues no basta la simple petición de diligencias fuera de la capital para que se conceda, sino que es indispensable se solicite esplicitamente; 3º, Porque el perito que se propuso primero, no fué nombrado por haberse ausentado, viniendo así por su culpa á demorarse varios días esa prueba, no obstante haber el Juzgado proveido en el día á la petición que hizo presentando otro perito; Que durante el término deben ser practicadas todas las diligencias de prueba—art. 118 citado—y siendo término de prueba, en general *para probar y haber probado y presentar la probanza*, según la espresión de la primera parte de la ley 1ª, tit. 6º, lib. 4º. R. C., la parte no debe quejarse de perjuicios que le son exclusivamente imputables. La Cámara revocó esta resolución diciendo, que la parte podía proponer perito, aunque solo faltaran cinco días para la espiración del término de prueba, y proponiendo otro en reemplazo del primero por haberse éste ausentado, no hacia esta parte otra cosa sino usar del derecho que se le había reconocido, puesto que lo mismo es para el caso de que se trata, una ú otra persona; sobre todo si se tiene en cuenta que la conformidad que el Juzgado mandaba manifestar, no había sido prestada todavía. Que la propuesta del segundo perito había sido hecha el primero de los cinco días que debían empezar á contarse de nuevo desde la notificación de la misma, ordenándose que la parte manifestase su conformidad ó disconformidad con el perito nuevamente propuesto, en cuyo caso la manifestación hecha cuando los cinco días habían ya transcurrido, no podía perjudicar á la parte contraria.

2—Se nombró un solo perito sin que las partes se hubiesen puesto de acuerdo para el nombramiento de ese perito único. Las conclusiones á que éste llegase no podían tener la fuerza de prueba legal de que



bramiento no se han llenado los requisitos que la ley exige no forman prueba.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 71, Serie 3ª.

3. Perito—Director, tratándose de obras que requieren conocimientos especiales para su construcción, el nombramiento de perito director es facultativo del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 426, Ser. 4ª.

4. Perito—El nombramiento de peritos para el cotejo de un documento argüido de falso, puede hacerse después de vencido el término, siempre que haya sido pedido antes de su vencimiento.—Jur. Civ., tom. 1, página 351, Ser. 4ª.

1. Peritos—Si al presentar la cuenta el actor manifiesta que por la disconformidad del demandado se fije el importe por peritos, la diferencia de precio fijada por aquél, no importa *plus petitio* que le haga pasible de las costas—Jur. Civ., tom. 1, pág. 239, Ser. 3ª.

2. Peritos—Reconocida la prestación de servicios, procede su pago con arreglo á lo que fijen peritos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 408, Ser. 3ª.

nos habla el art. 178 del Cód. de Proc., porque no se observaron las prescripciones del Cap. III del mismo Código. Para que la prueba pericial tenga fuerza de prueba legal, debe en su producción observarse todas las formas prescriptas, pues solo de esta manera se la puede considerar como rodeada de todas las garantías que la hacen digna de fe.

4—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 11.

1—Porque esta actitud aleja desde luego todo propósito malicioso. Habiendo habido disconformidad en cuanto al monto antes de entablarse la demanda, el actor optó por el único camino legal marcado por el art. 1627 del Cód. Civ. Este principio está de acuerdo con otro análogo resuelto por la Cámara. Véase: verb. *Costas*, núm. 35, en cuya nota se pueden examinar algunos casos resueltos en contra.

2—Art. 1627 del Cód. Civ.



3. Peritos—Solo procede la fijación por peritos, del valor de los servicios prestados, si existe conformidad de partes sobre su importancia, ó si han sido determinados en juicio contradictorio ante juez competente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 277, Ser. 3ª.

5. Peritos—Las afirmaciones terminantemente asertivas de los peritos, forman prueba plena del hecho sometido á su juicio.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 143, Ser. 4ª.

6. Peritos —Ante la divergencia de opiniones entre los peritos nombrados por las partes y el nombrado de oficio, la del último debe aceptarse con preferencia á los primeros.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 163, Ser. 4ª.

7. Peritos—Los honorarios de abogado devengados estra judicialmente, deben ser determinados por peritos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 169, Ser. 4ª.

8. Peritos—Si la prueba requiere el nombramiento de peritos, las partes están obligadas á verificarlo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 253, Ser. 4ª.

3—Véase: *Locación de servicios*, núm. 2.

5—A este respecto hay jurisprudencia contradictoria, pero ella tiende á fijarse en el sentido del sumario, lo que implica un triunfo para la razón y el criterio jurídico sobre los errores de algunos magistrados. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Informe*, núm. 1; tom. 4º, verb. *Peritos*, núm. 1 y *Prueba plena*, núms. 2 y 3.

6—Los tres peritos nombrados se espidieron por separado difiriendo en sus apreciaciones, pero con el auxilio de éstos y demás constancias de autos pudo resolverse satisfactoriamente la cuestión sometida á juicio. Respecto del dictamen del perito nombrado de oficio, la Cámara dijo: que «lo razonable y justo es suponer que quien está en la verdad es el perito nombrado por el Juzgado, tanto porque ha podido proceder con toda imparcialidad, estraño como era á una y otra parte, cuanto porque su informe está fijado en un término medio entre los otros dos.»

7—Véase: verb. *Abogado*, núm. 8.

8—Arts. 161 y 162 del Cód. de Proc.



9. **Peritos**.—Contadores, presentados por éstos el informe, no puede pedirse ampliación; solo el Juez para mejor proveer puede ordenarla.—Jur. Civ., tom. 9, página 259, Ser. 4^a.

Peritos.—Véase: *Honorarios*, núms. 1, 11, 25 y 27.—*Diligencias de prueba*, núm. 7.—*Prueba por peritos*, núm. 1.—*Locación de servicios*, núms. 5 y 6.—*Agrimensor*, número 1.—*Costas*, núm. 55.—*Avaluación*, núm. 1.

1^a. **Peritos calígrafos**.—El dictamen de los peritos que la ley estatuye para la declaración de la autenticidad de documentos argüidos de falso, solo es ilustrativo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 133, Ser. 4^a.

2. **Peritos calígrafos**.—Su informe no forma prueba plena, el Juez debe hacer por sí mismo el cotejo y puede desechar el dictamen pericial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

1^b. **Perjuicios**.—El comprador que acepta el bien con los gravámenes que sobre él pesan, es el único responsable de los perjuicios que la falta de servicios de intereses le irrogue.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 348, Ser. 4^a.

Perjuicios.—Véase: *Inhibición*, núm. 5.—*Daños y perjuicios*, núm. 1 y siguientes.—*Funcionarios públicos*, núms. 4 y 5.—*Condición*, núm. 3.

Permiso municipal.—Véase: *Acto ilícito*, núm. 6.

Perpetuidad.—Véase: *Compraventa*, núm. 4.

1^c. **Persona determinada**.—Aun cuando el comprador se haya reservado en el boleto privado de compraventa el derecho de designar la persona á cuyo favor debe otorgarse

7—Véase: *Informes*, núm. 3.

1^a—Véase: *Dictamen pericial*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Cotejo*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Comprador*, núm. 4.

1^c—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 7.



la escritura, no procede la nulidad de la convención por no existir persona determinada.—Jur. Civ., tom. 6, página 157, Ser. 3ª.

Persona determinada—Véase: *Edictos*, núm. 4—*Nulidad de una sentencia*, núm. 17.

Persona jurídica—Véase: *Contrato*, núms. 1 y 20—*Poder*, núm. 2—*Contencioso-administrativo*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 36—*Juicio contencioso-administrativo*, número 2.

Personalmente—Véase: *Notificaciones*, núm. 4.

1. Personería—La del rematador como representante del vendedor, cesa después de verificada la almoneda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3ª.

2. Personería—El albacea carece de personería para entablar demandas contra terceros á nombre de la testamentaria, cualquier que haya sido el origen de la acción.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 312, Ser. 3ª.

3. Personería—Cesa la del apoderado, transferida que sea la propiedad del bien materia del litigio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 206, Ser. 3ª.

4. Personería—El heredero de grado más próximo, que aceptando la herencia hace uso del derecho de petición, adquiere el patrimonio para sí y lo transfiere á sus herederos, cesando en consecuencia la personería de los de grado más lejano para iniciar la misma acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 250, Ser. 3ª.

1—Los martilleros en las ventas judiciales son mandatarios: el mandato es especial para vender. Celebrada la venta termina el mandato de acuerdo con lo establecido en el art. 1960 del Cód. Civ.

2—Véase: verb. *Albacea*, núm. 2.

3—Cuando el litigio pendiente tiene por objeto inmediato la propiedad del inmueble.

4—Véase: *Derecho de petición*, núm. 2.



5. **Personería**—El desconocimiento del carácter hereditario del hijo póstumo, por haber nacido dentro del término mínimo que fija la ley desde la fecha del matrimonio, no puede dictarse de oficio; solo los herederos del esposo tienen personería para solicitarlo.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 397, Ser. 3^a.

6. **Personería**—Los albaceas carecen de personería para entablar demandas á nombre de la testamentaria y deben ser condenados personalmente al pago de las costas de las que promuevan.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 177, Serie 3^a.

7. **Personería** —El damnificado por la violación de domicilio tiene personería para gestionar la indemnización, aun cuando no sea el propietario ni su representante legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

8—La madre natural en ejercicio de la patria potestad, tiene personería para gestionar y recibir la cuota alimenticia fijada para los menores.—Jur. Civ., tom. 1, página 311, Ser. 4^a.

9. **Personería** —Para que un miembro de una sociedad pueda representarla judicialmente en todo ó en parte, su personería debe resultar de actas ó reglamentos anteriores al acto que invoca como fuente de su derecho.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 4^a.

10. **Personería**—El director general de una construcción está obligado á asumir judicialmente la personería de

5.—Véase: verb. *De oficio*, núm. 1.

6.—Véase: verb. *Albacea*, núm. 5.

7.—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 5.

8.—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: *Madre natural*, núm. 2.

10 —Una empresa fué demandada por daños y perjuicios procedentes de un cuasi-delito: el administrador dijo que él no era el representante de la sociedad sino el que atendía á los servicios, pagos y demás actos



la empresa que representa mientras no justifique que existe otro representante legal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 79, Ser. 4^a.

11. **Personería**—El abogado ó procurador carecen de personería para apelar personalmente de la regulación de sus honorarios contenida en una sentencia inapelable.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 377, Ser. 4^a.

12. **Personería**—El tutor de los menores que por representación forma parte de una sociedad, carece de personería para intervenir en el juicio contra terceros si la sociedad tiene su representante legal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 394, Ser. 4^a.

13. **Personería**—El Juez recusado no puede resolver de administración. Cuando se contesta una demanda de esta naturaleza se ejecuta un acto de administración. Por otra parte, resultaba que la empresa no tenía en la República otro representante, lo que hacía más factible la intervención del director de la obra. Véase: *Acto de administración*, núm. 1.

11—Véase: verb. *Abogado*, núm. 3.

12—En virtud de una resolución anterior había quedado establecido que el tutor no era parte porque sus pupilos estaban representados por el representante de la sociedad promiscuamente con el Ministerio de menores. Despues falleció ese representante legal y denunciado el hecho se confirió traslado á todos los que formaban parte de la sociedad inclusive al tutor, porque el nombramiento debía hacerse por la mayoría de los socios sobrevivientes. Pendiente el traslado, la mayoría presentó un escrito nombrando el nuevo representante, quedando así de hecho sin razón de ser el traslado, pues su único objeto se había llenado. El tutor se presentó mucho tiempo despues diciendo de nulidad de ese nombramiento y de todo lo actuado con posterioridad, alegando no haber concurrido al nombramiento por haber estado ausente del asiento del Juzgado. Esta circunstancia no puede servirle de argumento, porque en primer lugar la ausencia prolongada constituye una negligencia de su parte, y porque además el nombramiento se había hecho de acuerdo con las estipulaciones del contrato, esto es, por la mayoría de los socios, tanto en cuanto al número de ellos como en cuanto á capitales.

13—De acuerdo con lo resuelto en otro caso. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Juez recusado*, núm. 1548.



sobre la personería del recusante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 320, Ser. 4ª.

Personería—Véase: *Abogado*, núms. 14 y 15—*Declaratoria de herederos*, núm. 1—*Acreedores*, núm. 1—*Nullidad de una sentencia*, núm. 1—*Escepción perentoria*, núm. 2—*Herencia*, núm. 2—*Incapacidad*, núm. 3—*Ministerio de menores*, núm. 2—*Acreedores hipotecarios*, número 1—*Acción pauliana*, núm. 1—*Albacea*, núm. 7—*Cuota alimenticia*, núm. 1—*Fallecimiento*, núm. 5.

Pesos fuertes—Véase: *Capellanía*, núm. 3—*Moneda especial*, núm. 1.

Pesos plata—Véase: *Capellanía*, núm. 3.

1. **Petición de herencia**—Al demandante por petición corresponde la prueba de la existencia de los bienes reclamados y la posesión que de ellos haya tomado el demandado.—Jur. Civ. tom. 2, pág. 210, Ser. 3ª.

2. **Petición de herencia**—La promoción de una demanda sobre petición de herencia, no paraliza la secuela de la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 50, Ser. 3ª.

3. **Petición de herencia**—Para que el derecho de petición de herencia sea imprescriptible, el poseedor debe carecer de título de adjudicación á nombre propio.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 111, Ser. 4ª.

Petición de herencia—Véase: *Embargo preventivo*, número 29.

Petición judicial—Véase: *Costas*, núm. 29.

Petitorio—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 6.

Planos—Véase: *Construcciones*, núm. 1.

1—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

3—Este es uno de los fallos más contrarios á la ley, á la justicia y á la equidad, que registran los anales judiciales. Véase: verb. *Heredero*, núm. 7.



1ª. Plazo—El estipulado en un boleto privado para hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad, solo puede contarse desde que el instrumento privado quede convertido en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, página 72, Ser. 3ª.

2. Plazo—El juicio sobre fijación de plazo para el cumplimiento de una obligación de dar, es ordinario.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 180, Ser. 4ª.

3. Plazo—Suspensivo, la fijación de un término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un contrato privado, no importa una condición resolutoria cuyo vencimiento deja sin efecto el contrato, sino un plazo suspendido dentro del cual no puede exigirse judicialmente su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 208, Ser. 4ª.

4. Plazo—El embargado á las resultas del juicio puede exigir la fijación judicial del plazo dentro del cual debe deducirse la acción.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 362, Serie 4ª.

Plazo—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 2—*Hipoteca*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núm. 3—*Embargo preventivo*, núm. 21—*Obligación de hacer*, núm. 5—*Obligación condicional*, núm. 3—*Obligación sin plazo*, núms. 1 y 2—*Obligación de hacer*, núm. 17—*Retroventa*, núm. 2.

Plus petitio—Véase: *Peritos*, núm. 1.

1ª. Poder—La escepción de falta de personería por carecer del poder necesario para deducir la acción, puede

1ª—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 9.

2—Véase: *Obligación de dar*, núm. 2.

3—Véase: verb. *Condición resolutoria*, núm. 1.

4—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 27.

1ª—Véase: *Escepción de falta de personería*, núm. 2.



ser opuesta contestando á la demanda.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 68, Ser. 3^a.

2^a. Poder—Es bastante el conferido para pedir la nulidad de un acto jurídico, para reclamar en el mismo juicio de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 109, Ser. 3^a.

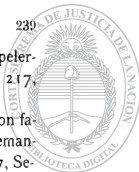
2^b. Poder—El conferido por el representante de una persona jurídica, no caduca por el cambio legal de la persona que otorgó el mandato.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 59, Ser. 4^a.

3. Poder—La facultad contenida en el poder para pedir

2^a—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 42.

2^b—Toda persona jurídica debe tener de acuerdo con la ley un representante legal. Sería contrario á derecho suponer que un mandato conferido por un representante saliente tuviera que ser ratificado por el entrante para sus efectos legales, pues esto importaría desconocer la validez del nombramiento anterior y perjudicaría las defensas que hiciera en pro de la institución. Los actos celebrados por un representante anterior surten todos sus efectos legales mientras no sean espresamente anulados ó revocados por la persona jurídica. Cuando un representante de una persona jurídica otorga un poder, no es ese representante quien lo otorga sino la persona jurídica por intermedio de éste, y por consiguiente la duración del poder conferido no depende de la voluntad del representante sino de la misma persona jurídica en cuyo nombre se procede. Las personas jurídicas son personas enteramente distintas de sus miembros—art. 39 del Cód. Civ.—y por consiguiente el cambio de representante de esa sociedad no innova en manera alguna el estado de la sociedad.

3—El auto de 1^a Inst. que fué revocado por la Cámara, decía que para que procediera la interpretación que se pretende sería menester que en el poder en cuestión se hubiese *consignado espresamente* la facultad de pedir que el deudor fuese compelido á *hacer cesión de bienes ó concurso civil* de acreedores; á lo que debe agregarse que las *espresiooes quiebra ó concurso*—que tenían el poder, son sinónimas;—pues el concurso no es sino la consecuencia de la declaratoria de quiebra. Que además, según la disposición contenida en el art. 1884, Cód. Civ., las facultades de un poder, deben interpretarse en sentido restrictivo, limitando su al-



la quiebra ó concurso del deudor, implica la de compelerlo á hacer cesión de bienes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 217, Ser. 4^a.

4^a. Poder—Para exigir la rendición de cuentas, con facultad de percibir, comprende virtualmente la de demandar por cobro de pesos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 157, Serie 4^a.

4^b. Poder—El poder para cobrar del deudor no importa la de demandarlo judicialmente y en consecuencia procede la escepción de falta de personería.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 398, Ser. 4^a.

Poder.—Véase: *Escepción de falta de personería*, número 1—*Asuntos judiciales*, núm. 1—*Mandato*, núm. 9—*Procuraciones judiciales*, núm. 2—*Venia*, núm. 2.

Poder administrador—Véase: *Contencioso-administrativo*, núm. 1.

1. Poder bastante—Procede la caución de *rato et grato* para las gestiones sin poder bastante, debiendo fijarse un

cance á lo que *espresamente* hubiese consignado el mandante. La Cámara revocó este auto diciendo, que con arreglo á los términos del poder el mandante estaba facultado para pedir el concurso del deudor. Nos parece que la distinción que hacía el Juez de 1^a Inst. era equivocada, porque la palabra concurso comprende, tanto á los concursos civiles como á las quiebras. Así Escrich lo define diciendo, que es el juicio promovido, bien por el deudor ó bien por los acreedores sobre pago de deudas. Y más adelante agrega: «cuando el procedimiento verse sobre deudas de quien tenga la calidad de comerciante, se califica con el nombre de quiebra.» Véase verb. *Concurso de acreedores*—Edición de cuatro tomos.

4^a—Porque lógicamente la facultad para demandar por rendición de cuentas y la de percibir su importe implica la de demandar por el cobro de lo percibido en virtud del mandato que da nacimiento á dichas acciones.

4^b—Véase: *Escepción de falta de personería*, núm. 8.

1—Véase: verb. *Caución*, núm. 2.



término para la presentación del mandato en forma.—
Civ., tom. 5, pág. 398, Ser. 4ª.

1. **Poder especial**—Para el arreglo y liquidación de una testamentaria y sus incidentes, no es bastante para mandar á un tercero por rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 68, Ser. 3ª.

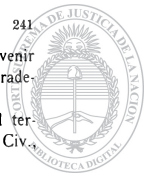
2. **Poder especial**—Para el arreglo y división de la herencia; no basta para intervenir en las demandas que se inicien contra la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 4, página 255, Ser. 4ª.

3. **Poder especial**—El poder especial para otorgar escritura de venta, sin determinar especialmente la persona á la cual debe transferirse el inmueble, se entiende conferido para otorgarla á voluntad del mandatario.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 45, Ser. 4ª.

1—El apoderado se presentó demandando por rendición de cuentas á nombre de los herederos, en virtud de un poder conferido para proceder al arreglo y liquidación de la testamentaria. El poder especial para ciertos actos debe limitarse á los mismos; y no puede estenderse á otros análogos aunque éstos pudieran considerarse como consecuencia natural de los encargados por el mandante—art. 1884 del Cód. Civ.—Por otra parte, el poder especial para cobrar deudas no autoriza para demanda á los deudores—art. 1888.—De manera que aplicando el criterio restrictivo que ha inspirado al legislador al limitar las facultades de los mandatarios especiales, y teniendo en consideración que el juicio de rendición de cuentas no puede considerarse como un incidente del juicio principal, resulta que el sumario interpreta correctamente la ley.

2—En 1ª Inst. se dijo que el poder era bastante, porque siendo el mandato conferido para iniciar y liquidar hasta su final terminación la testamentaria, y siendo la demanda entablada por un pretendido acreedor por arrendamiento, debía ser considerada como un incidente del juicio sucesorio. La Cámara revocó esta providencia fundándose en que el poder estaba limitado al arreglo y liquidación de la testamentaria y consiguientemente caía bajo la sanción del art. 1884 del Código Civil.

3—Véase: verb. *Mandatario*, núm. 12.



4. **Poder especial**—El poder especial para intervenir en determinado asunto, no basta para iniciar contrademanda.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 126, Ser. 4^a.

5. **Poder especial**—El mandato por poder especial termina con el asunto para que fué otorgado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 41, Ser. 4^a.

6. **Poder especial**—Para formar una testamentaria, no basta para iniciar la de un heredero del causante fallecido con posterioridad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 7, Serie 4^a.

7. **Poder especial**—Para liquidar una testamentaria con facultad de demandar á terceros, basta para exigir rendición de cuentas á los que en ella han intervenido con anterioridad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 33, Ser. 4^a.

4—El espíritu del art. 1884 del Cód. Civ., según la jurisprudencia establecida por la Cámara—tom. 2º, pág. 62, Ser. 1ª—es que el poder para un asunto determinado autoriza al mandatario á hacer todos los actos jurídicos que por la naturaleza del asunto se encuentren virtualmente comprendidos en él como medio de ejecución ó como consecuencia necesaria del mandato. Pero la interpretación ó alcance que la resolución citada da al art. 1884 del Cód. Civ., es inaplicable porque la reconvencción no es una escepción ni un acto que pueda considerarse virtualmente comprendido en el asunto que motiva un juicio. Se trata de una acción nueva, y para ejercitarla, debe exhibirse poder en forma, desde que el presentado era especial para intervenir en la demanda instaurada. Por consiguiente, en el caso presente rige el principio general establecido en el art. 1884 del Cód. Civ.

5—Terminado un juicio de interdicto por sentencia definitiva se presentó el apoderado de una de las partes solicitando se le diese testimonio en forma de documentos constantes en autos. No se le hizo lugar porque el apoderado había cesado en el mandato conferido, por fenecimiento del asunto para el que le fué otorgado—art. 1960 del Código Civil—y porque «aun en el supuesto de que continuase en el ejercicio del poder, los documentos cuyo testimonio se solicitan, no pertenecen á su mandante sino á la contraparte que los exhibió para instruir con ellos su demanda.»



1. Poder judicial—Tiene derecho y está obligado á entender en las acusaciones, ya civiles ó criminales, que

1—La responsabilidad civil del empleado que causa perjuicio ultrapasando sus facultades, es una conquista de nuestras leyes, que no puede ser amenguada á pretexto de intromisión de un poder en los actos de otro. El poder es uno, independientemente en su esfera de acción demarcada por nuestras leyes fundamentales, y el abuso de las facultades es el hecho del hombre que lo hace pasible de responsabilidad. Ni hay estralimitación cuando la justicia, á efectos relacionados únicamente con el interés privado, encuentra que el funcionario público se ha excedido, ni una torcida interpretación del alcance de la independencia de los poderes, puede dejar confiados á su propia suerte la vida, el honor y la fortuna de los habitantes de nuestro suelo. Y menos motivos existen de temer avances respecto del poder judicial, que circunscrito á dictar resoluciones que solo son aplicables al caso sometido, sería difícil que pudiera obstaculizar la acción de los demás poderes. Por lo demás, el poder judicial es el poder moderador en nuestro mecanismo de Gobierno, y desde entonces, nada más aceptable que él sea el encargado de dirimir las contiendas entre los demás poderes y los habitantes del estado. Dice nuestro Código, en su art. 1112: «Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, quedan comprendidos en las disposiciones de este título», es decir, de aquel que trata «de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos.» Con estas consideraciones se contesta al argumento que se hace diciendo que la responsabilidad del funcionario ha de provenir solamente del delito cometido por él, cuando se ocupa para imponer las responsabilidades respectivas, hasta de las obligaciones derivadas de los hechos ilícitos que no son delitos, y cuando el art. 1109 que declara obligado á reparar perjuicios al que los cause por haber ejecutado un hecho que ocasione daño por culpa ó negligencia, está comprendido precisamente en este título. Las órdenes superiores no pueden llegar hasta la violación de los preceptos constitucionales. Esto es felizmente un axioma en un pueblo libre como el nuestro, y el mismo demandado, en las posiciones, preguntado que si es cierto que como empleado de Policía sabe que no deben obediencia á su superior, sino cuando éste ordena dentro del límite de sus atribuciones propias, y en ningún caso cuando el acto ordenado ó entraña un crimen ó un delito calificado por la ley, ha condesado que es cierto.



se inicien contra empleados públicos, aun por actos que hayan merecido la aprobación de sus superiores, sin que ello importe obstaculizar la acción de otros poderes ni estralimitación de facultades que le son propias.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3ª.

Poder judicial.—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 15.

1ª. Poderes locales—Tienen jurisdicción para reglamentar el tránsito de los ferrocarriles en la parte recorrida dentro del Municipio, no obstante depender aquellos del Poder Federal, imponiéndoles las penas de que sean pasibles por la inobservancia de ordenanzas municipales ó edictos policiales.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 410, Ser. 4ª.

Poderdante—Véase: *Actos judiciales*, núm. 1—*Apoderado*, núm. 4—*Procuraciones judiciales*, núms. 1 y 2.

Policía—Véase: *Acto ilícito*, núm. 5.

1ª. Porción—La mayor ó menor parte de la herencia que los herederos todos mayores se adjudiquen en la partición estrajudicial, no repugna ni es contraria á lo que la ley dispone sobre porción de los herederos forzosos, pues las diferencias importan una renuncia permitida por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3ª.

Poseedor—Véase: *Prescripción á nombre propio*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 3—*Aluvión*, núm. 1—*Nulidad de un título*, núm. 1—*Posesión*, núm. 5, 8 y 15—*Reivindicación*, núms. 4 y 9—*Costas*, núm. 34—*Evicción*, núm. 2—*Escepción de defecto legal*, núm. 12—*Petición de herencia*, núm. 3—*Posesión cuarentenaria*, núm. 1.

1ª. Poseedor clandestino—Los derechos de dominio que

1ª—Pueden verse los fundamentos de la nota al verb. *Municipalidad*, núm. 11.

1ª—Véase: verb. *Herederos forzosos*, núm. 1.

1ª—El actor se presentó diciendo que se hallaba en quieta y pacífica posesión de su casa por haberla heredado, y se había introducido el

el poseedor clandestino pueda invocar sobre el inmueble, debe hacerlos valer en juicio ordinario.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 58, Ser. 3ª.

1. Posesión.— Para que el interdicto prospere, basta

demandado violentamente sin permiso suyo y contra su voluntad ocupándola diciéndose dueño, que la casa la había tenido alquilada á un tercero quien tuvo que desocuparla por tener que edificar, y habiendo ido á verla el actor hacía como un mes la encontró habitada por el demandado. Este espuso, en el comparendo, que desconocía por completo en el actor el carácter de propietario que invocaba, y que su madre había otorgado testamento á favor del actor, el que carecía de valor, pues le desconocía el carácter de hijo que tenía, como lo había comprobado ante Juez competente. Dijo además que desconocía la posesión invocada por el actor, pues si había ocupado la casa fué en calidad de mandatario, mandato que ella le había conferido verbalmente cuando tuvo que ausentarse para el campo, y que finalmente, si había ocupado la casa lo hizo en su carácter de propietario. El actor dijo que estos hechos eran inexactos. El interdicto deducido era el de recobrar la posesión. Para que este sea procedente se requiere la comprobación de los extremos establecidos por el art. 581 del Cód. de Proc. En esta clase de juicios se trata tan solo de discutir la *tenencia* de la cosa, no el *dominio*, cuestión puramente de hecho, pues la de derecho debe ventilarse en una forma que no puede ser la del juicio sumarísimo del interdicto. El demandado reconoció que el actor había ocupado la casa, alegando que lo había hecho en su calidad de mandatario. Confesada esta posesión, la excepción alegada que esa ocupación era á título de mandatario, debió justificarse por el que la aducía, de acuerdo con el antiguo aforismo *reus in excipiendo fit actor*. No habiendo el demandado comprobado este extremo, y habiendo el actor comprobado su posesión, se hizo lugar al interdicto de recobrar. Se alegó además, que el actor no podía intentar el interdicto porque habiendo heredado el inmueble por testamento debió pedir la posesión de la herencia—art. 3363—lo que no había hecho. A esto se contesta diciendo que como se ha dicho ya en un interdicto, no se discute el dominio de la cosa sino la tenencia, pues como lo enseñan Manresa y Reus, tom. 3º, pág. 617, corresponde el interdicto de recobrar á todo el que se halla en posesión ó tenencia de la cosa, lo mismo al legítimo poseedor que al mero detentador, y agrega: «siendo el despojo un atentado contra el orden público, debe suprimirse instantáneamente sin atender al título con que posea el despojado.»

1.—Véase la nota del verb. *Poseedor clandestino*, núm. 1.





que se justifique la posesión; el derecho á poseer no puede ser juzgado en este juicio. —Jur. Civ., tom. 2, pág. 76, Ser. 3^a.

2. Posesión.—El hecho de no estar incluido un bien en la hijuela del que produce la información, no forma prueba en contra de la posesión que pudo tener éste y su causante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 135, Ser. 3^a.

3. Posesión.—La escritura pública como título trasla-

2—Véase: verb. *Hijuela*, núm. 1.

3—El actor se presentó al Juzgado acompañando los títulos de propiedad correspondientes á una casa de su pertenencia pidiendo se le pusiera en su posesión, pues el ocupante de ella se negaba á reconocerle en su calidad de propietario por no haberle sido acordada la posesión formal del inmueble. La demanda se entabló contra el ocupante y contra el vendedor. Convocadas las partes á juicio verbal y notificadas de esta resolución, el vendedor y el ocupante, se opusieron á la celebración del comparendo, deduciendo el vendedor la escepción de litispendencia, por haber interpuesto demanda de nulidad de la escritura de compraventa acompañada por el demandante y alegando por otra parte, que pendiente el juicio petitorio, no podía tramitarse el posesorio, correspondiendo solamente al Juez del petitorio tomar medidas provisionales relativas á la guarda de la cosa litigiosa, según el art. 2483. El ocupante se opuso también al comparendo alegando, que el objeto de la demanda, con respecto á él, era obtener el desalojo de la casa que ocupaba como locatario, y en seguida adquirir la posesión, pero como acreedor de las mejoras que había hecho sobre el terreno había promovido demanda de retener hasta que se le pagasen esas mejoras; por cuyo motivo invocaba también la litispendencia. Desechadas estas pretensiones y realizado el juicio verbal, el Juez pronunció sentencia, rechazando el interdicto sin perjuicio de mejor derecho. Ahora bien, exige nuestro Código de Proc., art. 564, como requisitos indispensables para la procedencia del interdicto que nos ocupa, los siguientes estremos: 1º que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho, y 2º que nadie posea á título de dueño ó usufructuario los bienes cuya posesión se pide. Este precepto concuerda con el art. 326 de la ley de Procedimientos de la Justicia Federal y con el 624 de la ley de Enjuiciamiento Española. Toda la cuestión se reducía, pues, á averiguar si concurrían los dos requisitos antes espuestos. Si bien el actor pre-



tivo del dominio no basta para exigirla: debe gestionarse previamente la entrega de la cosa por medio de la tradición.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 180, Ser. 3ª.

sentó un título bastante, resultaba de autos que el demandado poseía el inmueble á título de dominio y que, por consiguiente, faltaba el segundo requisito del art. 364 citado. Para demostrar la exactitud de esta conclusión, basta establecer la verdadera inteligencia que, resolviendo y ocupándose de casos análogos, han dado los Tribunales y los autores á la disposición citada. La Suprema Corte de Justicia Nacional en el caso que se registra al tom. 21, pág. 169, Ser. 2ª de sus fallos, adoptando la opinión de Manresa y Reus, tom. 3º, pág. 590 y la de Caravantes, tom. 3º, pág. 240, ha dicho: «no basta un título cualquiera que acredite el dominio, sino que ha de ser suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho.» Solo dos casos encontramos, en que el Juez, informado de la verdad confiera la posesión al que tenga derecho á ella sumariamente. Hoy no basta presentar cualquier título traslativo de dominio; ha de ser precisamente el de heredero ó sucesor del finado para que se de lugar á este interdicto. En las ventas, donaciones entre vivos, permutas, etc., el que transfiere el dominio está obligado á entregar la cosa al que lo adquiere, y mientras esa entrega no se verifique ya sea natural, ya simbólicamente, no queda consumado el contrato. Hecha la entrega entra el adquirente en posesión de la cosa, y de consiguiente es innecesario el interdicto de adquirir. Y si el vendedor se resiste á la entrega, que es precisamente lo que ocurría en el caso que nos ocupa, podrá ser demandado por el comprador en juicio ordinario, para el cumplimiento de la obligación, pero nunca podrá éste utilizar el interdicto, que en tal caso se dirige contra el que posee á título de dueño, lo cual está prohibido por la ley. En igual sentido resolvió también la Suprema Corte el caso que se registra en el tomo 13, pág. 19, Ser. 2ª. Llerena, en su importante obra «Concordancias y Comentarios del Código Civil Argentino», tom. 4º, pág. 133, ocupándose del art. 2468 del Cód. Civ., según el cual no tiene sino un derecho á la posesión, no puede, en caso de oposición, tomar la posesión de la cosa; debe demandarla por las vías legales. Despues de invocar los fallos antes citados, manifiesta su opinión sobre el punto en los siguientes términos: «Tenemos entonces que el que solo tiene un título á la posesión, sin que se haya cumplido con lo dispuesto en el art. 577 del Cód. Civ., es decir, sin que se haya hecho la tradición, no puede entablar acciones posesorias ni contra el mismo vendedor ni contra terceros poseedores.» En el presente caso concu-



4. **Posesión**—Ante dos títulos al dominio que proceden de un mismo origen, la propiedad corresponde al que justifique haber tenido primero la posesión.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 361, Ser. 3^a.

5^a. **Posesión**—La oposición á una posesión invocando mejor derecho, importa una tercería escluyente, y es de competencia del Juzgado que conoce en el principal.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 240, Ser. 3^a.

5^b. **Posesión**—El locador está obligado á dar al locatario la posesión del predio arrendado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 146, Ser. 4^a.

6. **Posesión**—Justificada la falta de posesión del demandado por jactancia, procede la fijación del término que la ley establece para que deduzca las acciones que convengan á su derecho bajo apercibimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 261, Ser. 3^a.

7. **Posesión**—Si bien el comprador que no ha tenido la
rren todas las circunstancias que hacen de estricta aplicación la doctrina de los Tribunales y de los autores, debiendo tenerse además en cuenta, que mientras el vendedor no hace entrega de la cosa, conserva sobre ella el dominio.

4—Art. 2791 del Cód. Civ.

5^a—Después de fallado un pleito sobre una capellanía, al tiempo de ejecutarse la sentencia y dársele la posesión de la finca capellanía al comprador se presentó un tercero alegando mejor derecho y oponiéndose á que la posesión se otorgara. Según la opinión del ilustrado Dr. Cor. tés, Fiscal de la Cámara, esa oposición fundada en un derecho diverso del que podía corresponder á la parte que había salido triunfante, importa una verdadera tercería escluyente que debe ventilarse en los mismos autos, por encontrarse allí todos los antecedentes del asunto, y porque no es permitido dividir el conocimiento de una causa.

5^b—Art. 1514 del Cód. Civ.

6—Véase: verb. *Jactancia*, núm. 2.

7—El actor se presentó diciendo que según lo establecía la escritura pública que acompañaba, había comprado la cosa que allí se determinaba, habiendo la persona que se la vendió á él adquirídola por compra



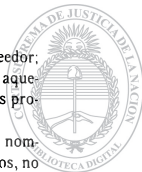
posesión, no puede ejercer derechos reivindicatorios, la

que hizo á su vez á una testamentaria, y que habiendo querido ejercer actos de dominio sobre la casa, el ocupante se había opuesto alegando derechos de dueño. Decía además el actor, que venía á entablar demanda reivindicatoria fundado en el art. 2758 del Cód. Civ., haciendo presente que no habiendo tomado posesión de aquélla no obstante habersele escriturado, con el objeto de evitar una discusión á que podría esto dar lugar, prolongando el juicio en beneficio exclusivo de la demanda, ha obtenido de la sucesión vendedora una cesión de su derecho para reivindicar cuya constancia acompaña. La demanda se contestó pidiendo el rechazo y esponiendo á su vez: que si bien la testamentaria vendedora otorgó la escritura de venta á favor del comprador, invocando por único título una información tendente á establecer que desde muchos años atrás los herederos de aquél habían estado en posesión de la finca de que se trata, tal hecho nada podrá probar en favor de la testamentaria porque los herederos que han poseído siempre fueron la madre de la demandante y ella misma, que á pesar de ser herederos en dicha sucesión jamás poseyeron á su nombre sino á nombre propio y que la finca jamás fué de la testamentaria vendedora ni de sus antecesores. Concluye diciendo, que como según los términos del art. 2758 del Cód. Civ. la acción reivindicatoria nace del dominio y corresponde al propietario que ha perdido la posesión, en ningún caso podrá admitirse ni al actor ni á la testamentaria porque ni aquél ni ésta tuvieron jamás la posesión de la finca. El art. 2758 del Cód. Civ. establece que la acción de reivindicación es una acción real que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella. Tal es, bien caracterizada la acción promovida. El demandante temeroso, según lo espresó, de que la demanda, fundada en la circunstancia de no haber tenido nunca la posesión, promoviese cuestiones que alargasen la contienda indefinidamente, ocurrió á la sucesión vendedora que la había tenido por haber sido dueña de la cosa en cuestión, con el objeto de que le cediese el derecho de que él carecía por no habersele hecho la tradición que preceptúa la ley. Esta cesión que la obtuvo fué impugnada por la demanda y como en ella se fundaba el actor para demandar, es conveniente dejar establecido si las objeciones formuladas son procedentes y si la invalidan ó no. Desde luego, puede afirmarse que toda argumentación sobre este punto, tiene por base un error evidente sufrido al expedirse la copia á que ya se ha aludido. Del contesto de ella se desprende, sin



acción es precedente como cesionario de los derechos del vendedor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 275, Ser. 3ª.

que un asomo de duda pueda presentarse, que los representantes de la sucesión han cedido los derechos que ella tuvo para entablar la demanda de reivindicación, y si bien en cierta parte de la copia se hace uso del vocablo vendidos, ello, como queda dicho, se debe á un error manifiesto, pues á renglón seguido se demuestra cuál fué la verdadera intención de las partes, y tan es así que el mismo Secretario que cometió el error, el doctor Gamboa, lo salva al final de su certificado, manifestando que se convino por los representantes de la sucesión en ceder el derecho de reivindicar la cosa contra la ocupante, no habiéndose hablado absolutamente de venta de derechos. La demandada sostuvo, sin embargo, que no había tal cesión, que es un convenio de venta y considerándolo así ataca á ésta fundada en las causas ya enumeradas en los fundamentos espuestos y ahí está su falsa posición. Podría acordársele que las causas por que ataca lo que cree convenio de venta, sean aducibles también en contra de la cesión, por aquello de que en ciertos casos la cesión se rige por el título de compraventa, aunque en el presente no sucede así, porque no habiéndose estipulado precio en la cesión debe considerarse gratuita y entonces es el título de la donación el que debe tenerse presente. Pero de todas maneras nunca cambiaría la situación de la ocupante dado que dichas causas en realidad de verdad no existen ó no puede dárseles la importancia que se les atribuye. Y ello porque la cesión tal como se ha llevado á efecto, constituye una escritura pública en su valor legal inmovible en tanto no sea anulada, pues los actos anulables se reputan válidos mientras su nulidad no haya sido declarada—art. 1046 del Cód. Civ.—y no puede desconocerse que en esa categoría se encontraría en todo caso el de que se trata. Se decía que los representantes no tenían facultad para enagenar—léase para ceder;—se decía que no pudieron vender privadamente los bienes de un juicio en que hay menores y en que los mayores no han podido elegir sus representantes etc., pero todo esto era exigir una comprobación que no se ha producido y debe suponerse que las formalidades se han cumplido, tanto más cuando que existe una resolución judicial que la sanciona. Pero sea de ello lo que fuere y dado que el demandado tuviera personería para atacar el convenio celebrado entre primer comprador y sus cedentes, lo que no puede negarse es que aun en el supuesto de que existan herederos mayores y aun menores sin representación en el juicio testamentario que no hayan concurrido á la cesión; lo que no puede sostenerse, es que ésta no produce



8. **Posesión**.—La presentación de los títulos de poseedor; supone que la posesión arranca desde la fecha de aquellos sin solución de continuidad entre los diferentes propietarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 405, Ser. 3ª.

9. **Posesión**.—El reconocimiento de la posesión á nombre del causante, hecho en los autos testamentarios, no puede ser invalidado por prueba testimonial tendente á justificar que era á nombre propio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 275, Ser. 3ª.

10. **Posesión**.—Para la procedencia del interdicto, ya sea de retener ó de recobrar, es indispensable justificar que el que deduce la acción tiene ó ha tenido la posesión.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 175, Ser. 3ª.

11. **Posesión**.—Procede el interdicto de recobrar siempre que se justifica la posesión y el despojo violento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 426, Ser. 3ª.

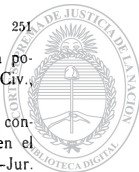
el efecto que el adquirente tuvo en vista, porque importaría desconocer la disposición del art. 3450 del Cód. Civ., según la cual cada heredero puede reivindicar contra los terceros detentadores los inmuebles de la herencia, y como el comprador no hacía sino ésto desembarazando á la testamentaria de este deber, es consecuencia lógica que no es necesaria la concurrencia de todos los herederos al acto. Y si á esto se agrega que los que concurrieron invocando poderes bastantes los tenían realmente, puesto que fueron aceptados y lo contrario no se ha probado, forzoso es convenir en que aun cuando declara el mandante que no ha tenido la posesión de la casa que trata de reivindicar, está habilitado para deducir la acción instaurada en virtud de la cesión de que se ha hablado.

8—Arts. 4003 y 4005 del Cód. Civ.

9—La prueba testimonial es la más deleznable y la más desautorizada, por ser la más peligrosa y la que mayores dudas entraña, y no puede contrarrestar la que resulta de la mejor de las pruebas que reconoce el derecho; la prueba de las pruebas, la *probatio probatissimo* de que nos habla la ley romana.

10—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 2.

11—Véase verb. *Despojo*, núm. 1.



12. **Posesión**—La demanda sobre la entrega de la posesión solo puede entenderse con el poseedor.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 36, Ser. 4^a.

13. **Posesión**—Procede el interdicto de adquirir contra el detentador que reconociendo la propiedad en el actor, escusa su posesión en un error de hecho.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 271, Ser. 4^a.

14^a. **Posesión**—El propietario puede tomar la de la cosa locada si el locatario hace de ella abandono.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 35, Ser. 4^a.

14^b. **Posesión**—La demanda sobre propiedad á título de heredero, reconociendo en el contrario la posesión, hace prueba plena para rechazar la división de un condominio que no se invocó por el causante en la primera acción.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 157, Ser. 4^a.

15. **Posesión**—Al que reconoce en el demandado la posesión cualquiera que sea el título que invoque le corresponde la prueba; al poseedor le basta con ese reconocimiento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 157, Ser. 4^a.

16. **Posesión**—Es Juez competente para demandar la posesión de un inmueble el del domicilio del demandado, aun cuando el bien se encuentre en distinta jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 127, Ser. 4^a.

17. **Posesión**—Es requisito indispensable para la procedencia de la reivindicación que el que acciona haya te-

12—Se entalló la demanda contra el poseedor sin designar el nombre de éste. Tratándose de obtener la posesión debe entenderse que es contra el que actualmente posee.

13—Véase: verb. *Interdicto de adquirir*, núm. 2.

14^a—Art. 1564 del Cód. Civ.

14^b—Véase verb. *Condominio*, núm. 9.

16—Véase: *Juez competente*, núm. 2.

17—Véase el núm. 23 y *Acción reivindicatoria*, núm. 2.



nido la posesión del bien materia del litigio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 214, Ser. 4ª.

18. **Posesión**—Es improcedente la acción reivindicatoria si el demandante no justifica haber tenido la posesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 415, Ser. 4ª.

19.—**Posesión**—El título de fecha anterior, prima sobre los posteriores si se fija que la posesión empezó en la misma fecha.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 415, Ser. 4ª.

20. **Posesión**—Es improcedente el interdicto de adquirir la posesión si el poseedor tiene por sentencias ejecutoriadas reconocido el derecho de retención, en virtud de las mejoras hechas en la cosa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 140, Ser. 4ª.

21. **Posesión**—Justificada la posesión y su pérdida clandestina, el interdicto de recobrar la posesión debe prosperar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 217, Ser. 4ª.

22. **Posesión**—Es requisito ineludible para que proceda el interdicto de retener que el que lo intenta tenga la posesión.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 259, Ser. 4ª.

23. **Posesión**—Procede la reivindicación siempre que se justifica haber tenido título y posesión anterior á la del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4ª.

Posesión—Véase: *Administrador*, núm. 3—*Albacea*, número 1—*Aluvión*, núm. 2—*Arrendamiento*, núm. 2—*Auto judicial*, núm. 1—*Bienes embargados*, núm. 2—*Capellanía*, núm. 6—*Cesión de derechos hereditarios*, número 1—*Cosa juzgada*, núm. 6—*Derecho de retención*, núms. 1 y siguientes—*Edificación*, núm. 1—*Esección de*

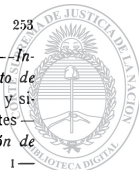
18—Véase: *Acción reivindicatoria*, núm. 3.

20—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 4.

21—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 14.

22—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 5.

23—Arts. 2758 y 2772 del Cód. Civ.



prescripción, núm. 3—*Herederos mayores*, núm. 3—*Interdicto de adquirir*, núms. 1 y siguientes—*Interdicto de despojo*, núm. 1—*Interdicto de obra nueva*, núms. 1 y siguientes—*Interdicto de recobrar*, núms. 1 y siguientes—*Interdicto de retener*, núms. 1 y siguientes—*Petición de herencia*, núm. 1—*Prescripción de diez años*, núm. 1—*Reivindicación*, núms. 3, 5, 10, 12, 17, 18, 19, 20 y 21.

Posesión á nombre de otro—Véase: *Excepción de prescripción*, núm. 3.

Posesión á nombre propio—Véase: *Prescripción á nombre propio*, núm. 1 y 2—*Prescripción treintenaria*, núm. 2—*Posesión cuarentenaria*, núm. 1—*Administrador*, núm. 3.

Posesión civil—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 3.

1ª. Posesión al comprador—El vendedor está obligado á dar al comprador la posesión del inmueble materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 40, Ser. 4ª.

1ª. Posesión en comunidad—La indivisión no importa posesión en comunidad de los bienes testamentarios, siempre que los albaceas ó representantes de la testamentaria reconozcan poseer y obren á nombre del adquirente ó cesionario de los herederos y no de éstos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 342, Ser. 4ª.

Posesión común—Véase: *Indivisión*, núm. 2.

1ª. Posesión cuarentenaria—Justificada la posesión cuarentenaria á título propio, debe declararse que el poseedor ha adquirido la propiedad.—Jur. Civ., tom. 6, página 398, Ser. 4ª.

1ª. Posesión cuarentenaria—Justificada, debe aprobarse

1ª—Art. 1409 del Cód. Civ.

1ª—Véase: *Indivisión*, núm. 1.

1ª—Art. 4015 del Cód. Civ.

1ª—Véase nota precedente.



la información supletoria del título.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 135, Ser. 3^a.

Posesión del deudor—Véase: *Embargo*, núm. 6.

1. **Posesión de estado**—A la madre que niega la filiación, corresponde la prueba de que la reclamante solo era adoptada y que la posesión de estado de hija legítima, debidamente justificada, solo respondía á un propósito caritativo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 79, Ser. 3^a.

2. **Posesión de estado**—Justificada la posesión de estado, procede la declaración de filiación natural.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 229, Ser. 3^a.

3. **Posesión de estado**—Tratándose de probar la posesión de estado, para declarar la filiación natural, no basta que los testigos declaren el reconocimiento hecho en su presencia, se requiere que determinen los hechos en virtud de los cuales se produjo, las personas presentes; y todos los detalles ó circunstancias que puedan demostrar al Juzgado la ciencia y conciencia de la declaración.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 4^a.

4. **Posesión de estado**—Justificada, debe declararse la filiación aun cuando el padre natural haya omitido hacer tal reconocimiento en el testamento.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 347, Ser. 4^a.

5. **Posesión de estado**—La prueba de la posesión de estado, para declarar la filiación natural, despues de la muerte del padre, debe ser clara y concluyente; no basta la sola confesión estrajudicial del causante si fué hecha

1—Véase: verb. *Filiación legítima*, núm. 3.

2—Véase: *Filiación natural*, núm. 11.

3—Véase: *Filiación natural*, núm. 14.

4—Véase: *Filiación natural*, núm. 18.

5—Véase: *Filiación natural*, núm. 17.



incidentalmente y sin propósito determinado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 121, Ser. 4^a.

Posesión de estado—Véase: *Filiación natural*, núms. 5, 6, 7 y 13.

1^a. **Posesión de la herencia**—Los herederos más próximos, deben obtener la posesión de la herencia con preferencia á los lejanos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 24, Serie 4^a.

1^b. **Posesión judicial**—Corresponde al Juez que ha ordenado la posesión y que entiende en el juicio testamentario, conocer en la acción que inicie el que se considere agraviado por esa orden.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 62, Serie 3^a.

2. **Posesión judicial**—No debe hacerse lugar á la fundada en una escritura declarada nula.—Jur. Civ., tom. 5, página 71, Ser. 3^a.

1^a—Véase: *Heredero*, núm. 5.

1^b—Porque la oposición en este caso es una consecuencia del auto del Juez que manda dar la posesión.

2—El autor se presentó diciendo que despues de haber vencido á su contrario en un juicio sobre jactancia por haberse dicho éste propietario de un terreno que á él le pertenecía, y después de reconocérsele sus derechos posesorios y de dominio, valiéndose de una escritura cuyo desglose se había pedido indebidamente, había comparecido al Juzgado y ocultando los antecedentes del asunto, había obtenido que se le pusiera en posesión del mismo terreno, por lo que venía á solicitar se dejara sin efecto esta orden. El Juez así lo resolvió, apelando el demandado sin haber espuesto las razones que demostraran que la resolución recurrida no era arreglada á derecho. Ahora bien, en un segundo espediente agregado constaba efectivamente haberse declarado caducado el derecho pretendido por el demandado sobre el terreno en cuestión, siendo confirmada esta sentencia por la Cámara. En ese mismo espediente y en una sentencia ejecutoriada se demostró que el actual actor había probado concluyentemente su posesión sobre el terreno objeto del juicio. El título del pretendido dueño no tiene valor por cuanto no dedujo en tiempo su acción cuando fué demandado de jactancia.



3. **Posesión judicial**—Justificada la posesión judicial del inmueble no puede considerarse perdida porque otro la haya tomado por su sola voluntad y sin juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 361, Ser. 3ª.

4. **Posesión judicial**—Ordenada en el juicio reivindicatorio debe darse por el Juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 132, Ser. 3ª.

5. **Posesión judicial**—Justificado el dominio por escritura pública, corresponde se decrete la posesión judicial sin perjuicio de terceros.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 347, Ser. 4ª.

6. **Posesión judicial**—Al ordenarse la posesión de bie-

3ª—Solo se dijo que el proeeder tenía en su favor la diligencia judicial que acreditaba haber sido puesto en posesión de la cosa, sin que la parte contraria hubiese presentado otro signo análogo tan inequívoco como enérgico en prueba de su posesión. Así el poseedor debe ser tenido como tal, mientras su contraparte no comprueba que esa posesión judicial no está contrarrestada por otras pruebas concluyentes como aquella.

4—Véase: verb. *Juicio reivindicatorio*, núm. 1.

5—Un comprador con pacto de retroventa se presentó diciendo que había adquirido un inmueble sometido á ese pacto por el término de un año según lo acreditaban las escrituras que acompañaba; y habiendo vencido el plazo sin que se le devolviese el precio, venía á pedir se le diera la posesión de la cosa, declarando al mismo tiempo que los terrenos le correspondían en absoluta propiedad y dominio. El demandado no contestó, y recibida la causa á prueba no se produjo ninguna. Se resolvió que el actor usaba de un derecho perfecto al pedir la posesión, porque no habiéndose alegado ni probado que el pacto á que se hallaba sujeta la escritura hubiese sido modificado ni ampliado por las partes, debía tenerse como firme y subsistente. Las convenciones forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma—art. 1197 del Cód.—Y no habiendo el vendedor cumplido con la obligación que le impone el art. 1409, el comprador está en su perfecto derecho al pedir la posesión judicial.

6—La parte solicitó se ampliara un exhorto anteriormente librado, ordenando se hiciese efectiva la diligencia de posesión que se había



nes raíces, fuera de la jurisdicción del Juzgado, no puede hacerse en forma que se desconozcan derechos de terceros que no fueron parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 186, Ser. 4^a.

7. Posesión judicial—No procede la de la herencia; aun-que exista testamento, sin el pago previo del impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 15, Ser. 4^a.

encomendado, aún cuando hubiese oposición de terceros, sea cual fue-se el derecho que alegaren, salvando el derecho que ellos pretendieran para que lo ejercitasen como vieren convenirles, pues lo contrario im-portaría revisión de sentencias de los tribunales que fallaron ese asunto, declarando el área de que se trataba, del dominio privado. El Juez proveyó de conformidad, y la Cámara revocó el auto fundándose en que la ampliación había sido reclamada en mira de la resistencia que pudiese producirse por la corporación municipal de la capital de la Pro-vincia al cumplimiento de la diligencia en cuestión. Que la Municipa-lidad de La Plata no era parte en el juicio ni había intervenido en nin-guna de las actuaciones. Que bastaba consignar este antecedente para hacer palpable la improcedencia de la orden reclamada. La Municipa-lidad de La Plata era un tercero cuyos derechos posesorios, si hubiera de oponerlos, no habían sido materia de controversia en ese juicio, en cuyo caso sus resultantes, aún cuando revistieran el carácter de ejecu-torias, no podían perjudicarla directa ni implícitamente en razón de que sería para ellas *res inter alios*. Que fundándose por otra, parte la am-pliación de la referencia, únicamente en los propósitos que de contra-rio se atribuían á la susodicha corporación y de las cuales no existía constancia positiva en autos, hacíase por ello incontestable que la reso-lución apelada carecía de base legal.

7—La ley de sellos es terminante al respecto cuando dice que se usará el sello correspondiente según la escala, en toda adjudicación de bienes sucesorios sea judicial ó estrajudicial, por testamento ó ab intes-tato. En el caso del sumario se trataba de una adjudicación por testa-mento, y por consiguiente no podría escapar del impuesto—art. 25 de la ley de sellos de 1891—Es cierto que la posesión de la herencia no comprende bienes materiales, ó derechos hereditarios determinados, sino la posesión de la universalidad que constituye la herencia. Pero en la imposibilidad de fijar el *quantum* de los derechos ó acciones que la pose-sión pueda abarcar, se hace efectivo el impuesto en los bienes denuncia-dos, materiales ó hereditarios. El art. 33 de la misma ley corrobora esta



8. **Posesión judicial**—Justificada la posesión judicial corresponde al que sin título invoca en favor de su derecho la escepción de prescripción, la prueba de que el reivindicante la perdió con posterioridad á la fecha de aquélla.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 176, Ser. 4^a.

9. **Posesión judicial**—La ordenada por sentencia, solo puede ser otorgada al designado; ni aún con su consentimiento puede acordarse á terceros.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 36, Ser. 4^a.

10. **Posesión judicial**—La falta de intervención de algunos herederos, como asimismo la publicación de los avisos del remate por menos días que los fijados por el Juez, hacen procedente la nulidad de la ejecución, aún después de aprobada la venta, hecha oblación del precio y dada posesión al comprador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310, Ser. 4^a.

11. **Posesión judicial**—Entre dos títulos sobre una mis-

interpretación al decir que los jueces no harán declaratoria de herederos ni adjudicación de bienes hereditarios sin que préviamente se abone el impuesto ó se dé fianza al efecto. Esta fué la opinión del señor Agente fiscal Dr. Rodríguez Bustamante, con el que no estuvo de acuerdo el Juez de 1^a Instancia, quien resolvió dar la posesión sin el previo pago del impuesto fiscal. Pero la Cámara de acuerdo con el Ministerio público y por los fundamentos aducidos por éste revocó la resolución, teniendo en cuenta además la jurisprudencia establecida.—Véase: Jur. Civ., tom. 1, pág. 113, Ser. 2^a; Inst., tom. 3, verb. *Bienes hereditarios*, núm. 1. En contra Inst., tom. 2, verb. *Papel sellado*, núm. 1. Debe tenerse en cuenta además, que la procedencia del impuesto no se halla subordinada al hecho material de la división de los bienes, determinándose su aplicación en todos los casos en que hubiese adjudicación de los mismos, cualquiera que sea su forma sin incluir los que se hiciesen por disposición de última voluntad, como lo prescribe el art. 28 de la citada ley.

10—Véase *Avisos*, núm. 1.

11—La sentencia no dió á la posesión judicial el alcance que le dá el sumario. Solo colocó entre las muchas razones que tenía para ad-



ma propiedad que tengan el mismo origen, el que justifique haber tenido la posesión judicial prima sobre el que carezca de tal requisito.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

12. **Poseción judicial**—De un bien determinado, debe darse con citación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 70, Ser. 4^a.

1^a. **Poseción del locador**—El locatario posee por el propietario, y reconocida la existencia de aquél en el predio, se reconoce la posesión del locador.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 426, Ser. 3^a.

1^b. **Poseción treintenaria**—Quieta y pacífica por mayor término de treinta años, hace procedente la escepción de prescripción sin que el demandado deba justificar la existencia de título ni buena fe.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3^a.

1^c. **Poseción material**—El anuncio en venta del inmueble y aún el remate público, no son prueba de tener la posesión material de la cosa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 112, Ser. 4^a.

2. **Poseción treintenaria**—La prescripción treintenaria,

mitir como probada la acción reivindicatoria, la constancia de haberse dado previamente la posesión de la cosa.

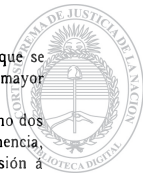
12—Un heredero invocando su carácter de tal y fundado en el artículo 3412, se presentó pidiendo la posesión judicial de un bien determinado, no se le hizo lugar porque este artículo se refiere á la posesión de la herencia como un todo ideal, pero no á la posesión de un bien determinado, el que está regido por el art. 564 del Cód. de Proc., que legisla para el interdicto de adquirir la posesión. Esta posesión debe darse llenando los requisitos del tít. 17, sección 1^a del Cód. de Proc., citando por edictos á los que se consideren con derechos al inmueble materia del interdicto.

1^a—Véase verb. *Locatario*, núm. 5.

1^b—Véase: *Escepción de prescripción*, núm. 1.

1^c—Arts. 577, 2379 y 2384 del Cód. Civ.

2—Véase nota precedente—art. 4015 del Cód. Civ.



es procedente aún sin título ni buena fe, siempre que se justifica la posesión quieta y pacífica por igual ó mayor término.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 249, Ser. 4^a.

1^a. Posesiones—No pudiendo coexistir en derecho dos posesiones, la judicial prima sobre la simple tenencia, que aún cuando continúe se convierte en posesión á nombre de otro.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 52, Ser. 3^a.

Posición social—Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 1.

1^b. Posiciones—La mujer casada, no puede ser obli-

1^a—El acta que acreditaba la posesión judicial estaba firmada por el mismo demandado que reclamó de esa posesión y despues se conformó con ella, pidiendo se le diera el tiempo necesario para mudarse, pero despues se negó á entregar el inmueble alegando ser dueño del mismo. El acta del juicio verbal hace plena fe de las enunciaciones que contenga—art. 979, núms. 2 y 4, y art. 993 Cód. Civ.—Resulta que la posesión judicial dada con intervención del oficial de justicia y acatada despues por la parte que tenía la posesion de la cosa, no pueda ésta oponerse á la entrega del inmueble porque su pretendida posesión carece de base legal.

1^b—Es jurisprudencia establecida por la Cámara. Puede verse el caso que corre publicado en el tom. 4, pág. 9, Ser. 1^a, Jur. Civ., el que fué resuelto en el sentido del sumario y que la Cámara invoca como fundamento de su decisión. Se aduce como argumento para resolver así esta cuestión jurídica, que la absolución de posiciones solo puede proponerse á la parte que legalmente puede comparecer en juicio y obligarse válidamente. La mujer casada no se halla en este caso, aún cuando se litiguen bienes propios de ella, porque siendo casada es incapaz y no puede, según precepto legal, estar en juicio, ni obligarse válidamente sin la venia del marido ó la del Juez en su defecto, *la que puede ser otorgada* cuando se demuestre la necesidad jurídica que existe para que el Juez supla la venia del marido.—Véase: Inst., tom. 1. verb. *Esposa*, núm. 1147. En el tom. 4, pág. 6, Ser. 2^a, Jur. Civ., corre publicada otra resolución que consagra el mismo principio, pero que trae otros argumentos en el sentido del sumario. Allí se dice: Que el representante necesario de la esposa es el marido, y consiguientemente no le es dado obligarse ni respecto de sus bienes propios ni de los gananciales, si la esposa concurre á otorgar poder con la venia del marido, y ese poder contiene la facultad conferida al apoderado para que absuelva posiciones, eso no quiere decir sino que el marido consintió en que al acto de

gada á absolver posiciones sin la venia del marido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 10, Ser. 3ª.

2. Posiciones—El demandado no está obligado á absolver posiciones antes de que el actor haya iniciado la acción.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 110, Ser. 4ª.

las posiciones concurriese el apoderado pero no la esposa.—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Esposa*, núm. 1. La incapacidad de la mujer casada está establecida por el art. 57, inc. 4º del Cód. Civ., cuando resuelve que el marido es el representante de ella, como asimismo por el 188 que le es correlativo, prescribe que ella no puede estar en juicio por sí ni por procurador sin licencia especial del marido. García Goyena al fundar este principio sentado en su proyecto de código, dice: que el marido jefe y director de la familia, administrador responsable de todos los bienes del matrimonio es á quien compete demandarlos y defenderlos en juicio. Lo contrario sería una perturbación del orden doméstico en lo moral y en lo civil: un contraprinipio en buena legislación. Estos fundamentos se pueden aducir en pro de la tesis sentada en el sumario. Una jurisprudencia contraria á la de la Cámara, ha sido establecida por la Suprema C. N., fundándose en que la ley civil protege la incapacidad relativa de la mujer al solo efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándole la representación necesaria, pero sin concederle privilegios de ningún género, cual sería el de negarse infundadamente á cumplir un acto legal del juicio en que es parte como lo establece el art. 58 del Cód. Civ. La intervención del esposo en el juicio, importa la autorización necesaria para la comparecencia de la esposa en todos aquellos actos en que sea exigida con derecho, pues de otra manera dependería de la voluntad de aquél hacer ilusorio un precepto de ley con perjuicio de tercero—tom. 2, pág. 315, Ser. 3—Esta doctrina ha sido consagrada en un fallo reciente de la Cámara dictado en un juicio seguido por Bova con Arci. El Dr. Posse resolvió que la mujer casada estaba obligada á absolver posiciones aún sin la venia del marido cuando se litigaban intereses propios de ella: con ó sin la venia del marido la Cámara confirmó esa bien fundada resolución, la que viene á reformar la jurisprudencia anteriormente establecida en el sentido del sumario.

1^b—Se presentó el interrogatorio al que debía someterse á la parte y de él resultaba que las preguntas no se referían á la personalidad del demandado, á que se refiere el art. 67, inc. 1º del Cód. de Proc. sino al derecho de éste á ciertos bienes, en cuyo caso no es procedente la





2ª. Posiciones—El demandado no puede exigir que absuelva posiciones aquel que tiene igual carácter en el litigio y puede considerarse coadyuvante de su derecho. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 23, Ser. 3ª.

2ª. Posiciones—Ante la negativa expresa contenida en la contestación de la demanda y la confesión ficta que resulta de las posiciones absueltas en rebeldía, los Tribunales deben optar por la primera. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 332, Ser. 4ª.

absolución de posiciones como lo establece el art. 70 del mismo Código.

2ª—Se trataba de dos demandados conjuntos: uno de ellos pidió que el otro absolviera posiciones. No procede esta medida probatoria por que las posiciones se dan á favor de la parte que es contraria en el juicio—art. 125 del Cód. de Proc.—Un codemandado no es parte contraria sino coadyuvante.

2ª—El Juez de 1ª Inst. dijo, que la presunción de confesión que resultaría por no haber comparecido la parte á absolverlas el día y hora señalados, no sería bastante para destruir la negativa expresa y terminante contenida en el escrito de contestación á la demanda. Además el representante de la absolvente manifestó que ésta no residía en el asiento del Juzgado en la época de la citación para la absolución de posiciones, manifestación que estaba de acuerdo con una afirmación hecha por una sirvienta que recibió la cédula de citación, donde se dijo que la parte se había ausentado para su estancia, todo lo que inhabilita la citación para que pueda darse por absuelto el pliego de posiciones, no procediendo hacerse efectivo el apercibimiento. La Cámara confirmó este auto diciendo que «si bien aparecía agregado un pliego de posiciones presentado con el propósito de que á su tenor fueran absueltas las preguntas que contenía por la parte demandada y con él se pretendía destruir las afirmaciones contenidas en la contestación á la demanda, haciéndose efectivo el apercibimiento contenido en el art. 133 del Cód. de Proc., la confesión ficta que de su absolución en rebeldía pudiera resultar, aun siendo procedente, no sería en manera alguna bastante á destruir la negativa expresa y categórica que contenía la contestación á la demanda de no haber autorizado al rematador para el ejercicio del mandato en cuestión, tanto más cuanto que podría discutirse esa rebeldía por existir la presunción de que la parte deman-



3. Posiciones—El apoderado no está obligado á absolver posiciones, aun cuando el mandato contenga la facultad de hacerlo.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 23, Ser. 3^a.

4. Posiciones—La parte tiene derecho de exigir que la contraria absuelva posiciones personalmente y no por medio de apoderado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 344, Serie 3^a.

5. Posiciones—El apercibimiento, para que surta efecto, debe especificar lo que sucederá al apercibido; la cláusula «en cuanto ha lugar por derecho», no basta para dar por absueltas las posiciones en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 368, Ser. 3^a.

6. Posiciones—Las posiciones puestas al representante de una sucesión absueltas en rebeldía, solo forman prueba contra los herederos mayores, sin que puedan en ningún caso afectar los intereses de los menores.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 155, Ser. 3^a.

7. Posiciones—La falta de contestación á la demanda dada no residía en esta Capital en la época en que fué citada para absolver las posiciones.

3—Tratándose de una diligencia de prueba tan importante, la ley ha querido rodear al acto de las mayores solemnidades y garantías. Así se desprende de las disposiciones del Cód. de Proc., y especialmente de lo establecido en el art. 136. Las posiciones son una medida probatoria personalísima del dueño del pleito.

4—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 136 del Cód. de Procedimientos, cuando dice «las posiciones serán absueltas por el apoderado si estuviese facultado para ello y consintiese la parte contraria».

5—Vease: verb. *Apercibimiento*, núm. 1.

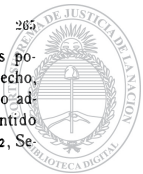
6—La confesión no puede perjudicar sino al que es hábil para prestarla. Los menores no pueden ser tenidos por confesos por que el representante de la sucesión haya dejado de comparecer al acto. Además la confesión ficta no puede perjudicar á los menores.

7—Este sumario está completamente equivocado: no expresa ni remotamente lo que la Cámara resolvió. Conferido el traslado de ley y vencido el término sin que la parte demandada lo evacue, se le dió



y aun al reconocimiento ficto que resulta de las posiciones absueltas en rebeldía, no bastan para condenar al demandado; se requiere que el demandante justifique los extremos de su acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Serie 3^a.

por decaído el derecho de hacerlo. Abierta la causa á prueba y citado en forma el demandado, tampoco compareció á absolver posiciones, por lo que se mandó agregar el pliego. Invocando la disposición del artículo 433 del Cód. de Proc., el actor pide se declare rebelde al demandado y se trabé embargo en sus bienes. Así se hizo, sin que la providencia recaída fuera notificada en manera alguna al demandado. Había, pues, una demanda incontestada que no importaba otra cosa que perder el derecho á contestarla. Más tarde una notificación de rebeldía que no ha podido sentir los efectos legales por su falta de notificación de acuerdo con lo establecido en el art. 433 del Cód. de Proc.; pero que aun suponiendo que la produjera, no implicaba la pérdida del pleito por parte del demandado, dada la reserva del art. 434 del mismo Código. En efecto, es doctrina constante, consagrada por nuestros Tribunales, que la demanda dada por contestada en rebeldía del demandado, no produce la confesión ficta de la verdad de los hechos en que ella se funda, de un modo tal que exima al actor de la obligación de probar todos y cada uno de los hechos en que fundó su querella.—Véase, entre otros, fallos de la Cámara, en el tom. 2º, pág. 99, Ser. 1^a; tom. 5º, pág. 598, idem; tom. 6º, pág. 471, idem. —Toca á la ciencia y conciencia del Juez el resolver si es ó no justo el pedido del actor, como bien claramente lo determina el art. 434 del Cód. de Proc. La Cámara dijo testualmente: «Las posiciones dadas por absueltas, son eficaces para probar el extremo necesario á la prosperidad de la demanda; en efecto, por ellas se demuestra que efectivamente se dió la autorización, contenida en documento de autos; que la demandada tuvo conocimiento de la venta á N. en la fecha y forma que se indica en la carta agregada en el acto de las posiciones y que se atribuye á la señora X. Pero justamente esta carta no prueba lo que era absolutamente necesario para hacer eficaz la demanda, á saber: que la demandada tuviera conocimiento de la venta hecha á N., dentro del plazo que fija la autorización de la carta. Por el contrario, de esta carta se desprende que siendo la autorización conferida á Z., solo válida por 90 días á contar desde el 18 de Febrero de 1889 y apareciendo la venta hecha por éste á N. el 4 de Marzo, recién en Junio le comunica dicha venta, á pesar de estar vencida su



8. Posiciones—Para que las contestaciones á las posiciones puedan aceptarse como confesión de un hecho, éste debe resultar claro de la pregunta; los que no admitan una interpretación clara, deben serlo en sentido favorable al absolvente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 302, Serie 3ª.

9. Posiciones—Las posiciones deben ser absueltas en el domicilio del absolvente, aunque la traslación se haya verificado después de trabado el litigio.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 235, Ser. 3ª.

10. Posiciones—La citación para absolver posiciones, debe ser hecha personalmente baja pena de nulidad.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 237, Ser. 3ª.

11. Posiciones—El pedido de absolución de posiciones, no suspende el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 193, Ser. 3ª.

autorización desde el 18 de Mayo. Nada prueban, pues, las posiciones absueltas en rebeldía de la demandada.»

8—Esa prueba por excelencia no puede depender de la habilidad en redactar las posiciones, porque si el Juez abriga dudas de que la confesión haya sido consciente, la sana crítica á que debe obedecer su criterio, le impediría dar por existente una prueba donde no hubiera sino una hábil estratagema, á que no todo el mundo sabe sustraerse. Por eso establecían las leyes y prácticas antiguas que cada posición no pueda comprender más que una proposición. De otro modo, herida la imaginación con el concepto principal reinante en una oración de varios períodos, no es extraño que la contestación, dejando de lado las proposiciones de frase incidente, se dirija sola á lo que constituye el acuerdo recabado. No todos tienen la práctica de la contestación sobre cada una de ellas. Por eso el que contesta está habilitado á hacer dividir cada posición, y si la pregunta se le dirige englobando diversos conceptos contra ley y doctrina, la contestación debe entenderse siempre congruente con el concepto dominante de la oración.

9—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 2.

10—Véase: *Nulidad de una citación*, núm. 1.

11—Véase: verb. *Alegato*, núm. 1.



12. Posiciones—Siempre que se fija la misma hora, á los demandados, para la absolución de posiciones, importa que debe ser conjunto el acto.—Jur. Civ., tom. 5, página 195, Ser. 3^a.

13. Posiciones—Consentida la admisión de prueba sobre la causa que impide la no comparecencia á las posiciones, procede la fijación de un término.—Jur. Civ., tom. 5, página 242, Ser. 3^a.

14^a. Posiciones—La justa causa para no comparecer al acto de las posiciones, debe ser alegada antes de la hora designada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 381, Ser. 4^a.

14^b. Posiciones—Si la ausencia involuntaria del absolvente está comprobada en autos, procede el señalamiento de nuevo día para la absolución de las posiciones.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 208, Ser. 4^a.

15. Posiciones—Para darlas por absueltas en rebeldía, el apercibimiento debe constar espresamente en la cédula.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 74, Ser. 4^a.

12—La parte pidió que dos demandados conjuntos fuesen citados para absolver posiciones simultáneamente: el Juez señaló la audiencia para que comparecieran al acto sin decir que debía la absolución ser conjunta y en la misma audiencia. Se resolvió que el Juzgado al proveer al escrito, de conformidad, fijando una misma hora establecía implícitamente que se proveía de acuerdo con lo solicitado, pues á no ser así se habría dispuesto lo contrario desde que es una regla de derecho que la negativa debe ser espresa.

13—De otra manera y dejándose al arbitrio de la parte la prueba ordenada, se haría el juicio interminable. La apertura á prueba de cualquier incidente presupone la facultad de fijar un término á su producción.

14^a—De acuerdo con la jurisprudencia establecida.

14^b—De la diligencia de notificación resultaba que el absolvente se encontraba ese día en el campo: la parte contraria no negó el hecho sino que lo reconoció como exacto. Tampoco se comprobó que el absolvente hubiese tenido conocimiento de la citación en ninguna otra forma.

15—Art. 127 del Cód. de Proc.



16. Posiciones—Para que puedan darse por contestadas en rebeldía, la parte debe presentarlas en la audiencia fijada, aun cuando el absolvente no haya comparecido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 74, Ser. 4^a.

17. Posiciones—Alegada justa causa para no comparecer á la absolución de posiciones, debe fijarse nuevo día.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 74, Ser. 4^a.

18. Posiciones—La absolución de ellas puede pedirse aun después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 355, Ser. 4^a.

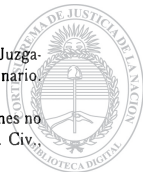
19. Posiciones—Aun cuando el que debe absolver posi-

16—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase: verbo *Audiencia*, núms. 1 y 2.

17—Esto no fué materia de resolución en la Cámara. Solo se dejó sin efecto una providencia que mandaba agregar un pliego de posiciones, pero sin decir que debía fijarse nuevo día. Es claro que si la parte lo solicita debe señalarse nuevo día.

18—Así lo establece espresamente el art. 125 del Cód. de Proc. cuando dice: «Después de la contestación de la demanda hasta la citación para sentencia, podrá cada parte pedir que la contraria absuelva posiciones».

19—A este respecto hay jurisprudencia contradictoria. El sumario se funda en que el art. 125 señala como término para pedir la absolución de posiciones desde la contestación de la demanda hasta la citación para sentencia. El término abarcado por este artículo va más allá que el término ordinario y extraordinario de prueba. No es posible hacer extensiva la disposición del art. 113 del Cód. de Proc. á la prueba de posiciones, por cuanto ésta se halla especialmente regida, en cuanto á su producción, por los términos del art. 125 citado. Pretender que el art. 113 rige en el caso del art. 125, importaría establecer que las posiciones no pueden ponerse á la parte que tiene su residencia fuera del asiento del Juzgado, sino dentro del término ordinario ó extraordinario de prueba, siendo así que la disposición del art. 125 no distingue, y por el contrario determina que puede producirse hasta la citación para sentencia, lo que supone su admisión fuera de todo término probatorio. Además si se aceptase aquella pretensión para todos los casos, resultaría que en muchos de ellos el litigante de mala fe, que quisiera burlar los derechos de su contrario, imposibilitándole el más eficaz de los elementos de prueba, po-



ciones se encuentre ausente de la jurisdicción del Juzgado, no es necesario la petición del término extraordinario.

—Jur. Civ., tom. 3, pág. 355, Ser. 4ª.

20. **Posiciones**—Si las preguntas de las posiciones no están en forma, puede señalarse nuevo día.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 21, Ser. 4ª.

21. **Posiciones**—Los documentos reconocidos al absolver posiciones, y consentida en aquel acto la agregación, no deben ser desglosados por oposición ulterior.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 96, Ser. 4ª.

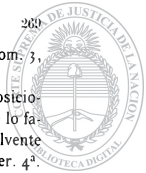
22. **Posiciones**—Consentida la providencia de autos, no

dría esquivar su presencia y rehuir esa diligencia con solo ausentarse del territorio de la jurisdicción del Juzgado, una vez que el término probatorio estuviere vencido. Que la liberalidad de la ley respecto á este medio probatorio, es tal que lo admite en términos extraordinarios y hasta dos veces en cada juicio, lo que autoriza á presumir que el espíritu de nuestro Código ha sido no limitarlo, como hace con los otros medios de prueba, dentro del término para producirla, sino por el contrario de permitirlo ampliamente durante la secuela del juicio. De acuerdo con el sumario. Véase: *Posiciones*, núm. 2079, Inst., tom. 1º. En contra, tom. 4º, mismo verbo, núm. 4; tom. 3º, mismo verbo, núm. 5. —Aquí espresamos nuestra opinión en favor de la teoría resuelta en el sumario,—y tom. 2º, mismo verb., núm. 14. Es indudable que el principio sentado en el sumario consagra la buena doctrina.

20—Abierta la audiencia para la absolución de posiciones el ponente presentó el pliego, pero las preguntas no estaban concebidas de manera que pudiesen contestarse afirmativa ó negativamente como lo prescribe el art. 130 del Cód. de Proc., disposición que no podría cumplirse si las preguntas tomaran una forma indagatoria. Es sabido que el absolvente debe confesar ó negar de un modo asertivo con la fórmula precisa de «como es cierto ó incierto»; doctrina aceptada por los prácticos. Véase: *Escribire*, verb. *Posiciones*, y *Caravantes*, págs. 70, 388 y 389, tom. 4º. Si las posiciones no vienen en la forma prescripta, debe señalarse nuevo día si es que la parte no prefiere formularlas en el acto verbalmente.

21—Véase: verb. *Documentos*, núm. 6.

22—No procede la absolución de posiciones en ese estado del juicio —art. 125 del Cód. de Proc.



procede la absolución de posiciones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 61, Ser. 4^a.

23. Posiciones—La confesión por medio de las posiciones es indivisible, de manera que no puede admitirse lo favorable sino con las mismas restricciones que el absolvente haya hecho valer.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 360, Ser. 4^a.

24. Posiciones—El escrito escusando la inasistencia a las posiciones, debe ser presentado antes de la hora señalada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 106, Ser. 4^a.

25. Posiciones—La absolución en rebeldía de las posiciones, no basta para decretar embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 325, Ser. 4^a.

26. Posiciones—Justificada la justa causa para no comparecer, debe señalarse nuevo día para la absolución de posiciones.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 359, Ser. 4^a.

23—Véase: verb. *Confesión*, núm. 3.

24—De acuerdo con la jurisprudencia uniforme de la Cámara establecida en numerosos casos: pero este Tribunal para no perder su costumbre de ofrecer a los litigantes casos que puedan favorecer sus pretensiones en el sentido que más les convenga, resolvió últimamente un caso por el cual estableció que no puede darse por absueltas las posiciones aunque el citado alegue causal legítima después de la hora señalada, si se presenta la excusa antes de abrirse la audiencia pidiendo que se agregue el pliego de posiciones. Pero como esa audiencia no puede abrirse hasta última hora, antes de cerrarse el Juzgado, resulta que la causal puede alegarse aun después de la hora fijada para la audiencia. Puede verse el caso de Casmelli de Arzeno. Esto es lo que introduce el caso en materia de procedimientos, y de tal que los litigantes andan en los Tribunales sin brújula y sin poder fijar su rumbo a causa de este mar de contradicciones.

25—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 35.

26—Alegada justa causa para no concurrir a la audiencia se señaló nuevo día, debiendo justificarse dicha causal. Después del día señalado fué justificada por medio de certificado médico, dejándose cumplido lo ordenado por el Juzgado; de donde resulta que la causal debe alegarse antes de la hora, pero su justificación puede hacerse después.



27. **Posiciones**—La falta de comparecencia del que pidió las posiciones, hace procedente se declare decaído el derecho.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 374, Ser. 4^a.

28. **Posiciones**—Deben ser absueltas en el lugar donde se encuentre el absolvente, aun cuando no sea su domicilio permanente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 13, Ser. 4^a.

29. **Posiciones**—Solo pueden absolverlas, las partes con interés directo en el litigio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 26, Ser. 4^a.

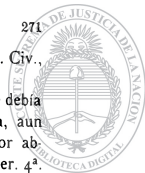
30. **Posiciones**—Aceptada sin oposición la cesión de derechos, no procede la absolución de posiciones por el

27—Art. 128 del Cód. de Proc., aparte 3^o.

28—No existe disposición legal por la cual se obligue á una de las partes del litigio á permanecer durante la sustanciación en el lugar donde está ventilándose. Ya sea que la parte que debe absolver posiciones esté domiciliada en el lugar del juicio ó que su residencia sea alternativa, el art. 136 del Cód. de Proc. dispone que si por cualquier circunstancia no se encontrase en el lugar del juicio, deberá darse comisión al Juez del pueblo ó lugar *donde se encuentre*. Si bien el domicilio de las personas se determina al tiempo de la promoción de la litis, y en el caso presente, resultaba de autos que en esta ciudad se le citó al demandado al entablarse la acción, y se extendió el poder que obraba en autos, estas circunstancias no influían para que se obligase á la parte á venir al lugar del juicio por cuanto del texto espreso de la prescripción recordada, se infiere que las posiciones deben ser absueltas en el lugar donde se encuentre la persona que debe absolverlas, y mucho más no desconociéndose categóricamente que en la época de la absolución se encuentre ausente.

29—Se pidió que un socio del litigante absolviera posiciones en un litigio que no era contra la sociedad. En esto el socio no es parte, y no siéndolo no puede ser llamado á absolver posiciones, porque esta medida probatoria solo se acuerda contra los que son parte en el juicio —art 125, Cód. de Proc.

30—Este caso está en contra del que corre publicado en el tom. 4^o de la Inst. verb. *Posiciones*, núm. 7, resolución que allí combatimos. Hoy con el sumario se modifica esa jurisprudencia en el sentido de nuestra opinión.



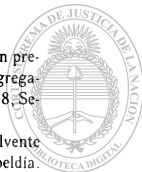
cedente, solo puede exigirse la del cesionario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 45, Ser. 4ª.

31. Posiciones—La presentación de la parte que debía absolver las posiciones escusando su inasistencia, aun después de la hora señalada, no permite darlas por absueltas en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 60, Ser. 4ª.

32. Posiciones—Si el Juez admite como legítima la causa de inasistencia, no procede la absolución de las posiciones en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 17, Serie 4ª.

31—El hecho de presentarse, pasada la hora designada para la audiencia, no es causa suficiente para dar por absueltas las posiciones en su rebeldía, desde que según los propios términos del art. 133 del Cód. de Proc., solo es posible dar por confesa á la parte cuando no comparece á declarar, lo que no sucedió en el presente caso. Interpretando lógicamente el artículo citado, no podía pretenderse que existiera confesión ficta en caso como el presente, so pena de sancionar una restricción á sus términos, contraria al principio inconcuso, según el cual debe darse á la prueba toda la amplitud compatible con las reglas que el Cód. de Proc. prescribe para los juicios. Como lo ha declarado la Cámara de lo Civil en casos análogos, la fijación de una hora para que las partes concurran á la audiencia señalada, solo significa eximir las de asistir á toda ella, sin que esto importe, sin embargo, libertarlas, desde la hora que se fije hasta la terminación de la audiencia.

32—Decretado el comparendo para la absolución de posiciones, la parte concurrió el día designado y dijo que el acto no podía tener lugar porque su abogado se encontraba enfermo. La Cámara dijo, que si bien esta causa no es de las admitidas por la ley, el Juez de 1ª Instancia la tuvo en cuenta, señalando nuevo día. Esta circunstancia favorece el derecho de la parte, pues si el Juzgado no hubiese hecho lugar á la pretensión de postergar el acto, la parte hubiera absuelto las posiciones, y si no las hubiese querido absolver á pesar de la orden del Juez, habría sido necesario el apercibimiento de ley. El Inferior después de haber admitido como legítima la causal invocada, señalando en consecuencia nueva audiencia para el acto, revocó esa providencia por contrario imperio, y ordenó la agregación del pliego para tenerlo presente en la oportunidad debida. La Cámara revocó la providencia como se ha visto.



33. Posiciones—Las posiciones y la rebeldía deben presentarse en la audiencia señalada, no procede su agregación con posterioridad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 18, Serie 4ª.

34. Posiciones—Justificada la ausencia del absolvente no procede dar por absueltas las posiciones en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 31, Ser. 4ª.

35. Posiciones—No procede el señalamiento de nuevo día para absolver posiciones después de consentido el auto que las da por absueltas en rebeldía.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 34, Ser. 4ª.

36. Posiciones—Los representantes de una persona jurídica, están obligados á absolverlas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 53, Ser. 4ª.

37. Posiciones—El mandatario está obligado á absol-

33—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara. Véase el núm. 16. Dice la Cámara que no es con posterioridad al día y hora señalado para la audiencia, que la parte puede venir presentando pliego de posiciones y documentos, sino que, dada la naturaleza del juicio, si la contraparte no había asistido á él, debió el actor solicitar entrar á la audiencia y en ella hacer las peticiones que creyere conveniente ó presentar las pruebas, si ellas hubieran sido admitidas por el Juzgado y no venir con posterioridad, pretendiendo que se admitan pruebas estemporáneamente.

34—Véase el núm. 9, cuyos fundamentos pueden aplicarse al caso presente, por analogía.

35—Debe tenerse presente que en el caso actual, cuando el que debía absolver las posiciones se presentó, ya ellas habían sido tenidas por absueltas. Deferir á la reconsideración de dicha resolución importaría retrotraer la estación del juicio desde que de hecho se daría por nulo el auto que las dió por absueltas debido á una causa injusta ó inexacta tendría que ser materia de un proveído, cuando ni siquiera se había pedido reconsideración á pesar de haber estado la parte en tiempo de pedirla.

36—De acuerdo con la jurisprudencia hoy establecida. Véase: Inst., tom. 4º, verb. *Posiciones*, núm. 10; tom. 3º, verb. *Representante*, núm. 2. En contra, véase: verb. *Personas jurídicas*, núm. 2 del tom. 4º.

37—Parece que este sumario estuviese en contra del núm. 5 pero no



verlas por su mandante.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 53, Serie 4^a.

38. Posiciones—Si la absolución de posiciones no tiene lugar sin culpa del absolvente, no procede la rebeldía.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 126, Ser. 4^a.

39. Posiciones—La prueba de éstas no se encuentra entre las que deben pedirse y evacuarse dentro del término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 131, Ser. 4^a.

40. Posiciones—La imposibilidad de concurrir el abogado director, es causal para fijar nuevo día para la presentación de posiciones. Jur. Civ. tom. 9, pág. 230, Serie 4^a.

41. Posiciones—No pueden darse por absueltas las posiciones en rebeldía si la citación se pidió ante juez incompetente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 233, Ser. 4^a.

es así porque en el caso presente no se trataba de un simple apoderado sino que se trataba del representante ó apoderado de una persona jurídica, que se encuentra en distintas condiciones, pues si el apoderado ó representante no las absuelve, tampoco lo puede hacer la persona representada porque ésta carece de existencia real, lo que colocaría á las partes en un pie de perfecta desigualdad, lo que es repugnante y contrario al principio tutelar de la igualdad de la defensa en juicio.

38—El absolvente concurrió pero la audiencia no pudo celebrarse porque el intérprete nombrado para la absolución había renunciado.

39—En este caso dijo la Cámara que «no hallándose comprendida la prueba de posiciones en la disposición del art. 118, como lo comprueba el art. 125 del mismo», pueden las posiciones producirse fuera del término. Véase el núm. 18.

40—Véase: verb. *Abogado*, núm. 9.

41—Un litigante tenía su domicilio en Carcarañá, Provincia de Santa Fe. El Juez de la Capital Federal se dirigió al Juez del Rosario, creyendo que esa autoridad fuese la única con jurisdicción sobre aquella localidad, lo que no era así: y como el art. 136 del Cód. de Proc. preceptúa que las posiciones deben ser absueltas ante el Juez del pueblo ó lugar donde se encuentre la parte resulta que la citación hecha por el Juez del Rosario, no podía surtir ningún efecto legal por cuanto no era el Juez del pueblo ó lugar donde se encontraba el absolvente.



42. Posiciones—Deben ser absueltas ante el juez del domicilio del absolvente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 233, Ser. 4ª.

43. Posiciones—No siendo negada la autenticidad del certificado médico, procede el señalamiento de nuevo día para la absolución de posiciones.—Jur. Civ., tom. 10, página 78, Ser. 4ª.

44. Posiciones—Solo pueden darse por absueltas las posiciones en rebeldía si se abre la audiencia y no se presenta el absolvente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 98, Serie 4ª.

45. Posiciones—La absolución de posiciones no interrumpe el término para alegar.—Jur. Civ., tom. 10, página 103, Ser. 4ª.

46. Posiciones—Para dar por absueltas las posiciones en rebeldía, debe existir en autos constancia de que se abrió la audiencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 303, Serie 4ª.

Posiciones—Véase: *Domicilio*, núm. 1.—*Inhibición*, número 12.

Precauciones—Véase: *Culpa ó negligencia*, núm. 1.

1ª. Precio—Al deudor que se escepciona con la exajera-

42—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 12.

43—Véase: *Certificado médico*, núm. 1.

44—Véase: *Audiencia*, núm. 1.

45—Véase: verb. *Alegato*, núm. 4.

46—Véase: verb. *Audiencia*, núms. 1 y 2.

1ª—Una persona recibió encargo de otra para que le hiciera traer algunos artículos de Europa. Los encargos fueron llenados pasándosele la cuenta correspondiente. El demandado confesó el encargo hecho y el recibo de los artículos, pero dijo que los precios eran fabulosos, y que muchos de los artículos no le habían sido entregados. El demandado escepcionándose con esa defensa se convertía en actor. Además esa circunstancia era un hecho nuevo aducido en juicio, cuya prueba incumbe al que lo aduce.



ción del precio de los artículos, corresponde la prueba de la verdad de su aserto.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 3^a.

1^b. Precio—Agregados los comprobantes cuya falta fundaba la oposición del comprador, debe efectuarse la oblación del precio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 120, Ser. 3^a.

2^a. Precio—Justificada la imposibilidad de cumplir el contrato de compraventa, el vendedor está obligado á la devolución de la parte de precio recibido con sus intereses á estilo de banco desde le fecha de la demanda.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 318, Ser. 3^a.

2^b. Precio—Reconocida la disminución del área, el comprador no está obligado á oblar el precio mientras no se practique nueva *medición*.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 120, Ser. 4^a.

3^a. Precio—Justificada la imposibilidad de cumplirse el contrato de compraventa, procede la devolución del precio, aun cuando el comprador hubiese tomado posesión del bien materia del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 325, Ser. 3^a.

3^b. Precio—Al ordenarse el cumplimiento de una obligación de hacer escritura pública de compraventa, no puede ordenarse la oblación judicial en el banco del precio que solo debe abonarse al firmar el instrumento trasla-

1^b—Porque desaparece el fundamento de la oposición, y una vez desaparecida la causa desaparece el efecto.

2^a—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 8.

2^b—El comprador dijo que al terreno comprado le faltaba más de una quinta parte del área vendida y que fundado en el art. 1345 desistía de la compra. No se hizo lugar al desistimiento mientras no se comprobara ese extremo, facultándosele al mismo tiempo á no oblar en el interin el precio.

3^a—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 13.

3^b—Véase: *Obligación de hacer*, núm. 6.



tivo del dominio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 4^a.

4. **Precio**—De venta, la indemnización por la falta de cumplimiento de una obligación de hacer escritura, debe fijarse teniendo en cuenta el precio de venta y el que tenga el terreno al tiempo en que se ordena el otorgamiento.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

5. **Precio**—Estipulado, reconocido que el vendedor no ha percibido más del precio estipulado, el comisionista a quien correspondía la demasia, carece de derecho para iniciar contra él reclamo de suma alguna.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 201, Ser. 3^a.

6. **Precio**—Mensual, reconocida la locación de servicios y justificado el precio mensual, el locador debe ser condenado al pago del saldo adeudado.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 411, Ser. 3^a.

7. **Precio**—Los informes de las oficinas públicas, ya sea de la administración ó de los escribanos de registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial, cuando se trata del precio de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

8. **Precio**—Determinado, el propietario no es responsable respecto á los terceros que proveyeran al constructor de materiales para la obra, siempre que ésta hubiese sido contratada por un precio determinado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 284, Ser. 4^a.

9. **Precio**—Aun pedida la rescisión del contrato, el locatario está obligado al pago del precio de la locación

4—Véase: *Indemnización*, núm. 4.

5—Véase: verb. *Comisionista*, núm. 1.

6—Véase: *Locación de servicios*, núm. 3.

7—Véase verb. *Administración*, núm. 1.

8—Véase: verb. *Materiales*, núm. 1.

9—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 95.



y si por su falta se declara la resolución, debe ser condenado al pago de los daños y perjuicios.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 163, Ser. 4ª.

10. **Precio**—De venta, para la fijación de los daños y perjuicios causados por la falta de cumplimiento de un contrato de compraventa, debe tenerse en cuenta la diferencia entre el precio de venta y el que tenía en la fecha en que se entabló la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, página 137, Ser. 4ª.

11. **Precio**—Estipulado como comisión de venta de un inmueble el excedente de un precio determinado, el mandatario carece de derecho para exigirla si reconoce que no se cumplió la condición.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 90. Ser. 4ª.

12. **Precio**—La falta de intervención de algunos herederos como asimismo la publicación de los avisos del remate judicial por menos días que los fijados por el Juez, hacen procedente la nulidad de la ejecución, aun después de aprobada la venta, hecha oblación del precio y dada posesión al comprador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310. Ser. 4ª.

13. **Precio**—No es potestativo del locador el aumento del precio de la locación, debe existir la conformidad del locatario.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 107, Ser. 4ª.

Precio—Véase: *Alquileres*, núm. 1—*Arbitros*, núm. 3—*Boleto de compraventa*, núms. 1 y 16—*Cesión*, núm. 1—*Comisión*, núm. 3—*Competencia*, núm. 2—*Comprador*, núm. 1—*Compraventa*, núm. 4—*Contrato bilateral*, número 5—*Contrato de arrendamiento*, núms. 17 y 29—

10—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 104.

11—Véase: verb. *Comisión*, núm. 6.

12—Véase: verb. *Avisos*, núm. 1.

13—Véase: verb. *Locación*, núm. 10.



Contrato de compraventa, núm. 7—*Daños y perjuicios*, núms. 23, 43 y 56—*Depósito judicial*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 9—*Interdicto de obra nueva*, núm. 4—*Intereses*, núms. 2 y 8—*Jurisdicción*, núm. 1—*Locación de servicios*, núm. 5—*Mora*, núm. 1—*Peritos*, núm. 1—*Prueba plena*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 2, 3 y 14—*Rendición de cuentas*, núm. 19—*Separación de bienes*, núm. 2—*Servicios*, núm. 10.

Precio determinado—Véase: *Venta ad-corporis*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 25—*Costas*, núm. 46—*Daños y perjuicios*, núm. 90—*Sello*, núm. 2.

Preñio—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núms. 4, 5, 20 y 24—*Locatario*, núms. 5 y 6—*Alquileres*, núm. 2—*Posesión*, núm. 5.

Preferencia—Véase: *Divorcio*, núm. 5.

Pregunta—Véase: *Posiciones*, núms. 8 y 20.

1. **Prejuzgamiento**—El haber emitido opinión en un incidente de un juicio, no importa un prejuzgamiento que anule la sentencia—Jur. Civ., tom. 1, pág. 224, Ser. 3ª.

2. **Prejuzgamiento**—La fijación de días determinados para que el menor vea á sus padres, no importa un prejuzgamiento en el juicio sobre tenencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 71, Ser. 4ª.

3. **Prejuzgamiento**—El rechazo de la acción de daños y

1—En un juicio de filiación natural el Juez que falló la causa había emitido opinión siendo Asesor de Menores, á cerca de la personería de la madre natural. Se dijo de nulidad de la sentencia definitiva por haber el Juez prejuzado en la causa. No hay ley que inhabilite á un Juez para pronunciar fallo definitivo sobre el fondo de un asunto por haber emitido opinión como funcionario en un incidente que no está íntimamente relacionado con aquél. La inhabilitación viene del hecho de haber emitido opinión ó dictamen en lo que es objeto del fallo, y no en un punto que precisamente por estar ya resuelto y terminado no tiene importancia en el litigio.

3—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 106.



perjuicios, no importa un prejuzgamiento para la fijación del monto en caso de ser revocada por el Superior la sentencia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 41, Ser. 4^a.

4. **Prejuzgamiento**—Hace procedente la recusación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 159, Ser. 3^a.

1^a. **Prelación**—El acreedor de mejor derecho tiene prelación sobre el de grado inferior y puede repetir contra él por el importe de su crédito.—Jur. Civ., tom. 8, página 394, Ser. 4^a.

1^b. **Prenda**—En la ejecución de una prenda debe ejecutarse ésta con preferencia á los demás bienes del deudor, que solo responde subsidiariamente del saldo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 207, Ser. 4^a.

2^a. **Prenda**—La venta de la prenda debe hacerse sin juicio; solo procede la notificación del deudor á los efectos del nombramiento de martillero.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 116, Ser. 4^a.

Preparatoria—Véase: *Prueba preparatoria*, núm. 1.

1^a. **Prescripción**—Corresponde al que la alegue justificar la fecha desde la cual empieza á correr el término.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 5, Ser. 3^a.

2^b. **Prescripción**—La prescripción es procedente en cual-

1^a—Art. 3938 del Cód. Civ.

1^b—Art. 479 del Cód. de Proc.

2^a—Véase: verb. *Martillero*, núm. 3.

1^c—Se trataba de la nulidad de un acto jurídico. El derecho para alegarla se prescribe desde la fecha en que la existencia del acto llega á conocimiento de la parte. El que alega que el derecho para pedir esa nulidad está prescripto, debe comprobar que el hecho de la celebración del acto nulo llegó á conocimiento del que alega la nulidad; como asimismo debe comprobar la fecha, para que la prescripción empiese á contarse desde entonces.

2^b—Art. 3962 del Cód. Civ. No se dijo que la prescripción puede ser opuesta en cualquier estado del juicio cuando de autos resulta justificada, solo se declaró procedente fundándose en el artículo citado.



quier estado del juicio si de autos resulta justificada.— Jur. Civ., tom. 4, pág. 201, Ser. 3ª.

3. **Prescripción**—Deducida demanda de jactancia, la prescripción se interrumpe aun cuando ella se haya dirigido contra el que pretendía tener originariamente el derecho.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 368, Ser. 4ª.

Prescripción.—Véase: *Cuenta presentada*, núm. 1—*Abogado*, núm. 1—*Apoderado*, núm. 1—*Excepción de prescripción*, núms. 1 y siguientes—*Costas*, núm. 30—*Daños y perjuicios*, núm. 60—*Información supletoria*, núm. 7.

1. **Prescripción adquisitiva**—Para que las declaraciones de testigos se puedan considerar bastantes para justificar la prescripción adquisitiva, deben ser precisas, claras y concordantes, en cuanto á los hechos sobre que deponen y á su pleno conocimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 205, Ser. 3ª.

2. **Prescripción adquisitiva**—Si existen derechos contradictorios, no procede la información sumaria para probar la adquisición del dominio por haber poseído durante

3.—Véase: verb. *Jactancia*, núm. 4.

1.—Una prueba por la que se propone la constitución de un título de dominio, para suplir el traslativo que puede ó no haber existido, debe revestir apariencias tales que lleven al ánimo el convencimiento, de que el testigo mismo se ha penetrado del alcance de su declaración. La razón del dicho del testigo ha de referirse á los hechos de los cuales pueda deducirse al mérito de la atestación, pues que de lo contrario dos testigos contestes sobre el hecho que se quiere demostrar dando razón genérica y vaga del dicho, como la vecindad, la amistad etc., que no presuponen un conocimiento forzoso de aquellos, encadenarían de tal modo la conciencia del Juez, que el fallo quedaría en realidad constituido por los testigos y no por el magistrado á quien se ha delegado la facultad de administrar justicia discerniendo á cada cual su derecho. Al testigo corresponde dar cuenta de los hechos, al Juez correlacionarlos, deducir las consecuencias que de ellos se desprenden, y establecer claramente el derecho.

2.—Véase: *Información sumaria*, núm. 2.



el término que la ley requiere para la prescripción.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 100, Ser. 4^a.

1^a. **Prescripción de un delito**—La absolución del acusado por prescripción del delito, no puede fundar una acción de daños y perjuicios contra el demandante que no fue parte activa en el juicio criminal.—Jur. Civ., tom. 3, página 232, Ser. 3^a.

1^b. **Prescripción de una deuda**—Contra la deuda proveniente de una carta de crédito solo procede la prescripción de diez ó veinte años; la escepción fundada en menor término debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 11, Ser. 3^a.

1^c. **Prescripción de diez años**—Procede la escepción de prescripción de diez años entre presentes, siempre que se justifique la buena fe y el justo título.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 13, Ser. 4^a.

1^d. **Prescripción como escepción**—El rechazo de la escepción de prescripción opuesta como artículo de previo pronunciamiento y discutida como cuestión de puro derecho, no hace cosa juzgada ni inhibe á la parte para oponerla en cualquier estado del juicio después de contestada la demanda siempre que la prueba de su procedencia resulte justificada en autos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

2. **Prescripción como escepción**— En juicio ejecutivo solo

1^a—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 12.

1^b—Véase: *Carta de crédito*, núm. 1.

1^c—Art. 3999 del Cód. Civ.

1^d—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 7.

2—Iniciado un juicio ejecutivo y sentenciado de trance y remate mandando llevar adelante la ejecución por no haberse deducido escepción alguna en la estación oportuna del juicio, y después de practicada la liquidación del crédito, intereses y costas, se presenta el ejecutado y dice que fundado en el art. 4032 del Cód. Civ. se encuentra prescripto



puede oponerse en la estación oportuna que la ley señala.

—Jur. Civ., tom. 9, pág. 194, Ser. 4^a.

3. Prescripción como excepción—La falta de pronunciamiento del Juzgado sobre la excepción de prescripción opuesta en el alegato, no puede fundar la nulidad de la sentencia alegada por la parte á quien fué opuesta.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

1^a. Prescripción de una fianza—El término para la prescripción de la fianza empieza desde que sea notoria la insolvencia del deudor, aun cuando el fiador no haya renunciado al beneficio de escusión.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3^a.

2. Prescripción de una fianza—La prescripción de una fianza constituida antes de la vigencia del Código Civil, se rige única y exclusivamente por las antiguas leyes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3^a.

1^b. Prescripción de una indemnización—La acción para demandar la indemnización civil procedente de un delito ó cuasi-delito, se prescribe al año de haber tenido lugar el hecho.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 84, Ser. 3^a.

1^c. Prescripción interrumpida—La protesta que no ha si-

el crédito—se trataba de honorarios de abogado—y que debe así declararse, á lo que no se hizo lugar por la naturaleza del juicio y teniendo en cuenta que la sentencia se hallaba consentida y ejecutoriada, no era procedente ni pudo admitirse la defensa opuesta teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 487 del Cód de Proc., el que establece terminantemente que no se admitirán al ejecutado otras defensas que las que entonces hubiese manifestado. Si no manifestó el ejecutado la excepción de prescripción al ser citado de remate, no puede admitírsele despues; le queda á salvo su derecho para hacerlo valer por la vía ordinaria.

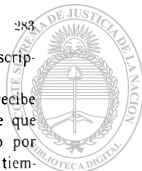
3—Véase: verb. *Excepción de prescripción*, núm. 4.

1^a—Véase: verb. *Fianza*, núm. 4.

2—Véase: verb. *Fianza*, núm. 5.

1^b—Art. 4037 del Cód. Civ.

1^c—La protesta no notificada se considera inexistente.



do notificada personalmente, no interrumpe la prescripción.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 44, Ser. 4^a.

2. **Prescripción interrumpida**—El heredero que recibe como de su causante el bien hereditario, se supone que posee para sí, y los que se consideren con derecho por condominio anterior, deben ejercer sus acciones en tiempo oportuno para interrumpir la prescripción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 111, Ser. 4^a.

3. **Prescripción interrumpida**—La iniciación de un juicio sin deducir acción determinada, no interrumpe el término que la ley fija para la prescripción.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 180, Ser. 4^a.

1^a. **Prescripción liberatoria**—La inacción por mayor término del que la ley fija para la prescripción liberatoria de la cuenta corriente, hace procedente la escepción.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 335, Ser. 4^a.

1^b. **Prescripción de una marca de fábrica**—El derecho para reclamar el título de una casa de comercio como marca de fábrica, aun cuando ese título consista en el apellido de la familia, se prescribe por la inacción de un año.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 44, Ser. 4^a.

1^c. **Prescripción contra menores**—La prescripción comenzada contra un heredero mayor continúa sin interrup-

2 Véase: verb. *Heredero*, núm. 7.

3 Véase: *Acción determinada*, núm. 1.

1^a—Art. 1003, inc. 3^o del Cód. de Com. ant. Por el Código vigente esta prescripción es de cinco años—art. 790.

1^b—Art. 36 de la Ley de marcas de Fábrica.

1^c—El caso cae bajo la sanción de las leyes anteriores á la vigencia del Cód. Civ.—art. 4051.—Segun la ley 9^a, tit. 19, Part. 6^a, la prescripción de 20 ó más años no corre contra menores cuando empieza á prescribirse contra ellos, mas no sucede lo propio cuando la prescripción ha empezado contra personas mayores á quienes han heredado los menores, pues en tal caso la prescripción ya comenzada continúa contra éstos.



ción contra los menores y puede ser opuesta con éxito en caso de reivindicación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 129, Serie 3ª.

1. **Prescripción á nombre propio**—Para que se verifique á favor del poseedor, la posesión debe tenerse á nombre propio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 394, Ser. 3ª.

2. **Prescripción á nombre propio**—La esposa que renuncia á sus derechos hereditarios en la sucesión del esposo, no puede invocar á su favor la posesión tenida á nombre de éste, para prescribir á su nombre personal los bienes poseídos durante la sociedad conyugal.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 321, Ser. 3ª

1—Es elemental en derecho que para adquirir el dominio por prescripción, es necesaria la posesión *animo domini*—art. 2351 del Código Civil—exigiéndose esa circunstancia aun en la posesión continua de treinta años, que no requiere justo título ni buena fe—Cód. Civ., art. 4015—y lo es también, como lo estatuye categóricamente el art. 2353, que nadie puede cambiar por sí ni por el trascurso del tiempo la causa de su posesión. «El que ha comenzado á poseer por otro, se presume que continúa poseyendo por el mismo título mientras no se pruebe lo contrario.»

2—Al deducir su demanda la actora decía haber poseído el inmueble quieta y pacíficamente á título de dueña, aseverando que no solo la había ocupado con ánimo de ser propietaria sino que también había ejercitado públicamente y sin interrupción alguna por más de 40 años todos los actos que son consiguientes al dominio privado; y terminaba pidiendo se la declarase *dueña exclusiva* del inmueble. Al absolver posiciones confesó que había vivido la mayor parte del tiempo en que se decía operada la prescripción, al lado de su esposo, al amparo y bajo la protección de éste, y confesó asimismo que ella no había tenido más derechos sobre la propiedad que los que pudo trasmitirle su esposo á título sucesorio, y que el título de éste provenía de sus ascendientes. No pudo por consiguiente, ser ella poseedora única y á título de propietaria del terreno, puesto que fué poseído por su esposo en el carácter expresado, y que renunció á la herencia dejada por éste, renuncia que fué aceptada según se comprobó en autos.



1ª. Prescripción de la nulidad—El término para la prescripción del derecho á solicitar la declaración de nulidad de un acto jurídico por ser falso, solo empieza á correr desde la fecha en que el que pide la nulidad tuvo conocimiento de su existencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 5, Serie 3ª.

2ª. Prescripción de la nulidad—Se prescribe á los dos años el derecho de pedir la nulidad de un acto jurídico por error, y el término corre para los firmantes desde la fecha del acto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3ª.

1ª. Prescripción de una obligación—Para que la prescripción sea procedente, el que la invoca debe justificar que la obligación ha sido fechada con posterioridad á la época en que fué firmada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 193, Ser. 3ª.

2ª. Prescripción de una obligación—La prescripción anterior á la ley que fija un término corto, se rige por la ley de la fecha en que fué firmada si fuera de mayor término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 288, Ser. 4ª.

1ª. Prescripción del patronato—La del derecho al patronato de una capellanía solo empieza á correr desde la fecha de la fundación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 388, Serie 4ª.

1ª. Prescripción en segunda instancia—Para que la pres-

1ª—Véase: verb. *Nulidad de un acto jurídico*, núm. 3.

2ª—Véase: verb. *Acto jurídico*, núm. 2.

1ª—Porque reconocida la firma del documento, queda reconocido su contenido—art. 1028 del Cód. Civ.—y su prueba es indivisible—artículo 1029.—Para destruir lo dispuesto en estos artículos, debe producirse prueba, la que incumbe á aquel que se levanta contra la presunción legal.

2ª—Art. 4051 del Cód. Civ.

1ª—Véase: verb. *Capellanía*, núm. 4.

1ª—Si bien el art. 3962 del Cód. Civ. autoriza á oponer la prescripción en cualquiera instancia y en todo estado del juicio anterior al tiempo en que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada, sin-



cripción opuesta en segunda instancia sea procedente, es necesario que resulte justificada de autos, ó se funde en instrumento público.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 244, Ser. 3^a.

1^a. Prescripción treintenaria—La posesión quieta y pacífica por mayor término de treinta años, hace procedente la escepción de prescripción sin que el demandado deba justificar la existencia de título ni buena fe.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3^a.

1^b. Prescripción treintenaria—Es procedente aun sin título ni buena fe, siempre que se justifique la posesión quieta y pacífica por igual ó mayor término.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 249, Ser. 4^a.

2. Prescripción treintenaria—Procede la escepción de prescripción treintenaria siempre que se justifica la posesión á nombre propio por un término igual ó mayor de treinta años.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 342, Ser. 4^a.

3. Prescripción treintenaria—El derecho de los coherederos para exigir la formación de la cuenta particionaria colacionando los bienes recibidos por partición estrajudicial, se prescribe por la inacción durante treinta años.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

4. Prescripción treintenaria—Importando la cosa juzgada una novación del derecho que motivó la sentencia, la demanda sobre su cumplimiento es una acción personal

embargo prohíbe que se deduzca ante los Tribunales superiores siempre que no resulte probada por instrumentos presentados ó testigos recibidos en primera instancia.

1^a.—*Escepción de prescripción*, núm. 1.

1^b.—Véase: *Posesión treintenaria*, núm. 2.

2.—Arts. 4015 y 4016 del Cód. Civ., concordantes con la Ley 21, tit. 29, Part. 3^a.

3.—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 5.

4.—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 8.



prescriptible en el término de treinta años.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 4^a.

5. Prescripción treintenaria—Opuésta y justificada ésta, la acción reivindicatoria debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 309, Ser. 4^a.

1^a. Prescripción de veinte años—La acción de rendición de cuentas como personal, se prescribe por el término de veinte años.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 180, Ser. 4^a.

Prescripciones legales—Véase: *Daños y perjuicios*, número 63.

Presentación — Véase: *Alegato*, núm. 3—*Documento*, núm. 10.

Presentación personal—Véase: *Asuntos judiciales*, número 1.

Presidente—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 4.

1^b. Prestaciones—Las prestaciones convenidas entre locatario y sublocatario solo pueden ser reclamadas si se verifica el desalojo; el contrato directo entre locador y sublocador no modifica el primitivo convenio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3^a.

1^c. Préstamo—Es procedente la escepción de inhabilidad de título, si la ejecución hipotecaria se funda en un certificado del escribano ante el cual se otorgó la escritura de préstamo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 3^a.

1^d. Préstamo—La ejecución de un préstamo sobre un inmueble, corresponde á la jurisdicción civil aun cuando

5—Porque el reivindicante habria perdido su derecho al dominio de la cosa materia de la acción en virtud de su inacción durante dicho término.

1^a—El caso estaba regido por las antiguas leyes, las que señalan el término de veinte años para la prescripción de las acciones personales—Ley 6^a, tit. 15, lib. 4^o, R. C.

1^b—Véase: verb. *Desalojo*, núm. 4.

1^c—Véase: *Ejecución hipotecaria*, núm. 1.

1^d—Véase: *Jurisdicción Civil*, núm. 1.



sea hecho por un comerciante.—Jur. Civ., tom. 8, página 40, Ser. 4^a.

Presunción legal—Véase: *Servicios*, núms. 7 y 8.

Presunciones—Véase: *Nulidad de un acto jurídico*, número 2—*Simulación*, núm. 13—*Prueba de presunciones*, núm. 1.

Presupuesto—Véase: *Papel sellado*, núms. 1 y 3—*Remuneración profesional*, núm. 1.

Principio de prueba—Véase: *Prueba escrita*, núm. 3—*Prueba testimonial*, núm. 8.

Principios generales—Véase: *Sociedad anónima*, núm. 2.

Prisión—Véase: *Autoridad*, núm. 2.

Privilegio general—Véase: *Honorarios*, núm. 26.

Procedimiento—Véase: *Fallecimiento*, núm. 2—*Nulidad del procedimiento*, núms. 1 y 2—*Escepción de nulidad*, núm. 1—*Testigos*, núm. 25—*Demanda*, núm. 4—*Notificación*, núm. 8.

Procedimiento sumario—Véase: *Honorarios*, núm. 13.

Proceso criminal—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 12, 13 y 17.

1. **Procuraciones judiciales**—Las disposiciones del Código Civil referentes al mandato, solo son aplicables a las procuraciones judiciales, en cuanto no se opongan a las disposiciones del Código de Procedimientos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 171, Ser. 4^a.

2. **Procuraciones judiciales**—La presentación personal del demandante no importa la revocación tácita del poder conferido al mandatario para procuraciones judiciales.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 189, Ser. 4^a.

1—Véase: verb. *Mandato*, núm. 9.

2—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase el número precedente.



1^a. Procurador—Aun cuando el procurador pueda individualizar las defensas, si son varios los demandados deben nombrar un solo apoderado ó representante judicial.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 121, Ser. 3^a.

2. Procurador—Judicial, el apoderado ó procurador judicial puede representar ó acompañar á su poderdante en todos los actos ó diligencias judiciales.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 127, Ser. 3^a.

3. Procurador—La enemistad del juez con el abogado ó procurador, no es causa de recusación.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 106, Ser. 4^a.

4. Procurador—El abogado y procurador carecen de personería para reclamar de sus honorarios en los casos de condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 81, Ser. 4^a.

Procurador—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 14—*Apelable*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 15.

Profesión—Véase: *Servicios*, núms. 2, 6 y 10—*Abogado*, núm. 7.

Prófugo—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1.

Prohibiciones—Véase: *Contrato de arrendamiento*, número 22—*Locación*, núm. 3—*Legado*, núm. 3.

Promesa—Véase: *Contrato verbal*, núm. 4—*Boleto de compraventa*, núm. 5—*Compraventa*, núm. 2.

Pronunciamento—Véase: *Nulidad de una sentencia*, número 9.

1^b. Propiedad—Ante dos títulos al dominio que proceden de un mismo origen, la propiedad corresponde al

1^a—Véase: verb. *Demandados*, núm. 1.

2—Véase: *Actos judiciales*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Abogado*, núm. 12.

4—Véase: verb. *Abogado*, núm. 15.

1^b—Véase: verb. *Poseción*, núm. 11.



que justifique haber tenido primero la posesión.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 361, Ser. 3^a.

2. **Propiedad**—Afectada con pacto de retroventa no puede ser vendida por el deudor, solo puede disponer del derecho de retrotraerla.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 77, Ser. 4^a.

Propiedad— Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 1—*Aluvión*, núm. 2—*Finca*, núm. 1—*Interdicto de adquirir*, núm. 2—*Interdicto de obra nueva*, núm. 2—*Interdicto de recobrar*, núm. 11—*Remate judicial*, núm. 12—*Escritura*, núm. 4—*Nulidad de un título*, núm. 1—*Bienes raíces*, núm. 2—*Personería*, núm. 3—*Posesión judicial*, núm. 11—*Retroventa*, núm. 2—*Venta*, núm. 5—*Contrato de compraventa*, núm. 21—*Informaciones*, núm. 2—*Información supletoria*, núm. 7—*Títulos de propiedad*, núms. 1 y siguientes—*Condominio*, —núm. 9.

Propiedad indivisa— Véase: *Depositario judicial*, núm. 1.

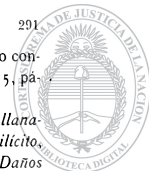
1^a. **Propiedades**—La línea imaginaria que divide dos propiedades debe fijarse en el centro de la pared, siempre que por convenio expreso no se haya estipulado cuál de los frentes de la pared era el divisorio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 303, Ser. 3^a.

1^b. **Propietario**—El propietario no es responsable respecto de los terceros que proveyeran al constructor de ma-

2.—El art. 1384 establece que el vendedor con pacto de retroventa no puede entrar en posesión de la cosa vendida, sino después de haber pagado el precio de venta. Resulta entonces que la propiedad no puede venderse porque el vendedor está obligado a entregar la cosa libre de toda otra posesión y sin contradictor que se oponga—art. 1409 del Cód. Civ.—Si el vendedor no tiene la posesión de la cosa no puede enajenarla, porque no puede cumplir con los deberes que su carácter de vendedor le impone.

1^a— Véase: verb. *Pared divisoria*, núm. 1.

1^b— Véase: verb. *Materiales*, núm. 1.



teriales para la obra, siempre que ésta hubiese sido contratada por un precio determinado.—Jur. Civ., tom. 5, página 284, Ser. 4^a.

Propietario—Véase: *Adoquinado*, núms. 3 y 4—*Allanamiento*, núm. 1—*Afirmados*, núms. 1 y 2—*Acto ilícito*, núms. 3 y 6—*Boleto de compraventa*, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núms. 18, 24, 25, 55, 78, 108 y 111—*Locatario*, núm. 5—*Mandatario*, núm. 5—*Contrato de compraventa*, núm. 21—*Contrato de locación*, núm. 4—*Posesión*, núms. 8 y 14—*Obligación de hacer*, núm. 8—*Rematador*, núm. 2—*Reivindicación*, núm. 18—*Simulación*, núm. 6—*Violencia*, núm. 1—*Damnificado*, núm. 1—*Domicilio*, núm. 5—*Obras*, núm. 1—*Escepción*, núm. 2—*Derecho de retención*, núm. 4.

1^a. **Propietario ribereño**—Para que el terreno acrecentado por aluvión sea del dominio público, debe justificarse plenamente que su formación es posterior á la promulgación del Código Civil, pues por las antiguas leyes correspondía al propietario ribereño.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 263, Ser. 3^a.

1^b. **Prórroga**—De un término, corre desde la notificación de la concesión y no á continuación del prorrogado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 124, Ser. 3^a.

Prórroga—Véase: *Hipoteca*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núms. 12 y 15—*Escrito*, núm. 7—*Pruebas*, núm. 3.

Protesta—Véase: *Prescripción interrumpida*, núm. 1.

Protestantes—Véase: *Matrimonios*, núm. 1.

1^c. **Protocolización**—La sentencia que manda reducir á

1^a—Véase: verb. *Aluvión*, núms. 1 y 3.

1^b—Véase: verb. *Notificación*, núm. 4.

1^c—Véase: *Escritura pública*, núm. 25.



escritura pública el boleto de compraventa, solo imponible su protocolización en un Registro público.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 229, Ser. 4^a.

1^a. **Proveedor**—De un cuerpo del ejército nacional, a cuando haya recibido órdenes directas del jefe, carece de derecho para hacerlo personalmente responsable del transporte de los víveres suministrados.—Jur. Civ., tom. 14, pág. 214, Ser. 3^a.

1^b. **Proveedores**—Las ordenanzas militares no son aplicables a los proveedores, que en sus relaciones comerciales se rigen única y exclusivamente por las disposiciones del derecho común.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 214, Serie 3^a.

Providencia—Véase: *Costas*, núm. 2—*Como se pide*, número 1—*Testigos*, núm. 16—*Posiciones*, núm. 22.

Proyecto—Véase: *Contrato*, núm. 3—*Contrato de arrendamiento*, núm. 4.

1^c. **Prueba**—La existencia de hechos contradictorios hace ineludible la recepción de la causa á prueba.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 228, Ser. 3^a.

2. **Prueba**—Basta la afirmación del escribano sobre el conocimiento de las partes para no exigir testigos, la negativa de alguna de éstas no forma prueba.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 296, Ser. 3^a.

3. **Prueba**—La agregación de un expediente como parte de prueba es improcedente, debe pedirse testimonio

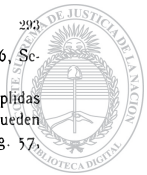
1^a—De acuerdo con los principios espuestos en la nota del verb. *Ordenanzas militares*, núm. 1.

1^b—Véase: *Ordenanzas militares*, núm. 1.

1^c—Art. 104 del Cód. de Proc.

2—Véase: verb. *Conocimiento*, núm. 1.

3—La jurisprudencia de la Cámara ha variado á cerca de este punto de procedimiento, pero parece que hoy se inclina en el sentido del sumario.



las piezas pertinentes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 46, Serie 4ª.

4. Prueba—Las diligencias de prueba no cumplidas dentro del término por negligencia de la parte, no pueden serlo después de vencido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 57, Ser. 4ª.

5. Prueba—El término de prueba, notificado por edictos, empieza á correr desde el vencimiento del término fijado en ellos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 382, Ser. 4ª.

6. Prueba—Siempre que exista disconformidad sobre algún hecho, debe recibirse la causa á prueba.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 91, Ser. 4ª.

7. Prueba—La conformidad de las partes sobre los hechos alegados hace improcedente la recepción de la prueba; la nulidad de la sentencia fundada en ese hecho, debe ser desechada.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 17, Ser. 4ª.

8. Prueba—La negligencia de la parte al no dar los sellos necesarios para el exhorto, hace improcedente su libramiento después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 94, Ser. 4ª.

9. Prueba—Vencido el término debe agregarse la producida, salvo el derecho de las partes para exigir la producción de la pedida antes de los alegatos.—Jur. Civ., tom. 9, pag. 138, Ser. 4ª.

Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Espediente determinado*, núm. 1. Pero cuando el expediente se pide por referencias generales, procede su agregación. Véase: tom. 4º, verb. *Espedientes*, núm. 2.

4—Art. 118 del Cód. de Proc.

6—Art. 104 del Cód. de Proc.

7—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 8.

8—La Cámara dice que en este caso hay negligencia, siendo de estricta aplicación el art. 118 del Cód. de Proc.

9—Arts. 118 y 213 del Cód. de Proc.



10. **Prueba**—Vencido el término de prueba debe agregarse, sin perjuicio del derecho de la parte para pedir antes de alegar la producción de las omitidas sin culpa suya.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 251, Ser. 4^a.

11. **Prueba**—Procede la recepción á prueba del incidente sobre la nulidad de la citación por ausencia del citado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 69, Ser. 4^a.

12. **Prueba**—La negativa de la agregación de un espediente, no basta para fundar la petición de testimonio de sus piezas, después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 82, Ser. 4^a.

13. **Prueba**—La sentencia que no hace lugar á las excepciones opuestas á la ejecución de una sentencia es apelable, aun cuando no se haya producido prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 105, Ser. 4^a.

14^a. **Prueba**—El término para oponerse al auto de prueba, corre para cada parte desde el día de la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 322, Ser. 4^a.

14^b. **Prueba**—La falta de prueba y la confesión contradictoria con la esposición de la demanda, hacen ineludible el rechazo de la acción con especial condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 242, Ser. 4^a.

15^a. **Prueba**—Procede la recepción de la causa á prueba

10—Véase nota precedente.

11—Véase: verb. *Citación*, núm. 2.

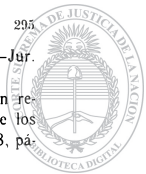
12—Véase: verb. *Espediente*, núm. 5.

13—Véase: verb. *Excepciones*, núm. 12.

14^a—Véase: verb. *Notificación*, núm. 13.

14^b—La prueba incumbe al actor y su omisión implica pérdida del pleito—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.—La confesión contradictoria con la demanda implica temeridad, malicia y mala fe, siendo consecuencia de esto la imposición de las costas.

15^a—Es el caso del art. 104 del Cód. de Proc.



si varios invocan derechos sobre una misma cosa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 326, Ser. 4ª.

15^b. Prueba—La contestación de la demanda en rebeldía, no basta para eximir al actor de la prueba de los hechos en que funda se derecho.—Jur. Civ., tom. 8, página 87, Ser. 4ª.

Prueba—Véase: *Acto ilícito*, núm. 10—*Alquiler*, número 2—*Autenticidad*, núm. 2—*Carta*, núm. 1—*Cláusulas*, núm. 1—*Consejo de Higiene*, núm. 1—*Contradocumento*, núms. 2 y 3—*Contrato de arrendamiento*, núm. 4—*Contrato por escritura pública*, núm. 2—*Contrato verbal*, núms. 1 y 3—*Cosa juzgada*, núm. 7—*Costas*, números 1, 49 y 59—*Daños y perjuicios*, núms. 3, 45, 73, 74 y 92—*Declaraciones*, núms. 1 y 6—*Declaratoria de herederos*, núm. 5—*Dictamen pericial*, núm. 1—*Diligencia de prueba*, núms. 1 y siguientes—*Divorcio*, número 8—*Documento privado*, núms. 1 y 6—*Documentos*, núms. 1, 3, 7 y 9—*Documento de descargo*, núm. 1—*Donación*, núm. 1—*Edictos*, núm. 1—*Escritura pública*, número 17—*Escepción*, núm. 2—*Escepción de compensación*, núm. 1—*Escepciones*, núm. 7—*Filiación legítima*, números 1 y 2—*Filiación natural*, núms. 1, 2, 3, 4, 6 y 17—*Hijo natural*, núms. 1 y 11—*Hijuela*, núm. 1—*Illegitimidad*, núm. 1—*Interdicto*, núms. 2, 8 y 9—*Interdicto de recobrar*, núm. 4—*Informes*, núm. 1—*Libros de comercio*, núms. 1 y 2—*Liquidación*, núm. 2—*Mandatario*, nú-

15^b—De acuerdo con la jurisprudencia sentada de una manera uniforme. Hemos combatido esta interpretación de la ley como equivocada, y creemos que el error procede de la confusión que se hace de las palabras *procedencia* ó *pertinencia*. Véase verb. *Diligencias de prueba*, núm. 18; como asimismo el tom. 4º, Inst., verb. *Diligencias de prueba*, núm. 10 y *Término extraordinario*, núm. 2; y tom. 3º, verb. *Diligencias de prueba*, núm. 14, y *Prueba*, núm. 10.



mero 4.—*Novación*, núm. 1—*Nulidad de una escritura pública*, núm. 2—*Nulidad de una sentencia*, núms. 2, 3 y 8—*Nulidad de un título*, núm. 1—*Nulidad de testamento*, núms. 1 y 7—*Obligación*, núms. 1 y 2—*Oficinas públicas*, núm. 2—*Perito*, núms. 1 y 2—*Peritos*, número 8—*Petición de herencia*, núm. 1—*Posesión*, núms. 4 y 15—*Posesión judicial*, núm. 8—*Posiciones*, núm. 6 y 39—*Precio*, núm. 1—*Servicios*, núm. 7—*Sentencia*, números 10—*Simulación*, núm. 13—*Tacha*, núm. 3—*Término de prueba*, núms. 1 y siguientes—*Término extraordinario*, núms. 2, 6 y 7—*Testamento*, núm. 1—*Testigos*, números 15, 20 y 27—*Testimonio*, núm. 1—*Títulos de propiedad*, núm. 16—*Escepción dilatoria*, núm. 4.

1ª. Prueba de la acción—Al demandante corresponde la prueba de la acción: si no la justifica debe ser condenado en costas.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 4ª.

1ª. Prueba del actor—La falta de prueba del actor, hace procedente la absolución del demandado.—Jur. Civ., tomo 4, pág. 201, Ser. 3ª.

2. Prueba del actor—La contestación de la demanda en rebeldía, no basta para eximir al actor de la prueba de los hechos en que funda su derecho.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 87, Ser. 4ª.

Prueba por confesión ficta—Véase: *Ilegitimidad*, núm. 1

1ª. Prueba de un contrato—La prueba de las modificacio-

1ª—Véase: verb. *Costas*, núm. 33.

1ª—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

2—De conformidad con la jurisprudencia sentada. Véase: Inst. tomo 3º, verb. *Rebeldía*, núms. 9 y 10.

1ª—Las modificaciones introducidas en un contrato y alegadas por la parte son hechos nuevos que se traen á tela de juicio; son verdaderas escepciones. En este carácter corresponde su prueba al que las alega, en virtud del conocido principio consagrado en el antiguo derecho—Ley 8ª, tit. 3º, Part. 3ª.—*Reus in excipiendo fit actor*.



nes de un contrato, corresponde al que las alega.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 293, Ser. 4^a.

1^a. Prueba documental—La referencia en la demanda a documentos que no se acompañan, no permite su agregación después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 381, Ser. 3^a.

2^a. Prueba documental—El heredero aun cuando no desconozca la validez del documento en que se funda la obligación, puede invocar la falsedad de la causa que él expresa, pero como escepcionante carga con la prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

1^b. Prueba del dolo—Al que alega el dolo corresponde la prueba de su existencia.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 204, Ser. 4^a.

Prueba del error—Véase: *Escritura*, núm. 2—*Nulidad de una escritura pública*, núm. 3.

1^c. Prueba escrita—Para que proceda la prueba testimonial sobre modificaciones á un proyecto de contrato, el principio de prueba escrita debe referirse terminantemente á las modificaciones, no basta el proyecto para hacerla procedente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 302, Ser. 3^a.

2^b. Prueba escrita—Aun cuando no se requiere que el principio de prueba por escrito se refiera directamente al contrato, es necesario que de sus términos resulte vero-

1^a—Siempre que se encuentre en las condiciones espresadas en la nota del verb. *Documentos*, núm. 9 cuando se presentan dentro del término, pero si dicho término ha vencido hay negligencia de parte del interesado—art. 118 del Cód. de Proc.

2^a—Véase: verb. *Falsedad*, núm. 6.

1^b—De acuerdo con la terminante disposición de la Ley 2^a, tit. 14, Part. 3^a.

1^c—Véase: verb. *Contrato*, núm. 3.

2^b—Véase: verb. *Contrato*, núm. 11.



símil su existencia para que proceda la prueba testimonial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 415, Ser. 3^a.

3. Prueba escrita—El principio de prueba escrita que la ley exige, para hacer procedente la prueba testimonial, en contratos de mayor cuantía, puede resultar de la contestación á la demanda.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 416, Serie 4^a.

4. Prueba escrita—Para que el principio de prueba escrita haga procedente la testimonial, es necesario que el documento exhibido arroje por sí solo fuertes presunciones de la verdad de la acción instaurada ó que contenga indicaciones precisas sobre el objeto de la convención.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 388, Ser. 4^a.

5. Prueba escrita—El reconocimiento de una deuda en el testamento importa un principio de prueba escrita que hace procedente la testimonial á los efectos de justificar la veracidad de la confesión.—Jur. Civ., tom. 9, página 330, Ser. 4^a.

6. Prueba escrita—Cualquier que sea el principio de prueba por escrito, la testimonial es improcedente para justificar la existencia de una sociedad cuyo capital exceda del límite para el cual la ley exige ineludiblemente el contrato por escrito.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 172, Serie 4^a.

Prueba escrita—Véase: *Libros de comercio*, núm. 2—*Sociedad sobre inmuebles*, núm. 1—*Contrato bilateral*,

3—Las manifestaciones hechas en juicio constituyen un documento en el sentido del art. 1191 del Cód. Civ., que hace perfectamente verosímil el hecho, y por consiguiente admisible la prueba testimonial desde que existe el principio de prueba exigido por la ley.

4—Véase: verb. *Documento*, núm. 3.

5—Véase: verb. *Confesión*, núm. 2.

6—Véase: verb. *Contrato escrito*, núm. 1.



núm. 2—*Contrato*, núm. 11—*Contrato verbal*, núm. 8.

1ª. Prueba por instrumentos públicos—No procede recepción de prueba si la única pertinente consiste en instrumentos públicos presentados por las partes: debe declararse la cuestión de puro derecho.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 58, Ser. 3ª.

1ª. Prueba pericial—Siempre que sea posible el reconocimiento de firma por peritos, no procede la prueba por testigos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 164, Ser. 4ª.

Prueba pericial—Véase: *Administración*, núm. 1—*Peritos*, núm. 5.

1ª. Prueba plena—Si no existe prueba plena sobre el precio del terreno que motivó la obligación de hacer, convertida en la de indemnizar daños y perjuicios, los jueces deben fijarla equitativamente.—Jur. Civ., tom. 7, página 220, Ser. 3ª.

1ª. Prueba plena—Las notificaciones como instrumentos

1ª—La cuestión versaba sobre entrega de una menor. El padre legítimo acompañó la partida de bautismo correspondiente: el demandado, que tenía en su poder á la menor dijo, que si bien era cierto que la menor reclamada era hija de la esposa del actor, no era hija legítima de ella por haber nacido dos meses después de celebrarse el matrimonio, ni tampoco era hija legítima del actor por no haber sido legítimada en el tiempo y forma que la ley prescribe. En comprobación de ello se acompañaron algunas partidas. Como se ve, tanto los hechos en que el actor fundaba su acción como los aducidos por el demandado, y los únicos sobre los cuales la prueba sería pertinente, constaban de instrumentos públicos como son las partidas de que se hicieron mérito. Por otra parte, los interesados estaban de acuerdo sobre lo fundamental de la acción entablada.

1ª—No puede admitirse la prueba por testigos como única y con exclusión de la pericial, pero debe ser admitida como concurrente de esta. Así lo tiene resuelto la Cámara. Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 7.

1ª—Véase verb. *Daños y perjuicios*, núm. 43.

1ª—Véase: verb. *Notificaciones*, núm. 2.



públicos, hacen prueba plena de las aserciones del oficial público, mientras no se justifique su falsedad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 383, Ser. 4^a.

2. Prueba plena—El informe de peritos calígrafos no forma prueba plena; el Juez debe hacer por sí mismo el cotejo y puede desechar el dictamen pericial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

Prueba plena—Véase: *Testigos*, núm. 3—*Documento privado*, núms. 5 y 7—*Locación de servicios*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 33 y 43—*Información supletoria*, núm. 5—*Herederos*, núm. 5—*Impedimentos dirimentes*, núm. 1—*Recusación*, núm. 10—*Contradocumento*, núm. 2—*Condominio*, núm. 9.

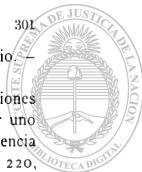
1^a. Prueba preconstituida—La prueba preconstituída ó constante de instrumentos públicos de fecha anterior á la demanda, permite á los jueces fundar en ella su sentencia, aun cuando durante el término no se haya producido prueba para justificar la acción.—Jur. Civ., tom. 6, página 434, Ser. 3^a.

1^b. Prueba preparatoria—Sobre el derecho del deman-

2—Véase: verb. *Cotejo*, núm. 1.

1^a—Se trataba de una demanda sobre filiación natural; al iniciarla se acompañó la partida de bautismo expedida por el cura párroco en la que el padre reconocía al hijo como suyo y firmaba el asiento. Se dijo que ni había necesidad de demanda porque la filiación constaba en una forma debidamente autorizada por la ley, que reviste la misma fuerza que la sentencia que se deseaba obtener. Como los comprobantes de la filiación estaban á la vista y tenían tal carácter que en su presencia el reconocimiento judicial no es sino la ratificación del reconocimiento extrajudicial hecho por el padre. Poco importaba que esa demostración no se hubiese producido durante el término probatorio, cuando el documento fehaciente que obraba en autos importaba una prueba preconstituída cuya eficacia no puede depender de que ella sea agregada durante el término de prueba.

1^b—El interrogatorio presentado para acreditar previamente ciertos



dado, no es procedente como preparatoria del juicio — Jur. Civ., tom. 1, pág. 110, Ser. 4^a.

1^a. Prueba de presunciones—La prueba de presunciones no basta si la acción de simulación se deduce por uno de los autores, es requisito indispensable la existencia de un contradocumento.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 220, Ser. 4^a.

1^b. Prueba procedente—El Juzgado no puede apreciar la procedencia de la prueba hasta dictar sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 360, Ser. 4^a.

2. Prueba procedente—El Juzgado no puede pronunciarse sobre la procedencia de la prueba antes de dictar sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 377, Serie 4^a.

1^c. Prueba de la rescisión—Al vendedor que alega la rescisión del contrato de compraventa corresponde la prueba de la escepción, si no la justifica debe ser condenado á su cumplimiento en un término perentorio, bajo pena de resarcir las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 371, Ser. 3^a.

1^d. Prueba en segunda instancia—No procede la recepción de prueba en segunda instancia sobre hechos que de-

hechos, versaba sobre el derecho de la parte á ciertos bienes, lo que no procede como medida previa—arts. 67 y 70 del Cód. de Procedimientos.

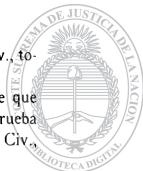
1^a—De acuerdo con la jurisprudencia y con la ley. Véase: verbo *Contradocumento*, núm. 1.

1^b—Lo contrario importaría un prejuzgamiento. Es necesario no confundir la procedencia de la prueba con la pertinencia de ella. Véase: verb. *Diligencias de prueba*, núm. 18 y especialmente su nota.

2—Véase nota precedente.

1—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 14.

1^d—Según disposición terminante del art. 247 del Cód. de Proc.



bieron probarse en la estación oportuna.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 105, Ser. 3^a.

1^a. Prueba de soltura—La presunción de la ley de que la madre natural es soltera, solo cede ante la prueba que corresponde al que le niega ese carácter.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 229, Ser. 3^a.

1^b. Prueba supletoria—Para justificar el bautismo procede siempre que no existe la partida en el lugar en que se tenga seguridad que tuvo lugar el acto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 236, Ser. 3^a.

1^c. Prueba testimonial—Es procedente aun cuando existan menores interesados, siempre que los mayores reconozcan la deuda, pues ese reconocimiento importa el principio de prueba escrita que la ley exige.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 73, Ser. 3^a.

1^d. Prueba testimonial—Para que la prueba testimonial pueda ser aceptada, debe presentarse la lista de los testigos tres días antes del vencimiento del término.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 170, Ser. 4^a.

1^a—Véase: verb. *Madre natural*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Bautismo*, núm. 1.

1^c—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Prueba testimonial*, núm. 1. La confesión de los herederos sin que sea robustecida por la prueba de testigos solo obliga a los herederos mayores. Véase: verb. *Herederos mayores*, núm. 2.

1^d—La lista se presentó el 17 y el término vencía el 19. Es fuera de duda que los testigos no podían examinarse dentro del término de prueba como lo preceptúa el art. 118 del Cód. de Proc., pues el artículo 184 ordena que la lista se ponga de manifiesto en Secretaría por el término de tres días antes del designado para la audiencia. Se dijo además, que el día de la presentación no podía contarse porque el escrito se presentó a las dos p. m., siendo evidente que solo podía salir despachado a última hora cuando ya no había posibilidad de notificar a las partes.



2. **Prueba testimonial**.—Es procedente siempre que las diferentes partidas de una cuenta corriente, originadas en distintas épocas, no alcancen separadamente al máximo que la ley fija, aun cuando en su conjunto excedan de él.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 73, Ser. 3^a.

3. **Prueba testimonial**.—Es improcedente para justificar la simulación deducida por uno de los otorgantes del contrato en tanto no existe contradocumento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 299, Ser. 3^a.

4^a. **Prueba testimonial**.—Es improcedente para justificar la existencia de una promesa de contrato verbal por mayor valor del que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 5, página 387, Ser. 3^a.

4^b. **Prueba testimonial**.—No puede destruir las constancias de una escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, página 208, Ser. 4^a.

5^a. **Prueba testimonial**.—Aun careciendo el mandatario de facultad especial para el acto, el tercero puede jus-

2—Porque en este caso hay tantos contratos cuantas partidas correspondientes á distintas épocas se cobren y entonces no rige la prohibición del art. 180 del Cód. de Proc. y 1191 del Cód. Civ., que exigen que el contrato no exceda de 200 pesos. Adeniás en el caso que nos ocupa, no se trataba precisamente de contratos sino de *hechos realizados*, los que están regidos por la última parte del art. 1191 citado, que admite toda clase de prueba para su constatación.

3—Véase: verb. *Contradocumento*, núm. 1.

4^a—Véase: *Contrato verbal*, núm. 4.

4^b—En el caso del sumario, no se resolvió tal cosa. Solo se dijo que «estos testimonios»,—se refiere á los presentados en el expediente—«fallan sobre el punto capital, lo que era precisamente el monto que arrojaban los testimonios otorgados por el Escribano, están lejos de servir de base á una declaración de falsedad de la escritura pública.» Se ve por los párrafos transcritos que lo resuelto fué todo lo contrario de lo sentado en el sumario.

5^a—Véase verb. *Mandatario*, núm. 6.



tificar por medio de prueba testimonial la existencia del mandato verbal.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3^a.

5^b. Prueba testimonial—Si bien las afirmaciones del testador no pueden aceptarse como una verdad incontrovertible, la prueba testimonial para destruirlas, debe revestir caracteres especiales que permitan calificarla de plena y absoluta.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 296, Ser. 4^a.

6. Prueba testimonial—Las declaraciones de testigos que no dan razón de sus dichos, no forman la prueba que se exige como fundamento de una sentencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 134, Ser. 3^a.

7. Prueba testimonial—Negada la existencia del contrato verbal de compraventa, no procede la prueba testimonial para justificarla si no existe principio de prueba por escrito.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 415, Ser. 3^a.

8. Prueba testimonial—Para hacerla procedente en contratos de mayor cuantía, basta que el principio de prueba por escrito resulte del mismo expediente por confesión de la parte que niega la existencia del contrato.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 365, Ser. 4^a.

9. Prueba testimonial—La prueba testimonial es improcedente para justificar un contrato verbal de compraventa por mayor valor del que la ley fija si no existe principio de prueba escrita.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 388, Ser. 4^a.

10. Prueba testimonial—Debe pedirse en tiempo habil

6.—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 3.

7.—Véase: verb. *Contrato verbal*, núm. 5.

8.—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara. Véase: *Prueba escrita*, núm. 3.

9.—Véase: verb. *Contrato verbal*, núm. 8.

10.—De conformidad con la ley —arts. 118 y 184 del Cód. de Proc.— La jurisprudencia ha exigido que los testigos sean presentados cuatro días antes: tres para estar la lista de manifiesto en Secretaría y el cuarto para su examen.



para la fijación de la lista en Secretaría.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 32, Ser. 4^a.

11. Prueba testimonial—La prueba de la conformidad de un condómino con el contrato de arrendamiento del inmueble sobre que existe el condominio, debe resultar del contrato mismo firmado por el otro condómino; la testimonial no es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 281, Ser. 4^a.

Prueba testimonial—Véase: *Libros de comercio*, núm. 2—*Contrato*, núm. 3—*Confesión*, núm. 1—*Declaraciones*, núms. 1 y 5—*Documento privado*, núm. 5—*Autenticidad*, núm. 1—*Posesión*, núm. 8—*Prueba pericial*, núm. 1—*Prueba escrita*, núm. 3—*Excepción de pago*, núm. 2—*Contrato verbal*, núm. 8—*Contrato de locación*, núm. 2—*Confesión*, núm. 2.

1. Pruebas—Los informes de las oficinas públicas, ya sean de la administración ó de los escribanos de registro, son pruebas que ofrecen más garantías de exactitud que la pericial, cuando se trata de terrenos sin edificio.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 220, Ser. 3^a.

2. Pruebas—Deben ser pedidas en tiempo hábil para que puedan ser producidas dentro del término.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 331, Ser. 4^a.

3. Pruebas—Procede la recepción de las pruebas pedidas después de vencido el término, si en tiempo oportuno se pidió y era procedente la prórroga, aun cuando no hubiese sido decretada en tiempo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 297, Ser. 4^a.

Publicación—Véase: *Edictos*, núms. 1, 4 y 5—*Avisos*, núm. 1.

11—Véase: verb. *Arrendamiento*, núm. 3.

1—Véase: verb. *Administración*, núm. 1.

2—Art. 118 del Cód. de Proc.

Pupilo—Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 2—*Tutor*, núms. 1, 5 y 8—*Rendición de cuentas*, núms. 7 y 8.

1. Puro derecho—No procede la recepción de la causa a prueba si la única pertinente consiste en instrumentos públicos presentados por las partes; debe declararse la cuestión de puro derecho.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 58, Ser. 3^a.

Puro derecho—Véase: *Sentencia*, núm. 9—*Cosa juzgada*, núm. 7.

1—Véase: *Prueba por instrumento público*, núm. 1.





Querella—Véase: *Absolución*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núm. 9.

Querido—Véase: *Concubinato*, núm. 1.

1. Quiebra—Después de la declaración, corresponde a

1.—La mujer al pedir separación de bienes, es considerada por la ley acreedora del marido como resulta claramente del texto del art. 1298 del Cód. Civ. La circunstancia de que el marido conserve la administración de los bienes de la mujer y de los hijos—art. 1406 del Cód. de Com.—no obsta a que sean los Tribunales de Comercio quienes conozcan de la demanda de separación de bienes, cuando aquél estuviese concursado, porque la demanda de separación de bienes no comprende solamente los bienes propios de la mujer, sino los gananciales, en cuya división podrían ser afectados los derechos de los acreedores del marido. Con arreglo al art. 1402 del Cód. de Com. las únicas acciones que después de la declaración de quiebra puede ejercitar el fallido sin la intervención del síndico del concurso, son aquellas inherentes a su persona ó meramente conservatorias de sus bienes y derechos, tales como las que prescriben los arts. 1405, 1406, 1463, etc., del mismo Cód. Que esa facultad, que no implica sino una escepción que como tal debe interpretarse restrictivamente, no puede hacerse extensiva al juicio de separación de bienes por cuanto en éste el concurrente no ejercita una acción individual de mera conservación, sino por el contrario entra a discutir con su esposa la propiedad de todos los bienes del matrimonio cuya separación forzosamente tiene que afectar los intereses de los acreedores del concurso, desde que al salir esos bienes de la masa, el haber de ésta disminuye. «No es correcto ante los preceptos de la sana crítica deducir las consecuencias que algun pretenden, fundándose en

la jurisdicción comercial conocer en el juicio que sobre separación de bienes pretenda iniciar la esposa.—Jur. Civ., tom. 7, página 54, Ser. 4ª.

Quiebra—Véase: *Poder*, núm. 3.

el hecho de que conservando el marido la administración de los bienes de su mujer é hijos tenga también derecho á intervenir en el juicio de que se trata, con absoluta prescindencia de los representantes del concurso, si se recuerda que el fallido dada su incapacidad legal carece de personería para reconocer y desprenderse de bienes que desde el momento de la quiebra caen bajo la jurisdicción comercial para ser oportunamente clasificados como sucede precisamente con los de la mujer, pues con arreglo al art. 1497, inc. 5º del ya citado Código, pertenecen á la categoría de acreedores de dominio, siempre que compruebe en juicio ordinario que sus bienes entraron en poder del marido, lo que viene á demostrar aun más si cabe, que esa justificación debe hacerse con audiencia del síndico del concurso y ante el Tribunal de Comercio. Por otra parte, es de observar que al fallido ni siquiera le es dado hacer uso del derecho que le confiere el mencionado art. 1406, sin que previamente recabe la venia del Juez que dicta la declaración, que trayendo ésta en términos generales aparejada la inmediata suspensión de las facultades administrativas de aquél, así como la ocupación de los bienes que le pertenecen sin distinción de ningún género, es claro y lógico que para recuperar ese derecho tiene necesariamente que reclamarlo con los comprobantes del caso al mismo Juez que lo hace. El argumento que puede hacerse de que en atención á la naturaleza eminentemente civil del juicio de separación de bienes, no debe ser sometido á los Tribunales de Comercio, se contesta con solo tener en cuenta que los arts. 1408 y 1410 del Cód. de Com., reputan actos con relación á la masa, sean ó no sean comerciales, los ejecutados por el fallido después de la cesación de pagos, siendo de agregar que no por la circunstancia especial, de que dicho Tribunal esté llamado á conocer en estos autos, deje de sustanciarlo y resolver sin aplicar las leyes civiles que rijen la materia—art. 720 del Cód. de Proc. y 1387 del Cód. de Comercio.





1. **Ratificación**—La cláusula que impone la ratificación del mandante, importa el reconocimiento expreso por el tercero, de la carencia de facultad del mandatario para dar por terminado el contrato.—Jur. Civ., tom. 2, página 350, Ser. 3^a.

2. **Ratificación**—La exigida por cláusula del contrato escrito, debe llenar las mismas formas que el principal, no siendo bastante la forma tácita.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 350, Ser. 3^a.

3^a. **Ratificación**—Ordenada por los jueces, solo importa el reconocimiento de la autenticidad de las firmas que suscriben el acto; si éste ha sido firmado ante el juez ó actuario, esa diligencia no es necesaria para exigir su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 191, Ser. 4^a.

3^b. **Ratificación**—del capaz, revalida y da fuerza legal á todos los actos ejecutados personalmente ó por apoderado durante la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 61, Serie 4^a.

4. **Ratificación**—Del acto, hecha por el mandante con fecha posterior, tiene igual valor que la existencia es-

1—Véase: verb. *Mandatario*, núm. 3.

3^b—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 5.

4—Véase: *Mandante*, núm. 3.



presa de autorización para llevarlo á cabo.—Jur. Civ. tom. 9, pág. 337, Ser. 4^a.

Ratificación—Véase: *Mandatario*, núm. 3—*Mandato*, núm. 12—*Sindicato*, núm. 1—*Firma*, núm. 4.

1^a. **Rebelde**—Las distintas rebeldías en que incurra el demandado después de contestada la demanda, no lo hacen pasible de la condenación en costas que la ley fulmina contra el declarado rebelde.—Jur. Civ., tom. 6, página 201, Ser. 4^a.

Rebelde—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1.

1^b. **Rebeldía**—No puede darse por contestado en rebeldía un traslado para el cual no se han acompañado las respectivas copias.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 21, Ser. 3^a.

2. **Rebeldía**—Aun cuando se haya admitido y proveído el escrito de contestación á la demanda, debe ordenarse su devolución si fué presentado fuera del término y existía rebeldía acusada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 54, Ser. 3.

3. **Rebeldía**—Acusada rebeldía, procede la devolución del escrito presentado después del vencimiento del término que la ley concede para evacuar el traslado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 97, Ser. 3^a.

4. **Rebeldía**—La de la parte, no permite su condenación sin más sustanciación; debe abrirse la causa á prueba; la omisión de este trámite esencial vicia de nulidad la sentencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 263, Ser. 3^a.

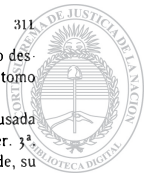
1^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 48.

1^b—El art. 21 del del Cód. de Proc. ordena que de todo escrito que deba darse traslado, debe acompañarse copia. Estas copias se entregarán á la otra parte al notificársele el traslado. Si la parte no cumple con este deber impuesto por la ley, tampoco puede acusarle rebeldía á la otra parte porque el término no le corre.

2—Véase: verb. *Escrito*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Escrito*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Nulidad de una sentencia*, núm. 2.



5. **Rebeldía**—Procede si el escrito fué presentado después de acusada, según cargo de hora.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 218, Ser. 3^a.

6. **Rebeldía**—El escrito presentado después de acusada debe ser devuelto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 221, Ser. 3^a.

7. **Rebeldía**—Consentida la declaración de rebelde, su tardía presentación no permite dejar sin efecto aquel auto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 237, Ser. 3^a.

8. **Rebeldía**—Justificada la imposibilidad de contestar la demanda por hechos ajenos á la voluntad de la parte, la rebeldía es improcedente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 5, Ser. 4^a.

9. **Rebeldía**—La contestación en rebeldía del traslado de la demanda, no basta para dictar embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 35, Ser. 4^a.

10. **Rebeldía**—No procede ésta si dentro del término prorrogado se opusieron y sustanciaron escepciones.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 50, Ser. 4^a.

11. **Rebeldía**— Existiendo parte coadyuvantes, la re-

5—El escrito acusando la rebeldía fué presentado en el mismo día, pero horas antes de que se presentare el otro escrito cuya falta de presentación motivaba la acusación de rebeldía. Se declaró procedente la rebeldía acusada—art. 45, Cód. de Proc.

6—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: verb. *Escrito*, núm. 3.

7—El art. 438 del Cód. de Proc. establece, que la sustanciación del juicio, no puede retrogradar aunque el rebelde comparezca.

8—El demandado alegó haber estado preso como causal para no contestar la demanda. El contrario no desconoció ese hecho; se dió por exacta la causal alegada, y siendo ésta bastante para escusar la rebeldía, se declaró improcedente la acusación.

9—De acuerdo con la jurisprudencia constante. Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 13.

10—De acuerdo con lo que dispone el art. 98 del Cód. de Proc., en su última parte.



beldía acusada á una de ellas no afecta los derechos de la otra, aun cuando sea uno solo el representante de ambos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 67, Ser. 4ª.

12. **Rebeldía**—Vencido el término para contestar la demanda, procede la devolución del escrito presentado después de acusada la rebeldía.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 95, Ser. 4ª.

13. **Rebeldía**—El abandono del juicio después de haber tomado intervención, hace procedente la declaratoria de rebeldía.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 390, Ser. 4ª.

14. **Rebeldía**—El defensor de ausentes debe intervenir en los juicios en representación del ausente pero del declarado rebelde.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 390, Ser. 4ª.

15. **Rebeldía**—El escrito evacuando el traslado, presentado después de vencido el término y acusada la rebeldía, debe ser devuelto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 30, Ser. 4ª.

16. **Rebeldía**—No procede el señalamiento de nuevo día para absolver posiciones después de consentido el auto

12—Véase: verb. *Escrito*, núm. 6.

13—El art. 433 del Cód. de Proc. dice que se seguirá el juicio en rebeldía cuando el demandado no comparezca ó cuando abandone el juicio después de haber comparecido.

14—Es necesario no confundir la disposición del art. 433 del Cód. de Proc. con la del 80 del mismo Código. La disposición de este artículo se refiere á la citación y emplazamiento de personas inciertas ó cuyo domicilio se ignore y que no hubieran hasta entonces comparecido á estar á derecho en el juicio, explicándose así el nombramiento de un defensor de oficio para que los represente y defienda. Pero no sucede lo mismo cuando la citación del demandado se ha hecho en persona, cuando ha comparecido al juicio y constituido su representación abandonándolo y cambiando de domicilio después, sin comparecer á pesar de las citaciones que se le han hecho, siendo en este caso, procedente la rebeldía y la continuación del juicio en la forma que establece el artículo 433 citado.

15—Véanse los núms. 3, 5, 6 y 12.

16—Véase verb. *Posiciones*, núm. 35.



que las da por absueltas en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 34, Ser. 4ª.

17. **Rebeldía**—La contestación de la demanda en rebeldía, no basta para eximir al actor de la prueba de los hechos en que funda su derecho.—Jur. Civ., tom. 8, página 87, Ser. 4ª.

18. **Rebeldía**—Procede si el demandado no ha contestado el traslado de la demanda después de terminado el artículo previo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 14, Ser. 4ª.

19. **Rebeldía**—Si la absolución de posiciones no tiene lugar sin culpa del absolvente, no procede la rebeldía.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 126, Ser. 4ª.

20. **Rebeldía**—Solo puede darse por absueltas las posiciones en rebeldía, si se abre la audiencia y no se presenta el absolvente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 89, Ser. 4ª.

21. **Rebeldía**—Para resolver si procede la absolución de posiciones en rebeldía, debe existir en autos constancia de que se abrió la audiencia.—Jur. Civ., tom. 10, página 303, Ser. 4ª.

22. **Rebeldía**—El escrito presentado después de acusada rebeldía, debe ser devuelto.—Jur. Civ., tom. 10, página 330, Ser. 4ª.

Rebeldía— Véase: *Apercibimiento*, núm. 1—*Posiciones*, núms. 2, 6, 7, 16, 31, 32, 33, 34, 35 y 38—*Términos perentorios*, núm. 1—*Costas*, núm. 48—*Embargo preventivo*, núms. 18 y 35.

17—Véase: *Prueba del actor*, núm. 2.

18—El art. 98 del Cód. de Proc. establece que el traslado de la demanda debe evacuarse dentro de nueve días después de resueltas las excepciones y terminado el artículo previo.

19—Véase: verb. *Posiciones*, núm. 38.

20—Véase: verb. *Audiencia*, núm. 1.

21—Véase: verb. *Audiencia*, núm. 2.

22—Véase: verb. *Escrito*, núm. 12, y *Rebeldía*, núms. 2, 5, 6, 12 y 15.



1ª. **Recaudos**—El Juzgado no puede de oficio exigir que la parte presente los recaudos en que funda su derecho.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 316, Ser. 4ª.

Recaudos—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 2, 20 y 36.

Recepción—Véase: *Cuenta*, núm. 1.

1ª. **Recibo**—El recibo de descargo, cualquier que sea el valor, y documentos recibidos, solo está sujeto al uso de la estampilla que la ley de sellos fija para los recibos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 70, Ser. 4ª.

Recibo—Véase: *Estampilla*, núm. 2—*Escepción de pago*, núm. 5.

Reclamación—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 25—*Adoquinado*, núm. 4—*Demanda ordinaria*, núm. 1.

Reclusión—Véase: *Hijos menores*, núm. 2.

Recomendantes—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 59.

1ª. **Reconocimiento**—La falta de contestación y aun el reconocimiento ficto que resulta de las posiciones absueltas en rebeldía, no bastan para condenar al demandado; se requiere que el demandante justifique los extremos de su acción.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 416, Ser. 3ª.

2. **Reconocimiento**—Procede el reconocimiento por la esposa; de un documento firmado por ella á ruego del esposo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 79, Ser. 4ª.

Reconocimiento—Véase: *Autenticidad*, núm. 3—*Domnio público*, núm. 1—*Filición natural*, núms. 7, 10, 12 y 18—*Firma*, núm. 7—*Herederos*, núm. 2—*Herederos mayores*, núm. 2—*Cláusulas*, núm. 1—*Escritura*, núm. 14—*Incapacidad*, núm. 3—*Embargo preventivo*, núms. 14 y

1ª—Véase: verb. *De oficio*, núm. 5.

1ª—Véase: verb. *Estampilla*, núm. 2.

1ª—Véase: verb. *Posiciones*, núm. 7.

2—Véase: *Documento*, núm. 4.



47—*Locación de servicios*, núm. 4—*Cartas privadas*, número 1—*Hijo natural*, núms. 9 y 11—*Confesión*, núm. 2—*Administrador judicial*, núm. 3.

Reconocimiento expreso—Véase: *Ilegitimidad*, núm. 1.

Recuperar—Véase *Venta*, núm. 5.

1. Recurso—La escritura de compromiso forma parte integrante del laudo arbitral, siempre que se pretenda su ejecución omitiendo la presentación de la primera, la escepción de falsedad de la ejecutoria es procedente, aun cuando no se haya interpuesto recurso ni deducido acción contra el segundo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 160, Ser. 4^a.

Recurso—Véase: *Inapelable*, núm. 1.

1^a. Recurso de apelación—El apelado carece de derecho para oponerse al desistimiento del recurso que haga el apelante.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 144, Ser. 3^a.

1^b. Recurso de apelación—El recurso de apelación de las resoluciones municipales, debe interponerse dentro del término de cinco días y ante la autoridad municipal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 49, Ser. 4^a.

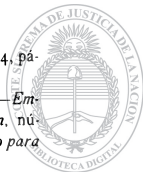
1^c. Recurso de apelación—Los recursos de nulidad y apelación pueden interponerse conjunta ó separadamente

1—Véase: *Escritura de compromiso*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Apelación*, núm. 2.

1^b—La Cámara ha declarado en reiteradas decisiones que hasta tanto no se dicte la ley de procedimientos en lo contencioso administrativo, debe aplicarse el procedimiento ordinario ó común. De acuerdo con esta jurisprudencia, los recursos contra las resoluciones municipales, deben ser interpuestas ante la misma Corporación y dentro del plazo fijado por el Cód. de Proc.

1^c—El Dr. Mendez Paz dijo, que no habiéndose deducido el recurso de nulidad juntamente con el de apelación como lo dispone el art. 239 del Cód. de Proc., no procedía aquel recurso. La Cámara revocó el auto diciendo, que el recurso de nulidad fué deducido tres horas



dentro del término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 4, página 257, Ser. 4^a.

Recurso de apelación—Véase: *Apelación*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 10—*Recurso de reposición*, número 2—*Apelación de hecho*, núms. 1 y 2—*Término para apelar*, núm. 1—*Notificación*, núm. 12 y 13.

1^a. **Recurso directo**—Ante la Cámara, en los asuntos contencioso-administrativos, solo procede por denegación del de apelación interpuesto ante la municipalidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 225, Ser. 4^a.

1^b. **Recurso de fuerza**—No procede el recurso de fuerza en tanto no se hayan agotado todos los recursos ante el Eclesiástico.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 232, Serie 3^a.

2. **Recurso de fuerza**—No procede el de la Curia Eclesiástica que admite una información *ad-perpetuam*.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 177, Ser. 4^a.

1^a. **Recurso de nulidad**—La Cámara puede declarar de oficio la nulidad de la sentencia aunque la parte no interponga el recurso, siempre que en su pronunciamiento se hubiese violado el art. 217 del Cód. de Proc.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 107, Ser. 4^a.

después que el de apelación, é implicando los términos empleados en el art. 239 del Cód. de Proc., establecer que dentro del mismo término para la apelación debe deducirse el de nulidad, aunque se deduzcan en escritos distintos, procedía la revocación de la resolución del Inferior

1^a—Véase: verb. *Apelación de hecho*, núm. 2.

1^b—De acuerdo con las leyes procesales que rijen el caso, y también de acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Recurso de fuerza*, núms. 1, 2 y 7.

2—Véase: *Información «ad-perpetuam»*.

1—Esta resolución ha sido omitido en el sumario del fallo respectivo. El principio sentado en este caso ha sido consagrado por la jurisprudencia de la Cámara. Véase: *Nulidad de una sentencia*, núms. 18 y 23; *Nulidad absoluta*, núm. 1.



Recurso de nulidad — Véase: *Nulidad*, núms. 2 y 3 — *Nulidad de una sentencia*, núms. 18 y 24 — *Nulidad de una ejecución*, núm. 5 — *Excepción de nulidad*, núm. 2 — *Notificación*, núm. 13 — *Término para deducir la nulidad*, número 1.

1^a. Recurso de reposición — Las resoluciones de la Cámara de Apelaciones, no son susceptibles del recurso de revocatoria. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 54, Ser. 3^a.

2. Recurso de reposición — Interpuestos los recursos de revocatoria y apelación, fuera de término el primero, y dentro de él el segundo, debe concederse la apelación sin sustanciación. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 47, Ser. 4^a.

3. Recurso de reposición — Interpuesto solo y sustanciado y rechazado éste, el auto que no hace lugar es inapelable. — Jur. Civ., tom. 7, pág. 48, Ser. 4^a.

4. Recurso de reposición — El que desiste del recurso de revocatoria, debe pagar las costas. — Jur. Civ., tomo 10, pág. 62, Ser. 4^a.

Recurso de reposición — Véase: *Informe in voce*, núm. 1.

1^b. Recusación — El comprador en remate judicial solo

1^a — Se trataba de una sentencia definitiva, en cuyo caso no procede el recurso de reposición — art. 81 de la Ley Org. de 1881. — Contra las providencias de mera sustanciación procede este recurso de reposición según el art. 73 de la ley de 1881 y de la vigente.

2 — Consideramos que para evitar abusos, sería conveniente en estos casos, no hacer lugar á la reposición y conceder la apelación; pero como el escrito de reposición debe necesariamente ir fundado, y como esto importaría fundar la apelación, debe devolverse el escrito poniendo nota de la interposición del recurso de apelación y de su otorgamiento, como lo preceptúa el art. 227 del Cód. de Proc. De otra manera sería muy fácil infringir esta regla deduciendo siempre el recurso de reposición fuera de término y el de apelación dentro de él.

3 — Art. 225 del Cód. de Proc.

4 — Véase: verb. *Costas*, núm. 63.

1^b — La parte se presentó recusando al Juez después de consentir nu-



tiene derecho de recusar al Juez al presentar su primer escrito.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 200, Ser. 3ª.

2. **Recusación**—Consentida la providencia en que se hace saber el Juez que va á conocer, no puede declararse improcedente la recusación del anterior.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 208, Ser. 3ª.

3. **Recusación**—El comprador en remate judicial puede recusar sin causa al Juez que conozca en el incidente sobre escrituración.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 220, Ser. 3ª.

4. **Recusación**—El demandado puede recusar al Juez antes ó al contestar la demanda.—Jur. Civ., tom. 5, página 227, Ser. 3ª.

5. **Recusación**—El término para contestar la demanda corre desde el día de la notificación; las diligencias en que se hace saber el Juez que va á conocer por la recusación, no suspenden dicho término.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 243, Ser. 3ª.

6. **Recusación**—Los acreedores pueden recusar al Juez merosas resoluciones. La Cámara ha interpretado en el sentido del sumario el art. 366 del Cód. de Proc.

2—Si la recusación es indebidamente admitida, el juez á quien pasase el escrito si se considerase indebidamente gravado, podría reclamar y observar su admisión. Si admite la recusación y entra á conocer en la causa, el auto por el cual se hace saber el Juez que va á conocer pasa en autoridad de cosa juzgada, y las partes no pueden volver sobre él.

3—El Dr. Mendez Paz no hizo lugar á la recusación—cosa estraña por cierto, en este señor Juez—por no ser, según su opinión, el caso del art. 366 del Cód. de Proc. La Cámara revocó la resolución diciendo que el comprador como parte en el incidente de escrituración puede hacer uso del derecho que le acuerda el citado artículo.

4—El Dr. Mendez Paz no hizo lugar á la recusación deducida contra él. La Cámara revocó el auto fundándose en la disposición del art. 366 del Cód. de Proc. que autoriza á hacer uso del derecho de recusación *antes ó al tiempo* de contestar la demanda.

5—Véase: verb. *Notificación*, núm. 3.

6—El art. 717 del Cód. de Proc. no escluye el derecho de los acree-



del concurso en el incidente sobre verificación de crédito.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 357, Ser. 4ª.

7. **Recusación**—Sin causa, procede al contestar la demanda aun cuando se haya aceptado el Juez para las excepciones dilatorias opuestas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 359, Ser. 4ª.

8. **Recusación**—El derecho de recusación es personal del litigante, no puede hacerse estensivo al abogado patrocinante.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 421, Ser. 4ª.

9. **Recusación**—El Juez que ha conocido en el litigio, no puede ser recusado sin causa al pedirse la ejecución de la sentencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 422, Ser. 4ª.

10. **Recusación**—Para que sea procedente la recusación, la prueba debe ser plena, los testigos de oídas no pueden darle ese carácter.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 120, Ser. 4ª.

11. **Recusación**—El recusante con causa debe justificar plenamente los motivos en que la funda.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 8, Ser. 4ª.

12. **Recusación**—El representante de varios herederos

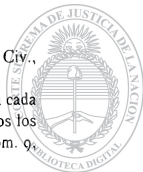
dores para verificar sus créditos ante el Juez ordinario como lo demuestra el art. 756; en tal caso la presentación del acreedor sea que importe ó nó una demanda en forma, faculta el ejercicio del derecho acordado por el art. 366.

7—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase el núm. 4. Las excepciones dilatorias se oponen antes de contestar la demanda. Una vez sustanciadas éstas, puede al contestar la acción hacerse uso del derecho acordado por el art. 366 del Cód. de Proc.

8—Véase: verb. *Abogado*, núm. 5.

9—La ejecución de una sentencia es la continuación del mismo juicio, no es un asunto nuevo, no siendo por consiguiente aplicable el art. 366 del Cód. de Proc.

12—El representante único de varios interesados, debe ser considerado como un solo litigante, porque de lo contrario se alteraría la perfecta igualdad que debe reinar en los juicios.



solo puede recusar sin causa á un camarista.—Jur. Civ., tom. 9. pág. 12, Ser. 4^a.

13. **Recusación**—Con causa, debe presentarse en cada uno de los litigios, no basta un escrito para todos los que existan pendientes del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 9. pág. 133, Ser. 4^a.

14. **Recusación**—El Agente Fiscal no es recusable por intervenir como parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 9. pág. 228, Ser. 4^a.

15. **Recusación**—Cualquiera que sea el carácter en que se haya intervenido, no procede la recusación sin causa al ser investido el representante de nueva personería.—Jur. Civ., tom. 9. pág. 260, Ser. 4^a.

16. **Recusación**—Es causa de recusación en el juicio de concurso del viudo, que el padre del Juez patrocine al concursado en el juicio testamentario de la esposa.—Jur. Civ., tom. 9. pág. 264, Ser. 4^a.

17. **Recusación**—Sin causa, solo procede al presentarse el primer escrito.—Jur. Civ., tom. 9. pág. 134, Ser. 4^a.

18. **Recusación**—El Juez recusado no puede resolver

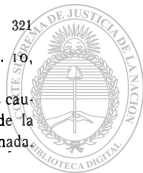
13—Véase: verb. *Escrito*, núm. 9.

14—Véase: verb. *Agente Fiscal*, núm. 1.

16—Se dijo en el caso presente que ambos juicios estaban íntimamente ligados por razones que concurrían en ese caso determinado.

17—Siempre que con ese escrito se conteste la demanda, porque el art. 366 acuerda este derecho antes ó al tiempo de contestarla. Si no es juicio contencioso la recusación debe formularse en el primer escrito.

18—Esta resolución se funda en los arts. 52 y 53 del Cód. de Proc., y 75 de la Ley Org. de los Trib. La Cámara, decía al sentar el principio contenido en el sumario, que la recusación es un arbitrio legal para separar á un juez, del conocimiento de un asunto —art. 366 del Cód. de Proc.—Se trataba de un incidente de desacato. Admitir la recusación en este incidente mismo importaría el absurdo legal de



sobre la personería del recusante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 320, Ser. 4^a.

19. Recusación.—La amistad con el abogado no es causa de recusación, ni en consecuencia de nulidad de la sentencia dictada á favor de la parte por él patrocinada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 313, Ser. 4^a.

20. Recusación.—Solo procede en los casos que la ley determina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 106, Ser. 4^a.

que pueda intentarse contra el respeto debido á los jueces, quienes están salvaguardados por el art. 75 de la Ley Org. Estos fundamentos son completamente fútiles, pues ni los artículos citados del Cód. de Proc. ni el de la Ley Org. facultan á un juez recusado para entender en un juicio en que ha sido recusado. Por el contrario, el art. 366 al hablar de la recusación sin causa dice, que la recusación producirá el efecto de atribuir el conocimiento del asunto al juez que corresponda en el orden del turno, y el art. 379 establece que cuando el recusado con causa fuese un Juez de 1^a Instancia elevará los autos á la Cámara. Siempre en cada una de sus disposiciones, el Cód. de Proc. separa del conocimiento de la causa al juez del litigio. La razón es obvia: no es justo, equitativo ni moral, convertir á los jueces recusados en jueces y parte en el litigio. Las recusaciones son siempre mal miradas por los jueces y por los litigantes, pues implica falta de garantías en el magistrado recusado. Es una medida odiosa para el juez porque acusa el grado de confianza que inspira su proceder. A un juez no se le recusa; á un juez que cumple con su deber no hay necesidad de recordarle que no puede entender en un pleito, pues su rectitud le señala el camino, y en el acto se escusa de conocer cuando existe una causa que lo inhiba. Aquí en la Capital es notorio, todo el mundo lo sabe que hay jueces cuyo turno es necesario dejar pasar porque la tramitación de los juicios no lleva el curso que la ley les marca, que son una rémora en la administración de justicia. Estos jueces se irritan cuando un litigante hace uso de ese derecho que la ley le acuerda. ¿Y puede ponerse en manos de tales magistrados el arma poderosa que espresa el sumario? ¿No sería más moral dejar el castigo de una falta cometida contra un juez á otra juez que conozca en el asunto? Esto es el espíritu de la ley.

19.—Véase: verb. *Abogado*, núm. 12.

20.—La causal alegada fué la enemistad del abogado con el juez. Esta causal no está enumerada en el art. 368 del Cód. de Proc. y por consi-



21. **Recusación**—La enemistad del Juez con el abogado ó procurador, no es causa de recusación.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 106, Ser. 4^a.

22. **Recusación**—El Juez recusado con causa tiene jurisdicción para castigar el desacato cometido en el escrito de recusación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 62, Ser. 4^a.

23. **Recusación**—El prejuzgamiento la hace procedente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 159, Ser. 3^a.

Referencias incidentales—Véase: *Carta*, núm. 2.

Registro—Véase. *Títulos de propiedad*, núm. 19.

1^a. **Registro Civil**—El denunciante de un fallecimiento que suministra datos equivocados en una partida del Registro Civil, carece de personería para producir información con objeto de anotar el error.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 21, Ser. 4^a.

Registro de la propiedad—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 11 — *Embargo*, núm. 8 — *Inscripción*, número 1.

Registro público—Véase: *Boleto de compraventa*, número 28.

Reglamentos—Véase: *Personería*, núm. 9 — *Construcciones*, núm. 1.

1^b. **Regulación de honorarios**—Para la regulación de honorarios. El Juzgado debe tener á la vista los expedientes que formen el litigio, aun de otros juzgados.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 67, Ser. 4^a.

guiente no puede ser aceptada. Sin embargo el juez puede excusarse de entender en este caso como lo tiene establecido la Cámara en numerosas resoluciones. Véase verb. *Excusación*, núm. 2.

21—Véase: verb. *Abogado*, núm. 13.

22—Véase: verb. *Personería*, núm. 13.

23—Véase: verb. *Prejuzgamiento*, núm. 4.

1^a—Véase: verb. *Fallecimiento*, núm. 5.

1^b—Véase: verb. *Honorarios*, núm. 12.



2. Regulación de honorarios—Para que proceda por el Juzgado, debe existir la estimación del interesado y la conformidad ó disconformidad de las partes.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 388, Ser. 4ª.

3. Regulación de honorarios—La contenida en una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 377, Ser. 4ª.

4. Regulación de honorarios—La regulación judicial de honorarios comprende no solo los que constan en los escritos presentados sino también las conferencias necesarias para la presentación de los espresados escritos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 5, Ser. 4ª.

5. Regulación de honorarios—Las regulaciones contenidas en la sentencia de remate son inapelables si no se hubiesen opuesto escepciones.—Jur. Civ., tom. 9, página 224, Ser. 4ª.

Regulación de honorarios—Véase: *Honorarios*, núms. 1, 5, 10 y 11—*Agrimensor*, núm. 1—*Costas*, núm. 50.

Reiteración—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 6—*Acreeedor hipotecario*, núm. 2—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 14.

1. Reivindicación—Justificado por títulos preexistentes que el terreno comprendido en limites determinados, ha salido del dominio público, la Municipalidad que pre-

2—Arts. 65, 67 y 70 del Apéndice al Cód. de Proc.

3—De acuerdo con la jurisprudencia sentada casi uniformemente por la Cámara de lo Civil, jurisprudencia que la hemos impugnado constantemente. Véase: verb. *Costas*, núms. 50 y 60. Ultimamente la Cámara ha vuelto sobre sus pasos reformando su jurisprudencia de acuerdo con los principios sostenidos por nosotros, suprimiendo así una de las más grandes iniquidades por ella consagrada.

4—Véase la nota al verb. *Honorarios*, núm. 15.

5—Véase el número 3.

1—Véase: verb. *Municipalidad*, núm. 2.



tende reivindicar un sobrante, debe justificar su derecho por otro título que el de soberanía que las leyes le acuerdan cuando el poseedor carece de ellos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 263, Ser. 3ª.

2. Reivindicación.—La prescripción comensada contra un heredero mayor continúa sin interrupción contra los menores y puede ser opuesta con éxito en caso de reivindicación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 129, Ser. 3ª.

3. Reivindicación.—La reivindicación solo procede justificada la existencia de la posesión y su pérdida.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 405, Ser. 3ª.

4. Reivindicación.—Al reivindicante corresponde la prueba de la nulidad del título que justifica la propiedad del poseedor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 129, Ser. 3ª.

5. Reivindicación.—Si bien el comprador que no ha tenido la posesión, no puede ejercer derechos reivindicatorios, la acción es procedente como cesionario de los derechos del vendedor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 275, Serie 3ª.

6. Reivindicación.—La falta de derecho para reivindicar, hace inadmisibile la acción de daños y perjuicios que la ley concede como subsidiaria.—Jur. Civ., tom. 6, página 346, Ser. 3ª.

7. Reivindicación.—Es improcedente si los herederos menores han sido debidamente representados aun cuando no existiera declaratoria á su favor.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 13, Ser. 4ª.

8. Reivindicación.—No procede la condenación en cos-

2—Véase: *Prescripción contra menores*, núm. 1.

4—Véase: *Nulidad de un título*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Posesión*, núm. 7.

6—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 32.

8—Véase: verb. *Costas*, núm. 34.



tas al poseedor con título vencido por resultar procedente la reivindicación.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 24, Ser. 4^a.

9. Reivindicación—La de muebles, solo procede contra el poseedor.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 124, Ser. 4^a.

10. Reivindicación—Justificada la posesión y dominio, la acción reivindicatoria es procedente.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 249, Ser. 4^a.

11. Reivindicación—El condómino carece de derecho para reivindicar del tercero detentador una parte materialmente determinada de la cosa común, sin el consentimiento de sus condóminos ó sin haberse verificado antes la división.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 210, Ser. 4^a.

12. Reivindicación—Justificada la posesión y el dominio, la acción de reivindicación es procedente.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 290, Ser. 4^a.

13. Reivindicación—La acción de reivindicación es procedente si el título que presenta el demandado adolece de insanable nulidad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 181, Serie 4^a.

14. Reivindicación—Deben intervenir conjuntamente en el juicio de reivindicación el comprador y vendedor, si ambos son demandados, aun cuando el segundo intervenga también en virtud de la citación de evicción solicitada por el primero.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 377, Serie 4^a.

9—La acción reivindicatoria es procedente cuando concurren los requisitos de los arts. 2758 y 2778 del Cód. Civ.

10—De acuerdo con lo dispuesto en los artículos citados en la nota precedente.

11—Véase: verb. *Condómino*, núm. 4.

12—Arts. 2758 y 2778 del Cód. Civ.

13—Véase: verb. *Nulidad de un título*, núm. 3.

14—Véase: verb. *Evicción*, núm. 1.



15. **Reivindicación**—Si la reivindicación se dirige contra el poseedor y el vendedor, la escepción de defecto legal es improcedente, pues la unidad de acción no permite la división del juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 377, Serie 4^a.

16. **Reivindicación**—Para que la demanda de reivindicación haga procedente el embargo preventivo, debe ser acompañada de recaudos suficientes.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 393, Ser. 4^a.

17. **Reivindicación**—Esta acción procede, si acreditado el dominio por escrituras públicas se justifica por testigos la posesión y su pérdida.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 120, Ser. 4^a.

18. **Reivindicación**—El propietario que por su mala ubicación toma terreno del lindero, hace procedente la reivindicación aun cuando no posea entre muros mayor extensión que la que arrojan sus títulos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 178, Ser. 4^a.

19. **Reivindicación**—Procede aun cuando no haya teni-

15—Véase: *Escepción de defecto legal*, núm. 12.

16—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 36.

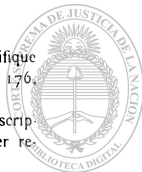
17—Art. 2758 del Cód. Civ.

19—No es necesario para la procedencia de la acción reivindicatoria que los estremos enunciados en el art. 2758 del Cód. Civ., se hayan cumplido en la persona misma del reivindicante actual, pues basta que lo hayan sido en sus autores, de cuyos derechos y acciones puede usar en el juicio. Los arts. 2789 y 2790 del mismo Código y la fuente de que han sido tomados, constituyen una prueba evidencial de la exactitud de aquella conclusión. «Si el título del reivindicante que probase su derecho á poseer la cosa, dice el primero de dichos artículos, fuera posterior á la posesión que tiene el demandado, aunque éste no presente título alguno, no es suficiente para fundar la demanda.» «Si el reivindicante, dice el art. 2790, presentase títulos de propiedad anterior á la posesión y el demandado no presentare título alguno, se presume que el autor del título era el poseedor y propietario de la her-

do lugar la tradición si el demandado reconoce que el vendedor ha tenido la posesión. — Jur. Civ., tom. 7, página 298, Ser. 4ª.

dad que se reivindica.» El alcance de estas disposiciones está claramente marcado en Pothier, de donde han sido tomados. «Cuando el poseedor contra quien se dirige la demanda establece que su posesión es anterior al título que yo produzco para fundar mi demanda, esa reivindicación, aun cuando por lo demás él por su parte no presente título alguno, este título que yo produzco, no es por sí solo suficiente para fundar mi demanda; pero cuando el título que el reivindicante produce es anterior á la posesión ejercida por el demandado y éste por su parte no exhibe título alguno, el título que presenta el primero es suficiente para fundar la demanda. Aquel que según título ha vendido ó donado al demandante ó á su causante el inmueble que se trata de reivindicar, tiene en su favor la presunción de haber sido el poseedor y propietario, y se presume asimismo que ha transmitido la posesión y la propiedad»—núm. 324, tom. 8º de la publicación de Dupin.—Aubry y Rau, en su notable obra, dice: «Si el actor produce un título de propiedad y el demandado no presenta, el reivindicante debe ser considerado como habiendo suficientemente justificado su derecho, con tal que su título sea anterior á la posesión.» El doctor Llerena comentando los artículos transcritos, dice: «Pero cuando el demandante presenta con sus títulos los de su enagenante ó los de los enagenantes anteriores á la posesión del demandado, puede entonces obrar en representación de esos enagenantes»—tom. 4º, pág. 426—y agrega en otro lugar: «La posesión del demandante cuando no presenta título alguno, ó cuando el presentado es anulado y aquel presenta uno que no es argüido de falso ó nulo es más ventajosa que la del mismo poseedor, ventaja que la ley ha venido á crear, únicamente fundada en una presunción—Pothier. núms. 324 y 325—presunción que la mayoría de los Códigos, incluso el Francés, no la han establecido, dejando un vacío dentro del cual discuten extensamente los jurisconsultos»—Laurent, tom. 6º, núm. 170.—«¿Quién debe probar la fecha en que se empezó á poseer? ó lo que es lo mismo, ¿el demandante está obligado á probar que su título es anterior á la posesión, y se supone que no lo es, si no se prueba? ¿Es el demandado quien debe probar que su posesión es anterior al título?» Es un principio de derecho aceptado por nuestra legislación que el que posee no está obligado á producir su título á la posesión; posee porque posee. De aquí se sigue que nadie puede tur-





20 **Reivindicación**—Procede siempre que se justifique el dominio y la posesión.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 176, Ser. 4^a.

21. **Reivindicación**—Opuesta y justificada la prescripción treintenaria, la acción reivindicatoria debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 309, Ser. 4^a.

22. **Reivindicación**—Para que proceda es requisito indispensable que el que acciona haya tenido la posesión del bien materia del litigio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 214, Ser. 4^a.

23. **Reivindicación**—Es improcedente si el demandado justifica hechos concurrentes que prueben la transmisión legal del dominio á su favor.—Jur. Civ., tom. 10, página 262, Ser. 4^a.

24. **Reivindicación**—Procede siempre que se justifica haber tenido título ó posesión anterior á la del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 370, Ser. 4^a.

Reivindicación—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 11 y 39—*Excepción de prescripción*, núm. 3—*Sentencia*, número 10—*Prescripción treintenaria*, núm. 5.

1. **Reivindicante**—Que ha intervenido en la formación del título supletorio, debe ser condenado en todas las cos-

barle en su propiedad fundándose solo en que no tiene título á esa posesión. Pero esta presunción de propiedad solo existe á condición de que otro no presente un título verdadero, entonces la presunción de la ley cede á la realidad. De manera, que producido por el demandante un título, el demandado tendrá que defender su posesión atacando el título como nulo ó insuficiente para transmitir ó restablecer la presunción, probando que su posesión es anterior al título del reivindicante.

20—Véanse los núms. 10, 12, 13 y 17.

21—Véase: *Prescripción treintenaria*, núm. 5.

22—Véase: verb. *Posesión*, núm. 7.

24—Véase: verb. *Posesión*, núm. 23.

1—Véase: verb. *Costas*, núm. 36.



tas del juicio por ser evidente su temeridad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 234, Ser. 4^a.

Relaciones comerciales—Véase: *Ordenanzas militares*, núm. 1.

1^a. **Remanente**—El reparto que el testador haga del remanente del quinto, debe conceptuarse legado y no herencia, si entre los favorecidos existen extraños á la sucesión, aun cuando manifieste que debe incorporarse al cuerpo general de bienes.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 157, Ser. 3^a.

Remanente—Véase: *Patrono*, núm. 1.

1^b. **Rematador**—La personería del rematador como representante del vendedor, cesa después de verificada la almoneda.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3^a.

2. **Rematador**—Las estipulaciones impuestas por el rematador obligan al propietario que ordenó la venta, puesto que sus relaciones se rijen por las disposiciones del mandato.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 228, Ser. 4^a.

Rematador—Véase: *Mandatario*, núm. 2 y 5.

1^c. **Remate**—El rematador que vende un inmueble por cuenta y á nombre del propietario, no puede ser calificado como comisionista sino como mandatario.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 103, Ser. 3^a.

2^a. **Remate**—Para resolver la petición de sacar á remate el derecho del concurso á retrotraer la finca enajenada con pacto de rotoventa en que es parte el comprador condicional, debe formarse incidente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 110, Ser. 4^a.

1^a—Véase: verb. *Herencia*, núm. 4.

1^b—Véase: *Personería*, núm. 1.

1^c—Véase: verb. *Mandatarios*, núm. 5.

2^a—Véase: verb. *Incidente*, núm. 2.



Remate—Véase: *Títulos de propiedad*, núm. 2—*Boleto de compraventa*, núm. 33.

1. **Remate judicial**—En las ventas en remate judicial procede la pérdida de la seña si el comprador consiente el apercibimiento de dársele por desistido de la compra y por perdida la suma entregada.—Jur. Civ., tom. 4, página 40, Ser. 3ª.

2. **Remate judicial**—Ejecutado el comprador en remate judicial por el precio de la compra, no procede la rescisión del contrato.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 325, Ser. 3ª.

3. **Remate judicial**—La suma entregada en el acto del

1—Vendido un bien testamentario, después de algunos incidentes entre la sucesión y el comprador, este último se obligó a oblar inmediatamente el precio de compra. No habiéndose cumplido con lo prometido la sucesión pidió se intimara al comprador la oblación dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tenérsele por desistido de la compra y hacerse efectivo lo dispuesto en el art. 1202 del Cód. Civ., dejándose por perdida la seña. El juez proveyó de conformidad. Vendido el término sin hacerse la oblación se dejó sin efecto el remate, corriéndose traslado en cuanto a la pérdida de la seña. El comprador dijo que no debía hacerse lugar a ella, porque la cantidad entregada no había sido dada en calidad de seña sino a cuenta de precio, y por no haber estipulado las partes su pérdida por falta de cumplimiento en el contrato. Se declaró perdida la seña, porque cuando el comprador se notificó del auto en que se le mandaba oblar bajo apercibimiento de la pérdida de la seña y la rescisión del contrato, no reclamó de la resolución, consintiéndola por el contrario. Desde entonces un nuevo acuerdo de voluntades vino a estatuir esta nueva responsabilidad para el comprador, la de perder la seña si no escrituraba en el plazo acordado. Si este término venció sin que el comprador llenara su obligación, la sucesión estuvo en su perfecto derecho de pedir se hiciera efectivo el apercibimiento, declarándose perdida la seña, y el juez pudo así proveer de plano sin dar lugar a un nuevo juicio sobre lo que no era sino la consecuencia forzosa sobre la inexecución de lo convenido.

2—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 7.

3—Vendido en remate público un inmueble perteneciente a una sucesión, en la suma de cien mil nacionales, se dió por el comprador en



remate judicial no puede conceptuarse como señal, sino como parte del precio entregado en garantía del cumplimiento de la operación la suma de cinco mil pesos. Intimada la oblación del precio dentro de tercero día, bajo apercibimiento de lo que hubiese lugar por derecho, no se cumplió la intimación, y entonces el juez tuvo por rescindida la compra y ordenó se sacara nuevamente el inmueble a remate, siendo por cuenta del comprador la diferencia de precio, intereses y costas. El comprador se alzó de la resolución diciendo que, se sentía agraviado en cuanto se les imponía responsabilidades positivas por la disminución de precio, pues éstas no podrían de acuerdo con nuestras leyes vigentes, ir más allá de la pérdida de la suma depositada en garantía de la ejecución del contrato. El art. 516 del Cód. de Proc., resuelve sin mayores dificultades el derecho de la testamentaria vendedora. «Si por culpa del postor, dice el artículo, a quien se hubiese adjudicado los bienes, dejase de tener efecto la venta, se procederá a un nuevo remate, en la forma que queda establecida, siendo el mismo postor responsable de la disminución de precio del segundo remate, de los intereses acrecidos y las costas causadas con este motivo, al pago de todo lo cual será compelido ejecutivamente a petición de parte.» Aquí se trata de una venta judicial, directamente regida en sus formalidades y en sus efectos por la ley adjetiva, cuyas disposiciones no autorizan el arrepentimiento del comprador ni su desistimiento del contrato sino en el caso único de que los títulos de la propiedad vendida tuviesen vicios insubsanables en breve tiempo. La sanción de la ley de forma por el incumplimiento del contrato es de consiguiente bien espesa. Ciertamente que en las ventas privadas el derecho autoriza la dación de una señal para asegurar el cumplimiento del contrato; pero esta señal es necesariamente el resultado de un acuerdo que puede o no formalizarse a voluntad de las partes, y como su efecto se halla de antemano declarado por la misma ley, se explica que perdiéndola pueda dejar de cumplirse la convención. En las ventas por mandato judicial no caben convenciones de esta especie y es precisamente por ello y en la necesidad ineludible de establecer una sanción para el que resista sin causa justificada el cumplimiento de la obligación, que se ha consagrado el precepto establecido en el sumario. Es de observarse que según la ley de fondo, tanto el que da como el que recibe la señal, puede arrepentirse de la convención debiendo, si lo fuere el segundo, devolverla con otro tanto de su valor. Esta situación en ningún caso podría producirse respecto del vendedor en las ventas decretadas por el mandato de los jueces por cuanto importaría una verdadera reserva de facultades estraña al orden y a la firmeza de



miento del contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Ser. 3^a.

4. Remate judicial—El comprador en remate judicial solo tiene derecho de recusar al Juez al presentar su primer escrito.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 200, Ser. 3^a.

5. Remate judicial—El comprador en remate judicial puede recusar sin causa al Juez que conozca en el incidente sobre escrituración.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 220, Ser. 3^a.

6. Remate judicial—El comprador en remate judicial no puede obligar al vendedor á la bonificación de los títulos. Su derecho se circunscribe á optar por su aceptación ó por el desistimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 247, Ser. 3^a.

7. Remate judicial—El derecho del comprador en remate judicial que conceptúa defectuosos los títulos, se limita al desistimiento, si los vendedores se niegan á practicar las diligencias necesarias para la subsanación de los defectos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 93, Ser. 3^a.

8. Remate judicial—Solo procede el desistimiento del comprador en remate judicial, después de resueltas las observaciones que formule contra los títulos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 94, Ser. 3^a.

los procedimientos judiciales. Determinábase de esta manera, una situación de manifiesta desigualdad entre vendedor y comprador, como que este último quedaría convertido en árbitro del contrato y subordinada á su sola voluntad la realización del mismo, resultando de aquí entre otras consecuencias repugnantes á los principios de equidad y de justicia, que los anticipos exigidos por mandato judicial no lo eran en alcance de la seriedad de las ofertas sino en provecho exclusivo de los postores.

4—Véase: verb. *Recusación*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Recusación*, núm. 3.

6—Véase: verb. *Desistimiento*, núm. 2.

7—Véase: verb. *Comprador judicial*, núm. 2.

8—Véase: *Comprador judicial*, núm. 3.



9. Remate judicial—La comisión de venta en remate judicial es de cuatro por ciento en los muebles.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 176, Ser. 4^a.

9—Esta comisión se cobra de conformidad con el acuerdo dictado con fecha 2 de Junio de 1860 y que dice testualmente así: «Acuerdo: En Buenos Aires, á 2 de Junio de 1860, reunidos los señores Prior don Juan Pedro Esnaola, consul primero, D. Mariano Felix Fragueiro y segundo D. Ignacio de las Carreras, disponen: Que debiendo procederse en cumplimiento del art. 123 del Cód. de Comercio, á la formación del arancel que ha de determinar la comisión que se haya de cobrar por los rematadores en las ventas públicas que celebren; el tribunal ha tomado en consideración detenidamente el proyecto presentado por la comisión misma de comerciantes y rematadores que nombró al efecto, y hallándose razonadamente fundado en la conveniencia de armonizar las prescripciones de justicia y equidad con los usos de la plaza, el tribunal, de conformidad á dicho proyecto, acuerda como arancel para rematadores públicos, lo siguiente: La comisión de ventas de todas mercaderías, frutos, ganados, bienes raíces en general, dos por ciento. La de muebles usados y objetos de ajuar doméstico, alhajas y buques, el tres por ciento. La garantía del rematador por el importe de la venta se sobreentiende siempre, á menos que espresamente no se le exonere de ella, y se retribuirá con un dos por ciento en las ventas á plazo. En las ventas al contado que el uso de la plaza hace que se satisfaga en los dos próximos sábados al día de la venta, se sobreentiende igualmente la garantía del rematador que se retribuirá con el uno por ciento. No podrá cargarse comisión de garantía por toda venta de que por la ley deba otorgarse escritura pública. Y disponiendo que se saque copia del presente acuerdo que autorizará el Secretario, mandándose que se publique por los periódicos, y firmaron, de que doy fe.—JUAN P. ESNAOLA—MARIANO FELIX FRAGUEIRO—IGNACIO DE LAS CARRERAS—Ante mí: Guillermo G. Dowbley, Escribano público y Secretario del Tribunal.»—El arancel para corredores es el siguiente: «En vista de lo espresado en el art. 58 del reglamento actual de la Bolsa por su Cámara Sindical, ha reproducido como su propuesta en cumplimiento del citado art. 112, y consultados los reglamentos y tarifas anteriores de la misma Bolsa, acordaban como arancel para los corredores lo siguiente: Uno por ciento por venta de mercaderías, frutos, ganados, bienes raíces, plata en barras ó en piña y buques. Dos por mil en todo descuento de obligaciones de plaza y venta de letras de cambio sobre el extranjero, fondos públicos, acciones de sociedades



10. Remate judicial.—La comisión de dos por ciento es la que corresponde en remate judicial de bienes inmuebles.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 177, Ser. 4ª.

11. Remate judicial.—En el remate judicial no basta la pérdida de la seña para rescindir el contrato; el comprador responde por las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 120, Ser. 4ª.

12. Remate judicial.—La ley supone buena fe y justo título al comprador en remate judicial, á quien judicialmente se otorga escritura de propiedad.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 13, Ser. 4ª.

13. Remate judicial.—Para que el comprador en remate judicial manifieste su conformidad con los títulos, no debe entregársele copia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 43, Ser. 4ª.

14. Remate judicial.—Consentida la intimación de oblar anónimas, cualquier otro papel negociable y toda clase de seguro. Uno por ciento, por colocaciones de dinero en hipoteca, si el plazo excediese de seis meses inclusive, y medio por ciento si el plazo fuese menor, y dos por mil, por toda prórroga ó renovación de estas obligaciones. Un peso moneda corriente por cada onza de oro. Un medio por ciento en la venta de plata acuñada. Uno por ciento en los contratos de arriendo sobre su total importe calculado el término en su duración, pero si este término excediese de tres años, se tendrá este período como el máximo á que se limitará el pago de esta comisión. Las comisiones asignadas serán satisfechas por mitad por ambos contratantes, no mediando estipulación en contrario, según así lo dispone el mencionado art. 112. Cuando el negocio se efectuase entre dos corredores, cada uno cobrará de su comitente la mitad de la cuota asignada.» Este acuerdo lleva la misma fecha que el anterior.

10—Véase nota precedente.

11—De acuerdo con la jurisprudencia establecida. Véase el núm. 3.

13—Porque el art. 321 del Cód. de Proc. determina expresamente la forma en que el comprador debe hacer uso de ese derecho. El Juez debe mandar que los títulos se pongan de manifiesto en la escribanía por tres días, dice el citado artículo.

14—Si la intimación se hace bajo apercibimiento de rescisión y eje-



el precio de la compra en remate judicial dentro de un término perentorio, procede la ejecución.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 387, Ser. 4^a.

15. Remate judicial—Objetados los títulos por el comprador en remate judicial, el Juez debe juzgar las observaciones, antes de declarar el derecho á rescindir la compra.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 87, Ser. 4^a.

16. Remate judicial—Las deficiencias de fácil subsanación en los títulos, no permiten al comprador desistir de la compra en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 258, Ser. 4^a.

17. Remate judicial—El comprador en remate judicial

cución por el precio de compra, y si no se cumple con dicha intimación, consentida la providencia, puede llevarse adelante la ejecución, pues entonces este trámite no es sino una consecuencia lógica de dicha intimación. Pero si el auto ordena la oblación bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho, no procede la ejecución una vez que se hubiese dejado de cumplir con lo ordenado, pues el apercibimiento de derecho se encuentra establecido con precisión en el art. 519 del Cód. de Proc. Véase el núm. 3. La Cámara al resolver la cuestión en el sentido del sumario dijo que un auto consentido trae aparejada ejecución—art. 465, inc. 1^o del Cód. de Proc.—no siendo aplicable el artículo 519 del mismo Código.

15—En el boleto se estableció que los títulos serían *a satisfacción* de los compradores, lo que hace aplicable la disposición de los artículos 1365 y 1377 del Cód. Civ.

16—Art. 522 del Cód. de Proc. Las deficiencias apuntadas consistieron en las diferencias que se decía existir entre las partidas de nacimiento de algunos herederos, la declaratoria de herederos y el poder para representarlos, como asimismo en la diferencia con que el causante aparecía firmando varios actos, figurando unas veces con el nombre de Juan y otras con el nombre de Juan B. Estas diferencias, según la Cámara, en ningún caso pueden constituir vicios no subsanables en breve tiempo.

17—El art. 1202, es extraño á las ventas judiciales, por cuanto aquel artículo rije única y exclusivamente para las convenciones privadas que las partes contratantes celebren de acuerdo con las leyes de fondo. La



no puede ampararse de la disposición del art. 1202 del Cód. Civ. que permite el desistimiento perdiendo la señal entregada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 246, Ser. 4ª.

18. **Remate judicial**—Sin la conformidad del comprador en remate judicial, no se puede disponer del precio oblado antes de la escrituración, los fondos estraidos indebidamente de un depósito judicial deben ser reintegrados.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 348, Ser. 4ª.

19. **Remate judicial**—Convenida con el comprador en remate judicial, la subsanación de los defectos del título, no procede el desistimiento de la compra, sin previa fijación de un término para llevarla á cabo bajo apercibimiento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 355, Ser. 4ª.

20. **Remate judicial**—La suspensión de pagos del esta-

compra judicial cae bajo el imperio de la ley de forma, distinta en sus efectos y en su sanción, de aquellos—art. 519 del Cód. de Proc. Véase el núm. 3.

18—Véase: verb. *Depósito judicial*, núm. 1, en cuya nota espresamos el alcance que debe dársele á la resolución.

19—En el convenio celebrado para la subsanación de los defectos, no se señaló plazo dentro del cual debían estos subsanarse. En esta situación, si bien el comprador no puede esperar indefinidamente el cumplimiento del convenio, su derecho se circunscribe á pedir que el juez de la causa fije un término para la subsanación, bajo apercibimiento de hacerse efectivo lo dispuesto por el art. 522 del Cód. de Procedimientos.

20—Verificada una compra el adquirente manifestó que no podía oblar el precio, porque el dinero que tenía destinado al pago lo había depositado en el Banco de la Provincia, del que no podía exigir el pago del depósito, en virtud de razones que eran de pública notoriedad. Cuando se hizo la adquisición no se hizo presente que el precio se abonaría con tales ó cuales fondos, y por lo tanto no podía después eludir el cumplimiento de la obligación alegando que el dinero que tenía depositado en el Banco de la Provincia era el destinado para aquel fin, pues es el caso de la aplicación del art. 604. Cód. Civ., extensivo á las obligaciones de dar una suma de dinero, en virtud de lo dispuesto en el ar-



blecimiento bancario en que el comprador en remate judicial tenía sus fondos, no es motivo para dejar sin efecto la venta.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 50, Ser. 4ª.

21. **Remate judicial**.—En las ventas en remate judicial, no procede la rescisión del contrato con la pérdida de la seña entregada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 68, Ser. 4ª.

22. **Remate judicial**.—El retardo en la escrituración de un bien comprado en remate judicial, no puede fundar el desistimiento si la mora es imputable al comprador.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 377, Ser. 4ª.

23. **Remate judicial**.—El error sobre el nombre de la calle en que está ubicado el bien rematado judicialmente, no es causal de la nulidad del acto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 187, Ser. 4ª.

24. **Remate judicial**.—No procede la rescisión de la venta título 416 del mismo Código. Aun suponiendo que el comprador pudiera alegar en su favor el caso fortuito, el que nos ocupa no tiene el carácter de tal, pues el Cód. Civ. al definirlo en el art. 514 ha dicho que es caso fortuito el que no ha podido preverse ó que previsto no ha podido evitarse, y es evidente que la suspensión de pagos de un establecimiento bancario es susceptible de preverse, pues está en el orden natural de los negocios espuestos tanto á un feliz como á un mal resultado. Por otra parte, es de notarse que los depósitos no se han extinguido sino que han sufrido una depreciación, y aun descontada esta pérdida resultaba que tenía el comprador un excedente sobre la cantidad que necesitaba para el pago de la compra que hizo.

21—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara. Véase el núm. 3.

22—Véase: verb *Desistimiento*, núm. 6.

23—Se hizo consistir el defecto apuntado, en que el terreno vendido se decía en los avisos, estar ubicado en la calle Las Flores, mientras que los títulos ubicaban el terreno en la calle Anchorena. Se dijo que la calle era siempre la misma, pues solo se le había cambiado el nombre. Si esto era exacto, no había pues error en el nombre, siendo en ambos casos las calles la misma, lo que podía comprobarse con un informe de la Municipalidad.

24—El defecto se hizo consistir en el error del nombre de la calle, como



en remate judicial si los defectos del título en que se funda son de fácil subsanación. —Jur. Civ., tom. 8, página 187, Ser. 4^a.

25. **Remate judicial**—La falta de publicación de los edictos durante todo el término de ley en el diario designado, no basta para anular el remate judicial, siempre que se justifique que la publicación se ha hecho por un término mayor, aunque en otros diarios.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 187, Ser. 4^a.

26. **Remate judicial**—Si el comprador persiste en el cumplimiento del contrato de compraventa en remate judicial, aun reconocida la imposibilidad de la escrituración en breve término, no procede la resolución del contrato. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 414, Ser. 4^a.

27. **Remate judicial**—Suspendido sin culpa del martillese espresa en el número precedente; siendo ese error fácilmente subsanable como se ha visto.

25—El juez había designado «La Nación», donde no se publicaron los edictos por todo el término de ley, pero la publicación se hizo por todo ese término en el «Boletín Judicial» y «El Nacional». El Camarista Dr. Bustos, dijo: «no lo conceptúo aceptable porque si bien es exacto que no se han publicado los ayisos por el término requerido, esa publicación se ha efectuado por treinta días en el «Boletín Judicial» con arreglo á lo dispuesto en el art. 323 de la Ley Org. de los Tribunales. La publicación se ha hecho además por igual término en el diario «El Nacional», de manera que sin contar la de «La Nación» y «La Prensa», la finca ha estado en almoneda mayor término del exigido por la ley. El Dr. Gimenez aceptó estas consideraciones y dijo, que el remate era válido no obstante los defectos apuntados, como ser que el precio obtenido excedía en mucho al del fijado en la tasación, y que todos los interesados en la testamentaria solicitaron la aprobación del acto, que no había objeto en declararlo nulo, puesto que según el resultado obtenido, el mandato se había llevado á cabo llenándose de una manera satisfactoria los propósitos de la ley. Véase: verb. *Edictos*, núm. 5.

26—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 22.

27—Véase: verb. *Comisión*, núm. 7 y *Martillero*, núm. 2.



ro, el juez debe fijar una comisión equitativa. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 141, Ser. 4^a.

28. Remate judicial—Los bienes de menores deben ser vendidos en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 231, Ser. 4^a.

29. Remate judicial—La falta de intervención de algunos herederos, como asimismo la publicación de los avisos de remate judicial por menos días que los fijados por el juez, hacen procedente la nulidad de la ejecución aun después de aprobada la venta, hecha oblación del precio y dada la posesión al comprador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 310, Ser. 4^a.

30. Remate judicial—La resolución sobre nulidad ó validez de un remate judicial debe contener los requisitos que la ley exige para el pronunciamiento de la sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 47, Ser. 4^a.

31. Remate judicial—El martillero tiene derecho al cobro de media comisión si el remate judicial se suspende á petición de partes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 77, Serie 4^a.

32. Remate judicial—El comprador en remate judicial solo puede observar los títulos dentro del término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 90, Ser. 4^a.

33. Remate judicial—El desistimiento de compras hechas en remate judicial, solo es pertinente cuando los ti-

28—Véase: verb. *Bienes de menores*, núm. 5.

29—Véase: verb. *Avisos*, núm. 1.

30—Véase: *Nulidad de un remate judicial*, núm. 2.

31—De acuerdo con la jurisprudencia constantemente establecida por la Cámara. Véase: verb. *Martillero*, núm. 2.

32—Que es de tres días desde que han sido puestos de manifiesto en la oficina —art. 521 del Cód. de Proc.

33—Art. 522 del Cód. de Proc.



tilos adolezcan de algún vicio insubsanable en breve tiempo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 293, Ser. 4^a.

34. **Remate judicial**—Al comprador que desiste de las objeciones hechas á los títulos corresponde el pago de las costas.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 148, Ser. 4^a.

Remate judicial—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 23 y 56—*Desistimiento*, núm. 2—*Acreedor hipotecario*, número 1—*Condominio*, núm. 7—*Socios*, núm. 1—*Tercería*, núm. 3—*Bienes de la sucesión*, núm. 2.

1^a. **Remate público**—El anuncio en venta del inmueble y aun el remate público, no es prueba de tener la posesión material de la cosa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 112, Ser. 4^a.

1^b. **Remisión de una deuda**—La remisión de una deuda es un derecho adquirido desde la fecha en que tuvo lugar, y en consecuencia las leyes que puedan modificar ese hecho no tienen efecto retroactivo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3^a.

2. **Remisión de una deuda**—La remisión de una deuda antes de la ley de correcciones al Código Civil, no importaba donación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 218, Ser. 3^a.

Remoción—Véase: *Bienes de la esposa*, núm. 1.

Remuneración—Véase: *Habilitado*, núm. 1—*Servicios*, núm. 11.

1. **Remuneración profesional**—Para la facción de planos y presupuestos para obras públicas, mientras no se justifique orden expresa, se supone subordinada á la realización de la obra.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 430, Ser. 4^a.

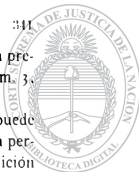
1^a. **Rendición de cuentas**—No procede la acción ejecu-

1^a—Véase: verb. *Poseción material*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Efecto retroactivo*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Donación*, núm. 2.

1^c—Véase: verb. *Acción ejecutiva*, núm. 1.



tiva contra el administrador de la testamentaria, sin previo juicio de rendición de cuentas. — Jur. Civ., tom. 3, pág. 40, Ser. 3ª.

2. **Rendición de cuentas**—La esposa del tutor puede declarar como testigo en el juicio seguido contra la persona que desempeñaba el cargo, demandado por rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 80, Ser. 3ª.

3. **Rendición de cuentas**—El albacea está obligado á rendir cuenta de su administración, y debe ser condenado en las costas del juicio si judicialmente debe exigirsele dicha rendición. —Jur. Civ., tom. 3, pág. 200, Ser. 3ª.

4. **Rendición de cuentas**—Aun cuando el mandatario reconozca su obligación de rendir cuentas, debe ser condenado en las costas si no lo verifica inmediatamente de exigirsele.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 161, Ser. 3ª.

5. **Rendición de cuentas**—El mandatario está obligado á rendir cuenta del mandato dentro del término que discrecionalmente fije el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 161, Ser. 3ª.

6. **Rendición de cuentas**—La rendición de cuentas presentada por el mandatario y no observada por el mandante importa su aprobación ó conformidad.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 120, Ser. 3ª.

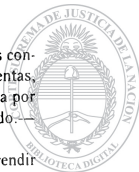
2.—El marido no era el dueño del pleito, sino parte como representante legal de su pupilo, no siendo en este caso de aplicación el art. 188 del Cód. de Proc. Cuando el artículo citado habla de *parte*, se refiere al dueño del pleito, no al que tiene intervención por un derecho que no es propio, personal de él.

3.—Véase: verb. *Albacea*, núm. 3.

4.—Véase: verb. *Costas*, núm. 14.

5.—Se trata de una obligación sin plazo determinado por la ley, y por consiguiente su fijación corresponde al juez con arreglo á su criterio.

6.—Véase: verb. *Mandatario*, núm. 7.



7. **Rendición de cuentas**— La acción de los menores contra el curador se circunscribe á la rendición de cuentas, sin que en ningún caso puedan ejercer acción directa por las sumas que justifiquen que aquél hubiera recibido.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 345, Ser. 3ª.

8. **Rendición de cuentas**—El tutor está obligado á rendir cuenta documentada de la administración de los bienes del pupilo y en caso de no verificarlo, debe abonar á éste el saldo dentro de la suma que para el juramento estimatorio fije el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 54, Ser. 3ª.

9. **Rendición de cuentas**—El mandante ó sus sucesores legales no pueden ser condenados en las costas del juicio seguido contra el mandatario sobre rendición de cuentas, mientras no se justifique que habían sido rendidas y aprobadas con anterioridad al juicio.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 124, Ser. 3ª.

10. **Rendición de cuentas**—El mandatario está obligado á presentar á su mandante la rendición de cuentas de su administración en tanto no justifique haberlo verificado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 293, Ser. 3ª.

11. **Rendición de cuentas**—El poder especial para el 7—La rendición de cuentas establece el saldo deudor ó acreedor. El mero hecho de haber el mandatario recibido una suma en su carácter de tal, no implica su condición de deudor, porque el mandatario se ve casi siempre obligado á hacer desembolsos en virtud del mandato, y así como recibe sumas de dinero también las puede emplear, resultando entonces que lo recibido por él no se lo debe al mandatario, pues se compensaría una partida con otra. La liquidación de cuentas es la única forma de saber si se debe ó nó.

8—Debe rendir cuenta justificada, dice el art. 460 del Cód. Civ., y en cuanto al juramento estimatorio lo preceptúa espresamente el artículo 461.

9 Véase: verb. *Costas*, núm. 21.

10— Véase: verb. *Mandatario*, núm. 9.

11— Véase: verb. *Poder especial*, núm. 1.



arreglo y liquidación de una testamentaria y sus incidentes, no es bastante para demandar á un tercero por rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 68, Serie 3ª.

12. Rendición de cuentas—No procede en tanto no se justifique la existencia del mandato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 199, Ser. 3ª.

13. Rendición de cuentas—Reconocida la existencia de participación en las utilidades de un negocio determinado, el que lo llevó á cabo debe rendir cuenta de la negociación aun cuando no exista contrato de sociedad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 240, Ser. 3ª.

14. Rendición de cuentas—No observada parcialmente, y cuya oposición general no se comprueba, debe ser aprobada por el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 358, Serie 3ª.

15. Rendición de cuentas—El albacea debe depositar el saldo que reconozca adeudar en la rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 7, Ser. 4ª.

16. Rendición de cuentas—El mandatario debe al man-

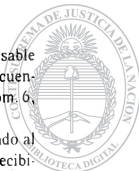
12—Véase: verb. *Mandato*, núm. 8.

13—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 3.

14—El demandado no impugnó las cuentas en una forma precisa: no afirmó que su mandatario hubiese recibido mayor cantidad de la que resultaba de la rendición de cuentas, ni tampoco desconoció las entregas que éste le había hecho en diversas fechas y formas. El mandante se limitó á pedir que se abriera la causa á prueba, pero sin desconocer ni objetar el debe y el haber de la cuenta. Ese silencio ó esa actitud evasiva, debe considerarse como un reconocimiento de la verdad de las partidas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 100, inc. 1º del Cód. de Proc., salvo que se produzca una prueba contraria y bastante para destruir esa presunción de la ley.

15—Véase: verb. *Albacea*, núm. 6.

16—El mandante se presentó pidiendo que se le rindiera cuenta de la suma de seis mil pesos en que el mandatario había vendido una de sus



dante cuenta justificada del mandato y es responsable de aquellas partidas que objetadas en la rendición de cuentas no fueren debidamente justificadas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 15, Ser. 4ª.

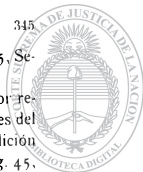
17. Rendición de cuentas—Vencido el término fijado al albacea para la rendición de cuentas de los fondos recibidos sin que lo haya verificado, procede la condenación al pago con costas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 25, Ser. 4ª.

18. Rendición de cuentas—El mandatario está obligado á rendir cuenta al mandante de los papeles de crédito entregados para su cobro, en caso de no verificarlo, deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados pero no su valor íntegro en tanto no se justifique plenamente

propiedades. El demandado pidió el rechazo de la demanda alegando que él no recibió esa suma sino cuatro mil quinientos, de cuya inversión presentó su cuenta. El demandado además negó que el mandato se hubiese constituido tan solo para firmar la escritura de venta y para que percibiese el precio. La escritura se limitaba á establecer cuál fué ese precio. De la escritura de enajenación resultaba que el precio fué de seis mil pesos; confiesa el mandatario haber recibido en el acto de la escrituración dos mil quinientos, y tres mil quinientos antes del acto. Pero el mandatario pretendía que ese precio era simulado y que solo fué de cuatro mil quinientos. Esta afirmación debía él probarla, porque se trataba de un hecho nuevo aducido en juicio cuya prueba incumbe al que lo establece; no la comprobó y por el contrario el contenido de la escritura establecía en una forma fehaciente todo lo contrario, no solo para las partes que en ella intervinieron sino también para los terceros—arts. 994 y 995 del Cód. Civ.—Habiendo sido mandatario el demandado y habiéndose comprobado la suma recibida en virtud del mandato, la obligación de dar cuenta de los fondos recibidos era evidente—art. 1909.

17—Iniciada la demanda de rendición de cuentas, el juez señaló el término de quince días; no habiendo cumplido, le señaló seis días más bajo apercibimiento; vencido también este plazo fué condenado á abonar lo pedido en la demanda, haciendo de esa manera efectivo el apercibimiento decretado.

18—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 85.



que recibió su importe.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 75, Serie 4^a.

19. **Rendición de cuentas**—Si el mandante se da por recibido del precio de la cosa objeto del contrato antes del otorgamiento del mandato, no puede exigir la rendición de cuentas del mandatario.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 45, Ser. 4^a.

20. **Rendición de cuentas**—Ordenada la rendición de cuentas por sentencia ejecutoriada, no procede la formación de incidentes para cada operación, deben rendirse conjuntamente.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 380, Ser. 4^a.

21. **Rendición de cuentas**—El mandatario debe rendir cuenta al mandante de las sumas que confiese haber recibido y en el término que fije el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 385, Ser. 4^a.

22. **Rendición de cuentas**—El mandante tiene derecho á exigir del mandatario la exhibición general de sus libros en el juicio sobre rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 30, Ser. 4^a.

23. **Rendición de cuentas**—El tutor puede durante el ejercicio de la tutela presentar rendición de cuentas por periodos determinados.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 28, Serie 4^a.

24. **Rendición de cuentas**—El poder especial para liquidar una testamentaria con facultad de demandar á terceros, basta para exigir la rendición de cuentas á los que en ella han intervenido con anterioridad.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 33, Ser. 4^a.

25. **Rendición de cuentas**—En este juicio debe nombrarse tutor especial del menor que tenga interés como heredero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 143, Ser. 4^a.

22 —Véase: *Libros de comercio*, núm. 3.

24 —Véase: verb. *Poder especial*, núm. 7.



X 26. **Rendición de cuentas**—La acción de rendición de cuentas como personal se prescribe por el término de veinte años.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 180, Ser. 4ª.

27. **Rendición de cuentas**—El reconocimiento de la obligación de rendir cuentas hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 83, Ser. 4ª.

28. **Rendición de cuentas**—Debe rechazarse la acción de rendición de cuentas contra el mandatario si el actor con anterioridad ha reconocido judicialmente que investía el carácter de socio en el negocio que motivó el mandato.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 125, Ser. 4ª.

29. **Rendición de cuentas**—Debe aprobarse la rendición de cuentas de la tutela después de discutidas y resueltas las observaciones opuestas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4ª.

30. **Rendición de cuentas**—El legatario de parte alicuota puede pedir en cualquier tiempo la rendición de cuentas, sin esperar á que termine el juicio sucesorio con la división definitiva de los bienes y completa ejecución del testamento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 4ª.

Rendición de cuentas—Véase: *Costas*, núm. 6—*Condominio*, núm. 1—*Excepción de defecto legal*, núm. 7—*Poder*, núm. 4—*Tutor*, núms. 5 y 12.

1. **Rentas**—Las cantidades adjudicadas sobre un bien testamentario para el pago de la hijuela de deudas, aumentan el haber del heredero encargado de ese pago y en consecuencia los condóminos herederos no pueden pretender se dividan las rentas por partes iguales sino equivalentes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4ª.

27—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 47.

28—Véase: verb. *Mandatario*, núm. 17.

30—Véase: verb. *Bienes de menores*, núm. 4.

1—Véase verb. *Condominio*, núm. 3.



2^a. **Rentas**—El legatario de parte alicuota tiene derecho proporcional á los frutos ó rentas de los bienes de la sucesión mientras dure la indivisión.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 418, Ser. 4^a.

1^a. **Renuncia**—La mayor ó menor parte de la herencia que los herederos todos mayores se adjudiquen en la partición estrajudicial, no repugna ni es contraria á lo que la ley dispone sobre porción de los herederos forzosos, pues las diferencias importan una renuncia permitida por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3^a.

2. **Renuncia**—A la tutela legítima, puede ser retractada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 236, Ser. 4^a.

Renuncia—Véase: *Fianza*, núm. 4—*Apoderado*, núm. 2—*Notificación*, núm. 1—*Derechos hereditarios*, núm. 4—*Contrato por escritura pública*, núm. 1—*Arbitro*, núm. 1.

1^b. **Renuncia tácita**—El conocimiento por parte del comprador, antes de la adquisición, de los vicios de que adolecía el contrato, importa una renuncia tácita á la evicción fundada en los mismos.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 21, Ser. 3^a.

2^b. **Renuncia tácita**—El pago al contado de una obligación á plazo, no permite la repetición contra el acreedor por la diferencia ó descuento, pues se supone la renuncia tácita del derecho acordado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 392, Ser. 4^a.

Reparto—Véase: *Herencia*, núms. 4 y 5.

1^a. **Repetición**—Para que proceda la repetición por el pago verificado dos veces indebidamente, es necesario

2^a—Véase: verb. *Bienes de la herencia*, núm. 3.

1^a—Véase: verb. *Herederos forzosos*, núm. 1.

1^b—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 1.

2^b—Véase: *Obligación á plazo*, núm. 2.

1^c—Arts. 773, 774, 778 y 792 del Cód. Civ.



justificar que no existían otras causas que las que motivaron uno de los pagos; si resulta que existían otras a las que pudo ser imputado, la repetición debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 345, Ser. 3^a.

Repetición—Véase: *Prelación*, núm. 1.

1^a. **Representación**—Demandada la sociedad, no procede la intervención individual de los socios, la representación debe ser conjunta.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 37, Ser. 4^a.

1^b. **Representante**—Aun cuando el procurador pueda individualizar las defensas, si son varios los demandados, deben nombrar un solo apoderado o representante judicial.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 121, Ser. 3^a.

2. **Representante**—La intimación al cumplimiento de una obligación de hacer, hecha al apoderado o representante, es legal y válida aun cuando la sentencia se refiera al mandante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 73, Ser. 4^a.

Representante—Véase: *Apoderado único*, núm. 3—*Apoderado*, núm. 3—*Personería*, núms. 1, 10 y 12—*Herederos*, núm. 2—*Actos judiciales*, núm. 1—*Recusación*, número 12—*Damnificado*, núm. 1—*Domicilio*, núm. 5—*Posiciones*, núms. 36 y 37—*Curadora*, núm. 1—*Indivisión*, núm. 1—*Papel sellado*, núm. 6—*Seña*, núm. 8—*Poder*, núm. 2.

Requisito esencial—Véase: *Escritura de venta*, núm. 1—*Testamento*, núm. 3.

Rescisión—Véase: *Contrato con pacto comisorio*, núm. 1.

1^o—Según el art. 1711 del Cód. Civ. los socios individualmente considerados se reputan terceros respecto de la sociedad cuando no derivasen sus relaciones de su calidad de socios ó de administradores de la sociedad. Un tercero no puede tener la representación de la sociedad sino en virtud de mandato.

1^b—Véase: verb. *Demandados*, núm. 1.

2^o—Véase: *Obligación de hacer*, núm. 15.



—*Contrato de compraventa*, núms. 2 y 3—*Contrato*, números 4, 10 y 14—*Compraventa*, núms. 1 y 10—*Contrato bilateral*, núm. 6—*Confesión*, núm. 1—*Contrato rescindido*, núms. 1 y 2—*Remate judicial*, núms. 7, 20, 21, 24 y 26—*Consignación*, núm. 1—*Pacto comisorio*, núms. 3, 4 y 7—*Locación*, núm. 7—*Contrato de arrendamiento*, núms. 21, 22 y 23—*Contrato por escritura pública*, número 1—*Boleto de compraventa*, núms. 20 y 23—*Locación*, núm. 4—*Contrato de arrendamiento*, núms. 23, 24, 29 y 30—*Daños y perjuicios*, núms. 95 y 108.

Residencia—Véase: *Juicio sucesorio*, núm. 1—*Excepción de arraigo*, núms. 1 y siguientes—*Testigo*, núms. 2 y 4—*Arraigo*, núm. 2.

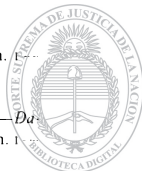
Resolución—Véase: *Recurso de reposición*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núms. 2 y 5—*Acción criminal*, núm. 1—*Cámara*, núm. 1—*Herencias transversales*, núm. 1, 2 y 3—*Acciones civiles*, núm. 1—*Disenso*, núm. 1—*Ejecutoria*, núm. 1—*Inapelable*, núm. 8—*Contencioso-administrativo*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núm. 25—*Derechos hereditarios*, núm. 5—*Contratos*, núm. 3—*Pacto comisorio*, núms. 5 y 6—*Cámara*, núm. 2.

^{1ª}. **Resolución interlocutoria**—La Cámara puede anular la resolución interlocutoria dictada en un recurso si se ha omitido sin culpa de la parte el informe *in voce* solicitado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 207, Ser. 4ª.

^{1ª}. **Resoluciones municipales**—Las resoluciones municipales que dejan sin efecto un contrato celebrado por la Municipalidad en su carácter de persona jurídica, no pueden dar origen a un juicio contencioso-administrativo.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 432, Ser. 3ª.

^{1ª}—Véase: verb. *Informe in voce*, núm. 1.

^{1ª}—Véase: verb. *Contrato*, núm. 1.



Resoluciones municipales —Véase: *Demolición*, núm. 1.—
Recurso de apelación, núm. 1.

Responsabilidad —Véase: *Fiador*, núm. 3.

Responsabilidad civil—Véase: *Acto ilícito*, núm. 4—*Daños y perjuicios*, núm. 23—*Culpa ó negligencia*, núm. 1.—
Funcionarios públicos, núm. 5.

Restos humanos—Véase: *Jurisdicción incompetente*, número 1—*Jurisdicción por cantidad*, núm. 1.

1^a. **Retención** —De mercaderías, la retención de mercaderías por orden de autoridad competente, no puede fundar una acción por daños y perjuicios procedentes de la falta de entrega.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 5, Ser. 3^a.

2. **Retención** —Es improcedente el interdicto de adquirir la posesión si el poseedor tiene por sentencias ejecutoriadas reconocido el derecho de retención en virtud de las mejoras hechas en la cosa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 140, Ser. 4^a.

Retención—Véase: *Excepción de pago parcial*, núm. 1.—*Escribano*, núm. 1.

Retractación—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 8.

1^b. **Retrotraer** —El plazo estipulado en un boleto privado para hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad, solo puede contarse desde que el instrumento privado quede convertido en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 72, Ser. 3^a.

Retrotraer—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 21.

1^a. **Retroventa** —El pacto de retroventa contenido en la escritura de venta puede ser modificado por instrumento privado probada su autenticidad, ó por los hechos de

1^a—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 40.

2—Véase: *Derecho de retención*, núm. 1.

1^b—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 9.

1^c—Véase: *Pacto de retroventa*, núm. 2.



las partes posteriores al vencimiento, que demuestren la voluntad de que aquel quede sin efecto. —Jur. Civ., tomo 5, pág. 55. Ser. 4^a.

2. Retroventa—Siendo un término fatal el que la ley

2—Fué un hecho constatado que el vendedor dejó trascurrir el plazo sin ejercitar el derecho que le acordaba el acto jurídico, quedando en su mérito el comprador propietario irrevocable del inmueble, en conformidad al texto de nuestra ley vigente —art. 1382, Cód. Civ.—Pero es el caso entretanto que la retroventa fué estendida como garantía de la cuenta corriente que existía entre el comprador y vendedor, lo que importa que hasta tanto ésta no se determinara y liquidara, de conformidad de partes ó por decisión judicial, los derechos y obligaciones emergentes de la misma no podían legítimamente ejercitarse. Se reconoció esta particularidad del contrato, aunque no en los términos declarados por el vendedor por cuanto quedó convenido, decía el actor, que la cuenta corriente se liquidaría hasta el vencimiento del plazo fijado de común acuerdo. Ocurren entretanto, observaciones de diverso orden que favorecen la situación de derecho del comprador, y que dan por resultado que la fecha de la escritura debe considerarse firme. En efecto. Si el término para recuperar la cosa, no era en realidad el establecido en la escritura pública, tendríamos que habría en ella una enunciación falsa, falsedad que no había sido entretanto alegada por el vendedor y la que sería ineludible declarar previamente para despojar al acto de su firmeza jurídica y á sus convenciones de la fe que les dá la ley. La retroventa tiene una duración limitada, no puede exceder de tres años, como lo previene el art. 1381 del Cód. Civ. ya citado. Ahora bien, según la inteligencia que el vendedor daba á la convención, á la que estaba subordinada la obligación accesoria, no existiría en realidad plazo ó sería indefinido. Una retroventa en estas condiciones no se halla autorizada por nuestra legislación ni por la doctrina en que manifiestamente se ha inspirado. No debe suponerse, exhibiéndose convenciones lícitas, que las partes que en ellas intervienen han tenido el propósito de violar la ley, como no puede suponerse que ignoren sus preceptos, ignorancia que de otro lado no les serviría de excusa. Las salvedades del vendedor tuvieron además en alcance de su exactitud y verdad, un antecedente de indubitable importancia en las propias declaraciones producidas por su adversario, en una carta agregada y operaciones de finiquito de que instruí su contenido. Me declaro conforme, dice en ella, con su cuenta corriente de fecha 27 de Mayo de 1888, que arroja un saldo á su favor de pesos 9797.90.» Por el saldo



fija para hacer uso del derecho de recuperar la propiedad vendida con pacto del retroventa, no puede admitirse en derecho la existencia y validez de un plazo indeterminado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 4.^a

3. **Retroventa**—Para resolver la petición de sacar á remate el derecho del concurso á retrotraer la finca enajenada con pacto de retroventa en que es parte el comprador condicional, debe formarse incidente.—Jur. Civ. tomo 10, pág. 110, Ser. 4.^a.

Retroventa—Véase: *Venta*, núm. 5—*Propiedad*, número 2.

1. **Revocación**—Para que proceda la revocación de los actos á título oneroso, llevados á efecto por el marido con perjuicio de los intereses de la esposa, es requisito indispensable justificar la complicidad del tercer poseedor, no basta probar la simulación de las primeras enajenaciones ni aún el conocimiento que del fraude tenían

susodicho, agrega, «más 735.10 pesos por intereses hasta el 23 de Noviembre de 1888, renuevo el pacto de retroventa.» En presencia de esta carta y demás elementos de que se hizo mérito en autos pudo decirse, con exacto criterio que al vencimiento del plazo señalado en la escritura de venta, estaba ya liquidada la cuenta corriente. Las operaciones comerciales que con ulterioridad á dicho término hayan realizado demandante y demandado, la continuación misma de relaciones de «debe y haber» entre ellos, no impedían ciertamente la adquisición del derecho subordinado al vencimiento de la retroventa, pues para llegar á ese resultado habría sido ineludible probar la existencia de acuerdos comunes sobre prórroga del contrato, posteriores al vencimiento, comprobación que no se produjo en el juicio.—No había sobre este extremo adminículos bastantes en autos.—Una carta exhibida en autos no puede considerarse como elemento decisivo, pues espresar al demandado el deseo de que vuelva á ser propietario de la casa es significarle que ha perdido ese carácter, pero en manera alguna acordarle prórroga, que era el punto conducente al derecho del apelante.

3—Véase: verb. *Incidente*, núm. 2.

los anteriores adquirentes.—Jur. Civ. tom. 1º, pág. 5, Ser. 3ª.

Revocación—Véase: *Costas*, núm. 2—*Procuraciones judiciales*, núms. 1 y 2—*Venia*, núm. 4—*Acto simulado*, núm. 1—*Simulación*, núm. 14—*Mandato*, núm. 13.

Revocatoria—Véase: *Término*, núm. 1—*Recurso de reposición*, núms. 1 y 2.

Ribera—Véase: *Aluvión*, núms. 1, 2 y 3.

Ríos navegables—Véase: *Aluvión*, núm. 2.

Ropas de uso—Véase: *Alhujas*, núm. 1.





Sacrilego—Véase: *Hijo natural*, núm. 1.

Saldo—Véase: *Albacea*, núm. 6—*Intereses*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 1—*Locación de sesrvicios*, número 3—*Prenda*, núm. 8—*Cuenta corriente*, núm. 2.

Secretaría—Véase: *Escribano*, núm. 2.

Secretario—Véase *Notificación*, núm. 2—*Espedientes*, núm. 2—*Desacato*, núm. 2—*Escrito*, núms. 3, 4 y 5—*Documento*, núm. 5.

Secta protestante—Véase: *Esposos*, núm. 1—*Matrimonio*, núm. 1.

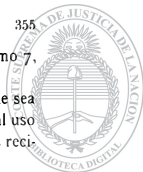
Segunda instancia—Véase: *Prescripción en 2ª instancia*, núm. 1—*Herencias transversales*, núms. 1, 2 y 3.

1. **Sello**—El contrato de locación en que se estipula que las mejoras quedan á favor del locador, debe estenderse en el sello que la ley fija para el valor de las mejoras y no por el precio del arrendamiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 67, Ser. 4ª.

2. **Sello**—La cesión de derechos por un precio determinado, solo debe abonar el correspondiente al precio.

1—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 17.

2—La cesión no importa una obligación sujeta á plazos, sino simplemente la trasmisión de un derecho sobre un crédito que ha sido efectuada por precio determinado y sobre el cual, con arreglo á la escala



y por omisión, la multa respectiva.—Jur. Civ., tomo 7, pág. 34, Ser. 4^a.

1.^a Sellos—El recibo de descargo, cualquiera que sea el valor ó documentos recibidos, solo está sujeto al uso de la estampilla que la Ley de sellos fija para los recibos.—Jur. Civ., tom. 5, pag. 70, Ser. 4^a.

2. Sellos—A la transacción por cantidad indeterminada, debe agregársele un sello de diez pesos por cada foja.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 30, Ser. 4^a.

3. Sellos—El impuesto de sellos debe pagarse por el total de los bienes, aun cuando estén situados fuera de la República.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 37, Ser. 4^a.

4. Sellos—La manifestación de conformidad con el saldo que arroja trimestralmente la cuenta corriente, no está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 38, Ser. 4^a.

Sellos—Véase: *Posesión judicial*, núm. 1—*Prueba*, número 8—*Cuenta corriente*, núm. 1.

Semovientes—Véase: *Venta*, núm. 6.

1. Sentencia—La relación y esposición de los antecedentes de la sentencia, no son indispensables, tratándose de incidentes, siempre que para evitar repeticiones

de valores que contiene el art. 1º de la Ley de sellos de 1891, ha debido computarse el sello que á dicho documento corresponde; desde luego se hace inaplicable al caso la disposición que menciona la tercera parte del art. 2º de la misma ley, pues ella únicamente puede referirse á las obligaciones, que aunque por su naturaleza se prestan á ser cumplidas dentro de un plazo, no lo tienen, como puede dar lugar á ello un pagaré, una letra de cambio, etc.

1º—Véase: verb. *Estampilla*, núm. 2.

2—De acuerdo con lo establecido en la parte final art. 2º de la Ley de sellos de 1891.

3—Véase: verb. *Impuesto*, núm. 3.

4—Véase: verb. *Cuenta corriente*, núm. 2.



se haga referencia á un escrito determinado en que aquéllas existan.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 422, Ser. 3ª.

2. **Sentencia**—La sentencia obligando al esposo al cumplimiento del contrato de arrendamiento de bienes propios de la esposa, declarado nulo, no hace cosa juzgada para ésta, que no fué parte en el juicio.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 239, Ser. 3ª.

3. **Sentencia**—La prueba preconstituida ó constante de instrumentos públicos de fecha anterior á la demanda, permite á los jueces fundar su sentencia, aun cuando durante el término no se haya producido prueba para justificar la acción.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 434, Ser. 3ª.

4. **Sentencia**—El Juzgado, aun cuando haya dictado sentencia, no se desprende de su jurisdicción y puede dictar medidas preventivas ó conservatorias.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 4ª.

5. **Sentencia**—Los jueces están obligados á dictar sentencia sobre el punto materia del litigio, cualquiera que sea la forma que haya adoptado la defensa.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 371, Ser. 4ª.

6. **Sentencia**—La parte dispositiva de la sentencia que deja á salvo derechos á deducir en otro juicio, no causa agravio á ninguno de los que han intervenido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 117, Ser. 4ª.

7. **Sentencia**—En toda acción tendente al cumplimiento de la sentencia, debe conocer el juez que la dictó.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 55, Ser. 4ª.

2—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 1.

3—Véase: *Prueba preconstituida*, núm. 1.

4—Última parte del art. 222 del Cód. de Proc.

6—La salvedad hecha por los jueces inferiores no puede causar agravio, desde que la parte á cuyo favor se hace, podría con ó sin ella ejercitar siempre su derecho.



8. **Sentencia**—Las defensas opuestas con posterioridad á la contestación de la demanda, no deben ser tenidas en cuenta al dictar sentencia.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 172. Ser. 4^a.

9. **Sentencia**—La providencia de autos para sentencia en las cuestiones de puro derecho, solo pueden dictarse después del doble traslado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 391. Ser. 4^a.

10. **Sentencia**—Recaída en el juicio de interdicto de recobrar, no hace cosa juzgada ni forma prueba en el petitorio ó de reivindicación.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 120. Ser. 4^a.

8—Arts. 216 y 217 del Cód. de Proc.

9—Art. 103 del Cód. de Proc.

10—Es constante en jurisprudencia. Los juicios sobre interdicto son por su naturaleza breves y sumarios, como lo indica su propio nombre y el objeto mismo á que se dirijen. Son propiamente un recurso extraordinario autorizado por la ley desde el derecho de los romanos, para fijar la persona del poseedor y evitar los disturbios que produciría la inclinación que tienen los hombres de hacerse justicia por sí mismos en materia de posesión. Por razón de las ventajas que esta produce en los litigios sobre la propiedad, como lo dice Escriche, de acuerdo con la doctrina aceptada siempre en derecho. Se comprende por lo mismo, cómo las sentencias que se pronuncian en estos juicios tienen tan solo el carácter de interlocutorias ó de providencias interinas, en cuanto deciden el hecho de la posesión actual ó momentánea que corresponde, ó debe gozar el que la pide, y porque se sustancian brevemente sin los trámites y las solemnidades del juicio ordinario, librándose al plenario ó petitorio las cuestiones relativas á la propiedad. Son, pues, dos juicios de naturaleza muy distinta el posesorio y el petitorio, por tratarse en el primero tan solo de la posesión actual que corresponde á una de las partes y en el segundo de la acción real ó derecho de propiedad que tiene el que reclama como suyo el inmueble poseído por otro, estando este juicio espresamente autorizado por la ley civil,—arts. 2482 y 2484— en favor de quien fuese vencido en el primero, es lógico que no le perjudique la resolución pronunciada en ese juicio ni produzca la autoridad de cosa juzgada por no tratarse de la misma cosa como no la produce



11. **Sentencia**—Que manda reducir á escritura pública el boleto de compraventa, solo importa su protocolización en el Registro Público.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 229, Ser. 4^a.

12. **Sentencia**—La liquidación como consecuencia, debe ser practicada por contador público.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 115, Ser. 4^a.

13. **Sentencia**—Solo pueden liquidarse intereses sobre la cantidad adeudada si la sentencia espresamente lo determina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 242, Ser. 4^a.

14. **Sentencia**—La resolución sobre nulidad ó validez de un remate judicial, debe contener los requisitos que la ley exige para el pronunciamiento de la sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 47, Ser. 4^a.

15. **Sentencia**—La intimación al cumplimiento de la obligación de hacer, hecha al apoderado ó representante, es legal y válida, aun cuando la sentencia se refiera al mandante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 73, Ser. 4^a.

Sentencia—Véase: *Termino*, núm. 4 — *Documentos*, número 1 — *Acreedor privilegiado*, núm. 1 — *Juicio sumario*, núm. 1 — *Costas*, núm. 45 y 62 — *Nulidad de una sentencia*, números 1 y siguientes — *Prejuzgamiento*, núm. 1 — *Rebel-
día*, núm. 4 — *Posesión judicial*, núm. 9 — *Interdicto*, número 2 — *Acreedor hipotecario*, núm. 2 — *Daños y perjuicios*, núms. 92 y 106 — *Alimentos*, núms. 3, 7, 12 y 15 — *Declaraciones*, núm. 3 — *Escritura pública*, núm. 23 — *Ali-*
la sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo, ni la que fija alimentos en juicio sumario, según lo ha establecido la Cámara en las causas que se registran en el tom. 1^o, págs. 214 y 432, Ser. 1^a.

11—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 28.

12—Véase: verb. *Contador*, núm. 2.

13—Véase: verb. *Intereses*, núm. 9.

14—Véase: *Nulidad de un remate judicial*, núm. 2.

15—Véase: *Obligación de hacer*, núm. 15.



mentos provisionarios, núms. 1 y 2—*Embargo preventivo*, núm. 17—*Embargo*, núm. 5—*Inhabilidad de título*, número 8—*Inhibición*, núms. 6 y 13—*Prueba procedente*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núms. 6 y 8—*Interdicto de despojo*, núm. 9—*Ejecución de sentencia*, núm. 1—*Cuenta particionaria*, núm. 4—*Obligación de hacer*, núm. 13—*Escepciones*, núm. 8—*Escepción de falta de personería*, núm. 13—*Escepción de litispendencia*, núm. 6—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 15—*Escepción de pago*, núm. 6.

Sentencia absolutoria— Véase: *Acción civil*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 30 y 34.

Sentencia aprobatoria— Véase: *Cosa juzgada*, núm. 4—*Información supletoria*, núm. 7—*Liquidación*, núm. 5.

Sentencia condenatoria— Véase: *Embargo preventivo*, números 30 y 31—*Intereses*, núm. 7.

Sentencia definitiva— Véase: *Embargo preventivo*, números 6 y 7—*Diligencias de prueba*, núm. 18—*Heren-
cias transversales*, núm. 4.

1^a. *Sentencia de desalojo* La sentencia recaída en el juicio sumario de desalojo, no hace cosa juzgada en el que sobre daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de locación deduzca el locatario.— Jur. Civ., tom. 7, pág. 303, Ser. 3^a.

Sentencia de divorcio— Véase: *Inhibición*, núm. 13.

1.^b *Sentencias ejecutoriadas*— Resuelto por sentencias ejecutoriadas que el inferior debe fijar el monto de la indemnización por daños y perjuicios, no procede la recepción de pruebas para fijarlos.— Jur. Civ., tom. 2, página 314, Ser. 4^a.

1^a.— Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 14.

1^b.— Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 73.



2. **Sentencias ejecutoriadas**—Las que declaran la existencia del mandato, bastan para llenar la exigencia del tercero que contrató con el mandatario.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 80, Ser. 4^a.

3^a. **Sentencias ejecutoriadas**—El juez que ha conocido del litigio, no puede ser recusado sin causa al pedirse la ejecución de la sentencia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 422, Ser. 4^a.

Sentencias ejecutoriadas—Véase: *Daños y perjuicios*, número 8—*Boleto de compraventa*, núm. 12—*Escepción de incompetencia*, núm. 1—*Escepción de falta de personería*, núm. 7—*Escepción de nulidad*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 5—*Obras*, núm. 2—*Indivisión*, núm. 2.

1^a. **Sentencia inapelable**—La condenación en costas y la regulación de honorarios contenidos en una sentencia inapelable, son inapelables también.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 419, Ser. 4^a.

2^a. **Sentencia inapelable**—La condenación en costas contenida en una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 124, Ser. 4^a.

Sentencia inapelable—Véase: *Abogado*, núm. 3—*Costas*, núm. 60.

1^b. **Sentencia nula**—Es nula la sentencia en cuanto resuelve sobre puntos no deducidos en la demanda.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 3^a.

2^b. **Sentencia nula**—Es nula la sentencia que resuelve

2—Véase: verb. *Mandato*, núm. 11.

3^a—Véase: verb. *Recusación*, núm. 9.

1^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 50.

2^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 60.

1^b—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 4.

2^b—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 5.



sobre el fondo de la demanda sin audiencia del demandado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 416, Ser. 3ª.

3. **Sentencia nula**—Adolece de nulidad la sentencia que no resuelve todos los puntos sometidos á la decisión del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 233, Ser. 4ª.

4. **Sentencia nula**—La sentencia dictada sin recibirse la causa á prueba, es nula siempre que se afirmen hechos contradictorios.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 279, Serie 4ª.

5. **Sentencia nula**—Adolece de nulidad la sentencia dictada sin las formalidades que la ley prescribe para la secuela del juicio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Ser. 4ª.

6. **Sentencia nula**—Es nula la dictada, y debe reponerse la causa al estado de demanda, si ésta no ha sido notificada á persona determinada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 359, Ser. 4ª.

7. **Sentencia nula**—Es nula la dictada sin la debida sustanciación, y el Superior debe declarar la nulidad aun cuando la parte haya omitido el recurso. - Jur. Civ., tomo 9, pág. 409, Ser. 4ª.

8. **Sentencia nula**—Debe declararse la nulidad de la sentencia definitiva para cuyo pronunciamiento no se hayan llenado las formalidades que la ley determina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 47, Ser. 4ª.

9. **Sentencia nula**—La amistad con el abogado no es causa de recusación, ni en consecuencia, de nulidad de la

3—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 6.

4—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 7.

5—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 14.

6—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 17.

7—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 18.

8—Véase: *Nulidad de una sentencia*, núm. 19.

9—Véase: verb. *Abogado*, núm. 13.



sentencia dictada á favor de la parte por él patrocinada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 313, Ser. 4ª.

10. **Sentencia nula**—La falta de pronunciamiento del Juzgado sobre la escepción de prescripción opuesta en el alegato, no puede fundar la nulidad de la sentencia alegada por la parte á quien fué opuesta.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 370, Ser. 4ª.

11. **Sentencia nula**—Debe declararse nula la sentencia recaída, si el demandado fué notificado del traslado de la demanda en domicilio que con posterioridad se ha reconocido por el demandante que no era verdadero, aun cuando ese pronunciamiento le sea favorable.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 383, Ser. 4ª.

1. **Sentencia de remate**—Consentida la sentencia de trance y remate, solo procede contra ella las escepciones que la ley determina, las que se refieren al derecho que ella resuelve son improcedentes.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 194, Ser. 4ª.

2. **Sentencia de remate**—Las regulaciones contenidas en la sentencia de remate, son inapelables si no se hubiese opuesto escepciones.—Jur. Civ., tom. 9, página 124, Ser. 4ª.

3. **Sentencia de remate**—La sentencia que no hace lugar á las escepciones opuestas á la ejecución de la sentencia es apelable, aun cuando no se haya producido prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 105, Ser. 4ª.

Sentencia de remate—Véase: *Inhabilidad de título*, números 2 y 4.

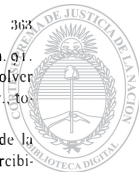
10.—Véase: *Escepción de prescripción*, núm. 4.

11.—Véase: verb. *Notificación*, núm. 14.

1.—Véase: *Escepciones*, núm. 11.

2.—Véase: verb. *Escepciones*, núm. 10.

3.—Véase: verb. *Escepciones*, núm. 12.



Sentencia revocada—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 91.

1. **Seña**—El vendedor puede arrepentirse y resolver el contrato, devolviendo doblada la seña.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 103, Ser. 3ª.

2. **Seña**—En las ventas en remate judicial procede la pérdida de la seña si el comprador consiente el apercibimiento de dársele por desistido de la compra y por perdida la suma entregada.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 40, Serie 3ª.

3. **Seña**—El vendedor que no cumple el contrato, solo está obligado á devolver la seña recibida, en tanto no se haya estipulado otra pena.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 103, Ser. 3ª.

4. **Seña**—La suma entregada en el acto del remate judicial no puede conceptuarse como seña, sino como parte del precio entregado en garantía del cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 108, Ser. 3ª.

5. **Seña**—La inejecución del contrato por culpa del comprador trae aparejada *ipso facto* la pérdida de la seña si se hubiere estipulado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 403, Ser. 4ª.

6. **Seña**—El Juzgado no puede resolver la pérdida de

1—Art. 1202 del Cód. Civ.

2—Véase: verb. *Remate judicial*, núm. 1.

3—Véase *Contrato de compraventa*, núm. 6.

4—Véase: verb. *Remate judicial*, núm. 3.

5—Art. 1202 del Cód. Civ.

6—La escrituración de unos terrenos comprados, según lo espresaba el boleto de compraventa, debió llevarse á cabo dentro de los treinta días siguientes á la fecha del mismo, bajo la condición de que el convenio quedaría nulo y sin ningún valor legal si dentro de ese término el comprador no aceptaba la escritura de transferencia. Siendo este convenio ley para las partes contratantes, por él están regidos sus derechos y obligaciones respectivas por lo que aquella convención im-



la seña, si al contestar la demanda no se ha deducido acción en forma.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 150, Ser. 4^a.

7. **Seña**—La pérdida de la seña ó su devolución doblada, solo procede en virtud del arrepentimiento que permite resolver el contrato con esta condición, pero no como acción por la falta de cumplimiento en la forma pactada.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 231, Ser. 4^a.

8. **Seña**—No procede la pérdida de la seña si el término fijado para el cumplimiento del contrato no se encuentra vencido por interrupción imputable al vendedor ó su representante legal.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 29, Ser. 4^a.

9. **Seña**—El pacto comisorio, estatuido solo en favor del vendedor, le permite exigir del comprador el cumplimiento del contrato, no obstante la pérdida de la cantidad

porta—art. 1197 del Cód. Civ.—El comprador sosteniendo que el título referente á uno de los lotes del terreno de que se trataba era deficiente, se presentó el último día del plazo fijado para la escrituración, entablado demanda para que se obligase á los vendedores á presentar títulos en forma á fin de que pudiese otorgarse la correspondiente escritura de traspaso, sin que entretanto le corriese término ni causase perjuicio la no escrituración ya que ella no había podido llevarse á cabo conforme á lo convenido, por causas que no le eran imputables. El hecho entonces que sirve de fundamento á la demanda y que el actor invoca para justificar su falta de cumplimiento al compromiso de escriturar dentro del plazo estipulado y librarse de las consecuencias que tal falta pudiera traer aparejadas, es la diferencia que se atribuye al título de propiedad de uno de los lotes, materia del contrato. Negado ese hecho expresa y categóricamente por los demandados, quienes sostuvieron que el título era perfecto, de primer orden, el actor ha debido suministrar la prueba de su afirmación, base única de su demanda. La prueba rendida por el actor no dió resultado alguno. El pedido hecho por el demandado para que se declarase perdida la seña dada por el comprador no fué formulada como contrademanda, ni se sustentó en la forma que la ley prescribe, no estando entonces el Juzgado habilitado para pronunciarse sobre ese punto.

9—Véase: verb. *Pacto comisorio*, núm. 8.



entregada como seña.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 91, Serie 4ª.

10. Seña—En las ventas en remate judicial, no procede la rescisión del contrato con la pérdida de la seña entregada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 68, Ser. 4ª.

Seña—Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 6 y 15.—*Daños y perjuicios*, núm. 56—*Remate judicial*, núms. 11 y 17.

Señalamiento—Véase: *Posiciones*, núm. 35.

1ª. Separación de bienes—Después de la declaración de quiebra corresponde á la jurisdicción comercial conocer en el juicio que sobre separación de bienes pretenda iniciar la esposa.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 54, Serie 4ª.

2. Separación de bienes—A los efectos de la separación de bienes soio debe establecerse claramente cuáles son los existentes en la época de la disolución de la sociedad conyugal separando los que se justifique existían con anterioridad al matrimonio ó el precio en que hubiesen sido enajenados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 104, Ser. 4ª.

3. Separación de bienes—La segunda esposa del bigamo tiene derecho á la separación de bienes, sea según las reglas que fija el contrato de matrimonio, ó según las de la comunidad legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 385, Serie 4ª.

Separación de bienes—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 3—*Esposa*, núm. 3—*Embargo preventivo*, número 38.

1ª. Separación de hecho—Entre los esposos, no importa

10—Véase: verb. *Remate judicial*, núm. 21.

1ª—Véase: verb. *Quiebra*, núm. 1.

1b.—La esposa se presentó deduciendo demanda contra el padre de



abandono de los hijos por parte del padre, si la madre los tenía á su cargo. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 407. Ser. 3^a.

sus hijos solicitando la declaración de que éste había perdido la patria potestad á consecuencia de haber abandonado á sus hijos. El demandado no evacuó el traslado, que le confirió de la acción instaurada. La causa real de la demanda fué que el padre negó la venia para casarse á una de sus hijas: se quería privar al padre de la patria potestad para que el matrimonio pudiese celebrarse. De la prueba resultó que el esposo mantenía relaciones ilícitas con otra mujer; pero esta causal no se consideró suficiente para implicar la pérdida de la patria potestad; habría sido necesario que el ejemplo inmoral que importaba el hecho de tener el padre una concubina se ejecutase en el hogar marital ó en una forma pública. Véase: verb. *Patria potestad*. Se comprobó también que la Curia Eclesiástica había separado temporalmente á los esposos á causa de la imposibilidad de llevarse la vida en común. Terminado el plazo de la separación ésta continuó de hecho indefinidamente bajo la acción de las mismas causas. Esta separación, se dijo, que no podía constituir el abandono que la ley exige en el art. 307 del Código Civil. La falta de alimentos por parte del padre, si bien podría considerarse comprendida en el abandono, en el presente caso no podía ser tomada en consideración en tal carácter, teniendo presente que la demandante no probó, que su esposo tuviese los medios necesarios, ni su negligencia para obtenerlos. Y por el contrario, resultaba de las declaraciones de los testigos, que ganaba un escaso jornal con el cual no podría atender á las necesidades de su familia. Independientemente de estas consideraciones, debe tenerse presente, como principio fundamental, el objeto determinante de la demanda; la negativa del esposo á dar su venia para el matrimonio de una hija, venia á ser la causa principal, que la madre empeñada en el enlace de su hija, tuvo en vista para pedir la privación de la patria potestad de aquél, haciendo concurrir al logro de su objeto las otras causales que invocó. Aun en el caso de que estas causales pudieran considerarse probadas, aquella circunstancia es de tal naturaleza, que por sí sola bastaría para determinar el rechazo de la demanda. No es ese por cierto el abandono á que se refiere nuestro Código, puesto que no queda en realidad abandonado un menor cuando el padre lo deja en poder de alguna persona que cuida de él, y cuando esa persona es nada menos que la madre. ¿Qué abandono era ese en que la madre no tuvo de que quejarse hasta que se negó venia á su hija? ¿Existió abandono porque ella sola los alimentara? ¿Pero no se presencia dia-



2. Separación de hecho —Justificada la del cónyuge sin voluntad de unirse, la esposa carece de derecho á los bienes quedados por fallecimiento del marido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 366, Ser. 3^a.

Separación de hecho—Véase: *Administrador*, núm. 4.

Separación provisoria—Véase: *Pensión alimenticia*, número 5.

1^a. Sepulcro—Existe condominio sobre un sepulcro, siempre que se permite la inscripción á nombre de los condóminos y se reconoce el derecho de disponer de él para su familia y allegados, aun cuando el título de propiedad del terreno se encuentre otorgado á nombre de uno solo de sus condóminos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Serie 3^a.

1^b. Servicios—Para el pago de servicios, es condición indispensable, se justifique que ellos fueron requeridos,

riamente que el anhelo de las madres ó de los padres, apenas producida una escisión en su hogar, es guardar consigo á los hijos sin preocuparse de la carga de los alimentos, á condición de poderlos retener? El precio de la tranquilidad del hogar del padre no habrá sido la entrega de sus hijos á las madres? ¿No se habrá conformado él con esa situación, convencido que la no carencia de recursos hiciera mejor la vida para sus hijos al lado de la madre?

2—Véase: *Bienes del esposo*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Condominio*, núm. 4.

1^b—Del estudio de la causa, no resulta que la Cámara hubiera establecido en su fallo la necesidad de comprobar que los servicios fueron prestados con el consentimiento de la parte, pues todo lo contrario se dijo por el Camarista en cuyo voto se fundó la sentencia, que dice así: «Negados los hechos fundamentales, es decir los servicios profesionales que se dicen prestados, al actor encumbra la prueba.» Por consiguiente no es el caso de aplicación de lo dispuesto en el artículo 1627 del Cód. Civ. El que hiciera algún trabajo ó prestare algún servicio á otro, dice este artículo, puede demandar el precio, aunque ningún precio se hubiese ajustado, siempre que tal servicio sea de su profesión ó modo de vivir; pero como es fácil comprenderlo, la ley di



ó por lo menos que fueron prestados con consentimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 299, Ser. 3^a.

como existente el trabajo ó servicio prestado, que en el presente caso ha sido negado y no consta de autos, como lo observa muy bien el Ministerio de Menores en su escrito de f. 108. Es indudable que el servicio prestado en el ejercicio de una profesión, arte ú oficio, no se supone gratuito, y que impone la obligación de remunerarlo por parte del que lo recibe, á menos que aparezca la intención de beneficiar con él ó prestarlo gratuitamente; pero no es menos cierto que no podría reclamarse el pago y mucho menos una condenación judicial, cuando fueran negados y no se ofreciese al juez la prueba sobre la cual tiene forzosamente que basarse. Pero todos estos argumentos caen de su propio peso cuando se lee que al contestar la acción el demandado, dice: «Niego los hechos en que se funda el actor, declarando, que ni mi esposo ni sus herederos solicitaron los servicios profesionales ni lo eligieron médico de cabecera; que si alguna vez recetó y asistió en alguna consulta no fué por habérsele requerido, sino como actos espontáneos de su parte; naturales, dada su amistad con el causante al que visitaba muchas veces á la par que otras personas de su relación, y aunque si bien estas visitas molestaban alguna vez á la familia, no era decoroso impedir lo que decía ser y se consideraba como demostración de aprecio al enfermo: que otros médicos llamados para asistir al enfermo nunca cobraron sus servicios por tratarse de un colega, pero que no obstante ser ésta la práctica no habría tenido inconveniente en abonar los servicios que se reclaman si ellos hubieran sido solicitados». Aquí existe la confesión clara y terminante de la parte que reconoce que los servicios médicos fueron practicados. Es cierto que esa confesión no es lisa y llana sino calificada: á saber que los servicios fueron gratuitos. Esta calificación está á cargo de quien la formula, teniendo presente que la gratuidad de los servicios profesionales no se presume, y por el contrario la ley presume que son onerosos,—art. 1628 del Código Civil.— Si los médicos tuviesen que comprobar que sus servicios fueron solicitados, quizá nunca cobrarían un centavo y se morirían de hambre. Cuando un médico hace visitas á un paciente, es de presumirse que sus servicios fueron solicitados y la parte que alega que no lo fueron debe comprobar este extremo. Los hombres profesionales se verían constantemente burlados por sus clientes si tuviesen que comprobar que sus servicios fueron solicitados, para poder cobrar sus honorarios. ¿Qué se diría, si á un abogado que se presenta cobrando sus honorarios constantes en los expedientes, se le dijese pruebe que sus servicios le fueron



2. Servicios—El pago de los servicios es ineludible

solicitados? ¿Tendría él que probar que no los prestó gratuitamente? Esto sería un absurdo como lo es el fallo de la Cámara. Así lo tiene resuelto en otros casos este mismo Tribunal. Véase: verb. *Servicios*, núms. 2 y 3.

2.—Un enfermero demandó a la sucesión del causante diciendo que lo había atendido en tal carácter. Los servicios no fueron negados categóricamente por los herederos de aquélla. Los facultativos que asistieron al causante declararon que el actor asistió efectivamente en calidad de enfermero, y que en efecto, ésto lo vieron ellos durante la asistencia que hicieron en su calidad de médicos. La sucesión se exceptuó, no obstante contra las gestiones del actor, alegando que nunca se le ofreció remuneración por sus servicios, los que fueron prestados espontáneamente y por impulso de gratitud, pues siendo pensionista del causante no pagaba por falta de recursos el importe de la pensión agregando además, en alcance de su defensa, que aquellos servicios no constituían la ocupación ó modo de vivir del actor. No es desde luego dudoso, que la comprobación de estos extremos pesaba sobre los herederos, ya porque reconocieron la efectividad del servicio, amparándose de las excepciones escritas en la ley—art. 1628—con el propósito manifiesto de evitar la sanción que surge de aquel reconocimiento, ya porque es de doctrina que la prueba incumbe al que trae un hecho nuevo al debate, como lo dice apropiadamente Bonnier, al que pretende invocar ó alega un hecho nuevo contrario a la posición que adquirió su adversario. No sería de presumirse dentro del orden natural de las cosas que aquellas prestaciones revistieran el carácter que se les atribuye si se considera que el demandante era una persona falta de recursos y sin hábitos de trabajo, según así lo dijo su misma contraparte, y por el contrario el causante una persona de holgada posición según resultaba de su propio testamento. Otro elemento presuntivo de intención benéfica es que el que prestó el servicio habitaba en casa de la otra parte—art. 1628 citado.—Fácilmente se descubre que la presunción legal puede solo referirse, y de consiguiente solo perjudicar, cuando hubiese contradicción, a aquellas personas que viven bajo un mismo techo por un acto de complacencia del dueño ó jefe de la casa ó por motivo de amistad ó por cualquier otro móvil ó impulso afectivo. No habiéndose demostrado la intención atribuida al demandante ni fluyendo ésta de los recaudos del proceso, el hecho de que el servicio reclamado no fuese de su profesión ó modo de vivir no es por sí solo causal bastante para impedir el progreso de la acción, siendo como es aquél exigible,



aunque no sean de la profesión ó modo de vivir del que los prestó, siempre que no se justifique que fueron gratuitos. —Jur. Civ., tom. 4º, pág. 79, Ser. 3ª.

3. Servicios —La gratuidad de los servicios como excepción corresponde al que pretenda ampararse de ella.

cuando por las circunstancias no se presumiese la voluntad ó el propósito de beneficiar á la persona para quien se hacía el trabajo ó á quien se prestaba el servicio. Esta cuestión fué resuelta en el sentido del sumario por mayoría de tres votos contra dos. La minoría dijo, que los servicios que motivaban la gestión del actor se encuentran debidamente justificados por medio de la prueba producida y conviene estudiarse la apreciación de un punto, que es de capital importancia, para decidir si ellas son ó no remunerables en los términos del art. 1627 del Cód. Civ. El *onus probandi*, para demostrar si efectivamente se solicitaron del actor aquellos servicios ¿á quién incumbe? Establecido, como incuestionablemente ha quedado, que tales servicios no eran relativos á la profesión ó modo de vivir del que los prestó, solo podría aplicarse el precepto del art. 1627 del Cód. Civ., si por las circunstancias no se presumiese la intención de beneficiar á aquél á quien el servicio se hacía, y según el art. 1628, esta intención se presume cuando el servicio no fué solicitado. Ahora bien: sosteniendo el actor en la demanda, que fué llamado por el causante para que lo atendiese en su larga enfermedad y negado este hecho por los herederos, al actor en su calidad de tal y con arreglo á la ley 7, tit. 14, part. 3ª, correspondía acreditar su afirmación, y no á los demandados la negativa, desde que ésta es meramente de hecho y no entraña una afirmación que haga procedente la *regla reus in excipiendo fit actor*. Tan cierto es esto, que el actor, comprendiendo que la presunción del art. 1628 favorece las pretensiones de los demandados ha tratado durante el término de la prueba de establecer que existe en el caso la excepción á la regla, de que en el sentido de la gratuidad de los servicios aquél consagra, procurando acreditar que éstos le fueron solicitados, lo que sin embargo no consiguió pues los testigos examinados con ese objeto, nada sabían al respecto. No habiendo, pues, demostrado el actor que sus servicios fueron solicitados, faltaba uno de los requisitos esenciales para la prosperidad de su acción. Teniendo en cuenta estos argumentos y las disposiciones concordantes del Cód. Civ., la cuestión debía resolverse en contra del sumario.

3—Véase el número precedente, y en contra el núm. 1.



reconociendo que fueron efectivamente prestados—Jur. Civ., tom. 4, pág. 79, Ser. 3^a.

4. **Servicios**—Para que pueda aplicarse la presunción de la ley sobre gratitud de los servicios debe concurrir necesariamente en su prestación, ó la falta de llamado, ó el hecho de vivir en la misma casa.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 79, Ser. 3^a.

5. **Servicios**—La habitación bajo el mismo techo, que la ley requiere para suponer gratuitos los servicios, debe ser como amigo ó allegado, si reviste otros caracteres no basta para presumirla.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 79, Ser. 3^a.

6. **Servicios**—El pago de los servicios es ineludible aunque no sean de la profesión ó modo de vivir del que los prestó siempre que no se justifique que fueron gratuitos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 271, Ser. 3^a.

7. **Servicios**—La gratitud de los servicios como excepción corresponde al que pretende ampararse de ella, reconociendo que fueron efectivamente prestados.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 271, Ser. 3^a.

8. **Servicios**—Para que pueda aplicarse la presunción de la ley, de que los servicios han sido gratuitos, debe concurrir necesariamente, la falta de llamado ó el hecho

4—Cuando la ley supone la gratitud de los servicios prestados, por cuanto el que los prestó vive en la misma casa—art. 1627 del Cód. Civil—entiende por tal, á aquellas personas que viven bajo un mismo techo por un acto de complacencia del dueño ó jefe de la casa ó por motivos de amistad ó cualquier otro móvil ó impulso efectivo.

5.—Véase el número precedente.

6—También este caso fué resuelto por mayoría de los votos de la Cámara, como en el núm. 2. Allí están ya consignados los fundamentos de este sumario.

7—De acuerdo con el núm. 3, y en contra del núm. 1.

8.—Véase el núm. 4.



de vivir en la misma casa.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 271. Ser. 3ª.

9. **Servicios**—Reconocida la prestación de servicios procede su pago con arreglo á lo que fijen los peritos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 408. Ser. 3ª.

10. **Servicios**—Prestados, no existiendo ley expresa que impida el ejercicio de una profesión sin título universitario, la carencia de este no enerva el derecho de exigir el pago del precio de los servicios prestados, siempre que sean de la profesión ó modo de vivir del que los prestó.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 158, Ser. 4ª.

11. **Servicios**—Justificada la prestación de servicios sin determinar previamente el monto de la remuneración, debe ésta ser fijada por peritos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 158, Ser. 4ª.

12. **Servicios**—La gratuidad de los servicios no se presume, la prueba corresponde al que la invoca.—Jur. Civil, tom. 9, pág. 169, Ser. 4ª.

9—Véase: verb. *Peritos*, núm. 2.

10—Se trataba de honorarios devengados en la confección de planos y presupuestos para la construcción de una obra. No hay ley alguna que prohíba prestar este género de servicios á los que carecen de título académico; y por el contrario, el 1627 del Cód. Civ., establece que el que presta servicios puede no tener título universitario y solo exige que el servicio ó trabajo cuya remuneración se demanda sea de la profesión ó modo de vivir del que los presta.

11—Última parte del art. 1627 del Cód. Civ.

12—De acuerdo con la jurisprudencia sentada en los núms. 2, 6 y 7. En contra el núm. 1. Este caso fué resuelto por unanimidad de votos pero se trataba de honorarios de abogados. El beneficiado con los ser; vicios que fué demandado dijo, que el actor no procedió como árbitro ni como letrado, siendo su misión puramente amistosa y motivada por el laudable desco de hacer desaparecer desavenencias entre dos personas que le merecían estima. Ha ejercitado de esta manera el abogado un mandato civil esencialmente gratuito, puesto que no se refiere la demanda á trabajos propios de la profesión lucrativa ó modo de vivir



Servicios—Véase: *Contrato de locación*, núm. 5.

Servicios estrajudiciales—Véase: *Abogado*, núms. 7 y 8.

1^a. **Servicios médicos**—El pago de los servicios médicos, solo procede justificada la existencia de la locación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 207, Ser. 3^a.

2. **Servicios médicos**—La falta de prueba sobre la importancia de los servicios médicos prestados, no permite su avalúo por el Consejo de Higiene, pero debe condeñarse al pago de lo que el obligado reconozca adeudar.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 207, Ser. 3^a.

Servicios médicos—Véase: *Asistencia médica*, núms. 1 y 2.

1^b. **Servicios profesionales**—La aceptación de servicios profesionales cuando su rechazo depende solo de la voluntad, importa una locación y el que los ha aceptado se encuentra obligado á remunerarlos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 365, Ser. 4^a.

del mandatario. La intención de gratuidad atribuida por el demandado no ha sido demostrada ni llegan hasta ella las presunciones de ley—artículo 1628, *in fine*—Esa demostración pesaba sobre el reo según el argumento de la ley 8^a, tit. 3^a, part. 3^a. Esta excepción, cuya prueba incumbe al que con ella se defiende, es á la que hacíamos referencia en el núm. 1; excepción que la minoría de la Cámara consideró á cargo del actor en los casos espuestos en los núms. 2, 6 y 7. Esta minoría estaba compuesta de los doctores Gimenez y Barra en el caso del núm. 2; el doctor Gimenez solo en el caso de los núms. 6 y 7, desapareció en el resolución del sumario y declaró que la escepción de gratuidad alegada por el que recibió los servicios debe ser probada por él. ¿Cuál fué el fundamento legal aducido por este camarista para volver sobre sus pasos sacrificando su opinión anterior? Ninguna: se adhirió simplemente al voto del camarista que emitió primero su opinión.

1^a—La prestación de los servicios es la base de la acción. Con arreglo á lo dispuesto en la Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a, la prueba incumbe al actor.

2—Véase: verb. *Consejo de Higiene*, núm. 1.

1^b—Es una reproducción del caso comprendido en el núm. 10 y resuelto en el mismo sentido, admitiéndose iguales fundamentos.



2^a. Servicios profesionales—Tratándose del cobro de servicios profesionales, la excepción de defecto legal es procedente si no han sido individualizados en el escrito de demanda.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 424, Ser. 4^a.

Simple tenencia—Véase: *Posesiones*, núm. 1.

1. Simulación—Se reputa simulado el contrato de arrendamiento de bienes de la esposa hecho por el esposo después de iniciada la separación de bienes, y debe declararse la nulidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 239, Ser. 3^a.

2^b. Simulación—Es improcedente la simulación de un acto jurídico siempre que se reconoce su verdad y su existencia.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 296, Ser. 3^a.

3. Simulación—Es improcedente la prueba testimonial para justificar la simulación deducida por uno de los otorgantes del contrato, en tanto no exista contradocumento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 299, Ser. 3^a.

4. Simulación—Al que alega la de la venta con pacto de retroventa, corresponde la prueba de que existía efectivamente un contrato de mutuo.—Jur. Civ., tom. 5, página 299, Ser. 3^a.

5. Simulación—Para que proceda la revocación de los actos á título oneroso, llevados á efecto por el marido con perjuicio de los intereses de la esposa, es requisito indispensable justificar la complicidad del tercer poseedor; no

2^a—Se demandaban servicios de naturaleza distinta que dieron margen á la acción, en cuyo caso debieron individualizarse haciéndose la apreciación de cada uno de ellos para que el demandado pudiese ejercer su defensa en la forma que viere convenirle.

1—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 3.

2^b—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: *Inst.*, tom. 4^o, verbo *Escritura pública*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Contradocumento*, núm. 1.

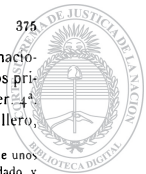
4—Véase: *Contrato de mutuo*, núm. 1.

5—Véase verb. *Revocación*, núm. 1.

basta probar la simulación de las primeras enajenaciones ni aun el conocimiento que del fraude tenían los primeros adquirentes.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 5, Ser. 4^a.

6. Simulación—La llevada á cabo por el martillero,

6—El actor se presentó diciendo, que había vendido en remate unos terrenos, por intermedio de unos martilleros públicos, al demandado, y que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1183 y 1186 pedía la correspondiente escrituración. El demandado dijo, que era falso que hubiese contraído el compromiso cuyo cumplimiento se exigía. Y que si es cierto que puso su nombre al pie de los boletos que sirven de recaudo á la acción, es cierto también que ese nombre puesto con lápiz y sin rúbrica no constituía su firma, siendo igualmente exacto que al escribirlo no ha tenido la intención de asumir una obligación seria, sino la de mostrar, como otras veces, su amistad y condescendencia hacia el martillero, quien le había pedido que hiciera para ayudarlo, el papel de comprador sin serlo en realidad, en prueba de lo cual acompañaba un memorandum que demuestra la simulación del acto. Además, el art. 1021 del Cód. Civ. establece como indispensable para la validez de los actos que se formalicen en instrumento privado y que contengan convenciones bilaterales, que ellos se redacten en tantos originales como partes concurren al acto, lo que no se ha verificado en el presente caso. Como se ve en el cuasi-contrato de litiscontestación quedó fijado en términos claros y concretos, habilitando la solución del pleito. En autos existían elementos suficientes para concluir que el contrato de que instruyen los boletos fué simulado, demostrándose que las partes no tuvieron la intención de realizar un acto serio. La prueba producida al respecto por el demandado es concluyente, y los testigos presentados, declaran contestes que saben, por haberlo presenciado, que el actor dijo al demandado que no estrañara si se le adjudicaban algunos de los lotes que se remataban, aunque no hiciera postura alguna, y dicen también los mismos testigos que saben por haber estado presentes, que el demandado no hizo posturas, ni ofertas en este remate; estas declaraciones están corroboradas por el memorandum fijado, reconocido por el actor, lo que demuestra que ya era costumbre entre estos señores valerse de tales manejos, para obtener precios más ventajosos en las ventas por la parte. Otra prueba de la simulación la tenemos en el tiempo que dejaron trascurrir los remata-dores sin pasar la nota respectiva á los demandantes, declaraciones constantes en autos y muy principalmente de que en el libro de ventas no apa-



equiparado al mandatario, no puede ser desconocida por el propietario que ordenó la venta del inmueble, base del acto simulado.— Jur. Civ., tom. 2, pág. 185. Serie 4ª.

rezca como comprador el demandado, como lo acredita un certificado espedido. Para destruir lo que alegaba el actor pretendiendo que nada tenía que ver, ni en nada afecta sus derechos la simulación, basta solo tener en cuenta, que sus mandatarios, los martilleros, no entendieron ni tuvieron la intención de celebrar un verdadero contrato al adjudicar al comprador los terrenos que se espresan en los boletos, y que el acto simulado no se hacía en fraude de ellos, sino por el contrario, tratando de favorecer sus intereses. Por otra parte, tratándose de un contrato de compraventa, que contiene convenciones perfectamente bilaterales, el acto debió redactarse en tantos originales como partes concurrieron al mismo—art. 1021 del Cód. Civ.—La infracción á esta ley invalida la convención y la hace ineficaz para producir efectos legales — artículo 18 del mismo Código.—La prueba de la redacción del acta en los ejemplares necesarios debe constar de cada original; tal es la práctica constante y así lo enseña Goyena—art. 1207.— La razón es clara, la prueba sería casi imposible para el que pretendiese demostrar que la convención no se redactó en los ejemplares necesarios, mientras que la prueba opuesta se hace por demás fácil con solo espresar en cada original el número de los ejemplares espeditos. A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que siendo el martillero quien efectuó el remate de los terrenos objeto del pleito, el mismo declara espresamente, contestando á la décima pregunta del interrogatorio presentado que ignora si se entregó al comprador el doble ejemplar del convenio. Justificada esa simulación en términos de no dar lugar á dudas y resultando además que ella ha sido absoluta, es decir, que se trata de actos que nada tienen de real y verdadero, falta la base exigida por la ley para que pudiera compelerse al demandado á la escrituración, conforme á lo dispuesto en las prescripciones de los arts. 1185 y 1187. No es del caso averiguar la responsabilidad que pudiera corresponder al martillero ni el grado de moralidad de los actos que llevó á cabo. Baste saber que se trata de una simulación concertada directamente entre el vendedor y comprador; que el primero, si bien al anunciar en venta los terrenos de que se trata, procedía por cuenta de los demandantes y como su mandatario en esa negociación, es reputado por la ley verdadero consignatario en el caso de ejercer su oficio no estando aquellos presentes, según lo dis-





7. **Simulación**—Reconocida la simulación de la convención que consta del boleto de compraventa, no puede obligarse al supuesto comprador al cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 185, Ser. 4ª.

8. **Simulación**—La acción de simulación de un acto público entre las partes que la llevaron á cabo, es improcedente siempre que se justifique la existencia de un acto ilícito, en perjuicio de terceros.—Jur. Civ., tom. 3, página 220, Ser. 4ª.

9. **Simulación**—La de un instrumento público, si el que deduce la acción intervino en su formación ó tuvo conocimiento, solo puede probarse por contradocumento.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 268, Ser. 4ª.

10. **Simulación**—Para que el acreedor tenga personería para deducir acción pauliana ó de simulación de los actos del deudor, es requisito indispensable que su crédito sea de fecha anterior al acto que se pretende anular.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 285, Ser. 4ª.

11. **Simulación**—Las atestaciones de una escritura pública forman prueba plena de los actos que se dicen pasados ante el oficial público, y no procede la prueba de las partes que en ella intervinieron sobre simulación pone el art. 122 del Cód. de Com.; y por consiguiente que así como procedería contra él la excepción, que el supuesto comprador tendría derecho á oponer en el caso de demandarle el cumplimiento del contrato, en el mismo caso sus comitentes no pueden tampoco ejercitar las acciones que nacen de ese contrato, con prescindencia de la simulación para obligar al demandado como si se tratara de un acto verdadero.

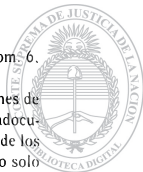
7—Véase la nota precedente.

8—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 7.

9—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: verb. *Contradocumento*, núm. 1.

10—Véase: verb. *Acción pauliana*, núm. 1.

11—Véase: verb. *Contradocumento*, núm. 2; é Inst., tom. 4º, verb. *Escritura pública*, núm. 3.



del pago que se haya hecho constar.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 15, Ser. 4^a.

12. **Simulación**—La simulación de las atestaciones de una escritura pública puede justificarse por contradocumento, en tanto se relacione con actos personales de los que han intervenido, de los cuales el oficial público solo afirma que se hizo manifestación, pero que no da fe de su existencia por ciencia propia.—Jur. Civ., tom. 6, página 179, Ser. 4^a.

13. **Simulación**—La simulación de los actos jurídicos puede probarse por los tesceros á quienes perjudique, por todos los medios legales de prueba, y los jueces deben declararla siempre que resulte justificada por un conjunto de presunciones y circunstancias que lleven al ánimo la convicción de su existencia.—Jur. Civ., tom. 5, página 5, Ser. 4^a.

14. **Simulación**—Opuesta y juzgada por el Inferior la simulación de la escritura pública presentada para justificar la tercería de dominio, no puede solicitarse ante el Superior la revocación de la sentencia por ser contraria á los derechos de los acreedores.— Jur. Civ., tom. 8, página 121, Ser. 4^a.

15. **Simulación**—El reconocimiento judicial de que la escritura de propiedad de una finca era simulada, solo puede ser revocada por la existencia de los vicios que la ley estatuye para la revocación de los actos jurídicos. — Jur. Civ., tom. 9, pág. 370, Ser. 4^a.

12—De acuerdo con la jurisprudencia uniformemente establecida Véase: el número precedente.

13.—Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Escritura pública*, núm. 3, y *Prueba testimonial*, núm. 1; tom. 3^o, ver. *Simulación*, núm. 2, y tom. 2, mismo verbo, núms. 1, 7 y 11.

15 Véase: verb. *Escritura*, núm. 4.

Simulación—Véase: *Prueba de presunciones*, núm. 1.—*Acto simulado*, núm. 1.—*Escritura pública*, núm. 32.

1. Sindicato—Los miembros de un sindicato no cons-

1.—Según los boletos con que se instruyó la demanda y la contestación, el actor vendió á dos compradores conjuntos varios terrenos de su propiedad. Esta negociación, ó mejor dicho esta promesa de compra venta, suscitó dificultades entre sus otorgantes, que no salvadas amistosamente dieron motivo á la demanda interpuesta por el vendedor en la cual reclama el cumplimiento de la obligación ó en su defecto daños y perjuicios. La dificultad mayor y en la que en realidad está la solución jurídica del pleito, fluye de que los compradores, sostienen no haber celebrado el acto personal ó individualmente, sino como meros representantes de un sindicato, según así reza, y resulta de los términos inequívocos de la convención. La frase en «representación de un sindicato» no fué agregada incidentalmente, según la defensa, ni como una simple deferencia, sino que respondía á los verdaderos antecedentes del caso, viniendo consignada de puño y letra del mismo representante del vendedor y así, al reconocerse la existencia de ese sindicato, como único interesado en el negocio, quedaban *ipso facto et ipso jure* deslinadas las situaciones respectivas y las responsabilidades jurídicas. Se desestimó esta observación y las demás concordantes de que hizo mérito la contestación por cuanto á estar á los términos propios del boleto fueron los demandados quienes personalmente compraron al actor el terreno en cuestión, siendo consiguientemente los únicos obligados, espresando que las palabras agregadas en el documento, carecen de la importancia que le dan los compradores, pues de lo contrario resultaría que el actor se obligaba hacia personas ó entidades desconocidas, que podrían, según las circunstancias, compelerlo al cumplimiento de la convención, sin que á su vez le fuese dado ejercitar igual derecho ó hacerse éste completamente ilusorio por las personas que los firmantes del boleto podían presentar como obligadas. Estas conclusiones son exactas. El sindicato en cuya representación procedieron los compradores, como así lo afirman, dadas las condiciones de existencia en que lo presentan las constancias de autos, esto es, sin especificación de personas, sin determinación alguna referente á su objeto, á su constitución, á sus fines, no es una entidad jurídica, una sociedad civil, un sujeto del derecho sobre el cual legisle directa ni implícitamente nuestro Código ni ninguna otra disposición anterior ó posterior á él. Denominación usada impropiaamente para significar el allegamiento de capitales ó de personas, con aportes reales ó ficticios, en miras de determinadas





tituido ni inscripto como sociedad anónima son personal y solidariamente responsables para con los terceros,

especulaciones, los enunciados sindicatos no se gobiernan por la ley de su instituto porque carecen de él ni por la ley del contrato, porque no existe ó no se hace manifiesto, ni finalmente por los preceptos que reglan á las corporaciones creadas con un interés público, porque no reviste este carácter; resultando forzosamente de aquí, que los actos y procedimientos de quienes se presentan como sus representantes ó mandatarios quedan de hecho y de derecho subordinados á los principios de la ley común. Estos prinripios son claros y no son difíciles de conseguir fijar con su espíritu y su letra el alcance de las obligaciones contraídas por los demandados. Tenemos desde luego que el acto jurídico ha sido celebrado por los demandados, sin que haya constancia de que hubieran exhibido el instrumento respectivo de poder, ni mencionado siquiera su existencia ni dado á conocer los nombres de las personas que formaban el sindicato cuya representación se atribuyen. Sus responsabilidades son entonces insalvables, ya por razón de la forma en que han ejercitado su intervención en el acto, ya por razón de los principios generales que dominan la materia. Para lo primero basta referirse al testo de los boletos de compraventa; para lo segundo recordar con el argumento de los arts. 1929 y 1930 del Cód. Civ., que cuando el mandatario en desempeño de su cargo contrata, no á nombre de su mandante sino en su propio nombre, queda él y no su instituyente obligado respecto de terceros; doctrina que ha sido incorporada á la jurisprudencia de la Cámara, entre otras causas, en la de Constela con la sucesión Fonseca, análoga en sus caracteres jurídicos á la presente. No podía hacerse valer una carta que se exhibió por cuanto de sus términos no se desprendía la voluntad por parte del vendedor de aceptar ó reconocer la sustitución de las personas obligadas, ni menos de renunciar á su derecho con respecto á los adquirentes directos de la cosa, resultado á que sería necesario llegar para que prosperase llevado hasta el superior. Nuestras leyes solo autorizan la sustitución de acreedores de la obligación, cuando hubiere consentimiento expreso de uno y otro para desligarse del vínculo jurídico. Es incuestionablemente el sistema que mejor consulta la libertad de contratar y el respeto á las transacciones humanas. De esta manera para que el sindicato se hubiese sustituido en los derechos y obligaciones de los firmantes del documento, habría sido indispensable el consentimiento del demandante, producido por actos inequívocos, que seguramente no resultan del proceso. Y es de notarse, que la carta presen-



de los contratos ú obligaciones que á nombre del sindicato lleven á efecto mandatarios debidamente autori-

tada estaba suscrita por el apoderado del actor no habiéndose insinuado siquiera en el curso del debate que tuviera poderes especiales para hacer novación, requisito espresamente exigido por la ley,—art 806, Cód. citado.—Razonando sobre esta materia, observa Mercadé, tomo 4, pág 622, que para que haya novación por delegación, no basta como en los otros casos, que la voluntad evidente de las partes se manifieste por una causa cualquiera, es necesario que el acreedor espresé su consentimiento de aceptar el nuevo deudor. Por lo demás, ni la novación ni lo renuncia de un derecho se presume: en uno y otro caso la voluntad de las partes debe manifestarse claramente siendo de interpretación restrictiva los actos que induzcan á probarlas—arts. 815 y 874, Cód. Civ.—Se ha atacado también la validez de la promesa, por ser discordes los ejemplares respectivos, alegándose que á juzgarlas como válidas lo será exclusivamente el de los demandados. Esa discordancia no existe ni con referencia al objeto del acto jurídico ni á ninguna de sus cláusulas sustanciales. El agregado relativo al sindicato que se notaba en el boleto, y cuya inteligencia ha sido ya apreciada, no importa una implicancia, ni de ninguna manera aparejaría la nulidad del contrato, pues no constituye ninguno de los vicios ó defectos señalados por ley. Además, son de estricta aplicación los preceptos legales en que se consagra el principio de que la ratificación, á pesar de que la venta se formalizó con el sindicato, la demanda fué bien dirigida contra las señores compradores personalmente. Los términos en que están concebidos los artículos del antiguo como los del vigente Código, no dan lugar á la menor duda; responsabilizan personal y solidariamente para con los terceros, á los administradores y directores de una compañía anónima, por los contratos que celebran á nombre de la sociedad, hasta el momento en que se verifique la inscripción del instrumento ó título de su institución. Por responsabilidad solidaria se entiende la obligación impuesta á cada uno de los deudores de pagar uno solo por todos, la cosa que deben en común—art. 690 del Cód. Civ., y 262 del de Comercio antiguo.—Ahora bien: desconocido el cumplimiento, por parte del sindicato, de las formalidades prevenidas en el art. 408 del Cód. de Comercio antiguo, vigente cuando se concertó la compra-venta, para exonerar á los demandados, como miembros del directorio, de la obligación solidaria y personal, éstos debían acreditar que tales formalidades se habían llenado en oportunidad. No lo hicieron, empero y resultaba por el contrario de los documentos acompañados á la con-



zados, siempre que conste de un modo fehaciente la ratificación del mandato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Ser. 4^a.

Síndico—Véase; *Acreedores*, núm. 1.

1. Sistema métrico decimal—Las cartas misivas no están obligadas á espresar las medidas con arreglo al siste-

testación, que recién después de un mes de la fecha en que se firmaron los boletos, se acordó recabar del Gobierno Nacional la aprobación de los estatutos, sin que conste de autos que esa aprobación se haya prestado, ni tampoco que se haya verificado la inscripción exigida en el art. 408 citado. No pueden por consiguiente, escusarse los demandados, de la obligación solidaria que el mismo art. 408 les impone, y está igualmente consignada en otras legislaciones concordantes con la nuestra. Comentando el distinguido tratadista Sampaio, tomo 2, pág. 240 el artículo del Cód. de Portugal, análogo al nuestro, se espresa en los siguientes terminos: «Mientras no se encuentre organizada la compañía, aprobados los estatutos en los términos del artículo 546, elegidos los directores y publicada en el Registro de Comercio, en tanto esto no se haga, la compañía no tiene vida pública. Las condiciones de su institución, como en las sociedades no registradas, son letra muerta y las transacciones con los terceros tienen un carácter puramente particular.» Ellos, por tanto, y no la compañía, son responsables por estos actos, únicamente solo responden solidariamente del mismo modo que en las sociedades no registradas que representan para ante el público una sola persona moral.» En el mismo sentido se espresa Dalloz, verb. Sociedad, núm. 1464 y Ronsseau, tom. 1, pág. 632 de su obra comentando la ley francesa de 1867, sobre sociedades de responsabilidad limitada. Este autor en el lugar citado inserta una, sentencia de la Corte de París de 18 de Mayo de 1869, en la que se declara que la responsabilidad puede hacerse efectiva aun cuando los terceros hubieran tenido conocimiento que la sociedad en la época del contrato no se había constituido definitivamente; esto sin duda, porque según la opinión de la Delaison, tom. 1, pág. 129. «Sociedades Comerciales,» las reglas que la ley fija para la constitución de las sociedades anónimas deben considerarse de orden público, no pudiendo por ello sus fundadores eximirse de las penas y responsabilidades que por su inobservancia les están impuestas, aun cuando aleguen en su defensa el conocimiento de los terceros que con ello hubiesen contratado.

1—Véase: *Carta misiva*, núm. 1.



ma métrico decimal, y en consecuencia no puede aplicarse multa. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 253, Ser. 4^a.

Sobrante—Véase: *Municipalidad*, núm. 2.

1^a. *Sobreseimiento provisional*—No hace cosa juzgada, y en consecuencia no basta para fundar una acción de daños y perjuicios por haber sido calumniosa la querrela.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 294, Ser. 4^a.

1^b. *Sociedad*—La desaparición del objeto que se tuvo en vista para la formación de una sociedad, importa su disolución sin necesidad de convenio expreso.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 177, Ser. 3^a.

2. *Sociedad*—Los Tribunales son competentes para entender en un interdicto de recobrar deducido por el presidente de una sociedad ilegalmente despojada del local social.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 234, Ser. 3^a.

3^a. *Sociedad*—Aun cuando el contrato cree una comunidad de intereses, no basta para calificarlo como constitución de sociedad, y en consecuencia, es improcedente la acción de disolución.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 343, Ser. 3^a.

3^b. *Sociedad*—Tratándose de exigir el cumplimiento de obligaciones á favor de una sociedad cuyos socios no sean solidarios, pueden demandarse ante la jurisdicción que á cada uno de ellos corresponde. —Jur. Civ., tom. 1, pág. 379, Ser. 4^a.

4. *Sociedad*—El tutor de los menores que por representación forma parte de una sociedad, carece de personería para intervenir en el juicio contra terceros si la

1^a—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 9.

1^b—Arts. 1772, y 1774 del Cód. Civ.

2—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 4.

3^a—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 1.

4—Véase: verb. *Personería*, núm. 12.



sociedad tiene un representante legal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 395, Ser. 4^a.

5^a. *Sociedad*—Demandada la sociedad, no procede la intervención individual de los socios; la representación debe ser conjunta.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 37, Ser. 4^a.

5. *Sociedad*—La sucesión de uno de los socios, que se encarga de la liquidación de la sociedad es la responsable de las deudas.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 172, Serie 4^a.

6. *Sociedad*—Cualquiera que sea el principio de prueba por escrito, la testimonial es improcedente para justificar la existencia de una sociedad cuyo capital exceda del límite para el cual la ley exige ineludiblemente el contrato por escrito.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 172, Serie 4^a.

7. *Sociedad*—Debe rechazarse la acción de rendición de cuentas contra el mandatario, si el actor con anterioridad ha reconocido judicialmente que investía el carácter de socio en el negocio que motivó el mandato.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 125, Ser. 4^a.

Sociedad—Véase: *Estatos sociales*, núm. 1—*Personería*, núm. 9—*Daños y perjuicios*, núm. 77.

1. *Sociedad anónima*—Los miembros de un sindicato, no constituido ni inscripto como sociedad anónima son personal y solidariamente responsables para con los terceros, de los contratos ú obligaciones que á nombre del sindicato lleven á efecto mandatarios debidamente autorizados, siempre que conste de un modo fehaciente la ratificación del mandato.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 207, Serie 4^a.

5^a—Véase: verb. *Representación*, núm. 1.

6—Véase: verb. *Contrato escrito* núm. 1.

7—Véase: verb. *Mandatario* núm. 17.

1—Véase: verb. *Sindicato*, núm. 1.



2ª. Sociedad anónima—Los miembros de una sociedad se rigen única y exclusivamente por sus estatutos, en tanto éstos no se opongan á los principios generales ó de orden público.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 4ª.

Sociedad anónima—Véase: *Actos comerciales*, núm. 1.

1ª. Sociedad civil—Es improcedente la acción de daños y perjuicios fundada en la falta de cumplimiento de un contrato de sociedad civil si no existe escritura pública siendo por un capital mayor de mil pesos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 333, Ser. 3ª.

1ª. Sociedad colectiva —Demandada una sociedad, los socios extranjeros no pueden ampararse á la jurisdicción federal, si existe un socio argentino.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 226, Ser. 3ª.

1. Sociedad comercial—La duración de una sociedad comercial no puede ser alegada por los terceros para eludir obligaciones que con anterioridad á su formación habían reconocido á su favor.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 266, Ser. 4ª.

Sociedad comercial—Véase: *Interdicto*, núm. 10.

1ª. Sociedad conyugal—El importe de los bienes propios del viudo, solo debe ser incluido en el haber de la testamentaria de la esposa, en la parte que ellos hayan sido objeto de mejoras durante la sociedad conyugal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 417, Ser. 3ª.

2ª. Sociedad conyugal—El contrato de compraventa de bienes, celebrado entre la madre y el hijo, es válido en tanto no se justifique, que tuvo por objeto defraudar los

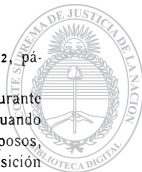
2ª—De acuerdo con la nota contenida en el verb. *Personería*, núm. 9

1ª—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 26.

1ª—Véase: verb. *Jurisdicción federal*, núm. 1.

1ª—Véase: *Bienes propios*, núm. 1.

2ª—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 5.



bienes de la sociedad conyugal.—Jur. Civ., tom. 2, página 417, Ser. 3ª.

3. **Sociedad conyugal**—Los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal se suponen gananciales, aun cuando hayan sido comprados á nombre de uno de los esposos, mientras no se justifique plenamente que la adquisición tuvo lugar con fondos particulares.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 378, Ser. 3ª.

Sociedad conyugal—Véase: *Separación de bienes*, números 1 y siguientes—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 16—*Embargo preventivo*, núm. 12—*Prescripción á nombre propio*, núm. 2.

1ª. **Sociedad sobre inmuebles**—La existencia de sociedad sobre inmuebles, cuyo valor sea de más de doscientos pesos moneda nacional, requiere prueba escrita.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 180, Ser. 3ª.

1b. **Sociedad verbal**—Reconocida la existencia de una sociedad verbal, procede el nombramiento de administrador judicial si no existe acuerdo entre los socios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 91, Ser. 4ª.

1. **Socios**—O cesionarios del comprador en remate judicial, no son parte en el juicio mientras no haya sido judicialmente aceptada la cesión.—Jur. Civ., tom. 3, página 68, Ser. 4ª.

Socios—Véase: *Cesión*, núm. 2—*Excepción de falta de personería*, núm. 7—*Bienes de la sociedad*, núm. 1—*Administrador judicial*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 17—*Sociedad*, núm. 5—*Representación*, núm. 1.

3ª—Véase: verb. *Bienes*, núm. 5.

1ª—Art. 1184, inc. 3º del Cód. Civ. Cuando no existe esta prueba pueden admitirse los principios de prueba escrita aceptados por la ley—art. 1192 del mismo Código.

1b—Véase: *Administrador judicial*, núm. 1.



Solemnidades—Véase: *Estatutos sociales*, núm. 1.

Solidaridad—Véase: *Fiador*, núm. 2.

Soltera—Véase: *Madre natural*, núm. 1.

Subalternos—Véase: *Comisario*, núm. 2.

Sublocación—Véase: *Locatario*, núm. 2.

1^a. Sublocador—Las prestaciones convenidas entre locatario y sublocatario, solo pueden ser reclamadas si se verifica el desalojo; el contrato directo entre el locador y sublocador no modifica el primitivo convenio.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3^a.

1^b. Sublocatario—El sublocatario no puede por su sola voluntad cambiar la forma del contrato convirtiéndose en locador directo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 165, Ser. 3^a.

Sublocatario—Véase: *Locatario*, núm. 7—*Desalojo*, número 3—*Interdicto de adquirir*, núm. 10.

1^c. Subrogación—El heredero que paga deudas de la sucesión, reconocidas como auténticas por los demás coherederos, se subroga á los acreedores y tiene derecho á exigir su reembolso de los fondos testamentarios.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 117, Ser. 4^a.

Subsanación—Véase: *Informaciones*, núm. 1—*Causante*, núm. 1—*Contador*, núm. 1—*Término para la subsanación*, núm. 2—*Boleto de compraventa*, núm. 3.

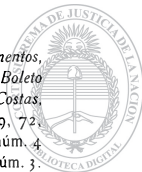
Sucesión—Véase: *Acreedores del viudo*, núms. 1 y 2—*Divorcio*, núm. 3—*Heredero*, núm. 4—*Hijo natural*, número 3—*Bienes de la sucesión*, núm. 3—*Legatario*, número 4—*Derechos hereditarios*, núm. 1—*Posiciones*, número 6—*Prescripción á nombre propio*, núm. 2.

Sucesores—Véase: *Cesión*, núm. 1—*Costas*, núm. 21—*Locatario*, núm. 2.

1^a—Véase: verb. *Desalojo*, núm. 3.

1^b—Véase: verb. *Contrato de arrendamiento*, núm. 9.

1^c—Véase: verb. *Heredero*, núm. 4.



Suma—Véase: *Agravio moral*, núms. 2 y 13—*Alimentos*, núm. 1—*Tutor*, núm. 12—*Indemnización*, núm. —*Boleto de compraventa*, núm. 1—*Litisespensas*, núm. 1—*Costas*, núm. 56—*Daños y perjuicios*, núms. 35, 64, 66, 69, 72, 73, 74, 103 y 112—*Jurisdicción por cantidad*, núm. 4—*Contrato rescindido*, núm. 2—*Remate judicial*, núm. 3.

1ª. Suma demandada—La competencia del tribunal se rige por la suma demandada, aun cuando por ser á oro, después de su conversión, correspondería á distinta jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 415, Ser. 4ª.

1ª. Suspensión—La suspensión en el ejercicio de la profesión durante un término dado, siendo la más grave de las correcciones que puede aplicarse al abogado, solo puede serlo por circunstancias muy graves.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 326, Ser. 4ª.

Suspensión — Véase: *Alegato*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 1—*Patria potestad*, núm. 2—*Término suspendido*, núm. 1.

Suspensión de un juicio—Véase: *Escepción*, núm. 1—*Término de prueba*, núm. 3—*Apoderado*, núm. 2—*Término suspendido*, núms. 1 y 2.

Sustanciación—Véase: *Nulidad de una sentencia*, número 2—*Recurso*, núm. 2—*Incidente*, núm. 1—*Término de prueba*, núm. 4—*Término suspendido*, núm. 2.

Sustitución—Véase: *Mandato*, núm. 15.

1ª—Véase: verb. *Competencia*, núm. 4.

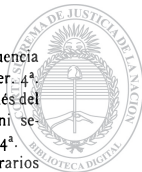
1ª—Véase: verb. *Abogado*, núm. 4.



1. Tacha—El parentesco y la íntima amistad, no son tacha absoluta.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 150, Ser. 3^a.
2. Tacha—legal, el hecho de proteger á una persona

1—Se trataba de una cuestión de filiación natural y de su prueba. Las tachas relativas no deben tener fuerza en esta clase de juicios, porque tratándose de hechos domésticos ó de familia, como sucede en lo referente á la edad, parentesco ó estado, no debe ni puede en manera alguna prescindirse de todo punto de las declaraciones de los parientes y personas más allegadas, pues por lo general son los únicos que conocen estas cosas; y de consiguiente, admitir dicha exclusión valdría tanto como imposibilitar la prueba toda vez que no pudiera producirse por escrito. El parentesco y la amistad son tachas consagradas en la ley por razones de justicia y de moral, que hacen inútil toda demostración, pero ni una ni otra es causal de exclusión absoluta del testimonio, primando sobre ambas la sana apreciación judicial. El parentesco consanguíneo ó afín, la amistad íntima, solo aparecen escritos en la ley como vicios relativos—art. 207 del Cód. de Proc.—Y esta clase de testimonios sospechosos ó nulos en gestiones de otra naturaleza, no lo son de derecho en contradicciones relativas al parentesco ó á la filiación natural, en la que ni la publicidad ni el ruido se hacen por lo común al rededor de los hechos que la inducen ó la caracterizan. Véase la causa CCVI, tom. 3^o, Ser. 1^a, Fallos citados.

2—Este punto no fué materia de resolución, tan solo forma parte del dictamen fiscal que emitió esa opinión. Pero aun descartada esa declaración tachada por esa causa, la prueba subsistente en autos era siempre la misma. De manera que el principio sentado en el sumario no puede tomarse como precedente.



sin amparo, no importa ser acreedor, y en consecuencia no es tacha legal.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 374, Ser. 4^a.

3^a. Tacha—La tacha del testigo deducida después del término, no debe recibirse á prueba en primera ni segunda instancia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 428, Ser. 4^a.

1^a. Tasación—No procede la regulación de honorarios mientras no sea aprobada la tasación.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 85, Ser. 3^a.

1^b. Tasación—De bienes, no puede procederse á ella si se oponen terceros poseedores á título de dominio.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 77, Ser. 4^a.

2. Tasación—Para la de campos, no es necesario que la persona tenga título especial, ni aun que resida en el paraje en que ellos están situados.—Jur. Civ., tom. 3, página 65, Ser. 4^a.

3^b. Tasación —Si los bienes hereditarios admiten cómoda división en especie, no puede procederse á la tasación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 372, Ser. 4^a.

4. Tasación—Carece de valor legal, con respecto á los

3^a—La tacha fué deducida después de vencido el término para lo principi, siendo consiguientemente estemporánea de acuerdo con lo dispuesto por el art. 208 del Cód de Proc.

1^a—Véase: verb. *Honorarios*, núm. 1.

1^b—Si la persona que pide la tasación de los bienes se cree con derecho á ellos, debe en primer lugar, deducir la acción que crea corresponderle contra los ocupantes ó poseedores, puesto que no puede ser materia de tasación, en un juicio, sino aquellas cosas con cuya disponibilidad se cuenta.

3^b—Se solicitó la división proporcional de un campo entre los herederos, con arreglo á la cuenta particionaria practicada en una testamentaria. El mayor ó menor valor que puede tener el bien en estos casos, no perjudicaría á los coherederos, por cuanto aquí especialmente se convino en que la adjudicación se haría sorteando los lotes entre aquellos. El valor de cada lote no puede de esta manera tener influencia alguna en el sorteo que debe hacerse.

4—Véase: *Bienes testamentarios*, núm. 3.



legatarios, la tasación de los bienes testamentarios verificada sin su intervención y en consecuencia el mayor ó menor valor fijado, no enerva su derecho á exigir el pago íntegro del legado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 390, Serie 4^a.

Tasación—Véase: *Bienes de menores*, núms. 2 y 4—*Avaluación*, núm. 1—*División en especie*, núm. 1.

Temeridad—Véase: *Costas*, núms. 3, 10, 17, 24, 29, 36, 40, 44, 54 y 57—*Reivindicante*, núm. 5.

1^a. **Tenedor**—El derecho de retención puede ser ejercido por el tenedor de la cosa, aun cuando no exista crédito líquido ni convenio sobre el monto de lo adeudado por razón de la misma.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 357, Ser. 4^a.

Tenedor—Véase: *Espediente*, núm. 2.

1^b. **Tenencia**—La suma que se adeuda por la tenencia de la cosa, debe ser fijada en el juicio iniciado por el que ejerce el derecho de retención, y no en el de daños y perjuicios iniciado por el propietario.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 357, Ser. 4^a.

Tenencia—Véase: *Insano*, núm. 1—*Heredero*, núm. 2.

Tenencia definitiva—Véase: *Prejuzgamiento*, núm. 2.

Tenencia provisoria—Véase: *Divorcio*, núm. 2.

1^c. **Tercería**—Aun cuando se declare procedente la tercería, el ejecutante no es pasible de daños y perjuicios si los bienes embargados se encontraban á cargo del ejecutado.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 3^a.

2. **Tercería**—La tercería sobre muebles, aun fundada

1^a—Véase: *Derecho de retención*, núm. 2.

1^b—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 38.

1^c—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 6.

2.—Todos estos antecedentes determinan la presunción de la simulación absoluta y fraudulenta del contrato por no tener nada de real y



en escritura pública, es improcedente, si el embargo se verificó antes de la fecha que aquélla expresa, y no se justifica la tradición y si el tercerista no hizo oposición en el acto, encontrándose presente.—Jur. Civ., tom. 2, página 45, Ser. 3^a.

3. Tercería—La tercería debe ser deducida ante el juez de la ejecución en que existan los fondos, no procede el embargo pedido ante otro juez.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 99, Ser. 3^a.

4. Tercería—Escluyente, la oposición á una posesión invocando mejor derecho, importa una tercería excluyente y es de competencia del juzgado que conoce en el principal.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 240, Ser. 3^a.

5^a. Tercería—El remate ordenado por sentencia ejecutoriada, solo puede suspenderse en virtud de tercería en forma.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 94, Ser. 4^a.

5^b. Tercería—De mejor derecho, procede aun deducida contra un juicio ordinario.—Jur. Civ., tomo 3, pág. 32, Ser. 4^a.

6. Tercería—La oposición al embargo solo puede aducirla el que posea los muebles embargados, si este hecho no resulta justificado debe deducir tercería.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 52, Ser. 4^a.

7. Tercería—De dominio, opuesta y juzgada por el Inferior, la simulación de la escritura pública presentada encontrarse el otorgante al tiempo de su otorgamiento completamente insolvente.

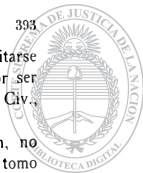
3—Véase: verb. *Embargo*, núm. 1.

4—Véase: verb. *Posesión*, núm. 3.

5^b—Véase: *Juicio ordinario*, núm. 3.

6—Una oposición de esta naturaleza, solo puede sustanciarse en juicio ordinario como lo prescribe el art. 529 del Cód. de Proc., y en espediente separado.

7—Véase: verb. *Simulación*, núm. 14.



para justificar la tercería de dominio, no puede solicitarse ante el Superior la revocación de la sentencia por ser contraria á los derechos de los acreedores.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 121, Ser. 4^a.

8. Tercería.—Trabado el embargo sin oposición, no procede su levantamiento sin tercería.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 42, Ser. 4^a.

9. Tercería.—De dominio, terminado por convenio entre el ejecutante y ejecutado el litigio que motivó el embargo, éste debe ser levantado declarándose procedente la tercería de dominio á que hubiese dado lugar—Jur. Civ., tom. 9, pág. 198, Ser. 4^a.

Tercería.—Véase: *Bienes embargados*, núm. 2.

1^a. Tercerista.—Si no justifica el dominio de los muebles embargados, su acción debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 402, Ser. 4^a.

Tercerista.—Véase: *Acciones criminales*, núm. 1.

1^b. Tercero.—Para que el boleto de compraventa importe una cesión de derechos y acciones, debe existir el endoso, al tercero, del boleto otorgado por el propietario que promete vender.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 325, Serie 3^a.

2. Tercero.—Comprador, el locatario que no ha hecho inscribir su contrato privado en el Registro de Propiedad, carece de derecho para demandar al tercero comprador de buena fe, por acciones emergentes del contrato.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 122, Ser. 3^a.

3. Tercero.—La acción deducida á nombre personal, no

9—Véase: verb. *Convenio*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Muebles embargados*, núm. 1.

1^b—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 5.

2—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 11.

3—Véase: *Acción personal*, núm. 3.



puede ser transferida á un tercero sin aquiescencia del demandado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 266, Ser. 4^a.

Tercero—Véase: *Albacea*, núm. 2—*Acto ilícito*, números 4, 6 y 7—*Administración*, núm. 1—*Agravio*, núm. 1—*Asistencia médica*, núm. 1—*Amistad*, núm. 1—*Bienes de la esposa*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núms. 4, 13, y 33—*Bienes propios*, núm. 2—*Comprador*, núms. 2 y 3—*Cesión*, núm. 2—*Competencia*, núm. 2—*Carta*, números 1 y 2—*Contradocumento*, núm. 3—*Contrato*, números 6 y 15—*Compraventa*, núm. 2—*Costas*, núm. 4—*Condominio*, núm. 4—*Domicilio*, núm. 8—*Daños y perjuicios*, núms. 4, 70 y 101—*Dinero propio*, núm. 1—*Dominio*, núm. 1—*Dominio público*, núm. 1—*Embargo indebido*, núm. 1—*Embargo*, núm. 4—*Escepción*, núm. 2—*Ilegitimidad*, núm. 2—*Interdicto de obra nueva*, núms. 1 y 2—*Locatario*, núm. 2—*Mandatario*, núms. 3, 12 y 14—*Mandato*, núm. 13—*Materiales*, núm. 1—*Nulidad de una sentencia*, núm. 24—*Obras*, núms. 1 y 3—*Obligación*, núm. 2—*Papel sellado*, núm. 6—*Personería*, núm. 12—*Patria potestad*, núm. 3—*Poder especial*, núm. 1—*Poseción judicial*, núms. 6 y 9—*Simulación*, núm. 13—*Sindicato*, núm. 1—*Sociedad comercial*, núm. 1—*Tasación*, núms. 1^b y 1^a—*Venta en remate*, núm. 1.

Tercer poseedor—Véase: *Revocación*, núm. 1.

1. Terceros—El reconocimiento del carácter heredita-

1—De seis herederos todos mayores, cuatro acreditaron su carácter hereditario, no pudiéndolo hacer los otros dos por no haberse encontrado las partidas de bautismo. Los cuatro que acreditaron su carácter pidieron que se incluyera en la declaratoria á los otros dos, á lo que el Juez Mendez Paz no hizo lugar, porque el carácter hereditario debe justificarse en autos en la forma que la ley determina, y no siendo suficiente el reconocimiento hecho por los coherederos, no podía accederse á lo solicitado. La Cámara revocó el auto fundándose en que los únicos perjudicados por la inclusión de los dos coherederos serían los de-



rio por los coherederos, es prueba suficiente siempre que no afecte intereses de terceros.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 357, Ser. 3ª.

1ª. Terceros adquirentes—Cualesquiera que hayan sido las omisiones en que haya incurrido el tutor, el menor solo tiene acción contra él, pero no contra los terceros adquirentes de los bienes con las formalidades que impone la ley y con la debida intervención judicial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 33, Ser. 3ª.

1. Término—El Juzgado, á solicitud de los herederos reeonocidos, puede fijar un término prudencial para que justifiquen sus derechos los que pretendan igual carácter.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 26, Ser. 3ª.

2. Término.—El término para deducir oposición al estado de graduación de créditos, vence el día fijado en los edictos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 392, Ser. 3ª.

3. Término—La fijación del término para el cumplimiento de una obligación sin plazo determinado, debe hacerse con audiencia del obligado.—Jur. Civ., tom. 3, página 406, Ser. 4ª.

4. Término—Las peticiones sobre fijación de término

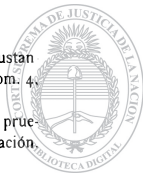
más que comprobaron su carácter hereditario; y no perjudicando á terceros ese reconocimiento, el Tribunal no tenía por que oponerse á ello.

1ª —Véase: *Bienes de menores*, núm. 1.

2—Véase: *Graduación de créditos*, núm. 1.

3—De acuerdo con el caso resuelto por la Cámara en el tom. 6, página 473, Ser. 1ª, Jur. Civ.—art. 618 del Cód. Civ., concordante con los arts. 509, 747, 756, 1204 y 1212 del mismo Cód.

4—La Cámara no resolvió tal cosa. Declarado de legítimo abono un crédito contra una testamentaria, el acreedor se presentó pidiendo que se señalara plazo para el pago, porque la sentencia que declaró el crédito como de legítimo abono no contenía plazo. El Juez decretó simplemente, «no ha lugar». Apelada la resolución, la Cámara dijo, «que la petición debió sustanciarse, dejándose sin efecto el auto, devolviéndolo».



para el cumplimiento de una sentencia, deben sustentarse con audiencia de los obligados.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 231, Ser. 4^a.

5. **Término**—El término para oponerse al auto de prueba corre para cada parte desde el día de la notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 322, Ser. 4^a.

Término—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 5 y 28—*Perito*, núm. 1—*Locación*, núm. 3—*Domicilio*, núm. 1—*Abogado*, núm. 4—*Cuenta*, núm. 1—*Arrendamiento*, núm. 2—*Edictos*, núms. 1 y 5—*Fallecimiento*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 4—*Remate judicial*, núm. 19—*Rendición de cuentas*, núms. 5 y 21—*Desistimiento*, núm. 1—*Cláusula penal*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 2—*Posesión*, núm. 6—*Nulidad de un remate judicial*, núm. 1—*Recurso*, núm. 2—*Boleto de compraventa*, núms. 12, 22 y 24—*Obligación sin plazo*, núm. 1—*De oficio*, núm. 1—*Recurso de apelación*, núm. 1—*Contrato de arrendamiento*, núms. 12, 21 y 22—*Daños y perjuicios*, núm. 50—*Desistimiento*, núm. 4—*Notificación*, núms. 7 y 13—*Títulos de propiedad*, núms. 15, 18 y 28—*Contrato privado*, núm. 3—*Condición resolutoria*, núm. 1.

1. **Término para alegar**—El término para alegar, solo empieza á correr desde la fecha en que se pueden extraer los autos de la Secretaría.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 242, Ser. 3^a.

2. **Término para alegar**—El término para alegar de bien

se al Inferior para que llenada esta formalidad dicte la resolución que corresponda con arreglo á derecho.» Cuál es la resolución que corresponde? La Cámara no lo dijo.

5—Véase: verb. *Notificación*, núm. 13.

1—Véase: verb. *Alegar*, núm. 1.

2—No está comprendido entre los términos declarados perentorios por el art. 43 del Cód. de Proc.



probado, no es perentorio y el Juzgado, con causa justificada, puede prorrogarlo.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 133, Ser. 4^a.

3. **Término para alegar**—Siempre que resulte fehaciente la presentación del alegato á un Escribano público, antes del vencimiento del término, debe agregarse al espediente.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 417, Ser. 4^a.

1^a. **Término para apelar**—Aun cuando no se haya hecho saber al deudor el embargo preventivo, el término para apelar corre desde que la parte haya tenido conocimiento de él.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 58, Ser. 4^a.

1^b. **Término para arraigar**—Aun consentida la orden de arraigar el juicio, el demandante no tiene término perentorio para su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 10, página 105, Ser. 4^a.

1^c. **Término para contestar**—El término para contestar derechamente después del rechazo de las escepciones, corre desde la notificación personal de la parte.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 67, Ser. 3^a.

2. **Término para contestar**—La demanda, el término para contestar la demande corre desde el día de la notificación; las diligencias en que se hace saber el Juez que va á conocer por la recusación, no suspenden dicho término.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 243, Ser. 3^a.

Término para contestar—Véase: *Escrito*, núm. 1—*Notificación*, núms. 3 y 7—*Recusación*, núm. 5—*Rebeldía*, núm. 12.

1^d. **Término para la escrituración**—La fijación de un término para la escrituración en un boleto impreso de re-

3—Véase: verb. *Alegato*, núm. 9.

1^a—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 45.

1^b—Véase: verb. *Arraigo*, núm. 4.

1^c—Véase: verb. *Notificación*, núm. 3.

1^d—Véase: *Pacto comisorio*, núm. 2.



mate, no importa un pacto comisorio, y solo confiere al comprador ó al vendedor el derecho de exigir judicialmente el cumplimiento del contrato si no fuere de común acuerdo prorrogado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 281, Ser. 3^a.

1. **Término extraordinario**—No estando prohibida la prueba por informes de oficinas extranjeras, debe acordarse el término extraordinario para producirla.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 225, Ser. 3^a.

2^a. **Término extraordinario**—No procede el de prueba en el juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 233, Ser. 3^a.

2^b. **Término extraordinario**—Aun cuando el que debe absolver posiciones se encuentre ausente de la jurisdicción del juzgado, no es necesaria la petición de término extraordinario.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 355, Ser. 4^a.

3. **Término extraordinario**—De prueba, es común, aun cuando lo haya solicitado una sola parte.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 162, Ser. 4^a.

4. **Término extraordinario**—No procede el término extraordinario de prueba en el juicio ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 354, Ser. 4^a.

5. **Término extraordinario**—Pedido estemporáneamente,

1—Véase: verb. *Informes*, núm. 1.

2^a—Así lo tiene establecido la jurisprudencia de la Cámara. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Término extraordinario*, núm. 3.

2^b—Véase: verb. *Posiciones*, núm. 19.

3—Dice la Cámara que así resulta de la disposición del art. 116 del Cód. de Proc. cuando dice, que el término extraordinario correrá juntamente con el ordinario, no pudiendo suspenderse ni uno ni otro, sino mediando causa que imposibilite la producción de la prueba. De acuerdo con este caso, puede verse Inst., tom. 4^o, verb. *Término extraordinario*, núm. 1.

4—Véase el núm. 2.

5—De conformidad con lo prevenido en el art. 114 del Cód. de Procedimientos.



no procede su concesión.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 52, Ser. 4^a.

6. **Término extraordinario**—El término extraordinario de prueba, no debe ser concedido después de la oportunidad que la ley fija.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Serie 4^a.

7. **Término extraordinario**—Para evacuar diligencias en el extranjero, es potestativo de las partes.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 96, Ser. 4^a.

Término extraordinario—Véase: *Posiciones*, núm. 19—*Término de prueba*, núm. 4.

1^a. **Término fatal**—Al vendedor que alega la rescisión del contrato de compraventa, corresponde la prueba de la escepción; si no la justifica debe ser condenado al cumplimiento, en un término perentorio, bajo pena de resarcir las pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tom. 7, página 371, Ser. 3^a.

1^b. **Término fatal**—Siendo un término fatal el que la ley fija para hacer uso del derecho de recuperar la propiedad vendida con pacto de retroventa, no puede admitirse en derecho la existencia y validez de un plazo indeterminado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Serie 4^a.

2. **Término fatal**—El que la ley fija al que ha conseguido un embargo preventivo, para deducir demanda es fatal, sin que por ningún incidente se considere interrumpido.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 108, Ser. 4^a.

3—Véase el número precedente.

7—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 26.

1^a—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 14.

1^b—Véase: verb. *Retroventa*, núm. 2.

2—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 41.



Término improrrogable — Véase: *Embargo preventivo*, núm. 22.

1. **Término interrumpido** — La absolución de posiciones no interrumpe el término para alegar. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 4^a.

1^a. **Término para pedir la nulidad** — Se prescribe a los dos años el derecho de pedir la nulidad de un acto jurídico por error, y el término corre para los firmantes desde la fecha del acto. — Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 3^a.

1^b. **Término para pedir la nulidad** — El término para deducir la nulidad del juicio por defectos del procedimiento, corre desde la intervención, ya sea por medio de escrito ó notificaciones. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 66, Ser. 4^a.

2. **Término para pedir la nulidad** — La nulidad por defecto de procedimiento no importa ni escepción ni recurso, y en consecuencia el término solo se cuenta desde la notificación. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 213, Ser. 4^a.

Término perentorio — Véase: *Nulidad*, núm. 1 — *Remate judicial*, núm. 14.

Término para prescribir — Véase: *Cosa juzgada*, núm. 8 — *Carta de crédito*, núm. 1 — *Nulidad de un acto jurídico*, núm. 3 — *Fianza*, núm. 4 — *Prescripción de una deuda*, número 1 — *Prescripción de la nulidad*, núm. 1 — *Información sumaria*, núm. 2 — *Abogado*, núm. 1 — *Prescripción*, núm. 3 — *Apoderado*, núm. 1 — *Rendición de cuentas*, número 26 — *Posesión treintenaria*, núm. 2 — *Prescripción treintenaria*, núm. 2 — *Prescripción liberatoria*, núm. 1.

1 — Véase: verb. *Alegato*, núm. 4.

1^a — Véase: verb. *Acto jurídico*, núm. 2.

1^b — Véase: verb. *Notificación*, núm. 9.

2 — Véase: verb. *Notificación*, núm. 12.

1 — Véase: verb. *Notificación*, núm. 5.



1^a. **Término de la prórroga**—La prórroga de un término corre desde la notificación de la concesión y no á continuación del prorrogado.—Jur. Civ., tom. 7, página 124, Ser. 3^a.

2^a. **Término de la prórroga**—En el término de prórroga concedida para contestar la demanda, no pueden oponerse excepciones sin contestarla.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 50, Ser. 3^a.

Término prorrogado—Véase: *Obligación de hacer*, número 5—*Rebeldía*, núm. 10—*Liquidación*, núm. 5.

1^b. **Término de prueba**—Después de vencido el término de prueba, no procede la ampliación de una compulsa de libros.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 63, Ser. 3^a.

2^b. **Término de prueba**—La diligencia aclaratoria de una compulsa de libros, debe practicarse dentro del término de prueba.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 420, Ser. 4^a.

3. **Término de prueba**—La suspensión del término de prueba es común á las partes, cualquiera de ellas que la haya motivado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 426, Ser. 4^a.

4. **Término de prueba**—La manifestación de hechos nuevos suspende el término de prueba y en consecuencia la petición del término extraordinario puede formularse después de resuelto el incidente.—Jur. Civ., tom. 5, página 98, Ser. 4^a.

5. **Término de prueba**—Los documentos que no justifican hechos alegados en la demanda, pueden ser agre-

1^a.—Véase: verb. *Notificación*, núm. 4.

2^a.—Véase: verb. *Excepciones*, núm. 2.

1^b.—Véase: *Compulsa de libros*, núm. 1.

2^b.—Véase: *Compulsa de libros*, núm. 2.

5.—Se trataba de documentos que no eran de los que sirven de fundamento á la demanda, los que pueden ser agregados, aunque no hubiesen sido enumerados en la demanda. Véase: verb. *Documentos*, núms. 3, 5 y 7.



gados durante el término de prueba.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 389, Ser. 4^a.

6. **Término de prueba**—No procede la fijación de término á la parte para la presentación de pruebas cuyo diligenciamiento pende de oficinas públicas.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 125, Ser. 4^a.

7. **Término de prueba**—Las diligencias de prueba no practicadas por ocupaciones del Juzgado, deben cumplirse aun después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 129, Ser. 4^a.

8. **Término de prueba**—La prueba de posiciones, no se encuentra entre las que deben pedirse y evacuarse dentro del término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 131, Ser. 4^a.

9. **Término de prueba**—Las diligencias de prueba producidas después del vencimiento del término, sin culpa de la parte, deben ser agregadas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 4^a.

10. **Término de prueba**—No procede la reiteración de diligencias de prueba pedidas cuando no existe término hábil para su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 79, Ser. 4^a.

Término de prueba—Véase: *Diligencias de prueba*, números 1 y siguientes—*Documentos*, núms. 1 y 2—*Testigos*, núms. 1, 8, 10, 26 y 27—*Prueba testimonial*, núm. 1—*Prueba*, núms. 4, 5 y 8—*Declaraciones*, núm. 5—*Posiciones*, núm. 18—*Tacha*, núm. 3.

1. **Término de la revocatoria**—Para evacuar el traslado de la revocatoria es de seis días.—Jur. Civ., tom. 1, página 343, Ser. 3^a.

6—Véase: verb. *Oficinas públicas*, núm. 1.

7—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 25.

8—Véase: verb. *Posiciones*, núm. 39.

9—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 28.

10—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 27.



1. **Término para la subsanación**—Vencido el término acordado para la subsanación de los defectos del título, es procedente la autorización á la parte contraria para que practique las diligencias conducentes á ese objeto á costa del obligado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 62, Ser. 4^a.

1. **Término suspendido**—Todo término se considera suspendido desde la presentación del escrito en que se pide la suspensión.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 396, Ser. 4^a.

2^a. **Término suspendido**—Los incidentes suspenden el término de prueba, sin petición de parte.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 93, Ser. 4^a.

2^b. **Término suspendido**—Cualquier incidente de sustanciación obligatoria, suscitado por una de las partes, suspende los términos para los demás.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 67, Ser. 4^a.

Término suspendido—Véase: *Alegato*, núms. 1 y 11—*Alegar*, núm. 2—*Escrito*, núm. 7—*Acción determinada*, núm. 1.

1^a. **Término del traslado**—El término para evacuar el traslado en las cuestiones de puro derecho, solo empieza á correr desde que el expediente se encuentra á disposición de la parte.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 72, Ser. 4^a.

2^b. **Término vencido**—Consentido el decreto en que se da por contestado el traslado en rebeldía, no puede discutirse si estaba ó no vencido el término.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 365, Ser. 4^a.

3. **Término vencido**—Vencido el término debe agre-

2^a—Véase: verb. *Incidentes*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Cuestiones*, núm. 3.

2^b—Porque la cuestión sobre el vencimiento del término pasa la categoría de cosa juzgada, sobre la que no se puede volver sin violar los principios fundamentales que la rijen.

3—Véase verb. *Prueba*, núm. 9.



garse la prueba producida, salvo el derecho de las partes para exigir la pedida antes de los alegatos.—Jur. Civ. tom. 9, pág. 138, Ser. 4ª.

4. **Término vencido**—Vencido el término debe agregarse la prueba, sin perjuicio del derecho de la parte para pedir antes de alegar que se diligencien las omitidas sin culpa suya.—Jur. Civ., tom. 9, página 251, Ser. 4ª.

5. **Término vencido**—Las declaraciones de testigos que no se hayan producido por negligencia de la parte, no pueden ser tomadas después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 4ª.

6. **Término vencido**—Procede la recepción de las pruebas pedidas, después de vencido el término, si en tiempo oportuno se pidió y era procedente la prórroga, aun cuando no fuese decretada.—Jur. Civ., tom. 10, página 297, Ser. 4ª.

7. **Término vencido**—Deben recibirse los testigos aun después de vencido el término, si el actuario no ha hecho constar las causas que motivaron la falta de notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 99, Ser. 4ª.

Término vencido—Véase: *Escrito*, núms. 2 y 6—*Excepción de incompetencia*, núm. 7—*Contrato de compraventa*, núm. 21—*Espediente*, núm. 5—*Venta*, núms. 4 y 5—*Contrato de arrendamiento*, núm. 20—*Seña*, núm. 8—*Pensión alimenticia*, núm. 5—*Rendición de cuentas*, número 17—*Tacha*, núm. 3—*Obras*, núm. 2—*Rebeldía*, núm. 15.

Términos de un escrito—Véase: *Apercibimiento*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Prueba*, núm. 10.

5—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 6.

6—Véase: *Prueba*, núm. 3.

7—Véase: verb. *Notificación*, núm. 10.



2ª. **Términos**—Judiciales, suspensión de estos términos en los expedientes de la Justicia de Paz.— Jur. Civ., tom. 9, pág. 271, Ser. 4ª.

1ª. **Términos perentorios**—Tratándose de términos que la ley no declara perentorios, la presentación del escrito después de vencido, pero antes de la acusación de rebeldía, hace procedente su agregación.— Jur. Civ., tom. 1, pág. 66, Ser. 4ª.

1ª. **Terreno**—El propietario de un terreno puede hacer en él las obras que crea necesarias, y los propietarios de los fundos adyacentes carecen de derecho para reclamar daños y perjuicios por el menor valor que ellas hayan ocasionado.— Jur. Civ., tom. 5, pág. 304, Ser. 3ª.

2ª. **Terreno**— Ante dos títulos que tienen por origen un mismo vendedor, prevalece el de fecha anterior si en él se espresa que no le queda más terreno y señala linderos existentes, aun cuando se haya fijado la dimensión exacta del terreno.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 404, Serie 4ª.

Terreno—Véase: *Avaluación*, núm. 1 — *Aluvión*, números 1, 2 y 3 — *Condominio*, núm. 10 — *Contrato de compraventa*, núm. 4 — *Espedientes informativos*, núm. 1 — *Municipalidad*, núm. 2 — *Informaciones*, núm. 2 — *Calles*, núm. 1 — *Dimensión*, núm. 1 — *Información supletoria*, números 1 y 7 — *Demolición*, núm. 1 — *Compraventa*, núm. 4 — *Contrato de arrendamiento*, núms. 12 y 26 — *Daños y perjuicios*, núms. 43 y 50 — *Administración*, núm. 1 — *Indem-*

2ª—Véase: verb. *Espedientes*, núm. 4.

1ª—El escrito fué presentado el día siguiente al del vencimiento del término, y la rebeldía acusada dos horas y media después de presentado aquél. Se declaró que no había lugar á la rebeldía acusada.

1ª—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 24.

2ª—Véase: verb. *Dimensión*, núm. 1.



nización, núm. 4— *Edificación*, núm. 1— *Interdicto de obra nueva*, núm. 4— *Reivindicación*, núm. 18.

1^a. **Terrenos públicos**—La propiedad que la Ley orgánica atribuye á la Municipalidad sobre los terrenos públicos de la Capital, solo se refiere á aquellos que no hayan salido del dominio público.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 3^a.

1^b. **Tesoro público**—Solo puede calificarse de impuesto aquel cuyo producto ingresa en el tesoro público ó Municipal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 260, Ser. 4^a.

Tesoro público--Véase: *Adoquinado*, núms. 1 y 2.

Testador—Véase: *Testamento*, núm. 3—*Herencia*, número 4—*Nulidad de un testamento*, núm. 2.

1^c. **Testamentaria**—Corresponde á los Tribunales de la Provincia conocer en la testamentaria, si el causante falleció en aquella jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 3, página 75, Ser. 3^a.

2^b. **Testamentaria**-- Comprobado que el causante no era vecino de la Capital, debe remitirse la testamentaria á los jueces de su domicilio.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 230, Ser. 3^a.

3. **Testamentaria**—Los créditos contra una testamen-

1^a-- Véase: verb. *Municipalidad*, núm. 7.

1^b--Véase la nota del verb. *Adoquinado*, núm. 1.

1^c-- Véase: *Jurisdicción testamentaria*, núm. 1.

2^b--Arts. 3284 y 3567 del Cód. Civ.

3--Entablada demanda por cobro de pesos contra una testamentaria. El representante del albacea reconoció el crédito; y el de la madre de los hijos naturales dijo, que según los datos suministrados, el crédito era efectivo. El actor no produjo prueba alguna, siendo la demanda rechazada porque en los poderes de los apoderados no se registraba la facultad expresa é indispensable exigida por el art. 1881 en su inc. 17; no conteniendo la facultad de reconocer deudas anteriores al mandato o el reconocimiento hecho carece de eficacia.



taria en que existen menores, deben ser justificados por el demandante.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 259, Ser. 3ª.

4. **Testamentaria**—Cuando la ejecución se dirige contra una testamentaria por crédito líquido, el actor no está obligado á ejecutar á cada heredero por la parte proporcional.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 415, Ser. 4ª.

5. **Testamentaria**—Aun cuando las partes prorroguen jurisdicción, los tribunales no pueden entender en la testamentaria de los domiciliados fuera de la Capital.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 4ª.

6. **Testamentaria**—Es improcedente la nulidad del juicio testamentario, fundada en la falta de intervención en las diligencias previas.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 6, Ser. 4ª.

7. **Testamentaria**—El poder especial para formarla, no basta para iniciar la de un heredero del causante fallecido con posterioridad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 7, Serie 4ª.

8. **Testamentaria**—Debe ser condenada en las costas cuando los herederos niegan los hechos en que se funda la demanda, y se comprueba que tenían conocimiento de ellos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 164, Ser. 4ª.

Testamentaria— Véase: *Abogado*, núm. 11—*Albacea*, núms. 2, 5 y 7—*Derechos hereditarios*, núm. 1—*Poder especial*, núms. 1 y 2—*Alimentos*, núm. 2—*Acción ejecutiva*, núm. 1—*Petición de herencia*, núm. 2—*Demanda*, núm. 1—*Filiación legítima*, núm. 2—*Herederos*, núm. 2—*Causante*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 3—*Honorarios*, números 8 y 26—*Acreedores*, núm. 1—*Curador*, núm. 5—*Inhabilidad de título*, núm. 7—*Menores*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Crédito líquido*, núm. 1.

5—Véase: *Jurisdicción*, núm. 5.

6—Véase: *Nulidad de un juicio*, núm. 2.

7—Véase: verb. *Poder especial*, núm. 6.



1. **Testamento**—Las aseveraciones de un testamento, solo forman prueba en cuanto reconocen obligaciones en contra del causante, pero no á su favor.—Jur. Civ., tomo 1, pág. 133, Ser. 3ª.

2. **Testamento**—Las declaraciones de los testigos del testamento, contrarias á lo que de su contenido resulta, no forman prueba mientras no se justifiquen haber procedido inducidos por miedo, dolo, error, etc.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 218, Ser. 3ª.

3. **Testamento**—No es requisito esencial á la validez del testamento por acto público, que sea escrito ante los testigos, basta que éstos se encuentren presentes durante la lectura y firma del testador y del escribano.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 218, Ser. 3ª.

4. **Testamento**—El del padre es prueba bastante de la filiación en la testamentaria de la madre.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 214, Ser. 3ª.

5. **Testamento**—Las causas de nulidad de un testamento, deben ser probadas por el que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4ª.

6. **Testamento**—La atestación hecha por el Escribano, en el cuerpo del testamento, de un hecho que impide al testador firmar el acto, es válida y no puede fundar la nulidad, siempre que el hecho sea cierto, aunque no sea el mismo que cause el impedimento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4ª.

7. **Testamento**—Es procedente la declaratoria de here-

1—Solo sirven como principio de prueba, se ha dicho en otro caso. Véase el núm. 8.

2—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 1.

4—Véase: *Filiación natural*, núm. 2.

5—Véase: *Nulidad de un testamento*, núm. 1.

6—Véase: *Nulidad de un testamento*, núm. 2.

7—Véase: *Declaratoria de herederos*, núm. 7.



deros, aun cuando exista testamento, si alguno de los instituidos hubiese fallecido antes que el causante.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 264, Ser. 4^a.

8. **Testamento**—El reconocimiento de una deuda en el testamento, importa un principio de prueba escrita para hacer procedente la testimonial á los efectos de justificar la veracidad de la confesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 330, Ser. 4^a.

9. **Testamento**—El legatario de parte alicuota, puede pedir en cualquier tiempo la rendición de cuentas, sin esperar que termine el juicio sucesorio con la división definitiva de los bienes y completa ejecución del testamento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 4^a.

Testamento—Véase: *Administración*, núm. 3—*Legado*, núm. 1—*Filiación legítima*, núm. 2—*Filiación natural*, núm. 18—*Herencia*, núm. 3—*Testigos*, núm. 24—*Poseción judicial*, núm. 7—*Tutela*, núm. 2—*Bienes del heredero*, núm. 1.

1. **Testigo**—El cambio de domicilio de un testigo, no hace perder el derecho de presentarlo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 107, Ser. 3^a.

2. **Testigo**—Debe ser citado en el domicilio que indica

8.—Véase: *Confesión*, núm. 2.

9.—Véase: *Bienes de la sucesión*, núm. 4.

1.—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 3.

2.—Denunciado el domicilio de un testigo fué citado en él, al diligenciarse la citación informaron que estaba establecido en La Plata: en presencia de esta manifestación y habiéndose pedido que fuese citado nuevamente en el mismo domicilio, el Juez no hizo lugar, en virtud del resultado del informe: la Cámara revocó la providencia teniendo en cuenta que el art. 118 impone á la parte que presenta un testigo, el deber de denunciar el domicilio, y teniendo en cuenta además, que la manifestación que se habia hecho no podia considerarse como suficiente prueba de que el testigo no tuviese su domicilio en el lugar indicado por quien lo presentó.



la parte que lo presenta, cualquiera que sea su residencia habitual.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 115, Ser. 4^a.

3. **Testigo**—Si el testigo ha comparecido y no ha declarado, sin culpa de la parte, debe señalársele nuevo día.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 153, Ser. 4^a.

4. **Testigo**—Residente en el extranjero cuya declaración se pide en la estación oportuna, puede declarar ante el Juzgado si cambia de domicilio.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 359, Ser. 4^a.

5. **Testigo**—La parte que lo presenta, puede desistir de su declaración.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 6, Ser. 4^a.

6. **Testigo**—Si después del libramiento del eshorto, el testigo cambia de domicilio, debe librarse nuevo oficio para la declaración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 327, Serie 4^a.

1. **Testigos**—Los presentados dentro del término de prueba, pueden declarar aun después de vencido, si la falta no fuere imputable á la parte.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 330, Ser. 3^a.

2. **Testigos**—La presentación hecha por una parte, de

3—El testigo compareció á la citación pero se retiró sin declarar; la parte pidió señalamiento de nuevo día á lo que se proveyó de conformidad, porque la no declaración no podía en manera alguna imputarse á desidia de la parte.

4—Presentado un testigo domiciliado en el extranjero, se libró el correspondiente exhorto: en el interin se trasladó á esta Capital, pidiéndose que la declaración se tomase aquí; así se ordenó, porque el que un testigo cambie ó no de domicilio, no puede jamás depender de la voluntad de la parte, pudiendo consiguientemente aplicarse la disposición del art. 118 del Cód. de Proc.

5—Es facultivo de las partes desistir de las pruebas por ellas ofrecidas.

6—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 7.

1—De acuerdo con la disposición del art. 118 del Cód. de Proc.

2—Como la parte que presenta sus testigos tiene el derecho de re-



testigos que han sido presentados por la contraria, importa únicamente la de aquellos que hayan declarado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 346, Ser. 3^a.

3. **Testigos**—Para que los de una información, formen prueba plena, deben dar razón de sus afirmaciones.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 394, Ser. 3^a.

4. **Testigos**—La esposa del tutor puede declarar como testigo en el juicio seguido contra la persona que desempeñaba el cargo, demandado por rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 80, Ser. 3^a.

5. **Testigos**—Los testigos, firmantes del documento privado firmado á ruego, no bastan para justificar su autenticidad después del fallecimiento de aquel que resulte obligado.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 313, Ser. 3^a.

6. **Testigos**—No es requisito esencial á la validez del testamento por acto público, que sea escrito ante los testigos, basta que éstos se encuentren presentes durante la lectura y firma del testador y del Escribano.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 218, Ser. 3^a.

7. **Testigos**—Si la inasistencia de los testigos no es imputable á la parte, debe señalarse nueva audiencia.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 43, Ser. 3^a.

8. **Testigos**—No debe admitirse declaración á éstos

tirarlos: si pide que no declaren son tenidos como no presentados, y como la parte contraria pedía que se tuvieran como testigos suyos los presentados por la otra, resulta que los retirados no pueden declarar por que son tenidos como no presentados.

4—Véase: verb. *Rendición de cuentas*, núm. 2.

5—Véase: verb. *Autenticidad*, núm. 1.

7—La no producción de la prueba, no es imputable á la parte, debiendo aplicarse en este caso la disposición del art. 118 del Cód. de Proc.

8 De conformidad con la jurisprudencia uniformemente sentada por la Cámara fundada en el art. 118 del Cód. de Proc.



después de vencido el término si por negligencia de la parte no la prestaron el día señalado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 198, Ser. 3ª.

9. **Testigos**—La citación de éstos puede pedirse en el acto del juicio de interdicto.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 203, Ser. 3ª.

10. **Testigos**—No pedida en oportunidad la fijación de nuevo día á los testigos, se tiene por desistida, á la parte, de su presentación.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 215, Ser. 3ª.

11. **Testigos**—Las declaraciones de testigos en que no se hubiesen observado las prescripciones de la ley, carecen de fuerza probatoria.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 16, Ser. 3ª.

12. **Testigos**—La parte debe urgir el señalamiento de nuevo día para los testigos, aun cuando no hayan declarado por ocupaciones del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 107, Ser. 3ª.

13. **Testigos**—Los que no comparezcan á la citación en el juicio sumario de interdicto, pueden ser nuevamente citados á solicitud de la parte. Jur. Civ., tom. 7, página 160, Ser. 3ª.

9—Véase: verb. *Interdicto*, núm. 3.

10—Se dijo que el testigo no podía concurrir porque se hallaba enfermo. En este caso la parte debe hacer uso dentro de un breve término, del derecho que le acuerda el art. 199 del Cód. de Proc., pues de lo contrario no se encontraría dentro de la excepción del art. 118 del mismo Código.

11—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 2.

12—El testigo fué citado para el 31 de Diciembre, y habiendo comparecido después de la hora, el Juzgado no le tomó declaración. La parte pidió señalamiento de nueva audiencia recién el 5 de Oct. La Cámara consideró que en esto había desidia de la parte en la producción de su prueba y por consiguiente no hizo lugar al señalamiento de nuevo día.

13—Véase: verb. *Interdicto*, núm. 6.



14. **Testigos**—Procede la citación de los testigos que se hayan negado á concurrir con la parte al juicio del interdicto.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 162, Ser. 3ª.

15. **Testigos**—Auriculares, solo forman prueba de hechos de difícil constatación por su antigüedad y por ser de fama pública.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 367, Ser. 4ª.

16. **Testigos**—Consentida por la parte la providencia que dispone que la declaración de testigos sea conjunta, aun cuando la ley no lo disponga, toda ulterior oposición debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 60, Ser. 4ª.

17. **Testigos**—Las partes no tienen derecho á conocer antes del acto el interrogatorio presentado para los testigos, aunque éstos deben prestar declaración por medio de informe.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 373, Ser. 4ª.

18. **Testigos**—Aun ordenadas las declaraciones, si los testigos no son citados por negligencia de la parte, no pueden declarar después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 405, Ser. 4ª.

19. **Testigos** La existencia de testigos que deponen contradictoriamente sobre los mismos hechos, permite al Juez calificar las declaraciones, teniendo en cuenta la

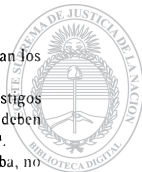
14—Véase: verb. *Interdicto*, núm. 7.

15—Leyes 28 y 29, tít. 16, Part. 3ª.

16—Consentida una providencia, pasa en autoridad de cosa juzgada, y no es posible ir contra lo en ella resuelto.

17—El art. 181 del Cód. de Proc. faculta á la parte para reservarse el interrogatorio hasta la audiencia en que debe tener lugar el examen de los testigos. Este derecho no puede ser modificado cuando el pliego se encuentra en Secretaría, pues la ley no impone la obligación de entregarlo abierto, y todo lo contrario se desprende del espíritu y letra del artículo citado. La circunstancia de que las declaraciones deban tomarse por medio de informes, no obsta á que las partes dirijan las preguntas que estimen conducentes á su derecho en la forma autorizada por el art. 201, aplicable por analogía.

18—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 5.



mayor credibilidad que ellos merezcan, aunque sean los menos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 418, Ser. 4ª.

20. **Testigos**—Para que las declaraciones de testigos formen prueba de los hechos sobre que deponen, deben ser contestes.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 263, Ser. 4ª.

21. **Testigos**—Presentados el último día de prueba, no pueden ser admitidos.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 245, Serie 4ª.

22. **Testigos**—La tacha del testigo, deducida después del término, no puede recibirse á prueba en primera ni en segunda instancia.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 428, Serie 4ª.

23. **Testigos**—El domicilio de los testigos, solo puede resultar falso del acto de la notificación, las indicaciones de la parte, no pueden ser atendidas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 432, Ser. 4ª.

24. **Testigos**—Aun cuando alguno de los testigos no conozca al Escribano autorizante, no es causal para declarar la nulidad del testamento, pues basta para su validez que el Escribano los conozca.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 29, Ser. 4ª.

25. **Testigos**—Las declaraciones de testigos por exhorto, se rijan por la ley de procedimientos vigente en

20—Ley 32, tit. 16, Part. 3ª.

21—Arts. 118 y 184 del Cód. de Proc.

22—Véase: verb. *Tacha*, núm. 3.

23—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 9.

24—Véase: *Nulidad de un testamento*, núm. 3.

25—El juez que dirige un exhorto á otro magistrado de país extranjero, no puede imponer á éste las formas de procedimiento de su propio país. Cada magistrado acepta el exhorto bajo la inteligencia implícita de que se diligenciará de acuerdo con las leyes de su propio suelo. La parte que alega la nulidad debe comprobar que las leyes procesales han sido violadas, y solo así podrán invalidarse las pruebas objetadas.



la jurisdicción en que han sido prestadas.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 126, Ser. 4ª.

26. **Testigos**—Presentados tres días antes del vencimiento del término, no deben ser admitidos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 21, Ser. 4ª.

27. **Testigos**—Deben ser presentados por lo menos tres días antes de vencerse el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 32, Ser. 4ª.

28. **Testigos**—El hecho de ser dependientes de una oficina autorizada para otorgar escrituras públicas, no es causa de nulidad del instrumento; la ley fulmina esa pena si los firmantes como testigos son dependientes autorizados para otorgarla.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 198, Ser. 4ª.

29. **Testigos**—Las declaraciones de los testigos que no se hayan producido por negligencia de la parte, no pueden ser tomadas después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 4ª.

30. **Testigos**—Deben recibirse los testigos, aun después de vencido el término, si el actuario no ha hecho constar las causas que motivaron la falta de notificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 99, Ser. 4ª.

31. **Testigos**—Los que han comparecido a la audien-

26.—Porque según el art. 184 del Cód. de Proc., la lista de testigos debe permanecer en la oficina durante tres días; de manera que recién al cuarto día de presentada dicha lista pueden los testigos ser examinados. La parte habría dejado de urgir la producción de la prueba—art. 118—y no podría recibirse después de vencido el término.

27.—Los testigos fueron presentados el 1º de Julio y el término vencía el 4, faltaba pues, por lo menos un día—arts. 184 y 118 del Cód. de Proc.

28.—Véase: *Escritura pública*, núm. 29.

29.—Véase: verb. *Declaraciones*, núm. 6.

30.—Véase: verb. *Notificación*, núm. 10.

31.—Véase: verb. *Interrogatorio*, núm. 1.



cia y no han declarado por falta de interrogatorio, no pueden ser presentados nuevamente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 320, Ser. 4^a.

Testigos—Véase: *Cédula*, núm. 2—*Conocimiento*, número 1—*Declaraciones*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 2—*Filiación natural*, núm. 14—*Firma*, núm. 6—*Interdicto*, núm. 9—*Informes*, núm. 4—*Papel sellado*, núm. 4—*Prescripción adquisitiva*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 1—*Reivindicación*, núm. 17—*Testamento*, núm. 3—*Venia*, núm. 3—*Escritura pública*, núm. 16.

1^a. **Testimonio**—Los expedientes terminados, no pueden ser agregados como parte de prueba, debe pedirse testimonio de la parte pertinente.—Jur. Civ., tom. 3, página 46, Ser. 3^a.

2. **Testimonio**—La negativa á la agregación de un expediente, no basta para fundar la petición de testimonio de sus piezas después de vencido el término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 82, Ser. 4^a.

Testimonio—Véase: *Fuerza ejecutiva*, núm. 1—*Hijo natural*, núm. 10—*Documentos públicos*, núm. 2—*Cesión de derechos*, núm. 1.

1^b. **Testimonios**—No procede la agregación de autos, deben pedirse los testimonios pertinentes.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 365, Ser. 4^a.

Tiempo determinado—Véase: verb. núm. 2.

Tiempo hábil—Véase: *Prueba*, núm. 2—*Lista*, núm. 1.

Tiempo indeterminado—Véase: *Contrato de arrendamiento*, núm. 19.

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: verb. *Expediente*, núm. 5. Sin embargo, si el expediente contiene referencias generales relativas al pleito, puede ser agregada como prueba.

2—Véase: verb. *Expediente*, núm. 5.

1^b—De acuerdo con la jurisprudencia sentada.



Tiempo oportuno— Véase: *Contrato verbal*, núm. 3—*Pruebas*, núm. 3.

Tíos—Véase: *Hermanos unilaterales*, núm. 1.

Título—Véase: *Acción ejecutiva*, núm. 2—*Inhabilidad de título*, núms. 1 y siguientes—*Herederos*, núm. 6.

Título de adjudicación—Véase: *Petición de herencia*, número 3.

Título de adquisición—Véase: *Dominio público*, núm. 1.

1ª. Título habilitante—No pueden conceptuarse en ningún caso como el título habilitante que la ley exige se transcriba en las escrituras públicas de venta, los títulos de adquisiciones anteriores.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 4ª.

Título nulo—Véase: *Escritura pública*, núm. 10.

Título oneroso—Véase: *Revocación*, núm. 1.

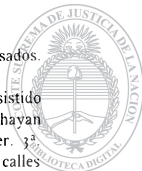
1. Título pericial—Para la avalución de terrenos, no se requiere título pericial.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 84, Ser. 3ª.

Título profesional—Véase: *Tasación*, núm. 2—*Contrato de locación*, núm. 3.

1ª. Título de propiedad—La devolución de un título de propiedad que puede afectar derechos de varios herede-

1ª—Buscando el alcance del art. 1003 del Cód. Civ., se llega sin esfuerzo al convencimiento de que solo se refiere, cuando habla de título habilitante de una escritura, a la transcripción del poder y demás documentos constitutivos del mandato, y esto en el caso de que un tercero concurre en representación de alguno de los otorgantes. La ley exige además, que bajo la fe que merece el oficial público autorizante, se hagan todas las citas y referencias necesarias en las escrituras para dejar así constatado el título en virtud del cual se transfiere la propiedad; con ello basta para su validez.

1ª—Debiendo además dejarse en autos copia legalizada de los títulos que se entreguen.



ros, solo debe hacerse con citación de los interesados.

—Jur. Civ., tom. 1, pág. 350, Ser. 3ª.

2. **Título de propiedad**—No puede darse por desistido al comprador en remate, mientras los títulos no hayan sido presentados.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 15, Ser. 3ª.

3. **Título de propiedad**—La falta de nombre á las calles en que estén ubicados los terrenos de los suburbios, no importan deficiencia de título.—Jur. Civ., tomo 1, página 333, Ser. 3ª.

4. **Título de propiedad**—La conformidad con los títulos estipulada como condición en un boleto de compraventa, obliga al comprador á justificar que la prestó en oportunidad, sin que pueda exigir la subsanación por el vendedor.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 255, Ser. 3ª.

5. **Título de propiedad**—Reconocida la deficiencia de los títulos, procede el desistimiento del comprador dentro del término que fija la ley—Jur. Civ., tom. 4, página 229, Ser. 3ª.

6. **Título de propiedad**—La presentación de los títulos del poseedor, supone que la posesión arranca desde la fecha de aquéllos, sin solución de continuidad entre los diferentes propietarios.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 405, Serie 3ª.

7. **Título de propiedad**—Ante dos títulos al dominio que proceden de un mismo origen, la propiedad corresponde al que justifique haber tenido primero la posesión.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 361, Ser. 3ª.

2—Arts. 521 y 522 del Cód. de Proc.

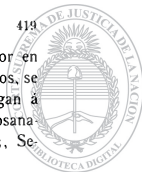
3—Véase: verb. *Calles*, núm. 1.

4—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 3.

5—Véase: verb. *Desistimiento*, núm. 1.

6—Véase: verb. *Posesión*, núm. 8.

7—Véase: verb. *Posesión*, núm. 11.



8. **Título de propiedad**—El derecho del comprador en remate judicial que conceptúa defectuosos los títulos, se limita al desistimiento, si los vendedores se niegan a practicar las diligencias necesarias para la subsanación de los defectos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 93, Serie 3ª.

9. **Título de propiedad**—En la información para bonificar títulos, no es parte el comprador del inmueble que la motiva, ni en consecuencia después de aprobada judicialmente puede desconocer su validez.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 443, Ser. 3ª.

10. **Título de propiedad**—Existe condominio sobre un sepulcro, siempre que se permite la inscripción á nombre de los condóminos y se reconoce el derecho de disponer de él para su familia y allegados, aun cuando el título de propiedad del terreno se encuentre otorgado á nombre de uno solo de los condóminos.—Jur. Civ., tomo 6, pág. 5, Ser. 3ª.

11. **Título de propiedad**—Para la procedencia de la acción reivindicatoria, es necesario justificar el dominio adquirido por medio de la tradición efectiva; no basta la presentación del título de propiedad.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 346, Ser. 3ª.

12. **Título de propiedad**—La posesión quieta y pacífica por mayor término de treinta años, hace procedente la excepción, sin que el demandado deba justificar la existencia de título ni buena fe.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 237, Ser. 3ª.

8—Véase: *Comprador judicial*, núm. 2.

9—Véase: *Información supletoria*, núm. 2.

10—Véase: verb. *Condominio*, núm. 4.

11—Véase: *Acción reivindicatoria*, núm. 1.

12—Véase: *Excepción de prescripción*, núm. 1.



13. **Título de propiedad**—Solo procede el desistimiento del comprador en remate judicial, después de resueltas las observaciones que formule contra los títulos.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 94, Ser. 3ª.

14. **Título de propiedad**—Los títulos de propiedad deben entregarse al heredero á quien se haya adjudicado mayor parte en la finca.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 147, Ser. 3ª.

15. **Título de propiedad**—Si los títulos no pueden ser presentados por los herederos en un breve término, el comprador puede desistir sin responsabilidad.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 385, Ser. 4ª.

16. **Título de propiedad**—La prueba de las deficiencias de los títulos corresponde al que la alega; aun cuando el demandado no los presente, basta que indique donde se encuentran.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 150, Ser. 4ª.

17. **Título de propiedad**—Para la reducción del boleto de compraventa á escritura pública, no es necesaria la presentación de los títulos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 423, Ser. 4ª.

18. **Título de propiedad**—El vendedor está obligado á subsanar en el término que fije el Juzgado los defectos de que adolezca el título de la propiedad vendida.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 254, Ser. 4ª.

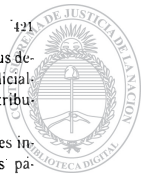
19. **Título de propiedad**—El que demanda el cumplimiento del contrato de compraventa está obligado á la presentación de los títulos de propiedad ó indicación del registro donde se encuentran si la otra parte lo exige.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 346, Ser. 4ª.

13—Véase: verb. *Comprador judicial*, núm. 3.

14—Véase: verb. *Heredero*, núm. 10.

15—Es el caso del art. 522 del Cód. de Proc.

17—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 18.



20. **Título de propiedad**—Cualesquiera que fuesen sus defectos, quedan subsanados si la venta se hace judicialmente por ejecución del Fisco para el cobro de contribución directa.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 409, Ser. 4^a.

21. **Título de propiedad**—Los títulos de propiedades indivisas, deben estar en poder del depositario de los papeles, nombrado judicialmente.—Jur. Civ., tom. 8, página 19, Ser. 4^a.

22. **Título de propiedad**—Para la reducción á escritura pública del boleto de compraventa, no es obligatoria la presentación de los títulos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 36, Ser. 4^a.

23. **Título de propiedad**—Solo pueden ser entregados al que los presentó, aunque no sea el propietario.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 64, Ser. 4^a.

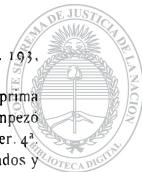
24. **Título de propiedad**—Demandada la conversión á escritura pública, del boleto simple de compraventa, los tribunales deben fijar un término para que el demandado lo verifique sin que sea necesaria la presentación de los títulos, que solo es obligatoria cuando se exige el cum-

20—A los efectos de la bondad del título de transmisión del dominio, debe tenerse presente la naturaleza del derecho que la ley acuerda al Fisco sobre toda propiedad afectada al impuesto de Contribución Directa, y que á ese fin nada importa que la persona á quien la finca haya pertenecido ó pertenezca, esté presente, se encuentre ausente ó haya fallecido, si en el juicio respectivo se le dá la representación legal correspondiente. De otra manera, si se admitiera la teoría que se sostiene de contrario, el Fisco no podría en muchos casos, obtener el pago de los impuestos, lo que daría por resultado que el Gobierno, se viera con frecuencia en la imposibilidad de llenar la misión primordial de que está encargado, por no serle posible efectuar los servicios que en bien de la comunidad debe verificar.

21—Véase *Depositario judicial*, núm. 1.

22—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 25.

24—Véase: verb. *Boleto de compraventa*, núm. 24.



plimiento de la convención.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 193, Ser. 4ª.

25. Título de propiedad—El de fecha anterior prima sobre los posteriores, si se fija que la posesión empezó en la misma fecha.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 415, Ser. 4ª.

26. Título de propiedad—No pueden ser desglosados y entregados si son varios los que pretenden tenerlos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 255, Ser. 4ª.

27. Título de propiedad — Procede la reivindicación, siempre que se justifica haber tenido título y posesión anterior a la del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, página 370, Ser. 4ª.

28. Título de propiedad—El comprador en remate judicial, solo puede observar los títulos dentro del término que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 90, Ser. 4ª.

29. Título de propiedad—Entre dos títulos sobre una misma propiedad que tengan el mismo origen, el que justifique haber tenido la posesión judicial, prima sobre el que carezca de tal requisito.—Jur. Civ., tom. 10, página 370, Ser. 4ª.

30. Título de propiedad—El desistimiento de compras

25—Véase: verb. *Posesión*, núm. 19.

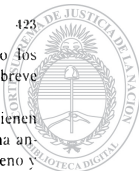
26—Los títulos de propiedad son inmuebles por su carácter representativo—art. 2317 del Cód. Civ.—Los títulos que comprueban la adquisición de derechos reales en condominio, son inmuebles poseídos en común. Es sabido que el condómino no puede ejercer sobre él todo de la cosa, ni sobre la menor parte de ella, físicamente determinada, sin el consentimiento de los demás, actos materiales, etc. Luego ningún condómino puede exigir la entrega del título de propiedad, sin el consentimiento de los demás—art. 2680, *ibid*.

27—Véase: verb. *Posesión*, núm. 23.

28—Véase: *Remate judicial*, núm. 32.

29—Véase: *Posesión judicial*, núm. 11.

30—Véase: *Remate judicial*, núm. 33.



hechas en remate judicial, solo es pertinente cuando los títulos adolezcan de algún vicio insubsanable en breve tiempo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 293, Ser. 4^a.

31. **Título de propiedad**—Ante dos títulos que tienen por origen un mismo vendedor, prevalece el de fecha anterior, si en él espresa que no le queda más terreno y señala linderos existentes, aun cuando se haya fijado dimensión exacta del terreno.—Jur. Civ., tom. 10, página 404, Ser. 4^a.

Título de propiedad—Véase: *Comprador*, núm. 2—*Contrato de compraventa*, núms. 2 y 3—*Escritura*, núm. 1—*Aluvión*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núm. 3—*Costas*, núm. 34—*Información supletoria*, núms. 1, 6 y 8—*Informaciones*, núm. 1—*Título habilitante*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 1—*Posesión*, núm. 4—*Posesión treintenaria*, núm. 2—*Remate judicial*, núms. 13, 16 y 19—*Nulidad de un título*, núms. 1 y siguientes—*Reivindicación*, núm. 18.

Título propio—Véase: *Posesión cuarentenaria*, núm. 1.

1^a. **Título supletorio**—El reivindicante que ha intervenido en la formación del título supletorio, debe ser condenado en todas las costas del juicio, por ser evidente su temeridad.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 234, Ser. 4^a.

Título supletorio—Véase: *Costas*, núm. 36—*Posesión cuarentenaria*, núm. 1.

Título traslativo—Véase: *Posesión*, núm. 3.

Título universitario—Véase: *Servicios*, núm. 10.

Tomador—Véase: *Carta de crédito*, núm. 2.

Trabajos—Véase: *Contrato de locación*, núm. 1—*Detalle*, núm. 1.

31—Véase: *Dimensión*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Reivindicante*, núm. 5.



1ª. Tradición—La escritura pública, como título traslativo del dominio, no basta para exigir la posesión; debe gestionarse previamente la entrega de la cosa por medio de la tradición.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 180, Ser. 3ª.

2. Tradición—Material, el vendedor está obligado a hacerla del inmueble vendido, sin que sea bastante que se declare desposeído en el instrumento de venta.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 112, Serie 4ª.

Tradición—Véase: *Tercero*, núm. 2—*Acción reivindicatoria*, núm. 1.

1. Traductor—Inscripciones en la matrícula durante el mes de Mayo de 1890.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 258, Serie 3ª; durante Abril de 1890, tom. 4, pág. 258, Ser. 3ª; durante Agosto de 1891, tom. 5, pág. 425, Ser. 4ª; durante Nov. del mismo año, tom. 9, pág. 48, Ser. 4ª; durante Enero de 1892, tom. 9, pág. 152, Ser. 4ª; durante Feb. del mismo año, tom. 9, pág. 275, Ser. 4ª.

Trámites—Véase: *Instrumento público*, núm. 1.

Tranways—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 63, 70 y 71—*Interdicto de recobrar*, núm. 12—*Sentencia*, número 10.

1ª. Transacción—Las transacciones sobre derechos no

1ª.—Véase: verb. *Posesión*, núm. 3.

2.—Art. 2609 del Cód. Civ. Véase: *Inst.*, tom. 2ª, verb. *Comprador*, núm. 6, cuya nota trata el caso con precisión.

1ª.—La transacción no tiene por nuestro Cód. Civ. forma determinada, ni necesita tampoco la aprobación judicial sino cuando se refiere á derechos desde ya litigiosos por existir sobre ellos un juicio contencioso ó contradictorio; lo que no sucedía en el caso presente, porque cuando se verificó la transacción no se había deducido acción alguna, que por otra parte, que siendo resistida hiciese litigiosa la cuestión sometida á transacción. Dicha transacción, por tanto, no requiere en manera alguna para su validez, la aprobación del juez, ni éste tampoco está obligado á interponer su autoridad.



litigiosos, no deben ser aprobados por los jueces.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 51, Ser. 3ª.

2. **Transacción**—Cuando la ley requiere para determinados actos, la solemnidad de la escritura pública, surten los mismos efectos y tiene igual fuerza la presentación de la transacción al Juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 111, Ser. 3ª.

3. **Transacción**—La transacción ó desistimiento de las partes, no hace caducar la jurisdicción del juez de la causa.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 248, Ser. 3ª.

4. **Transacción**—El juez que la aprobó es el único competente para entender en su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 231, Ser. 3ª.

5. **Transacción**—El Juzgado no puede negar medidas tendentes al cumplimiento de una transacción cuya aprobación no le ha sido pedida, por lo que está inhabilitado de declarar su nulidad ó validez.—Jur. Civ., tom. 5, página 234, Ser. 4ª.

6. **Transacción**—Sobre derechos litigiosos, que no es presentada al juez para su aprobación, no obliga á las partes que hasta el momento de ser presentada pueden negarse á su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 92, Serie 4ª.

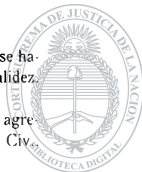
7. **Transacción**—Reconocida la existencia y autenticidad de la transacción, las partes están obligadas á su

2—Véase: verb. *Escritura pública*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Honorarios*, núm. 2.

4—En derecho se equipara la sentencia con la transacción, siendo el juez que la dictó el único competente para hacerla cumplir. Si sobrevienen cuestiones en la ejecución de la transacción, es el juez que la aprobó el único competente para entender en ellas. De otra manera tendríamos que de un pleito podrían resultar muchos, lo que no conviene en manera alguna á la causa pública ni á los interesados.

6—Art. 838 del Cód. Civ.



cumplimiento y no procede la nulidad siempre que se hayan llenado los requisitos que la ley exige para su validez.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 191, Ser. 4ª.

8. **Transacción**—Por cantidad indeterminada, debe agregarse un sello de diez pesos por cada foja.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 30, Ser. 4ª.

9. **Transacción**—Presentada al juez, no procede el desistimiento de lo en ella estipulado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 82, Ser. 4ª.

10. **Transacción**—La negativa á ratificar la firma de una transacción, no impide su aprobación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 82, Ser. 4ª.

11. **Transacción**—No es necesaria la ratificación personal del interesado, si el apoderado tiene facultad de firmar transacciones.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 261, Serie 4ª.

12. **Transacción**—Los fondos depositados á los efectos de una transacción, no pueden ser embargados para responder á otras obligaciones de los mismos depositantes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 311, Ser. 4ª.

Transacción—Véase: *Honorarios*, núm. 10—*Excepción de pago*, núm. 2.

Transferencia—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 3.

Traslación—Véase: *Domicilio*, núm. 2.

1. **Traslado**—Debe ser notificado personalmente ó por

8—Véase: verb. *Sellos*, núm. 2.

9—Art. 838 del Cód. Civ.

10—Véase: *Firma*, núm. 4.

11—Art. 1881, inc. 3º del Cód. Civ.

12—Véase: verb. *Embargo*, núm. 20.

1—El Juez de 1ª Inst. dijo: «que en el caso actual no se trata de providencias cuya notificación debe hacerse por nota de Secretaría, pues un traslado importa reconocer un derecho en aquel á quien se confiere, del que no se puede privar sin saber si lo abandonaría ó no, para lo que



cédula, no basta la nota.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 21, Serie 3ª.

2. **Traslado**—El escrito en que se opone excepciones, no puede considerarse como contestación del traslado de la demanda, aun cuando explícitamente no se haga constar.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 397, Ser. 4ª.

3. **Traslado**—La providencia de autos para sentencia, en las cuestiones de puro derecho, solo puede dictarse después del doble traslado.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 391, Ser. 4ª.

4. **Traslado**—El escrito evacuando el traslado, presentado después de vencido el término y acusada rebeldía, debe ser resuelto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 20, Ser. 4ª.

5. **Traslado**—Procede la rebeldía si el demandado no ha contestado el traslado de la demanda después de terminado el artículo previo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 14, Ser. 4ª.

6. **Traslado**—Debe correrse de todo documento acompañado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 130, Ser. 4ª.

la notificación debe ser hecha por analogía, como lo establece el art. 33 del Cód. de Proc.» La Cámara confirmó el auto, fundándose en que «no resultando de autos, que el escrito haya sido presentado con las copias que determina la ley, y por sus fundamentos se confirma con costas el auto apelado». La confirmación del auto procedía, por cuanto el término del traslado no corre mientras no se acompañen las copias; pero que dicha providencia deba confirmarse en cuanto a sus fundamentos, es decir, porque «importa reconocer un derecho al que se confiere dicho traslado y porque debe aplicarse por analogía el art. 33 del Cód. de Proc.» es un absurdo, pues está la disposición terminante de dicho artículo, que enumera taxativamente las notificaciones que deben hacerse personalmente ó por cédula.

2—Véase: verb. *Excepciones*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Sentencia*, núm. 9.

4—Véase: *Rebeldía*, núm. 15.

5—Véase: verb. *Rebeldía*, núm. 18.

6—Véase: verb. *Documento*, núm. 6.



7. **Traslado**—El término para evacuar el traslado en las cuestiones de puro derecho, solo empieza á correr desde que el expediente se encuentra á disposición de la parte.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 72, Ser. 4ª.

8. **Traslado**—No puede ser devuelto el escrito en que se evacua el traslado sobre los documentos acompañados, aun cuando contenga apreciaciones sobre ellos—Jur. Civil, tom. 10, pág. 296, Ser. 4ª.

9. **Traslado**—En el conferido con carácter de para mejor proveer, no procede la condenación en costas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 102, Ser. 4ª.

Traslado—Véase: *Término de la revocatoria*, núm. 1—*Término vencido*, núm. 2—*Reivindicación*, núm. 19—*Rebeldía*, núms. 1 y 9—*Escepciones*, núm. 8—*Inapelable*, núm. 8—*Escrito*, núm. 2.

1. **Trasmisión**—La reivindicación es improcedente si el demandado justifica hechos concurrentes que prueben la trasmisión legal del dominio á su favor.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 262, Ser. 4ª.

Trasmisión del dominio—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 27.

Tribunales—Véase: *Contencioso-administrativo*, núm. 1—*Competencia*, núms. 3 y 4—*Condenación en costas*, número 1—*Contrato*, núm. 2—*Jurisdicción*, núm. 5—*Expediente*, núm. 2—*Juicio sucesorio*, núm. 1—*Sociedad*, número 2—*Venta privada*, núm. 1—*Cesión de derechos*, número 3—*Interdicto de recobrar*, núm. 4—*Juicio contencioso-administrativo*, núm. 2—*Jurisdicción testamentaria*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 14 y 15.

7—Véase: verb. *Cuestiones*, núm. 3.

8—Véase: verb. *Documento*, núm. 12.

1—Véase: verb. *Reivindicación*, núm. 23.



1^a. Tribunal arbitral—El demandado para la formación del Tribunal arbitral, debe contestar la demanda sin que previamente se establezcan las cuestiones que deben someterse á los árbitros.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 44, Serie 4^a.

1^b. Tribunales de la Capital—Son competentes para entender en el juicio seguido por la Municipalidad contra las empresas de ferrocarriles por cobro de multas impuestas por transgresión á sus ordenanzas.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 410, Ser. 4^a.

2^a. Tribunales de la Capital—El conocimiento y resolución de los juicios sobre aplicación de las leyes dictadas por el Congreso Nacional, que se refieran única y exclusivamente al territorio de la Capital, corresponde á la jurisdicción de los Tribunales de la misma.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 4^a.

1^c. Turno—Fijando el de los Jueces de 1^a Instancia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 274, Ser. 4^a.

2^b. Turno—De los Jueces de 1^a Inst.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 334, Ser. 4^a.

1^a—Véase: verb. *Cuestiones*, núm. 2.

1^b—Véase: verb. *Municipalidad*, núm. 11.

2^a—Véase: verb. *Juicios*, núm. 1.

1^c—En acuerdo extraordinario celebrado por la Cámara el 25 de Febrero de 1892 y con motivo de haberse aumentado el número de los jueces, se modificó el turno en la forma siguiente: Dres. Centeno, Saavedra, Garay, Pizarro, Posse y Mendez Paz.

2^b—En Abril del mismo año 1892 se reformó el turno anterior, quedando éste establecido así: Centeno, Saavedra, Garay, Pizarro y Posse y Mendez Paz. Como se ve, el único juez á quien se le cambió de ubicación fué al Dr. Mendez Paz, y de seguro que el Dr. Centeno que le sigue hoy en el turno, vería con placer un nuevo cambio, pues el Juez que sigue al Dr. Mendez Paz tiene un doble turno, á causa de las numerosas excusaciones y recusaciones de este magistrado, que ha convertido su Juzgado en un desierto.



1. **Tutela**—Corresponde á los parientes más próximos, justificar la idoneidad.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 97, Serie 4^a.

2. **Tutela**—Conferida por el padre en el testamento, debe ser confirmada por el Juez; la idoneidad del tutor solo debe justificarse si existe denuncia de incapacidad por parte legítima.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 71, Ser. 4^a.

3. **Tutela**—Legítima, la renuncia á la tutela legítima, puede ser retractada.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 226, Serie 4^a.

4. **Tutela**—Las cuestiones sobre pérdida ó restricción de la patria potestad, no pueden ser deducidas por estráños que reclamen la tutela.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 70, Ser. 4^a.

1—Arts. 390 y 391 del Cód. Civ.

2—El art. 388 del Cód. Civ., prescribe que: la tutela dada por los padres, debe ser confirmada por el Juez si hubiese sido legalmente dada y entonces se discernirá el cargo de tutor nombrado. Esta disposición ha sido inspirada en nuestras antiguas leyes, que menos rigurosas que las actuales, no exigían la confirmación judicial respecto de la tutela dada por los padres legítimos sino solo respecto de la constituida por la madre natural—Leyes 3^a, 6^a y 8^a, tit. 16, Part. 6^a.—Las palabras, «si hubiese sido legalmente dada», que usa el codificador, se refieren incuestionablemente á la forma de la institución y no á las calidades de la persona, no siendo caso de argumentar con el texto de la Part. 6^a, porque ella regía exclusivamente para la tutela de la madre y por cuanto la conferida por el padre legítimo, no requería el trámite previo de la confirmación. Teniendo por otra parte, la tutela testamentaria su fundamento en la patria potestad, la medida indicada por el juez aparecía tanto más improcedente cuanto que dejándose librada á la apreciación judicial las condiciones de idoneidad del tutor, podría con ello lesionarse la autoridad paterna ejercitada precisamente en uno de los actos más solemnes de la vida civil. Esta inquisición únicamente podría autorizarse cuando la incapacidad del guardador fuera notoria y llegase á conocimiento del juez de la tutela por gestiones del Ministerio Público ó de los parientes del incapaz.

4—Véase: verb. *Patria potestad*, núm. 4.



5. **Tutela**—Debe aprobarse la rendición de cuentas de la tutela después de discutidas y resueltas las observaciones opuestas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Ser. 4^a.

6. **Tutela**—La de los menores, corresponde á la abuela y solo por causas graves á juicio de los Tribunales puede ser privada de ese derecho.—Jur. Civ., tom. 9, página 236, Ser. 4^a.

Tutela—Véase: *Enemistad*, núm. 1.—*Rendición de cuentas*, núm. 23.—*Tutor*, núm. 13.

1^a. **Tutela dativa**—No existiendo incompatibilidad en el padrastro para desempeñar la tutela dativa de los hijos de su esposa, habidos en el primer matrimonio, los jueces pueden discernirle el cargo siempre que no exista causa justificada que lo inhabilite.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 120, Ser. 3^a.

1^b. **Tutor**—Administrador, está facultado, sin autorización judicial, para hacer aquellos gastos urgentes de reparación, que sean necesarios para la conservación de los bienes de sus pupilos.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 305, Serie 3^a.

2. **Tutor**—La esposa del tutor puede declarar como testigo en el juicio seguido contra la persona que desempeñaba el cargo, demandado por rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 80, Ser. 3^a.

3. **Tutor**—El tutor está obligado á rendir cuenta documentada de los bienes del pupilo y en caso no lo verifique, debe abonar á éste el saldo, dentro la suma que

5—Véase: verb. *Rendición de cuentas*, núm. 29.

6—Véase: verb. *Abuela*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Padrastro*, núm. 1.

1^b—Art. 443, inc. 3^o del Cód. Civ.

2—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 2.

3—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 8.



para el juramento estimatorio le fije el Juzgado.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 54, Ser. 3ª.

4. Tutor—Cualesquiera que hayan sido las omisiones en qué haya incurrido el tutor, el menor solo tiene acción contra él pero no contra los terceros poseedores de los bienes adquiridos con las formalidades que impone la ley y con la debida intervención judicial.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 33, Ser. 3ª.

5. Tutor—Está obligado á la rendición de cuentas, pero puede cobrar al pupilo los gastos verificados, que deberán ser fijados equitativamente por el Juzgado si no hubiesen sido autorizados con la debida antelación.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 235, Ser. 4ª.

6. Tutor—El auto que nombra tutor á los menores es irrecurrible para éstos—Jur. Civ., tom. 3, pág. 391, Ser. 4ª.

7. Tutor—El tutor de los menores que por representación forman parte de una sociedad, carece de personería para intervenir en el juicio contra terceros si la sociedad tiene su representante legal.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 395, Ser. 4ª.

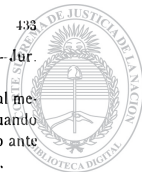
8. Tutor—Administrador, solo puede cobrar comisión

4—Véase: *Bienes de menores*, núm. 1.

6—Los menores de edad están impedidos de comparecer en juicio, por carecer de la capacidad necesaria, y por consiguiente, no pueden proponer el nombramiento de la persona que debe desempeñar la tutela. Esta resolución fué confirmada por la mayoría de la Cámara. La minoría consideró que esta providencia no puede menos que causar gravamen irreparable por cuanto deniega la facultad de observar el nombramiento de tutor. Esta resolución no consagra la buena doctrina ni está de acuerdo con la jurisprudencia, como se puede ver en otros casos resueltos por la Cámara.

7—Véase: verb. *Personería*, núm. 12.

8—El art. 451 del Cód. Civ. dice, que el tutor percibirá por sus cuidados y trabajos la décima parte de los frutos líquidos de los bienes del menor.



sobre el haber líquido que corresponda al pupilo.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 244, Ser. 4ª.

9. Tutor—El juez que haya proveído de tutor al menor debe continuar conociendo en el juicio, aun cuando con anterioridad se haya solicitado el nombramiento ante otro Juzgado.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 427, Ser. 4ª.

10. Tutor—Debe proveerse de tutor á los menores si existe oposición de intereses con el padre.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 351, Ser. 4ª.

11. Tutor—Su nombramiento es facultativo del Juzgado si no existe ninguna de las personas designadas por la ley.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 75, Ser. 4ª.

12. Tutor—Debe rendir cuenta de su administración, siendo responsable de las sumas cuya inversión no justifique.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 208, Ser. 4ª.

13. Tutor—Puede, durante el ejercicio de la tutela, presentar rendición de cuentas por periodos determinados.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 28, Ser. 4ª.

Tutor—Véase: *Costas*, núm. 6—*Pensión alimenticia*, núm. 2—*Rendición de cuentas*, núm. 23.

1. Tutor especial—No procede el nombramiento de tutor especial al menor, en el incidente sobre regulación de honorarios á cargo de la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 104, Ser. 3ª.

9—La petición de provisión de tutor se presentó con anterioridad á un juez, pero después se solicitó la misma medida por otra persona y ante otro juzgado. Este último proveyó primero al nombramiento y la Cámara declaró que la prioridad del nombramiento era título suficiente para conocer en el asunto con preferencia al otro.

10—Art. 397, inc. 1º del Cód. Civ.

11—Art. 392 del Cód. Civ.

12—Arts. 460 y 461 del Cód. Civ.

13—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 23.

1—Véase: verb. *Honorarios*, núm. 8.



2. **Tutor especial**—Para que proceda el nombramiento de tutor especial, el Juzgado debe determinar expresamente en qué consiste la oposición de intereses entre padre é hijos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 367. Ser. 4ª.

3. **Tutor especial**—Para que proceda el nombramiento de tutor especial, es indispensable que exista oposición de intereses entre padres é hijos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 92. Ser. 4ª.

4. **Tutor especial**—El nombramiento de tutor especial, solo procede cuando existe manifiesta oposición de intereses entre el padre y los menores.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 366, Ser. 4ª.

5. **Tutor especial**—Debe nombrársele al menor que tenga interés como heredero en el juicio sobre rendición de cuentas.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 431, Ser. 4ª.

Tutor especial—Véase: *Paternidad*, núm. 1—*Paternidad legítima*, núm. 2—*Rendición de cuentas*, núm. 25—*Cuenta particionaria*, núm. 3—*Cuota alimenticia*, núm. 1.

Turno—Véase: *Espediente*, núm. 4.

2—Muerto el padre de los menores, y practicada la cuenta particionaria entre los hijos y la esposa sobreviviente, el juez nombró tutor especial para que examinara la cuenta particionaria; la Cámara revocó el auto teniendo en cuenta la jurisprudencia por ella sentada.

3—La Cámara dijo, que solo procedía el nombramiento de tutor especial, cuando conste algún hecho que demuestre la efectiva oposición de intereses entre padres é hijos, ya sea que conste de autos ó de denuncias formales.

4—El nombramiento fué hecho por el Juez de 1ª Inst., en un juicio de rendición de cuentas de la viuda del causante, al solo efecto de que examinara dicha cuenta. La Cámara revocó el auto diciendo, que no procede sino en los casos en que espresamente se manifiesta la oposición de intereses entre los padres y sus hijos menores, y que este no era el caso en el presente.

5—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 25.



1^a. Ubicación—No puede ser aprobada la mensura y ubicación, si se opone parte legítima, que justifica que la operación lesiona derechos adquiridos. —Jur. Civ., tom. 4, pág. 187, Ser. 3^a.

Ubicación—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 4—*Reivindicación*, núm. 18—*Nulidad de una escritura*, número 5—*Remate judicial*, núm. 23.

Universalidad—Véase: *Derechos y acciones*, núm. 1.

Uso—Véase: *Fianza*, núm. 2.

2. Uso regular—Para que proceda la acción de daños y perjuicios del propietario contra el locatario por los deterioros, debe justificarse que son mayores que los que impone el uso regular de la cosa locada, é intencionales.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 5, Ser. 3^a.

Usufructo—Véase: *Donación*, núm. 1.

1^b. Usufructuario—El padre usufructuario de los bienes de los menores, no puede cargar á éstos los gastos de contribución directa.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 235, Serie 4^a.

1^a—Véase: verb. *Mensura*, núm. 1.

2—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 18.

1^b—Véase: *Bienes de menores*, núm. 6.

Utilidad — Véase: *Contrato rescindido*, núm. 1—*Contrato de sociedad*, núm. 3—*Cesión*, núm. 2—*Intereses*, núm. 2—*Corredor*, núm. 2.

Utilidad pública — Véase: *Indemnización*, núm. 3.





Vacante -- Véase: *Herencia*, núm. 3.

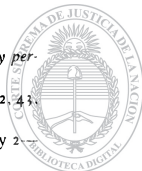
Validez -- Véase: *Actos*, núm. 1 -- *Acto lícito*, núm. 1 -- *Escritura pública*, núms. 10, 12 y 13 -- *Contrato bilateral*, núm. 1 -- *Contrato privado*, núm. 4 -- *Contrato de compraventa*, núms. 2, 3 y 5 -- *Condición resolutoria*, núm. 1 -- *Boleto de compraventa*, núms. 3 y 4 -- *Transacción*, número 5 -- *Documento privado*, núm. 1 -- *Donación*, núm. 1 -- *Nulidad de una escritura pública*, núm. 2 -- *Dominio*, núm. 2 -- *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 12 -- *Testamento*, núm. 3 -- *Testigos*, núm. 6 -- *Escritura de venta*, núm. 1 -- *Nulidad de un testamento*, núms. 2 y 3 --

Valor -- Véase: *Indemnización*, núms. 2 y 3 -- *Legatario*, núm. 2 -- *Embargo*, núm. 16 -- *Daños y perjuicios*, número 3 -- *Estampilla*, núm. 2.

Valor equivalente -- Véase: *Capellanía*, núm. 3.

Valor íntegro -- Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 85.

Valor legal -- Véase: *Calumnia*, núm. 1 -- *Bienes testamentarios*, núm. 3 -- *Contrato bilateral*, núm. 1 -- *Acto simulado*, núm. 1.



Vecino--Véase: *Testamentaria*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núm. 111.

Vencido--Véase: *Costas*, núms. 24, 28, 39, 40, 42, 43, 44, 56 y 57—*Acción reivindicatoria*, núm. 2.

Vencimiento de término--Véase: *Escrito*, núms. 1 y 2—*Contrato de arrendamiento*, núms. 20 y 21.

1. **Vendedor**--Cuyo título consiste en un simple boleto de compraventa, no puede obligar al comprador al cumplimiento del contrato, siempre que haya vendido como cosa propia perteneciendo el inmueble a un tercero.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 341, Ser. 3ª.

2. **Vendedor**--Reconocido que el vendedor no ha percibido más del precio estipulado, el comisionista á quien correspondía la demasía, carece de derecho para iniciar contra él reclamo de suma alguna.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 201, Ser. 3ª.

3. **Vendedor**--Está obligado á hacer tradición material del inmueble vendido, sin que sea bastante que se declare desposeído en el instrumento de venta.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 112, Ser. 4ª.

Vendedor--Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 2, 3, 5, 9, 12, 14 y 20—*Boleto de compraventa*, núms. 1, 4, 5, 6, 32 y 34—*Cláusula penal*, núm. 1—*Comisión*, números 1 y 3—*Posesión*, núm. 7—*Comprador*, núms. 1 y 3—*Remate judicial*, núm. 1—*Comprador judicial*, núm. 2—*Acreeedor hipotecario*, núm. 3—*Dimensión*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 2—*Pacto comisorio*, núms. 1 y 8—*Seña*, núm. 1—*Posesión al comprador*, núm. 1—*Excepción de defecto legal*, núm. 12—*Evicción*, núm. 1.

1—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 4.

2—Véase: verb. *Precio*, núm. 5.

3—Véase: verb. *Tradición*, núm. 2.



1. Venia— Los jueces pueden concederla á la mujer

1.—Una mujer casada se presentó solicitando ser autorizada para promover un pleito concerniente á sus derechos, al cual se opuso su marido y el Juzgado no hizo lugar á la solicitud, fundándose en que con arreglo á las disposiciones de la ley de matrimonio civil, carece de facultad para conceder la indicada autorización contra la voluntad del marido. El Fiscal de la Cámara Dr. Cortés pidió su confirmación diciendo que: efectivamente el estudio de las disposiciones de la indicada ley, concerniente al caso, viene á revelar una grave modificación introducida en la jurisprudencia en cuanto á las reglas que rigen las relaciones civiles entre los esposos. Tanto por la antigua legislación española, como por el Cód. Civ., si bien la mujer casada no podía presentarse en juicio ni contratar, sino con licencia de su marido, sin embargo, cuando éste se la negase injustamente, tratándose de una cosa necesaria ó útil á la mujer, acuerdan el recurso de ocurrir al juez, para que, tomando conocimiento del asunto, le concediese la autorización que el marido le negaba injustamente. Nada más bien fundada y razonable que esta disposición que, limitando el poder del marido, venia á evitar el que éste dejenerase en arbitrario y despótico, sin que jamás se hubiese hecho objeción de ningún género contra una disposición tal, arreglada á la equidad, al orden público y á las buenas costumbres. A pesar de todo, ella no subsiste, después de la citada Ley de Matrimonio Civil, que ha venido, como es fácil demostrarlo, comparando su texto en cuanto hace relación á la materia, con las prescripciones correlativas al Cód. Civ. En éste, el art. 188, declara: que «la mujer no puede estar en juicio por sí, ni por procurador sin licencia especial del marido, dada por escrito ó supliendo esta licencia el juez del domicilio, con escepción, etc.» Ahora bien, la cláusula trascripta y subrayada en que se equiparaba la venia supletoria del juez, en los actos que la mujer casada hubiese de celebrar, á la licencia que debía acordarle el marido, ha sido suprimida en el art. 54 de la Ley de matrimonio Civil correspondiente al precitado art. 188 del Código. Dicho art. 54 dice: «la mujer no puede estar en juicio por sí ni por procurador sin licencia especial del marido dada por escrito, con escepción, etc. donde se vé haber desaparecido, como lo deja notado el Fiscal, la facultad por virtud de la cual el juez podría suplir la autorización del marido, generalmente en los casos en que dicha licencia era necesaria. Esa supresión no puede atribuirse en manera alguna á descuido ó inadvertencia, porque encontramos la misma corrección al art. 194 del Código concerniente á la materia: este artículo establecía que «los Tribunales, con conocimiento de causa, pueden suplir la falta de autorización del marido cuando éste se hallase ausente ó impedido para darla ó la



casada, para comparecer en juicio, no obstante la oposición, si rehusase sin motivo fundado y ella fuese necesaria y útil á la mujer ó al matrimonio.» Entretanto en el art. 60 de la precitada Ley de Matrimonio Civil, correlativo del 194 del Cód., se suprime la parte en que se facultaba al juez para suplir con su autorización la licencia que el marido rehusase indebida é injustamente á la mujer. Dicho art. 60 de la indicada ley, se encuentra concebido en estos términos: «Los Tribunales, con conocimiento de causa, pueden suplir la autorización del marido cuando éste se hallare ausente ó impedido para darla, y en los casos especiales previstos por este Cód.» Donde se nota también haberse suprimido la cláusula que en general facultaba al juez para conceder á la mujer la licencia que el marido le negase á pesar de serle necesaria ó útil. En lugar de la indicada cláusula suprimida en el art. 60, se agrega esta otra: «y en los casos especiales previstos por este Cód., con referencia, sin duda, á los del art. 135 sobre los actos que los menores casados no pueden ejecutar. Así, pues, por la Ley de Matrimonio Civil, á diferencia de lo establecido en el Cód., el juez solo puede autorizar á la mujer para presentarse en juicio ó para la celebración de un acto jurídico, en los casos de demencia ó ausencia del marido cuyo paradero se ignora, y en los demás en que especialmente se encuentre determinado así. Mas como en dicha Ley no se encuentra disposición alguna especial por la cual pueda también el juez suplir la licencia del marido cuando á pesar de haberla rehusado éste positivamente, ella resultase sin embargo útil y provechosa á la mujer, con razón puede un juez declarar no hallarse facultado para conceder la autorización que se le pide y que ha rehusado el marido, porque de las disposiciones mencionadas resulta que hoy los Tribunales no pueden conceder la autorización negada por el marido. Es verdad que en el art. 63 de la misma precitada Ley se habla de actos y contratos de la mujer autorizada por el juez contra la voluntad del marido, suponiéndoseles válidos y determinándose sus efectos jurídicos, más esto no puede explicarse sino por descuido en la sanción de los arts. del Cód., que forman el título del matrimonio. Es evidente, que atendidas las reformas que se acaban de hacer notar, introducidas en artículos anteriores, debió modificarse igualmente y en sentido análogo el 197 del Cód.—y 60 de la Ley de Matrimonio Civil—puesto que según sus disposiciones ya no pueden existir legalmente ó considerarse válidos los contratos que celebrase la mujer, autorizada solamente por el juez contra la voluntad del marido, desde que le quita al juez la facultad de conferir tal autorización. Por estas consideraciones, el Fiscal, encontrando arreglada la resolución de que se le dió vista y por la que el juez *a quo* había negado autorizar á la esposa



sición del marido.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 34. Ser. 3^a.
contra la voluntad del marido, para promover un juicio, opinó que debía confirmarse aquella. La Cámara revocó la resolución de 1^a Inst. contra el dictamen del Dr. Cortés, fundándose en lo siguiente: Que el señor Fiscal, se ha pronunciado por la confirmación de la sentencia encontrando, como el inferior, que los arts. 34 y 60 de la Ley de Matrimonio Civil han suprimido la cláusula de sus correlativos 188 y 194 del Código Civil, en virtud de los cuales el juez era llamado espresamente á suplir la venia marital cuando el esposo la rehusase infundadamente, y que esa supresión importa tal modificación en las relaciones civiles de los esposos, que los jueces carecen ya de la facultad que le acordaban el Cód. y las antiguas leyes españolas de limitar el poder del marido, evitando que éste degenerase en arbitrario y despótico. Siento disentir del parecer del señor Fiscal, cuya opinión es tan autorizada, pero creo que por esta vez no ha estado en lo justo ni en lo legal, y que aunque no nos acompañe con sus luces, el Tribunal tiene espedito el camino de obviar los inconvenientes que él mismo ha señalado evitando á la jurisprudencia un paso atrás, en lo que es hoy una verdadera conquista de la legislación moderna. ¿Cómo hacer descender á la mujer del grado en que la ha colocado el legislador en su hogar? Acaso un derecho que, como lo observa el mismo señor Fiscal, le viene acordado desde las leyes españolas, puede serle arrebatado sin un precepto espreso, pero ni siquiera con un antecedente de esos que suele suministrar la elaboración de una ley, en la presentación del proyecto ó en su discusión. ¿Se concibe, por otra parte, que la ley que debe ser congruente en sus disposiciones, hubiera estatuido, como lo hace la Ley de Matrimonio en su art. 63, sobre los efectos de los actos autorizados por el juez contra la voluntad del marido, si en tal caso de que el juez supla la venia marital por la negativa del esposo le estuviera vedado por derogación de los arts. 188 y 194 del Cód.? Y en medio de los progresos de nuestra legislación, de que nos vanagloriamos con razón, ante la expectativa diseñada por el Codificador Argentino, de que la madre de familia sea puesta en los países cultos á la par del padre en sus relaciones de derecho. ¿Cuándo vendríamos á sancionar que cuando el marido niega la venia á la mujer, por más que á ella le sea conveniente y aun necesaria, podrá negarla despóticamente, cometiendo un verdadero abuso de fuerza en presencia de la justicia impasible? Bastaría presentar esta cuestión bajo el lado del absurdo. Pero tampoco lo creo necesario como no tengo para que prevalecerme tampoco de los antecedentes de la legislación española que tengo recordados, ni de la misma suposición del art. 63 de que pueda haber actos de la mujer practicados con autori-



2. **Venia**.—La esposa puede otorgar, sin autorización judicial contra la voluntad del marido. La resolución estrictamente legal, la encuentro en otra parte, dada la conveniencia ó necesidad de tener que comparecer en juicio una mujer casada, el legislador ha debido encontrarse en presencia de dos casos: que el marido esté ausente ó impedido ó que esté presente; claro, es que en el primer caso, dada la necesidad de la audiencia del esposo, sea por el respeto debido al vínculo ó por ser él el administrador de los bienes, sería necesario un juicio en que la ausencia ó el impedimento tuviera subsanación para que el pronunciamiento del magistrado recayera en un expediente debidamente instruido; pero el legislador no lo quiso así, entendió que esto pudiera ser largo y dispendioso, y desde entonces, dando al juez facultades administrativas, diré así, la autorizó clara y categóricamente para que en los casos de la hipótesis pudiera suplir sin forma de juicio la venia marital; clara y categóricamente, digo, porque solo así por medio de un precepto, podía el juez verse investido de una facultad que de otro modo carecería. Pero en el segundo caso, estando presente el marido, la cuestión varía de aspecto. Pedida una venia y negada por el que puede oponerse á ella, que está presente, no se trata ya para el juez de facultades; él se encuentra, por el contrario, ante una solución de derechos que el orden público le exige dirimir, para que nadie se haga justicia por mano propia. Y así la autorización, que en el primer caso

Segue en la pág. 443

2.—La mujer casada, en tesis general, no puede presentarse en juicio por sí ni por procurador, sin licencia especial del marido dada por escrito --art. 54 de la Ley de Matrimonio.— Pero la mujer casada, cuando el marido está ausente puede ser autorizada por los Tribunales para gestionar sus derechos, porque sería cosa sin razón que soportara perjuicios en sus intereses por la circunstancia eventual de la ausencia del marido. Los arts. 59 y 60 de la ley citada consagran ese derecho para la mujer. Ahora bien; si puede presentarse pidiendo venia supletoria, ¿hay algún fundamento jurídico ó racional para exigir que esa gestión la lleve á efecto personalmente? Evidentemente que nó, y si la representación en juicio es una facultad acordada á todos los que tienen que hacer valer un derecho, mal podía privarse de ella á la mujer, cuando se trata de actos para los cuales la ley la autoriza. La presentación en juicio por procurador no responde solo á proporcionar comodidad á los litigantes, tiene también en mira allanar dificultades que serían insuperables en ciertos casos.—Una enfermedad no debe obstar al ejercicio de un derecho y ella anularía el de la mujer para pedir venia si no se la admitiera á impetrarla por medio de un representante.



del esposo ni del juez. poder especial para presentarse era necesaria, en el segundo constituiría una redundancia si hubiera de exigirse respecto de su existencia un precepto del legislador. Si hubiera de apurar la argumentación recordaría que el proyecto de ley de Matrimonio presentado por el Poder Ejecutivo, después de establecer los casos y modos de suplir la venia marital, igual á la del proyecto mencionado, decía en el art. 72: «Los actos y contratos de la mujer casada no autorizados por el marido ni por el juez, obligan solamente,» etc.; en tanto que el art. 63 de la ley vigente, declara que «los actos y contratos de la mujer no autorizados por el marido y autorizados por el juez, contra la voluntad del marido obligan solamente», etc. La primera redacción se explicaría por lo escrito donde solo existiera la venia del marido ó la judicial en casos determinados, previstos por la ley, en ninguno de los cuales se encuentra el que motiva el pleito *sub-judice*, pero la 2ª, la definitiva, la constituye el texto de la ley actual, no legisla para los casos en que la venia del esposo existe, ni para aquellos en que por artículos anteriores el juez suple la autorización marital ya por ausencia ó impedimento, que son los únicos que quedaban detallados—art. 39 y á que refiere el art. 34 anterior—sino para la hipótesis de actos de la mujer autorizada por el juez contra la voluntad del marido, lo que presupone forzosamente la existencia, á menos de aceptar la existencia de una sanción legal, sin caso á que aplicarla, ó más claro, de penas sin delito. Y si se dijera que este precepto es debido al error de haberse copiado el art. 197 del Cód. sin advertir que quedaba eliminada de la ley la venia judicial contra la voluntad del marido, diría por mi parte que tal olvido no tiene cabida, habiéndose sancionado la Ley de Matrimonio bajo la base del proyecto del Poder Ejecutivo, cuyo art. 72, para ser congruente con los anteriores, había suprimido ya las palabras «contra la voluntad del marido». Si se insiste con el propósito del legislador, de suprimir la venia del juez en presencia de la negativa del marido por lo que resulta de la supresión del último inciso del art. 194 del Cód., recordaré á mi vez que entre nosotros las leyes son preceptos categóricos del Congreso, que no pueden ser suplidos por el silencio de las ramas en que se divide el Poder Ejecutivo, y precisando más de lo que se ha dicho, ni explícita ni implícitamente ningún artículo de nuestro Cód. puede tener fuerza de ley en derecho civil. De modo que si el juez tiene por regla general el derecho, ó más bien dicho, el deber de resolver las contiendas entre partes, no puede negarse la facultad para dar venia á la mujer casada si le es útil ó necesario á ella ó al matrimonio, y el esposo se la negara sin motivo fundado. Pero hay más, y es que abundando en

Sigue en la pag. 444



judicialmente pidiendo venia.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 38, Ser. 4ª.

3. **Venia**—Supletoria. para justificar la ausencia del mis investigaciones, dada la gravedad del caso, encuentro que los antecedentes de la sanción de la ley de que me vengo ocupando, favorece completamente mis conclusiones, demostrándose con ellas no ya solo que no ha existido olvido, no ya solo que no se ha tenido bien presente el proyecto del Poder Ejecutivo, sino que además que los arts. 69 y 72 fuesen reformados en la discusión ante el Senado, precisamente para que quedara comprendido en la venia supletoria del juez el caso en que el marido negara autorización á su mujer para estar en juicio; por dos veces aparece claro y terminante el propósito de la reforma del proyecto del Ejecutivo; primero á propósito del art. 69 y luego con motivo de la discusión sobre el 72, que son respectivamente el 60 y 63 actuales. Decía á este respecto el miembro informante de la Comisión, Dr. Derqui: «En este capítulo no proponemos, sino dos modificaciones, una referente á los casos en que los Tribunales puedan suplir la autorización que la mujer necesita del marido y otra respecto á los bienes que quedan obligados por actos ó contratos de la mujer no autorizada por el marido ó autorizada por el juez, contra la voluntad de aquél. La disposición del art. 69 del proyecto, limita la facultad de los Tribunales para suplir la autorización del marido en los casos de ausencia ó impedimento de éste, y pensando que debiendo los Tribunales proceder con conocimiento de causa al suplir la autorización, no hay razón bastante para no hacer extensiva esa facultad al caso en que el marido la rehusase sin motivo fundado y la autorización fuese necesaria ó útil á la mujer ó á la sociedad conyugal. El art. 72 del proyecto, consecuente con disposiciones anteriores, al determinar los bienes que quedan obligados por los actos y contratos de la mujer, solo se refiere á aquellos ejecutados sin autorización del marido ni del juez; pero como proponemos que éste puede suplir la autorización del marido en el caso de que él la rehusa sin motivo fundado, creemos, bajo que la base de este informe, quedó sancionada sin oposición la actual Ley de Matrimonio tal cual queda antedicho, sin privar á la mujer casada de una facultad de que solo pudo privarla un precepto de la ley. Permitáseme concluir diciendo con Proudhon, que el marido no es sino el delegado de la ley en el uso del poder de que ella se ha revestido; el poder público que absorbe todos los poderes particulares puede con mayor razón suplirlos.

3.—El Fiscal dijo:—La ley no prescribe que haya de citarse por



esposo á los efectos de conceder venia supletoria basta la justificación por testigos, no es necesaria la publicación de edictos.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 13, Ser. 4^a.

4. **Venia**—El esposo puede revocar la venia conferida á la mujer para administrar sus bienes particulares.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 49, Ser. 4^a.

Venia—Véase: *Posiciones*, núm. 1—*Jurisdicción federal*, núm. 2—*Nulidad de la ejecución*, núms. 6 y 7.

1. **Venta**—La inhibición no basta para privar la venta de un inmueble, puesto que el comprador responde de las obligaciones que sobre él pesaban.—Jur. Civ., tomo 2, pág. 250, Ser. 3^a.

2. **Venta**—La nulidad de la venta no puede ser demandada por el causante esclusivo del vicio que alega como fundamento.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 82, Ser. 3^a.

edictos al marido cuando la mujer pide venia supletoria para presentarse en juicio á causa de la ausencia de aquél. Tan eficaz prueba de la ausencia en este caso, puede ser la declaración de testigos como el hecho negativo de la falta de comparecencia á la citación por edictos. El art. 60 de la Ley de Matrimonio, solo dispone que los Tribunales con conocimiento de causa, pueden suplir la autorización del marido cuando éste se hallase ausente.

4.—Nuestro Cód. Civ. tanto en su título «del Matrimonio» como en el «de la sociedad conyugal» ha acordado al marido, entre múltiples facultades, la de administrar todos los bienes del matrimonio, desde que este principia hasta que se disuelve, haciendo al mismo tiempo expresa determinación de los casos en que esa administración se da ó pasa á la mujer casada. También ha preceptuado categóricamente, sobre todo en el cap. 8º de la Ley de Matrimonio Civil vigente, que la esposa no puede estar en juicio sin la venia del marido, prescribiendo á la vez los casos en que no la necesita y estableciendo igualmente las circunstancias en que el juez puede ó debe suplirla. El art. 61 de la citada ley de Matrimonio preceptúa que el marido puede revocar á su árbitro la autorización que en el ejercicio de la administración de los bienes de la sociedad conyugal hubiera conferido á la mujer.

1.—Véase: verb. *Inhibición*, núm. 1.

2.—Véase: *Nulidad de una venta*, núm. 1.



3. **Venta** —La venta hecha por un condómino de una parte determinada sin el consentimiento de los otros condóminos, es nula é insubsistente.—Jur. Civ., tom. 7, página 419, Ser. 3ª.

4. **Venta** —La modificación del contrato de venta con pacto de retroventa, permitiendo que el vendedor lleve á cabo actos de propietario después del vencimiento del término, transforma el contrato y permite al deudor hacer uso del derecho de retrotraer la propiedad.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 55, Ser. 4ª.

5ª. **Venta** —Aprobada judicialmente la venta, no puede admitirse el desistimiento del comprador.—Jur. Civ., tomo 5, pág. 409, Ser. 4ª.

5^b. **Venta** —El vencimiento del término estipulado para que el vendedor haga uso del derecho de recuperar la propiedad, convierte la venta en irrevocable.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 226, Ser. 4ª.

6. **Venta** —Procede la de los bienes muebles y semovientes del concurso, que el Síndico no puede vigilar ni administrar personalmente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 20, Ser. 4ª.

7. **Venta** —La suspensión de pagos del establecimiento bancario en que el comprador en remate judicial tenía sus fondos, no es motivo para dejar sin efecto la venta.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 50, Ser. 4ª.

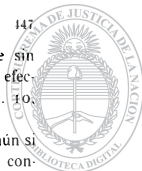
8. **Venta** —El anuncio en venta del inmueble y aun el remate público, no es prueba de tener la posesión material de la cosa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 112, Ser. 4ª.

3—Véase: *Nulidad de una venta*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 21.

7—Véase: verb. *Remate judicial*, núm. 20.

8—Véase: verb. *Poseción material*, núm. 1.



9---**Venta**---La venta de la prenda debe hacerse sin juicio, solo procede la notificación del deudor á los efectos del nombramiento de martillero. ---Jur. Civ., tom. 10, pág. 116, Ser. 4^a.

10. **Venta**---No procede la venta de la cosa común si admite cómoda división en especie y no existe la conformidad de los herederos.---Jur. Civ., tom. 10, pág. 189, Ser. 4^a.

Venta---Véase: *Acreeedor hipotecario*, núm. 1 --*Comprador*, núm. 2 --*Avisos*, núm. 1 --*Comisión*, núms. 3, 4, 5 y 6 --*Simulación*, núm. 6 --*Corredor*, núm. 3 --*Escritura pública*, núms. 12 y 13 --*Desistimiento*, núm. 4 --*Rematador*, núm. 2 --*Remate judicial*, núms. 1, 2, 21 y 28 --*Juicio ordinario*, núm. 1 --*Boleto de compraventa*, núm. 31 --*Bienes de menores*, núm. 5 --*Menores*, núm. 1 --*Tradición*, núm. 2 --*Título habilitante*, núm. 1 --*Contrato de compraventa*, núms. 19 y 21 --*Bienes del concurso*, núm. 1 --*Bienes raíces*, núm. 1 --*Escritura de venta*, núm. 1 --*Mandatario*, núm. 12 --*Título de propiedad*, núm. 18 y 20 --*Inscripción*, núm. 1.

1. **Venta ad corpus** Se conceptúa venta ad-corpus y no admensuram, la que se hace por un precio determinado por el conjunto, aun cuando se fije la medida. ---Jur. Civ., tom. 2, pág. 263, Ser. 3^a.

Venta de específicos ---Véase: *Departamento Nacional de Higiene*, núm. 1.

Venta estrajudicial Véase: *Bienes de menores*, núm. 4.

Venta forzosa Véase: *Condominio*, núm. 2 --*Contrato de arrendamiento*, núm. 2.

Venta judicial ---Véase: *Título de propiedad*, núm. 20 --*Contrato de arrendamiento*, núm. 4.

9 --Véase: verb. *Martillero*, núm. 3.

10 --Véase: *División en especie*, núm. 1.



Venta con pacto de retroventa — Véase: *Contrato de mutuo*, núm. 1.

1^a. **Venta privada**— Siempre que á juicio de los Tribunales sea conveniente, debe permitirse la venta privada de bienes de menores.—Jur. Civ., tom. 1^o, página 366, Ser. 3^a.

2. **Venta privada**— Siempre que á juicio de los Tribunales sea conveniente, debe permitirse la venta privada de bienes de menores.—Jur. Civ., tom. 1^o, página 366, Ser. 3^a.

Venta privada— Véase: *Bienes de menores*, núm. 2 y 3 — *Compraventa*, núm. 4.

1. **Venta en remate**— Ordenada en remate la venta del bien embargado, los terceros que crean afectados sus derechos, deben concurrir ante el Juez de la ejecución á deducir sus acciones. —Jur. Civ., tom. 5, pág. 87, Ser. 4^a.

Verbalmente — Véase: *Contratos*, núm. 1.

1^b. **Verificación de créditos** — Los acreedores pueden recusar al Juez del concurso en el incidente sobre verificación de su crédito.— Jur. Civ., tom. 3, pág. 357, Ser. 4^a.

Vía pública — Véase: *Interdicto de retener*, núm. 6.

Vía de tramway — Véase: *Interdicto de recobrar*, número 12.

Vicio insubsanable Véase: *Remate judicial*, núm. 33.

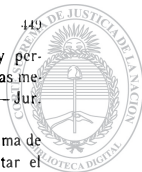
Vicios — Véase: *Escritura*, núm. 4 — *Contrato de compraventa*, núms. 1 y 3 — *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 6 — *Nulidad de venta*, núm. 1.

1. **Víctima**— La culpa de la víctima no exime á las

1^a—Art. 442 del Cód. Civ.

1^b—Véase verb. *Recusación*, núm. 6.

1—Véase: *Daños y Perjuicios*, núm. 46.



empresas de la responsabilidad por los daños y perjuicios en que incurrir por la omisión de aquellas medidas que pudieran haber evitado el accidente. —Jur. Civ., tom. 7, pág. 289, Ser. 3^a.

2^a. Víctima—La omisión por parte de la víctima de aquellas medidas precaucionales que pudieran evitar el accidente, arrojan sobre ella la culpa y exime de responsabilidad á la empresa por los daños y perjuicios demandados.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 328, Ser. 3^a.

3. Víctima—Para que proceda la indemnización civil que la ley acuerda al que es víctima de un delito, debe justificarse previamente la existencia del mismo.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 396, Ser. 3^a.

Víctima—Véase: *Agravio moral*, núm. 1. —*Daños y perjuicios*, núms. 5, 33 y 79.

Vida en común—Véase: *Concubinato*, núm. 1.

Vida licenciosa —Véase: *Filiación natural*, núm. 1.

Vigésimo —Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 16 y 17.

Vigilancia—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 5.

Vínculo—Véase: *Divorcio*, núms. 3 y 8. —*Pensión alimenticia* núm. 1.

1. Violación— Existe siempre que careciendo de orden de allanamiento dictada por Juez competente, la autoridad se introduce al domicilio privado sin permiso del propietario.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

2^b. Violación—El damnificado por la violación de domicilio, tiene personería para gestionar la indemniza-

2^a—Véase: *Daños y Perjuicios*, núm. 51.

3—Véase verb. *Delito*, núm. 2.

1—Véase verb. *Allanamiento*, núm. 1.

2^b—Véase verb. *Domicilio*, núm. 5.



ción, aun cuando no sea el propietario ni su representante legal.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 379, Ser. 3^a.

Violación—Véase: *Declaraciones*, núm. 1 — *Depósito*, núm. 1.

1^a. **Violencia**—Importa violencia el desalojo por orden judicial sin audiencia ni sustanciación del acupante ni del propietario. — Jur. Civ., tom. 6, pág. 246, Ser. 3^a.

Visitas médicas— Véase: *Honorarios*, núm. 16.

Viuda— Véase: *Pensión alimenticia*, núm. 3.

1^b. **Viudo**—El Juez de la testamentaria no está obligado á entender en todos los juicios que sigan contra el viudo por obligaciones personales.— Jur. Civ., tom. 3, página 16, Ser. 4^a.

Viudo—Véase: *Recusación*, núm. 6— *Acreedores del viudo*, núms. 1 y 2 — *Bienes propios*, núm. 1— *Sociedad conyugal*, núm. 1.

1^c. **Viveres**—El proveedor de un cuerpo del Ejército Nacional, aun cuando haya recibido órdenes directas de su jefe, carece de derecho para hacerlo personalmente responsable del importe de los víveres suministrados.— Jur. Civ., tom. 6, pág. 214, Ser. 3^a.

Voluntad—Véase: *Escritura pública*, núm. 2 — *Locación de servicios*, núm. 1 — *Posesión judicial*, núm. 3 — *Contrato*, núm. 4— *Contrato de arrendamiento*, núm. 9.

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Cámara en la mayoría de los casos resueltos. Véase: Inst., tom. 2^a, verb. *Despojo*, núm. 4; tom. 5^a, verb. *Interdicto de recobrar*, núm. 9.

1^b—Siendo la acción personal contra el viudo, el fallecimiento de la esposa no cambia la naturaleza de la obligación ni la de la acción deducida.

1^c—Véase: verb. *Proveedor*, núm. 1.

FE DE ERRATAS

TOMO V — SEGUNDA PARTE



Pág.	Núm.	Línea	Dice	Léase
7	8	2	de la demanda	de la contestación ó la demanda,
9	<i>v. Inapelable</i>	3	Autos inapelables	Auto inapelable
15	1	5	Ser. 4 ^a	Ser. 3 ^a
16	6	6	378, Ser. 4 ^a	379, Ser. 3 ^a
25	1	4	Ser. 4 ^a	Ser. 3 ^a
32	8	3	tom. 5	tom. 1
40	8	3	213	203
61	5	3	205	259
74	<i>v. Juicio ejecutivo</i>	6	Nulidad de la ejecu- ción n° 2	—
80	2	4	117	113
115	12	5	141	131
129	nota 1	1	2	1
133	<i>v. Mora</i>	2	Obligación n° 14	—
186	1	4	252	253
188	2	4	352	353
194	1	4	tom. 3	tom. 5
194	3	3	tom. 6	tom. 7
209	1 ^a	3	Ser. 3 ^a	Ser. 4 ^a
213	nota 4	10	sellado	—
217	1 ^a	2 y 3	Aunque imposible	Aunque no imposible
230	1	5	Ser. 4 ^a	Ser. 3 ^a
232	1 ^a	4	4 ^a	3 ^a
237	4	3	tom. 2	tom. 3
244	1	3	7 ^o	9 ^o
275	1 ^b	3	3 ^a	4 ^a
285	1 ^d	4	244	245
297	1 ^a	4	3 ^a	4 ^a
310	4	4	268	262
323	5	4	224	124
326	18	5	178	177
345	21	4	385	390
352	1	8	3 ^a	4 ^a

Pág.	Núm.	Línea	Dico	Léase
365	3	4	385	285
363	4	5	395	394
396	2	3	6	1
397	1c	4	3ª	4ª
401	2ª	4	3ª	4ª
434	5	3	431	143
450	1ª	3	246	426



